LIBRERIA ENCUADERNACION
JORGE MONTERO
LA LITERARIA
ACERA 4
VALLADOLID
OBJETOS DE ESCRITORIO

P. 74

LIBRERIA JIMENEZ
Mayor, 66 - 68
MADRID

DG
A.

t.152069
c.119161

ELEMENTOS DE DERECHO POLÍTICO

ELEMENTOS

DE

DERECHO POLÍTICO

POR

D. SALVADOR CUESTA

catedrático de Derecho político y administrativo
en la Universidad de Salamanca

SEGUNDA EDICIÓN

SALAMANCA

LIBRERÍA DE MANUEL HERNANDEZ
Calle de la Rua, número 4
1887

Es propiedad del autor.

Salamanca, Imp. de F. Nuñez, Corrillo, 28.



R. 119646

AL LECTOR

La primera edición de este libro fué resultado de la preparación para unos ejercicios que luego hubimos de practicar. No tenía, pues, otras pretensiones que las de un mero ensayo, ni era en realidad otra cosa que un resumen más ó menos claro y sucinto de nuestros estudios y de nuestras propias reflexiones. La benevolencia con que le acogieron algunos periódicos profesionales y políticos; el juicio unánime con que le honró el claustro de la Facultad de Derecho de Salamanca en informe á la Dirección general de Instrucción pública; la distinción con que nos han favorecido, señalándola de texto, algunos compañeros en el profesorado, y los deberes que este impone, nos mueven á publicar esta segunda edición refor-

mada y notablemente adicionada con la Historia del Derecho político español y un apéndice sobre las principales teorías sociales y políticas, desde los filósofos griegos hasta la nueva dirección positivista. No aspiramos á la nota de originales, no obstante haber intentado fijar algunos conceptos y dar solución propia á algunas cuestiones de las más importantes; ni mucho menos pretendemos marcar nuevos rumbos á la ciencia. Nuestro propósito es más modesto y más acomodado á nuestras fuerzas.

Deseamos presentar en unidad los principios generales de esta rama del Derecho y las doctrinas cuyo conocimiento es, en nuestro sentir, indispensable, facilitando de este modo el trabajo de nuestros discípulos y preparándolos para otros estudios que exigen más tiempo y meditación.

INTRODUCCIÓN

Es un principio elemental que en toda manifestación de la actividad inteligente ha de aparecer la *idea* como objetivo final de los humanos esfuerzos, y aunque, como dice Kant, las ideas contienen una cierta perfección integral, á la que ningún conocimiento empírico puede llegar, y lo llamado *ideal* parece que está aún más separado de la realidad objetiva que la idea, con todo, descendiendo un poco, se ve que la razón contiene no solamente ideas, sino también ciertos ideales dotados de una fuerza *práctica*, y que sirven de fundamento á la posibilidad de la perfección de ciertas *acciones*. Los conceptos morales no son enteramente conceptos puros de la razón, porque tienen algo de empírico, placer ó pena, por principio fundamental. La virtud y la sabiduría humanas en toda su pureza son ideas, y aunque el sábio y el virtuoso ideales solo existan en nuestra mente, como la idea da la *regla*, por lo mismo el ideal sirve de *prototipo* para la determinación universal del *ectipo* ó copia, y nosotros no tenemos otro criterio de nuestras acciones más que la conducta de este hombre que existe en nuestra mente, al cual nos comparamos, según el cual nos juzgamos y conforme al cual nos corregimos, aunque no podamos llegar jamás

á su perfección. Y, aun no concediendo á estas ideas ninguna realidad objetiva, todavía no deben ser consideradas como quimeras, sino que dan á la razón, necesitada de estos conceptos, una unidad de medida de lo que es perfecto en su especie indispensable para apreciar en consecuencia los grados de la imperfección (1).

Por eso en las ciencias éticas se debe ante todo buscar el ideal, esto es, lo que nuestra inteligencia concibe como el tipo de la perfección. Estas concepciones de la razón, estas intuiciones que nos muestran lo típico, lo permanente é invariable, lo mejor en todos tiempos y lugares, constituyen los primeros principios, las verdades fundamentales, lo que con verdad se llama *parte filosófica* de la ciencia, de que no se puede prescindir en las investigaciones, ni se debe omitir en la exposición, sopena de faltar la base y de perderse en las tinieblas del error ó en las angustias de la duda.

A esta necesidad no había de sustraerse la ciencia objeto de nuestro estudio.

Por el contrario, al exponer la ciencia que á la organización, al gobierno y á la dirección de la sociedad se refiere, es preciso fijar bién los cimientos en que se apoya y descansa el edificio social, determinar con exactitud los conceptos fundamentales, y establecer con precisión los principios generales de que surgen las atribuciones y límites del Estado y de su representante el Poder público, los derechos y deberes de los ciudadanos y de los diferentes organismos que integran la sociedad política.

Así que, y aun no siendo completamente propia de nuestro estudio una indagación crítica, ni una determinación científica del derecho, misión peculiar de los tratadistas de Filosofía del derecho, consideramos indispensable presuponer, siquiera sea en forma dogmática, nuestro concepto del derecho, porque no hay ni puede haber consecuencia sin premisas, ni juicio sin criterio para juzgar, y como para analizar las doctrinas y los hechos han

(1) *Crit. de la Raison pure*, tom. II, pág. 169-171, trad. de Tissot.

de estudiarse en relación con el principio que las informa y con el fin que los determina, de aquí la necesidad de prefijar un concepto que sirva de término de comparación y de medio para la afirmación acerca de la verdad ó error de la doctrina, de la bondad ó malicia de la realidad ó hecho histórico que se estudia.

Sometiéndonos á esta necesidad afirmamos que el derecho es ante todo *regla*, que, como tal, se dirige á la voluntad libre y que, para que esta regla no sea caprichosa ó arbitraria, ha de expresar algo permanente y conforme al ser y naturaleza de las cosas. No es el derecho facultad, aunque la engendra, ni es tampoco restricción de la libertad, aunque puede producirla; es regla y sólo regla, ya sea manifiesta por la razón, ya declarada por el legislador, ó aclamada por el pueblo, ó surgida espontáneamente para afrontar una necesidad apremiante en la vida y relación social. Pero no es tampoco una sola regla, aunque sí pudieran contenerse todos los preceptos jurídicos en esta única regla capital: *respetar y prestar, según razón, los medios y condiciones necesarios para realizar fines humanos;* y como en este, que pudiera ser principio jurídico, están virtualmente contenidas todas y cada una de las reglas particulares de derecho, entendemos no pecar por exceso ni por defecto al afirmar que es derecho *toda regla que exige entre los hombres el respeto ó la prestación de los medios y condiciones necesarios, según la naturaleza, para la realización de su fin:* definición principalmente aplicable á los preceptos del derecho *natural*, expresión verdadera de los medios y condiciones impuestos por Dios al hombre, y que, cuando se tratare del derecho llamado *positivo*, como los hombres pueden equivocarse al juzgar medio ó condición racional aquello que realmente no lo sea, pudiera modificarse diciendo que es *toda regla que en un Estado se considera é impone como expresión de medios ó condiciones para el cumplimiento del destino humano.*

Nótase en esta definición que el término *Estado* entra como esencial en la misma, de manera que el dere-

cho positivo implica un Estado en que haya de manifestarse, y si añadimos que el derecho particular, objeto de nuestro estudio, es el *político*, referente de un modo especial al Estado, como el fin directo, principal é inmediato de éste se halla en la realización del derecho, que ha de ser *declarado*, *exigido y practicado* por él mismo, aparece aquí más de relieve la necesidad de fijar el concepto del Estado, *sociedad autónoma organizada para la consecución del fin humano por la realización del derecho*.

Expuesto y explicado este concepto fundamental, surgen cuestiones de importancia, prenotandos indispensables para resolver otras ulteriores. Cómo nacen los Estados; cómo viven y se desarrollan; qué fines secundarios pueden y deben realizar, además del suyo propio; qué relaciones sostienen con otras entidades extrañas y con los organismos que los integran; problemas son capitales, cuya solución nos da la clave para todos los derivados de la naturaleza del Estado y de su consideración enfrente de otros órdenes y sociedades, cuyos miembros forman tambien parte de él.

Pasando de este conocimiento general del Estado al de su interior contenido, como todo objeto cognoscible se ofrece á la inteligencia bajo dos fases distintas; la de la *materia*, que constituye lo fundamental de la existencia, y la de la *forma*, ó el modo de existir, estudiamos los elementos constitutivos del Estado, empezando por el material, porque, si bien es cierto que no hay existencia sin modo, en el orden lógico de las concepciones primero aparece lo fundamental *del ser* y después su *modo propio de ser* ó la manifestación especial de su existencia.

El elemento material del Estado le hallamos nosotros en la agrupación de seres humanos: de aquí la necesidad de conocer al indivíduo. A éste le concibe nuestra mente, ó viviendo en sociedad, ó fuera de ella (si bien esto no sea más que por pura abstracción), y desde el momento en que se ofrece la doble hipótesis de la vida, primero se concibe al hombre como existiendo aislado, y aunque

tal vida haya sido un mito en la historia de la humanidad, no por eso es menos cierto que, partiendo de esta hipótesis, el hombre se presenta con caracteres diversos que al estudiarle en sociedad.

Ahora bien; las hipótesis científicas no han de rechazarse en absoluto, sino que deben provisionalmente admitirse cuando pueden conducir á la más fácil consecución del fin científico; y, por lo que hace á nuestro objeto, es indudable que el estudio del hombre fuera de la sociedad nos dará el conocimiento de lo que el hombre tiene por serlo, de lo que no ha recibido de la sociedad, que la sociedad no puede quitarle; en una palabra, el conocimiento de los derechos *naturales*, *innatos* ó *nativos* del hombre, cuya exposición habrá de hacerse dando el primer lugar al estudio de la *libertad* y de sus manifestaciones, porque sin ella no se concibe al hombre, ni aun fuera de sociedad, y examinando después la *igualdad* y las relaciones varias á que da origen, como idea resultante de la comparación entre los hombres asociados.

El *orden* y la *organización* que este supone es lo que da forma á la agrupación de individuos para erigirse en sociedad política, y todo lo que á este orden diga relación será también referente al elemento formal del Estado. Como el orden no se obtiene sin una fuerza bastante para contener y armonizar las tendencias disolventes hijas de la libertad individual, síguese que el estudio del *Poder público* es previamente indispensable para conocer los principios de la organización social. Este Poder se concibe de dos modos: ya en *abstracto*, como fuerza social puramente, y aun como fuerza suprema al compararle con las demás fuerzas sociales; ya en *concreto*, ó encarnado en las personas que han de ejercerle. Por eso le estudiamos bajo los dos puntos de vista, examinando por el pronto lo que dice relación al Poder, sea cualquiera el modo con que se manifieste, y descendiendo después á los modos especiales de su manifestación, ó sean, sus *funciones*, para concluir exponiendo la realización de este Poder al encarnarse en las personas, dando lugar al *Go-*

bierno y á sus diversas *formas*, respecto á las cuales estudiamos las ventajas é inconvenientes de cada una, deducidos de su propia naturaleza é independientemente del país en que hayan podido ó pudieren establecerse. Al hacerlo, principiamos por la *monárquica*, por ser la primera que aparece en el tiempo, como la más natural; continuando por la *republicana*, y terminando por la llamada, tal vez no muy propiamente, *constitucional* ó *representativa*, como más moderna y producida por una elaboración más reflexiva.

La *combinación* de los dos elementos del Estado, realizándole como tal y ofreciendo á la mente su constitución, ya *intrínseca*, general á todo Estado, ya *externa*, propia solo de los Estados libres, cierra el estudio de la parte filosófica del derecho político, porque no hay combinación sin elementos que combinar, y aun existiendo estos, la combinación no sería acertada sin conocerlos previamente.

A la exposición de los principios fundamentales, que representan lo ideal de la ciencia, debe seguir una parte histórica, el estudio de la *realidad*, porque á la limitación del hombre no es dado realizar de repente lo ideal, sino que, caminando la humanidad por grados en su crecimiento y cultura, precisa conocer sus pasos, estudiarlos para saber si marcan un adelanto ó un retroceso ó desvío en la senda del progreso, y poder, como consecuencia, afirmar cuál ha de darse en aquel momento, que es lo posible ó realizable, según la situación y la aptitud actual de la humanidad, para acercarse á la idea ó tipo que persigue.

La historia del derecho positivo de un pueblo exige como conocimiento previo el de la constitución de este en Estado, ó sea, el de sus transformaciones sucesivas hasta adquirir la fuerza, la independencia y la inteligencia bastantes para formar Estado.

Pero ya mucho antes de que los pueblos se constitu-

yan en verdaderos Estados sienten la necesidad del derecho y tienden, tanto á su conocimiento y declaración, como á su realización. La falta de cultura, sin embargo, en los pueblos primitivos no les permite vislumbrar puntos de vista generales y por esto se limitan á la satisfacción espontanea de las necesidades más urgentes y perentorias, que son las más concretas, y las contiendas jurídicas se resuelven, ya por el mutuo acuerdo resultante del conocimiento instintivo del derecho, ora por la decisión de árbitros á cuya buena fé se somete la querella, ó ya también por los jefes de las familias y de las tribus, quienes fallan prudencialmente conforme á su razón y voluntad, sin ley escrita que obedecer, ni costumbre que respetar, pues los primeros actos de administración de justicia no tienen precedentes que imitar.

Es, pués, la primera manifestación del derecho individual y espontanea, sin que llegue á adquirir cierto carácter de generalidad hasta que la repetida presentación de necesidades análogas hace á los hombres recordar la manera anterior como se resolvió el conflicto, y de la aplicación reiterada de las mismas soluciones nace la costumbre jurídica, que marca un grado de progreso en la senda del derecho, y no carece por completo de importancia en el derecho público, como lo prueba el que, ni el Poder social, ni sus atribuciones, ni su modo de ejercicio son efecto en las sociedades incipientes de una disposición escrita, de una ley fundamental. El hecho natural de la generación da, es cierto, en las familias el Poder autoritario, indiscutible, arbitrario, si se quiere; pero al salir de la familia, al estudiar las tribus y los pueblos, ya no se ve á la naturaleza designando al padre como jefe; es en un principio jefe el que puede, el que se impone por su fuerza, por su astucia ó por su talento, y constituido así el germen del Estado, las atribuciones del jefe, los deberes de los subordinados y la sustitución de aquel, cuando muere, se incapacita ó es destituido, se regulan por la costumbre; en el uno de mandar; en los otros de obedecer, y en todos de acatar el modo y forma de designación

anterior. Podrán ser estas costumbres más ó menos aceptadas, más ó menos contradichas, más ó menos arbitrarias ó caprichosas; pero no podrá negárseles el dictado de jurídicas, toda vez que á regular relaciones de derecho tienden; y por lo que hace á nuestra patria, bien se ve que la costumbre determinó el modo de ser político, aunque rudimentariamente político, de las ciudades ó pueblos anteriores á los fenicios, y que ella también rigió la organización del pueblo godo antes de que este recibiera leyes escritas en tiempo de Eurico.

Aparece la costumbre en todo pueblo como la primera manifestación *reflexiva* del derecho, y aunque no es su única fuente, según afirma un escritor ilustre, es lo cierto que, andando el tiempo, entre la costumbre jurídica y la ley existe cierta armonía, siendo á la larga aquella respetada por esta, como expresión de una necesidad sentida y satisfecha á su modo por el pueblo. De aquí se infiere que, al historiar el derecho, no sea preciso en general hacer su estudio en las costumbres, bastando para el caso las leyes, y esto porque, además de ser en muchas ocasiones inútil, viniendo á resultar el trabajo repetido al indagar el espíritu de las leyes después de conocida la tendencia de las costumbres, sería muy dificil precisar cuales fueron en los pueblos pasados cuando su influencia fué tan escasa que no llegaron á traducirse en leyes.

En estas deberemos fijarnos principalmente, sin desdeñar, no obstante, las costumbres bien manifiestas ó notorias; y como no es posible aplicar simultáneamente la atención á todas las especies de instituciones jurídicas, sopena de exponernos á una confusión lamentable, ni menos ver con claridad la ilación y correspondencia entre las instituciones de una misma clase, si nos obstinamos en estudiarlas todas de una vez y en un momento dado, preferimos indicar el carácter y desenvolvimiento de cada una desde su origen hasta su estado actual, limitándonos á una crítica general, siquiera esto implique cierto dogmatismo: defecto que, después de todo, no es tan grande

observando que aquellas dogmáticas aserciones han de hallar su comprobación en las citas y referencias oportunas.

Si la historia ha de ser enseñanza, y esta resulta del juicio de los hechos por su comparación, cuanto más se aproximen estos, cuanto más se pongan en contacto, más facil será ver sus semejanzas y diferencias, más notoria será la influencia de los anteriores en los subsiguientes.

Por esto nos separamos en la parte histórica de la división por épocas, aun reconociendo todo su valor científico y su utilidad práctica, y optamos por exponer aisladamente cada especie de instituciones para comprender mejor su nacimiento y desarrollo; buscando, más que la remota relación entre las diversas instituciones coetaneas, todo lo que directamente afecte á cada una, y las vicisitudes porque ha pasado, deducidas del contenido de nuestras leyes y de las costumbres que han arraigado en España. Estudiaremos, pues:

I.—*La formación de la nacionalidad y del Estado español;* comprendiendo: 1° La primitiva población por los *iberos*, *celtas* y *celtíberos*, divididos en tribus independientes, que no llegaron á constituir nacionalidad, ni se rigieron por un solo gobierno; la colonización por los *fenicios* y *griegos*, que dejaron en nuestro suelo la semilla de la civilización; y la dominación por los *cartagineses*, que pasaron sin dejar rastro alguno de cultura, atentos sólo á explotar las ricas minas y á reclutar los valerosos hijos del país para las luchas que sostuvieron con su afortunada rival: 2° La dominación *romana* en que España llegó á convertirse en una de tantas provincias, recibiendo de la metrópoli lenguaje, costumbres, religión, derecho y en general todos los elementos de la vida social: 3° El *imperio visigótico*, que infiltró en la sociedad española el espíritu individualista germánico; nos dejó los concilios toledanos, venerandas asambleas donde se elaboraron las notabilísimas leyes del Fuero Juzgo y nos legó la institucion monárquica, templada cuanto podía serlo en aquella

época: 4° La *reconquista*, epopeya grandiosa, iniciada en las montañas de Asturias y Sobrarbe y terminada felizmente bajo los muros de Granada; en cuyo período los estados cristianos nacen, crecen, se unen, se dividen, vuelven á unirse y separarse hasta llegar después á fundirse por completo en la corona legada á doña Juana por los reyes Católicos: 5° *Casa de Austria*, que marca el apogeo de la grandeza de España con las conquistas en el Nuevo Mundo, en Africa y en Italia, y hace sentir su influencia en toda Europa en el reinado de sus primeros monarcas, para llegar en sus últimos tiempos á un grado increible de postración y de abatimiento, iniciándose la desmembración del territorio nacional con las pérdidas de los Países Bajos, el Rosellón y Portugal: 6° *Casa de Borbón*, bajo la que sigue la desmembración iniciada; se pierden las posesiones en Italia, Africa y la mayoría de las de América; pero también, por una especie de compensación, se desarrollan la industria y el comercio; se fundan institutos benéficos como los pósitos y los montes de piedad; se terminan grandes obras; se fomenta la riqueza pública procurando el cultivo de los terrenos baldíos, dejando libre la circulación de cereales, arreglando el sistema de aduanas, modificando los aranceles, creando compañías para el comercio de Ultramar y establecimientos de crédito, abriendo grandes vías de comunicación férreas y telegráficas; se rehace el prestigio del nombre español asombrando á Europa entera con la guerra de la Independencia, y se renuevan los laureles de las armas nacionales con la guerra de Africa y las glorias de la marina con el inmortal triunfo del Callao.

II.—*Elementos de nacionalidad*, constituidos: 1° Por las *razas* distintas que han poblado la España, y cuyo carácter, hábitos, costumbres, civilización y aspiraciones han venido á formar con sus distintos gérmenes y con su fusión más ó menos rápida el carácter nacional y sus diversas aptitudes para el derecho, la administración y el gobierno: 2° Por el *territorio*, que, con su estructura física, su topografía, sus condiciones climatológicas, sus fuen-

tes de riqueza y su distinta consideración ante la ley, ha influido en los habitantes de España y determinado su preferencia especial para el ejercicio de la actividad en la guerra, en la industria, en el comercio ó en el cultivo de las ciencias y las artes: 4° Por la *religión*, rasgo característico de los españoles ya en los tiempos del sabeismo y de la idolatría, y después que la predicación del Evangelio en esta tierra de héroes la convirtió en enseña del combate y de la victoria y en emblema de civilización y de cultura: 4° Por el *lenguaje*, ora rudo y enérgico, como la salvaje independencia de los primitivos pobladores; ya elocuente y vigoroso, como el pueblo que colonizó las fronteras orientales; ya robusto, hermoso y rico, como la raza formada por el cruzamiento de tantas otras, y siempre expresión del carácter nacional, noble, arrogante y franco.

III.—*Consideración jurídica de las personas.* Dato histórico importantísimo para conocer las aspiraciones y la índole del pueblo que ha de ser regido por las leyes; que no es posible gobernar del mismo modo la nación acostumbrada al yugo de la esclavitud, al peso de la servidumbre, que á la que ha luchado siempre por su independencia y protestado contra las vejaciones y opresión de que se ha intentado hacerla víctima; ni es tampoco justo ni político privar de repente á las distintas clases de personas, que por una série de transformaciones han venido á constituir un solo Estado, de las leyes que rigieron su actividad en el transcurso de los siglos, de los fueros que afirman su personalidad particular y aun su carácter formado por el hábito de ser considerados y regidos por determinadas leyes y costumbres.

IV.—*Elementos político sociales.* Es decir, fuerzas que han determinado ó influido en el modo de ser de la nación y en el gobierno del Estado, y entre los que aparecen predominando por su poder y eficacia: 1° La *nobleza*, guerrera, violenta y, en los últimos tiempos, corrompida entre los godos; turbulenta, devorada por luchas intestinas y prepotente, hasta que mermaron su influjo los con-

cejos, en Castilla; unida, coherente, poderosa, hasta oligárquica por sus fueros y privilegios en Aragón; y en todas partes, influyendo en los consejos de los reyes, en la representación nacional, en las empresas militares y, en suma, en todo el gobierno y dirección del Estado: 2° El *clero*; ilustrado como ninguna otra clase y tal vez la única clase ilustrada que ejerce benéfica influencia durante la dominación visigótica, sirviendo de consejero á los monarcas y tomando parte en la elaboración de las leyes por medio de los concilios; lleno de inmunidades y privilegios y formando uno de los brazos de las cortes en la Edad media; dispensador de las gracias y armado con los anatemas de la Iglesia, es otro factor político importante cuyo peso ha de tenerse en cuenta en una sociedad eminentemente cristiana: 3° Las *órdenes militares*; institución creada para unir el patriotismo y la fé, haciendo de estos dos nobles sentimientos arma para combatir á los infieles, y que con el tiempo y merced á sus exenciones y privilegios, á sus fortalezas y castillos, á las grandes fuerzas militares de que disponían sus maestres, llegan á ser un poder en el Estado temible aun para los mismos reyes, quienes no pudiendo desembozadamente hacerles frente, acuden para contrarrestarles al expediente de incorporar á la corona sus maestrazgos: 4° Los *concejos*, que nacidos al calor de la reconquista como baluarte contra las correrías de los musulmanes, llegaron á adquirir grandes preeminencias levantando tropas, imponiendo pechos, administrando justicia, y cuya influencia fué tan grande, que los mismos reyes la utilizaron oponiéndola á las pretensiones cada vez más insolentes de la nobleza.

V.—*Gobierno ó Poder público*. Patriarcal, republicano ó monárquico en los pueblos celtíberos, cuando la vida social no traspasaba los límites de la ciudad ó del pueblo; despótico y arbitrario bajo el mando de los procónsules y propretores enviados por Roma para explotar la península en provecho propio y de la metrópoli; y monárquico desde que surgió la unidad nacional; electivo, militar y templado por la influencia de los concilios, del

oficio palatino y de la ingerencia de los grandes en el imperio visigótico; hereditario, con sus ambiciosas regencias y turbulentas minorías, y moderado por la influencia de las cortes, de los concejos y otras instituciones especiales en la Edad media; autoritario bajo la casa de Austria y en los primeros reinados de la casa de Borbón; limitado de hecho y de derecho por las *constituciones* en el siglo actual; pero siempre grande, siempre vivo, siempre fuerte, como institución arraigada en el sentimiento nacional.

VI.—*Instituciones políticas*. Entre las que contamos: 1° los *Concilios de Toledo;* pués, si tales asambleas fueron sólo religiosas en un principio, la intervención que tuvieron posteriormente en la dirección del Estado, el haberse formado ó preparado en su seno todas las leyes referentes á la constitución política de los visigodos, la entrada en ellos de la nobleza como valioso elemento social y aun las aclamaciones del pueblo que de ordinario seguían á sus acuerdos autorizan para considerarlos como trasunto de las antiguas asambleas germánicas y precedente de los primeros concilios de la reconquista, fuente á su vez y origen de las cortes de la Edad media en Castilla: 2° las *Cortes*, compuestas desde fines del siglo XII de los tres brazos, nobleza, clero y estado llano; que toman en Castilla parte activa en la formación de las leyes, siquiera fuese en forma de súplica, lo cual basta para no considerarlas destituidas de influencia politica; que ejercen verdadera autoridad en la exacción de impuestos, esto es, de los medios materiales sin los que es imposible el gobierno del Estado; que habían de ser consultadas para la declaración de guerra y celebración de los tratados de paz, tomando también parte importante en las cuestiones de sucesión á la corona, jura del inmediato sucesor, nombramiento de tutores, declaración de mayorías y capitulaciones matrimoniales de los reyes, aparecen con carácter aún más acentuado de representación nacional en Aragón, donde arranca su origen del consejo de los *doce ricos homes* del Fuero de Sobrarbe; ejercían en cierto mo-

do potestad legislativa en la formación de los fueros; tenían también algunas atribuciones judiciales, conociendo de las reclamaciones de agravios; intervenían en la administración y gobierno del Estado por los llamados *casos de corte* y, como en Castilla, autorizaban los impuestos.

VII.—*Instituciones político administrativas.* A las que referimos: 1° la *Curia* del tiempo de los romanos; corporación municipal que presidía al gobierno y administración de la ciudad, honrada en un principio; pero insoportable cuando la codicia y el despotismo imperial convirtió á sus miembros en meros recaudadores responsables de la cobranza de los tributos: 2° el *Oficio palatino;* alto consejo de los reyes en la monarquía visigótica, hijo más bien de la costumbre que de la ley, formado de próceres en un principio y algo prostituido después cuando los libertos escalaron la dignidad palatina; que prestaba su concurso á los monarcas en el ejercicio del poder legislativo, é intervenía en los asuntos graves del Estado y hasta en la administración de justicia en ciertas causas de entidad: 3° el *Consejo Real ó de Castilla;* creado como junta de personas entendidas para ilustrar al monarca en los negocios graves del Estado; organizado por Juan I con atribuciones definidas y en representación de los tres brazos, nobleza, clero y estado llano; reformado después y elevada su importancia en lo concerniente al gobierno y administración y en la dignidad de su presidente, considerada como la primera después del rey; y reducido á mero cuerpo consultivo y tribunal contencioso, cambiado su nombre en el de Consejo de Estado, por las reformas constitucionales del presente siglo.

En suma: lo que debe ser y lo que ha sido son motivos que pueden determinar nuestra conducta, y cómo la tendencia general en los seres y en las ideas es á dominar con exclusión, cuando el hombre recuerda lo pasado, al volver su vista atrás y al notar cómo ciertos su-

cesos de su vida han influido en los siguientes, se ve llevado á pensar que, dados ciertos hechos anteriores, han de seguir por precisión otros determinados, y en el análisis é investigación de un orden cualquiera de fenómenos y de leyes prescinde completamente de ideales, relaciona los hechos precedentes con los venideros y aspira á formar la ciencia por el procedimiento histórico. Por el contrario; si llevado en alas de su imaginación y de sus brillantes concepciones forja un ideal cualquiera, suele sentirse inclinado al desprecio de todo lo que no se amolda á su soñado ideal, y se hace dogmatizador y sistemático.

Mirar solo hacia atrás es pararse en el camino de la vida; despreciar las lecciones del pasado es muy expuesto á perderse en el campo de las abstracciones. Pretender investigar y enseñar las verdades de una ciencia, cuyo objeto sea la conducta humana, por uno solo de los dos métodos, histórico ó filosófico, es intentar ver claramente teniendo los objetos á media luz.

Sobre el examen de la naturaleza y sobre el fin que solicita la actividad del hombre ha de fundarse toda ciencia ética, y como el derecho es de esta clase, síguese que en su estudio ha de jugar un gran papel el procedimiento racional, y que en los comienzos de la ciencia se hace desde luego necesario un fundamento filosófico. Y si el estudio de la naturaleza y fin humano está bien hecho; si la enseñanza filosófica es verdadera, ella nos mostrará inmediatamente la conveniencia de utilizar las lecciones del pasado al intentar conocer las leyes de la actividad y regir los actos según ellas; porque la filosofía psicológica nos dice que, si el hombre es libre para determinar sus actos en este ó en el otro sentido, también han influido siempre é influyen en su conducta las circunstancias, los hábitos contraidos, los antecedentes de su vida; en una palabra, su historia. Y lo mismo que en el indivíduo sucede en la humanidad. La humanidad tiene su naturaleza y su destino que en vano intentaríamos penetrar sin la enseñanza filosófica; pero ¿cómo es posible desconocer que los acontecimientos, que las situaciones habi-

tuales han venido á constituir en ella una segunda naturaleza, con la que no es posible romper en el terreno de los hechos sin acarrearle fuertísimas convulsiones y aun la muerte, y de la que no es posible prescindir en el campo de las ideas sin dejarse llevar de ilusiones vanas y engañosas y sin extraviarse en la región de las utopias?

Si al hablar de la filosofía en general podía afirmar Cousin que la historia de la filosofía es la antorcha de la filosofía misma, y que la historia á su vez se esclarece con las luces de la filosofía, también podría formularse un pensamiento análogo para demostrar que en toda ciencia social, lejos de estar en pugna la razón y los hechos, como fuentes del conocimiento, se auxilian y completan mútuamente. La filosofía nos dice, por ejemplo, que la libertad es un constitutivo de la naturaleza humana y, como confirmación de esta verdad, la historia nos enseña que siempre que se ha tratado de falsear este principio, la humanidad ha retrocedido ó el mundo se ha llenado de lágrimas y de sangre. El derecho, partiendo del conocimiento filosófico, formula lógicamente este principio: *el respeto á la libertad racional, es la primera ley jurídica*, porque, siendo la libertad constitutivo del hombre y este sujeto de todo acto jurídico, ir contra la libertad será violentar las leyes de la naturaleza, y en comprobación de esta verdad, la historia de los hechos sociales nos muestra que la esclavitud antigua, las servidumbres de todas clases, los reglamentos del trabajo, las restricciones y los monopolios del comercio y de la industria, han sido las causas principales del atraso y de la miseria en los pasados tiempos. La psicología nos enseña que la satisfacción de las necesidades exige el empleo de nuestras fuerzas, el ejercicio de nuestra actividad, y el derecho, aceptando el dato de la ciencia filosófica, lo erige asimismo en ley, que viene después á ser confirmada por la historia enseñándonos que los pueblos más laboriosos han sido los más ricos y que los más inactivos han sido los más necesitados, aunque hayan recibido á torrentes el oro del Nuevo Mundo.

PRELIMINARES

DEL DERECHO EN GENERAL

I—NOCIÓN DEL DERECHO

En la idea que se forme del derecho está la base de todo sistema de conocimientos á él relativos. Esta idea es el medio para conocer la bondad de todas las reglas y preceptos jurídicos, ora emanen de la espontaneidad de los pueblos, ó de la pública autoridad: es la piedra de toque para comprobar la justicia de nuestras pretensiones en frente de los actos del Poder ó de las exigencias de nuestros conciudadanos, y el prenotando necesario para el estudio de toda rama de la ciencia.

La definición del derecho en general debe, por tanto, preceder á la de cualquiera otro concepto parcial del mismo.

Esta lógica necesidad se hace aún más patente considerando que no todos los expositores conciben ni explican el derecho del mismo modo. Para unos es poder ó facultad; para otros regla, precepto ó norma de la voluntad; para otros medio, condición ó conjunto de condiciones libres (1).

En todo caso; *facultad*, *regla ó condición*, siempre dice relación á un fin: si se considera como regla, nos traza el camino pa-

---

(1) También se ha usado la palabra derecho, *jus*, en otras varias acepciones: «Hoc nomen *jus* primum impositum est ad significandam *ipsam rem* justam. Postmodum autem est derivatum *ad artem*, qua cognoscitur quid sit justum. Et ulterius ad significandum *locum*, in quo jus redditur: sicut dicitur aliquis comparere in jure. Et ulterius dicitur etiam jus *redditum* ab eo, ad cujus officium pertinet justitiam facere; licet etiam id, quod decernit, sit iniquum.» Div. Thom. 2. 2. quæst. LVII. art. I.

ra llegar al fin: si es facultad, nos sirve para conseguirle: si medio ó condición, de su empleo depende la realización de aquel.

El fin á que se refiere el derecho ha de ser necesariamente humano, porque siendo regla, sólo puede dirigirse á un ser *inteligente* ó capaz de conocerla, y *libre* ó capaz de ajustarse á ella: si es condición ó facultad, sólo existe para un ser *limitado* ó necesitado de ella; y únicamente el hombre, entre todos los seres, reune á la vez los caracteres de inteligente, limitado y libre.

El fin del hombre se determina por el conocimiento de su naturaleza: á este conocimiento se llega por el de las propiedades, fuerzas y tendencias humanas; y este último se obtiene por el de los actos que el hombre produce ó fenómenos que en él se realizan, y por la inducción consiguiente.

El hombre siente necesidad de la *verdad*, tiende al *bien* y ama lo *bello*. La felicidad humana consistirá en la posesión ó goce, según su naturaleza, de la verdad, del bien y de la belleza absoluta. El fin último del hombre se hallará por lo mismo en conseguirlo. Este fin no es realizable en la vida, porque durante ella no encuentra el hombre cosa alguna capaz de satisfacerle. Ni aun "el continuo é indefinido perfeccionamiento del *género humano*„ puede mirarse como fin último, porque el hombre no es sólo colectividad, no es sólo entidad genérica; es individuo y, como tal, tiene también personalidad propia; es causa de sus actos; ha de merecer por ellos, y sus méritos exigen recompensa, que, como los actos propios y suyos en cuanto individuales, ha de ser también propia é individual, sin que por esto haya de considerarse como extraño al bien de sus semejantes, ni deba dejar de cooperar á los fines de la creación procurando que todos y cada uno de los seres cumpla el suyo.

El único objeto capaz de hacer la felicidad humana es Dios, bien, verdad y belleza absoluta, cuya posesión es imposible en la tierra, y aunque el cómo de ella en la vida ulterior tampoco se alcanza por nuestra mente entregada á sus propias fuerzas, bien se ve que la felicidad relativa y el destino del hombre en este mundo estará en acercarse á Dios por la virtud, la ciencia, el cultivo de los sentimientos puros, nobles y generosos, y coadyuvando al cumplimiento de los designios providenciales por la conservación del cuerpo en sí y como habitación del alma.

Así como el objeto final del hombre no está en él, tampoco se ha impuesto su destino, porque no se creó á sí mismo, y su vida y su existencia, independientes de su propia voluntad, son para lo que su Criador quiso que fueran. Dios, autor del hombre y de

la naturaleza, señaló al hombre su destino ó le prescribió el fin que debe libremente realizar, del mismo modo que sujetó el fin del mundo físico á leyes de necesario é ineludible cumplimiento; y como es cosa evidente que quien da la vida y la existencia es superior al ser que la recibe, y que el inferior está y debe estar subordinado al superior, síguese que la voluntad del Criador, señalando á la criatura racional su fin ó destino, se le impuso como una necesidad y, aun dejándola en libertad para cumplirle ó rechazarle, no por esto se hallará menos sujeta á respetar, acatar y obedecer la voluntad de su Criador. El fin humano se impone, pues, al hombre como *obligación* emanada de la voluntad de su autor, y los fines subordinados al fin último vienen á ser, en cuanto medios para conseguirle, otros tantos *deberes*, más ó menos sagrados é importantes, aunque todos respetables, que el hombre debe cumplir.

Para la realización de su fin y por lo mismo para el cumplimiento de sus deberes necesita el hombre, como limitado y finito, del concurso de ciertas condiciones y del empleo de ciertos medios, de los cuales unos los encuentra en sí mismo y en la naturaleza, porque Dios se los proporcionó gratuitamente y se conservan sin esfuerzo, y otros dependen de la voluntad de sus semejantes, ya porque este ha de prestarlos, ya porque puede respetarlos, ó destruirlos, ó impedir su uso, aunque existan independientemente de él.

Si tales condiciones y medios dependen en su existencia ó en su empleo de la voluntad del hombre, originan lo que llamamos *derechos,* y así decimos que la vida es un derecho, que lo es la libertad, que lo són la dignidad, la honra, la propiedad, etc.

Y como estas condiciones aparecen para la voluntad como obligatorias desde el momento en que la inteligencia las concibe como necesarias ó convenientes para realizar fines humanos, puesto que el cumplimiento de estos constituye un deber, se traducen lógicamente en *reglas de conducta*, en cuanto que el hombre ha de enderezar sus actos de modo que sean condiciones y medios para que los demás hombres puedan cumplir sus deberes y realizar su fin.

Cuando estas condiciones están ó pueden estar á disposición del hombre, para cumplir su fin, se convierten en otras tantas *facultades* de que se sirve; y de este modo, lo que como condición *necesaria ó conveniente* se erige en derecho, como condición *respetable ó exigible* es norma de conducta ó regla, y como condición *disponible ó utilizable,* es facultad ó poder; por lo que

definimos el derecho: *Norma ó regla de conducta que exige entre los hombres el respeto ó la prestación de las condiciones y medios de perfeccionamiento necesarios ó convenientes, según la naturaleza, para que puedan realizar su fin.*

Decimos *norma ó regla* para indicar la relación que propiamente expresa la palabra derecho y su influencia en la voluntad humana *dirigiéndola.* Y en efecto, las condiciones ó los medios, á que en la definición se alude, sólo son derechos en cuanto pueden ser proporcionados ó respetados por el hombre y servirle por lo mismo de guía en su conducta. Las condiciones y medios que ni directa ni indirectamente dependen de la voluntad humana, como el mayor ó menor grado de retentividad, el alcance del entendimiento, la lluvia que beneficia los campos, el calor solar que templa la atmósfera, etc., aunque sean medios y condiciones de vida y bienestar, nunca originarán derechos, porque nada dicen á la voluntad libre y se producen ó dejan de producirse con independencia de ella.

Añadimos que esta norma *exige,* para mostrar la virtud imperativa del derecho, que no se limita al simple consejo é implica una fuerza coactiva; *entre los hombres,* para determinar su esfera de acción, constituida por las relaciones de unos hombres con otros, y significar además que el derecho no se dá para el arreglo de la conducta íntima y privada de cada uno, como pretenden algunos pensadores; y afirmamos que las condiciones ó medios exigibles lo han de ser *según la naturaleza,* para limitar las injustificables pretensiones de algunos utopistas y poder concluir lógicamente que ciertos medios ó condiciones no fundados en la naturaleza, esto es, en lo que la recta razón enseña, aunque por interés particular se juzguen necesarios ó convenientes, no serán jamás derechos. Así, puede ser necesario para un hombre que haya quien le ocupe retribuyéndole, quien, como vulgarmente se dice, le dé trabajo para que gane su subsistencia y, sin embargo, no tener á ello derecho; porque, si bien es cierto que el trabajo es para aquel una condición de vida, ni se funda en la naturaleza, ni es conforme á ella que se ocupe á un trabajador á quien no se necesita ó se le prefiera á otro más apto ó más honrado. Por el contrario, es conforme á la naturaleza que todo hombre se proporcione recursos trabajando en la forma que más le cuadre, y como esto es una condición de su vida y de su desarrollo, el que le perturba en este trabajo, cualquiera que sea el pretexto, conculca al derecho, porque el hombre tiene derecho *á trabajar,* aunque no le tenga *al trabajo,* en el sentido de ciertos socialistas.

En la definición formulada caben además, en nuestro entender, todas las acepciones en que los tratadistas usan la palabra *derecho*. Si se concibe como ley ó como conjunto de leyes ó preceptos que han de regir la actividad libre, es evidente que será regla para la voluntad: si se concibe como facultad ó poder de exigir alguna cosa, en la definición se halla implícitamente contenida, puesto que dicho poder ó facultad á favor de una persona emana de que antes hay una regla que tal facultad engendra, así como la obligación correlativa: si se pretende que es condición ú orden de condiciones dependientes de la voluntad, tales condiciones, apareciendo ante la razón como necesarias ó convenientes para la realización del fin humano, se hacen respetables y, al imponerse en tal sentido á la voluntad libre, se erigen en otras tantas reglas y son norma de la conducta ó del obrar.

Como prueba de la diversidad de criterios que han presidido á la formación del concepto del derecho, exponemos á continuación algunas doctrinas formuladas sobre este punto por pensadores de distintas épocas y escuelas.

«Nihil est profecto præstabilius, dice Ciceron, quam plane intelligi nos ad justitiam esse natos, neque opinione sed natura constitutum esse jus. Id jam patebit, si hominum inter ipsos societatem conjunctionemque perspexeris. Quæcumque est hominis definitio, una in omnes valet. Etenim ratio, qua una præstamus belluis..... certe est communis.—Quibus enim ratio a natura data est, iisdem etiam recta ratio data est; ergo et lex quæ est recta ratio in jubendo et vetando; si lex, jus quoque: at omnibus ratio, jus igitur datum est omnibus..... Quo facilius, jus in natura esse positum, intelligi possit. – Stultissimum existimare omnia justa esse, quæ scita sunt in populorum institutis aut legibus.. .. Est enim unum jus quo devincta est hominum societas, et quod lex constituit una; quæ lex est recta ratio imperandi atque prohibendi, quam qui ignorat, is est injustus.» *De legibus*, Lib. I. Edic. Nisard.

Aunque en esta doctrina no debe buscarse directamente el concepto filosófico del derecho, puesto que Cicerón se propuso principalmente demostrar que había un principio de justicia superior á la voluntad de los gobernantes y de los pueblos, con todo, bién se nota que, al identificarse el derecho con la ley y esta con la razón en tanto que manda ó que prohibe, el derecho aparece como regla.

«Justitiæ proprium est ut ordinet hominem in his, quæ sunt ad alterum..... Illud enim in opere nostro dicitur esse justum quod respondet secundum aliquam æqualitate alteri, puta recompensatio mercedis debitæ pro servitio impenso. Sic ergo justum dicitur aliquid, quasi habens rectitudinem justitiæ ad quod terminatur actio justitiæ, etsi non considerato qualiter ab agente fiat. Sed in aliis virtutibus non determinatur aliquid rectum nisi secundum quod aliqualiter fit ab agente. Et propter hoc specialiter justitiæ præ aliis virtutibus determinatur secumdum se objectum quod vocatur justum. Et hoc quidem justum est. Unde manifestum est quod jus est objectum justitiæ.—Jus sive justum est aliquod opus adæquatum alterum secundum aliquem æqualitatis modum.» Sto. Tomás, *Sum. Theo.* Quæst LVII, arts. I y II.

Profunda y utilísima esta concepción de la justicia y del derecho, no expresa sin embargo, en nuestra humilde opinión, la verdadera naturaleza de este: indica sí lo que es *recto* en el comercio de los hombres; pero el derecho no es propiamen-

te relación: el derecho regula relaciones, determina cuando las relaciones entre los hombres son conformes á su naturaleza y á su fin y prescribe qué ha de hacerse ú omitirse para conservar la armonía ó justa proporción entre una cosa y otra. El derecho no es lo recto en sí, sino medida de lo recto y por lo mismo su regla.

«Il n'y a aucun de nous qui ne se porte à desirer ce qui le semble bon, et à éviter ce quí le semble mauvais, sur-tout á fuir le pire de tous les maux de la nature, qui sans doute est la mort. Cette inclinatión ne nous est pas moins naturelle, qu'à una pierre celle d'aller au centre lorsq'elle n'est pas retenue. Il n'y a donc rien à blâmer ni à rependre, il ne se fait rien contre l'usage de la droite raison, lorsque par toutes sortes de moyens on travaille à su conservation propre, on défend son corps et ses membres de la mort, ou des douleurs qui la précèdent. Or tous avouent, que ce qui n'est pas contra la droite raison est juste et de droit, car par la mot de juste et de droit on ne signifie autre chose que la libertè que chacun a d'user de ses facultés naturelles, conformément á la droite raison. D'où je tire cette conséquence que le premier fondement du droit de la nature est, que chacun conserve, autant qu'il peut, ses membres et sa vie.» Th. Hobbes, *La Liberté*, chap. I, VII.—*Œuvres philos, et polit*, trad. franc.—Neufchatel 1787.

Aparte el fundamento sensualista que sirvió de base á Hobbes para formular la anterior doctrina y admitiendo que la libertad, usada según razón, no es contraria al derecho, el derecho existe para algo más, existe para regular la relaciones, conservar la armonía entre los hombres y procurarles mutuo auxilio, y no se concreta al fin egoista de usar exclusivamente en provecho propio la propia libertad. De todos modos, para nuestro actual propósito basta consignar que en esta doctrina el derecho aparece como facultad.

Segun Kant, el primer carácter del derecho consiste en no aplicarse más que á las relaciones exteriores de una persona con otra, en tanto que las acciones de la una pueden mediata ó inmediatamente ejercer influencia sobre otra. El segundo carácter consiste, no en la relación del deseo del uno con la voluntad del otro, sino en la relación de dos voluntades. Para determinar la naturaleza de esta relación es preciso atender, no á la *materia* de la voluntad, sino á la *forma*. La materia de la voluntad es el fin que se propone; é importa poco (para el derecho) que el objeto del libre arbitrio sea la adquisición de esta ó de la otra cosa, y que el móvil del obrar sea el interés personal, el afecto ó el temor. Lo que funda el derecho es la condición general que debe convenir á la vez á las dos voluntades: esta condición es la libertad. Así cualesquiera que sean los términos de un contrato y las intenciones de las partes, hay una cosa esencial al contrato, la libertad de las dos voluntades contratantes aceptando recíprocamente las ventajas y riesgos de su convenio. Por último, mi derecho sobre las cosas no está fundado igualmente sino en la condición de no atentar á la libertad de los demás hombres, de tal modo que ellos puedan, como yo, apropiarse lo que les sea necesario en las mismas circunstancias. De aquí se deduce que «es conforme al derecho toda acción que permite ó cuya máxima permite al libre arbitrio de cada uno ponerse de acuerdo, armonizarse, según una ley general con la libertad de todos.» De aquí el principio de todos los deberes jurídicos: «Obra exteriormente de tal suerte, que el libre uso de tu arbitrio pueda conformarse con la libertad de cada uno, según leyes generales;» y la definición del derecho *conjunto de condiciones* bajo las que la libertad de cada uno se conforma con la libertad de todos.....

Vese, pués, que para Kant el derecho es una condición. Con notar esto, bastaría aquí para comprobar lo dicho en el texto; pero el haber servido de base este concepto á algunos filósofos juristas más modernos para formular sus definiciones, nos disculpará que indiquemos sus dos principales defectos, á saber: el identificar el derecho con la condición; y el restringirle á la armonía de la libertad. El análisis del lenguaje demuestra el error de lo primero: cuando decimos la libertad, la igualdad, la propiedad, la locomoción son un derecho, usamos esta palabra en sentido figurado ó traslativo y no en sentido propio, porque, según su naturaleza, la libertad es una propiedad de la voluntad humana, la igualdad es una relación entre dos cosas, la propiedad en sí es un conjunto, ya de cosas físicas, ya de me-

dios morales, la locomoción es una aptitud ó un conjunto de actos, y al decir que el hombre tiene derecho de libertad, de igualdad, de propiedad, de locomoción, afirmamos implícitamente que tiene derecho al ejercicio de la primera, á la consideración que implica la segunda, al uso de los medios que constituyen la tercera, y al ejercicio de su actividad en la forma que la última supone. El otro defecto está en que Kant fija como fin exclusivo del derecho armonizar la libertad, y mira únicamente á su parte negativa: según esto, el derecho habría de concretarse á impedir la ruptura de la armonía, y en ningún caso llegaría á exigir prestaciones recíprocas entre los hombres y mucho menos unilaterales.

Conociendo esto, trató Krause de rectificar la definición kantiana, afirmando que «el derecho expresa una dirección invariable, idéntica; una relación entre dos cosas dispuestas de tal modo, que la una conduzca directamente á la otra;..... una relación que une al hombre con sus semejantes, de tal suerte, que pueda alcanzar directamente su fin individual y social. Así, mi derecho es todo aquello que debe concedérseme por los demás hombres, á fin de que pueda cumplir mi destino como hombre y como miembro de la sociedad humana: en otros términos; mi derecho consiste en el conjunto de *condiciones* de mi existencia, de mi individualidad humana, ó mejor dicho, mi derecho comprende *el conjunto de condiciones internas y externas, dependientes de la libertad humana y necesarias para el cumplimiento de mi destino racional.*» Tiberghien - *Generación de los conocimientos,* Tomo IV, pág. 262.--Trad. de Salmeron y Serrano.

Esta concepción del derecho, aceptada después por Ahrens con ligeras variantes, adolece del vicio de la de Kant, aunque inspirada en un más amplio sentido, salvó el exclusivismo de aquella, haciendo extensivo el derecho á todos los fines humanos.

Autores hay que, para formar el concepto del derecho, principian distinguiéndole en *subjetivo y objetivo;* procedimiento en nuestra opinión poco lógico, porque tal distinción, antes de definir el derecho, es presentar dos aspectos parciales de la idea, dos modos de ser del objeto por ella representado, ó si se quiere, dos relaciones distintas en que puede considerarse el derecho; pero no el derecho mismo. Y esta falta de lógica ha trascendido después á las definiciones del derecho bajo aquellos dos aspectos. Así, al definir subjetivamente el derecho como «un poder de la voluntad reconocido y protegido por el Estado, poder que nos confiere la facultad de ejecutar ciertos actos ó de exigir que otras personas hagan ú omitan alguna cosa en nuestro interés» (Namur, *Encyclopedie du droit)*, ó como «poder con que el hombre está irrefragablemente facultado para dictar su voluntad á los demás» (Taparelli, *Derecho Natural)*, parece desconocerse que tal facultad, poder ó potestad existen para el hombre porque hay anteriormente un principio superior, el derecho, de donde aquellas emanan, y que es por lo mismo su origen. El derecho propiamente dicho y la facultad ó poder que engendra se diferencian como el principio y la consecuencia, como la causa y el efecto, aunque los unos impliquen á los otros. Por análoga razón se ha incurrido también en error al considerar objetivamente el derecho, ya como «el conjunto de reglas á las que los miembros de un Estado pueden ser constreñidos á conformar sus actos externos» (Namur), ya como «la voluntad imperativa de Dios que manda conservar la proporción en las relaciones esenciales á la sociedad humana.» (Prisco). En el primer caso; ó se atribuye el carácter de *racionalmente* justas á todas las disposiciones del poder, suponiendo que la ley y por consiguiente la voluntad es la causa del derecho, cosa opuesta al común sentir que siempre ha juzgado buenas ó malas las leyes, según expresaran ó nó el derecho; ó se deja sin determinar lo constitutivo de este, porque si las *reglas* á que la definición alude no significan las disposiciones del poder supremo ó legislativo, como no se fija ni precisa el alcance de aquel término, la definición es vaga. En la segunda acepción expuesta del derecho objetivo vuelve á confundirse la causa («voluntad imperativa de Dios») con el efecto (regla ó acto producido por esta facultad de mandar propia de Dios.) Por otra parte, en este último sentido, difícil será conocer donde está ni que es el derecho, cuando se discuta entre los hombres.

II—CAUSA, RAZÓN ORIGEN Y CARACTERES DEL DERECHO

Llamamos *causa* de una cosa á aquello *que la produce:* entendemos por *razón* aquello *que la hace necesaria ó conveniente;* y decimos que es su *origen* aquello *donde por primera vez se manifiesta su existencia* ó donde nace (1).

Fijadas estas nociones que consideramos útiles para evitar ambigüedades pasamos á determinar la causa, la razón y el origen del derecho.

Sentado que es derecho toda norma ó regla que exige la prestación ó el respeto de una condición ó un medio de vida ó de perfeccionamiento, fácil será demostrar que la causa del derecho es Dios.

En efecto; Dios al crear al hombre quiso hacer dependiente la realización del bien humano de ciertas condiciones, de las cuales hallaría algunas, las más indispensables, realizadas por obra de su Providencia, mientras que otras debería el hombre procurárselas por su propio esfuerzo, por el ejercicio de su actividad. Hechas así por la voluntad divina necesarias estas condiciones para la consecución del fin humano, habían de ser por lo mismo regla de la libertad, norma de conducta; ya prescribiendo su

---

(1) Toda ciencia, según Aristóteles, se resuelve en definitiva en la ciencia de los principios, que son cuatro: la *materia,* la *forma,* la *causa motriz ó eficiente* y la *causa final.* A estos principios corresponden: 1° la *causa material;* aquella *ex qua, in qua, circa* quam effectus producitur; por ej., la materia *de que* se hace una estátua; *en la que* es recibida la forma y *sobre la que* obra el artista: 2° la *causa formal,* aquella por la que algo se constituye en una determinada especie, como en el hombre el alma racional por la que el cuerpo se constituye en *viviente,* ó la figura que constituye el mármol en *estátua:* 3ª la *causa eficiente* ó principio activo que con su acción hace pasar á algún ser del estado de simple posibilidad al de existencia actual: «principium extrinsecum a quo primum fluit motus, seu rei productio, mediante actione»: 4° la *causa final,* aquella por la que se hace algo ó el motivo de obrar.

Tambien se acostumbra mencionar la *causa ejemplar,* tipo ó modelo que se trata de imitar, ya exista en la mente del artista, ó en la naturaleza real.

La causa final, el fin ó propósito de las causas eficientes, ha sido también llamada *razón de ser* ó *razón suficiente.*

De entre todas estas especies de causas, bien se ve que la verdadera causa lo es sólo la eficiente, y que á ella aludimos en el texto.

cumplimiento al indivíduo á quién directamente habían de aprovechar las que de su voluntad dependieran, ya exigiendo de los demás respeto las más veces á estas condiciones, y cooperación en algunos casos á la adquisición de aquellos otros medios ó condiciones que no pudiera proporcionarse sin el auxilio de sus semejantes. Dios, pués, haciendo al hombre un ser condicionado, relativo, y queriendo que se respeten por la voluntad racional las condiciones bajo las que ha de realizarse el fin humano, ha establecido la norma ó regla del obrar á que llamamos derecho, y es por lo tanto su causa.

La razón de ser del derecho es la imperfección del hombre, la limitación de sus facultades juntamente con la necesidad de que realice un fin. Como este fin ha de depender de ciertas condiciones, preciso es que el hombre busque las que le faltan, y por esto tales condiciones ó medios aparecen ante la conciencia de cada indivíduo como norte, guía ó regla de actividad; y como los demás hombres han de ver la necesidad de aquellos medios, su razón se los presenta como respetables, esto és, aparecen también ante ellos como regla de conducta, ya prohibiéndoles que los menoscaben, ya preceptuándoles que coadyuven con ellos á un fin. Por ser el hombre imperfecto y por tener que cumplir libremente su fin es necesario el derecho.

Esta razón del derecho equivale á lo que otros llaman su principio fundamental, que consiste en "la necesidad moral que tiene de cumplir un deber ó una obligación el hombre mismo que trata de ejercitar sus derechos.„

Confundiendo algunos el origen del derecho con su causa creen que su origen es Dios, porque Dios, autor del hombre y de la naturaleza, lo es también de las condiciones mediante las que el hombre ha de perfeccionarse y la naturaleza toda ha de realizar su fin.

Nosotros, según la acepción en que usamos la palabra origen, creemos que el del derecho está en la sociedad ó, mejor aún, en la coexistencia de seres humanos. Si el hombre viviera aislado, de nadie podría exigir que le ayudase en unos casos y respetase en otros el ejercicio de sus facultades, la adquisición de los medios, la posesión de las condiciones para conseguir su bién; pero viviendo entre seres racionales y libres, estos por su libertad pueden ejecutar actos que le acerquen ó le alejen de aquel bién, y en tal concepto, al coexistir con otros, los medios de cada hombre aparecen como derechos para él y como obliga-

ciones para los demás, y por esto decimos que en la sociedad tiene su origen el derecho, aunque su causa sea Dios.

De lo dicho hasta aquí se infiere cuales sean los caracteres del derecho.

Es el primero su *independencia* de la voluntad humana, ya se le considere como norma ó principio regulador, ya se estime como condicionalidad para ciertos fines, ya sea facultad ó poder propio del hombre. Si lo primero, la regla de la voluntad es necesariamente obra de Dios, único ser superior al hombre y que puede prescribirle reglas: si lo segundo, también es obra del Criador, puesto que siendo el único ordenador del universo y quién ha establecido la jerarquía y dependencia entre los seres y la relación entre los fines y los medios, él solo ha podido determinar que cosas sean condición para la existencia ó para el cumplimiento del fin de otros: si, por último, se llama derecho á la facultad ó poder inherente al hombre para reclamar el concurso ó ayuda de los demás, como este poder proviene de la regla dictada por Dios y de la condicionalidad que él ha establecido, será también obra de Dios y, por lo mismo, independiente del hombre.

El segundo carácter del derecho es su *necesidad,* porque, siendo el hombre libre, puede ó no querer y obrar cooperando ú oponiéndose á los fines de los demás, alterando ó coadyuvando al orden de la creación; y si el derecho ó la regla jurídica no existiera, daríase el absurdo de que el hombre fuera irresponsable contrariando los designios de Dios, ó de que la Providencia dejara de serlo queriendo el orden y la armonía y no imponiéndolos al hombre como obligatorios. Lo mismo se ve la necesidad del derecho considerado como medio ó condición, puesto que sin los medios es imposible conseguir los fines; y aparece también necesario como facultad ó poder, porque el obrar le presupone: no hay acto sin facultad que le cause, ni hecho sin poder que le produzca.

El derecho es también *inmaterial.* Ni como regla es percibida por los sentidos; ni como medio existe en el espacio, puesto que intrínsecamente sólo es una relación; ni como facultad tiene los caracteres de la materia, cosa tan clara que aun las mismas fuerzas físicas son realmente cosas inmateriales.

Otro carácter del derecho es el poder ser exigido por *coacción,* esto es, compeliendo por medio de la fuerza física ó moral al jurídicamente obligado para que respete ó preste las condiciones que debe prestar ó respetar, y aunque esta fuerza no haya

de emplearse en todo caso, sino cuando los actos del obligado sean contrarios al derecho, la consideramos característica de este en cuanto que sin ella "no podría ejercitar su imperio en las relaciones externas de los hombres„ y vendría la ley jurídica á confundirse, en sus efectos, con la ley moral. Sin que valga objetar que hay prestaciones que no pueden ser exigidas por la fuerza, y que hay obligaciones que, originadas por la costumbre, no caen bajo la sanción material propia sólo de las leyes; pues en cuanto á las primeras, la voluntad puede ser compelida siquiera indirectamente á ejecutar los actos en que aquellas prestaciones consisten, y respecto á las segundas, las costumbres jurídicas aceptadas implícitamente por el Estado vienen á equipararse á las leyes en su fuerza coactiva.

III—SUJETO Y OBJETO DEL DERECHO

El derecho existe siempre para un *sujeto,* ya se considere como *facultad,* ya como *restricción* en el obrar, ó como *regla.*

El sujeto del derecho no es ni puede ser otro que el hombre, si se acepta la definición que de derecho hemos dado. Expresando condiciones, sólo puede servir para seres condicionados, relativos y de ningún modo para el ser absoluto, Dios. Dios no necesita condiciones ni medios para ser perfecto en grado sumo; Dios por consiguiente no es sujeto de derechos. De aquí que cuando decimos "Dios tiene derecho á nuestra sumisión y respeto„ hablamos impropiamente, porque nuestra sumisión y respeto no son condiciones para que él realice el fin que le plugo fijarse en su inmensa sabiduría desde el principio de los siglos. Esta sumisión y respeto son, por el contrario, condiciones para que nuestro fin se cumpla, y en tal concepto tenemos perfecto derecho á que no se nos retraiga de obedecerle, á que no se nos excite á rebelarnos contra él; y quién á esta rebelión nos induce, faltando á su deber para con Dios, falta á los deberes para con sus semejantes y conculca el derecho. Si Dios nos ha impuesto deberes, si nosotros estamos obligados á cumplirlos, es porque somos sus criaturas, porque tiene *poder, potestad* sobre nosotros, no *derechos* que para nada los necesita, en la acepción que hemos dado á esta palabra.

Además, el derecho es regla; la regla solo puede dictarse por un ser superior ó que así aparece al dictarla, y no habiendo ser superior á Dios, ni puede obligarle ninguna regla, ni tampoco recibir por virtud de ella facultad ó poder alguno que él no tenga.

Si Dios, hablando con propiedad, ni es ni puede ser sujeto de derechos, tampoco pueden serlo las criaturas, con las que el hombre está en contacto y relación más inmediata. Así, pues, se comete una inexactitud cuando se dice, por ejemplo, "que los animales tienen derecho á que no se les maltrate sin razón.„ Hablar de esta manera respecto á los irracionales es pretender colocarlos en una situación más ventajosa, en un rango más elevado que á los mismos semejantes nuestros; porque no habiendo, como no puede haber, reciprocidad de prestaciones y servicios, de derechos y deberes, entre los seres libres y los no libres, pretender que estos tengan derechos respecto á aquellos, siendo, como no libres, incapaces de deberes, es hacer mejor su condición. No es esto decir que el hombre tenga realmente derecho para abusar de sus cosas; pero esto es porque el abuso, lejos de ser nunca condición de vida ó de progreso, se opone á este; y aun podríamos añadir que quien comete tal abuso conculca el derecho de la sociedad, que podría utilizar aquellas cosas, ó cuando menos puede exigir, como un derecho, que no se le dé mal ejemplo, satisfaciendo públicamente malos instintos y oponiéndose de este modo á la cultura estética y moral.

Autores hay que afirman que todos los seres tienen derechos, porque todos son limitados, y aunque implícitamente reconocen lo erroneo de su opinión al confesar que hay seres, los inanimados, impotentes para conocer ni reclamar sus derechos, todavía pretenden cohonestarla diciendo que Dios se encarga de la realización del derecho de tales seres por medio de las fuerzas naturales. Otros pretenden que hay seres de propio fin y por tanto de *pretensión,* por ejemplo, la Naturaleza, que son sujeto de derecho; pero, analizando sus razonamientos, se nota fácilmente lo fútil de tal doctrina por las contradicciones que engendra. Así dicen: "1° que debemos abstenernos de causar, *sin superior objeto,* mal á los seres naturales;„ y si esto implica que puede causarles mal con un objeto ó fin superior, claro está que con relación á este aparecen como simples medios, y no es fácil comprender que puedan tener fin propio: "2° que todo ser es sujeto de derecho como *pretensor;* pero.... la extensión y plenitud de la capacidad de derecho no está, como suele creerse, en ra-

zón directa de las pretensiones, sino antes bién de las obligaciones;„ pues, admitido esto, un ser incapaz de obligaciones, será también incapaz de derechos, ó no están en razón directa estos de aquellas: "3° en tanto que las personas indeterminadas llegan á ser determinadas, realizándose la relación jurídica, debe esta considerarse en suspenso, *sin apelar á las ficciones de suponer á los objetos naturales* sujetos de pretensión jurídica;.....„ pues si, conforme á esta doctrina, los objetos naturales son sujeto de pretensión sólo en virtud de una ficción, no serán *realmente* sujetos de derecho.

La verdad se impone al cabo á pesar de todas las elucubraciones, y de aquí estas felices inconsecuencias.

Quede, pues, sentado que únicamente el ser humano puede ser sujeto de derechos, como él solo es susceptible de los deberes á aquellos *correlativos*.

El hombre como ser consciente, esto es, porque tiene conciencia de sí mismo y de su fin, es una persona, y como ser poseedor de derechos, se llama *persona de derecho*. Esta verdad, que el cristianismo reveló al mundo, ha influido más que otra alguna en la desaparición de la esclavitud y de las leyes que hacían del hombre un simple medio, colocándole al nivel de las cosas materiales.

El sujeto del derecho ó la persona puede ser *física* ó *moral*. Esta última recibe por excelencia en la ciencia del derecho el nombre de persona *jurídica*; pero es á la vez persona moral, porque se propone un fin lícito y jurídico y porque le prosigue según derecho y con su ayuda. La razón de ser de las personas morales ó jurídicas está en la necesidad de crear sujetos ideales para realizar fines humanos, que no pueden realizarse de ordinario en la vida de un solo hombre ó persona física. Apareciendo de este modo la persona jurídica como la personificación de un fin más ó menos duradero, no debiera, en rigor, haber más que una sola clase de personas jurídicas; más pudiendo ser varios los fines peculiares de esta clase de personas y diversos además los medios que empleen aun para obtener el mismo fin, la distincion de estos fines y medios ha dado origen á especies diversas de personas jurídicas, como la Iglesia que prosigue el fin religioso, el Estado que prosigue el fin jurídico, las academias, ateneos, conservatorios, que prosiguen el fin científico y artístico y otros análogos.

Estas mismas personas jurídicas, aun proponiéndose fines análogos, pueden distinguirse por el grado ó jerarquía social que

representan, como sucede en la familia, el municipio, la provincia, la nación.

También pueden distinguirse estas personas por el *modo* de realizar el fin y por las *relaciones* diferentes en que pueden hallarse los miembros que constituyen la persona ideal jurídica con esta misma persona. Bajo este aspecto pueden distinguirse tres especies de relaciones: 1ª Cuando la persona jurídica está investida de todos los derechos y los indivíduos que la constituyen sólo tienen deberes, aunque, como es natural, reporten alguna ventaja de la existencia de la persona ideal: 2ª Cuando todos los derechos están de parte de los indivíduos y la persona jurídica aparece como un simple mandatario: 3ª Cuando la persona jurídica ejerce los derechos; pero con el concurso de los miembros y para su utilidad, como sucede con las verdaderas sociedades orgánicas, en que la persona jurídica se halla representada por un órgano central.

La importancia de la distinción que acabamos de hacer, más que teórica, puede considerarse práctica, pues conociendo la misión especial de cada clase de personas y los derechos que á cada una corresponden, según su naturaleza, serán estos más fácilmente respetados, y no habrá lugar á la absorción de unas personalidades por otras.

En cuanto al *objeto* ó *materia* del derecho es, según Ahrens, "todo lo que puede estar sometido al poder ó á la disposición de una persona como medio para un fin racional.„

Aceptada esta noción, surge desde luego el problema de si los seres racionales ó las personas pueden ser objeto de derecho, y aunque esta cuestión esté ya resuelta negativamente para las sociedades modernas y la solución teórica marche en este punto de acuerdo con la práctica, según el común sentir de los pensadores, con todo, hay algunos que se deciden por la afirmativa, pretendiendo cohonestar ante la razón la esclavitud ó por lo menos la servidumbre de las personas y aduciendo razonamientos cuya solidéz es conveniente examinar.

Tres son los principales: 1° Que el hombre puede vender á otro hombre todas sus acciones que no pugnen con el deber de conservarse y perfeccionarse, porque el vender lo que es suyo es un acto lícito y útil para quién lo realiza: 2° Que el hombre puede comprometerse á servir á otro por tiempo limitado y lo mismo por tiempo ilimitado, y aun por toda su vida en todo lo no prohibido por un superior legítimo, porque las acciones del hombre son suyas en todos los tiempos y no hay razón para dis-

tinguir entre unas y otras: 3º Que pudiendo ser lícito en ciertos casos condenar á muerte á los prisioneros de guerra que han invadido injustamente un territorio, con más razón lo será reducirlos á esclavitud poniéndolos bajo el dominio del Estado.

Tales argumentos, aun admitiendo la distinción que hacen sus autores entre la esclavitud antigua y la especie de servidumbre que defienden y reconociendo su buena fé cuando afirman que nunca hay derecho sobre la vida y salud del esclavo, tienen poquísima fuerza. No es cierto que el hombre pueda vender sus acciones: el hombre no puede privarse de su propia iniciativa, ni enagenar aquello que le es intrínseco, subordinando por completo, con eficacia jurídica, su libertad á la voluntad ajena: podrá sí obligarse á ejecutar ciertos y determinados actos; pero no todos los actos que otro hombre le exigiere, ni aun previo contrato mutuo, porque tal convenio, si llegara á celebrarse, produciría á lo sumo deber moral, nunca jurídico, y la prueba de esto es, que, si el obligado á ejecutar un acto en servicio de otra persona, no quisiera realizarlo, la fuerza coactiva del derecho no se extendería á más que á exigirle una indemnización en favor del perjudicado por su omisión. Ahora bién, como el perjuicio sólo podría ser estimado en el caso de que la obligación contraida se refiriese á actos determinados y concretos, es claro que la indemnización jamás comprendería todas las acciones posibles, ni aun dentro de cierta esfera, y que la obligación sería jurídicamente ineficaz; luego el hombre no puede, voluntariamente constituirse en servidumbre ó hacerse objeto de derecho. Además; nadie tiene derecho á pisotear su propia dignidad obligándose á servir de juguete á los caprichos ajenos y renunciando á su libertad: esta libertad fué dada por Dios al hombre como una facultad esencial; no puede privarse de ella; es un derecho inalienable, como lo son la vida, el uso de la inteligencia, todo lo que recibió de Dios y le es necesario para realizar su fin último y su fin actual ó su mejora y perfeccionamiento progresivo. Por último; aun siendo indiscutible el derecho de matar el enemigo en la guerra, el de matar á los prisioneros sólo podría admitirse cuando su vida fuera un peligro verdadero é inminente para la conservación propia, y como este derecho sobre la vida de los prisioneros sería siempre momentáneo, no puede deducirse de él, en buena lógica, que sea lícito someterles á esclavitud ó servidumbre perpetua.

El hombre ó la persona racional no es, pués, objeto de derecho. Esto no obsta para que los hombres puedan prestarse li-

bremente servicios mutuos; en cuyo caso estos servicios ó prestaciones pueden ser materia de derecho, sin que por ello se menoscabe la dignidad de las personas.

La materia del derecho se divide en *cosas de la naturaleza* y *actos,* hechos ó servicios del hombre.

Llamamos jurídicamente *cosa* á todo lo que se manifiesta en el espacio, aunque no sea cuerpo, *con tal que pueda servir para algo y tenga algún valor de uso y cambio.* Las servidumbres de luz y de tránsito, por ejemplo, no son cuerpos y, sin embargo, son cosas para el derecho, porque reportan utilidad y son apreciables y cambiables.

Es *acto* de derecho *toda acción humana que se manifiesta al exterior;* porque los actos que se consuman en la conciencia sólo son útiles ó perjudiciales para su autor. Inútil parece advertir que el acto humano para ser jurídico, para ser acción, ha de ser libre, porque los actos espontáneos y los instintivos, como no se producen por la voluntad, no son susceptibles de regla, ni de moral, ni de derecho.

Los actos jurídicos se dividen en actos de *comisión,* que consisten en obrar, y de *abstención,* que consisten en no hacer; porque no solo se contribuye directamente á la consecución del bién del hombre, cuando se le ayuda, sino también indirectamente cuando no se le suscitan obstáculos.

Por su relación con el derecho se dividen los actos en justos ó *lícitos* é injustos ó *ilícitos*, según que al derecho se conforman ó *ajustan* ó que se separan de él. Los injustos pueden serlo con intención, por *dolo*, ó sin intencion, por mera negligencia, falta ó *culpa.*

Los actos que constituyen la materia del derecho pueden decir relación lo mismo al fin religioso, científico y artístico, que al industrial y á los bienes materiales. Estos últimos son realmente los más importantes en el derecho privado; mas no por esto debe creerse que los demás son exclusivamente del dominio de la moral. La educación que los padres deben á sus hijos, la obediencia de estos, la fidelidad de los cónyujes y otros análogos son susceptibles de arreglo jurídico, como indicamos en otra parte, porque son condiciones y medios para fines racionales, por más que en ellos prevalezca y resalte en primer término su carácter moral.

IV—RELACIONES Y DIFERENCIAS ENTRE LA MORAL Y EL DERECHO

La facilidad con que los gobiernos pueden traspasar la esfera de sus atribuciones, pretendiendo regular actos que no son de su competencia, da á esta cuestión, ya importante de suyo en cualquiera otra rama del derecho, trascendencia suma en el político.

Tres puntos de vista deben tenerse en cuenta para fijar con exactitud las relaciones entre la moral y el derecho y las diferencias que los separan: 1° Lo que hay de *común* entre ellos: 2° Lo que los *distingue*; y 3° Su mutua y recíproca *influencia*.

Su principal semejanza, su aspecto común, es que ambos se refieren á la voluntad, porque una y otro se proponen el bien como fin é indican los medios que á él conducen.

Bien en general es todo lo conforme ó adecuado para realizar el destino de los seres según la naturaleza de cada uno; y, bajo un punto de vista más absoluto, se llama bien á la misma realización de aquel destino. Cuando este bien se considera en relación con la voluntad ó con sus actos, se impone á ella como precepto, de manera, que el hombre debe siempre procurar el bien, ejecutando actos buenos. El bien puede considerarse; ó *en sí mismo,* por lo que realmente le constituye, esto es, como acto humano que refleja su conformidad con las leyes que rigen las cosas; ó bajo el aspecto de la *forma* ó modo de manifestarse el acto humano.

Bajo este último aspecto se puede atender, ya á la *intención* del agente, ya á los *efectos* que produce el acto; y de estos dos modos de considerar el bien por su forma surge la diversa denominación que al acto se aplica, ya como *moral,* ya como *jurídico,* según que en él se estudien los *motivos* ó *móviles* de la voluntad que lo ejecutó, ó las *condiciones* ó *medios* que produjo ó destruyó. Pero, como en todo acto jurídico es necesario suponer también libertad y por lo mismo intención por parte del agente, pues de otro modo tales actos no serían regulables, es obvio que todo acto de derecho es á la vez bueno ó malo, conforme ó contrario á los preceptos de la moral; sin que obste á la unidad del acto humano su consideración en dos distintos momentos para poderle apreciar.

No obstante semejanza tan capital entre la moral y el dere-

cho, hay sin embargo entre uno y otro profundas diferencias, derivadas del carácter peculiar por el que los actos humanos se refieren á uno de los órdenes.

1ª Todos los preceptos morales son *absolutos*, *invariables*, como emanados de un legislador perfectísimo, que ha previsto y establecido las inmutables relaciones que ha de sostener siempre con el hombre por medio de la ley moral.

Los preceptos del derecho son *relativos*, *variables* en su mayor parte, como referentes á las relaciones entre los hombres, que cambian con los tiempos y lugares, pues lo mismo que hoy es *condición* y puede servir de medio para un fin determinado, puede ser mañana rémora ú obstáculo para conseguirle.

2ª El único juez de la moralidad es Dios, porque él únicamente puede conocer y apreciar con exactitud los móviles de la voluntad al determinarse y la relación entre los actos y la ley moral; sin que esto sea negar que el hombre tenga un medio aunque falible, la conciencia, para conocer la moralidad de sus propias acciones.

Los actos jurídicos, como trascienden al exterior, pueden ser prescritos y apreciados por la autoridad social al efecto establecida.

3ª El derecho ha de estar necesariamente subordinado á la moral, porque los preceptos morales tienden al fin último del hombre, á la consecución del *bien supremo;* y los preceptos jurídicos tienden á la realización de los fines actuales, de los *bienes medios*, necesariamente subordinados á aquel.

4ª Los actos morales no son *exigibles* por la fuerza, porque ésta no alcanza hasta las voliciones; mientras que los jurídicos pueden exigirse por este medio y son por lo mismo *coercibles*.

Otras diferencias más superficiales, y algunas de ellas inexactas, suelen enumerarse, por ejemplo: que la moral se refiere al individuo y el derecho á la sociedad, como si los preceptos morales que prescriben el respeto á la vida, á la honra, á la propiedad ajena, la obediencia á las autoridades constituidas, la benevolencia, el mutuo auxilio, etc., no trascendieran á la sociedad: que la moral dice relación á la vida del espíritu, y el derecho al cuerpo y al espíritu juntamente: que el derecho tiene su razón de ser en la imperfección, etc., etc.

En cuanto á la extensión de la moral y del derecho, puede formularse esta regla: Todo lo que el derecho manda ó prohibe, lo manda ó prohibe la moral: pero no todo lo que la moral manda ó prohibe, lo manda ó prohibe el derecho.

Algunos, interpretando mal la extensión de uno y otra, dicen que el derecho permite algunas veces lo que la moral prohibe, como si las acciones realmente malas pudieran estar sancionadas alguna vez por el derecho. Lo que hay es que el derecho *deja hacer* muchas veces, aunque no lo apruebe, lo que no puede impedir, porque su esfera de acción se limita á las relaciones entre los hombres, y nunca puede regular aquellos actos que sólo tienen trascendencia individual para su autor.

Respecto á la mutua influencia del derecho y de la moral, se comprende que lejos de haber oposición entre ellos se auxílien mutuamente, pues aunque sus dominios son distintos, ambos concurren al mismo objeto, al perfeccionamiento del hombre y de la sociedad; por lo que las leyes políticas y civiles deben marchar siempre de acuerdo con la moral, procurando además que la cultura moral se desarrolle en la sociedad, no sólo porque el bién es fin de toda persona individual ó colectiva, sino también porque el respeto á las leyes morales hace á los hombres más dispuestos para el cumplimiento de las jurídicas, hasta el punto de que, si aquellas fueran acatadas por todos, serían éstas realmente innecesarias para el régimen del Estado.

La armonía entre los preceptos jurídicos y los morales es, además, doctrina corriente entre los tratadistas. Todos convienen en que los principios, *alterum non lædere* (respetar la personalidad y la actividad agena) y *jus suum cuique tribuere* (ayudar á los demás en lo necesario, según la naturaleza, y darle lo que es suyo), son comunes á la moral y al derecho; y si el *honeste vivere* (ejercitar las propias facultades ó usar los propios medios rectamente ó en relación con el fin último) es peculiar de la moral, no por eso es menos cierto que aquellos dos principios comunes han de traducirse en leyes esencialmente iguales, aunque para los fines morales baste quererlas, ó el acto de pura voluntad, y los fines jurídicos exijan además el acto externo; pero siempre determinado por la resolución interior. Y no se opone á esto que en algunas obligaciones jurídicas no aparezca directamente la voluntad del obligado en virtud de un acto, por ejemplo, en la indemnización debida por el padre ó el tutor del menor que causa un daño, pues si bién se analiza, esta responsabilidad subsidiaria de los padres y tutores, tiene su fundamento en la omisión voluntaria de la vigilancia que debieran ejercer sobre los actos del menor sujeto á su cuidado, ó en cierta especie de comunidad en los bienes familiares.

V—DE LA CIENCIA DEL DERECHO

Siendo la ciencia en general una serie de verdades enlazadas entre sí y subordinadas á uno ó más principios generales ó, lo que es lo mismo, "un conjunto sistemático de conocimientos verdaderos y ciertos„ es posible una ciencia del derecho, porque los conocimientos á él relativos pueden reunir las necesarias condiciones para ser científicos y organizarse en sistema.

Los caracteres del conocimiento científico son la *verdad* y la *certeza*. La verdad es una relación de conformidad entre la inteligencia y su objeto, la ecuación entre la realidad objetiva y su representación en la mente: la certeza es un estado de nuestro espíritu, la tranquilidad del mismo producida por la seguridad de que nuestros conocimientos son verdaderos, porque tenemos conciencia de su verdad. Ahora bién, nada se opone á que nuestros pensamientos respecto al derecho correspondan á la realidad de este, á lo que es en sí; y no es tampoco absurdo suponer que podamos adquirir certeza de su verdad, ya porque esta sea evidente de suyo, ya porque la evidenciemos mediante demostración: luego la ciencia del derecho no es imposible por falta de la materia ó fondo de la misma.

Que los conocimientos relativos al derecho pueden organizarse sistemáticamente y constituir una ciencia, fácil será demostrarlo.

Las condiciones del sistema son tres: *unidad, variedad* y *armonía*. La unidad en los conocimientos jurídicos se ve claramente; ya porque todos ellos se refieren á un solo objeto, que es el derecho; ya porque todos los objetos particulares de estos conocimientos, las reglas ó preceptos jurídicos, puedan reducirse, como hemos dicho en otro lugar, á un solo y único principio. No es tampoco difícil hallar la variedad de estos conocimientos, porque tantas cuantas sean las condiciones ó medios para fines racionales, otras tantas serán las reglas para su respeto ó prestación, y otros tantos los conocimientos que de estas puedan tenerse. Y en cuanto á la armonía, si esta expresa la variedad en la unidad, todas las verdades particulares que forman la materia científica están virtualmente contenidas en la verdad primera y más fundamental, en el principio del derecho: todas son distintas de las

demás y todas se relacionan entre sí por referirse á un mismo objeto y tener un mismo fundamento.

Demostrado que los conocimientos jurídicos pueden ser materia científica y organizarse en sistema, podremos ya definir la ciencia del derecho: *conjunto sistemático de conocimientos verdaderos y ciertos relativos á las condiciones y medios regulables y exigibles entre los hombres para la realización de su destino.*

Como estas condiciones y medios son muchos y variados, el estudio de los mismos sería tarea muy ardua y acaso imposible para la generalidad de los hombres, si no se hicieran de ellos grupos más ó menos importantes por las relaciones, semejanzas y diferencias que entre ellos se descubran y según los aspectos diversos bajo que puedan ser considerados. Estas agrupaciones, indispensables por la limitación de la humana inteligencia y la necesidad de fijar la atención separadamente en cada parte, cuando se aplica al conocimiento de un objeto complejo, constituyen los diferentes ramos de la ciencia del derecho, de los que enumeramos los principales.

La primera división de esta ciencia corresponde necesariamente á la división primordial de toda ciencia. Esta se divide, por su objeto, en *Filosofía* ó ciencia de los principios, de lo universal, permanente ó inmutable; *Historia* ó ciencia de los hechos, de lo particular, accidental y variable, y *Filosófico-Histórica* que estudia lo universal en lo particular, lo inmutable en lo variable, lo racional en lo sensible, la idea en los hechos, y examina, discute y juzga estos á la lúz de los principios é induce las leyes que han presidido á su formación. De la misma manera, la ciencia de nuestro estudio podrá ser: Filosofía del Derecho, ó de las leyes jurídicas derivadas inmediatamente de la naturaleza, y constantes é inmutables como esta; Historia del Derecho, ó de los hechos y preceptos jurídicos que, emanados de la voluntad humana en forma de leyes ó de costumbres, son como ella variables, y ciencia Filosófico-Histórica del Derecho, ó exámen, relación y juicio, según la idea y los principios, de las leyes y hechos jurídicos producidos por el hombre.

Otra división de la ciencia del derecho es la fundada en la distinción de la *materia* y de la *forma* con que todo objeto inteligible se presenta á nuestra mente.

Bajo el punto de vista de la *materia*, las condiciones y reglas que constituyen el derecho, pueden estudiarse teniendo en cuenta; ya los *fines* humanos particulares que con ellos pueden

obtenerse; ya la *naturaleza* de los objetos en que consisten las condiciones y medios jurídicos; ya la naturaleza de las *personas* que deben realizar aquellos fines.

Según los fines, puede estudiarse esta ciencia como derecho para la *Religión,* para la *Ciencia,* para las *Artes,* para la *Industria,* para el *Comercio* y aun para el *Derecho* mismo.

Según la naturaleza de los objetos en que consisten las condiciones jurídicas, puede estudiarse el derecho con relación á las *cosas de la naturaleza física* y con relación á las *acciones humanas.*

Según las personas que deben realizar fines generales ó particulares, puede estudiarse con relación á las personas individuales y á las colectivas, como derecho del *individuo,* de la *familia,* del *municipio,* de la *provincia,* del *estado,* de la *humanidad.*

Esta división, aunque racional y propuesta por algunos filósofos juristas, no ha tenido gran éxito hasta la fecha, sobre todo en España, como lo prueba la escasez de obras arregladas á este plan.

Más generalizada es la división de la ciencia del derecho en *político ó constitucional, administrativo, civil, mercantil, penal, procesal, canónico, nacional ó interior é internacional ó exterior;* cuya división, aunque no muy lógica, porque alguno de sus miembros puede fácilmente referirse á otros, debe con todo exponerse como tradicional, por decirlo así, y adoptada oficialmente.

Bajo el punto de vista de la *forma* se ha dividido el derecho en *público,* en que aparece la sociedad como sujeto predominante y la acción social como objetivo directo de los preceptos jurídicos, y *privado,* en que el indivíduo y su acción resaltan de un modo más especial.

PRIMERA PARTE

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE DERECHO POLÍTICO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE DERECHO POLÍTICO

SECCIÓN PRIMERA

DEL DERECHO POLÍTICO Y DEL ESTADO EN GENERAL

CAPÍTULO PRIMERO

IDEA GENERAL DEL DERECHO POLÍTICO

I—DEFINICIÓN DEL DERECHO POLÍTICO

Antes de definir el derecho político, parécenos conveniente advertir que hemos adoptado esta denominación para la rama del derecho que es objeto de nuestro estudio, con preferencia á la de público constitucional, empleada por Rossi, Benjamín Constant y otros autores, porque, si bien es cierto que esta última denominación es más propia en cuanto su etimología refleja el carácter de los preceptos que son su contenido, puesto que á la constitución ó modo de constituirse un Estado se refieren; con todo, la que venimos usando, á más de ser la sancionada por el lenguaje oficial en la organización de la facultad de derecho, es

también la más común y tiene la ventaja de no inducir al error de confundir, como pudiera suceder, este derecho con un derecho peculiar de los pueblos organizados conforme al sistema representativo, al que también suele llamarse, aunque impropiamente, constitucional.

Macarell entiende por derecho político "el derecho de la naturaleza aplicado á la organización particular é interior de cada sociedad civil„ y llama ciencia del derecho político á "la reunión de principios que rigen esta organización.„

Esta definición no nos parece aceptable, porque, si bien es cierto que todo derecho debe fundarse en la naturaleza, no todos los derechos están consignados en fórmulas ó leyes naturales; antes por el contrario, el derecho natural sólo expresa las relaciones más generales, que son las menos, estando el hombre encargado de expresar por fórmulas, á que se ha llamado *leyes positivas*, las relaciones jurídicas particulares, que son las más.

Foucart llama político "á la rama del derecho público que dice relación al gobierno de la sociedad.„

Hay en esta definición alguna inexactitud al asignar como único fin del derecho político el gobierno de la sociedad, siendo así que debe más bien establecer las condiciones de una buena organización. Nos parece, además, que no hay completa precisión dejando sin determinar, como lo hace Foucart, la especie de sociedad á cuyo gobierno se refiere el derecho político.

Según Palma, "derecho constitucional es el ordenamiento de la soberanía, ó de los poderes públicos del Estado, y de la libertad de los ciudadanos;„ definición que fácilmente lleva á confundir la esencia del derecho con su fin, y deja este deficiente puesto que el derecho constitucional ó político se estiende á algo más que á regular el ejercicio del poder y de la libertad.

Don Manuel Colmeiro, definiéndole "el conjunto de leyes que ordenan y distribuyen los poderes constitucionales, moderan su acción, señalan su competencia, declaran los derechos y fijan los deberes de los ciudadanos,„ dá á conocer con bastante exactitud la materia peculiar del derecho político; pero puede originar algún error, al decir que el derecho le constituyen las leyes, siendo así que éstas son ó deben ser la fórmula ó expresión de aquel.

Nosotros consideramos el derecho político, ó como *ciencia de las condiciones necesarias ó convenientes en la organización del Estado para que pueda realizar su fin*, ó como *el conjunto de las reglas que corresponden al contenido de esta ciencia.*

En esta definición creemos que se expresa lo fundamental del derecho político y todo lo que en realidad es de su competencia, tanto por lo que hace á la persona, elemento material del Estado, como al poder público, representación de su elemento formal. En efecto; la organización supone elementos ó partes que organizar, y es indudable que los elementos no se organizan destruyéndolos ó alterando su naturaleza, lo que sucedería, si el individuo fuera absorbido por la sociedad ó no respetado en la integridad de su ser; por lo que en la definición debe contenerse todo lo relativo á la consignación y respeto de los derechos naturales, y así aparece, fijándose en el término general *condiciones*. Como por otra parte quién dice organización, dice unión armónica de los elementos para la realización del fin común, la definición debe referirse, ó mejor, comprender todas las condiciones que expresan aquella unión y deben existir en las relaciones públicas de los ciudadanos entre sí y con el poder, como medios de cooperar por derechos ó deberes al fin social. Restan las condiciones mediante las que el poder público ha de realizar su misión, entre las qne aparecen desde luego la legitimidad, la fuerza, la capacidad, etc., todo lo cual se contiene en los términos de la definición. Esta, por último, debe expresar el fin peculiar del derecho político y así se consigue con las palabras *para que pueda realizar su fin.*

De la definición se deduce que las relaciones establecidas por el derecho político son fundamentales, y las leyes, que expresan estas relaciones, han de ser la base de todos los derechos y deberes que se consignen en las demás leyes, así civiles, penales, procesales, etc., como administrativas, puesto que, antes de que el poder principie á obrar, es necesario que exista con una forma y con atribuciones dadas, único medio de saber si sus actos son legítimos ó justos desde su origen.

II—RELACIONES DEL DERECHO POLÍTICO CON OTRAS CIENCIAS

Como el derecho político forma con las otras ramas del derecho el sistema general de las ciencias jurídicas, necesariamente ha de haber entre todas éstas relaciones fundadas en su común naturaleza, así como también diferencias que las constituyan en ciencias especiales. Hé aquí las principales.

Con el derecho *administrativo* sostiene relaciones muy íntimas, porque establece los principios fundamentales que le han de servir de base para que la accion del poder social se ejerza de la manera más adecuada y conveniente á la satisfacción de las necesidades públicas; ó lo que es lo mismo, formula las premisas cuyas consecuencias ha de sacar el derecho administrativo. Se diferencia de él, en que el político es fundamental y el administrativo es en cierto modo adjetivo por presuponer los preceptos de aquel. El derecho político se refiere á la *constitución,* á la *organización,* y el administrativo principalmente á la *actividad* del Estado.

Con el *civil* se relaciona en cuanto el político consigna las condiciones generales de vida y cultura respetables en toda persona y que por lo mismo ha de tener presentes el civil al establecer ó formular los preceptos reguladores de las relaciones mutuas entre los ciudadanos, al mismo tiempo que limita ó modifica en algunos casos ciertos derechos civiles. Se diferencia de él, en que el político considera al hombre bajo el aspecto público, como miembro del Estado, mientras que el civil sólo le considera bajo un aspecto particular y en las relaciones meramente privadas.

Se relaciona con el *penal,* no sólo porque organiza el poder que ha de ejercer la justicia social castigando al delincuente, sino también porque en nombre de los derechos naturales y de la dignidad humana restringe á veces la acción de este poder, aboliendo, por ejemplo, las penas infamantes. Se diferencia de él, en que el político considera al hombre en la integridad de su ser, y el penal, sólo como infractor directo é intencional de la ley.

Se relaciona con el *procesal,* porque éste ha de tener presentes en la organización de los tribunales y en la prescripción de trámites judiciales los preceptos, derechos y garantias consignados en la ley fundamental del Estado y ciertas condiciones que procuren á las personas una administración de justicia recta, expedita y poco dispendiosa. Se diferencia de él, en que el uno establece ó declara condiciones ó derechos, digámoslo así, *sustantivos,* esto es, que se conciben con independencia de otros, mientras que el procesal procura hacer efectivos los derechos mediante ciertas *formalidades* que sólo existen con relación á aquellos, siendo por lo mismo adjetivas.

Las relaciones del derecho político con el *eclesiástico* dependen de las fundamentales que se establezcan entre la Iglesia y el Estado, siendo mayor su influencia mutua á medida que sea mayor la armonía entre ambas sociedades. Se diferencia de él

en que el eclesiástico considera al hombre solamente en relación con el fin religioso.

Finalmente se relaciona con el derecho *internacional* en cuanto que, al constituir y organizar el Estado, parece como que da vida al sujeto de las relaciones jurídicas internacionales. Se diferencia de él por el objeto y la esfera de su acción.

Además de estas relaciones naturales del derecho político con las otras ramas del derecho, sirven de poderosos auxiliares á esta ciencia; la Filosofía, porque le da el conocimiento del hombre en su naturaleza ó en lo esencial de su ser, y la Historia, que, presentándole el cuadro de los hechos sociales, le revela las necesidades, las tendencias, los deseos humanos y hasta los medios de satisfacerlos y realizarlos.

CAPÍTULO II

NOCIÓN FILOSÓFICA DEL ESTADO

I—DE LA SOCIEDAD EN GENERAL

Cualquiera que sea el concepto que haya de servir para formular la definición científica del Estado, ya se le considere como sociedad para un fin particular, ya se entienda por él la organización ó simplemente el poder social (1), es lo cierto que esta idea, siquiera como conocimiento imperfecto, se halla en la mente de todos y que á su formación precede siempre la idea de sociedad; la que por lo mismo puede con razón llamarse su generadora. De aquí que el estudio de la sociedad en general deba preceder al del Estado para fijar sobre bases sólidas la teoría relativa á éste.

Para que haya sociedad es, por de pronto, necesario que haya *seres racionales* y que estos seres no estén aislados, ó que se reunan: pero una reunión material y accidental, ya sea for-

---

(1) Aunque algunos tratadistas llaman también *Estado* á toda persona en cuanto realiza el derecho, entendemos que en una obra de derecho político huelga discutir la exactitud de tal concepto, porque el Estado á que el derecho político se refiere no puede ser otro que el social. Con todo, dudamos que en buena lógica pueda legitimarse aquel concepto, pués el indivíduo jamás declara el derecho, y aun cuando sus actos puedan originar derechos, no surgen estos sólo por su voluntad sino por la virtualidad de otro derecho preexistente é independiente de aquella. El indivíduo, por sí, carece de autoridad bastante para declarar lo que es justo.

Por ser también estraña al derecho político, prescindimos de la noción de *Estado* como conjunto de circunstancias y condiciones que determinan la capacidad ó aptitud jurídica de una persona.

tuita ó buscada, no es por sí sola bastante para la existencia de la sociedad; es pués necesario algo más, es preciso que el sentimiento de la insuficiencia individual para conseguir un objeto dado lleve á los hombres, espontánea ó reflexivamente, á adunar sus esfuerzos, á trabajar en común ó á poner los medios individuales á servicio del bién general que se trata de obtener.

Unión de mentes y voluntades; fin común á todos conocido, y combinación de fuerzas para obtenerle son los caracteres esenciales de toda sociedad reconocidos por la generalidad de los publicistas, aunque no se hallen de acuerdo respecto al origen, naturaleza y modo mejor de constituirse; por lo que, siguiendo á Taparelli, podemos definirla: *unión moral de hombres ó personas para obtener un fin común y racional por medio de esfuerzos ó prestaciones combinadas* (1). De aquí se infiere que la sociedad es por su naturaleza *medio* para conseguir fines humanos; como medio, *necesaria* en todos aquellos casos en que la fuerza aislada no es bastante para el logro de un fin; *obligatoria,* siempre que esta sociedad sea el medio único ó más adecuado para realizar un fin también obligatorio; é históricamente *permanente* y *universal,* efecto de su necesidad en todos tiempos y lugares.

Siendo la sociedad el único medio para la realización de muchos fines humanos, algunos obligatorios, y no habiendo ni pudiendo haber ningún fin humano contrario á la naturaleza, síguese que el fundamento de la sociedad está en la naturaleza misma del hombre, y por lo tanto, en la voluntad de Dios. Que hay muchos fines humanos que no pueden realizarse sin el hecho de la asociación lo demuestran: 1° las necesidades físicas, intelectuales, morales y estéticas que experimenta el hombre: 2° el examen de las facultades de que el hombre dispone para satisfacer aquellas, y cuyo examen nos da á conocer su insuficiencia; y 3° la tendencia del hombre á ensanchar el círculo de sus necesidades y á perfeccionar sus facultades; lo que constituye el progreso, deber tanto del individuo como de la humanidad. Hay además otros hechos ó fenómenos que descubre el análisis y sir-

(1) Con tal exactitud expresa esta definición la naturaleza de la sociedad que hasta las mismas doctrinas positivas sirven para comprobarlo: «Une société, dice Herbert Spencer, au sens scientifique du mot, n'existe que lorsqu'à la juxtaposition des individus s'ajoute la cooperatión. Tant que les membres d'un groupe ne combinent pas leurs forces en vue d'une ou plusieurs fins communes, il n'y a guère de lien pour les unir.» *Principes de Sociologie.* Tom. 3° pág. 331, Trad. de M. E. Cazelles. Paris 1883.

BIBLIOTECA DE CASTILLA Y LEÓN

ven para comprobar el fundamento que á la sociedad hemos atribuido. La simpatía, la amistad y el amor, como afectos, y el lenguaje, como facultad, por una parte; y la degradación moral y el embrutecimiento, consecuencias de la vida aislada, por otra, son prueba de que la sociedad es conforme á la naturaleza y de que en ésta tiene su fundamento.

Considerada la sociedad en general, su fin se deduce inmediatamente de la definición dada, y si descendemos ahora á las diversas especies de sociedades, no es dudoso que habrá en cada sociedad particular un fin que le sea propio, y que, bajo este aspecto, las sociedades podrán clasificarse teniendo en cuenta los distintos fines que se proponen; y cada fin particular, á la vez que sirve de base para la clasificación de las sociedades, será también la razón de su legitimidad; pudiendo decir con Ahrens, que toda sociedad adquiere el derecho de su existencia del fin que se propone, y que la acción del Estado debe por tanto limitarse, respecto á ella, á exigir la *publicidad* de su existencia y el conocimiento de sus estatutos.

El predominio del fin social sobre el individual de cada asociado, ó vice-versa, nos da también una base para distinguir la sociedad llamada civil en sentido extricto de la verdadera sociedad política.

Cuando en la sociedad se busca el bién general, no por sí mismo, sino en cuanto se refiere al bién individual, que por aquella se aumenta, surge la sociedad *civil,* propiamente dicha, en la que se atiende principalmente al arreglo de las relaciones entre los individuos que la constituyen.

Cuando la consideración del bien público predomina y la sociedad adquiere la conciencia de su existencia como tal, contemplándose como una entidad con vida propia, como una personalidad, se constituye en sociedad *política,* cuya manifestación más perfecta es el Estado, conocedor de su fin propio, peculiar é independiente de cualesquiera otros fines individuales ó sociales, aunque relacionado con ellos.

II—DEFINICIÓN DEL ESTADO: SUS ELEMENTOS

Para fijar ahora el concepto racional del Estado, preciso es partir de la necesidad de que el derecho se realice. La consideración de esta necesidad nos lleva naturalmente á pensar que el

derecho no puede cumplirse sin ser antes conocido, y si bien es cierto que el hombre conoce por su razón las relaciones más generales cuya regulación corresponde al derecho natural, en la vida práctica no bastan aquellos principios siendo necesario además formular reglas especiales ó de derecho positivo. Como la mayoría de las personas, individuales ó sociales, carecen de autoridad bastante para formular estas reglas, porque si la tuvieran, no habría más derecho que el dictado por la conveniencia de cada uno, surge la necesidad de un superior dotado de esta autoridad para declarar el derecho en leyes positivas.

Aun conocido el derecho por medio de las leyes en que ha sido formulado, puede ó no cumplirse, ya por las pretensiones caprichosas de las personas á quienes obligan sus preceptos, ya porque, siendo preciso en la práctica establecer una relación entre el precepto jurídico y los actos ó prestaciones humanas, puede aparecer esta relación más ó menos clara y ser discutible, en su virtud, á quien corresponde la facultad y quien está obligado á la prestación, suscitándose una controversia entre las diferentes personas pretensoras, que ninguna puede resolver por falta de autoridad. De aquí también la necesidad de otra personalidad superior para declarar igualmente de qué parte está el derecho cuando varias personas le invocan.

Declarado el derecho en las leyes y en las decisiones que resuelven las contiendas jurídicas y conocido por todos, puede todavía no cumplirse por ignorancia ó por malicia y, en uno ó en otro caso, como el cumplimiento de la regla jurídica es indispensable para realizar el fin humano, hácese preciso restablecer su imperio, y para esto es necesaria también una personalidad superior á los conculcadores, con autoridad y poder material bastante para conseguirlo.

Pues esta personalidad *superior* á todas las que pueden desconocer, controvertir ó conculcar el derecho, no puede serlo el individuo, ni ninguna sociedad que esté subordinada á otra, y por esto definimos el Estado: *sociedad autónoma organizada para la consecución del fin humano por la realización del derecho.*

En esta definición se contiene, á mi ver, el verdadero concepto del Estado, porque se dá á conocer su naturaleza, diciendo que es sociedad autónoma, y su fin propio, que le imprime un carácter distintivo. Hállase además conforme con la etimología, *status,* en cuanto esta palabra significa modo de ser permanente de una cosa, y aun significando capacidad para el derecho, pues el Estado tiene la plenitud de ésta.

Otras definiciones del Estado, aunque muy profundas algunas de ellas, creemos que no determinan su concepto con toda claridad y precisión.

Ahrens dice que el Estado es "el orden general del derecho.„ Esta concepción nos parece demasiado formal y, como tal, no da á conocer los elementos constitutivos, ni la naturaleza verdadera del Estado.

Rossi entiende por Estado "una asociación de familias con el fin de procurarse los medios de realizar el destino humano en este mundo;„ definición que da lugar á confundir el Estado con el municipio, la provincia y la nación, y es además algo vaga, porque no precisa el fin directo é inmediato del Estado.

Bluntschli dice que Estado es "la persona políticamente organizada de la nación en un país determinado;„ concepto inexacto, según Reus y Bahamonde, porque "el fin del Estado no es sólo la política, sino también el derecho, y no hay nación sin país, según hoy se entiende la palabra nación.„

Otros llaman Estado al "conjunto de los poderes públicos;„ cuya noción es incompleta, porque excluye á los indivíduos y otras entidades que con aquellos forman el Estado; defecto en que también incurre Dupont-White al decir que "el Estado es la Autoridad existiendo, no por sí misma, sino por ó para la sociedad„ y que "la esencia del Estado es ser el poder de la razón expresado por la ley, y no el del hombre pervertido por la fantasía.„

Pasando ahora á determinar los elementos del Estado, es indudable, como dice Rossi, que el Estado es un cuerpo complejo, un conjunto que resulta de elementos diversos, más ó menos coordenados que conspiran al mismo fin; que, siendo el Estado una agregación de hombres, hay en la organización de todo Estado elementos necesarios y elementos que no lo son, elementos inmutables y comunes á un Estado cualquiera y elementos variables. Prescindiendo de los últimos, toda vez que en esta parte nos concretamos al estudio de lo general y común á todos los Estados, de nuestra definición se desprende que sus elementos esenciales son dos: los *indivíduos*, y el *orden*, correspondientes ambos á los elementos que integran todo ser con existencia real, la *materia* y la *forma*.

Algunos autores, al estudiar el elemento material del Estado, distinguen la materia *próxima* de la *remota* y afirman que "la materia de que próximamente consta la sociedad política, no son los indivíduos, sino las familias; porque el hombre es miembro

de la sociedad política en cuanto lo es de la doméstica; no se une á la primera sino por medio de la segunda, y no obtiene su integridad y su perennidad sino por medio de la familia.„

Reconocemos que el Estado se compone de familias, como también que el ser humano se completa y perpetúa por la familia; pero no podemos admitír que los individuos todos se unan á la sociedad política por medio de aquella, pues, de ser así, no formarían parte del Estado los célibes; ni que la sociedad política sólo sea necesaria al hombre como un complemento de la doméstica, como pretenden dichos autores, porque el derecho es necesario á todos, y en la vida humana, individual ó social, no se cumple por desgracia sin la intervención del Estado. Además; si los elementos son lo más simple que entra en la composición de los seres, los individuos y no las familias serán el verdadero elemento del Estado, en cuanto este es sociedad. Las familias, como los municipios y las provincias son miembros, órganos del Estado y aun partes, si se quiere, considerados en su individualidad; pero no elementos propiamente dichos, como no son elementos del cuerpo, aunque sean partes del mismo, los órganos destinados á las funciones varias que exige la vida de todo organismo.

Otros añaden á los dos elementos indicados arriba el *territorio* y el *poder público;* pero en estos vemos nosotros, en el primero, una condición para la existencia de los indivíduos que componen la sociedad, y en el segundo, una condición del orden, no debiendo confundirlos con los elementos integrantes del Estado como no se confunden, por ejemplo, la atmósfera, que es condición de vida para el hombre en su estado actual, con el espíritu y el cuerpo, que son elementos de su ser.

III—FIN DEL ESTADO Y MODOS DE REALIZARLE

Al hablar del fin del Estado, suscita Bluntschli la cuestión de si el Estado tiene fin propio ó si, por el contrario, es sólo medio para los fines individuales. Este problema, resuelto por las teorías antiguas en sentido afirmativo, pero exagerando el fin propio del Estado hasta crear un verdadero socialismo y originar la tiranía, ha tenido también solución completamente contraria á la anterior, principalmente entre los escritores ingleses y americanos.

Unas y otras doctrinas son tan exageradas como exclusivistas, porque el Estado puede ser y es medio para el indivíduo en cuanto le facilita el cumplimiento de su destino, y tiene finalidad propia por ser persona, á la que por otra parte auxilían también los individuos con sus actos y prestaciones. Entre el bién social, representado por el Estado, y el bién particular de los individuos hay cierta relación y dependencia, como es fuerza la haya entre el todo y los miembros, y en tal sentido se concibe que aquel pueda exigír á estos sacrificios cuya utilidad no les alcance actualmente; pero que son necesarios para la conservación ó para el engrandecimiento ulterior del Estado. Del mismo modo, hay ocasiones en que las necesidades individuales son tan apremiantes, que exigen la intervención del Estado para satisfacerlas por medio de auxilios directos, sacrificios ó dispendios, de muy dudosa conveniencia actual y en ocasiones nula para el Estado.

Debemos, pués, afirmar sin vacilación alguna que, si bién el Estado puede y debe servir de medio para los individuos, tiene asimismo su fin propio, el cual, á nuestro entender y conforme á la definición del Estado, es doble: *directo* ó inmediato, la realización del derecho, y mediato ó *indirecto,* la consecución del fin humano. Dejando á un lado el segundo, como genérico y común á toda sociedad racional, procuraremos determinar el fin propio del Estado, no perdiendo nunca de vista que dentro de él hay fuerzas múltiples y de muy diversas clases, que, dando por resultado de su ejercicio la cultura y el progreso humano en esferas diferentes, conducen también á la consecución del fin último.

Como el derecho se identifica con las condiciones cumplideras libremente, mediante las que el hombre puede vivir, desarrollarse y progresar, cada una de las esferas de cultura tiene el carácter de condición para obtener el fin social; y no solo tienen este carácter las esferas ú órdenes que provienen de la asociación reflexiva de las fuerzas individuales, sino también las que son efecto de la cooperación espontánea de esas mismas fuerzas y de su concurrencia á la producción del bién público. Los individuos contribuyen también con sus facultades á la vida, al desarrollo y al progreso social, á la realización del fin general humano; pero tanto el resultado de las fuerzas que obran asociadas, espontánea ó reflexivamente en esferas ú órdenes inferiores al Estado, como las que operan aisladas, son insuficientes para el logro del fin social, y precisamente en esta insuficiencia es en lo que veremos la razón de ser del Estado. De aquí se infiere

que el Estado, viniendo en auxilio de las diversas clases de fuerzas que se ejercitan dentro de la sociedad para conseguir el fin de ésta, desempeña una función *complementaria*, y, como tal, realizará su fin siempre que proporcione á los hombres condiciones de vida ó de cultura que fuera de él no puedan encontrar. La primera manifestación de la actividad del Estado se ve, pués, en esta función, por la que su fuerza suple todo lo que á las demás fuerzas sociales falta para cumplir el fin humano.

Debe, sin embargo, entenderse que esta fuerza del Estado es de un carácter especial; que no es fuerza que produce invenciones industriales, ni descubrimientos científicos, ni dogmas religiosos, ni procedimientos económicos, ni bellezas artísticas: todos estos efectos tienen su causa propia, y la misión del Estado no es otra, ya lo hemos repetido, que proporcionar á estas causas condiciones para que puedan producir. Por lo que, si el Estado, ó mejor, el poder que le representa, ha visto, por ejemplo, que por no asociarse, ó por el espíritu de rutina, ó por las preocupaciones, etc., tales ó cuales fuerzas quedan improductivas, debe fomentar ó facilitar los medios favorables y procurar la destrucción de los obstáculos opuestos al ejercicio conveniente de aquellas fuerzas; pero sin que su intervención sea jamás directa, y distinguiendo siempre su misión, que es proporcionar condiciones, de la acción individual ó de otras sociedades, que es producir resultados directos.

Hay además de este modo complementario ó supletorio, por el que el Estado puede realizar su fin, otro más importante, si se quiere, porque es el que emplea y debe emplear más comunmente. A este segundo modo le llamaremos *regulador*; denominación que se desprende naturalmente de los actos que le constituyen. En efecto, toda fuerza, toda actividad tiene en la sociedad su propia esfera, y, si cada una se ejercitase dentro de ella, es indudable que se tendría mucho adelantado para la realización del derecho: pero desgraciadamente, ó se desconocen muchas veces los límites de cada una, ó, aun conociéndose, se invaden los de las demás, ejercitándose tal vez unas á espensas de las otras, y de aquí perturbaciones y trastornos que son otros tantos obstáculos al desarrollo y marcha de la sociedad. Pués el Estado, manteniendo el equilibrio, la proporción y la armonía entre estas fuerzas; haciendo que todas ellas se respeten dentro de su peculiar dominio; restableciendo el orden trastornado por aquellas intrusiones; en una palabra, proporcionando las condiciones para que el ejerci-

cio de estas fuerzas sea ordenado, realiza su fin de un modo regulador.

En el ejercicio adecuado de estas dos funciones, la supletoria y la reguladora, está, pués, contenida la realización del fin del Estado.

Descendiendo ahora al examen de los actos principales que constituyen cada una de estas dos funciones, diremos que la supletoria puede ejercerse: primero, por *actos formales* que pongan á cada esfera de vida y cultura en situación de poder desarrollarse: segundo, por auxilios *materiales,* que sean el sostén de aquellas medidas formales, cuando el atraso, por ejemplo, de la sociedad en general ó la índole particular de algunos trabajos hacen imposible ó muy difícil su cultivo; y tercero, por actos que consistan en *remover* los obstáculos, ó en ejecutar las obras que las fuerzas individuales no puedan por sí solas remover ó ejecutar.

La función reguladora puede ser realizada por medidas que tiendan: primero, á hacer *respetar la personalidad* de cada individuo y entidad social: segundo, á *evitar colisiones* entre estos individuos y entidades: tercero, á *restablecer el orden* trastornado; y cuarto, á procurar que se *auxilien* mutuamente todas las personas é instituciones sociales (1).

Entre los actos, por medio de los que puede realizarse el fin del Estado, incluyen también algunos autores los relativos á la existencia y conservación de la sociedad política en un territorio independiente. Nosotros, sin embargo, creemos que tales actos no se refieren directamente á la consecución del fin del Estado, porque este, como todo ser, sólo puede realizar su destino á condición de existir; y así sucede que, al decidir en la práctica acerca de la justicia y moralidad de los actos ejecutados por el Estado para cuidar de su existencia, nunca se tiene en cuenta la conformidad de tales actos con el fin del Estado, sino el derecho de conservación que le es común con todas las demás personas físicas y morales.

El autor citado arriba, después de examinar algunas concepciones falsas, incompletas ó exageradas del fin del Estado dice que "su fin verdadero y directo es el desarrollo de las facultades de la nación, el perfeccionamiento de su vida por una marcha progresiva que no se ponga en contradicción con los destinos

---

(1) V. Ahrens, *Drcho. nat.* 6ª edic. franc.

de la humanidad, deber moral y político sobreentendido:„ fórmula que "comprende todo el fin del Estado, y respeta los caracteres y las necesidades particulares de las naciones y la variedad de su desarrollo, asegurando al propio tiempo la unidad del fin (1).„

Examina luego el mismo autor las diversas tendencias que pueden manifestarse en la nación, haciendo notar de paso los peligros de su exclusivismo, y enumera como principales: *el desarrollo del poder,* tendencia derivada de la necesidad que tiene el Estado de ser poderoso para hacerse respetar en el exterior y por sus miembros: *ciertas tendencias económicas,* según que en la nación predomina la industria pastoral, la agrícola, la fabril ó la comercial: *el cultivo de los intereses civilizadores,* como el arte y la ciencia; *la garantía jurídica de las libertades públicas y privadas,* que, considerada como misión principal del Estado, engendra los *libres Estados de derecho;* y *la manifestación de la unidad nacional,* como expresión de los sentimientos de un pueblo consciente de su unidad.

Tanto el fin directo asignado por Buntschli al Estado, como las tendencias varias que pueden manifestarse en los diversos Estados, caben dentro de los fines que nosotros hemos fijado como inmediato ó mediato, cuando el Estado se encarna en la nación; pero como también hay otras agrupaciones inferiores, por ejemplo, la ciudad, que pueden constituirse en Estado cuando para ello tienen poder é independencia bastante, menester es no confundir las entidades nación y Estado, que realmente son diversas, y distinguir también el fin directo y propio de cada una.

IV—RELACIONES DEL ESTADO CON LAS DIVERSAS ENTIDADES Y ÓRDENES SOCIALES

Expuestos los modos principales por los que el Estado puede realizar su fin, fácil será conocer la misión que al mismo incumbe respecto á los órdenes diversos de la vida y de la actividad humanas. Estos órdenes pueden distinguirse, ya bajo el punto

(1) Bluntschli. *Dcho. públ. univ.* Tom. I, pág. 265. Trad. de G. Moreno y Ortega.

de vista de la *cualidad*, ya bajo el de la *cantidad*, pues aunque esta última no sea una base muy propia para fijar distinciones, sin embargo, cuando se la conoce constantemente como mayor ó menor, puede dar lugar á varios grados permanentes en determinada escala, y bajo tal aspecto ser aceptable para el objeto indicado.

Los diversos órdenes sociales pueden ser clasificados, bajo el aspecto de la cualidad, en esferas de *vida* y esferas de *cultura*. Llamamos esferas de vida á aquellos órdenes en que resalta sobre todo el hecho de la existencia independientemente de tal ó cual modo especial de ser, y de cultura á aquellos otros en que aparece de un modo más notorio la particular manera de vivir intelectual, moral, estética y aun materialmente.

Las esferas de vida se distinguen principalmente bajo el punto de vista de la cantidad, porque desde el indivíduo hasta el Estado se hallan representadas por agrupaciones cada vez mayores que expresan otros tantos grados sociales en que se manifiesta la vida. Entre nosotros pueden enumerarse la familia, el municipio, la provincia y la nación.

Las esferas de cultura pueden distinguirse cualitativamente por el fin peculiar de cada una; y, como los fines principales, que deben realizarse en la sociedad, son el religioso, el moral, el científico, el artístico y el económico, las instituciones de cada una de estas clases serán otras tantas esferas, cuyas relaciones con el Estado habremos de exponer despues de haber consignado las que sostiene con las esferas de vida.

La *familia* es una reunión de individuos ligados entre sí por los vínculos de la sangre y dirigidos por un jefe que les dió la naturaleza.

Por esta definición se ve que la familia es una sociedad natural; pero aunque asi sea, no vive sólo en sí y por sí, sino que vive en el Estado y también por él en cierto modo; resultando que puede y debe ser estudiada bajo dos puntos de vista, uno privado y otro público. Bajo uno y otro aspecto tiene sus fines propios: *privadamente,* el fin de la familia es el auxilio mutuo de los que no están en condiciones de proporcionárselo por sí mismos y la educación recíproca y de los menores: bajo el aspecto *público*, el fin de la familia es contribuir á la realización del derecho por su buena organización y por la realización del mismo derecho dentro de su propio seno. De estos fines se desprende que el Estado no puede jurídicamente intervenir en los modos con que se proporcione su sustento, ni en los procedimientos que los padres

empleen para educar á sus hijos; á menos que estos medios sean contrarios, ó bien al derecho que la sociedad en general tiene al servicio de sus miembros, ó bién al derecho de los mismos individuos que componen la familia. Así es que podrá corregir los brutales abusos de la fuerza, que priven á la sociedad de uno de sus miembros ó le inutilicen, y la educación inmoral, ó mejor la perversión, que lleve á la sociedad un miembro no sólo inútil, sino perjudicial. En cuanto á la organización de la familia, no pretendemos que la naturaleza debe ser enmendada en este punto; mas, cuando la organización natural es trastornada, total ó parcialmente, por la muerte del jefe ó por la tendencia á sobreponerse los que deben estar subordinados, el Estado puede y debe intervenir dándole una organización supletoria, ya, por ejemplo, con la institución de los tutores, ya con el consejo de familia, que ataje las disensiones intestinas antes de llevarlas á los tribunales.

El *municipio,* que es una reunión de familias é individuos en una localidad determinada para facilitar la consecución de los fines esenciales de la vida, del mismo modo que la familia, no vive sólo en sí, sino que vive en el Estado y de algún modo por él. De donde se infiere que, si el municipio, como personalidad con fin propio, tiene derecho á arreglar por sí solo los asuntos que con este fin dicen relación, considerado como parte integrante del Estado, muchos de sus actos han de caer bajo la inspección de éste y hallarse sujetos á su dirección. Fijar la línea divisoria de la acción del Estado y de la propia del municipio es más difícil que determinar las relaciones del Estado con la familia, porque ésta, á diferencia del municipio, tiene una organización natural, y los fines propios que ha de llenar son también naturalmente conocidos por todos. Sin embargo, no perdiendo de vista el fin directo del Estado, que es la realización del derecho, y la multiplicidad de fines que el municipio puede abarcar, la cuestión se presenta más sencilla, pudiendo resolverse en estos términos: el municipio deberá tener completa autonomía siempre que en la gestión de los asuntos municipales no se conculquen las reglas generales del derecho, ya adoptando medidas arbitrarias, ya imponiendo al vecindario sacrificios que no se compensen con el beneficio reportado de la vida en la localidad, ya gravando á las generaciones futuras de un modo egoista en provecho exclusivo de la presente. Mas, como el municipio tiene también una fase pública, como parte del Estado, éste tendrá derecho

á determinar sus relaciones orgánicas con los otros municipios y demás esferas sociales consideradas también bajo su aspecto público, y con el mismo Estado, para que resulte el equilibrio y la armonía, y no el desquiciamiento y la desorganización social. Esta intervención es con toda propiedad una manifestación de la función reguladora del Estado, y á ella estaría reducida la misión de éste, si no hubiera circunstancias anormales ó extraordinarias en las que, peligrando, por ejemplo, la vida del municipio, se hace necesaria una intervención más directa del Estado, prestando á aquel su apoyo, como deber que se deriva de su función complementaria.

La *provincia,* análoga por sus fines al municipio, y á cuyo régimen pueden aplicarse los mismos principios consignados respecto á éste, es una agregación de municipios contíguos, cuyo lazo de unión debe ser la comunidad de afectos, intereses y tradiciones. Su organización, del mismo modo que la del municipio, debe responder á sus dos fases, pública y privada, de modo que, si bajo esta última el municipio y la provincia han de tener su poder local y propio en los ayuntamientos y diputaciones, bajo su aspecto público, deben consentir y aun admitir de buen grado delegados del poder central que representen y conserven en armonía tales relaciones.

Cual sea el mejor sistema de organización, tanto municipal como provincial, es cuestión eminentemente práctica y que no puede resolverse sin tener en cuenta el carácter, la historia y las necesidades, no sólo del Estado, sino de cada una de estas esferas; por más que, no siendo éstas al cabo otra cosa que ruedas del organismo superior de aquel, deba buscarse siempre la uniformidad ó, por lo menos, la semejanza en la organización.

La *nación* considerada como sociedad de familias y pueblos unidos por los vínculos del origen, tradiciones, sentimientos y carácter comunes y que viven en un determinado territorio, sostiene con el Estado relaciones tan íntimas que ha llevado á algunos pensadores á confundirlos ó poco menos (1). Y en efecto, cuando el Estado se encarna en la nación ó ésta se constituye en

---

(1) Le sentiment de nationalité peut avoir été engendré par diverses causes; c'est quelque fois l'effet de l'identité de race et de souche; souvent la communauté de langage et la communauté de religion contribuent à le faire naître, les limites géographiques également. Mais la cause la plus puissante de toutes, c'est l'identité d'antécédents politiques, la posesión d'une historie national et par conséquent la communauté de souvenirs, l'orgueil et l'humiliatión, le plaïsir et le regret collectifs se rettachant aux memes incidents du passé. Cependant aucune de

Estado, aparecen como la misma sociedad, porque sus elementos materiales son á ambos comunes, las fuerzas de que disponen son las mismas en muchos casos, y la dirección y régimen de la nación y de sus fuerzas se halla encomendada, en los Estados nacionales, al mismo poder público. Con todo, una y otro tienen medios que le son propios porque sus fines son distintos, pues mientras el Estado prosigue directa y principalmente el fin jurídico, la sociedad nacional no es extraña á ningún fin humano y puede proseguirlos todos directamente sin faltar á su misión. Por lo mismo, el Estado, como tal, debe dejar que la espontaneidad nacional se desarrolle, sin pretender regularlo todo, ni mucho menos cumplir por sí los fines propios de la nación; pero, como en algunos casos la actividad de ésta puede extraviarse, ó peligrar su vida, ó carecer de medios propios bastantes para el logro de su fin, el Estado puede y debe venir en su auxilio, ya regulando sus actos, ya prestándole cooperación y auxilio, ó ejerciendo en su obsequio, como puede ejercitarla en beneficio de cualquiera otra entidad, individual ó colectiva, la función complementaria ó supletoria de que antes hemos hablado.

Sucintamente expuestas las relaciones del Estado con las diferentes esferas de vida, veamos las que debe sostener con los diversos órdenes de cultura.

La *religión* es sin duda la palanca más poderosa para el arreglo y ordenada dirección del Estado. Faro que dirige á la inteligencia en sus investigaciones, unas veces indicándola el camino más breve para llegar á la verdad, y señalándola otras los escollos que de la misma pueden apartarla, ejerce su benéfica influencia de un modo aun más patente, si se quiere, sobre la actividad humana y todas sus manifestaciones. Expresión del vínculo de amor, de respeto y sumisión con que toda criatura debe unirse á su Criador, las verdades y los preceptos religiosos siguen al hombre por doquiera, lo mismo en el silencio del hogar que en las agitaciones de la vida pública; y su influjo se hace sentir constantemente, ya en la calma que produce el cumplimiento de sus mandatos, ya en la vacilación, en la intranqui-

---

ces circonstances n'est, ou indispensable, ou absolument suffisante à elle seule..... Les institutiones libres sont presque impossibles dans un pays composé de nationalités différentes, chez un peuple où n'existe pas de lien sympathique, surtout si ce peuple lit et parle des langues différentes. L'opinion publique et generale nécessaire á l'œuvre du gouvernement représentatif, ne peut exister.» Stuart Mill. *Le Gouvernement représentatif*. Págs. 383-385. Trad. de Dupont White. Paris 1877.

lidad ó en el malestar que va anejo á la infracción de éstos ó á la negación de sus verdades. Allí, donde la sanción de los hombres no alcanza ni puede alcanzar; allí, donde la mayor previsión no ve más que sombras y tinieblas; hasta allí llega la religión haciéndose sentir en el hombre de creencias con sus verdades, con sus consejos y preceptos. "Si Dios no existiera, ha dicho Voltaire, sería preciso inventarle para el gobierno de las sociedades.„ Esta influencia decisiva, que la religión ejerce y que ha sido conocida por todos los hombres de Estado, ha llevado á los unos á querer convertirse en pontífices máximos, pretendiendo dirigir las conciencias, mientras por otro lado dictaban leyes é intentaban de este modo hacer incontrastable su poder, uniendo á la sanción civil la religiosa. Otros, por el contrario, y con el mismo conocimiento de esta influencia, queriendo romper completamente con el pasado, trastornar ó *reformar,* según dicen, la sociedad desde sus cimientos, han principiado por atraerse á las muchedumbres, adulándolas con la apoteosis de su poder, cegando su inteligencia para la verdad religiosa con el vértigo en ellas producido por la sobreexcitación de sus pasiones y lanzándolas, para explotarlas, en el cieno del materialismo ó en las sombras del indiferentismo religioso.

De aquí la necesidad imperiosa de asentar sobre bases fijas los principios que determinan y han de tenerse en cuenta para establecer las relaciones entre el Estado y las creencias religiosas.

Por de pronto es indudable que el Estado, como tal, ni debe ni puede llevar su acción hasta las conciencias, y que bajo este punto de vista el hombre es libre en su conciencia, de hecho y de derecho. De hecho, porque no hay fuerza humana capaz de alterar, ni cambiar los actos que se consuman en el fuero interno. De derecho, porque á Dios plugo que su ley se cumpliera ó infringiera voluntariamente por el hombre, fundando en la libertad del cumplimiento ó la infracción los méritos para el premio ó castigo subsiguiente. Las creencias y los sentimientos religiosos, mientras no se manifiestan al exterior por actos positivos, son asunto privado, y como tal no puede el Estado intervenir en ellos.

Además, como el Estado es una institución para la realización del derecho, y éste le constituye toda condicion necesaria para la vida ó perfección humana, siendo la libertad en el querer condición de la personalidad, mediante la que Dios ha querido que se cumpla el destino humano y no fatalmente, como hubiera podido hacerlo y lo ha hecho con los demás séres de la natura-

leza, el Estado debe respetar y garantir este derecho. Esto no quiere decir que la conciencia de cada uno sea la regla de sus actos: la conciencia es luz que, bien aplicada, puede guiar al hombre por buen camino, así como también extraviarle, si de ella no se usa bien.

El Estado, ó mejor su poder, debe, pues, respetar la conciencia individual en materia de creencias; más, como á la vez tiene el convencimiento de la gran importancia de éstas para el régimen social, ha de procurar también que haya creencias. Este deseo del Estado dicen algunos que no debe manifestarse por medidas encaminadas directamente á fomentar una religión ó á destruir otra, porque ni él es maestro de dogmas ni, como Estado, puede reivindicar para sus creencias el dictado de infalibles. En este razonamiento nos parece que hay algo de sofístico. Bueno que el Estado no sea maestro de dogmas; pero nada impide que él crea en la verdad de ciertos dogmas, como cree en las ventajas de tal ó cual plan económico, proclamando en su consecuencia la libertad del comercio, ó erigiéndose por el contrario en protector de la industria nacional; como juzga que ciertos actos son perniciosos para la sociedad, prohibiéndolos por consiguiente, y que ciertas instituciones son benéficas y moralizadoras, procurando por lo mismo su conservacion y fomento. Si el Estado no es un mito ó una pura abstracción, si es una persona real, tendrá, como toda persona, inteligencia y voluntad, opiniones y creencias, obligaciones y deberes. Si el Estado ateo no fuera un absurdo, el Estado moral, el Estado responsable sería una contradicción flagrante, porque sin un Dios superior al Estado, no alcanzamos quien pueda exigirle cuentas de sus actos, quien pueda hacer efectiva aquella responsabilidad. Acaso se pretenda por algunos que la *Humanidad*, la sociedad común humana, es la encargada de residenciar á los Estados; pero, ¿dónde está el poder que representa á esa sociedad, si prescindimos de Dios?... ¿Dónde el código de los derechos y deberes internacionales, si suprimimos al legislador?... ¿Por ventura los Congresos internacionales representarán la sociedad?... Pero entonces la sociedad habrá vivido sin ley la mayor parte de su vida, porque los Congresos internacionales son de ayer y aun no se puede afirmar que dirijan las relaciones entre todos los Estados. Si en los Congresos ó en los tratados internacionales se hubiera de buscar la sanción de los hechos sociales serían innumerables las injusticias no reparadas y los atentados y crímenes sin castigo. O Dios y las relaciones consiguientes en que es necesario supo-

ner á la sociedad, ó la negacion de la persona y de la moral social: en otros términos; ó Dios y la religión social, ó la agrupación, el rebaño de hombres, y no la sociedad. Llegando á esta disyuntiva, no juzgamos racional decidirnos por su segundo término, y pensamos que de lo expuesto se puede lógicamente concluir: que la sociedad existe como persona moral; que, como ser moral, presupone la existencia de Dios; que en tal concepto tendrá creencias acerca de este Dios y de las relaciones que á él la unen; que estas creencias y relaciones constituyen la religión; que al preferir unas y desechar otras lo hará porque juzgue aquellas verdaderas, y que por lo mismo debe fomentarlas y protegerlas, procurando á la vez la destrucción de las contrarias, á menos que juzgue á todas igualmente buenas, lo que es un absurdo, ó que la necesidad le obligue á obrar de otra manera.

Téngase presente, sin embargo, que al sentar como un derecho del Estado el oponerse al desarrollo de las creencias contrarias al dogma religioso que profese, no pretendemos que se ataque á los individuos, ni que se busque en la persecución de estos la destrucción de aquellas. Las creencias erróneas pueden ser combatidas por el Estado, negándoles los derechos que á la verdad se conceden, proscribiendo sus manifestaciones, presentando obstáculos á su germen y desarrollo en vez de proporcionarles condiciones favorables. Pero esta cuestión implica la de las relaciones del Estado con los cultos, de que vamos á ocuparnos, procurando hacerlo con entera imparcialidad y sin mira alguna exclusivista.

Toda creencia tiende naturalmente á manifestarse por actos, y desde el momento en que estos actos se exteriorizan, pueden, como todos los externos, coadyuvar ó entorpecer la realización del fin social, siendo para el mismo, ya condición, ya obstáculo, según las circunstancias. Ahora bien, si el derecho está constituido por las condiciones que, aunque dependientes de la libertad humana en su cumplimiento, han sido impuestas por Dios al hombre para que llegue á su destino, es indudable que entre la religión, conjunto de creencias relativas á Dios y sus obras, y el derecho, conjunto de condiciones de que Dios ha hecho depender el destino humano, habrá relaciones muy íntimas; que una religión falsa es incompatible con un derecho verdadero y viceversa; y de aquí que la religión, ó mejor el culto que la expresa, pueda ser ó no condición jurídica, regulable en el derecho. Siendo esto así; si el Estado se hallara en posesion segura, cierto de las verdades religiosas ó de las jurídicas, las unas le servirían

para contrastar las otras y, siendo su misión realizar el derecho, proscribiría las manifestaciones religiosas contrarias á éste, ó comprendería que iba desacertado al juzgar como derecho lo contrario á la religión. Así sucede, en efecto, con muchas relaciones generales, admitidas universalmente como verdaderas y comunes á la religión y al derecho, lo mismo que á la moral: la existencia de un Dios, en el que la religión y la moral ven al Criador y ordenador, y el derecho al legislador del universo; los preceptos negativos del Decálogo concernientes á relaciones entre los hombres; la obediencia á los superiores, y otras análogas, son verdades de esta clase que, á pesar de no servir por su misma generalidad para conocer si una religión determinada es falsa ó verdadera, son útiles, por su evidencia, para decidir que aquellas religiones que no las reconozcan ó las rechacen no son verdaderas, y como falsas, opuestas al derecho, debiendo ser proscritas del Estado sus manifestaciones. Esta nuestra opinión se confirma en cierto modo por la autoridad, en cuanto que ni aun aquellos que más blasonan de libre-cultistas creen permisibles, por ejemplo, las ceremonias del fetiquismo.

En cuanto á las demás religiones y cultos que no violan de un modo tan directo y evidente estas verdades universales, creemos, examinando este punto á la luz de la razón exclusivamente, que ni deben proscribirse en absoluto, ni admitirse sin restricciones.

Los partidarios de la libertad de cultos pretenden que, como el Estado no es maestro de dogmas, no debe ser juez en materias religiosas, admitiendo unas y proscribiendo otras. Aun concedida la premisa, no creemos, sin embargo, que pueda deducirse en buena lógica la conclusión propuesta. El Estado, es cierto, no debe ser juez en materias religiosas, si su fallo ha de recaer sobre la verdad ó falsedad de las doctrinas; pero aceptada una doctrina por el Estado y prestándola su asentimiento, la razón exige que sea consecuente, que proceda con arreglo á sus convicciones, y que obre como obraría todo ser racional, procurando el triunfo de lo que juzgue bueno y conveniente y la destrucción de lo falso y pernicioso. Así, creemos que la solución del problema sobre la libertad de cultos, como eminentemente práctica, depende principalmente de la relación en que el Estado se haya colocado respecto á una creencia determinada y del carácter y naturaleza de ésta.

Si el Estado, que no puede ser indiferente, sopena de no ser moral, profesa una religión libre-pensadora, es decir, una reli-

gión cuyos dogmas se resuman en este principio, "todo hombre que piense y obre conforme á sus opiniones y creencias, piensa y obra bien,„ el Estado, para ser consecuente, habrá de permitir el culto privado y público de todas las religiones. Mas si, por el contrario, el Estado profesa una religión exclusivista, esto es, una religión cuyo dogma fundamental sea que "sólo ella posee la verdad y prescribe el bién, y que fuera de ella no se encuentra otra cosa que el error y el mal,„ en este caso la consecuencia y la lógica exigen que el Estado proscriba todo lo que manifestándose al exterior se oponga á los dogmas que profesa ó á los preceptos religiosos que venera; á menos que la necesidad reconocida, ó el deseo de evitar un mal mayor le precise á obrar de otra manera. Por ejemplo: los Estados que profesan una religión protestante no son consecuentes con sus principios sino admiten la libertad de cultos; mientras que los Estados católicos, por el contrario, sólo pueden llamarse lógicos proscribiendo toda clase de cultos que no sean el católico, á menos que la necesidad les obligue, pues, en este caso, aun los mismos representantes supremos de la religión católica han transigido en cierto modo, celebrando concordatos para evitar mayores males.

En orden á la *instrucción* y á la *educación* en general, debe el Estado garantir la libertad de enseñar, aprender y educarse de la manera que mejor parezca á cada cual: primero, porque ni las ciencias, ni las artes pueden progresar ni perfeccionarse cuando los que á cultivarlas se consagran tienen que sujetarse á procedimientos fijos é invariables y no pueden ejercitar su genio más que en un campo limitado; y segundo, porque los descubrimientos é invenciones científicas ó industriales no constituyen, según hemos indicado, el objeto final del Estado, y aun dado que le constituyeran, el Estado no tendría bajo este aspecto otra consideración que la de una inteligencia más que, como humana, no podría reclamar para sí ni la infalibilidad, ni la omnisciencia. Sin embargo, la misión del Estado no es meramente pasiva en este punto, y del conocimiento de las dos funciones, supletoria y reguladora, que le hemos asignado, se deduce cuando es ó no justa su intervención. Así que, una vez convencido el Estado de la necesidad de la instrucción y de la educación social, debe, supliendo lo que la impotencia ó la incuria individual no permiten conseguir, fomentarlas por medios indirectos, como establecimientos consagrados á su cultivo y enseñanza ó auxilios y premios á los que se dedican á ellas y principalmente á trabajos que ya por su índole especial, ya por la escasa cultura general, no

sólo no proporcionan recompensa, pero ni aun los recursos necesarios para la vida en la mayoría de los casos.

Desempeñando el Estado su misión reguladora en punto á instrucción y educación, debe procurar que ésta sea paralela y armónica, en cuanto posible, respecto á todas las aptitudes, no sacrificando, por ejemplo, al cultivo de la inteligencia el del sentimiento y de la voluntad, que desempeñan un papel tan grande como aquella en el organismo social: debe asimismo procurar que no se perturbe el orden en las diversas esferas de la instrucción, dirigiéndolas en sus relaciones de modo que se auxilíen y completen y evitando las colisiones que entre ellas pudieran surgir, si por acaso las unas pretendieran la absorción ó el predominio sobre las otras; y, por último, aunque el Estado debe garantir la libertad en esta materia, puede y debe también conservar el orden social, moral y material, impidiendo que se trastorne á pretexto de la ciencia, castigando las transgresiones de la ley que en nombre de aquella se cometan, exigiendo ciertas condiciones para algunas profesiones cuyo ejercicio puede ser orígen de bién ó de mal social, y, en una palabra, procurando que la instrucción y la educación sean conformes y no contrarias á las leyes é instituciones fundamentales del Estado; sin que esto sea decir que las leyes é instituciones no puedan cambiar y modificarse á medida que avanzan la ciencia, la instrucción y la educación pública.

En cuanto al *orden económico*, solo debemos consignar que la libertad de trabajo y de industria es, en tesis general, á la vez que un derecho de todos, la condición más favorable para el aumento de los productos que constituyen la riqueza social, sin que en esta materia se manifieste tan necesaria la intervención supletoria del Estado, porque la producción material ocupa de ordinario y de un modo preferente la actividad humana, ya por lo perentorio de las necesidades que esta producción satisface, ya también, algunas veces, por la predilección que el extravío da á los goces sensuales.

En el *órden moral,* cuando los actos humanos traspasan la esfera de la conciencia y salen al exterior, como pueden servir, ya de ejemplo y estímulo, ya de escándalo y rémora para la consecución de los fines sociales, debe el Estado intervenir, ejerciendo unas veces su función supletoria promoviendo, por ejemplo, la creación de instituciones y establecimientos benéficos, que por la misma moralidad debe inspeccionar, y regulando otras

todo lo que á la moralidad pública dice relación, ya con medidas preventivas contra la prostitución, los espectáculos licenciosos, etcetera, ya con medidas represivas de los delitos que principal y directamente ataquen á la moral social, como la blasfemia, el perjurio, la bigamia, el incesto, etc.

Cuales sean los medios que el Estado deba emplear para sostener justas relaciones con todas las esferas y órdenes de vida y cultura que hemos mencionado, y hasta que punto y en que forma deba intervenir en cada caso, son cuestiones propias del derecho administrativo, el cual las resuelve teniendo en cuenta, á la vez que los principios generales que dejamos expuestos, las condiciones particulares de tiempo, de lugar, de carácter, etc., que dan á las medidas administrativas su aspecto variable.

V—ORIGEN Y FORMACIÓN DE LOS ESTADOS

Distinguen los autores el *origen filosófico del Estado,* considerado en abstracto, del *origen histórico* de los Estados que tienen existencia y vida real.

El primero equivale, en opinión de algunos, á la *razón de ser*, y, si se admite esta equivalencia, fácil será deducir de nuestra noción del Estado cual sea su origen filosófico. Proponiéndose el Estado la realización del derecho, comprenderemos que su razón de ser se halla en la impotencia de los esfuerzos individuales y en la consiguiente necesidad de esta institución para conseguir aquel fin. Si los esfuerzos individuales bastaran para la realización del derecho, el Estado sería inútil; pero desgraciadamente la idea del derecho no está grabada profundamente en todas las inteligencias, ni el sentimiento de lo justo se ha apoderado de todos los corazones hasta el punto de hacer innecesaria la intervención del Estado en los actos humanos, siquiera sea en muchas ocasiones solamente para indicarles la regla de conducta. Por el contrario, bien puede asegurarse que la mayoría de los hombres, y aun de las entidades sociales, se han penetrado tan poco de la necesidad de realizar el derecho, para la común felicidad, y se han dejado llevar de miras tan egoistas, que la conculcación de los preceptos jurídicos se estima cosa de poca monta, cuando en ella se ve un motivo de medro ó de interés particular.

De aquí se deduce una consecuencia importante para la práctica; que, siendo el derecho la mira, el punto objetivo del Estado, todo Estado particular ha de procurar presentarse como modelo ó tipo de la realización del derecho, y que aquellos Estados, que principian desconociéndole en su constitución, en el modo de estar organizados, no podrán jamás realizar su fin. Los pueblos regidos despóticamente ó aquellos otros que son presa de la anarquía, no pueden ser presentados como modelos, mejor dicho, no son Estados, porque en ellos al derecho, que es principio fijo, se ha sustituido la voluntad con todos sus caprichos y veleidades.

Según otros, el origen filosófico del Estado equivale á la causa fundamental que le da origen, es como su base jurídica y por lo mismo común á todos los Estados.

Acerca de esta base han sido formuladas varias teorías, entre las que enumera Bluntschli: 1ª la del Estado de naturaleza, según la cual, piensan unos que los hombres vivían tranquilos y felices en una sociedad primitiva sencilla é inocente, donde la naturaleza prodigaba á todos por igual los mismos goces, hasta que en el seno de sociedad tan venturosa surgieron las pasiones bastardas y se hizo necesaria una fuerza ó poder que tuviera á raya á los díscolos y castigase á los malvados. Otros, por el contrario, creen que esta fuerza ó poder fué necesario, para poner coto á los desmanes, violencias é injusticias que constituían el modo de ser ordinario de la sociedad primitiva: 2ª la que mira al Estado como institución, en cuya teoría también se manifiestan dos direcciones distintas: una que considera el Estado, como obra inmediata de Dios é inviste por consiguiente al poder público con la plenitud de un poder incontrastable; y otra que sólo le considera como proveniente de Dios de un modo mediato ó indirecto, dejando á los hombres ó á los hechos naturales su organización, aunque siempre subordinada á los designios providenciales: 3ª la del derecho de la fuerza, principio antijurídico por el que pueden legitimarse todas las injusticias, todos los atropellos y tiranías: 4ª la del contrato, que hace surgir el Estado de un convenio entre los hombres, quienes ceden, según unos, parte de su libertad y derechos en aras del bién común y para hallar en la sociedad política las fuerzas y los medios que faltan al individuo, ó ya, según otros, para poner término á la guerra de todos contra todos, considerado por ellos como modo de ser natural al hombre. De estas diferentes teorías habremos de hacernos cargo al estudiar el origen del poder público ó social.

El modo de formarse un Estado particular se ha llamado comunmente su *origen histórico*. Este tiene por carácter la variabilidad, puesto que los hechos que le determinan no son necesarios, sino que se producen por causas accidentales. Sin embargo, por más varios que puedan ser estos hechos, siempre han de estar fundados en la naturaleza y ser conformes al derecho. Puede, con todo, suceder que el principio aparente de un Estado se halle en un hecho violento; pero, en este caso, tal hecho habrá dado lugar á la agrupación, no al Estado, que solo principia desde que el consentimiento tácito ó expreso, la prescripción ú otro cualquiera medio de legitimación, reconocido en derecho, viene á purgar tal agrupación de su vicio originario.

Los hechos que determinan el modo particular de formarse cada Estado pueden producir la agrupación; ó lentamente y de un modo gradual, siendo expresión de la natural tendencia humana á constituir Estado; ó de una manera brusca, sin precedentes que hayan llevado al hombre como por la mano á la formación del Estado.

Cuando el modo de formación de los Estados reconoce por causa los hechos naturales y, por decirlo así, espontaneos de la primera clase, recibe, según algunos autores, la denominación de orígen *ético* ú *orgánico*, y tendría lugar, por ejemplo, en un Estado, que partiendo de la familia se hubiera ido transformando por la reunión de familias en gentes, por la de gentes en tribus, y así sucesivamente. Este modo de formación, además de expresar un desarrollo progresivo, serviría tambien para resolver muchos problemas concernientes á las relaciones del Estado con las varias esferas de la vida y cultura de los pueblos. En efecto, como la agrupación de las familias, formando gentes, y la de estas, formando tribus, no se verificaría sin proponerse antes un fin común y la manera de proseguirlo por los esfuerzos combinados de las familias ó las tribus, este fin indicaría en cada caso cuales habrían de ser las relaciones de cada miembro ó entidad con el Estado de que formara parte y entre sí recíprocamente. Constituido de este modo un Estado, se haría tambien notorio que éste es completamente extraño á los fines particulares de los individuos y de las instituciones sociales, y que su intervención, en lo que á ellos se refiere, sólo puede ser exigida y estar legitimada por la consideración del fin general común á todos.

También hallaría de este modo su sanción, en la razón y en los hechos, la autonomía, dentro de su esfera, de las entidades que viven en el Estado; se vería que esta independencia no es

incompatible con el concurso que todas deben prestar para conseguir aquel fin superior; y, reconociendo todas estas entidades la superioridad del mismo fin común, se demostraría la necesidad de sacrificarle el interés y aun el bien particular, sí por acaso llegara éste á hacerse incompatible con el público. El desarrollo racional y progresivo, de que venimos hablando, se ha realizado, sin embargo, en muy pocos Estados, pues la existencia de casi todos depende de causas accidentales, incapaces muchas de ellas de legitimarla en su origen, siendo por lo mismo necesario buscar su legitimación en otros hechos jurídicos posteriores.

Hay, pues, además de este origen, otro que pudiéramos llamar *externo* y aun *casual* por ser efecto de circunstancias, las más veces imprevistas. La inteligencia y energía de un hombre que se impone á los demás, los reune é imprime dirección al común esfuerzo para rechazar un peligro inminente ó acometer una empresa atrevida, manteniéndolos después en la obediencia; las agregaciones de territorio y población por efecto de la guerra; el dominio que naturalmente se ejerce sobre los pueblos salvajes é incultos por los que los han civilizado; la obediencia de los mismos pueblos, que llega á hacerse habitual en virtud de repetidos experimentos de la superioridad de los pueblos civilizados, y otras tantas causas fortuitas, determinan muchas veces la formación ó el origen de los Estados.

Bluntschli clasifica en tres grupos los modos de formación histórica de los Estados: *originarios,* en que la formación del Estado es enteramente nueva; nace directamente de la sociedad (1) y del país, sin derivarse de ningún otro Estado: *secundarios*, en que la formación se produce igualmente en el interior, pero relacionándose con la existencia de muchos Estados que se unen para formar un todo, ó de un Estado que se descompone para formar muchos: *derivados,* en que la formación se produce de fuera, del exterior.

Cada uno de estos grupos se divide en otros subalternos. Corresponden á los modos originarios: 1° aquellos en que la organización coincide con el establecimiento de la sociedad en el territorio y el Estado parece la obra libre de la voluntad consciente, como sucedió en la antigua Roma: 2° aquellos en que el país,

---

(1) Sustituimos la palabra *nación*, empleada por Bluntschli, con la de *sociedad*; porque, según nuestro concepto, puede constituirse en Estado, no solamente la nación, sino cualquiera otra sociedad dotada de independencia y poder bastantes para dictarse y hacer cumplir sus propias leyes.

habitado de tiempo anterior, se organiza después políticamente por un acto reflexivo de la voluntad; ejemplos, la antigua Atenas, la república irlandesa, la organización de California y la de algunos Estados de la Unión americana: 3° aquellos en que el pueblo ó la nación existen ya y se constituyen posteriormente en Estado al tomar posesión ó conquistar un territorio, como el pueblo judío después de su salida de Ejipto y los pueblos germánicos que se establecieron en las provincias romanas.

Tienen lugar los modos secundarios: 1° cuando el sentimiento de la propia debilidad ó el deseo de realizar la unidad nacional lleva á dos ó más Estados á formar otro superior mediante los pactos ó convenios necesarios al efecto; pero sin suprimir los anteriores, aunque unidos por el vínculo creado en un principio por los pactos *(Confederación de Estados)*, como la de las ciudades griegas en lo antiguo, la Suiza hasta 1848 y la Confederación germánica en 1815, y, después que el sentimiento de la unidad se ha afirmado y la organización común se desarrolla, por la ley constitucional *(Federación)*, como la América del Norte después del acta de unión de 1787 y la Suiza desde 1848: 2° cuando dos Estados se reunen bajo un jefe común, cuya unión es símplemente *personal*, y puede ser *transitoria,* si un monarca es llamado accidentalmente á reinar sobre los dos Estados, como sucedió con Austria y España bajo Cárlos V, ó *permanente,* si la corona de ambos Estados pertenece á la misma dinastía y se trasmite por herencia, como en Austria-Hungría: 3° cuando los Estados, consultando á sus propios intereses y aspiraciones, se unen para ser dirigidos y gobernados en común *(unión real)*, aunque pueden conservar cierta independencia relativa en orden á legislación y administración, por ejemplo, la de Noruega y Dinamarca y la de Castilla y Aragón.

En todas estas formas de unión hay en realidad un Estado complejo, pues, de un lado, aparece un solo Estado con una sola dirección y gobierno para los fines comunes á los Estados unidos, y de otro lado, éstos conservan su existencia y aun su gobierno y legislación propias, para lo que les es peculiar.

Hay además otra forma de unión completa ó *plena*, cuando á los Estados primitivos sustituye un nuevo y simple Estado, como los producidos por la unión de Escocia primero y después de Irlanda á Inglaterra, y por la incorporación á Prusia de los principados de Hoenzollern y otras provincias.

Pueden también formarse secundariamente nuevos Estados: ya por *división* de otro anterior, cuando los intereses encontra-

dos ó las aspiraciones distintas, ó las diversas nacionalidades, artificiosamente ó por la fuerza unidas, se separan al cesar la acción de tal fuerza, como la división del imperio de Alejandro y la de Bélgica y Holanda: ya por *sucesión*, como ocurría frecuentemente en la Edad Media, cuando los reyes disponían de sus Estados como de cosa propia distribuyéndolos entre sus hijos: ya por *insurrección* de una parte del Estado, que se proclama independiente, como la de Portugal y los Paises Bajos con relación á España, la de Grecia respecto á Turquía y las de muchas colonias americanas, tanto del Norte como del Sur, respecto á sus metrópolis.

Entre los modos *derivados* se cuentan: 1° la *colonización;* ora con espíritu mercantil ó industrial y constituyéndose á imitación de la antigua patria, como las colonias griegas; ora con fines militares y de dominación, como las de Roma; ora como las de los tiempos medios y modernos, motivadas por el deseo de engrandecimiento, por móviles civilizadores ó por huir de las persecuciones: pero realmente las colonias no son verdaderos Estados hasta que por su fuerza logran emanciparse y se hacen independientes: 2° la *concesión de los derechos de soberanía,* frecuente en la época del feudalismo y hecha de ordinario á los señores por los monarcas: 3° la *voluntad de un conquistador,* que dispone de los Estados, los separa, los une ó los organiza como le place, aunque suelen durar únicamente mientras dura su poder.

Por los modos de formarse los Estados es fácil conjeturar cómo pueden también morir ó desaparecer. La necesidad del orden y el sentimiento de la justicia llevan á las sociedades á organizarse en Estado; pues el desorden, la anarquía, las injusticias sistemáticas y la violencia los matan. Por la toma de posesión de un territorio puede constituirse en Estado un pueblo ó una nación errante; pues la emigración en masa ó la expulsión de sus habitantes acaban también con él. La conquista y la plena unión engrandecen un Estado; y la división de un Estado en muchos le hace desaparecer, como la concesión de los derechos de soberanía le empequeñece (1).

---

(1) V Bluntschli, *Obra cit.* Tomo I, págs. 217 á 234.

SECCIÓN SEGUNDA

ELEMENTO MATERIAL DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO

DEL SER HUMANO EN GENERAL

I—EXAMEN DE LA NATURALEZA HUMANA

Hallándose constituido el elemento material del Estado por los individuos que forman la agrupación, preciso es que conozcamos á estos, que sepamos que es lo esencial á su naturaleza y de lo que no pueden desprenderse, para deducir de aquí cuales son los sacrificios que el Estado puede exigirles sin aniquilarlos ni absorberlos, y qué es por otro lado lo que él debe de hacer en pró de los individuos: en una palabra, cuales son los derechos y deberes del individuo como miembro del Estado. Para esto, examinaremos al hombre, ó mejor al ser humano en sí, independiente de toda relación social, y después como miembro de la entidad política.

El hombre es un ser compuesto de espíritu y materia, con un destino que cumplir libremente, y dotado para cumplirle de facultades ó medios en armonía con su naturaleza y por lo tanto anímicas y corporales.

Que es compuesto de alma y cuerpo lo demuestra la antropología por la observación de las diferentes clases de fenómenos que en él se producen y por la imposibilidad racional de referirlos á un mismo ser: que tiene un destino que cumplir lo prueba la metafísica, fundándose en que todo lo creado lo ha sido para algo, á menos que no hubiera habido sabiduría en la creación: que este destino ha de cumplirse libremente lo demuestra la experiencia, por la que vemos la posibilidad que tiene el hombre de eludir la ley moral y las veces que la elude: que está dotado de facultades ó medios para realizar su fin, se deduce, según la misma metafísica, de la sabiduría y bondad del Criador, que no puede querer lo imposible ni sujetar al hombre á la perpetua tortura de luchar sin esperanza de vencer; y, por último, que estas facultades son físicas y espirituales lo demuestran la misma complejidad del ser humano y la prueba inducida de la observación de las especies diversas de actos humanos, además de la necesidad racional de que todo medio esté en relación con el fin para que ha de servir, y en armonía con la naturaleza del ser que ha de utilizarlo.

Cuando se estudia al hombre como miembro del Estado, la razón ve en su existencia y en sus facultades y aptitudes otras tantas condiciones para que realice su destino; condiciones por lo mismo respetables, que el Estado debe respetar y hacer que respeten los demás, y en las que se halla el fundamento de la personalidad política del individuo. De donde se infiere que la conservación de la existencia del hombre, ó su vida, la integridad de su ser como cuerpo y como espíritu, es decir, en todas y cada una de sus fuerzas materiales, por las que se proporciona la subsistencia, y en todas y cada una de sus facultades anímicas, sensibilidad, inteligencia y voluntad, por las que se desarrolla y progresa, no pueden ser destruidas ni mermadas por los demás individuos ni por el Estado, mientras no se hagan incompatibles con éstos por la falsa dirección ó el abuso de aquellas fuerzas ó facultades (1).

---

(1) Cuanto se diga del hombre, en orden á derechos y deberes, es aplicable á las personas colectivas, pues, aunque no sean propiamente *elementos* del Estado, pueden formar parte de él y tienen, como compuestas de individuos, la misma aptitud jurídica que estos.

II—CARACTERES DE LA PERSONALIDAD

El hombre es *persona* por conocerse: primero, como *causa libre* y origen inmediato de sus actos; y segundo, como *distinto* de los otros hombres en cuanto ser, aunque *igual* á ellos en sus elementos y en sus facultades esenciales. El primero de estos conocimientos, el de la libertad, es de conciencia y como de intuición inmediata no puede ser demostrado; pero obtiene el universal asentimiento de todos los hombres juiciosos, y se comprueba en todas las circunstancias de la vida normal, lo mismo al contemplarse el hombre en sí mismo, que al compararse con los demás, por lo que la *libertad* es, en nuestra opinión, el constitutivo de la personalidad en *sí*.

El segundo conocimiento, el de la distinción del sér y el de la igualdad fundamental de los elementos y facultades humanas, es producto de la comparación y como tal de la observación auxiliada del raciocinio. Por ésto, y teniendo su explicación en otros principios superiores, á la vez que es susceptible de demostración ha sido negada por algunos. De todos modos la igualdad de esencia, por la que sólo se afirma que todos los hombres son compuestos de alma y cuerpo, y que todos son inteligentes, libres y sensibles, aunque haya algunos que sistemáticamente se atrevan á negarla, es indudable que aparece, segun decía Donoso Cortés, como el fundamento y la condición primera de toda asociación, puesto que no habiendo igualdad no puede haber derechos y deberes recíprocos, sino que por parte de unos, los mejores, todo serán derechos, y por parte de otros, los menos perfectos, todo serán deberes; lo cual es precisamente lo que servía á Aristóteles para considerar la esclavitud como natural. En la *igualdad esencial* de naturaleza y facultades vemos nosotros, por tanto, el constitutivo de la personalidad en la *vida de relación* ó social; pero en la igualdad compatible con la distinción de desarrollo ó aptitudes, y no en la identidad.

CAPÍTULO II

DE LA LIBERTAD HUMANA

I—DE LA LIBERTAD EN GENERAL

Entendemos aquí por libertad "la facultad que tiene el hombre de elegir y obrar despues de haber deliberado.„ Esta definición, que expresa el concepto más genérico de la libertad humana, demuestra que para la existencia de la libertad es condición previa, indispensable, la de la razón, puesto que nadie delibera sino comparando motivos ó razones, esto es, juzgando. De la misma definición se deduce que la libertad no es esa decisión caprichosa por unos actos con preferencia á otros, que puede decirse ha servido á los *indiferentistas* para formular su sistema. Y creemos también que en esta definición se hallan contenidas las varias especies de libertad, tanto la moral, como la civil y política, pues así lo indican las palabras *elegir* y *obrar*.

La libertad de decidirse, como hecho, es indemostrable, ya lo hemos dicho, la siente cada uno de sí mismo, la ve en su conciencia al contemplarse como causa de sus actos reflexivos; pero si alguno no la sintiera en sí ó no la viera en su conciencia, probablemente se perdería el tiempo tratando de demostrársela. Esto no obstante, ha habido algunos, y precisamente filósofos, que la han negado fundándose en algunas razones más ó menos especiosas, contra las que y en pro de la libertad han formulado los filósofos sensatos algunas pruebas que pueden reducirse á las siguientes: primera, todas las razones, todas las promesas, todos los placeres y dolores, no son á veces bastantes para cambiar una volición, esto es, á querer lo contrario que se está querien-

do ó vice-versa: segunda, el sentido común de todos los hombres que se creen y confiesan responsables de sus actos, y el asentimiento universal de todos los pueblos que presuponen en sus códigos y leyes la existencia de la libertad como condición precisa de la validez de los actos y de la responsabilidad consiguiente: tercera, sin la libertad todas las ideas del orden moral carecerían de realidad objetiva, y las palabras bién y mal, mérito y demérito, premio, pena, etc., serían signos sin representación alguna, y la existencia de semejantes palabras en los idiomas sería la realización de un imposible, un efecto sin causa.

Aunque la refutación de las objeciones contra la libertad pertenece en rigor á la filosofía moral, relacionándose ésta intimamente con el derecho político, nos haremos cargo de las principales.

Julio Simón (1) las ha reducido á tres: 1ª El hombre no es libre; porque, lejos de dominar el mundo, está sometido á sus leyes: 2ª El hombre no es libre; porque cuando se imagina que sólo obedece á su libertad, cede fatalmente al influjo de la razón ó de la pasión: 3ª El hombre no es libre; porque la libertad humana es incompatible con el previo conocimiento ó presciencia divina.

La primera objeción se desvanece observando que en ella se confunde el querer con el poder, la voluntad con su instrumento.

La segunda objeción, que sólo es un resumen de las teorías deterministas, busca su fundamento en el principio de que ninguna cosa sucede ó existe sin causa suficiente. La futileza de la observación se nota fácilmente traduciendo la proposición con que se formula en una de estas dos sus equivalentes: "la libertad no es causa suficiente de ninguna cosa, luego es falso que sea origen de nuestros actos,„ ó bien, "todas las causas son fatales ó producen necesariamente sus efectos, luego la libertad no existe, porque no es causa fatal.„ La premisa enunciada de los dos entimemas anteriores es precisamente lo que se discute y, mientras no se pruebe por los deterministas, estamos en nuestro derecho al afirmar que la libertad existe, porque así nos lo dice la conciencia.

Como los deterministas fundan también su teoría en la fuerza de los motivos, algunos filósofos afirman que muchas veces se decide la voluntad sin motivo, como al entregar cualquiera de

(1) *El deber*. Parte prim. Cap. II, pág. 33. Trad. de Coronel y Abad.

las monedas de la misma especie en pago de una cosa. Julio Simón, teniendo en cuenta que esta afirmación lleva al indiferentismo y que es como una confesión de que "algo sucede sin causa suficiente,„ sostiene que el motivo existe siempre, aunque desapercibido muchas veces para la razón por su escaso interés. Opinamos también que hay siempre motivo; pero no creemos que sea desconocido, pues lo que pasa desapercibido para la razón es como si no existiera para ella, y siendo el conocimiento previo de los motivos, ó la deliberación, requisito de la libertad, ésta implica aquel conocimiento. Lo que sí creemos es que la indiferencia que la voluntad muestra en algunas ocasiones, por ejemplo, en la elección indistinta de las monedas en el caso propuesto, reconoce por causa el conocimiento perfecto que tenemos de su completa igualdad, como medios para el fin que nos proponemos, en cuyo conocimiento está el motivo que influye en la decisión; sin que importe á nuestra afirmación que el conocimiento de la igualdad de los medios le adquiramos por una comparación previa en cada caso ó le tengamos de antemano.

Joufroy sienta, contra los deterministas, que estos confunden la naturaleza de los motivos, y de aquí su absurdo al afirmar que el acto se determina por el motivo que más pesa en la balanza, y añade que es preciso distinguir entre las causas y los móviles de los actos; que las causas son las concepciones de la inteligencia, y los móviles los impulsos del corazón, por lo que, siendo heterogéneos, mal pueden ser apreciados por una medida común. Este argumento concluyente, cuya fuerza reconoce Julio Simón, creemos que no se desvirtua con la afirmación de éste, de que las ideas ó causas van siempre acompañadas de una pasión, porque muchas veces experimentamos un apetito fuertísimo, y la razón que le oponemos no va acompañada en un principio de ningún movimiento afectivo; y por otra parte, á medida que vamos añadiendo razones en pró ó en contra de un acto, nos vamos afectando más por el deseo de ejecutarle ó se va disminuyendo éste; fenómeno que en todo caso sirve para probar la influencia preponderante de la inteligencia en las otras dos facultades. Además, aun dentro de los mismos móviles hay heterogeneidad, y por lo mismo imposibilidad de apreciarlos por una común medida: nadie podrá decidir cual es mayor, si el placer de dar una limosna ó el de comer un manjar delicado; podrá decirse, es cierto, cual es racionalmente preferible ó por cual debe decidirse la voluntad, pero fijar su intensidad, su cuantía relativa, es imposible.

La tercera objeción, fundada en la pretendida incompatibilidad de la presciencia divina con la libertad, descansa sobre una base falsa, pues confunde el conocer con el querer, y tiene además la pretensión de comprender lo incomprensible de Dios, por ejemplo, su modo de conocer. Esta objeción, que un ateo no podría lógicamente formular, es incomprensible en un teista, porque creer en Dios y pretender que los actos humanos son indiferentes, como habrían de serlo sino fueran libres, es el colmo del absurdo; como lo es también negar á Dios, creyendo en él, algunos de sus atributos esenciales, su justicia y su bondad.

II—FASES Y LIMITACIONES DE LA LIBERTAD

La libertad no se manifiesta sólo interiormente, determinando á la voluntad para querer, sino también exteriormente en la persistencia de la volición hasta el obrar. Si no hay ninguna fuerza superior á la mia ó ningun obstáculo que á mi voluntad se oponga, soy libre no sólo al querer sino también al ejecutar. Esta libertad en el obrar es la causa de la responsabilidad por los actos externos, como la libertad en el querer lo es de los actos internos ó que se consuman en la conciencia. De aquí que la libertad pueda ser concebida por de pronto bajo dos fases distintas; como libertad *moral,* causa de la imputación y responsabilidad por los actos interiores; y como libertad *jurídica,* causa de la imputación y responsabilidad por los actos externos.

Como estos actos exteriores pueden clasificarse de muy varios modos, la libertad jurídica recibe diversas denominaciones según los actos á que se refiera; y siendo la clasificación más general de estos en actos que se refieren á la vida privada de los individuos, á su persona, familia y bienes, y actos que se refieren á la vida pública y social, la distinción fundamental de la libertad jurídica será en libertad *civil* y libertad *política.* Aquella, condición necesaria para la realización del fin del hombre, y ésta, medio para conservar la civil; de modo que la libertad política y los derechos que implica son la verdadera y eficaz garantía de la libertad y derechos civiles.

Acerca del carácter de cada una de estas fases de la libertad se ha discutido largamente; lo que tiene su razón de ser en las

consecuencias prácticas que entraña la determinación de tal carácter para restringir sus manifestaciones, ó no fijarlas ningún límite. Examinemos sucintamente esta cuestión.

"Siendo el hombre un ser finito, limitado y relativo, ninguno de sus atributos ó facultades puede ser absoluto, y como la libertad es una facultad humana, estará sujeta á ciertas limitaciones.„ Hé aquí, poco más ó menos, el razonamiento formulado por los que no se avienen con la proclamación de los derechos naturales del hombre como absolutos, imprescriptibles é inalienables; y si con tal proclamación quiere indicarse que la libertad se ejerza caprichosamente, que no hay regla alguna que la dirija, que el hombre eligiendo como quiera obra conforme á su derecho y por consiguiente siempre bien, en este caso no cabe duda de que la proposición contra lo absoluto de la libertad es verdadera. Mas, si esta proposición significa que hay ocasiones en que el hombre en el pleno uso de sus facultades no se decide libremente, que hay ciertos motivos que le atraen de un modo irresistible, tanto vale como afirmar que el hombre es libre unas veces y otras no. Es cierto que la libertad no es absoluta, porque no existe por sí, ni depende de su naturaleza el existir eternamente, ni es una sola libertad sino muchas, tantas como hombres, ni se ejercita siempre; sino que existe por Dios y mientras Dios quiera; coexiste con otras, y sólo se ejerce cuando el hombre va á resolverse ó á obrar; todo lo cual le da un carácter relativo, condicional y limitado; pero afirmar que la libertad *siendo, no es,* que la facultad de elejir existe en algunos casos sólo á condición de que se elija una cosa dada es contradictorio y como tal absurdo.

Nosotros, pues, llamaremos limitaciones de la libertad, no á las causas que la anulan siquiera sea momentáneamente, porque nosotros las negamos, sino á los motivos que por su carácter de generalidad y perpetuidad solicitan la voluntad constantemente. Estos motivos son de dos clases, según se deduce de las dos especies primordiales de la libertad: morales y jurídicos. Los primeros son todos los preceptos de la moral, cuyo fundamento está en las relaciones entre la criatura y su Criador; y los jurídicos están constituidos por los preceptos del derecho natural ó del positivo, que tienen su fundamento en la coexistencia de seres iguales por su naturaleza.

CAPÍTULO III

DE LA IGUALDAD

I—IGUALDAD ESENCIAL HUMANA

No pretendemos definir la igualdad, porque su concepto es demasiado claro para que pueda ser equivocado; ni discutiremos si es una cualidad ó una relación, porque á nada conduce para nuestro fin particular. Sólo sí sentaremos que la idea de igualdad no la adquirimos hasta que comparamos dos cosas; que por consiguiente la obtenemos relacionando seres ú objetos; que no se da sin esta relación; y que por lo mismo, al enumerar los caracteres constitutivos de la personalidad, dijimos que la igualdad lo era en la vida de relación porque no se concebía sin ella, así como la libertad lo era de la personalidad en sí ó individual, por la razón contraria. Pero, si la idea de igualdad en general es clara, se puede concebir de varios modos y, según la distinta manera de concebirla, puede ser una verdad ó un error cuando se dice de un objeto. Así sucede al afirmar que un hombre es igual á otro: esta proposición es verdadera, si con ella queremos indicar que todo hombre tiene las propiedades fundamentales del ser humano, como fuerzas físicas y anímicas; y falsa, si queremos indicar que la forma, el desarrollo de las fuerzas, etc., es igual en todos los hombres. De aquí que la igualdad pueda ser *esencial* ó *accidental*, según se considere en lo esencial ó en lo variable de los objetos. Hecha esta distinción, afirmamos que la igualdad de esencia es constitutiva de la personalidad en la vida de relación, ésto es, que todos los hombres son esencialmente iguales; así como también concedemos que son desiguales en lo accidental, en el desarrollo de sus aptitudes.

Para demostrar que todos los hombres son iguales esencialmente, se pueden emplear dos procedimientos; ó la observación, ó el puro raciocinio; pero, en todo caso, será preciso concluir que todos los hombres están dotados de alma y cuerpo, que las propiedades constitutivas de éstos son iguales en todos los hombres, y que no hay hombre alguno que tenga más elementos y propiedades que otro. Esta observación y la demostración consiguiente se hallan encomendadas á los antropologistas fisiólogos, psicólogos y metafísicos, por lo que nosotros nos limitamos á consignar los resultados de sus observaciones y raciocinios.

La experiencia *fisiológica* ha probado que en la composición de todo cuerpo humano entran los mismos elementos simples; que la combinación de éstos da también por resultado en todos ellos sustancias análogas, como son los huesos, nervios, tejidos, sangre, etc.; que la disposición particular de estas sustancias es también análoga en todos; que las funciones ejercidas por todo cuerpo humano, tanto las de la vida vegetativa como las de la sensitiva, son idénticas y se ejercen por órganos iguales, y que las diferencias que entre los hombres se notan son relativas, no al número, ni á la disposición de los elementos y órganos, sino á su mayor ó menor desarrollo, á su forma más ó menos pronunciada, al color y otras accidentales, que, sino todos las han explicado de un modo satisfactorio, no por eso es menos cierto que no entrañan ninguna esencial diferencia.

La experiencia *psicológica* demuestra la igualdad esencial de los hombres, porque en todos revela un alma dotada de los mismos atributos y facultades, sensibilidad, inteligencia y voluntad; conocimiento que se obtiene por la observación de los distintos fenómenos que en el hombre se producen y la necesidad de referirlos á causas, diversas entre sí, pero las mismas para cada clase de aquellos.

Metafísicamente se comprueba esta igualdad, según los filósofos que ven en la humanidad un ente con realidad objetiva, porque los elementos constitutivos de esa misma humanidad, los hombres, participan y están todos penetrados de su esencia; y en cuanto á los filósofos, para quienes la humanidad es una idea general, ven esta igualdad como incuestionable, puesto que las ideas generales representan lo común, lo que igualmente puede decirse de todos los seres ú objetos contenidos en la idea general.

La igualdad esencial del hombre es, pues, indiscutible como

hecho é independientemente de las teorias sobre su origen, ya sea éste por creación directa, ya por trasformaciones sucesivas; y aun bajo el punto de vista del origen la mayoría de los filósofos, de acuerdo en esto con el Génesis, afirman la unidad de la especie humana, el origen de un tronco común. No debe, por lo mismo, causar extrañeza que el cristianismo proclamara la igualdad de la naturaleza humana, llamando hermanos á los hombres; sin que por eso tratase de abolir las jerarquías sociales, ni intentara destruir las diferencias individuales provenientes, no de lo esencial y constitutivo del hombre, sino del mayor alcance y desarrollo de sus facultades.

Esta igualdad esencial, como constitutiva de la personalidad en la vida de relación, sirve, lo mismo que la libertad, de fundamento á los derechos del hombre; pero su consideración ha llevado á algunos utopistas, de buena ó de mala fé, á pretender para todos los hombres una igualdad absurda y comprensiva no sólo de todos los derechos, sino tambien de todos los medios morales y materiales que sirven para satisfacer necesidades, y destructura de las clases. Por esto es preciso fijar bien los derechos que se derivan de la igualdad esencial, y puesto que en la igualdad de naturaleza se fundan los que piden para todos los mismos derechos, si esta igualdad es sólo esencial, que sólo se concedan los mismos derechos esenciales, y donde haya diferencias, que sean tambien distintos los derechos, porque, según dijo un filósofo, "la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente á los seres desiguales.„ Para proceder, pues, con método quedará sentado: 1° Que hay igualdad fundamental de disposiciones y facultades según queda demostrado: 2° Que hay desigualdad en el desarrollo y aplicación de las mismas, según puede comprobar cada cual por sí mismo; y 3° Que la igualdad y las desigualdades, sobre todo de las potencias anímicas que son las más notables, importantes y, permítase así, humanas, se inducen por las manifestaciones de la actividad del hombre.

II—TEORIAS PRINCIPALES SOBRE LAS DESIGUALDADES HUMANAS Y SU ORIGEN

Las teorias relativas al origen de las desigualdades humanas pueden clasificarse por de pronto en dos grupos, según que la causa de las mismas está en la naturaleza interior del hombre,

ó son producto de causas exteriores. Unas y otras se distinguen también según que se considere al hombre bajo el punto de vista psicológico, ó bajo el aspecto fisiológico, ó se atienda á que las causas exteriores productoras de la desigualdad provienen unas de la voluntad humana y otras de las leyes naturales (1).

Principiamos la exposición y juicio crítico de estas diversas teorias por la primera clase de las enumeradas, porque es la más antigua. Los fundamentos de esta teoría puede decirse que los echó Platón al hacer el paralelo entre las facultades del alma y las clases sociales, deduciendo del examen de aquellas que así como en el alma hay inteligencia que dirige, voluntad que quiere y sensibilidad que goza y sufre, así también la buena organización social, la organización natural, exige que haya tres clases de hombres, *gobernantes* (filósofos) que dirijan, *guerreros* que defiendan la sociedad y *pueblo,* ó *artesanos,* que trabajen y obedezcan sin dejarse arrastrar por las pasiones. Tal división de la sociedad en clases, si sólo fuera expresión de la división del trabajo, del ejercicio de las aptitudes humanas según su predominio, no sólo no sería errónea, sino que se encuentra en toda sociedad; pero es el caso que Platón, al hacer distinción semejante, pretendió establecer una linea divisoria entre los hombres (2), prohibiendo á los de una que invadieran el campo de las demás, como si en los pertenecientes á la una hubiera solo inteligencia y en los de las restantes sólo voluntad ó sensibilidad respectivamente y no estuvieran todos dotados de las tres facultades.

Aristóteles en su *Política* establece más paladinamente la diferencia fundamental que, según él, existe entre los hombres. Preocupado su espíritu, como no podía menos de serlo en tan gran pensador, por el hecho de la esclavitud tan universal en su época, quiso hallarle explicación y cayó en el error de pensar que este hecho se fundaba en la naturaleza que hacía desiguales á los hombres. "Algunos seres, decía, desde que nacen están destinados á mandar, mientras que otros lo están á obedecer. El ser vivo está compuesto de un alma y de un cuerpo, hechos, aquella para mandar y éste para obedecer....: el alma manda al cuerpo como un dueño y la razón al instinto como un magistrado, como un rey; y nadie puede negar que es conveniente para el cuerpo obedecer al alma, y para la parte sensible de nuestro

(1) Ahrens, *Derecho natural*, 5ª edicion española, pgs. 218 y 219.
(2) Donoso Cortés, *Lecciones en el Ateneo*, Lec. 3ª Teoría del Despotismo.

ser obedecer á la parte inteligente..... Esta es también la ley que debe reinar entre los hombres. Cuando uno es inferior á otro, como lo es el cuerpo al alma ó el bruto al hombre; caso en el que se hallan todos aquellos de quienes lo mejor que puede esperarse es el empleo de sus fuerzas corporales, el inferior es esclavo por naturaleza.„ Llevado de su idea no sólo establece que unos son superiores y otros inferiores por sus dotes intelectuales, sino que se aventura á afirmar que los cuerpos de los hombres libres son diferentes de los de los esclavos, concluyendo en definitiva que "unos hombres son naturalmente libres y los otros naturalmente esclavos, y que para éstos la esclavitud es tan útil como justa.„

El extravío de los dos genios de la filosofía griega en esta materia no puede mirarse como un hecho fortuito, dado el alcance de sus poderosas inteligencias; así que una observación algo detenida encontrará algunos motivos que, sino legitiman completamente tal aberración, por lo menos la disculpan, y entre estos motivos pueden mirarse como principales: 1° La universalidad, ya notada, de la esclavitud en el mundo antiguo: 2° La ignorancia del dogma cristiano de la unidad de la especie humana como procedente de una sola pareja: 3° El antagonismo político entre los pueblos, que los llevaba á considerar á los extranjeros como *bárbaros* y de distinta naturaleza; y 4° La falta de observación concienzuda y de atento estudio que los llevó á establecer una completa analogía entre la naturaleza del individuo y de la sociedad, atribuyendo á ésta una organización igual á la de aquel, y localizando caprichosamente en las diversas clases sociales cada una de las facultades que vieron en el individuo.

En los tiempos modernos se ha resucitado el antiguo paralogismo á propósito del *proletariado*. Primero Hugo en Alemania juzgó la esclavitud del mundo antiguo tan natural como la miseria en el mundo moderno; y despues Granier de Casagnac en Francia sentó que el proletariado, esto es, la existencia de una clase indigente y menesterosa era una ley natural y constitutiva de las familias humanas, un hecho legítimo y providencial (1). Tan lejos estaríamos de juzgar providencial este hecho, si fuera necesario, que nos parecería más bien una acusación á la Providencia, porque supondría una de dos; ó que las facultades de que el hombre está dotado no son bastantes para proporcionar-

(1) Ahrens. *Derecho natural*, pág. 221.

le, ejercitándolas, los medios de vida, ó que la tierra y las fuerzas naturales auxiliadas, ó mejor, dirigidas por el hombre son impotentes para producir los recursos necesarios para la existencia de éste. Tal doctrina que, de convertirse en hecho, sería la sanción más explícita de la célebre ley de población de Malthus, no sólo subleva contra sí la razón y la dignidad humana, sino que ha sido combatida también victoriosamente, aunque de un modo indirecto, por algunos economistas al proponer remedios más ó menos eficaces contra la plaga del pauperismo, y sobre todo al consignar, basados en la experiencia, que este es un hecho nuevo, contemporáneo del proletariado y efecto de las mismas causas (1). Y en efecto, si es un hecho nuevo, no es ley de la humanidad, y mucho menos necesario. No negamos que el desarrollo prodigioso de la industria fabril, que la invención de las máquinas y su aplicación á las grandes fabricaciones hayan originado la aglomeración de muchos individuos y, como consecuencia, la disminución del precio de la mano de obra por efecto de la concurrencia, y tal vez el embrutecimiento y la degradación de la clase obrera producidos por su estado precario y falta de roce con las clases más elevadas; pero aun así, creemos que éste hecho, circunscrito por fortuna á los grandes centros industriales, ni establece entre los hombres una valla insuperable, ni sería irremediable si los socorros, aun más intelectuales y morales que materiales, se difundieran por la caridad bien ordenada, por la verdadera filantropía. Por otra parte, si el proletariado fuera un hecho necesario, se deduciría que la explotación de la clase proletaria por las superiores sería legítima, á la manera que la esclavitud lo fué, según Platón y Aristóteles.

Más grave, si bien no muy fundado, otro sistema ha explicado por las variaciones en la constitución física del hombre, es decir, por la *diferencia de razas,* la desigualdad humana.

Mr. Courtet de l'Isle establece, que en el género humano hay una división de razas que representa grados análogos á las especies del reino animal, y cuyos tipos no son debidos á circunstancias exteriores como la educación, el clima, las costumbres etcetera; que entre las diversas razás hay una desigualdad natural de inteligencia, derivada ó respondiendo con su diversa organización física; que, cuando y donde quiera que varias razas se asocian ó reunen, las unas ejercen inevitablemente la supre-

---

(1) Cherbuliez. *Dicc. de l'Econ. pol. de Coquelin.* Tomo II, p. 334.

macía, para lo cual poseen legítimos títulos, traduciéndose la diversidad primordial de razas en distinción de clases y rangos, cuando se trata de una sociedad constituida; y por último que, siendo estas desigualdades resultado inmediato de la creación y producidas por el Autor de todas las cosas, deben ser sostenidas, en obsequio á la paz, por la moral pública, por la religión y hasta por la misma gratitud que las razas menos inteligentes deben á las que las dirigen ó defienden. El autor citado presenta, para comprobar su doctrina, algunos datos anatómicos y fisiológicos, y refiere á la diversidad de razas los cuatro grados principales de la desigualdad humana, atribuyendo: el régimen de las *castas* á una diferencia de razas muy honda en los tiempos antiguos, en que los cruzamientos habían de ser muy raros; la *esclavitud,* á la asociación de dos razas naturalmente desiguales, de las cuales una por precisión habría de ser privilegiada; el régimen *feudal,* que viene á ser una esclavitud mitigada, á una desigualdad menos profunda, debida principalmente á la aproximación cada vez mayor de las razas; y por último, la organización de las *sociedades modernas,* con su tendencia marcada á la igualdad, á la compenetración de las razas y de los pueblos. Conocida la influencia decisiva que las razas ejercen en la organización social, su combinación producirá, según dicho escritor; ya el *orden* inalterable é indefinido, cuando se asocien dos razas desiguales, de las cuales una mande y otra obedezca; ya el *desorden* perpetuo, cuando la asociación se establezca entre hombres provenientes del mismo tronco y colocados por lo mismo en idénticas condiciones para mandar ú obedecer; ya finalmente *alternativas* de orden y desorden, cuando la combinación se realice entre razas que no sean completamente idénticas ni distintas.

Aunque la teoría precedente no fuera desmentida por el orden que se nota en muchos Estados donde se realizan cruzamientos continuos, no podría ser admitida, porque prescinde de la influencia que las ideas morales y religiosas ejercen en el progreso social y, haciendo abstracción completa de la naturaleza espiritual del hombre, cae en el materialismo.

Otras dos teorías, las de Rousseau y Montesquieu, nacidas casi al mismo tiempo, atribuyen las desigualdades humanas; una al *estado de sociedad*, y otra, á la influencia preponderante del *clima*. La primera de estas doctrinas afirma que la sociedad, multiplicando las necesidades humanas y estableciendo la propiedad ha creado para unos un manantial perenne de poder y de riqueza, y para otros un motivo perpetuo de esclavitud y de mi-

sería. Esta opinión, aunque errónea, es más justa que las anteriores, porque no desconoce la libertad del hombre. Otro tanto podemos decir de la teoría que atribuye al clima una influencia desmedida, no sólo sobre las instituciones sociales, sino también sobre las religiones y los gobiernos, y que, iniciada por Montesquieu, ha sido ampliada en los tiempos modernos, por Mr. Comte principalmente.

No sólo las instituciones y las costumbres de los pueblos tienen, según éste, su causa en el imperio del clima sobre el hombre, sino que los progresos de cada nación son relativos á la naturaleza de su suelo y á la posición que ocupa, siendo tan imposible que dejen de prosperar los pueblos que gozan de buenas condiciones topográficas y climatológicas, como que no perezcan aquellos otros colocados por la naturaleza en condiciones perniciosas. Estas son, en concepto del autor, leyes á que no puede sustraerse la humanidad. Los conocimientos se forman en los climas cálidos, se difunden en los templados y se detienen en los fríos. Los pueblos más inmediatos á los polos han sido siempre los más bárbaros. La esclavitud nace de la vecindad de dos países, uno estéril, habitado por cazadores y gente nómada, y otro fertil, poblado por labradores, que al fin son subyugados por aquellos. De esta teoría, combinada con los principios utilitarios de Bentham, podría concluirse; que los pueblos todos, así como los individuos, anhelando posiciones geográficas y climas mejores, podrían y tendrían derecho á invadir los paises más fertiles y templados; y de este modo la guerra y la conquista vendrían á ser impuestas por la naturaleza misma.

Todas estas teorías son erróneas, porque pretenden establecer, sobre una verdad parcial, un sistema completo. Es verdad que no puede negarse la influencia que sobre la organización política de las naciones ejercen el clima, la posición, el suelo, el genio propio de la raza y la diversidad de sus aptitudes; pero ninguno de estos elementos puede ser considerado por sí solo como el principio que determina las variedades de la organización social y las modificaciones que en ella introduce el transcurso del tiempo.

Despues que las teorías exclusivistas y extremas han agotado, por decirlo así, el error, aparecen los sistemas que, tomando lo bueno y desechando lo malo de los anteriores, conceden á cada uno lo que en justicia le pertenece, y tratan de armonizarlos refiriéndolos á un superior principio. Esto, que sucede en todos los órdenes de conocimientos, acontece también en los relativos á

la sociedad; por lo que no parecerá extraño que, al hablar de las desigualdades y su origen, sentemos como doctrina definitiva, que las desigualdades humanas sólo son accidentales; que no han sido producidas por una sola causa, pues además de mostrarnos la experiencia el grande influjo ejercido en el hombre y su modo de ser por el clima, la situación topográfica, la religión, las costumbres, las pasiones, etc., la razón nos dice que, estando el hombre compuesto de espíritu y materia, dotado de inteligencia y organismo, no debe suponerse que las influencias á que éste se halla sometido son incontrastables, y que el conocimiento de los fenómenos físicos y sus causas sólo ha de servirle de puro entretenimiento, sin que pueda explotarlas, ni dirigirlas para que no le perjudiquen.

III—CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA IGUADAD Y DE LAS DESIGUALDADES

Por tener el hombre necesidades, precisa medios de satisfacerlas; y, siendo éstos dados por la naturaleza, se traducen en derechos. Pero estos medios los constituyen las facultades ó fuerzas de que está adornado, y es indudable que, si á todos los hombres no se les permitiera igualmente ejercitar estas facultades, ó se establecieran condiciones distintas para cada individuo, raza ó casta, se principiaría desconociendo la igualdad fundamental, pues mientras á unos se les proporcionaban medios de cultura y progreso, á otros se les condenaba á la inmovilidad y al embrutecimiento; y esta inercia forzosa de algunos individuos, erigida en principio social, trasciende hasta el Estado y produce en él una inmoralidad análoga. Así ha sucedido en la India y demás pueblos que han sancionado la distinción de castas ó la esclavitud.

El respeto igual á todas las personalidades, representadas por las facultades y aptitudes que cada una debe ejercitar como le convenga, es el primer derecho ó la primera consecuencia jurídica de la igualdad de esencia.

La proscripción de toda medida que tienda á declarar previamente inepto á cualquier hombre por presunciones de nacimiento ú otras análogas, es otro derecho derivado de la igual-

dad. Esta exige que para el desempeño de ciertos cargos ó el ejercicio de ciertas profesiones no se reclamen de los candidatos otras condiciones de aptitud que las adecuadas al fin del cargo ó de la profesión: que no se exija, por ejemplo, la limpieza de sangre para ser militar, sino el valor y la pericia. En este derecho se contiene la abolición de privilegios. El privilegio supone ó declara á los unos de mejor condición que á los otros, é induce á creer que la sociedad se ha formado para beneficiar á aquellos á expensas de éstos; que mientras unos tienen sólo derechos, los otros tienen sólo deberes, y, por fin, que la sociedad, lejos de serlo, es la retención forzosa de unos hombres al servicio de otros que los emplean como medios ó cosas.

La opción de todos á todo lo que pueda ser medio ó condición de vida y progreso, según el alcance de sus aptitudes naturales, sin que la sociedad ó los demás individuos le susciten obstáculos arbitrarios; ó, lo que es lo mismo, que á nadie se niegue la posibilidad de serlo todo, según su aptitud, que sean comunes para todos las condiciones de vida ó cultura que facilita el Estado, es otro de los derechos derivados de la igualdad fundamental.

La igualdad formal, *ante la ley* según unos, ó *en la ley* según otros, puede considerarse, bien entendida, como la síntesis y sanción de todos los derechos derivados de la igualdad fundamental. Bien entendida decimos, porque, si se la exagera ó interpreta malamente, puede ocasionar graves errores y aun perturbaciones sociales. Si se pretende expresar por esta fórmula que todas las personas deben ser consideradas iguales para la aplicación de las leyes, el absurdo es evidente, porque en este caso la ley se aplicaría igualmente á los cuerdos que á los locos, á los niños que á los viejos, etc. Si, por el contrario, se pretende que sólo el hecho debe tenerse en cuenta por la ley, independientemente de las circunstancias que han concurrido en su ejecución, se viene á decir, poco más ó menos, lo mismo que en el caso anterior, y la monstruosidad no es menos palmaria, porque implica la aplicación igual de la ley al hecho ejecutado con libertad ó sin ella, por una persona avezada al crimen y por la que infringe por primera vez el derecho, por la que tiene perfecto conocimiento del hecho y de su relación con el derecho y por la que carece de este conocimiento ó le tiene confuso.

Si la fórmula, igualdad ante la ley, indica que la posición social de las personas, su jerarquía, sus riquezas, etc., no deben tenerse en cuenta en la formación ni en la aplicación de las le-

yes, y sí sólo las circunstancias relacionadas con el hecho que cae bajo la ley; en una palabra, que las mismas leyes rijan para todos los que se encuentren en las mismas circunstancias, y que todos estén sujetos á los mismos procedimientos al aplicarse las leyes, en este caso la inteligencia de la fórmula es racional y representa un verdadero derecho, acaso el más importante, porque contiene implícito el reconocimiento de todos los demás.

Todos los hombres tienen un fin ó destino ulterior análogo; pero acá en la tierra los fines que han de realizar son muy diversos, como lo indica la diversidad de dotes con que los hombres están adornados, pues mientras en los unos predomina la sensibilidad y son buenos artistas, otros tienen más desarrollada la inteligencia y dan grandes resultados en las ciencias: otros se hallan dotados de valor y energía para vencer los obstáculos más imponentes, y en otros se ha desarrollado la fuerza material. Esta diferencia de desarrollo en las facultades, que son sin embargo iguales esencialmente en todos los hombres, supone diversos fines, y estos, distintos deberes, y la diferencia entre los fines y los deberes, desemejanza entre los medios, ésto es, entre los derechos. Por eso sería un absurdo que se le concediera el derecho de patria potestad al que no tuviera los deberes de padre, ó los de esposo al soltero, ó al paisano y al lego los del militar y el eclesiástico. De la misma manera sucede en el terreno político, y puesto que aquí la diferencia está entre los que mandan y los que han de obedecer, dedúcese que la justicia exige de acuerdo, como siempre, con la razón que donde hay distintos fines que cumplir haya distintos medios que emplear, y que los derechos del que ha de dirigir sean diversos de los correspondientes al que ha de ser dirigido. Por otra parte, aunque se concedieran iguales facultades á todos los hombres, muchos de éstos no podrían ejercitarlas por suponer otras previas de que carecian, y tales facultades, no pudiendo ejercitarse, más que medios, vendrían á ser rémora para los fines humanos. El derecho electoral y el de ser amparado por la sociedad son, por ejemplo, diversos derechos correspondientes, el uno al inteligente, y al loco ó imbécil el otro, aunque análogos ambos á sus estados respectivos.

Las necesidades humanas son tan múltiples y variadas, que en vano intentaría satisfacerlas el individuo por sí mismo sin la cooperación de sus semejantes. La limitación de las facultades de éstos ha hecho preciso que se distribuyan entre sí la obtención de los diversos medios, ó lo que es lo mismo, ha hecho nacer la división del trabajo; es decir, que sin ésta cada cual hubiera

necesitado ocuparse en toda clase de trabajos, á menos que renunciase á satisfacer algunas necesidades. Será, pues, una falta de razón tener en menos á quien coopera á nuestra felicidad, y una falta de justicia no considerarle tan digno como á los demás porque sea baja su ocupación; por lo que concluimos sentando que esta dignidad igual de todas las manifestaciones de la actividad humana, es también una consecuencia jurídica de la igualdad esencial del hombre y de la desigualdad de sus aptitudes.

CAPÍTULO IV

DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y SUS CLASES

Pellegrino Rossi en su *Curso de Derecho Constitucional* (1) sienta que la verdadera división de los derechos del hombre que vive en sociedad y especialmente en un país libre es en *derechos privados, públicos* y *políticos*. Los primeros, porque hay relaciones entre individuos y familias que, si no estarían garantizadas sin la sociedad, pueden sin embargo concebirse existiendo fuera de ella. Los públicos ó sociales, porque apenas podrían ser concebidos fuera de la sociedad siendo, como son, expresión del desarrollo del hombre en el estado social. Así, la libertad individual, la de publicación del pensamiento, la de conciencia, etc., que son derechos públicos ó sociales, se distinguen perfectamente de la libertad de comprar ó de vender, que son meramente privados. Y por último, los derechos políticos, que consisten en la participación del poder social y no deben confundirse con los públicos, porque los políticos, por muy generales que quiera suponérseles, siempre implican una condición de capacidad, mientras que los públicos no suponen esta condición y sí solo la cualidad general de hombre. En otros términos, los derechos públicos son la cosa, y los derechos políticos la garantía, y si llegara un tiempo en que los derechos del Estado y del ciudadano pudieran estar garantizados por cualquier otro medio que no fuera el Gobierno, no habría derechos políticos, y sí solamente públicos.

Partiendo nosotros, como Rossi, de los varios puntos de vista

(1) Tomo I, *Lec. 1ª*, págs. 9 y siguientes.—París, 1866.

en que puede considerarse al individuo, aunque haciendo distinción entre la sociedad en general y la sociedad política, creemos que la clasificación menos expuesta á errores y que tiene más importancia en el derecho público constitucional es la que distingue los derechos del hombre en *naturales* (1), *políticos y mixtos*, según que deriven inmediatamente de la naturaleza y correspondan al hombre como tal é independiente de su consideración en el Estado, por tener su fundamento en la igualdad esencial ó específica; ó los tenga principalmente en relación con dicho Estado y no sean eficaces hasta que la ley positiva los declara y sanciona, por tener su fundamento en la desigualdad individual de aptitudes; ó ya finalmente participen de un doble carácter y origen.

Los derechos naturales han sido llamados *individuales*, porque pertenecen á todo individuo de la especie humana; *ilegislables*, porque se ha dicho que la ley no puede darles existencia, ni quitársela, modificarlos, ni restringirlos; *imprescriptibles*, porque su falta de ejercicio, sea cualquiera la causa que la produzca y sea cualquiera el tiempo porque dure, no puede hacerlos desaparecer; *inalienables*, porque ni aun la misma voluntad del individuo puede privarle de ellos; y por fin, *absolutos*, porque se les supone independientes de toda circunstancia y relación. Veamos si estas denominaciones son ó no aceptables.

Respecto á la de *individuales* no cabe duda que es propia, pues no hay uno sólo de los individuos que no tenga todos los derechos naturales: á todos corresponde el derecho de vida, á todos el de trabajar, á todos el de propiedad. Es cierto que la vida de los unos aparece como más precaria, que el trabajo de los otros es menos productivo, que los bienes que constituyen la propiedad de cada cual no son iguales ni en número, ni en valor; pero todos, absolutamente todos, tienen igual derecho á que se respete su vida, tal como sea; á que se les permita ejercer sus facultades como pueda, ya sean de esta ó de la otra clase y de mucho ó de poco alcance; á que no se les usurpen los bienes que constituyen su propiedad, sean muchos ó pocos; porque esa vida, ese trabajo y esa propiedad son otros tantos medios que, funda-

(1) También se ha llamado á estos derechos *innatos* ó *nativos*, pretendiendo que esta denominación es más propia, puesto que todos los derechos son naturales en el sentido de que todos son conformes á la naturaleza. Sin embargo, preferimos la indicada en el texto; porque con ella se les ha designado varias veces al tratar de declararlos; porque es también corriente en política, y porque estos derechos son los únicos que directa é inmediatamente provienen de la naturaleza.

dos en la naturaleza, sirven al hombre para realizar su destino.

La palabra *ilegislables* puede tomarse en dos acepciones: ó significando que son anteriores á la voluntad del legislador é independientes de él; ó que el legislador nada puede respecto á ellos, ni aun regular su ejercicio. En el primer sentido es indudable que los derechos naturales son ilegislables, puesto que tienen su origen en la misma naturaleza como condiciones necesarias de vida ó de progreso: no asi en el segundo, pues surgiendo enfrente de los derechos de uno, los derechos de los demás, la vida social sería imposible si todos quisieran prevalecer y no hubiera quien, determinando la esfera de acción de cada uno, evitara las colisiones de derechos y las consiguientes perturbaciones sociales. El decir que los derechos naturales tengan su origen inmediato y directo en la naturaleza no implica que los derechos, cuyo origen inmediato está en la ley ó en la voluntad de los individuos concurriendo sobre un objeto, no sean verdaderos derechos, siempre que su fundamento esté en la naturaleza, como decíamos en la definición, ó sean conformes á ella.

Que son *imprescriptibles* é *inalienables* lo demuestra su misma necesidad como medios indispensables para la realización del fin del hombre. La prescripción de tales derechos, que no puede fundarse en las mismas razones que la prescripción de otros derechos secundarios (1), sería un acto de despotismo si por la ley se estableciera, y la enagenación de tales derechos por el individuo supondría en el mismo perturbación mental, porque es inconcebible que el hombre quiera por su propia voluntad privarse de los medios indispensables para conseguir su fin, y sería además incompatible con la necesaria subordinación del orden jurídico al moral. Los derechos naturales ó innatos son, como dice Prisco, inalienables en cuanto lo son los deberes para cuyo cumplimiento sirven. Veamos ahora si les cuadra la denominación de *absolutos*.

Absoluto según la Academia, tanto vale como *independiente, ilimitado, sin restricción;* lo que no tiene respecto ni *relación* á otra cosa. Ahora bien; derechos naturales son los que tienen su fundamento y origen en la naturaleza; pero la naturaleza hu-

---

(1) La prescripción ordinaria se funda, ya en la necesidad de dar fijeza á la propiedad, ya en la de amparar al poseedor de buena fé, ya en la presunta voluntad del antiguo poseedor, ya, en fin, en el deseo de evitar á la sociedad el dictado de vengativa, como sucede en la prescripción penal.

mana no es independiente; ni existe, ni es como es por sí, sino por la voluntad del Criador, y por lo mismo depende completamente de él: pues si la causa, si el origen, que es la naturaleza, no es independiente, menos lo serán los derechos que son su efecto, que se derivan de ella, á no ser que se desconozcan las verdades primitivas, pretendiendo que el efecto pueda ser contrario á la naturaleza de la causa. Que no son ilimitados se demuestra observando que el sujeto de tales derechos ha de coexistir con otros dotados de análogos derechos, y precisamente por coexistir los tienen y los necesitan: así, mi derecho á la vida sólo existe mientras yo no atente contra la de los demás y los ponga en el caso de ejercer el de su justa defensa; el que tengo á trabajar se restringe por el respeto debido á la propiedad ajena y circunstancias de lugar y tiempo; el de locomoción, por otro idéntico de los demás, etc., etc. No menos evidente es que dicen respecto ó relación á otra cosa, porque están subordinados; primero á la naturaleza humana, y despues á los fines que el hombre por ellos ha de realizar, puesto que por ser medios son derechos. Estos fines por otra parte no dependen del hombre, porque no se los ha impuesto él á si mismo sino que sólo son debidos á la voluntad del Hacedor.

No son, pues, los derechos naturales absolutos en el verdadero sentido de la palabra, aunque puede admitirse esta denominación significando que existen independientemente de toda ley positiva ó voluntad humana.

Estos derechos son principalmente *la integridad del sér con la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la libertad y sus manifestaciones y la propiedad.*

Los derechos políticos, ó atribuciones del hombre como miembro del Estado para intervenir en la organización de éste y en el desempeño de los cargos públicos, sólo se conciben, como hemos dicho, dentro de la sociedad política, y su origen se halla en la ley positiva, sea cualquiera, por otra parte, la persona ó institución donde residan el poder legislativo y la soberanía. No quiere decir esto que la ley política no deba conformarse con la natural al hacer la declaración de estos derechos y de las personas á quienes se concedan, si no que, sean cualesquiera las condiciones y aptitud que el hombre-ciudadano tenga para ejercerlos, no los posee hasta que la ley se los reconoce.

Tales derechos son por su naturaleza eminentemente *relativos*, porque dependen de la capacidad especial que la ley exige

en las personas á quienes se han de conceder; *son legislables* porque no sólo son regulados por la ley sino que de ella se derivan inmediatamente, y, por fin, son *amisibles* y *renunciables*, porque su existencia depende de la ley y su ejercicio de la voluntad del poseedor.

Como se vé la diferencia entre los derechos naturales y los políticos no puede ser más palmaria: aquellos tienen su orígen en la ley *natural* ó *divina*; éstos en la *positiva* ó *humana*; aquellos son *imprescriptibles* é *inalienables;* éstos son por el contrario *amisibles* y *renunciables:* es verdad que ambos son *legislables* y que ninguno de ellos es *absoluto;* pero los naturales sólo son legislables en su ejercicio, y los políticos lo son también en su nacimiento, y la relación ó dependencia de los naturales es, digámoslo así, más noble puesto que dependen de la naturaleza, ó mejor de Dios, que es inmutable, mientras que los políticos dependen de cosa tan efímera como la ley humana. Por eso los derechos naturales son de todos tiempos y lugares, y de los viejos lo mismo que de los jóvenes, de los sabios como de los ignorantes, de los varones como de las hembras y de los cuerdos como de los locos, mientras que la existencia de los políticos es de fecha muy reciente, limitada á algunos paises y sólo concedidos á algunos hombres. Por último, los primeros satisfacen necesidades particulares y los segundos generales.

De lo dicho se infiere que, si estos derechos no se conceden á todos los individuos, no podrán llamarse individuales. Pero ni se conceden ni deben concederse á todos. Si el ciudadano desea intervenir en la gestión de la cosa pública, ya organizando, ya gobernando, ya administrando, sólo podrá reclamar dicha intervención á condición de poder desempeñar bien su cometido. Por eso, ni aun los individualistas más acérrimos se los conceden á todos los ciudadanos, sólo por el hecho de pertenecer al Estado, sino que exigen ciertas condiciones de capacidad, excluyendo no sólo á los locos, criminales, mujeres, niños, etc., sino también, en muchos casos, á los que no saben leer y escribir, y á las personas cuya perversión moral ó cuya falta total de independencia hacen racionalmente suponer que no usarán bien de estos derechos.

Los derechos políticos son dos: el *electoral* y el de *opción á los puestos públicos.*

Los derechos mixtos, como que participan del doble carácter de naturales por su origen, y de políticos por el medio donde forzosamente han de ejercerse, pueden ser considerados de muy

diverso modo, según la fase que en ellos aparezca predominando al estudiarlos en cada individuo y en cada situación y circunstancias, y según que hayan de ejercitarse, principalmente para fines individuales, ó para fines de interés social y público.

Son derechos mixtos el de *emisión y publicación del pensamiento,* el de *petición,* el de *reunión y asociación* y el de *resistencia á la opresión.*

CAPÍTULO V

DE LOS DERECHOS NATURALES

I—INTEGRIDAD DEL SER Y SEGURIDAD PERSONAL

Es el primer derecho del ser humano su integridad, porque en ella encuentra el primer medio, la primera condición para el cumplimiento de su destino. En efecto, la integridad de un ser consiste en que no le falte ninguno de sus elementos, en que no se le cercene ninguna de sus facultades ni de sus miembros; de manera que á la integridad del ser-hombre se oponen jurídicamente las mutilaciones, las perturbaciones mentales voluntariamente producidas, el menoscabo de su dignidad ó consideración personal y la pérdida de su independencia. Porque, si Dios al crear al hombre le dió, como necesarios ó como útiles auxiliares para realizar el fin que le impuso, sus facultades, sus miembros y sus órganos, atentar contra la existencia de una sola de estas facultades ó aptitudes es atentar contra la obra de Dios y querer privar al hombre de los medios adecuados á su fin. Así lo han reconocido todos los pueblos cultos, proscribiendo de sus códigos criminales las penas infamantes y las que consistian en mutilaciones y otras análogas, propias de los siglos y de las sociedades bárbaras y no legitimadas, ni aun disculpadas, por ninguna razón sólida.

Pero no debe olvidarse que los derechos del hombre ni son absolutos ni ilimitados, porque coexisten con los demás, y desde el momento en que al derecho de uno intenta oponerse el dere-

cho de otro, haciéndose incompatibles, alguno ha de ceder, dejando el puesto á su antagonista. Ahora bien, si todos los derechos, ó mejor los derechos de la misma especie, son igualmente respetables en todos los hombres ¿cómo determinar en justicia qué derecho ha de prevalecer siendo ambos derechos y los dos iguales?

Enunciada de este modo, la cuestión se presenta irresoluble para la razón humana; es más, tal colisión de derechos repugna á la razón (1); de lo que nosotros deducimos que, más que colisión de derechos, hay en el fondo solamente pugna de hechos que pretenden á la vez para sí el nombre de derechos. Y así es en verdad; el criminal que invoca para su libertad de acción el dictado de inviolable, y la sociedad ó el poder público que le priva, por ejemplo, de la libertad de locomoción en nombre del orden social, pretenden el derecho cada uno para sí, pero en realidad sólo está de parte de uno de los dos: para resolver quien le tiene, preciso es recurrir á la ley que regula tanto la libertad del individuo como la acción social, esto es, á la ley natural, y esta nos dirá cual de los hechos es derecho verdadero y cual lo es supuesto. Si un hecho, una facultad ó una persona se hicieran incompatibles con el hecho, la facultad ó la existencia de otra persona, aunque cada una pudiera existir aisladamente como derecho, al relacionarse, al ponerse en contacto, dejan de ser derechos los de una parte y sólo prevalecen como tales los de la otra. Si la existencia de la persona social y la de la individual se hacen incompatibles, si lo fueran el orden social y la libertad individual, si lo son por último los supuestos derechos de las personas particulares entre sí, no debe olvidarse que el derecho verdadero solo puede estar del lado de uno de los contendientes y que la ley natural, puesto que los derechos que se discuten son naturales, debe decidir cual ha de subsistir y cual ha de desaparecer.

En esta observación se halla el fundamento racional de las

---

(1) Repugna en efecto á la razón que los medios de que dispone un hombre sean incompatibles con los de otro con quien ha de coexistir, siendo unos y otros concedidos á cada cual por la naturaleza, para que realice su destino.

La doctrina sentada en el texto tiene también su confirmación en la ley general que Prisco establece para resolver los conflictos jurídicos. *Si hay,* dice, *colisión entre dos derechos diversos en sí ó en su ejercicio, el verdadero derecho es aquel que resulta de un orden superior.* De esta ley general nacen otras particulares, entre las que son más de notar las fundadas en la *importancia del objeto,* ó en la *universalidad del bién,* ó en la *evidencia del título.* V. *Dcho. indiv.* L. I, cap. XI.

limitaciones impuestas al ejercicio de toda clase de derechos, tanto naturales como políticos, y ella sirve también para explicar porqué la pena de muerte, por ejemplo, atentatoria cual ninguna contra la integridad del ser, halla á veces su disculpa y aun su justificación en una suprema necesidad social.

En este derecho se hallan virtualmente comprendidos el de *dignidad personal*, derivado de que el hombre tiene finalidad propia; el de *honor* y *fama*, en cuanto la consideración de sus semejantes le es medio útil para su fin, y el de *independencia*, puesto que para cumplir su fin ha de obrar por sus propios impulsos y aspiraciones.

Como desarrollo del derecho á la integridad del sér puede considerarse el llamado de *seguridad personal*, que se ha explicado de varios modos teniendo en cuenta la distinta significación de la voz *seguridad*.

La seguridad personal equivale á la protección especial que en el Estado deben hallar las personas contra cualquiera mal ó daño que pudiere inferírseles, ya por simples particulares, ya por personas públicas, á menos que tal molestia ó daño fuera inevitable, ó merecida por la conducta del que le sufre. En un sentido aun más extricto, indica este derecho en las constituciones modernas que la vida y la libertad de los individuos sea respetada y garantida por la ley, no pudiendo ser presos ni arrestados, ni detenidos, sino por alguna causa justa y llenando las formalidades previas exigidas por las leyes para evitar arbitrariedades.

El fundamento de este derecho es el mismo con leves diferencias que el asignado al anterior, del cual es necesario complemento, pues refiriéndose ambos al ser y á sus facultades, considerado todo bajo un aspecto general, y siendo el individuo, no sólo respetable en sí mismo, sino necesario para la existencia de la sociedad, la justicia juntamente con el interés social exige que se garantice al individuo la plenitud de su sér, el ejercicio de sus facultades y el empleo de sus fuerzas, ya que ni los fines individuales pueden realizarse sin estas condiciones, ni el progreso ó perfeccionamiento social obtenerse, sinó precede la conservación y mejora de los individuos que componen la sociedad.

Sin embargo, y conforme á lo dicho más arriba, si el individuo, abusando de su libertad, atentare contra la libertad ó derechos agenos, ó contra el orden público, podrá ser castigado en una ó en otra forma, siempre que se respeten los principios de la moral y del derecho; y aun pudiera añadirse con verdad que, co-

mo el poder social no participa de la omnisciencia divina y se halla expuesto al error, se verá precisado muchas veces á garantir el orden público y los derechos de los ciudadanos, causando algunas vejaciones inevitables, las que sin embargo deben ser tan momentaneas como el error que haya padecido la autoridad al inferirlas.

II—INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y DE LA CORRESPONDENCIA

Llámase *inviolabilidad del domicilio* el derecho que tiene todo ciudadano de impedir que penetre en su casa ninguna persona á quien no haya previamente autorizado expresa ó tácitamente. Veamos su fundamento.

Ya hemos dicho que el ciudadano puede ser considerado bajo dos relaciones distintas; como individuo ó simple particular y en su vida privada, ó como miembro del Estado y en su vida pública. En el primer caso la misión que ha de realizar es suya exclusivamente, debe realizarla por medios propios y exclusivos y él es único responsable de sus actos, experimentando él solo las buenas ó malas consecuencias de los mismos.

Ahora bien; el domicilio es, por decirlo así, el campo de acción de la actividad privada y se asemeja entre los individuos al territorio nacional entre los Estados, y así como la invasión de un Estado en el territorio de otro sería la conculcación de un derecho que reconoce hasta el sentido vulgar, la intrusión de un individuo en el domicilio de otro sería un atentado contra la propiedad y la independencia del individuo.

No son, sin embargo, estos atentados que los individuos pueden cometer invadiendo el domicilio ageno, los aludidos por los políticos al controvertir sobre el derecho de que nos vamos ocupando. La cuestión de si el domicilio es ó no inviolable ha reconocido principalmente por causa la facilidad con que las autoridades y funcionarios alteraron el orden y la paz de las familias, practicando registros muchas veces infundados de modo que una mera sospecha bastó en algún tiempo, no sólo para descubrir los secretos del hogar, que de ningún modo deben hacerse del dominio público, sino también para sembrar la alarma en las familias. A evitar estas intrusiones cuando son inmotivadas, aunque

se lleven á cabo en nombre del bien público ó del derecho social, tiende principalmente la consagración de este derecho en las modernas constituciones.

Mas no se crea por lo dicho que ni la razón, ni la conveniencia pública ó privada exigen en todos los casos el respeto al domicilio, pues podría suceder que este respeto exagerado fuera ocasión, ya de graves trastornos en el orden social, ya de delitos que quedaran impunes contra la seguridad de las personas ó de la propiedad. Tal sucedería, por ejemplo, si teniendo la autoridad conocimiento, y aun sospecha fundada, de que en cierto parage se escondían armas ó municiones para trastornar el orden público, ó se ocultaban criminales, instrumentos ó efectos de un delito ú otros objetos análogos, se impidiera á esa misma autoridad penetrar en dicho parage á pretexto de que se violaba el santuario del hogar, oponiéndose de este modo al esclarecimiento de algunos hechos punibles, á la previsión de otros que pudieren cometerse y al castigo de los delincuentes. El temor fundado de que el domicilio oculte medios destinados á trastornar el orden público, la sospecha racional de que en el mismo se alberguen los delincuentes ó se oculten los instrumentos ó efectos de un delito y otras semejantes son, pues, causas que á veces justifican la limitación de este derecho.

Análogas razones militan tanto en favor de la *inviolabilidad de la correspondencia* como en pró de sus limitaciones: indicaremos, no obstante, algunas especiales á este derecho, que no intentamos definir porque basta su simple enunciación para comprender en qué consiste.

Sabido es que la comunicación entre los hombres puede hacerse de dos maneras distintas; ó verbalmente, ó por medio de signos permanentes, cuya última forma se manifiesta en nuestra época principalmente por la escritura alfabética y por la correspondencia telegráfica. La escritura simbólica y otras representaciones parecidas se hallan implícitamente comprendidas en la misma esfera del derecho que la escritura alfabética por más que su uso no sea tan frecuente. Pues bien, así como nadie tiene derecho á que otro le comunique sus pensamientos, y cada individuo le tiene á elegir las personas á quien ha de hacer partícipes de éstos, cuando la comunicación se hace verbalmente, del mismo modo nadie tendrá derecho á intervenir en las conversaciones ó comunicaciones agenas, cuando se hagan por escrito ó por cualquier otro medio, puesto que no hay razón alguna para establecer diferencias, habiéndolas por el contrario

en favor de la igualdad. Si los hombres al consignar por escrito sus pensamientos supieran que se habian de trasmitir á personas á quien desearan ocultarlos, seguramente no harían uso de tal medio y, ó renunciarían á la comunicación con sus semejantes ó procurarían que ésta sólo fuera verbal aun á costa de los mayores riesgos y dispendios. De aquí surgiría un doble perjuicio; primero, contra el individuo que hallaría tal vez obstáculos invencibles para la realización de los fines particulares en que la comunicación con sus semejantes pudiera servirle de medio, y segundo, para la sociedad, porque el medio más poderoso de cultura intelectual y de progreso moral y material es la comunicación de unos hombres con otros, lo cual hace que los conocimientos útiles se difundan, que los adelantos en las industrias se vulgaricen y que los sentimientos nobles y generosos se estimulen y fortifiquen. De manera que, si el derecho y el interés del individuo pueden servir de fundamento á la inviolabilidad de la correspondencia, no está menos interesado el bienestar social en la consagración de este derecho.

Sin embargo, los hechos más indiferentes, los actos más inofensivos pueden ser perjudiciales al bién público y contrarios al derecho, cuando se emplean como medios para la perpetración de delitos ó actos perturbadores del orden social. De aquí que, así como nadie negaría á la sociedad el derecho de vigilar á los criminales y sorprender sus conversaciones cuando por este medio pudiera evitar los delitos ó averiguar sus autores, así también el poder público, representante de la sociedad, tiene derecho á interceptar, por medio de la autoridad judicial, la correspondencia epistolar ó telegráfica, cuando esto sea necesario para realizar aquellos fines. La misión del derecho político, ó mejor, de sus preceptos en esta materia debe ser; por una parte, garantizar á los ciudadanos pacíficos é inofensivos el ejercicio de un derecho que en la mayoría de los casos se refiere á la vida privada; y por otra, poner á cubierto á la sociedad y á estos mismos individuos pacíficos de los males que con ocasión de este derecho pudieren sobrevenirles, siempre que estos males sean ciertos y positivos y no ilusorios ni fantásticos.

III—DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

Para determinar con exactitud la extensión de este derecho, conviene recordar la distinción entre la libertad de conciencia y la de cultos. La primera se refiere á la vida interior del hombre, y existe cuando nadie tiene derecho á inquirir los pensamientos ni las ideas religiosas de los demás: la segunda se refiere á la vida exterior. Puede en efecto concebirse, como dice Rossi (1), un país en el que cada cual tenga las creencias que le plazca y no sea molestado por ellas, ni obligado á practicar acto alguno en oposición á ellas, pero no permitirle profesar libremente su culto, en cuyo caso habrá libertad de conciencia y no de cultos. Esta última tendría lugar cuando todos fueran libres, no solamente en lo relativo á sus creencias, sino también cuando les fuera permitido el ejercicio de las prácticas de su religión y se les garantizara el derecho de profesar públicamente su culto. De estas dos formas de la libertad religiosa, fácilmente se ve que la segunda comprende á la primera, mientras que esta puede existir sin aquella; y se comprende también que en sus relaciones con el orden social, no están necesariamente sujetas al mismo principio. La libertad de conciencia puede ser ilimitada respecto al Estado mientras no sale del terreno de las ideas y sentimientos, y es muy raro que el Estado llegue á prescribir actos contrarios á la opinión religiosa. Sin embargo, pudiera suceder que se profesaran ciertos dogmas ó acataran ciertos preceptos religiosos incompatibles con las prestaciones que el Estado puede exigir á las personas que constituyen la sociedad política, y en este caso, sería preciso recurrir á los principios de la justicia social para resolver el conflicto aparente entre el derecho del individuo, que invoca su libertad de conciencia, y el Estado, cuya misión no puede cumplirse sin la cooperación de los individuos. La libertad de cultos, como se traduce en actos externos que pueden coadyuvar ó trastornar el órden social, se relaciona más directamente con el Estado, con sus atribuciones y deberes y no puede aparecer racionalmente tan ilimitada como la de conciencia.

---

(1) *Obra cit.* Tomo II, pág. 371.

A determinar con exactitud los límites racionales de la libertad religiosa de los individuos y de la acción del Estado respecto á ella tiende la doctrina que dejamos expuesta en la sección primera, acerca de las relaciones del Estado con el orden religioso y, recordando lo dicho entonces, casi podríamos prescindir de ocuparnos de la libertad de conciencia y de cultos consideradas solamente en lo que atañen al individuo, para calificarlas ó no como derechos naturales.

Sin embargo, es tan grande la importancia de este asunto y ejerce tal influencia en la vida y cultura de los pueblos, que nunca será excesivo lo que acerca de él se diga. Así, pues, dejaremos aquí sentadas, por via de resumen, las consecuencias que de nuestros principios pueden deducirse.

Digimos primeramente que el hombre es libre en su conciencia; de hecho, porque hasta ella no podrá llegar jamás la acción social, y de derecho, porque la libertad es condición de su responsabilidad y por lo mismo de su vida racional; digimos después que el Estado, aunque puede oponerse á la propagación de ideas contrarias al dogma religioso que profese, no tiene derecho para atacar á los individuos por sus creencias; y por último, que el problema relativo al culto religioso depende de las relaciones en que el Estado se hallare con las religiones, y de la naturaleza de éstas, correspondiendo á un Estado indiferente una libertad omnímoda, y á un Estado creyente una solución en armonía con la naturaleza de los dogmas religiosos por él profesados, siendo por tanto libre-cultista si la religión es libre-pensadora, y protector ó sancionador de la unidad de cultos, si la religión fuere exclusivista.

Esta proposición, que para terminar dejamos consignada, implica algunas otras, que, si bien están en ella contenidas virtualmente, hemos de enunciar de un modo explícito, para evitar falsas interpretaciones.

Recordaremos que, al deducir la conclusión indicada, sentamos como premisa que el Estado, para obrar racionalmente, habría de hacerlo conforme á sus convicciones y que por lo mismo debería procurar el triunfo de lo que estimara bueno y conveniente y la destrucción de lo falso y pernicioso. Por esto se ve que presentábamos como base del razonamiento dos situaciones extremas; la de la duda ó indiferencia completa, y la de tranquilidad ó certeza absoluta en que el Estado pudiera hallarse respecto á la verdad religiosa, deduciendo, en el primer caso, la

completa libertad, y en el segundo, la proscripción por el Estado de todos los cultos falsos. Pues bien, entre estas dos situaciones extremas pueden darse otras intermedias, y en tales casos la conducta del Estado habrá de ser análoga á su situación intelectual; de modo que, si el Estado, sin haber llegado á adquirir evidencia de su verdad, se inclina á una religión determinada, esta deberá ser protegida, su culto público fomentado y los ciudadanos que la profesan amparados en su ejercicio; pero sin prohibir las manifestaciones de aquellas otras que no hayan sido declaradas notoriamente erróneas por el Estado, aunque no se las deba protección de ningún género. Respecto á las creencias reconocidamente erróneas, dicho se está que todas sus manifestaciones públicas deben proscribirse, porque el error y el mal no pueden tener derechos.

Determinadas las relaciones del Estado con las diversas religiones y cultos, fácil es deducir cuales son los derechos de los individuos.

En efecto, sabiendo como sabemos que dos derechos contrarios respecto á una misma cosa no pueden darse jamás, si el Estado tiene derecho á prohibir un acto, el individuo no tendrá derecho á ejecutarlo, y por el contrario, si hay á favor del individuo un derecho verdadero, los actos del Estado, ó mejor del Gobierno, que á él se opongan, serán injustos y tiránicos. Para concluir y no perdiendo jamás de vista que el individuo vive en el Estado y que el derecho político no puede nunca prescindir en sus problemas de las relaciones entre ambos y de la naturaleza respectiva de cada uno, formularemos en definitiva nuestra opinión, respecto á los derechos religiosos del hombre, en las proposiciones siguientes:

1ª En un Estado indiferente (1) el individuo tiene derecho á profesar privada y públicamente el culto que mejor le parezca.

2ª En un Estado religioso pero libre-pensador el individuo tiene derecho á profesar privada y públicamente cualquiera doctrina que no haya sido declarada notoriamente errónea; aunque no pueda pedir protección para la suya, sinó es la del Estado.

3ª En un Estado religioso-unitario el individuo que profesa la religión del Estado tiene derecho, no sólo á hacer ostensibles sus creencias, sinó á demandar del Gobierno protección para

(1) Véase lo dicho acerca de la indiferencia religiosa del Estado en las páginas 69 y 70.

ellas, mientras que el individuo que profesa otra religión distinta de la oficial sólo tiene derecho á que no se le persiga por sus creencias.

Si contra la protección que el Estado debe á la religión que profesa se objeta (1) que se da una idea muy pobre de una religión que no tiene fuerza vital propia y necesita ser sostenida por el Estado, contestaremos que la religión no ha menester protección, si es la verdadera, porque la verdad es como es, independientemente de la idea que se tenga de ella; que quien necesita protección es la falible inteligencia humana, la cual, á pesar de su vanidad, no puede dar un paso firme sin un mentor que la guíe, y por último, que la protección dispensada á la religión del Estado no se refiere á la religión en sí misma, sinó á los individuos á quienes se facilita su cultura por la saludable influencia de las ideas religiosas, y aun al mismo Estado, por lo que robustece su poder llevando á las conciencias la convicción de los deberes, y no teniendo en sí mismo, como dice Foucart en su obra de derecho público, con que suplir este poderoso medio de perfeccionamiento.

IV—DE LA LIBERTAD DEL TRABAJO

"Trabajar es un deber y una necesidad: es por consiguiente un derecho. La libertad de trabajar implica la elección de la clase de trabajo. Forzar á un hombre á seguir una carrera que le repugna y desviarle de la que le conviene; ponerle trabas en el ejercicio de su profesión, siempre que este ejercicio se mantenga en el límite del respeto á otro, es una injusticia evidente.„

Con estas palabras consagra M. Baudrillart (2) la libertad del trabajo erigiéndola en derecho; pero, aunque la autoridad del economista francés sea muy grande y sus razones de gran valía, nosotros renunciamos á exponerlas detalladamente, circunscribiéndonos á demostrar, dentro de nuestros principios, que el trabajo en sí mismo y la libertad de ejercitarse en el más adecuado son dos derechos igualmente respetables.

---

(1) V. Blok, *Dic. de la polit.*, art. *Curtes.*
(2) *Man, d'Economie politique*, pág. 70.—París 1865.

Que el trabajo es una condición de vida muchas veces y de progreso siempre, cosa es bien notoria y manifiesta.

Todos los hombres, desde el ínfimo proletario hasta el más encumbrado capitalista, se hallan sujetos á esta ley: los unos, ejercitando sus fuerzas musculares para arrancar del seno de la tierra las materias primas que han de servir á otras industrias; los otros, dirigiendo las grandes fábricas en que se elaboran los más útiles ó delicados productos; aquellos, ofreciendo á la imaginación con sus creaciones artísticas ocasiones mil de extasiarse en la contemplación de la belleza, influyendo en la conducta moral del hombre por la educación del sentimiento ó inclinándole á todo lo noble, digno y elevado; éstos, dedicándose á los estudios más abstrusos para encontrar las verdades que han de servir de firmísimo cimiento á las ciencias, á las artes, á la civilización y aun á las mismas sociedades; y todos sin distinción, ejercitando ya éstas, ya otras facultades, fuerzas ó aptitudes, si quieren conseguir un fin preconcebido de cualquier índole que sea.

Pero estas facultades pueden ser ejercitadas libremente por el sujeto que las posee, ó ser impulsadas á obrar por medio de la violencia; y en este último caso, el que se vé forzado á trabajar contrariando tal vez sus aptitudes é inclinaciones, aquel otro á quien, sin imponerle una especie determinada de trabajo, se le impide que se consagre al que más le plazca ¿no tendrán derecho á nada y habrán de resignarse impotentes á sufrir el yugo que los oprime....? Indudablemente que le tienen, y la razón de éste derecho está en que el trabajo es medio de vida y perfeccionamiento solamente á condición de que se ejerza convenientemente, y el primer requisito para su utilidad es que esté en armonía con la aptitud del trabajador, relación que nadie mejor que éste puede determinar.

La apropiación de los productos, que, como más adelante veremos, es el mejor estímulo para el trabajador, es también una consecuencia del trabajo libre y una causa de la superioridad de éste sobre el trabajo de los esclavos. Mientras el trabajador libre se halla aguijoneado no sólo por la perspectiva de la miseria que su holganza puede acarrearle, sinó también por la esperanza de mejorar cada vez más su situación por medio del ahorro y de las invenciones que aumenten el alcance de sus fuerzas, el esclavo sólo siente los efectos del látigo que se alza sobre sus espaldas como correctivo á su pereza ó descuido: es decir, que mientras el trabajador libre se halla estimulado por los dos

móviles que la naturaleza ha puesto en juego para hacernos obrar, el temor y la esperanza, el esclavo sólo se siente excitado por el temor al castigo que, si puede servir para evitar una negligencia excesiva, es incapaz de inspirar una energía fecunda.

La libertad de trabajo es además, según el autor citado, un principio de orden y un instrumento de producción más abundante, dando por resultado la mejor división de las ocupaciones, la clasificación más favorable de las industrias, según los talentos y los medios de que cada hombre dispone y que nadie mejor que él puede conocer, y por último, los fecundos efectos de la *concurrencia* económica, por la que se perfeccionan los productos, los procedimientos y los servicios y se ofrece un mercado bueno y abundante.

A pesar de lo dicho, la sociedad tiene derecho á imponer ciertos límites al ejercicio de algunas profesiones, ya en nombre de la libertad general, ya en el de la seguridad pública, ya en el de un interés colectivo evidente. De aquí derivan las restricciones á la libertad de profesión representadas por los títulos y formalidades que las leyes exigen para el ejercicio de algunas, como las de médico, farmacéutico, abogado y otras análogas, á las que se encomiendan las vidas, los intereses y la honra de muchos ciudadanos que no están en condiciones de elegir con acierto, ya por la índole especial de estas profesiones, ó ya también por su falta de ilustración y cultura. Alguna de aquellas causas reconocen otras cortapisas impuestas por la ley, para la fabricación, por ejemplo, de sustancias explosivas, para el ejercicio de la caza y de la pesca, para la venta de carnes, para la edificación cerca de las murallas y fortalezas, para el servicio de correos, construcción de buques, fabricación de moneda y otras análogas.

Muchas de estas restricciones serán, con todo, menos necesarias á medida que las naciones progresen y que los individuos puedan de algun modo prescindir de la tutela del Estado.

V—DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

Llámase así la facultad inherente á todo individuo de trasmitir á los demás sus ideas y conocimientos en la forma y modo que le parezca más conveniente.

Sabemos todos que la educación es un medio poderoso de dar adecuada direccion y de desarrollar y perfeccionar las fa-

cultades humanas. Sabemos también que el obrar libremente, esto es, determinarse la voluntad por impulso propio, constituye sin duda alguna la parte más esencial de la personalidad y es lo que refleja más claramente la dignidad del hombre. Pues bien, la voluntad es tanto más libre, cuanto mayor es el número de motivos que la solicitan á obrar y, como estos motivos los suministra la inteligencia, el progreso de la voluntad está en razon directa del progreso de aquella. Es, pues, del más grande interés é importancia para el individuo que su inteligencia sea educada sobre bases sólidas, que verdaderamente se la ilustre por la enseñanza de la verdad y que no se la extravie ni perturbe con la inoculación de ningun error; y como la sociedad, por otra parte, no es más que el resultado de la unión racional y organizada de los individuos, el perfeccionamiento ó la perversión de éstos lleva implícito el de la sociedad. La naturaleza espiritual del hombre, que le constituye realmente superior y privilegiado sobre las demás criaturas, exige como condición primera, no sólo de vida sino de perfección, que la luz de la inteligencia sirva de guía á todas las demás facultades y aptitudes, y de aquí que todo lo que pueda influir más ó menos directamente en el terreno de las ideas sea de una importancia suma, como sucede con la enseñanza.

Conociendo esta influencia no dudan algunos en revelar sus aspiraciones en este punto, afirmando que cuando los pueblos sean más maduros y las necesidades del espíritu sean una parte más principal de sus preocupaciones, la sociedad intelectual, esencialmente múltiple porque tendrá la libertad por principio, será la que distribuya la enseñanza; y el Estado encerrado en su grande misión jurídica se limitará á dejar obrar, de modo que el Gobierno no ejercerá sobre la instrucción de los pueblos más que una vigilancia indirecta destinada exclusivamente á impedir los atentados posibles, ya contra las costumbres públicas, ya contra los derechos de los menores, y todo ciudadano que presente ciertas garantías de capacidad podrá abrir un establecimiento de enseñanza, á menos que se niegue su moralidad ó la salubridad del local con motivo justo, sin que esto sea un pretexto para restringir la libertad.

Tales son en bosquejo los deseos de los liberales en esta materia expuestos por boca de Frédéric Morin (1). Sin embargo,

---

(1) Block. *Dic. de la Polit.* Tomo II, pág. 102.

en obsequio á la verdad, habremos de decir que, más que el triunfo de la razón y del derecho, se propone este publicista el triunfo de sus ideas, como lo prueba el siguiente párrafo que se halla á la página 106 de la obra citada en la nota: "Sería seguramente una excelente cosa crear la libertad fuera de la Universidad (de París); pero sería una cosa mucho mejor aún, y sobre todo *en efectos liberales y democráticos* crearla en el seno mismo de la Universidad.„

Las razones aducidas en pró y en contra de la libertad de enseñanza, pueden ser de dos clases; filosóficas ó puramente téoricas, y políticas ó de conveniencia práctica: las primeras pretenden representar el derecho, las segundas el provecho social.

Los partidarios de la libertad enumeran las siguientes razones filosóficas: 1ª la sociedad tiene derecho á aprovecharse de todas las aptitudes de sus indivíduos, siempre que éstos quieran emplearlas en su obsequio: 2ª el individuo está en el deber de contribuir al bién social en la medida que se lo permitan su bién particular y sus propias aptitudes, y como de todo deber nace el derecho á las condiciones ó medios de cumplirle, exigir la obligación é impedir el uso de los medios para cumplirla, es contradictorio y tiránico: 3ª los conocimientos representan, lo mismo que los objetos materiales, el producto del trabajo humano, y el individuo tiene, por lo mismo, derecho á utilizar aquellos igualmente que éstos en la forma que más le convenga: 4ª los demás individuos tienen derecho á que no se les impida elegir lo mejor, prohibiendo la concurrencia é imponiéndoles determinada clase de productos, ya en el órden material, ya en el intelectual y moral.

Las razones políticas ó de conveniencia son poco más ó menos las mismas que se adujeron en pró de la concurrencia al hablar de la libertad de trabajo, y pueden reducirse á las siguientes: aumento de los conocimientos y progreso en las ciencias; perfección en los métodos; difusión de las ideas y facilidad de adquirirlas con menos esfuerzos y dispendios.

Contra estas razones alegan los partidarios de la enseñanza oficial exclusiva ó reglamentada las siguientes en el terreno filosófico: 1ª que por la libertad de enseñanza se conceden los mismos derechos á la verdad y al error, á la honradez y á la malicia: 2ª que el Estado debe tener la dirección é inspección de todos los actos é instituciones que puedan influir en el fin social coadyuvándole ó perjudicándole.

En el terreno práctico aseguran que la libertad completa de

enseñanza da por resultado inmediato el pedantismo, la insuficiencia científica y, lo que es peor, la perversion de las ideas y sentimientos.

Nosotros, reconociendo la fuerza de los argumentos que se aducen contra la libertad de enseñanza, no creemos sin embargo que sean decisivos para proscribirla, y nos fundamos, además de las razones expuestas por sus partidarios, en la imposibilidad de adoptar un criterio humano para decidir á priori de la verdad en materias científicas, no sólo porque el progreso de las ciencias se realiza con el concurso de la humanidad entera, sinó tambien porque el Gobierno ó el poder social es impotente, como tal, para decidir en estas materias. Afirmar otra cosa sería pretender que el poder no fuera sólo legislador y ejecutor de los preceptos sociales sinó tambien abogado, médico, literato, arquitecto, ingeniero, etc.

No quiere decir esto, sin embargo, que el Gobierno permanezca extraño á la enseñanza sin cuidarse ni poco ni mucho de la propagacion de los conocimientos y del progreso en las ciencias, siendo como son medios utilísimos para la realizacion del fin social, sinó que su intervencion no ha de ser directa, á menos que el esfuerzo individual no baste para estos fines ó que un abandono completo por su parte produjera la anarquía y el desorden (1).

VI—DERECHO DE PROPIEDAD

No definiremos la propiedad, pero sí haremos constar con M. Baudrillart, á quien seguimos en gran parte al hablar de esta materia, que la propiedad debe estudiarse bajo dos puntos de vista principales: en su principio y como derecho, y en sus efectos y por la utilidad social que reporta. Separar estos dos aspectos es lo mismo que pretender que la propiedad sea ventajosa siendo al mismo tiempo injusta, lo cual es absurdo.

La apropiación, la asimilación es un hecho universal. El hombre, lo mismo que los animales y las plantas, no vive sino

(1) V. lo dicho en las pág. 72 y 73 acerca de las relaciones del Estado con la instrucción y la educación en general.

apropiándose lo necesario para su existencia. Pero no basta que se necesite una cosa para tener derecho á ella. Lo que engendra el derecho primitivo es la superioridad natural de lo que es libre sobre lo fatal, de lo inteligente y racional sobre lo que no lo es. De aquí el derecho de todo hombre sobre toda cosa no apropiada anteriormente. Considerada en la relación de hombre á hombre la propiedad tiene su fundamento en la afirmación del *yo* como opuesto al *no yo*, que lleva implícita la distinción de lo *tuyo* y de lo *mio*, y en la personalidad humana constituida eminentemente por la libertad. La libertad es lo que fundamenta el derecho del salvaje sobre la fruta que ha cogido del árbol. Pero la libertad que se limite á una simple toma de posesión no sirve por lo general de fundamento más que á un derecho vago é insuficiente. Según la teoría que establece unicamente la propiedad sobre la primera ocupación, el que llegase primero á una comarca desierta tendría derecho de apropiársela toda entera, y los que vinieran después estarían obligados á reconocer en él al legítimo poseedor de toda la extensión del territorio que él quisiera mirar como su dominio. La libertad y el derecho del primer ocupante necesitan una sanción nueva que realice el derecho de una manera más evidente: el trabajo es quien la dá. Si el ser humano es propietario de sus facultades, también lo será del ejercicio de éstas y del producto de este ejercicio, es decir, de los frutos de su trabajo, ya los consuma inmediatamente, ya los acumule por el ahorro.

La conformidad esencial de las tres teorías principales sobre el fundamento del derecho de propiedad (la de la libertad, la de la ocupación y la del trabajo) resulta de aquí facilmente. La libertad ocupa las cosas; pero esta apropiación no se realiza plenamente sinó por el trabajo. El trabajo no es más que una aplicación seguida y regular de la libertad humana, es decir, de la fuerza activa y voluntaria que constituye nuestra personalidad; no es más que una aplicación prolongada. El trabajo hace sagrada la propiedad; pero el respeto debido á la persona hace sagrado el trabajo mismo. Síguese de aquí que las tres teorías sobre el origen de la propiedad no son más que diversas fases de un mismo principio, á saber; la fuerza activa, tomando posesión por de pronto de sus facultades y de sus órganos corporales, es lo que constituye el primer modo de su ejercicio y la primera apropiación concebible; imponiéndose despues á las cosas por la ocupación, constituye el segundo modo y la primera forma vi-

sible de la propiedad; y haciéndolas por fin realmente suyas por el trabajo, llega hasta el tercer grado del mismo desarrollo, grado infinitamente más enérgico, más apreciable en sus efectos y de una evidencia por decirlo así palpable, que hace tomar cuerpo al derecho. Esta correlación de la libertad, de la propiedad y del trabajo no es en el fondo más que una verdad de sentido comun. Ser propietario, en toda la extensión de la palabra, es ser libre de poseer las cosas y de disponer de ellas. Ser libre es tener la propiedad de sí mismo y de sus facultades y del empleo de estas y, además, la libre elección y el libre ejercicio de su industria. La propiedad y la libertad están unidas entre sí tan estrechamente que siempre han sido reconocidas ó sacrificadas á la vez y en las mismas proporciones, como lo prueba la historia.

Algunos jurisconsultos y publicistas notables han pretendido que el origen de la propiedad está en la ley civil; pero pensar que ésta puede servir de fundamento á la propiedad en lugar de garantizarla y que, interpretada por el legislador, puede modificarla indefinidamente es exponerse á tomar todos los excesos legales cometidos contra la propiedad por abusos de la propiedad misma, y así se ha hecho creer á las masas, considerando á la propiedad culpable de los mismos atentados de que era víctima. Fundar, como otros, la propiedad sobre simples convenciones es abrir la puerta á todos los abusos (1).

Después de los razonamientos precedentes y recordando que la *razón de ser* de la propiedad no es otra que la naturaleza misma ó, si se quiere, la necesidad, porque entre las condiciones impuestas al hombre para realizar su fin lo está la de que haya de apropiarse los objetos materiales, queda, en nuestra opinión, justificado el hecho de la apropiación.

Contra esta apropiación, podrá objetarse, sin embargo, que basta sea momentánea para llenar los fines humanos; pero hablar así es desconocer por completo la naturaleza del hombre y los móviles que determinan sus actos. Si la apropiación hubiera de ser momentánea, el hombre no podría satisfacer sus necesidades en muchas circunstancias de la vida, ya por no poder ejercitar sus facultades, ya por carecer en determinadas ocasiones de objetos apropiables. Si la existencia del individuo exije con

(1) V. Baudrillart. *Man. d'Econ. pol.* págs. 31 y siguientes, 1865.

necesidad imperiosa la apropiación desde un momento para el siguiente, ninguna razón autoriza á distinguir unos momentos de otros, siempre que en ellos puedan ocurrir los mismos hechos.

Por una exigencia de la naturaleza nos apropiamos momentáneamente los objetos, y por la misma razón nos los apropiamos por tiempo indefinido. En la naturaleza, pués, está el origen filosófico de la propiedad; el cual, sin embargo, por ser tan general y aplicable á todos los hombres sin distinción, no ha parecido acaso suficiente á los filósofos juristas para legitimar la propiedad concreta y de aquí las diversas teorías á que antes se ha aludido y otras que no examinaremos por no permitirlo la índole de este libro.

Distinguiendo ahora, como Ahrens, las razones en pró de la propiedad privada de las alegadas en favor de la propiedad común, expondremos primero las ventajas de la propiedad privada.

1ª Es el móvil principal del trabajo y de la actividad, pues la mayoría de los hombres vivirían en la ociosidad, si no se viesen precisados á buscar las condiciones de su existencia mediante el empleo de sus facultades intelectuales y de sus fuerzas físicas; y sobre todo, los trabajos más penosos, aunque útiles á la sociedad, no se ejecutarían por nadie sin el estímulo de la propiedad privada.

2ª La propiedad privada es, bajo muchos aspectos, el baluarte de la libertad personal y de la vida de familia asegurando á cada cual una esfera de existencia independiente.

3ª La propiedad privada mantiene entre los hombres, por la desigualdad de su distribución, una subordinación necesaria sobre todo en las grandes empresas industriales.

4ª La propiedad individual evita los conflictos que se suscitarían sobre la repartición de los bienes sociales, sí se estableciese el sistema de la comunidad.

A estas ventajas añaden algunos que la propiedad privada favorece el ejercicio de la beneficencia y la caridad individual; pero estas cualidades encontrarían en cualquiera otro orden social bastantes ocasiones en que manifestarse, y sobre todo, mejor sería que no hubiera necesitados, como sueñan los socialistas.

Los partidarios de la *comunidad de bienes* aducen contra este sistema objeciones que ellos miran como ventajas del suyo. Hé aquí las principales: 1ª la propiedad privada es una de las causas que arraigan el egoismo y lo hacen permanente; es, por lo tanto, contraria á la moral que reprueba este motivo de acción:

2ª consagrando el principio del interés personal, este sistema establece y mantiene una lucha perenne entre los individuos: 3ª este sistema aisla las fuerzas del hombre y de la sociedad, capaces de ser mucho mejor empleadas; la sociedad por el contrario daría á todas una misma dirección y las armonizaría: 4ª la propiedad privada es el origen principal de la mayor parte de los delitos y crímenes que se cometen en la sociedad: 5ª es la causa de una desigualdad demasiado grande que no está en relación con el verdadero mérito, siendo la adquisición de la propiedad efecto más de la casualidad, que de los talentos y actividad del hombre.

El primero de estos dos sistemas se apoya en la realidad, en la experiencia, es decir, en la moralidad actual de los hombres, y corrobora su verdad el que la propiedad particular produce, además de las ventajas enumeradas, la no menos grande de elevar al nivel social que quedaría sumido en la abyección si trabajadores y ociosos fuesen tratados por igual; á lo que puede añadirse con Baudrillart que para suscitar y aplicar los descubrimientos son necesarios capitalistas. El segundo se funda en la ley moral, que prescribe la abnegación y el desinterés. Así se comprende que sólo haya podido sostenerse el comunismo en las sociedades cuya moralidad se ha mejorado en virtud de los principios religiosos; y que haya fracasado por completo en aquellas otras que, como el owenismo y el fourrierismo, han prescindido de este poderoso elemento.

Pero, por lo mismo que todo sistema de organización de la dropiedad refleja el estado moral de la sociedad, debe desecharse todo cambio radical impuesto por la violencia, ya se manifieste bajo la forma de ley ó de revolución; porque la ley en este caso sería injusta, y la revolución habría de acarrear un completo trastorno de todas las posiciones sociales sin provecho para la humanidad (1).

La propiedad territorial ha sido objeto de particulares y muy vivos ataques. Importa, pues, considerarla aparte. Se ha dicho que la usurpación del suelo ha privado al género humano de los derechos primitivos, de la cosecha natural, de la caza, pesca y pastos. Pero no se usurpa lo que no pertenece á nadie; no se usurpa lo que no tiene valor. Y la tierra nuda no tiene ningu-

---

(1) Ahrens, *Dcho. nat.* 2ª edic. esp. págs. 337 y sig.

no. Es útil sin duda como todo otro instrumento de trabajo; pero no adquiere *valor* sinó por el trabajo y el capital que le son incorporados. Los primeros ocupantes de la tierra nuda, los pretendidos usurpadores de este instrumento de trabajo, fueron generalmente ménos privilegiados que los llamados *víctimas* de la propiedad naciente; lo mismo que sucede con frecuencia á los que descubren ó inventan, en una palabra, á los primeros explotadores de todo género. La tierra nuda no es casi nunca otra cosa que espinas, reptiles y pantanos pestilentes; esto es, lucha y sufrimientos bajo las formas más penosas y muchas veces la muerte como consecuencia de las privaciones y enfermedades contraidas en la explotación.

Dícese tambien que la usurpación consiste en que todas las plazas ó lotes de tierra estén tomadas. ¿Pero dónde se ha visto que falte la tierra nuda? Lo que hay en realidad es que se desea la tierra ya explotable y no la que exige preparaciones antes de poder aprovecharla, y también la tierra que está junto á nosotros y no la de paises lejanos: y si se objeta con los riesgos y trabajos de la emigración, contestamos que los primeros ocupantes también lucharían con las fieras y con los elementos.

En cuanto á la extensión de este derecho claro está que comprende no sólo el uso de las cosas, sinó tambien la libre disposicion de ellas, de modo que el propietario, el verdadero dueño, puede venderlas, cambiarlas, donarlas y trasmitirlas por vía de herencia; porque, siendo el fundamento de este derecho la utilidad de las cosas para satisfacer necesidades, como éstas no sólo se concretan al orden material sinó que comprenden también el intelectual, moral y estético, siempre que por la propiedad se puedan satisfacer estas necesidades, no hay motivo que justifique su restricción.

Este derecho, como todos, se halla sujeto sin embargo á ciertas limitaciones que la ley puede imponerle en nombre del interés social ó de la humanidad. Tal sucede con la expropiación y servidumbres forzosas, las contribuciones, los derechos fiscales y otros, que se exigen al individuo como recursos indispensables, unas veces para el sostenimiento del orden y conservación de la sociedad, otras para la mejor explotación del territorio en provecho del comercio y de la industria, y para el sostén de instituciones benéficas que alivien los sufrimientos del desgraciado, ó ya también para el fomento de la ilustración y educación social por medio de establecimientos científicos, museos y conservatorios de artes.

CAPÍTULO VI

DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

I—DERECHO ELECTORAL

El derecho electoral, ó de sufragio, tiene por objeto designar las personas que han de ejercer los cargos públicos en las sociedades políticas organizadas conforme al sistema de representación.

De aquí deducen algunos que el fundamento de este derecho está en el principio de la soberanía de la nación, porque mediante él interviene el país en el gobierno.

Por nuestra parte opinamos que el verdadero fundamento de este derecho se halla, no en la soberanía nacional, que aún no está bien precisada, sinó en la cooperación de todos los individuos, que componen la sociedad política, al sostenimiento de las cargas del Estado según las fuerzas de cada uno.

Puede distinguirse este derecho bajo dos aspectos: por las personas á quienes compete, siendo *universal*, si corresponde á todos los ciudadanos, y *limitado*, si sólo corresponde á algunos; y por el modo de ejercerse, *directo*, cuando el elector nombra inmediatamente y por sí mismo al representante ó representantes, é *indirecto*, cuando el elector no designa al representante sinó á otro elector de mayor grado para que haga en definitiva la elección.

Los partidarios del sufragio universal dicen que el sufragio no es una *función* sinó el ejercicio de un derecho natural; que cada ciudadano trae al nacer el derecho de participar en la ges-

tión de los negocios públicos del mismo modo que trae el derecho de libertad de conciencia; que la moral de un país corre gran peligro haciéndola dirigir sus miradas hacia el acrecentamiento de las riquezas, por considerar éstas como medida de la capacidad electoral; que no se puede sin riesgo crear la supremacía de una clase concediendo solamente representación á los intereses de ésta, condenando á perpetuo olvido el interés de las masas y colocando á la mayoría del país fuera de la via política legal, sin dejarla otro medio de participar en el gobierno que impotentes manifestaciones ó protestas armadas; que es una injusticia pretender que el sentimiento de la cosa pública existe más particularmente en las clases acomodadas, como lo es también afirmar que el sufragio universal sustituye la soberanía del número á la soberanía de la razón; y en suma, que el sufragio universal, consagrando practicamente la soberanía del pueblo, interesa á todo el mundo en la cosa pública y en el sostenimiento del orden, é impide á las minorías sublevarse en nombre de las masas, puesto que éstas tienen un medio legal de manifestar su voluntad.

Los partidarios del sufragio restringido hacen notar que, á la larga, el sufragio universal lleva implícita la soberanía del número y que es un absurdo suponer de igual valor el voto de un idiota que el de un hombre culto; que la soberanía del número implica también el absurdo de que lo acordado por la mayoría tenga fuerza de derecho, aunque sea opuesto á los mismos derechos naturales proclamados por los partidarios del sufragio universal, y que la razón exige en el elector una independencia plena y una competencia verdadera, condiciones que es imposible hallar en todos.

Los que consideran la riqueza como medida de aptitud electoral afirman que sólo la fortuna da al ciudadano una independencia y un espíritu de conservación suficientes; que para el pobre la primera preocupación es la de los intereses materiales é inmediatos; que, al mismo tiempo, su posición le hace más accesible á las seducciones y no le intimidan las reformas radicales porque no ve en ellas un peligro inmediato; y que el hombre de cierta posición tiene, por el contrario, su espíritu pronto para todas las funciones y ejercicios nobles ó elevados que forman en cierto modo la ocupación de su vida y entre las que se halla en primera linea el cuidado de los negocios públicos.

Algunos pensadores, temiendo que la soberanía del número pudiera fácilmente convertirse en la soberanía de la ignorancia,

dada la considerable cifra de ciudadanos que carecen de toda instrucción y de medios para proporcionársela, entienden que, sin negar á ninguno el derecho de votar, pudiera subordinarse el ejercicio de este derecho á la posesión de ciertos conocimientos elementales y aun á la de todas aquellas nociones indispensables para el buen uso del mismo (1).

Nosotros opinamos que, estando todos los ciudadanos obligados al sostenimiento de las cargas públicas por medio de prestaciones, ya personales, ya reales, todos tienen derecho á intervenir de algún modo en la gestión de la cosa pública, siquiera para saber porqué y para qué se les exigen tales sacrificios. Pero también creemos que esta intervención ha de ser racional y circunscrita por tanto á los que sepan lo que hacen y, además, á los que por sus condiciones especiales puedan emitir su voto con independencia, por la forma ó modo de realizar este acto, y hacer que su opinion sea conocida, sin necesidad para esto de otros auxiliares extraños. De manera que, siendo únicamente los mayores de edad los que contribuyen á levantar las cargas públicas, y los que saben leer y escribir los únicos que pueden hacer conocer su voluntad de un modo indudable, si el voto ha de ser secreto, á éstos debe circunscribirse el derecho de sufragio.

Stuart Mill, escritor nada sospechoso para los amantes de la libertad política, va más lejos. Después de afirmar que ninguna combinación de sufragio puede satisfacer por completo, si en virtud de ella se excluye absolutamente á toda una clase ó á una persona, reconoce que hay ciertas exclusiones motivadas; que no puede racionalmente concederse este derecho á quien no sabe leer y escribir y los primeros principios de la aritmética; que sólo una teoría inflexible y contraria al sentido común puede sostener que se conceda poder sobre otro y aun sobre la sociedad entera á gentes que no han sabido adquirir las primeras condiciones indispensables para cuidar de sí mismos, para dirigir con alguna utilidad sus propios negocios y los de las personas que les son más allegadas (2).

Favorable también á una restricción racional es la opinión de Laveleye. Según éste, así como es natural y de derecho que

---

(1) V. Clement Duvernois, *Dic. de Blok*, Tomo I, pág. 845 y sig.

(1) *Le gouvernement représentatif*, págs. 216 y 217. Trad. de Dupont-White. París 1877.

todo individuo dirija sus propios negocios, y que, cuando derrocha locamente su hacienda ó por impericia la merma considerablemente, se le intervenga ó prive de la administración, es también natural y de derecho que cada uno tome cierta parte en los negocios públicos que sin duda le interesan; pero á condición de que no se perjudique á sí mismo ni comprometa la seguridad ó el bienestar de la sociedad de que forma parte, siendo en otro caso conveniente, necesario y de derecho que se le prive del sufragio en interés propio y de sus conciudadanos. La capacidad, bastante al menos para discernir donde está el verdadero interés, es el único título al derecho de votar, por más que haya motivos muy poderosos para concederle al mayor número posible cuando de esto no resultare peligro para el Estado. Entre estos motivos son de notar principalmente la necesidad de evitar que la minoría, á quien únicamente se conceda el voto, se deje llevar por el egoismo y dicte leyes en provecho propio con perjuicio tal vez de la mayoría privada del sufragio; y además, que la agitación electoral y la emisión del sufragio son sin duda el mejor medio de educación política. En suma, según este autor, debe de ampliarse todo lo posible el derecho electoral, pero sin perder de vista que á su ejercicio ha de preceder siempre la instrucción nacional (1).

Suscítase también al hablar de este derecho la cuestión de si se debe ó no conceder á la mujer, y aunque reconocemos con Legouvé (2) que las señales de firmeza, de talento administrativo, de conocimiento de los negocios y de buen sentido práctico de que ha dado pruebas en muchas ocasiones, exigen se la autorice á tomar parte en las funciones sociales por interés de la misma sociedad, opinamos también con dicho autor, que la diferencia de naturaleza de la mujer, comparada con la del hombre, debe reflejarse en su modo de obrar y que su misión social ha de estar en armonía con su naturaleza y fin individual. El examen de una y otro nos dará, pues, la clave para resolver la cuestión propuesta.

El carácter de la mujer, dice Julio Simon (3), tiene las mis-

---

(1) V. Laveleye. *Essai sur les formes de gouvernement*, págs. 117 á 120. París, 1872.

(2) *Historia moral de las mujeres*, pág. 446. Trad. esp. de Gay, 1860.

(3) *El Deber*, pág. 156. Trad. de Coronel y Abad.

mas cualidades y defectos que su cuerpo: la mujer es seductora; pero carece de fuerza. Llega más pronto que el hombre á cierto grado de cultura; pero no es susceptible de profundidad ni adelanto; incapaz de crear ni de emprender investigaciones, se asusta cuando se aleja un tanto de la senda trillada, sintiéndose fuera de su centro donde quiera que se dilata algo el horizonte. La mujer ha nacido para concentrar su actividad en un círculo estrecho ó, para hablar más claro todavía, está destinada á ser el angel tutelar de la familia. Al hombre corresponden exclusivamente los asuntos exteriores, como el gobierno del Estado ó el cultivo del campo de la ciencia.

"El *pensamiento* predomina en el hombre, el *sentimiento* en la mujer, aunque ni la mujer está falta de inteligencia, ni el hombre de sensibilidad. El uno puede considerarse como la *cabeza*, la otra como el *corazón* de la humanidad. Sensibilidad exquisita, movilidad excesiva, extremada sobreexcitación nerviosa, tales son los tres aspectos fisiológicos de la mujer estudiada en sus tipos más completos.

„El hombre lo somete todo al análisis y tiende á desarrollar sus sentimientos por medio de la reflexión: la mujer lo reduce todo á los efectos y tiende á cultivar el espíritu por medio del corazón. De la mujer puede decirse que los grandes pensamientos vienen del amor, y del hombre que los nobles sentimientos derivan del pensamiento. El equilibrio de las facultades se manifiesta en la una bajo la forma de la caridad, y en el otro bajo la forma del saber. Al pensamiento, menos subjetivo y más imparcial que el sentimiento, está por la naturaleza encomendada la dirección. En las relaciones sociales el hombre se distingue por la personalidad, la actividad propia, la tendencia á bastarse á sí mismo; la mujer por la necesidad de unirse y de vivir en el pensamiento de otro. El hombre por su inteligencia, por su espontaneidad é independencia está destinado para las reuniones públicas, donde cada uno afirma libremente su personalidad enfrente de los demás, procura hacer triunfar sus convicciones individuales, y puede aspirar á dirigir los negocios de su partido ó de su patria. La mujer, por su naturaleza afectuosa y por su recato, se sentiría ofendida tomando parte activa en las reuniones electorales ó en las discusiones parlamentarias.

„Seguramente no alcanzaría así las cualidades del hombre y perdería los atractivos propios de su sexo. La mujer está llamada á perfeccionar y á embellecer la vida individual en toda la esfera de acción que las circunstancias le asignen. La vida pú-

blica y la vida privada obran y reobran una sobre otra en provecho de la civilización. La mujer es el lazo de la sociedad; ella dulcifica la rudeza del hombre y le atrae al seno de la familia, donde contrabalancea las influencias exteriores con su ternura (1).„

No es, pues, la misión de la mujer lanzarse á las agitaciones de la vida pública, ni luchar en las contiendas electorales, casi siempre ocasionadas á disensiones y rencores y tan opuestas al recogimiento de la mujer, como contrarias á la delicadeza propia de su sexo; á lo que debemos añadir que la mujer carece de la independencia necesaria para el ejercicio de tal derecho, pues en cualquiera estado de su vida, ó se halla subordinada al hombre por la naturaleza ó por la ley, ó sometida á su influencia. Si se quisiere llevar más allá de la familia la misión social de la mujer, encomiéndesela la administración de los hospicios, el cuidado de los acogidos, la educación de los expósitos, la asistencia de los enfermos; en una palabra, todo lo que signifique amor, ternura y devoción; pero guardémonos de permitir que baje á la arena de la política, no sea que al pasar por los clubs emancipadores, ó al atravesar la plaza pública, se trueque el angel del hogar en aquel monstruoso engendro conocido en la historia con el nombre de furias de la guillotina,

Otra de las cuestiones controvertidas á propósito del sufragio es si debe ser directo ó por grados. Los partidarios del primer sistema opinan que es necesario colocar pocos intermediarios entre el pueblo y el poder, que es su emanación, porque, siendo el ideal democrático el gobierno directo por el pueblo y no siendo la delegación más que un expediente destinado á facilitar el juego de las instituciones, quieren que la delegación sea directa y que la nación misma sea llamada á nombrar y juzgar á aquellos que han de votar los subsidios y las leyes, teniendo la ventaja de expresar más fielmente que el indirecto la voluntad, lo que dá mayor autoridad al elegido y mayor confianza al elector.

Los defensores del sufragio por grados hacen notar que es más fácil designar simplemente los hombres más dignos para un municipio, que elegir un diputado á quien generalmente no se conoce. El punto importante es que la elección sea realmente la elección, es decir, el acto de escojer, lo que se obtiene perfecta-

---

(1) Tiberghien, *La Science de l'ame*, pág. 473. Bruxellas 1868.

mente en el sufragio por grados, de tal modo, que con este sistema la ignorancia perdería la mayor parte de sus inconvenientes. Añádese también que en los paises donde la opinión está dividida entre la doctrina de la capacidad y la doctrina del sufragio universal, el sufragio por grados sería la más sabia de las transacciones; porque el derecho individual de voto sería por una parte reconocido y sostenido legalmente, mientras que por otra la capacidad electoral sería admitida como una condición necesaria para su ejercicio.

Antes de terminar el examen de las cuestiones que se refieren á la elección, diremos dos palabras sobre el voto público y el secreto. En favor del voto secreto se dice que el legislador debe ante todo colocar al elector en todas las condiciones posibles de independencia, y que el elector será siempre más independiente si su voto es conocido de él solo y derivado por consiguiente de su conciencia.

Como razones en pró del voto público se alega que el ejercicio de los derechos políticos supone una independencia y un sentimiento de dignidad incompatible con el escrutinio secreto; que el hombre que toma parte en la cosa pública, debe ser bastante firme, bastante decidido para no tener necesidad de ocultarse; y que es bueno además que haga conocer públicamente su opinión, para que ésta sea sometida á la censura de sus amigos y conciudadanos. Sin embargo, el escrutinio secreto responde mejor á la debilidad humana y á la complicación de los intereses individuales y sociales.

Para concluir, añadiremos, que algunos han llamado derecho electoral *activo* á la facultad de elegir los representantes de la nación, y *pasivo* á la aptitud ó capacidad para ser elegido.

II—OPCIÓN A LOS PUESTOS PÚBLICOS

Este derecho significa la suposición hecha por la ley en favor de todos los ciudadanos, sin exclusión prévia de ninguno, de que pueden llegar al desempeño de todos los cargos sociales.

La consagración de este derecho en las modernas constituciones, que ha tenido principalmente por objeto borrar las diferencias de clase en cuanto á la consideración social y sancionar

la igualdad esencial del hombre, no supone ni puede racionalmente suponer que todos sin distinción puedan aspirar á todo, sean cualesquiera sus dotes y las condiciones que exija el desempeño del puesto solicitado.

No es preciso demostrar que todos los funcionarios deben estar adornados de las dotes necesarias de probidad, saber y edad para que el cargo público esté, no sólo bien desempeñado, sinó también dignamente representado. Enunciar estas condiciones como indispensables, equivale á decir que las funciones públicas no deben ser patrimonio exclusivo de ciertas personas que se las trasmitan por herencia, ni propiedad de ciertas clases privilegiadas que trafiquen con ellas por dinero; pero es también afirmar al mismo tiempo que no basta la simple condición de ciudadano, sin méritos ni aptitud, para aspirar á todo. El sentido común y la práctica racional de todos los pueblos se rebela contra estas exageraciones. En ningún país bien gobernado tienen derecho las mujeres á desempeñar los cargos de la judicatura, milicia y administración, porque, aun supuesta su aptitud, no se armonizan bien tales funciones con la delicadeza del sentimiento, con el recogimiento propio del sexo, ni con la misión especial de éste, que ha de cumplirse principalmente en la vida íntima de la familia. Si, al parecer contra estas prácticas, se ha concedido á las mujeres derecho á ocupar el trono, esto ha reconocido por causa el deseo de evitar en la sucesión hereditaria el advenimiento de líneas transversales y de dinastías extranjeras. Por razones aun más palmarias no habrá quien pretenda conceder á los niños, fatuos, locos y criminales el derecho de ocupar tales puestos; y si estas limitaciones sólo se fundan en último análisis en la falta de aptitud, no hay razón alguna para exigir unas condiciones y prescindir de otras igualmente necesarias. En ningun pueblo del mundo tienen los legos derecho á los cargos eclesiásticos, ni los paisanos á los empleos militares.

Exigiendo, pues, el desempeño de los cargos públicos ciertas condiciones, que, como las necesarias para el ejercicio de cualquiera otra profesión, no se adquieren sin disposiciones naturales adecuadas por una parte, y sin un aprendizaje más ó menos largo por otra, demuéstrase que este derecho ménos que ningun otro puede llamarse absoluto, puesto que la ley no debe concederle ni racional, ni justa, ni políticamente, sino en relación con las condiciones particulares que exige el desempeño de cada cargo.

CAPITULO VII

DE LOS DERECHOS MIXTOS

I—EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PENSAMIENTO

La comunicación entre los hombres es una de las condiciones que más contribuyen á su perfeccionamiento: la emisión de las ideas es la primera condición para comunicarse; y la difusión de la verdad el medio de extender por todas partes las ventajas de esta comunicación.

La publicidad, se ha dicho también, es la piedra de toque de todos los errores y el medio de todos los progresos. En las sociedades democráticas la publicidad es la primera sinó la única garantía de la opinión; es el *justiciador* por excelencia de todas las ideas falsas, de todos los proyectos perniciosos, de todos los actos arbitrarios; la mejor medida de la libertad de un pueblo y de su participación en la gestión pública, y hasta una forma de la responsabilidad de los poderes y una limitación moral de sus atribuciones.

No siempre, sin embargo, sirve la publicidad para hacer triunfar la justicia y el derecho contra los abusos y arbitrariedades del poder; á veces también es germen de perturbaciones y trastornos, tanto en el orden moral y de las familias, como en el social; porque si la difusión de la verdad produce aquellos benéficos resultados, la propagación de los errores, pervirtiendo la inteligencia, vicia el sentimiento y trastorna el orden moral.

No es, pues, extraño que materia de tamaña importancia

haya sido objeto de las más animadas discusiones y empeñadas controversias, sobre todo si se atiende al poderoso medio de publicidad de que disponen las sociedades modernas con la imprenta. Lo arduo de la materia, la gravísima dificultad de conciliar en este punto la libertad del individuo con el orden social y la conveniencia y el derecho del Estado con el interés y el derecho de sus miembros, nos obliga á exponer algunas doctrinas sobre este asunto antes de fijar la nuestra.

La libertad de pensar y de escribir, dice Julio Simon (1), es no sólo derecho natural é imprescriptible, sino también la garantía y la salvaguardia de todas las libertades públicas. Cuando se suprime la libertad de la prensa, no hay más que un remedio contra las arbitrariedades del poder, contra las concusiones y la inmoralidad de los gobernantes, recurrir á las armas. Por el contrario, cuando la prensa es libre, ningún ministro es tan grande, ni ningún agente provincial ó municipal tan pequeño que pueda escapar al juicio de la opinión. No hay ni puede haber elección libre, ni discusión de las candidaturas sin libertad real de la prensa. Sin la publicidad el valor cívico es siempre una excepción, casi siempre un imposible. Para que el espíritu público se forme y se mantenga, es necesaria esta poderosa voz de la nación que distribuye el elogio y la censura, que invoca sin cesar los derechos y los intereses comunes. Los abusos de la mala prensa, los ataques á las verdades esenciales, la publicación de noticias falsas que puedan trascender al orden social, la calumnia contra los funcionarios ó contra los ciudadanos, pueden ser reprimidos por los tribunales; más con el silencio de la prensa la opinión pública puede ser extraviada por los agitadores, y las personas lastimadas en sus derechos, ó lo desconocen, ó no saben á qué tribunales recurrir para defenderlos, ó sucumben en sus gestiones, porque carecen de medios para luchar contra la apatía ó la mala fé de los funcionarios, si la prensa no viene en su auxilio denunciando los abusos, enseñando los procedimientos, protestando contra la mala administración. Cuando la sociedad tenía por base el principio de autoridad, no era la prensa indispensable, porque en el órden moral la religión servía de freno, las tradiciones de casta eran un estímulo para el honor y el patriotismo, y los derechos individuales tenian su defensa en

(1) V. *La liberté politique*, págs. 196 á 221. París 1881.

las corporaciones; pero en la vida actual, bajo el régimen de libertad, todo sería opresión ó anarquía sin la prensa, único órgano de la vida intelectual y moral de los pueblos y condición indispensable de toda resistencia legal. Todas las persecuciones contra la libertad del pensamiento, son además inútiles, cuando no contraproducentes; los filósofos y los economistas del pasado siglo perseguidos, desterrados, condenados á graves penas, se hacen populares, sus escritos son buscados y leidos con avidez, minan el orden de cosas establecidas, provocan la reunión de los Estados generales, la toma y demolición de la Bastilla, y producen al cabo la revolución más terrible que han conocido los siglos.

Análogas soluciones entraña la doctrina de Dupont-White. En una sociedad progresiva, dice (1), por muy grande que sea la acción del gobierno hay una cosa que es siempre derecho exclusivo del indivíduo: el pensamiento. El Estado podrá intervenir en aquellos actos materiales y aun en aquellas relaciones de que puedan surgir conflictos. Pero, como los hombres no pueden dañarse tanto con la libertad de hablar como con la de obrar, sería una intrusión injusta la intervención del Estado en la región de las ideas. Sin embargo, la idea puede también producir males, pues, si bien no obra por sí directamente, puede llevar á producir ciertos hechos. En tal sentido no ha de pedirse para ella la impunidad, sino sólo la libertad, por virtud de la cual es el hombre responsable de sus actos y susceptible de represión. Todas las inteligencias tienen igual derecho á expresar su contenido y nadie, que no sea infalible, tiene derecho á imponerse á los demás, so pretexto de que se hallan expuestos al error. Pero la libertad del pensamiento no implica que el Estado deba abstenerse de toda acción sobre los espíritus. Por el contrario, esta acción puede ser casi siempre conveniente: en los pueblos incultos, porque el gobierno es en general menos grosero que los súbditos; y en los civilizados, porque el gobierno está en ellos constituido por las superioridades y es por lo mismo más culto que la masa de los ciudadanos. Mas la acción del Estado no debe llegar nunca á reglamentar el pensamiento impidiéndole progresar. Y tanto se halla esto en la conciencia de los gobiernos que raramente le ponen trabas, sinó es por móviles egoistas. Así se vé por todas partes cuán facilmente toleran aun aquellas mismas ideas que

(1) V. *L'Individu et l'Etat*, pág. 209 y sig.

trastornan ó pueden subvertir las bases del orden social, la religión y la moral, y qué celo y qué energías despliegan contra el más mínimo ataque al Estado ó su gobierno.

Benjamín Constant defiende también la libertad de imprenta, principalmente contra la censura previa. Según él, la restricción de la libertad de imprenta se ha querido excusar con la suspensión de las garantías constitucionales, generalmente admitida; pero, entre todas las libertades, la de imprenta es la única que no puede suspenderse, porque es el único medio para corregir el abuso posible de la suspensión de aquellas. Si la libertad de imprenta se suspende, aun quedando en pié las demás garantías, serán estas una salvaguardia poco segura, porque pueden ser violadas con mayor facilidad. Conceder por otra parte á la autoridad el derecho de prohibir la manifestación de las opiniones implica reconocerla también el de determinar las consecuencias de tales opiniones, el de hacer conjeturas é inducciones, el de razonar, tomando sus propios raciocinios por hechos positivos, consagrando de este modo lo arbitrario y facultando á los gobernantes para hacer mal siempre que quieran hacer ó hagan malos raciocinios; como si los hombres á quienes se confie el derecho de juzgar las opiniones ajenas no fueran también susceptibles de la injusticia ó del error. Además los ataques dirigidos contra la libertad de los escritos sólo han dado por fruto exasperar á los autores, obligarles á recurrir á indirectas y alusiones, acaso más perjudiciales, por ser encubiertas, dar margen á la circulación de producciones clandestinas, siempre peligrosas y atrevidas, fomentar la avidez pública por medio de cuestiones personales y principios sediciosos y, en fin, dar una importancia excesiva á las obras que se han prohibido.

Las leyes prohibitivas crean además los delitos ficticios que se ponen á la par de los naturales y oscurecen las ideas de la moralidad. La calumnia, la difamación, las provocaciones á la revolución son acciones culpables por su naturaleza. La publicación de un libro que no ha sufrido la previa censura, es decir, el acto de manifestar su opinión sin haberla sometido á la de otro no es un delito, sino porque la ley lo ha creido tal.

Considerado este asunto con respecto al interés de la libertad y de la seguridad individual, es indudable que la única garantía de los ciudadanos contra la arbitrariedad es la publicidad, y la publicidad más fácil y más regular es aquella que los periódicos procuran. Puede darse lugar á arrestos ilegales y á des-

tierros que no lo sean ménos, á pesar de la más bién formada constitución. ¿Y quién los conocerá si se comprime la libertad de imprenta? El mismo jefe del Estado puede ignorarlo; y si se conviene en que es útil que los conozca, ¿á qué es poner obstáculos al medio más seguro y rápido que hay de denunciarlos?

El único argumento plausible empleado hasta aquí para restrinjir la justa libertad de la imprenta, que consiste en decir que "las restricciones son necesarias para prevenir los abusos,„ pierde toda su fuerza, cuando por una aplicación conveniente de la ley se ha demostrado que no se puede abusar de la imprenta sin incurrir en un castigo merecido (1).

Oigamos ahora á los defensores de la censura previa.

"La libertad, dice Hermosilla, es mayor con la ley de la censura que con las llamadas represivas.

„Esta, que á primera vista puede parecer paradoja, es una verdad innegable y muy fácil de probar. ¿Puede negar alguno que en cualquiera clase de acciones, cuanto menor es la coacción con que las ejecutamos, mayor es la libertad?

„Cuanto menor es el daño que nos amenaza si ejecutamos una acción, tanto menor es la coacción con que se sujetan ó reprimen nuestro deseo ó voluntad. Es así que el daño con que se amenaza en las leyes que establecen la censura, es mucho menor que el que resulta de las que se llaman represivas, luego la coacción es menor en el primer caso que en el segundo.

„Se replicará sin duda: ¿Pues cómo, siendo mayor la libertad en la prévia censura que en la represión posterior, se imprimen y publican muchas más obras de todas clases en los paises de leyes represivas que en los sujetos á la llamada de censura? Porque las llamadas represivas son un trampantojo bien imaginado para dar á entender que se quiere reprimir los abusos de la imprenta; pero en realidad se destinan á favorecer la impunidad y la licencia de la facción dominante, y á tiranizar con cetro de hierro la libertad de todos los que no pertenecen á la secta.

„Además, aun concediendo que bajo las leyes represivas se imprime más que en los tiempos de censura, faltaría examinar si esta superabundancia es ventajosa; por que, si eso más que se publica es perjudicial ó inútil, sería preferible la anterior esca-

(1) Benjamin Constant.--*Dcho. constit.* trad. por Lopez. Tomo II, páginas 172 y 254.

sez de nuevas producciones. En esta materia como en tantas otras no es lo mucho, sinó lo bueno, lo que necesitan las naciones.

„La censura previa es por lo ménos más ventajosa al Estado que las leyes represivas.

„En cuanto al interés general, es más claro que la luz del medio dia. En la suposición de que se haya de estorbar la propagación de malas doctrinas, se conseguirá esto más fácil y seguramente, examinando los escritos antes de su publicación, que después de publicados.

„En primer lugar, la experiencia tiene demostrado que, si por no haber previa censura para los escritos que la reclaman llega á publicarse una obra perjudicial, está ya extendida y divulgada cuando el magistrado, advertido de su perversidad, manda suspender su venta y circulación, y de consiguiente está ya el daño hecho cuando se acude con el remedio.

„En segundo lugar, si seguidos los trámites del juicio es condenada la obra, la parte de la sentencia relativa á recojer los ejemplares expendidos queda necesariamente ilusoria; porque la misma condenación excita la curiosidad, hace célebre el escrito, y rarísimo es el que, teniéndole ya, se desprende de su ejemplar en obsequio de la ley.

„Además, el recojer los ejemplares, aun sin tomar en cuenta lo odioso de las pesquisas domiciliarias, único arbitrio que pudiera emplearse con éxito algo dudoso, envuelve siempre la injusticia de privar al individuo de una propiedad adquirida de buena fé, en tiempo hábil, y bajo la protección de la ley, que permite comprar todo libro que no ha sido ya expresamente condenado.

„En tercer lugar, ¿no es un principio general, una máxima de prudencia política adoptada por todos los legisladores antiguos y modernos, que en materia de crímenes vale más prevenirlos que castigarlos? Pues aplíquese el principio á los delitos de imprenta. Se dirá que la regla tiene algunas excepciones; pero estas mismas confirman, como se verá, la regla que establecemos. Las excepciones, bien analizadas, son las siguientes: 1ª cuando la acción es buena en sí misma no se debe prohibir por el solo temor de que pueda servir como de medio ó instrumento para cometer un crimen: 2ª cuando la acción parece indiferente y no hay razonable temor de que se convierta en abuso perjudicial, no debe prohibirse por la remotísima sospecha de que uno ú otro individuo pueda aprovecharse del permiso para causar algún daño: 3ª una acción puede ser indiferente en sí misma; pero de tal naturaleza que el abuso consiguiente sea no sólo posible,

sinó verosímil, probable y casi seguro en la mayor parte de los casos. Estas deben prohibirse en su generalidad, salvo el conceder permisos particulares.

„Estos son principios admitidos en toda legislación. Aplíquense pues á la de imprenta, y resultarán de ello estas dos reglas: 1ª No se sujeten á previa censura, por el lejano temor de que puedan tener malas doctrinas, aquellas obras en que es casi imposible que se hallen, y en que, de hecho, rarísima vez se encuentran. Tales son las que tratan de oficios, artes y ciencias matemáticas y físicas. 2ª Sujétense al más riguroso exámen todas aquellas en las cuales es muy fácil ó probable que se hallen doctrinas, ó absolutamente perjudiciales, ó á lo menos de que se pueda abusar por error ó mala inteligencia en daño de la sociedad. Tales son los libros en que se tratan materias de religión ó de gobierno, y los de pasatiempo, que más ó menos se rozan siempre con la moral (1).„

Sentado por nosotros que la emisión y publicación de las ideas es un derecho, porque es el primero y más importante medio de comunicación entre los hombres, y ésta, condición indispensable del perfeccionamiento social, para saber hasta donde llega tal derecho y cuales son sus límites racionales, preciso es fijar antes algunas proposiciones indiscutibles y hacer la distinción conveniente entre las varias materias sobre que puede versar el pensamiento.

El hombre tiene obligación de ser veraz, y como este deber le ha sido impuesto por la ley moral, á la que no puede oponerse el derecho, el hombre no tendrá jamás derecho á propagar el error conscientemente. El error, aun inconscientemente propagado, puede trascender á la vida pública y social, ó ser indiferente para ésta, según el carácter y la importancia de la doctrina sobre que recae. Cuando el error trasciende á la vida pública, no puede ser indiferente al Estado, cuya misión es conservar en la sociedad el orden jurídico y el moral. El derecho del hombre á emitir y publicar sus ideas ha de estar, por consiguiente, en armonía con el derecho del Estado á velar por el bien público y por la defensa de los derechos sociales. Cuando entre el derecho del individuo y el del Estado pareciere haber pugna, á éste, como entidad superior y órgano único para declarar y aplicar el derecho, corresponde resolver el conflicto. Como el derecho se refiere

(1) V. Hermosilla.—*El Jacobinismo*, Tomo I, págs. 358 y siguientes.

únicamente á las relaciones sociales ó entre los hombres, todo lo que diga relación á la vida meramente individual, y todo lo que no afecte directa ó indirectamente á los fines del Estado será extraño á su acción. Por el contrario, cuanto más se relacione un hecho humano cualquiera con la vida social ó con el derecho, para cuyo cumplimiento fué instituido el Estado, mayor será la intervención que á éste corresponda y más limitado el derecho del individuo enfrente del poder público. Ahora bien: las ideas, el pensamiento y las doctrinas comunicables entre los hombres pueden trascender á la vida pública y social y ejercer influencia en la jurídica, ora por la materia sobre que versan, ora por la forma y tiempo en que se trasmiten: unas tienen trascendencia por su propia naturaleza, y otras la tienen sólo en algunos casos por virtud de las circunstancias. De donde se infiere que el Estado no tiene las mismas atribuciones respecto á todas las doctrinas, ni respecto á todas las publicaciones. Es por lo mismo necesario distinguir entre unas y otras; pero sólo para lo que á nuestro propósito interesa, es decir, en lo tocante á la vida jurídica. Como ésta se subordina á la moral, puesto que el derecho, según digimos, es medio para el fin humano, toda manifestación de pensamiento ó doctrina contrarios á la ley moral puede y debe ser prohibido por el Estado, y sobre este punto no hay discusión racionalmente posible, basada en el modo de entender la ley moral, porque esta ley es igualmente conocida por todo sér racional no extraviado por el apetito ó la soberbia. La ley moral tiene su fundamento en las relaciones entre la criatura racional y su Criador, y como el conjunto de estas relaciones y de las creencias respecto á ellas constituye la religión, por estar subordinado el derecho á la moral, lo estará también á la religión y el Estado, por consiguiente, podrá y deberá prohibir toda manifestación ó publicación del pensamiento contrario á la religión. Pero el dogma religioso no es para todos tan evidente como la ley moral, y de aquí la diversidad de religiones, aun en los mismos pueblos cultos, cosa que no sucede con los preceptos morales de la ley natural, admitidos universalmente; por donde, no siendo igual el criterio en materias religiosas, el derecho del Estado, enfrente del invocado por los individuos, habrá lógicamente de ajustarse á los principios religiosos que profese, dejando completa libertad, si la religión aceptada como verdadera es libre pensadora, ó impidiendo toda manifestación contraria á las creencias religiosas, cuando el dogma, además de ser conforme

con la ley moral, declara que sólo en él se halla la verdad (1). Esto se ha de entender de las doctrinas notoriamente relacionadas con la moral ó con la religión, pues claro está que aquellas, cuya relación no sea evidente, ni indiscutible su certeza, ni concretamente declarada su falsedad por la autoridad competente, salen de los límites de la acción del Estado y debe ser libre su emisión, por lo menos al examinarlas bajo tal punto de vista.

Aparte las doctrinas morales y religiosas, indiscutibles de suyo, las morales por ser comunes y admitidas por todos los hombres y pueblos cultos, y las religiosas en cuanto el Estado las admite como verdaderas, todas las demás doctrinas, desde las sociológicas y políticas hasta las referentes á procedimientos más ó menos útiles en las artes mecánicas, son ó pueden ser racionalmente objeto de controversia, y no hay ni nadie reconoce autoridad alguna en la tierra para decidir sobre tales materias. El Estado, por consiguiente, no puede con justicia impedir la manifestación del pensamiento en estos asuntos, á menos que por el modo y forma de publicación se subvirtiera el órden social y jurídico, se excitara á la rebelión, se atacara á las instituciones ó minaran las bases fundamentales del Estado, pues en caso tal, éste, como toda otra persona y aun más que las personas individuales, tiene derecho á defenderse en su existencia y en su modo de existir.

Pero no basta afirmar que el Estado puede limitar en su ejercicio el derecho que nos ocupa: la principal cuestión es, como lo indican las teorías expuestas anteriormente, la de saber si el Estado puede intervenir por medios preventivos ó emplear sólo medidas represivas. Nosotros nos pronunciamos sin restricciones por las últimas, porque todos los medios preventivos ideados ó aplicados hasta la fecha, ó son contrarios al derecho, ó son inútiles y vejatorios. Reconocemos que sería mejor prevenir el mal que corregirle; pero la aplicación de tal principio es en la práctica imposible jurídicamente, esto es, sin lesionar derechos legítimos ó sin abrogarse el Estado los que no le corresponden. En efecto, sobre la previa *censura* ya hemos visto, por las doctrinas citadas, cuán poco se aviene con la justicia y con la pública conveniencia; y respecto á la *caución* ó *depósito* previo, que exigen á veces los gobiernos para prevenir los desmanes de la publici-

(1) Véase lo dicho en las págs. 67 y siguientes respecto á las relaciones del Estado con la *religión*.

dad, sobre todo de la prensa periódica, es innegable, como dice Lacombe (1), que constituyen un verdadero privilegio á favor de los ricos, sin que obste protestar que la caución es el único medio de asegurar la responsabilidad pecuniaria en que pudieran incurrir los infractores de la ley, pues la misma razón habría para exigir caución por el uso de la palabra, más pernicioso casi siempre para la honra y crédito de las personas, porque la murmuración se oculta en la sombra y puede difamarnos sin saberlo, lo que no sucede con la prensa. La caución, en realidad, es un medio indirecto de limitar el número de periódicos y tiene acaso su fundamento en que las ideas subversivas y los agitadores hallan más fácilmente eco en las clases bajas, que en las acomodadas. También los derechos de *timbre*, impuestos á las publicaciones periódicas y que no deben confundirse con el franqueo, son injustos, porque tal exacción es la más crecida proporcionalmente y en relación con el subsidio exigido de las demás industrias, que no se impone sobre cada producto individualmente tomado, sinó en conjunto. Lo mismo puede decirse de la *autorización* previa, que podría hacer imposible la prensa de oposición; de la *suspensión* y *supresión* de los periódicos despues de uno ó varios apercibimientos por la autoridad gubernativa, lo que pondría la opinión á merced de los gobiernos, y de otras medidas análogas, cuyo examen no hacemos por ser materia más propia del derecho administrativo.

En suma; todos los políticos serios reconocen al Estado el derecho de impedir el mal; pero este derecho no debe ejercerse arbitrariamente sin consideración á los individuos, y para evitar toda arbitrariedad deben apreciarse las diversas condiciones y circunstancias no sólo de las publicaciones, sinó también de los lectores á quienes están principalmente destinadas, debiendo ser distintas las disposiciones legales, según que las publicaciones sean científicas, literarias, políticas, religiosas, morales ó de puro pasatiempo, y según que hayan de ver la luz pública pocas ó muchas veces, diaria ó periódicamente. En todo caso, las autoridades judiciales son las únicas competentes para resolver los conflictos que pudieren surgir entre los derechos del individuo y los de la administración, pues de encomendarse á ésta vendría á ser juez y parte en propio asunto. No debe tampoco perderse de

---

(1) *Mes droits*, págs. 7 y sigs. París 1869.

vista que en materia de responsabilidad criminal sólo puede exigirse racionalmente por los delitos definidos de un modo concreto y con anterioridad por el legislador.

II—DERECHO DE PETICIÓN

Considerado este derecho en toda su extensión ó de un modo general es, según Rossi (1), "la facultad que compete á toda persona para dirigirse á los poderes sociales, á las autoridades constitucionales, para hacerles conocer tal ó cual hecho, tal ó cual estado de cosas y para reclamar su intervención.„

Este derecho debe concederse dentro de ciertos límites á todos los ciudadanos porque, siendo el fin de la sociedad civil y la primera obligación de los gobiernos procurar la felicidad general de todo el cuerpo político y la particular de sus miembros, todos pueden exigir con justicia que se oigan sus reclamaciones, que se atiendan sus quejas, si es que tal medio puede conducirlos á su bienestar.

Lo mismo puede afirmarse de todas las clases, sociedades y corporaciones reconocidas por la ley; porque, siendo personas jurídicas, son otros tantos miembros orgánicos del Estado y deberán tener en su caso y lugar, y para sus necesidades é intereses colectivos, la misma libertad y derechos que los individuos físicos tienen en su clase, pudiendo por tanto formular quejas y peticiones sobre todos los objetos que les conciernen é interesan.

Sólo á los militares es justo prohibir que hagan colectivamente peticiones, aunque se les permita representar individualmente, como á los demás ciudadanos. Esta excepción está fundada en que las peticiones hechas por colectividades armadas más parecen imposiciones y entrañan un grave peligro para la tranquilidad pública por la amenaza que envuelven.

En cuanto á las corporaciones políticas no reconocidas legalmente ó que buscan en su existencia el triunfo de tal ó cual sistema político, no cabe duda que, aun dado que se les permita reclamar contra los abusos autoritarios ó de otro género de que puedan ser objeto, de ningun modo debe concedérseles dirigirse

---

(1) *Cours de Droit Const.* Tomo III, pág. 164.

al poder legislativo, porque las leyes deben proponerse siempre el interés general sin inspirarse jamás en bastardos y mezquinos intereses de partido.

Acerca de las corporaciones populares, no obstante que como reconocidas por la ley pueden hacer peticiones, éstas deben concretarse á lo que fielmente representa su misión. Encargadas de mirar por los intereses locales, ya del municipio, ya de la provincia, á esto solo deben limitarse. Podrán, en consecuencia, pedir al gobierno y al poder legislativo cuanto crean conveniente á la prosperidad del pueblo ó provincia cuya administración les está encomendada; quejarse de lo excesivo de los gravámenes é impuestos y reclamar su disminución; hacer presentes los inconvenientes y perjuicios que puedan resultar de la ejecución de alguna orden ó aplicación de alguna ley, y exponer las necesidades locales que deben satisfacerse. Las representaciones políticas de cualquiera clase que sean desnaturalizan estas corporaciones y las exponen á ser víctimas del oleage de las pasiones, por no haber sabido conservarse en su esfera propia.

El derecho de petición puede, como todos, originar abusos. Provocadas artificiosamente las peticiones por los gobiernos ó por los manejos de los partidos, sirven de pretexto para sustituir el voto libre, razonado é imparcial de los hombres sensatos é ilustrados con la opinión ciega y apasionada de la muchedumbre ignorante, y así sucedió en la revolución francesa, durante la cual los emisarios y agentes secretos del gran club revolucionario promovian peticiones sin cuento para hacer pasar como aspiraciones del pueblo las innovaciones y reformas que se proyectaban. Además las peticiones colectivas, aun siendo espontaneas y numerosas, no siempre son eco fiel de la opinión y de la voluntad general, y aun siéndolo, no conviene dar al pueblo, incompetente en su mayoría, la iniciativa de las leyes en negocios de Estado y en asuntos de alta política, ni tampoco hacer públicas semejantes peticiones por medio de la prensa, porque, ó el gobierno accede á lo solicitado, ó no. En el primer caso es inconveniente para la popularidad de los gobiernos dar publicidad á una petición que no han de atender; y si accede, es poco político, su prestigio se merma, porque parece, ó falto de iniciativa y necesitado del estímulo de los gobernados, quienes le indican el camino que debe seguir, ó débil ante la importunidad de los peticionarios y como cediendo á la fuerza.

"Aun admitida en teoría y concedida la soberanía del pue-

blo, no puede reconocerse en la práctica el derecho de intervención que se quiere dar á la plebe en los negocios generales. Concedamos en efecto que las naciones deban elegir diputados ó representantes que hagan las leyes, creen é instalen los magistrados, determinen sus facultades, vigilen su conducta y los residencien cuando haya méritos para ello ¿se sigue de aquí que una vez hechas las leyes, creadas las magistraturas, y estando éstas ejerciendo legalmente la autoridad delegada, tienen todavía los ayuntamientos y corporaciones el derecho de intervenir actualmente en las operaciones del gobierno y dictarle lo que ha de hacer? ¿Qué otra cosa sería esto que conceder al pueblo el ejercicio actual, permanente y perpetuo de la soberanía, cosa que los mismos jacobinos ni pretenden ni se atreven á sostener, porque el absurdo salta á los ojos? ¿No dicen sus escritores que la soberanía, que atribuyen á las naciones, es una soberanía radical; que en virtud de ésta pueden aquellas nombrar personas que decreten las leyes y las hagan ejecutar; pero que una vez hecha ésta solemne delegación de la soberanía actual, no le queda ya al pueblo otro derecho que el de levantarse contra sus mandatarios, si son infieles, revocarles sus poderes, pedirles cuenta de su administración y castigarles si lo merecen? ¿Cómo se quiere, pues, que mientras estos ejercen legalmente la autoridad delegada; mientras que el pueblo no se la quita; mientras éste se halla contento y bien avenido con su administración y no se levanta contra ellos y los depone, haya de tener, sin embargo, el absurdo, ridículo y funesto derecho de venir todos los dias á interrumpir sus tareas con impertinentes consejos? (1)„

Los límites naturales del derecho de petición son, según Bluntschli: 1° que sólo se ejerza por personas políticamente mayores de edad, porque, siendo éste un derecho personal, sólo puede corresponder á personas reales, que tengan opinión propia y que se hallen en estado de manifestarla: 2° que la autoridad á quien se dirija la petición sea la competente para conocer del asunto objeto de aquella: 3° que se guarde, al hacerla, el respeto y consideración debidos, tanto á los poderes constituidos, cuya autoridad se invoca, como á la conveniencia pública y á las buenas costumbres.

---

(1) Hermosilla. *El Jacobinismo*. Tomo III, págs. 399 á 440.

III—DERECHOS DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN

A nadie se oculta que el hombre halla en el concurso de sus semejantes medios seguros de suplir su insuficiencia; que la concurrencia de voluntades hacia un objeto común aumenta prodigiosamente el alcance de las fuerzas individuales, y que la frase *unión es fuerza*, comprobada por la experiencia, ha venido á ser una máxima de vida ó una regla de conducta.

No será, pues, necesario demostrar que todo hombre tiene derecho á reunirse y asociarse con otros hombres, si estos hechos pueden contribuir, como medios ó condiciones naturales, á la realización de algunos fines humanos. Esta verdad incuestionable no hubiera sido contradicha, si siempre se hubieran empleado tales medios para conseguir fines lícitos; pero desgraciadamente el hombre trastorna muchas veces el orden de la naturaleza, abusando de lo mismo que se le ha concedido para labrar su felicidad. Por lo mismo no parecerá extraño que derechos tan inconcusos, como los que ahora nos ocupan, hayan sido objeto de controversia. Pero antes de discurrir sobre su legitimidad, veamos en que consiste.

Por *reunión* se entiende la concurrencia de individuos en un punto dado sin compromisos previos, ni intención explícita de cooperar á un fin determinado.

Asociación es, en rigor, el acto por el que varias personas se comprometen á trabajar ó procurar de consuno la realización de un fin propuesto; y también se llama así al mismo conjunto de personas que se proponen un fin comun.

Para determinar hasta donde llegan respectivamente el derecho del individuo y el del Estado en esta materia, lo primero es distinguir las reuniones públicas de las secretas.

En cuanto á éstas últimas, prescindiendo del objeto que se propongan, de su bondad ó malicia, y de todas las demás circunstancias que en ellas puedan concurrir, es innegable que el Estado tiene derecho á prohibirlas, porque, siendo desconocidos sus fines y sus medios, son ó parecen un peligro inminente para el orden ó para la moralidad, pues, si tales reuniones se proponen un fin honesto, digno y noble, no hay ni puede haber razón alguna para ocultarse, excitando el temor ó las sospechas de los tímidos y recelosos, y porque si en estas reuniones se tra-

ta de ilustrar á los congregados, de educarlos y fortalecerlos en la virtud moral ó cívica, tal enseñanza, tal educación y doctrina, tal medio de mejorarse, no se debe escatimar á nadie y, sobre todo, no parece racional velarlo con la sombra del misterio, pudiendo ser su ejemplo tan útil y beneficioso.

En orden á las reuniones públicas debe hacerse distinción entre las indiferentes y aun útiles por su misma naturaleza, y las que pueden ser peligrosas ó están por su constitución especial más expuestas á serlo.

Las primeras, siendo transitorias, relativas á la vida privada, y proponiéndose casi siempre el honesto recreo, son propias de toda sociedad culta y hasta ellas no debe llegar nunca la acción de los gobiernos en circunstancias ordinarias, á menos que por el carácter de las personas reunidas ú otros especiales se hicieran realmente peligrosas, pues en tal caso la conservación del orden social es la primera ley de toda sociedad y conforme á ella debe obrar el poder público.

Todos los ciudadanos tendrán, pues, derecho á celebrar esta clase de reuniones sin necesidad de obtener permiso de la autoridad, porque todos indistintamente pueden hacer sin autorización expresa lo que no les está prohibido por la moral ni por la ley.

Otro tanto pudiéramos decir de las reuniones que, proponiéndose igualmente fines privados, se celebran periódicamente. Sin embargo, el carácter de permanencia, que revisten por su periodicidad, las constituye en verdaderas entidades sociales, cuya existencia no debe pasar desapercibida para los gobiernos encargados, por la función reguladora del Estado, de conservar á toda entidad social su esfera propia de acción. Habrá también algunas de estas reuniones cuyos fines, siendo particulares, estén relacionados íntimamente con el fin social, y en este caso, aunque la acción del poder público no debe hacerse sentir en ellas, puede y debe vigilar para que no sean germen de perturbaciones y trastornos. Tales son, por ejemplo, las reuniones en que se discuten los principios fundamentales que sirven de base á la sociedad y donde se controvierte la bondad y justicia de las leyes.

El derecho de celebrar reuniones que principalmente afecten á la vida privada, se presenta más bien como natural, que como político, por los fines que aquellas se proponen, aunque éstos hayan de cumplirse en el Estado.

No así en las reuniones políticas, cuyo objeto no es ya discu-

tir en abstracto la bondad ó malicia de las leyes, sinó los actos de los gobernantes y los proyectos del poder. Esta clase de reuniones, sólo compatibles con el sistema político de la representación nacional, no tienen su fundamento directo en la naturaleza, sinó en la ley política que las consiente. A ella, pues, debe su orígen este derecho y ella habrá de fijar sus límites y restricciones, teniendo en cuenta siempre la organización fundamental del Estado. Examinadas no obstante en general, pueden ser estas reuniones poderoso medio de educación política en los pueblos cuyos ciudadanos son llamados á intervenir en la gestión pública; así como son también en ocasiones semilla perenne de desórdenes, de trastornos y revueltas.

IV—DERECHO DE RESISTÉNCIA Á LA OPRESIÓN

El fundamento de este derecho está en la misma razón que hace necesario el poder público. Si éste es condición y medio para que la sociedad cumpla su destino, y las personas investidas de este poder se alejan del fin social de un modo notorio y permanente, por ignorancia ó por malicia, ya atentando sistemáticamente contra los individuos y sus derechos, ya empleando los recursos y fuerzas sociales con un fin particular, necesario es poner una cortapisa á los atentados del poder y buscar un remedio al mal social que producen; y este remedio no es otro que la resistencia de los súbditos, en una ó en otra forma, según las circunstancias.

Tres grados pueden concebirse en la resistencia: 1º La resistencia *pasiva*, que es sinónima de desobediencia y que consiste en oponer á los mandatos injustos una inercia invencible. Esta resistencia pasiva, no puede confundirse con la abstención en las elecciones, porque las elecciones suministran generalmente el medio de obtener la reforma de los agravios de que uno se queja: 2º La resistencia *legal*, que emplea medios de derecho y puede usarse fácilmente en un país constitucional. Para su ejercicio es necesario dejarse gobernar por la razón y no por las pasiones, conocer las leyes del país, y habitar una comarca donde el espíritu político esté difundido en todas las clases de la sociedad. En algunos países la resistencia legal comprende la resistencia al pago de contribuciones: 3º La resistencia *violenta*, que

comienza por la insurrección y concluye, si triunfa, por una revolución. La resistencia violenta es un medio raramente necesario, y tal vez nunca en los países constitucionales donde hay vias legales para obtener la enmienda de los agravios.

Difícil es decidir cuando se ejerce justamente. "Cualquiera opinión que se aventure sobre esta materia, ha dicho B. Constant, está expuesta á dificultades insolubles. ¿Se dice que no debe obedecerse á las leyes sinó en cuanto son justas? Pues se autorizarán las resistencias más insensatas ó más culpables; la anarquía se extenderá por todas partes. ¿Se dice que es necesario obedecer á la ley, en cuanto es ley, independientemente de su contenido y de su orígen? Pues se condenará á obedecer los decretos más atroces y á las autoridades más ilegales (1).„

Sin embargo hay algunas ocasiones en que el hombre puede legitimamente resistir á la opresión, y que debemos determinar.

Al hacerlo prescindimos de la resistencia meramente pasiva que los particulares y los pueblos pueden y deben oponer á los preceptos contrarios á la moral; fijándonos únicamente en el caso de que las ordenes del gobierno, sin ser contrarias á la moral ni á la religión de los súbditos, sean notoriamente perjudiciales, para averiguar si en tales casos podrán los gobernados no sólo desobedecer lo mandado, sinó hacer armas contra el poder constituido para derrocarle y reemplazarle con otro.

Para resolver esta cuestión preciso es distinguir los gobiernos legítimamente constituidos de los ilegítimos; y respecto de los legítimos hay que distinguir también entre la adquisición del poder, y la buena ó mala administración.

Cuando los gobiernos se constituyen por una revolución intestina, provocada para derribar al anterior, los deberes y derechos con relación á estos gobiernos varían según que se trate de hombres públicos ó de simples particulares, y de corporaciones ó de individuos, teniendo siempre en cuenta las circunstancias particulares que en la revolución han ocurrido y los medios empleados por el gobierno para llegar al poder.

Cuando el gobierno legítimo derrocado consiente voluntariamente en la innovación introducida, el nuevo gobierno se legitima por este solo hecho: más si el gobierno anterior cede á la fuerza, protestando de la usurpación y resistiendo en cuanto puede, los súbditos, de cualquiera clase que sean, están obligados á

---

(1) Edición Laboulaye, T. II, pág. 358.—París, Guillaumin.

rechazar la violencia ayudando al poder legítimo y oponiéndose á la fracción usurpadora; sin que obste decir que ésta tiene á su favor el voto de la mayoría, pues, aun concediendo el principio en que se funda la soberanía nacional, sería imposible averiguar de que parte se halla el voto libre y concienzudo del mayor número en medio de los temores, recelos y coacciones inherentes á toda revolución. Con todo, cuando la usurpación se ha entronizado por completo, y el gobierno legítimo, abandonado de todos y exhausto de recursos, se ve precisado á renunciar definitivamente á toda clase de resistencia, el gobierno usurpador, aunque ilegítimo en su origen, llega al cabo á legitimarse por la necesidad de dar fijeza á la sociedad y regularizar su marcha, en cuyo caso todos sin distinción deben prestarle obediencia. Más si la cesión es momentanea y para evitar mayores males, la obediencia al nuevo gobierno sólo debe prestarse cediendo á fuerza mayor; de modo que es distinto según se trate de simples particulares ó de colectividades ó corporaciones, más fuertes por precisión que aquellos y que están por lo mismo más obligados á oponerse á toda clase de injusticias y atentados.

Cuando el gobierno, aun siendo legítimo, se hace verdaderamente opresor, no cabe duda que tanto los individuos como los pueblos tienen derecho á oponerse á sus mandatos, y si la opresión se hace permanente y los gobiernos llegan á convertirse en tiránicos ó en déspotas, como la opresión es injusta y la injusticia es el desorden, el poder, desnaturalizando su misión, lejos de contribuir al bien social, le dificulta, y en este caso es lícito, no sólo desobedecerle, sinó rebelarse contra él, puesto que falta la razón de su existencia, que consiste en ser condición indispensable para el orden social, como éste lo es para la vida de la sociedad, y ésta, para la cultura y bienestar del individuo.

El ejercicio de este derecho puede, sin embargo, degenerar en abuso con la mayor facilidad, y también es muy fácil confundir la tiranía, el estado permanente de verdadera opresión, con las exigencias y hasta injusticias pasageras de los gobiernos, debiendo por lo mismo ser muy prudentes al tratar de ejercer este derecho, no ya sólo por la exposición de faltar á nuestros deberes sociales, sinó muy principalmente, porque los males anejos á las revueltas políticas suelen ser mucho mayores, socialmente considerados, que los producidos por los atentados del poder.

Los políticos católicos se dividen al hablar del uso de la resistencia activa. Unos sostienen que no es lícito á la nación rebelarse contra el soberano legítimo, ni aun en el caso de que

abuse de su poder de un modo intolerable, porque aun en este mismo caso el soberano nunca deja de ser superior legítimo, ni pierde su derecho. Otros afirman que, cuando el soberano abusa injusta y sistemáticamente de su poder contra la nación, ésta tiene el derecho de levantarse en armas contra él y derrocarle, porque tiene derecho á defenderse contra todo agresor injusto, y porque en la colisión entre el derecho de la sociedad y el del soberano que la gobierna, debe prevalecer el primero como superior y más importante, toda vez que el poder público, y por ende el derecho de la persona que le ejerce, es sólo necesario en cuanto medio para realizar el bien social. Santo Tomás de Aquino sostiene esta opinión de un modo explícito. "El gobierno tiránico, dice, no es justo porque no se ordena al bien común. Por lo mismo, la perturbación de este gobierno no es propiamente sedición, sinó es cuando se vaya contra el gobierno del tirano tan desatentadamente que la multitud subordinada sufra más daño por la perturbación producida que por el mismo gobierno tiránico. El verdadero sedicioso es el tirano que alimenta las discordias y sediciones en su pueblo para dominar más fácilmente. Y es propiamente sedicioso todo aquello que el tirano egoista hace para su bien propio con perjuicio de la multitud (1). De donde puede afirmarse con el mismo Santo Doctor que, si bien en algún caso el poder abusivo de los tiranos puede ser permitido por Dios como un castigo de los pueblos, también hay ocasiones en que es lícito á éstos emanciparse de un poder aun legítimo, pues, aunque algunos gobernantes pudieran decir que han recibido de Dios su poder, sin embargo, cuando abusan de él, merecen que se les quite. Y tanto lo uno como lo otro vienen de Dios (2).

Al lado del derecho de los súbditos para resistir á las arbitrariedades del poder, está el derecho de éste para conservar el orden, oponiéndose á los alborotos y trastornos provocados por una insubordinación desatentada ó por ambiciones desmedidas. De aquí los medios que los gobiernos se vén precisados á emplear en tales casos, y de cuyo examen vamos á ocuparnos.

Las medidas adoptadas por el poder para hacer cesar la resistencia pueden ser de dos clases: ordinarias y extraordinarias.

---

(1) *Sum. Theol.* 2. 2. q. XLII, a. 3.
(2) *Comm. Sentent.* sup. XLV dist. q. I, a. 2, ad 4.

Las primeras tienen lugar contra la resistencia que presentan los individuos, corporaciones y aun parte de la nación, á las órdenes del gobierno, cuando esta resistencia no llega á tomar proporciones alarmantes y capaces de poner en conmoción al Estado en general. Tales son la aplicación de las leyes penales ó la adopción de medidas gubernativas que caen en la esfera de las atribuciones ordinarias del gobierno. Las segundas se toman en épocas de convulsiones más ó menos generales y de carácter alarmante, que no pueden hacerse cesar por el solo empleo de las primeras. Estas pueden resumirse en la *suspensión de las garantías constitucionales.*

La suspensión de las garantías tiene sus defensores y detractores aun entre los mismos partidarios del régimen liberal. Alcalá Galiano (1) dice que mal puede negarse ó impedirse á los gobiernos y á los Estados, que se salven con la causa pública cuando se ven en peligro de morir y no alcanza á salvarlos el remedio de las leyes. Esto no les está vedado á los particulares en momentos de grande apuro y cuando es imposible absolutamente apelar á la autoridad de la ley. Por eso dice que no reconoce un solo derecho en los individuos, ni un solo punto en la constitución que no pueda ser variado ó suspendido por la autoridad que tiene facultad de hacer las leyes y no por otra.

B. Constant sienta en su obra de *Derecho constitucional* que, no existiendo los poderes constitucionales sino por la constitución, no pueden éstos tampoco suspenderla. He aquí su teoría.

"Cuando se viola una constitución no continúa guardándose; lo único que se conserva es el poder de algunos hombres que reinan á nombre de una constitución aniquilada por ellos mismos. Se dirá, tal vez, que ya es un bien salvar un gobierno; pero cuando un gobierno no tiene recursos para prolongar su duración sinó en las medidas ilegales, éstas mismas no retardan su pérdida sinó pocos instantes, y el trastorno, que se creia impedir se verifica despues más desgraciada y vergonzosamente. Cuando en tales circunstancias se condena, por ejemplo, á un hombre sin juzgarle y sin formalidad alguna, es imposible saber si ha merecido por su falta perder los derechos que se le declararon respetables, mientras no mereciera perderlos. En las crisis de esta naturaleza los culpables que se sacrifican no son sinó en muy

(1) Lecciones en el Ateneo. Pág. 410. Madrid.

corto número: entre tanto, otros callan, se ocultan y esperan, se aprovechan de la indignación que la violencia ha producido en los espíritus y sacan partido de la consternación que la apariencia de la injusticia ha inspirado á los hombres escrupulosos. En tal caso el que traspasó las leyes ha perdido su carácter y su más grande preeminencia; y cuando los facciosos le atacan con armas iguales á las suyas, la muchedumbre de los ciudadanos puede dividirse, porque le parece que tiene precisión de elegir entre una de dos facciones.

„Sin duda hay para las sociedades políticas momentos de peligro que toda la prudencia humana no es capaz de conjeturar, pero hay acciones que ni aun el amor á la vida puede legitimar en los individuos, y lo mismo sucede respecto de los gobiernos. Si la caida es inevitable, para qué añadir á una desgracia cierta un crimen inútil? Y si el peligro puede conjurarse, adhiriéndose los gobiernos más escrupulosamente que nunca á las leyes establecidas, dejarán á sus enemigos lo odioso de la violación de estas leyes y además obtendrán por medio de la calma y de la seguridad, que llevarán impresos sus actos y determinaciones, la confianza de los tímidos, la cual á lo menos quedaría indecisa, si las medidas extraordinarias que se tomasen por los depositarios de la autoridad dieran á entender el temor de un peligro inminente.

„Las precauciones que llegan á hacerse odiosas se desprecian, la opinión adquiere más peso, no obstante su silencio, y el poder se dobla; pero, como no es sinó efecto de debilidad, no concilia los corazones, las trabas se renuevan, y los odios se desarrollan. Los inocentes, heridos por la arbitrariedad, vuelven á parecer más fuertes, y los culpables, á quienes se ha condenado sin oir, parecen inocentes: en fin, el mal que se ha retardado por algunas horas llega á ser más terrible y á agravarse con el que se ha hecho.

„En resumen, después de haber violado una constitución, la seguridad y la confianza quedan destruidas; los que gobiernan tienen el sentimiento de la usurpación, y los gobernados la convicción de que están á merced de un poder que ha traspasado las leyes. Cualquiera protesta de respeto hácia la constitución, parece en los unos verdadera burla, y el apelar á esta constitución parece en los otros una hostilidad.„

Como se ve por lo dicho, B. Constant no tiene en cuenta que la suspensión de las garantías constitucionales se consigna en la misma constitución para aquellos casos en que puede conside-

rarse como el único medio de salvar á la sociedad de un peligro verdadero é inminente, y aparenta además desconocer que lo arbitrario no puede tener lugar cuando esta suspensión ha de ser decretada por el poder legislativo y previas las formalidades marcadas en la misma constitución.

Otros dicen que los gobiernos cometen sin duda una falta cuando se dejan reducir á tal necesidad por movimientos que no han podido contener, pero que hacen un bien grande si, aplicando los remedios extremos, salvan al Estado, lo cual es la primera necesidad y la primera de las leyes.

BIBLIOTECA DE CASTILLA Y LEON

CAPITULO VIII

DE LOS DEBERES POLÍTICOS

Aunque no es costumbre general hablar de esta clase de deberes, juzgamos con todo necesario ocuparnos, siquiera sea brevemente, en este asunto: en primer lugar, porque el conocimiento del deber es la primera condición de su cumplimiento; y además, porque no es ni puede ser extraño á una obra de derecho tratar de uno de los términos expresivos de toda relación jurídica.

El ciudadano, ya lo hemos dicho, representa uno de los elementos del Estado, y como en éste halla también una condición de su bienestar, ni puede considerarse en absoluta independencia de él, ni dirigir su conducta arbitrariamente y sin consideración al bien social.

Tal es el fundamento de los deberes que tiene el hombre con respecto á la sociedad política, y que pueden relacionarse más ó menos directamente con la vida y la conservación ó con la cultura del Estado.

Es el primer deber de todo ciudadano *el amor á su patria*, en justa compensación del amparo y protección que le dispensa en sus calamidades y miserias; por los auxilios eficaces que le presta para desarrollar sus facultades facilitándole la realización de sus elevados destinos, y por la defensa que le proporciona para sus personas é intereses, ya por medio de la fuerza pública, ya también por las decisiones en justicia restableciendo el derecho perturbado.

Debemos también *respeto y sumisión* al poder constituido, y *acatamiento* á sus mandatos; porque, convencidos de la nece-

sidad de un soberano para la buena dirección del Estado, y de que sus preceptos representan las diversas relaciones sociales, naciendo de ellas naturalmente y encaminándose á mejorarlas y á promover el bien comun, tan íntimamente conexionado con el de las familias é individuos, es racional y conveniente someterse á aquel poder y cumplir sus prescripciones con celo y exactitud.

Este deber obliga siempre cuando el soberano lo es por título legítimo y no abusa de su poder, pero ocurre á veces que los pueblos sean víctimas de la usurpación ó de los caprichos, arbitrariedades y pasiones de un gobernante legítimo, y en tales casos, para conocer hasta donde llega el deber de los súbditos, preciso es fijar algunas reglas que determinen su conducta según se trate de usurpadores ó de soberanos legítimos pero tiránicos: 1ª el usurpador no es verdadero soberano mientras algún hecho ó causa posterior no venga á purgar su poder del vicio de la usurpación; por consiguiente, los deberes de respeto, sumisión y fidelidad de los súbditos no existen respecto á él, pues aunque se pretendiera decir que le son debidos por hallarse en *posesión* de la autoridad, como la autoridad es un derecho no se puede poseer injustamente, porque no se da derecho contra el derecho; sin que obste que en algunas ocasiones haya de prestársele obediencia en lo meramente *civil* y no opuesto á la moral, para evitar mayores males: 2ª tampoco tienen los ciudadanos deberes para con el usurpador, aunque éste haya logrado reinar pacíficamente, mientras no se haya hecho moralmente imposible para el soberano legítimo recobrar el poder perdido; por el contrario, los súbditos pueden y deben trabajar, aun empleando la fuerza, para reponer al legítimo, aunque al hacerlo deben consultar principalmente al bien de la patria, sin lanzarse en guerras desastrosas, de dudoso éxito y acaso más perjudiciales que la usurpación combatida: 3ª por razones de conveniencia y de público bienestar deben los ciudadanos acatar el orden de cosas establecido y someterse á la autoridad del usurpador, cuando, afirmado éste en la quieta posesión del poder y reconocido por las potencias extranjeras, gobierne con prudencia y con justicia; pues, independientemente del vicio originario, su mando es útil y encaminado al bien social: 4ª los deberes de obediencia y fidelidad de los súbditos cesan también, aun para con el soberano legítimo, cuando éste, desconociendo su misión, impera despóticamente, emplea los medios sociales para el provecho propio, conculca las leyes, huella los derechos de los ciudadanos y trueca el reinado de la justicia con el de la iniquidad.

Estamos obligados asimismo á *cooperar* en la medida de nuestras fuerzas á la realización del fin social por medio de actos ó *prestaciones personales,* y por medio de cosas ó *prestaciones reales.*

La razón de este deber es muy obvia, pues, siendo la sociedad conjunto de hombres, se hallará naturalmente afectada de idénticas necesidades, y la satisfacción de éstas exigirá análogos medios que la satisfacción de las humanas. De aquí deriva la obligación del servicio militar para los jóvenes que pueden soportar sus fatigas y ser útiles á la pátria defendiéndola de ataques exteriores ó coadyuvando á la conservación del orden interior (1); de aquí proviene también el desempeño gratuito y obligatorio de los cargos municipales, necesarios para el régimen y administración de los pueblos, si éstos han de gozar ciertas

---

(1) La importancia de la prestación personal del servicio militar y el ser ésta una cuestión de actualidad en España, nos mueve á hacer aquí algunas indicaciones sobre los diversos sistemas seguidos para la formación del ejército, aunque esto sea materia más propia del derecho administrativo.

Es, por de pronto, principio general, admitido en los pueblos cultos, que todos los ciudadanos aptos puedan ser llamados cuando sea necesario para la defensa nacional, lo que se funda en la igualdad civil y política consignada en las constituciones modernas; pero este llamamiento debe hacerse compatible con la realización de los demás fines de conservación y cultura social, sin ser dictado por el espíritu de envidia ó emulación de clases, y sin perder de vista que el fin de los pueblos no es la conquista, ni debe de convertirse la nación en un ejército, por más que muchas veces fuere útil para la conservación de la paz estar preparado para la guerra.

Es preciso también tener en cuenta que el poder de los ejércitos depende no sólo de la cantidad de soldados sinó también de sus aptitudes militares. La obligación del ciudadano no pasa, pues, racionalmente más allá de lo necesario para que el ejército pueda servir á su fin patriótico por su fuerza numérica y aptitud técnica, y es, por justicia, necesario que esta obligación se haga compatible con la educación intelectual y moral del ciudadano, con los intereses de su profesión, con los de su familia y con la cultura é interés general. Así que no por tener un ejército fuerte y numeroso, que en muchas ocasiones y en muchos pueblos será completamente inútil, ha de sacrificarse el cultivo de la ciencia, ni el desarrollo de las artes, de la industria y del comercio. De aquí la necesidad de una combinación acertada del número con la aptitud de los militares, es decir, de los llamados al servicio con la duración de éste, para armonizar los intereses generales de la sociedad con el especial de la defensa. Para ello se han planteado tres sistemas principales: el reclutamiento, la milicia, y el servicio nacional militar.

En los tres sistemas la dificultad estriba en la medida del llamamiento y de la duración del servicio, ajustando uno y otra á la necesidad. Aumentando el tiempo del servicio se consigue tener un ejército fuerte pero se debilita el pueblo, y viceversa, si el tiempo del servicio se acorta ó disminuye inconsideradamente; pero en este caso, si surge de improviso la guerra, hay gran peligro para la defensa nacional ó para la integridad de la patria.

El sistema de *reclutamiento,* por el que sólo se llama á un determinado número á quien la suerte designa de entre los aptos para el servicio, exige que cuanto menor sea el número de los llamados, tanto mayor ha de ser la duración

comodidades que ni el esfuerzo aislado del individuo puede proporcionar, ni la asociacion transitoria de algunos conservar de un modo permanente; y ésta es por fin la causa de los impuestos ó cuotas con que los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de las cargas públicas en proporción á las ventajas que de la vida en sociedad reportan ó racionalmente se les suponen.

También los conciudadanos se deben *mutuo afecto, protección y auxilio*, no sólo como hijos de la misma madre, que es la patria, sinó también por interés propio, puesto que la vida, la salud y el bienestar de los unos refluye más ó menos directamente en la felicidad de todos, aumentando las fuerzas sociales y su alcance, ó por lo menos evitando el doloroso espectáculo de la desgracia agena que siempre afecta á los corazones bien nacidos.

---

del servicio. Pero si esta duración hace al soldado, por un continuo ejercicio apto para la guerra, en cambio le incapacita ó poco menos para dedicarse á una profesión ú oficio despues de terminado su empeño, pues lo mejor de su vida, la época del mayor desarrollo de sus facultades es precisamente la que pasó en el ejército, cuyas ocupaciones difieren mucho de las anejas á una profesión ú oficio. Por lo mismo en tal sistema es una necesidad el *reenganche* mediante el cual el soldado hace de la milicia una profesión y la *sustitución* ó *cambio* que facilita el reenganche y permite á algunos ciudadanos cumplir indirectamente la obligación del servicio, con provecho del sustituto, del sustituido y de la patria, porque aquel está ya educado en la milicia y acostumbrado á las fatigas del servicio y aun á las de la guerra, y éste puede contribuir mejor á la cultura nacional ejercitando convenientemente sus aptitudes en relación con su especial vocación. En cambio tiene tal sistema el inconveniente de que la parte más culta de la población logra evadirse de la milicia, ésta se convierte en mercenaria, los oficiales se miran como extraños á los soldados, á quienes tratan con dureza; el ascenso de los soldados, ó se hace muy difícil, ó da al ejército un cuerpo de oficiales rudos é incultos; y por último, no habiendo entre soldados y oficiales vínculos de mutuo afecto, hijos de la comunidad de ideas, hábitos y sentimientos, falta la confianza y la disciplina, ó se conserva por el rigor, ó se relaja. Añádase á esto que, permaneciendo la gran masa de la población completamente extraña á la milicia, el Estado no puede contar para su defensa con ninguna otra fuerza más que con el ejército por tal sistema formado y que, en caso de descalabro ó de un gran contratiempo, es imposible improvisar ejércitos ó reservas instruidos, disciplinados y aguerridos. Por donde se ve que, si este sistema es el menos gravoso á la población en tiempo de paz, es por el contrario el más deficiente en tiempo de guerra.

Opuesto al anterior es el sistema de la *milicia* ó del ejército popular. Partiendo del principio de que todo ciudadano está obligado á defender la patria con las armas, todos son llamados al ejército desde el momento en que tienen edad y aptitud, sin admitirse redención ni sustitución para ninguno, aunque la obligación de permanecer en el servicio activo ha de ser relativamente corta porque ni es necesario ni posible sostener sobre las armas ejército tan grande, que sería excesivamente costoso y perjudicial para la producción nacional. Así que la duración del servicio activo es muy corta y si bién por este medio puede armonizarse la existencia de tal ejército con las necesidades ó exigencias de la vida civil y de la producción, y se borra toda distinción odiosa y se dispone de un contingente mucho mayor de fuerza armada en caso de necesidad, en cambio es imposible que tal ejército pueda reunir las dotes de instrucción militar, disciplina, valor y hábi-

Por fin, el soberano, como tal, ó los que ejercen el poder tampoco están exentos de deberes para con el Estado y sus miembros; y no ya deberes morales, cuya sanción está reservada al Ser Supremo, sinó deberes jurídicos; deberes que representan verdaderos derechos para la sociedad que dirigen, y cuyo cumplimiento puede á veces exigirles la misma, negándose á obedecer, como hemos visto, sus preceptos injustos, y hasta rebelándose contra ellos y echando abajo su autoridad, cuando su injusticia se hace sistemática y la infracción de sus deberes permanente.

Estos deberes pueden reducirse en general: á *dictar leyes* en conformidad con los eternos principios de la moral y con la pública conveniencia, de modo que sean expresión fiel del derecho;

---

to de las fatigas, ni que, derrotado una vez, acaso más fácilmente por su número, pudiera reorganizarse convenientemente.

Otro tercer sistema busca armonizar la existencia de un ejército poderoso por su fuerza y disciplina con el menor gravamen posible para la población, y al efecto, consignando en la ley el deber del servicio militar común á todo ciudadano, exige de éstos que estén convenientemente preparados para cuando los necesite la patria, imponiéndoles la obligación de instruirse primero por el servicio activo durante un corto tiempo, y de ejercitarse después periódicamente para conservar la destreza, la fuerza y los hábitos militares.

Entre los varios procedimientos que pueden seguirse para obtener los resultados á que tiende este sistema el más sencillo es el prusiano. Consistía en considerar llamados por la ley al ejército durante veinte años á todos los ciudadanos aptos. Estos veinte años se dividían en tres *épocas:* la primera servía para formar el ejército permanente ó *de línea*, compuesto de todos los hombres aptos de 20 á 25 años y subdividido en militares *activos*, desde uno á tres años, y en *licenciados* ó de la *reserva* formada por los de los dos últimos años (de 23 á 25): la segunda época comprendía á los hombres de 26 á 32 años que constituían la landwehr de *primer llamamiento;* y la tercera ó landwehr de *segundo llamamiento* que llegaba hasta los 40 años en caso necesario. Este sistema se ha modificado posteriormente en el imperio aleman limitando el servicio militar de veinte á treinta y dos años, de los cuales siete se sirven en el ejército permanente (tres en activo y tres en reserva) y los hombres comprendidos en los cinco últimos forman la landwehr. En este sistema, ni hay sorteo, ni número determinado anualmente por la ley para formar el ejército activo: el servicio es para todos igualmente obligatorio.

En Austria se fija anualmente el número de hombres que se considera necesario para el servicio activo y se llena este cupo por sorteo. Todos los demás hombres aptos quedan sujetos á ejercicios anuales, ordinariamente en Otoño, y tienen además la obligación de instruirse en el manejo de las armas. El tiempo de servicio activo dura siete años, pero á los tres se da á los soldados la licencia indefinida y pasan á formar la reserva. Los hombres aptos, á quienes no tocó la suerte de servir en el ejército activo pero que están sujetos á ejercicios anuales durante diez años, pueden ser también llamados á las armas en caso necesario. Este sistema puede servir para formar un ejército numeroso, pero sin hábitos militares y poco aguerrido, porque los breves ejercicios anuales no bastan para hacer verdaderos soldados. Sólo se diferencia del reclutamiento en que ninguna clase de ciudadanos está exenta del servicio, y no se admite redención ni sustitución.

á *procurar la aplicación* de las mismas con entera imparcialidad y rectitud, sin otra mira que el triunfo de la justicia; á *elegir para los cargos públicos* personas dignas por su aptitud y probidad, sin olvidar que los empleos no se crean para utilidad de los empleados, ni para hacer prosélitos, sinó para servir al pueblo que los paga; á *invertir los fondos públicos* en la satisfacción de las necesidades sociales, atendiendo al cumplimiento de los fines cuya realización les está encomendada, sin distraerlos para sus caprichos ni para favorecer á sus amigos y parciales; y en suma, á dirigir por la senda del bien la sociedad que le está encomendada, conservando la paz y la unión entre los súbditos por medio de la justicia y fomentando la cultura intelectual y moral, y á cuidar de que las fuentes de la riqueza pública no se agoten y de que por una sabia administración se multipliquen los recursos para satisfacer las necesidades del Estado.

"Amado, dicen las Partidas, debe ser mucho el pueblo de su rey, é señaladamente les deue mostrar amor en tres maneras. La primera auviendo merced dellos, faziendoles merced, quando entendiere que lo han menester: ca pues el es alma e vida del pueblo, assi como dixeron los sabios, muy aguisada cosa és, que aya merced dellos, como de aquellos que esperan biuir por el seyendo mantenidos con justicia. La segunda auiendoles piedad doliendose de ellos, quando les ouisse a dar alguna pena. Ca pues el es cabeça de todos, dolerse doue del mal que recibieren, assi como de sus miembros. E quando desta guisa fiziere contra ellos ser les ha como padre, que cria sus fijos con amor, e los castiga con piedad, assi como dixeron los sabios. La tercera auiendoles misericordia, para perdonarles a las vegadas la pena que merescieren por algunos yerros, que ouissen fecho. Ca como quier que la justicia es muy buena cosa en si, e de que deue el rey siempre vsar, con todo esso fazesse muy cruel, quando, a las vegadas, non es templada con misericordia... Otrosí, los deue guardar en tres maneras. La primera de si mesmo no les faciendo cosa deguisada, lo que non querria que otros le fiziessen, ni tomando dellos tanto, en el tiempo, que lo pudiesse escusar; que despues, non se pudiesse ayudar dellos: quando los ouisse menester. E guardandolos assi, sera ayuntamiento dellos, que se non departan, e acrescentarlos a assi como a lo suyo mismo. La segunda manera en que los deue guardar, es del daño dellos mismos, quando fiziessen los unos á los otros fuerça o tuerto. E para esto es menester que los tenga en justicia, e en derecho. E

non consienta a los mayores que sean soberuios, ni tomen, ni roben ni fuercen, ni fagan daño en lo suyo á los menores... La tercera guarda es, del daño que les podria venir de los de fuera, que se entiende por los enemigos. Ca destos los deue el guardar, en todas las maneras quel pudiere, e sera estonce muro e amparança dellos, assi como dixeron los antiguos que lo deue ser.„

La virtud que consiste en el cumplimiento habitual de los deberes sociales, se llama *patriotismo*, porque todos deben refundirse en el primero de los que hemos enumerado, en el amor á la patria.

Pero entiéndase que este amor, como todos los afectos humanos, tiene sus límites trazados por la razón, como expresión de la ley natural: la justicia exige que este amor no busque el bien de la patria por medios reprobados; y la humanidad pide á sus individuos que su afecto no se extinga en las fronteras de un pueblo. Cuando el patriotismo ha sido el sentimiento exclusivo de algunos pueblos, éstos han cometido un crimen de lesa humanidad, mirando como bárbaras y despreciables á las naciones extrañas y sometiéndolas á una dura esclavitud como sucedió en Roma, la señora del paganismo.

SECCIÓN III

ELEMENTO FORMAL DEL ESTADO

Ya hemos dicho que los elementos del Estado son dos: la *agregación* y el *orden*.

Varias son las acepciones de la palabra orden: inteligente disposición de todas las partes de una obra; armonía entre el fin de cada ser y los medios para llegar á él; colocación de cada cosa en el lugar que le corresponde; clase social; conjunto de relaciones; prelación, prioridad ó precedencia, y otras de que prescindimos, pues las indicadas bastan para hacer ver la necesidad de fijar aquí el concepto expresado por aquella palabra (1).

---

(1) En el concepto del orden entran necesariamente tres elementos: variedad, unidad y armonía, ó si se quiere pluralidad, unidad y conveniente disposición de la pluralidad con arreglo á la unidad que le sirve de medida. En una cosa sola ó considerada en sí misma, como individua, no puede verse orden ni desorden. La pluralidad por sí, sólo nos presenta elementos capaces de ser ordenados; pero estos no producen el orden hasta que se relacionan y armonizan, conforme á una razón común de la unidad colectiva. El orden puede ser de varias clases, según se atienda, ya á la naturaleza de los elementos ordenables, ya á la razón común que sirve para ordenarlos. Bajo el primer aspecto el orden puede ser *estético* si se refiere á sustancias, *dinámico* si á fuerzas ú operaciones, *físico* si á cosas materiales y *moral* si á *acciones humanas*. Por la razón común que sirve para ordenar puede ser *cronológico*, si la razón es el tiempo ó la prioridad ó posterioridad en el movimiento ó en el cambio; *simétrico*, si es la igualdad ó desigualdad; *armónico*, si la semejanza ó desemejanza, y *final*, si la casualidad. La razón común en virtud de la cual se ordenan las cosas, puede hallarse en la naturaleza ó depender de la elección del ordenante; pero siempre ha de haber algún fundamento en las mismas cosas que pueda determinar la elección, y por eso se dice que en todo orden artificial hay algo de subjetivo, la intención del ordenador, pero también mucho de objetivo, el modo de ser de lo ordenable. V. Mendive, *Elementos de Ontología*, págs. 109 á 114.

Decimos que hay orden en la sociedad, cuando la acción combinada de sus elementos la lleva naturalmente á la realización de su fin. Será, pues, orden social *el resultado armónico de la acción combinada de los individuos y demás entidades sociales, obtenido por la concurrencia de las fuerzas hacia el fin común y por la conservación de la vida particular en cada esfera propia.*

No basta para la existencia del orden que los elementos sociales conspiren por la acción común á la obtención del fin social: es además necesario que todos estos elementos conserven su autonomía dentro de cada esfera propia para la realización de su fin particular; porque, siendo la sociedad reunión de seres inteligentes y libres, no puede decirse que hay orden cuando la sociedad, absorbiendo al individuo, le priva de lo esencial de su ser, impidiéndole que obre como inteligente y libre y sirviéndose de él como de un mero instrumento; y vice-versa, cuando el individuo, fijando en sí mismo su objetivo, pretende servirse de la sociedad como simple medio, desconociendo sus deberes como miembro de la misma, ó entorpece la acción común por el abuso de la propia libertad.

Como el orden es resultado de fuerzas individuales combinadas, y éstas por su naturaleza tienden á obrar con independencia, siendo imposible hallar dentro de ellas un principio que determine su acción común para los fines sociales, síguese de aquí que ha de buscarse éste principio fuera de ellas, puesto que sin acción común dirigida á un fin común también es imposible el orden. Este orden social no se obtiene, pues, sinó mediante ciertas condiciones, de las que unas se refieren á la conservación por los miembros de la sociedad de su vida propia, y otras al principio que regule la acción común de los mismos. Por esto dice Rossi "que el orden de las sociedades civiles es una cierta combinación de la regla con la libertad. Si la regla ahoga la libertad, la actividad humana no puede desarrollarse y la infancia del hombre se perpetúa. Si la libertad destruye toda regla hay anarquía.„

CAPÍTULO PRIMERO

DEL PODER PÚBLICO EN GENERAL

I—NOCIONES DEL PODER, DE LA AUTORIDAD Y DE LA SOBERANÍA

La acción común no se regula sin que haya una regla, y ésta no se concibe sin un regulador. A este regulador, necesario para la existencia de la regla y por lo mismo para dirigir la acción común que ha de producir el orden, le llamamos poder social. La noción de éste se confunde con frecuencia con la de autoridad y con la de soberania. Por lo mismo es indispensable fijar la distinción entre estas tres nociones.

Teniendo en cuenta la etimología y aun la acepción vulgar de la palabra, *poder* tanto vale como *facultad de hacer alguna cosa*, y, como la cosa que ha de hacer el poder público es regular la acción común, lo que, nótese bien, no consiste en esta acción (que no es más que el resultado de las fuerzas individuales combinadas) sinó en dirigirla; síguese de aquí que el *poder público* será *la fuerza directriz de la acción común, necesaria en toda sociedad*. Esta fuerza, sin embargo, ni se circunscribe ni puede circunscribirse á señalar, por decirlo así, el camino que ha de seguir la acción social; porque la simple indicación de este camino no es bastante muchas veces para que le sigan las fuerzas individuales, sinó que por el contrario, ya se oponen á seguirle, ya impiden también á las otras fuerzas que le sigan. De donde se deduce que esta fuerza ó el poder, ha de manifestarse de dos modos principales: señalando unas veces su

misión á las fuerzas individuales, y compeliéndolas, otras, á cumplirla cuando no quieran realizarla; esto es, obrando sobre las inteligencias y sobre las voluntades.

El poder, como le hemos concebido, representa una abstracción, y como no se concibe ninguna fuerza ó potencia sin un *ser* fuerte ó potente, para que el poder exista, es preciso referirle á algún ser; este ser no puede hallarse en la sociedad fuera de los individuos que la forman, esto es, de los hombres; luego á los hombres habremos de referir el poder, puesto que sin ellos ni se realiza ni existe. Ahora bien: cuando nosotros referimos á los hombres la idea abstracta del poder, le personificamos y surge la idea de *autoridad,* que será, según lo dicho, *el poder considerado en la persona que ha de ejercerle, ó la encarnación del poder.*

También se usa la palabra *autoridad* significando la influencia de nuestras facultades sobre nuestras creencias *(autoridad de los sentidos, de la conciencia, de la memoria, de la razón)* y principalmente la del testimonio de los demás hombres en nuestros juicios *(criterio de autoridad)*, así como el prestigio que acompaña á toda superioridad en el orden intelectual ó en el moral y que naturalmente nos lleva á respetarla y á aceptar como verdadero ó como bueno lo que nos enseña con la palabra ó nos muestra con el ejemplo; pero la significación que le hemos dado nos parece la más propia en derecho político, y lo prueba el mismo lenguaje, pues se dice con mucha propiedad, autoridad del rey, del presidente, del magistrado, del consejo, etc., entendiéndose por todos que tal frase equivale á decir, poder ó atribuciones inherentes á las personas individuales ó colectivas en quienes residen tales cargos, sin que valga oponer que las atribuciones se refieren al cargo en abstracto, porque no hay poder real sin rey, ni ministerial sin ministro, etc.

Como el poder se manifiesta de dos modos principales, ya señalando su misión social á las fuerzas individuales, ya compeliéndolas á realizarla, esto es, mandando y haciendo que se cumpla lo mandado, la comparación de estos dos modos de realizarse el poder ha dado lugar á considerar el uno como superior al otro, y del conocimiento de esta superioridad ó inferioridad se ha venido á la concepción de un poder superior á todos, esto es, á la concepción de la *soberanía.* Esta palabra, sin embargo, no indica para todos los publicistas una relación de superioridad, ó por lo menos, no la consideran principalmente bajo este aspecto, sino más bien como un poder especial ó una manifestación

particular del poder social (1). En este sentido la usan los que llaman soberanía al poder de constituir y organizar la sociedad política ó el Estado (2). Otros llaman soberanía al poder que decide en su dominio en última instancia sin estar sometido bajo este aspecto á una autoridad superior. Según éstos, "como el orden social es un conjunto orgánico de esferas de vida, cada una de las cuales debe, en virtnd de su autonomía, decidir en último recurso sobre cierto género de relaciones dejadas á su competencia, cada esfera de vida es soberana en su grado y dentro de su género„ (3).

Esta última acepción, ó expresa una idea vaga é indeterminada y que por su misma vaguedad no corresponde á ningún objeto real, ó establece la posibilidad de muchas soberanías coexistentes, que, si pudieran ser compatibles en esferas separadas y digámoslo así paralelas, no pueden serlo cuando las unas, por estar contenidas en las otras, han de amoldarse á las condiciones de éstas y recibir de ellas la norma de su existencia. Si en la esfera de la vida individual cada individuo es soberano, habrá tantos soberanos como individuos y lo mismo sucederá respectivamente en la familia, en el municipio, etc.; y así lo afirma Ahrens; pero esta soberanía, ó no lo es verdadera, ó excluye toda regla, y en este último caso la soberanía de las esferas de vida inferiores es incompatible con la existencia de las esferas superiores. Tal doctrina lleva directamente á la anarquía.

Foucart (4) fijándose en la idea de relación que implica la palabra soberanía llama así *al más alto poder humano,* al *derecho de ordenar* y *la fuerza para hacerse obedecer.* Esta noción es sin duda la más aceptable, como equivalente á poder supremo, que no tiene ni renoce superior, y porque rechaza la multiplicidad de poderes soberanos. Es cierto, como dice Ferrán, que los publicistas han pretendido distinguir tres especies de soberanía: *la soberanía originaria, la soberanía constituyente* y *la soberanía constituida;* pero esta distinción, más que otra cosa, arguye falta de precisión en el lenguaje, y por tales denominaciones no han querido enseñar que hay tres soberanías diferentes, sinó que la cuestión de la soberanía puede plantearse bajo tres puntos de vista; ó estudiando el origen del poder, ó el derecho

---

(1) Taparelli, *Curso elemental de Derecho natural.* Pág. 240.
(2) Pacheco, *Leccs. de Derecho político.* Pág. 70.
(3) Ahrens, *Derecho natural.*
(4) *Dcho. público const.,* Prolegómenos.

de constituirle, esto es, de determinar quien ó quienes tienen derecho á organizar fundamentalmente la sociedad, ó en qué persona ó institución reside de hecho el poder supremo en un Estado determinado.

Nosotros, aceptando casi por completo ésta última teoría, creemos que la soberanía es la manifestación más elevada del poder público; el poder supremo por contraposición á los poderes particulares de un Estado. Bajo este aspecto puede armonizarse esta noción de la soberanía con la propuesta por el señor Pacheco en cuanto que el poder de constituir y organizar la sociedad, esto es, de determinar, clasificar, localizar los poderes públicos y fijar las atribuciones de cada uno, es sin duda la función más elevada del poder, no sujeta á ninguna otra y á la que todas están virtualmente sometidas.

II—NATURALEZA Y ORIGEN DEL PODER SOCIAL

Por la definición que hemos dado del poder social se ve que es una *fuerza,* porque imprime á la sociedad impulso y dirección, y se comprende que esta fuerza ha de ser *consciente,* puesto que la acción social supone un fin, que debe ser conocido por el poder, si éste ha de dirigir acertadamente dicha acción para conseguir aquel.

Cuando, pasando del terreno ideal y abstracto al concreto y de la realidad, estudiamos el poder constituido, convertido en hecho, hallamos en él varios atributos conformes á su naturaleza: 1° por ser fuerza es propiedad, y como las propiedades no existen por sí, sinó que están adheridas á los seres, el poder social, para realizarse, se encarna en una ó más personas y es de este modo *autoridad:* 2° como el Estado es una persona colectiva, compuesta de tantos miembros que por su multitud es imposible que concurran á cumplir los deberes ni á exigir los derechos que corresponden á la colectividad ó persona moral, el poder público, depositario por otra parte de la fuerza colectiva, practica los actos de carácter puramente social, cumpliendo deberes y exigiendo derechos como *representante* de la entidad social: 3° componiéndose la sociedad de individuos y siendo su acción resultado de multitud de fuerzas necesarias para la realización del fin social, como aquellos lo son para la existencia de

la sociedad, la conservación, guarda y dirección de los individuos y de las fuerzas todas del Estado se halla y no puede menos de estar encomendada al poder público, que es por esta causa *tutor de la sociedad.*

Como la sociedad por su esencia misma exige armonía de voluntades y de actos, y los actos humanos no están determinados fatalmente por ninguna necesidad interna, la naturaleza de la sociedad exige que haya en ella una fuerza capaz de obligar á los hombres á obrar de acuerdo para el bien común. Si éste se realizára fatal ó necesariamente, si el hombre no fuera libre para buscarle ó eludirle, el poder social, que es aquella fuerza, sería inútil. Ahora bien, las condiciones, mediante las que la sociedad es posible, no han sido impuestas por ningún hombre, ni tampoco es debida á éste la libertad inherente á todo miembro de la sociedad; aquellas, han sido establecidas como necesarias para la existencia de la sociedad, y ésta dada al hombre como propiedad por el Autor de todo lo creado; luego el poder necesario á toda sociedad tiene su razón de existencia en la naturaleza misma de las cosas, y su origen interno está por lo tanto en Dios.

La historia confirma este mismo origen, no registrando sociedad á la que no haya acompañado el poder desde el momento mismo de su constitución.

En cuanto á su origen externo, esto es, en cuanto á la causa que legitima su existencia con tal ó cual forma y en cada sociedad determinada, es objeto de grande controversia y que ha dado lugar á la formación de varias escuelas políticas, cuyas teorías debemos, aunque ligeramente examinar.

III—DOCTRINAS SOBRE EL MODO DE CONSTITUIRSE EL PODER

Tres son los sistemas principales que se han formulado sobre este punto; el sistema del *derecho divino,* el del *individualismo democrático* y el del *doctrinarismo ecléctico.*

Según la teoría del *derecho divino*, la soberanía reside en Dios, que la ejerce por sus mandatarios: «*Omnis potestas á Deo.*» Fundándose en esto ha dicho Bossuet "Dios ha hecho á los príncipes sus lugartenientes en la tierra, á fin de hacer su

autoridad sagrada é inviolable„ (1). Los príncipes; según este sistema, no sólo son legisladores, sinó que en ellos reside la fuerza y la personificación ó representación de la entidad política ó del Estado.

El poder de los reyes es, pues, incontrastable como delegados directos que son de la divinidad. No se crea, sin embargo, que esta teoría conduce siempre al despotismo, porque el príncipe, según ella, ha de ajustar sus actos á la ley divina y todos sus partidarios reconocían que el príncipe no tiene un poder absoluto. Bossuet mismo establecía que no hay derecho contra el derecho, porque no hay razón contra la razón; y que el derecho no es otra cosa que la razón misma y la razón más cierta, porque es la razón reconocida por el consentimiento universal. Admiten también los partidarios de esta doctrina el derecho de resistencia á la opresión, cuando el príncipe manda lo contrario á la ley de Dios.

Es, sin embargo, incontestable que, según esta teoría, no tiene la nación el derecho de cambiar su constitución ó los poderes constituidos, porque en ella no residen ni la soberanía, ni el poder constituyente.

La delegación directa, que supone este sistema, no consta se haya hecho en ningún pueblo, como no sea en el hebreo.

El sistema del *individualismo democrático*, que lógicamente se deriva de la teoría que explica el origen de la sociedad por medio del *pacto*, parte del principio de que la obra de la constitución política es derecho é interés de todos y que la razón individual es soberana para interpretarla: supone que el poder reside originariamente en el pueblo; que éste le delega de un modo condicional y limitado en ciertos mandatarios elegidos por la mayoría de todos los individuos que componen la nación; y por último, que, estando siempre en acción el poder constituyente y no existiendo los poderes constituidos más que de un modo precario, éstos pueden ser modificados, cambiados y revocados á gusto del soberano. El principio fundamental de esta teoría es que un pueblo puede cambiar siempre su constitución, porque, según dice Rousseau, "no pudiendo él considerarse más que bajo un solo respecto, está en el caso de un mero particular que contrata consigo mismo; por donde se ve que no hay ni pue-

---

(1) *Política sac. de la S. E.*, lib. VI, part. II, pro. 1ª.

de haber especie de ley fundamental obligatoria para este cuerpo del pueblo, ni aun el mismo contrato social (1).„

Todas las constituciones democráticas proclaman este principio y como consecuencia este otro, "que los poderes constituidos no son sinó delegados del poder constituyente (2).„

Vese, pues, que según éste sistema el fundamento y la razón del poder está en la muchedumbre, y que en la voluntad de esta, expresada por el *número,* está la soberanía.

Examinada esta hipótesis históricamente es falsa, porque ningún poder ha nacido de la voluntad de los congregados para alzarle y someterse al mismo tiempo á él; sobre todo en ninguna sociedad primitiva. El poder ha existido necesariamente como la sociedad sin derivarse de ningún pacto.

Filosóficamente considerada es absurda; porque entre el número y el poder no hay ningún lazo racional, ninguna relación necesaria, porque el poder es un atributo de la razón en cuanto que dirige. Lo único admisible es que el número puede influir en lo que depende de la voluntad y, bajo tal aspecto, servir de apoyo, sostener al poder (3).

El *doctrinarismo ecléctico,* rechazando igualmente el principio de la soberanía popular y el del derecho divino, no admite más que la soberanía de la razón, de la justicia y del derecho, que algunos localizan en los gobiernos constituidos (4). Es, por decirlo así, una teoría intermedia que admite la soberanía popular dentro de ciertos límites; pero que la rechaza como poder en un Estado constituido. "Se habla, decia Portalis, del poder constituyente como si estuviera siempre presente. Cuando la constitución de un pueblo se ha establecido, el poder constituyente desaparece: es como la palabra del Creador que manda una vez para gobernar siempre; es como su mano todopoderosa, que descansa para dejar obrar á las causas segundas despues de haber dado movimiento y vida á todo lo que existe.„ En otros términos, se admite la enagenación de la soberanía del pueblo en favor de los poderes constituidos, y se establece como consecuencia que la soberanía reside toda entera en éstos. Tal doctrina no está

---

(1) *Contr. soc.* lib. I, cap. VII.

(2) Dalloz. *Repert. de Legisl., Doctr. et Jurisp.*, Tomo XVIII, pág. 345.—París, 1850.

(3) Pacheco, *Lec. de Dcho. polít. const.* págs. 61 y 62.—Madrid, 1845.

(4) Pacheco, *Obra citada,* págs. 62 y siguientes.—Donoso Cortés, *Lecs. en el Aten.* 6ª y siguientes.—Alc. Gal. *Lec. de Derecho pol.* pág. 74.

exenta de contradicciones, porque sus partidarios se han visto obligados á reconocer que el pueblo, aunque despojado de toda soberanía y de todo poder, hace alguna vez uso de ambos, y si se admite una vez este poder será necesario admitirle siempre, porque el pueblo deberá ser juez de las circunstancias en que podrá ejercerlo. En esta teoría, el cambio de constitución, la *revisión*, se opera por los mismos poderes establecidos sin participación del pueblo (1).

La teoría doctrinaria, como se acaba de exponer, entraña á nuestro juicio uno de estos defectos: ó es una mera fórmula vaga y sin posibilidad de aplicarse, ni utilidad alguna política, al afirmar que el poder reside y ha de tener su origen en la razón y en la justicia, puesto que surge el problema de averiguar donde están éstas; ó es una mistificación de la teoría de la soberanía nacional, vergonzante é indecisa, pretendiendo que el pueblo es soberano al constituir el Estado y súbdito despues de constituido; ó deja sin resolver el problema del origen ó modo de constituirse legítimamente el poder, al afirmar que éste reside legítimamente en los poderes constituidos.

Si el problema sobre el origen legítimo de los poderes constituidos no se presentara de suyo como de la más difícil solución, bastarían á poner de manifiesto la dificultad las indicaciones que á grandes rasgos acabamos de hacer de las teorías principales sobre este punto. Es cierto que las cuestiones políticas unen á su dificultad teórica ó científica la dificultad práctica, porque ya sabemos que la política ó la ciencia del gobierno no consiste en la vana pretensión de plantear inmediatamente en un pueblo lo que se ha concebido como mejor en el terreno de las ideas, sinó que esta ciencia llenará mejor su objeto y conseguirá más fácilmente su fin teniendo en cuenta las circunstancias, el carácter, los hábitos, etc., del país que se vá á regir. A la dificultad de aplicar en muchos casos lo que se concibe como mejor en la esfera de las ideas ó de la ciencia pura, únese, para la solución de los problemas de esta clase, el grande apego que cada uno tiene á sus doctrinas, la influencia que ejerce en el modo de juzgar el interés individual, lo difícil que es desarraigar añejas preocupaciones y la vacilación que naturalmente han de producir en la mente todas estas concausas. No presumimos, pues, al emitir nuestra opinión sobre este importante asunto, acertar con la solución

(1) Dalloz, *Répert.* Tom. XVIII, págs. 345 y 346.

verdadera, habiendo de unir á todas estas dificultades lo escaso de nuestras fuerzas.

Como el poder, hemos dicho, es la fuerza directriz de la sociedad para la consecución del fin de ésta, necesario es que tal fuerza se manifieste por dos fases ó tenga dos potencias distintas. En efecto, la dirección de la sociedad exige primero *conocimiento* del fin social y de los medios más adecuados para obtenerle, y segundo *voluntad* de conseguir el fin por el empleo apropiado de los medios; de donde, si el poder ha de realizar el fin social, ha de estar dotado de inteligencia capaz y de voluntad firme para buscarle. Ahora bien, como ni la inteligencia ni la virtud (voluntad firme para el bien) de ningún individuo en particular presenta títulos legítimos á la posesión del poder social ó público, resulta que éste habrá de residir por derecho en la inteligencia y la virtud sociales, y en esto opinamos con los doctrinarios. Pero es el caso que tal inteligencia y virtud social, ó no corresponde á ninguna cosa real, ó ha de hallarse en los individuos que componen la asociación. De estos individuos no hay ninguno que pueda por sí mismo proclamar con derecho que la inteligencia y la virtud social está en él, y como, por otra parte, la simple observación demuestra que tampoco pueden todos indistintamente considerarse como depositarios de la inteligencia y virtud sociales, el problema planteado se presenta como insoluble. Nótese, sin embargo, que si bien es cierto que no todos los miembros de la sociedad tienen inteligencia y virtud para dirigirla, porque no ha de encomendarse la dirección social á los infantes, locos, malhechores, etc., no hemos afirmado que los inteligentes y virtuosos no tengan derecho á dirigirla, sinó que ellos no tienen derecho á afirmar que sean poseedores de la inteligencia y virtud sociales, ni por lo mismo á vindicar para sí el poder. Es decir, que el poder corresponde por derecho á los más inteligentes y virtuosos; pero la designación de quienes sean no corresponde á ninguno en particular. Ahora, no perteneciendo á nadie determinadamente por derecho natural el poder público, y siendo por otra parte irracional afirmar que no ha existido hasta la fecha ninguna sociedad legítimamente constituida, para resolver la cuestión es necesario tener en cuenta cómo se han constituido las sociedades. Prescindiendo de la sociedad natural, familia, en la que el poder ó la facultad de dirección reside naturalmente en el padre, y en él reside de derecho por habérsela conferido la misma naturaleza, si estudiamos las sociedades políticas, hallaremos también que el origen y la constitución de cada

una han sido resultado de hechos, distintos es verdad, pero muchos de ellos naturales y como tales legítimos.

El valor, la prudencia, el saber de una persona á cuyo alrededor se han agrupado otras muchas para llevar á cabo una empresa, no han podido menos de ser títulos legítimos para la posesión del poder en una sociedad incipiente y espontáneamente formada; la ley y en su defecto la costumbre, que ha hecho llamamientos determinados á favor de ciertas personas, son también títulos que dán legitimidad al poder que ejercen, y por último, la elección hecha por los asociados en una sociedad que voluntaria y reflexivamente vá á constituirse ó que trata de reorganizarse, si por una revolución ú otra cualquiera causa ha roto con todos sus antecedentes y leyes, puede ser también origen legítimo del poder. De modo que, si la razón de ser del poder en toda sociedad es la necesidad de su existencia para conservar la asociación y realizar sus fines, y su origen interno es Dios porque ha querido que el poder sea condición para la sociedad y sus fines, la legitimidad de los poderes constituidos, ó lo que es lo mismo, la legitimidad conque determinadas personas ejercen el poder en cada Estado, no depende de una causa general aplicable á todos los Estados, y por lo mismo teórica, sinó de hechos variados, y legítimos ó ilegítimos, según las circunstancias que han concurrido en su producción.

CAPÍTULO II

DE LAS FUNCIONES DEL PODER

I—CLASIFICACIONES PRINCIPALES DE LAS FUNCIONES DEL PODER

El poder social es uno, porque no se concibe la existencia de dos poderes simultáneos sin que se embaracen mútuamente; sin embargo, como este poder suele ser considerado bajo distintos aspectos, que dan lugar á otras tantas *funciones* ó modos de ejercicio, el estudio relativo á esta materia no será completo considerando el poder sólo en su *unidad*, sinó que es preciso estudiarle también en su *variedad*, ó en sus funciones.

Algunos autores clasifican las funciones del poder en *esenciales* y *accidentales;* pero estas últimas no lo son propiamente, porque no expresan directamente la naturaleza del poder, ni corresponden con su origen y fin, y sólo son aspectos momentáneos ó derivaciones de alguna función esencial.

Según Ahrens (1), así como toda vida se manifiesta en tres modos principales de acción, y hay desde luego una acción que representa la *unidad* de vida, de impulso y dirección, hay despues un *tipo* y *leyes,* que presiden á todo desarrollo, y existe por último la *formación* efectiva y constante de la vida bajo la dirección unitaria y según las leyes en su ejecución; así también la vida social debe manifestarse por maneras distintas de acción

(1) *Dcho. nat.,* sexta edición francesa.

y organizarse por *poderes* distintos, aunque ligados entre sí. Hay, pues, en el Estado una función ó un poder *gubernamental*, cuyas tareas particulares consisten esencialmente en dar impulso y dirección á la vida pública, en inspeccionar, en vigilar el movimiento social, en hallarse al corriente de sus necesidades, en ejercer la iniciativa en la legislación y la administración, en representar al Estado en unidad en las relaciones internacionales y permanecer como el punto de unión y el *lazo* para todos los demás poderes y sus principales funciones. Para este último importante fin, debe tener parte en la iniciativa y la sanción de las leyes, llevando en caso de necesidad un *veto*, ora absoluto, ora al menos suspensivo; del mismo modo ha de inspeccionar y vigilar el cargo judicial y dirigir directamente la administración. El segundo poder es el *legislativo*, que puede manifestarse bajo dos formas: como poder *constituyente*, por lo que respecta á las leyes y á las instituciones fundamentales; y como poder legislativo en sentido *extricto*, formulando los principios generales destinados á regular todas las relaciones ó un género particular de relaciones entre los ciudadanos. El poder *ejecutivo*, en fin, se divide en función ó poder *judicial*, ó en función *administrativa*, propiamente dicha.

Montesquieu, al hablar de la constitución de Inglaterra en el *Espíritu de las leyes*, dice respecto á esta materia.

"En cada Estado hay tres clases de poderes: el *legislativo;* el *ejecutivo* de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero el príncipe ó el magistrado hace las leyes para cierto tiempo ó para siempre, y corrige ó deroga las que están hechas. Por el segundo hace la paz ó la guerra, envia ó recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones: y por el tercero castiga los crímenes ó decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder *judicial*, y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado."

Según B. Constant (1), los poderes constitucionales son el *real*, el *ejecutivo*, el *representativo* y el *judicial*, al que se puede añadir el *municipal*. Los tres poderes políticos, conocidos anteriormente, ejecutivo, legislativo y judicial, son tres resortes que deben cooperar cada uno por su parte al movimiento general; pero cuando éstos, sacados fuera de su lugar, se mezclan entre

(1) Trad. de Lopez, t. 1, pág. 31.

sí, se chocan ó embarazan, es necesario buscar una fuerza que los ponga en su lugar. Esta fuerza no puede existir en ninguno de los tres resortes, porque serviría para destruir á los demás; y así, debe estar fuera y ser neutra en cierto modo, á fin de que su acción se aplique en todas las partes donde sea necesaria, y para que preserve y repare sin ser hostil. La monarquía constitucional tiene esta gran ventaja, porque crea el poder neutro en la persona del rey rodeado de las tradiciones de una memoria respetable y de un poder de opinión, que sirve de base al político.

El vicio de casi todas las constituciones ha sido el no tener un poder neutro, y haber puesto la suma de la autoridad, de que él debía estar investido, en uno de los poderes activos. Cuando esta suma autoridad se encuentra reunida á la potestad legislativa, la ley que sólo debería extenderse á objetos determinados, lo invade todo; y en tal caso hay una arbitrariedad y una tiranía sin límites.

Taparelli (1) dice que los poderes fundamentales en toda sociedad pueden reducirse á cuatro: el de *constituirla*, el de *conocerla*, el de *ordenarla* y el de *moverla*; á los que vulgarmente se llama poder *constitutivo, deliberativo, legislativo* y *ejecutivo*.

"El poder *constitutivo* es necesario, porque, no siendo el ser social engendro inmediato de la naturaleza sinó de acción de hombres que obran armónicamente, y no pudiendo armonizarse éstos sin una ley ordenadora, ni pudiendo haber ley sin derecho que la establezca, el ser social nace de un derecho que *constituye*, ó sea, de un poder que *ayunta ordenadamente* á los individuos para formar con ellos la *sociedad*.

„Es necesario el poder deliberativo, porque, siendo humana la sociedad, ha de obrar por actos humanos, y como la primera facultad necesaria para producir los actos humanos es la de conocer, será necesaria en la sociedad la facultad de *conocer socialmente* á sí misma ó el poder *deliberativo*.

„La existencia del poder *legislativo* se demuestra por una razón análoga, porque la segunda facultad del hombre es la voluntad, y del mismo modo la sociedad tiene derecho á *querer socialmente*, ó un poder para mover á toda la sociedad conforme á lo que quiere. Y como este movimiento social le da la ley, el derecho de dar leyes constituye el poder legislativo.

---

(1) *Curso elem. de Dcho. nat.*, pag. 240.

„El poder *ejecutivo* es preciso en la sociedad, porque el fin social no se realiza sólo por el precepto de la ley, si ésta no se completa en el exterior, y, como para llevar á cabo estos actos que completan la ley exteriormente, se necesita un poder, al que tales actos produce se le llama ejecutivo.„

Las reglas lógicas de toda clasificación prescriben en primer lugar que un miembro no esté incluido en otro; que haya paralelismo entre estos miembros, es decir, que el uno no sea más comprensivo que el otro ú otros, y por último, que la clasificación se funde en diferencias esenciales, siempre que se pueda. Ahora bien, cuando se trata del poder, como que éste por su naturaleza es una *fuerza* productora de actos, la distinta naturaleza de éstos nos dará á conocer el número de sus funciones. Todos los actos del poder son necesariamente actos humanos: éstos son de tres clases; anímicos, físicos y anímico-físicos: á los primeros pertenecen el pensamiento y la volición; á los segundos el movimiento, y á los terceros las sensaciones de todas clases.

Teniendo, pues, en cuenta esta base esencial para la clasificación de las funciones del poder, no es aceptable la de Ahrens, porque su función *gubernamental* supone fuerza, unas veces para conocer, otras para acordar ó resolver y otras para obrar ó llevar á cabo lo acordado; de aquí, pues, la dificultad que surge en tal clasificación de distinguir á priori los actos que le son propios. Si se objeta que los actos propios de cada función, aunque no sean realmente distintos por su naturaleza, los son bajo su aspecto social, contestamos que no es aceptable una clasificación en que se colocan paralelamente miembros cuya distinción no se refiere á una base común.

La de Montesquieu se sujeta más, al parecer, á una base común, distinguiendo el poder *legislativo* y el *ejecutivo;* pero la desconoce acto continuo al subdividir éste, puesto que la base de la subdivisión no es ya la naturaleza distinta de los actos propios de cada función, sinó el objeto sobre que recaen.

La de B. Constant tampoco es admisible: primero, porque no adopta como base de la clasificación la distinta naturaleza de los actos del poder; segundo, porque coloca como miembros de una misma clasificación el poder *ejecutivo* y el *judicial*, siendo aquel más genérico; y tercero, porque el poder á que llama *real* no deriva de la naturaleza misma de las cosas, ó de una base filosófica, sinó de un modo particular de comprender la organización política, exclusiva del sistema monárquico representativo ó constitucional.

La clasificación de Taparelli, si bien reconoce implícitamente una base común, esto es, la consideración de los actos del poder en relación con los fines sociales particulares que debe de realizar, al hacer la explicación de cada poder, se ve precisado á buscar la razón del *constitutivo* y del *ejecutivo* en el fin social, y la del *deliberativo* y *legislativo* en las facultades humanas, inteligencia y voluntad, es decir, que se adoptan bases distintas para cada dos miembros de la clasificación.

II—CLASIFICACIÓN LÓGICA DE LAS FUNCIONES DEL PODER

La divergencia de opiniones en este punto y la dificultad de explicar las varias, que hemos examinado, depende en nuestra opinión de que cada uno de los publicistas mencionados ha querido formular una clasificación *completa*, y, como esto no pudieran conseguirlo sin dar cabida en ella á todas las funciones del poder, que han conocido por la historia ó por la observación, sacrificaron el rigorismo lógico en aras de aquel deseo. Por nuestra parte abrigamos el mismo deseo; pero, como juzgamos que una sola clasificación ó un solo carácter no basta lógicamente para incluir todas las funciones ó poderes conocidos hasta ahora, ensayaremos distintas calificaciones, adoptando distinta base para cada uno.

Considerando el poder *en sí mismo*, esto es, como fuerza directriz de la sociedad, es indudable que todos sus actos se reducen á *conocer, querer* y *obrar*. Conocer el fin social y los medios que á él conducen; querer que este mismo fin se realice por medios adecuados; y poner en planta estos medios que se han conocido y querido, son todos y los únicos actos que puede realizar el poder como fuerza directriz de la sociedad política.

El poder *deliberativo*, el *legislativo* y el *ejecutivo* son, pues, los tres poderes fundamentales de todo Estado, si la clasificación se hace *tomando por base la naturaleza del poder*. Esto, como se comprende, no quiere decir que cada una de estas funciones haya de ejercerse por personas ó instituciones distintas, sinó que todo lo que puede hacer el poder público, sea cualquiera su organización, está reducido á conocer, querer ú obrar.

Si consideramos el poder *con relación á la organización política* del Estado, se distinguirá en poder de *organizar* la sociedad política en una ó en otra forma, estableciendo sus bases fundamentales ó modificándolas en ciertos casos; y en poder de *dirigir* esta misma sociedad, partiendo de aquella organización. Habrá, pues, poder *constituyente*, y poder ó poderes *constituidos*.

Teniendo en cuenta que tanto el poder constituyente como el constituido no pueden llenar su objeto sinó conociendo, queriendo ú obrando, dicho se está que tanto uno como otro pueden ser, á la vez que constituyente ó constituido, legislativo, deliberativo ó ejecutivo, según los actos que produzcan. Esta doctrina, por más que aparezca nueva é incompatible hasta cierto punto con el régimen constitucional, es verdadera en el terreno de la teoría pura, y tanto que todas las monarquías de los siglos medios presentan ejemplares de la unión de estas funciones, y hasta la Asamblea legislativa y la Convención francesa, prescindiendo ahora de su legitimidad, absorbían, en cierto modo, todos estos poderes.

Considerando *los objetos sobre que recae la acción* del poder y siendo estos objetos las personas ó las cosas, habrá dos clases de actos ó dos funciones del poder, bajo este punto de vista: actos de *gobierno* ó función *gubernamental*, la que tiene por objeto inmediato las personas; y actos de *administración* ó función *administradora* ó *gestora*, que recae directamente sobre las cosas. Estas dos funciones no las juzgamos miembros de una subdivisión del poder ejecutivo, como se ha pretendido por algunos, porque en realidad quien da las bases ó instrucciones que han de seguirse en el gobierno ó administración es el primer administrador ó gobernante.

Por el modo de producirse los actos del poder, es indudable que los unos surgen espontáneamente del mismo, y otros se producen previa excitación estraña. En el primer caso el poder ejerce una función *rectora*, y en el segundo *protectora* ó *amparadora*, como dice Galiano.

En cuanto á las subdivisiones de cada función, sólo nos ocupamos de la correspondiente á la ejecutiva, porque es la única que se funda sobre una base cierta y porque es también la única admitida por los autores.

Esta base es la ocasión ó motivo que provoca la acción ejecutiva para la aplicación de las leyes, y como éstas pueden aplicarse sin contradicción ó con ella, en el primer caso, la función

ejecutiva se designa comunmente con el nombre de *administrativa*, y en el segundo con el nombre de *judicial*.

Aunque bajo el punto de vista de lo esencial del poder hemos dividido este en deliberativo, legislativo y ejecutivo, no tratamos separadamente de los dos primeros, porque conocer el bien y quererle deben ser actos simultáneos en la fuerza directriz de la sociedad; de manera que nos concretamos al estudio de las dos funciones admitidas comunmente, la legislativa y la ejecutiva, con la subdivisión de esta última en administrativa y judicial, é incluyendo en la primera la deliberativa, porque el conocer es condición indispensable para querer racionalmente.

III—NOCIÓN Y CARACTERES DE LAS FUNCIONES DEL PODER

Llámase *función legislativa* la manifestación del poder público cuando prescribe á la sociedad política y á sus miembros el modo de obrar para el bien común.

El resultado del ejercicio de esta función se llama *ley*.

La perfección de ésta, ó lo que es lo mismo, el que la ley sea adecuada al fin que ha de llenar, supone el conocimiento de los fines y de los medios sociales; de donde se deduce que el ejercicio de la función legislativa supone la *deliberación* previa, y el ejercicio acertado del poder público exige que se prescriba *inmediatamente* como ley lo que la deliberación ha hecho conocer como bueno.

La deliberación se realiza mediante tres condiciones: la *inspección* ó el acto por el que la inteligencia social se aplica al conocimiento; la *exposición* ó el acto por el que los funcionarios públicos ó los miembros de la sociedad ponen de manifiesto las necesidades de ésta para que la inteligencia social las conozca, y la *discusión* ó el acto por el que esta misma inteligencia examina el pro y el contra de las cuestiones sometidas á su decisión para hallar por este medio la verdad.

Por la simple enumeración de las condiciones á que la deliberación se halla sujeta se comprende que la primera y la última condición dependen completamente del poder y él sólo las realiza; y que la exposición pueden realizarla el poder mismo,

sus delegados y todos los miembros del Estado, aunque no sean funcionarios.

De lo dicho se infiere: que en toda buena forma de gobierno, sea monárquica ó republicana, deben establecerse estas tres condiciones; que tanto más perfecta será la constitución social cuanto más completa, oportuna y pacíficamente puedan hacerse manifiestas las necesidades sociales; y que el ejercicio acertado de la función legislativa exige una buena organización de la deliberativa.

Como, despues de conocido lo que es bueno y conveniente para la sociedad, es preciso, para que este conocimiento tenga utilidad práctica, que el poder público lo quiera, síguese que la cualidad indispensable que ha de adornar á los depositarios de la funcion legislativa es, á más de la ilustración, la bondad ó virtud cívica, esto es, un ánimo siempre dispuesto á buscar y procurar el bien social y no el medro personal.

La función legislativa se distingue de las demás por caracteres peculiares: es *estatuyente* porque establece el derecho positivo, formulando las reglas á que debe ajustarse la acción social é individual; *intermitente* en su ejercicio, porque las reglas que formula, como tienen por objeto satisfacer necesidades permanentes, no deben variarse ni modificarse todos los dias; son *irresponsables sus depositarios,* porque, representando esta función la voluntad social, no reconoce superior, y efectivamente no le hay del que manda.

Función ejecutiva es la manifestación del poder cuando obra para llevar á cabo los acuerdos que ha tomado para el régimen del Estado. Dos clases de operaciones tiene que realizar para llenar su objeto: *aplicar* dichas prescripciones, y *remover* los obstáculos que á ello se opongan. En uno y otro caso puede *gobernar* ó *administrar,* según recaiga directamente su acción sobre las personas ó sobre las cosas; pero estas dos denominaciones ya hemos dicho que sólo se aplican á los actos del poder cuando éste se ejerce sin que haya *colisión legal* ó de derechos *positivos,* y ambas se atribuyen en el uso comun á la función administrativa, por contraposición á la judicial que se ejerce para resolver aquella colisión.

Taparelli divide (1) el poder ejecutivo en *gobierno, administración, judicatura* y *milicia.* Aunque esta subdivisión pu-

(1) *Curso elem. de Dcho. nat.,* pág. 289.

diera aceptarse por lo que hace á los tres primeros miembros, no así respecto á la milicia, la que ni filosófica ni políticamente se puede considerar como poder, porque representando, como representa, la fuerza material, aunque se mueva con inteligencia dentro de sí misma por medio de sus jefes, no dirige á la sociedad, sinó que la sirve como de instrumento empleado por el poder.

El haber desconocido la milicia su verdadera misión ha engendrado el militarismo y gran parte de las revoluciones y trastornos que han afligido á los pueblos.

Por nuestra parte ya hemos dicho que la función ejecutiva es *administrativa*, cuando lleva á cabo las prescripciones legales tomando acuerdos ó resoluciones sin previa contienda que las motive; y *judicial*, en el caso contrario.

Para que la función ejecutivo-administrativa se ejerza rectamente es preciso: 1° que sus depositarios sean capaces y probos originariamente, y que se mantengan en su capacidad y probidad, no ya sólo por su índole ó carácter, sinó tambien y principalmente en virtud de la bondad de las instituciones que les impidan dejar de serlo aunque quisieran: 2° que la organización de esta función en cada país sea tal que, estableciendo entre los diferentes funcionarios las relaciones necesarias para conservar la unidad precisa en toda acción á fin de que ésta sea fuerte, vigorosa é incontrastable, distinga sin embargo las atribuciones peculiares de cada uno: 3° que los funcionarios reciban del depositario superior de esta función la fuerza y actividad proporcionada á sus respectivas atribuciones: 4° que se les proporcione la independencia necesaria para el cumplimiento de su deber, y se les haga responsables de sus actos.

El carácter peculiar de esta función le constituye la *variabilidad*, porque, estando encargada de aplicar la ley á todas las partes del organismo social y variando éstas, tanto en extensión como en circunstancias de lugar y tiempo, tiene forzosamente que acomodarse á todas estas necesidades particulares, sinó ha de ser imposible en muchos casos y perjudicial en otros aquella aplicación.

También es carácter privativo de esta función la *continuidad*, porque las necesidades que está llamada á satisfacer son de todos los momentos.

Función ejecutivo-judicial.—La buena organización de esta función exige que sus depositarios sean por la índole misma de esta organización *idoneos* y *probos*. La idoneidad requiere en los

mismos el *saber* y la *independencia* en el ejercicio de sus funciones. La probidad se obtiene haciéndolos *responsables verdaderamente* de sus decisiones, no sólo cuando sean injustos por malicia, sinó tambien cuando falten por ignorancia.

Los caracteres peculiares de esta función son tres: 1° ser *provocada,* que se deriva de la naturaleza propia de esta función pues que aplica el derecho con contradicción, y como ésta puede verificarse, ya porque haya simplemente controversia acerca de lo que es ó á quien corresponde el derecho, ya porque la ley haya sido violada directamente, ha de tenerse en cuenta que ni en uno ni en otro caso se ejerce esta función sin que haya precedido la excitación explícita ó implícita que suponen aquellos hechos: 2° ser *especial,* porque sus acuerdos se concretan á resolver sobre el hecho particular y determinado que la provoca: 3° ser *declaratoria,* en cuanto que, al decidir de qué parte está la razón, ó si ha habido ó no violación punible de la ley, *declara* cual es el derecho en aquel caso concreto.

Además de los peculiares á cada una hay tambien otros caracteres comunes á alguna de las funciones mencionadas.

La función legislativa tiene de común con la administrativa: la *generalidad*, porque, si la ley ha de ser aplicable á todos, la acción administrativa también se propone por su parte el interés ó bienestar público de todos y no el de algunos individuos ó clase; y la *espontaneidad*, porque, si la voluntad soberana no debe precisar excitaciones para atender por medio de sus preceptos á las necesidades sociales que le son conocidas, también el poder administrativo ha de procurar la satisfacción de las necesidades públicas que le están encomendadas, sin otra excitación que la ley, pudiendo obrar por sí según las circunstancias del momento, para que sus actos no se hagan inútiles por falta de oportunidad.

La función administrativa tiene de común con la judicial la *responsabilidad*, porque ambas funciones tienen por misión ejecutar los preceptos de la legislativa, que es por lo mismo la superior.

La famosa teoría en que Montesquieu decía "que no hay seguridad posible allí donde una misma persona *(física* ó *moral)* da la ley, la aplica y juzga de sus violaciones; y que no era buen gobierno aquel en que no estaban divididos los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial,„ ha hecho necesario afirmar la unidad del poder público ó social, aun reconociendo cierta independencia entre sus varias funciones.

Por de pronto no es cierto que falte la seguridad allí donde se encuentran reunidos los tres poderes en una sola persona, porque ninguna incompatibilidad ve la razón entre estos dos hechos, y además la experiencia diaria de lo que sucede en la mayoría de las familias, cuyos jefes asumen los tres poderes, nos dice lo contrario, y la historia de muchos pueblos, felices bajo el régimen monárquico puro, lo corrobora. Luego la proposición de Montesquieu tiene de falso lo qne tiene de absoluto.

La división de los poderes, por otra parte, es incapaz de suplir por sí sola la falta de probidad en los gobernantes, y tanto es así que en todos los gobiernos, cualquiera que haya sido su forma, donde ha faltado la probidad, ha reinado la opresión. Sirvan de ejemplo los esclavos en las antiguas repúblicas, los católicos irlandeses en Inglaterra, y aun los negros en los Estados-Unidos.

Esta división es, sin embargo, una garantía en cuanto que, estando el gobernante ó los gobernantes, como hombres, expuestos á las consecuencias de la flaqueza humana, siendo varios no es lo probable que todos á la vez se dejen arrastrar por sus pasiones.

De lo dicho se infiere que, no siendo las funciones del poder más que distintos aspectos ó manifestaciones de éste, que es uno por esencia, no puede haber independencia absoluta entre estas funciones, y si sólo una independencia relativa, es decir, en cuanto á su ejercicio y en la esfera propia de cada una. Por lo que la dificultad práctica en esta materia está en hallar una fórmula de organización tal, que, conservando la unidad del poder y la subordinación jerárquica de sus funciones en lo que deriva de la esencia de las mismas, permita sin embargo que cada una obre libremente dentro de su esfera sin ser absorbida ni embarazada por ninguna otra. La monarquía representativa ha creido hallar esta fórmula y realizar además la ventaja del equilibrio y contrabalanceo de los poderes.

CAPÍTULO III

DEL GOBIERNO Y SUS CLASES

Hasta ahora solo hemos considerado el poder en abstracto ó en el terreno de las ideas, réstanos, para conocerle por completo, examinar como se convierte en hecho en una sociedad política, ó lo que es lo mismo, como se ejerce. Para que esto se verifique es necesario por de pronto que el poder, que esa fuerza que hemos considerado en abstracto, se una á un ser cuyas condiciones de esencia ó cuya naturaleza sea adecuada para poseerla y emplearla: y, como esta fuerza ó el poder supone inteligencia y voluntad, síguese de aquí que el único ser á quien puede unirse es el hombre. La unión del poder al hombre le hace capaz de gobernar, de ejecutar actos de *gobierno.*

Esta palabra puede tomarse en diversas acepciones.

Alcalá Galiano llama *gobierno* á "una fuerza, nacida de la sociedad existente, que reprime y ampara, ó que reprime amparando y ampara reprimiendo.„

Según Pacheco "la palabra *gobierno* tiene por lo menos tres significaciones: primera, todo el poder público, todas las instituciones de un país; segunda, la parte de ese poder encargada de la *gobernación;* tercera, la gobernación misma.„

Hip. Passy dice en un art. del Dicc. de Block "que esta palabra sirve para designar el conjunto de los poderes, á los que, en cada Estado, pertenece el ejercicio de la soberanía efectiva.„

Ferrán, considerando que de la coexistencia, combinación y armonía de los dos elementos, el objetivo y subjetivo, social é individual, resulta el elemento definitivo y sintético del derecho

público-interno, cree que este elemento se realiza practicamente en el gobierno y en la constitución política, y define el primero "la acción (racional, regular, organizada y trascendente) del poder.„

Dedúcese del examen de estas definiciones que el gobierno se considera: ya como el poder mismo; ya como las personas encargadas de su ejercicio; ya como la acción general de este poder; ya como una parte determinada de esta acción: por lo que nosotros llamamos gobierno á *la persona, física ó moral, individual ó colectiva, que ejerce el poder público en un Estado.*

Esta noción contiene la idea de poder; la de los encargados de su ejercicio, pues el poder no obra como fuerza sin un ser al que esté unida; y la de la acción del poder, ya sea general ó particular, porque el poder no se ejerce sin producir actos.

Por esta definición se evidencia también su necesidad, puesto que, si el poder público es necesario á la sociedad, lo es sólo á condición de que no permanezca inerte. De nada sirve una fuerza si ésta no se ejercita cuando hace falta; y como las necesidades sociales exigen para satisfacerse la acción del poder público, este será sólo útil en cuanto obre; y su mayor ó menor utilidad estará en relación con la energía, oportunidad, rapidez y constancia con que atienda á la dirección social y á la satisfacción de las públicas necesidades.

Pacheco, distinguiendo los gobiernos en monarquías, aristocracias y democracias, toma como base de la clasificación juntamente el número y calidad de las personas que ejercen el poder, lo que es asimismo aplicable á la forma teocrática, que también enumera aunque como mucho más rara; y añade á esta clasificación los gobiernos llamados *mixtos*, pues el gobierno, dice, ha de ser en sus fuerzas la expresión de un hecho social y ha de seguir en sus fases todas las fases de ese hecho, y como el hecho social unas veces ha sido simple y otras compuesto, la forma ha sido unas veces pura y otras compleja, mixta ó combinada; siendo lo primero más propio de la infancia de las sociedades, y aviniéndose mejor lo segundo con nuestra civilización adelantada.

Según A. Galiano, esta clasificación no precisa bien las diferencias entre las distintas formas, porque hay monarquías tan diferentes entre sí por su modo de ser, que es casi imposible hallar entre ellas semejanza, pudiendo servir de ejemplo la monarquía inglesa, que más parece una república, donde el rey no es más que el primero de los pares, comparada con la autocrática

de Rusia y la despótica de la Sublime Puerta, ó con la del Celeste Imperio.

Lo único de común, que entre ellas puede encontrarse, es la existencia de un *rey*, de una dignidad permanente, nunca vacante, por trasmitirse por herencia, y que puede mirarse como prenda de firmeza y de ventura, por no dejar fiada la suerte del Estado á una elección, que es una casualidad disfrazada.

Más diferentes son, según el mismo, las distintas aristocracias, aunque haya puntos en que coincidan. Las antiguas aristocracias, que significaban el gobierno de los mejores; las en que el poder se trasmitía por herencia; y las de aquellos países en que, aun llamándose democráticos, la facultad de hacer las leyes y la de elegir á los que han de hacerlas está reservado á un corto número de personas, y que son por lo mismo en realidad verdaderas aristocracias, tienen muy poco, si es que hay entre ellas algo, de común.

Y en cuanto á la democracia, cuyo nombre se deriva del griego *demos*, pueblo ó muchedumbre, y equivale al gobierno general ó de todos, este gobierno no se encuentra realmente en ninguna parte, porque en ninguna parte han gobernado, ni los esclavos en las antiguas democracias, ni los sirvientes, locos, ni menores de edad en las antiguas y modernas.

No hay, pues, una definición de las democracias que á todas las comprenda; y la distinción entre esta forma y la aristocracia y aun la monarquía, tales como nos la presentan la historia y la observación actual, es tan ténue, que en ella es imposible fundar nada esencial (1).

A estas tres formas se ha añadido en los modernos tiempos la llamada *mesocracia*, ó gobierno de las clases medias, que es cierto como hecho, en cuanto que en los pueblos más ilustrados de Europa se hallan actualmente en estas clases la fuerza y la dirección del Estado. Al enunciar esta forma de gobierno, se ve que lo que sirve para distinguirla de las otras, es también el número y la calidad.

En la clasificación de Montesquieu, quien divide los gobiernos en monarquía, despotismo y república, no acertamos á comprender que haya servido para hacerla ninguna base científica, pues, si respecto á la monarquía y á la república pudiera decirse que su distinción se funda, ya en el número de los que ejercen

(1) *Lecs. en el Ateneo*, págs. 14 y siguientes.

el poder, ya en el modo como éste se trasmite, no puede hacerse extensiva al despotismo, que, además de no ser gobierno, sinó arbitrariedad, y no conocerse más que en los pueblos salvajes, su distinción de las otras formas se funda en el modo de ejercer el poder.

El mismo A. Galiano, antes citado, propone como acertada una división en que los gobiernos se distingan según que la potestad gobernadora reconozca ó no medio legal por el cual los gobernados puedan refrenarla ó influir en ella directamente, ya por tener aquella potestad facultades restringidas y no omnímodas, ya por hallarse rodeada de cuerpos, elegidos por todos ó parte de los gobernados y que, además de compartir el poder legislativo, puedan examinar los actos de la potestad ejecutora, como sucede en los pueblos en que rige el sistema llamado, aunque tal vez impropiamente, constitucional ó representativo.

Con mucho acierto toma Ferrán por base, para clasificar los gobiernos, ya el *espíritu* ó la tendencia que en los mismos predomina, ya la *forma* ó el número de personas que ejercen el poder y la distribución entre las mismas de sus diversas funciones.

Clasificación de los gobiernos por su espíritu.—Como éste indica el predominio de alguno de los varios elementos sociales, lo que determina ó produce diversas tendencias en la acción del poder ó en el espíritu que anima á las personas encargadas de ejercerle, síguese que las especies de gobierno, teniendo en cuenta este espíritu y tendencia pueden reducirse á cuatro: *teocracia*, en que prodomina el elemento teocrático ó sacerdotal, y cuya tendencia es el prevalecimiento de los dogmas y creencias religiosas, subordinando á estos los demás intereses sociales: *aristocracia*, en que predominaba el elemento nobiliario en los pasados tiempos, y en los modernos el elemento que representa las clases superiores del Estado ó que han llegado á distinguirse, no sólo ya por su nacimiento, sinó también por su saber y riquezas, y cuya tendencia es la conservación de las glorias, tradiciones é intereses arraigados en la sociedad: *democracia*, en que predomina el elemento popular, esto es, la voluntad del mayor número sin distinción de clases, calidades, ni jerarquías sociales sean naturales ó artificiales, y cuya tendencia es la participación de todos en las funciones sociales y el ensayo de todas las innovaciones; y por último la *mesocracia*, especie nueva, en que predomina la influencia de las clases medias, elemento mixto de los últimos grados de las clases superiores y de los más elevados

de la muchedumbre, y cuya tendencia es la armonización de los intereses arraigados con la práctica de las ideas innovadoras, mediante la abolición de privilegios, por una parte, y la exigencia de ciertas condiciones, por otra, para desempeñar funciones públicas, y aceptando las teorías nuevas, no como se presentan en el terreno de lo ideal, sinó en cuanto son compatibles con el estado actual de la sociedad.

Clasificación de los gobiernos por su forma.—Llámase forma de gobierno la diferente organización que éste recibe según el número de personas depositarias del poder público y la diversa localización de las funciones de éste para su ejercicio.

Según Aristóteles estas formas pueden ser tres; *monarquía* ó gobierno de uno solo; *oligarquía* ó gobierno de unos pocos, y *república* ó gobierno de la muchedumbre. Esta división no es filosófica, porque no supone un límite fijo para distinguir unos gobiernos de otros.

Suprimiendo, sin embargo, uno de sus términos, la oligarquía, hácese ya aceptable, pues así como en el órden de las ideas ó de las categorías lo *uno* se opone á lo *múltiple*, y no á lo *más* ó *menos*, así la clasificación de las formas de gobierno por el número de personas que ejercen el poder habrá de ser sólo en dos únicas, que pueden llamarse *formas-tipo: monarquía* ó gobierno de uno solo, y *república* ó gobierno de más de uno. Pudiera decirse que había límite fijo, distinguiendo el gobierno de *uno* del de *varios*, y éste del de *todos;* pero este gobierno ni existe ni ha existido, y mucho ménos en los tiempos de Aristóteles, en los que además de estar excluidos los incapacitados y menores, como en los tiempos modernos, de toda intervención en el gobierno, lo estaban también los esclavos.

Con todo, la república puede revestir dos formas, teniendo en cuenta si son algunos los que ejercen el poder, ó si lo ejerce la *generalidad*, no la totalidad, ya directa ó indirectamente; y como al ejercer el poder unos pocos, estos se distinguen de los demás, y se convierten por lo mismo en aristócratas, en el lato sentido que hoy tiene esta palabra, síguese que, combinando el número con la calidad de las personas depositarias del poder en las distintas repúblicas, éstas pueden ser aristocráticas, gobierno de varios que se han elevado sobre la multitud, ó democráticas, gobierno de la generalidad.

CAPÍTULO IV

DE LA FORMA MONÁRQUICA

I—SU NOCIÓN, VENTAJAS É INCONVENIENTES EN GENERAL

Es monarquía, aquella forma de gobierno en que una sola persona, llámese rey, emperador, czar, sultán ó más genéricamente monarca, ejerce el poder *supremo,* siendo por lo mismo el *soberano.*

Si excluimos el gobierno patriarcal, que no puede llamarse político porque no regía un Estado, ninguna otra forma es más antígua que la monarquía; lo que se explica fácilmente por ser la forma más sencilla y que más naturalmente se presenta y también porque tenía su precedente inmediato en el gobierno familiar. Así es que, despues de la dispersión que siguió al diluvio universal, todas las agrupaciones que se formaron, obedecieron á la autoridad de un solo hombre, y fué necesario el trascurso de mucho tiempo para que las repúblicas helénicas presentaran el ejemplo de una nueva organización política.

La forma monárquica tiene por de pronto la ventaja de acomodarse más que ninguna otra á las dos condiciones esenciales del poder: *la unidad* y *la perpetuidad.* La primera condición la realiza prácticamente en cuanto es sólo *una* la persona soberana; y en cuanto á la segunda, como la dignidad real es vitalicia por su naturaleza, al contrario de lo que sucede en las otras formas, es indudable que lleva aneja mayor perpetuidad; sin

agregar á esto que en la monarquía hereditaria, en que no hay interregno, la *perpetuidad* es un hecho, es verdadera, y no lleva este nombre sólo porque sea algun tanto larga su duración.

Otra ventaja de la monarquía es que las *deliberaciones* en los negocios son más *prontas* y más *secretas,* sobre todo en las monarquías puras.

Hay también en las monarquías mayor *actividad y rapidez* en la ejecución de lo acordado; á lo que se añade que "con ménos fuerzas pueden ejecutarse mayores cosas,„ como confiesa Montesquieu, porque se obra con plan uniforme, sin oposición de opiniones, y con una perfecta unidad de principios, de fuerzas y de fines, y es sabido que «*vis unita fortior.*»

A estas ventajas reales y verdaderas, añaden también los encomiadores de esta forma de gobierno las siguientes, no siempre comprobadas: primera, que es más seguro el premio de los talentos, de las virtudes y de los servicios públicos, porque el monarca se considera obligado directamente, lo que no sucede cuando los unos pueden disculparse con los otros, y no necesita tampoco mostrarse ávido de distinciones quien todas las reune; y segundo, que entre el monarca y los vasallos se produce una unión tal, que convierte á la nación en una sola familia.

Todos los inconvenientes de la monarquía pueden reducirse al *riesgo de que degenere en tiranía ó despotismo* la reunión del poder supremo en uno solo.

Heinecio expone, sin embargo, tres inconvenientes de la monarquía: 1° *Peligro de un mal príncipe*, y tiranía, arbitrariedad, opresión y perturbación social consiguientes. A esto dicen los monárquicos que tal inconveniente es, por de pronto, anejo á todas las instituciones humanas; y que también es más facil que abusen del poder muchos que uno, porque cuando uno solo reune el poder, él solo es también responsable del abuso, mientras que cuando el poder se divide entre muchos, ninguno se considera en particular responsable, pretendiendo declinar sobre sus colegas lo odioso del gobierno. Por otra parte, cuando el monarca, abusando del poder, degenera en déspota ó tirano, este abuso no destruye los fundamentos de la sociedad y del Estado, que son la *unión de las fuerzas* y la *concordia de los ciudadanos;* ni aun se opone regularmente al bien esencial de los ciudadanos en común, sinó tan sólo al de algunos particulares de más autoridad y nombradía, que están más cerca del trono y que son los que de ordinario experimentan los efectos del despotismo. 2° *Pérdida de la libertad.* Este cargo contra la monarquía, con-

testan sus adictos, ó nada significa, ó de hacerse es extensivo á todas las demás formas de gobierno, y mucho más á la anarquía y á los gobiernos que á ésta se aproximan. Nadie duda que es más libre quien solo obedece á uno que quien depende de la voluntad de muchos; y si no hay ley ni freno que contenga la acción de cada individuo, resultará un choque, una colisión tal, al pretender todos ser libérrimamente libres, que las precauciones necesarias para vivir en una sociedad de esta índole serían la mayor traba de la libertad verdadera. Si el despotismo tiene por lema «*sit pro ratione voluntas,*» la anarquía no reconoce otra regla que el «*regnet pro jure libido.*» Pero, si la falta de libertad, á que se refería Heinecio, era de la llamada política, ó de intervención de todos los ciudadanos en el gobierno, es indudable que la república es más adecuada para esta intervención: 3º *Frecuentes mudanzas en las cosas.* Afirman los monárquicos contra esta objección que está primero por demostrar que la perpetuidad de las cosas sea un bien en la sociedad; y despues de esto, aun dado que los cambios de cosas sean un mal, la experiencia de todos los tiempos y paises demuestra que las mudanzas son más propias de las repúblicas, abandonadas á los caprichos de un vulgo sin razón, sin consejo, sin previsión, ni discernimiento. Por lo demás, no hay duda que las monarquías se hallan también sujetas á mudanzas y trastornos sobre todo donde reina el despotismo y no hay más ley que la voluntad del soberano, más no así en las monarquías templadas, donde hay leyes fijas y conocidas de todos, porque además de acreditarlo la experiencia, la sola costumbre de obedecer al soberano, según las leyes, aleja los trastornos y revueltas.

II—ESPECIES DE MONARQUÍAS Y VENTAJAS É INCONVENIENTES DE CADA UNA

Teniendo en cuenta el hecho que da origen á la dignidad real, ó por el que ésta se localiza en su poseedor, puede ser la monarquía *electiva* ó *hereditaria*, cuyas denominaciones indican que su origen es la elección ó la herencia.

La hereditaria se subdivide en *regular* ó *agnaticia*: en la primera son admitidos á la corona todos los herederos sin distinción de sexos, pero siguiendo cierto orden de preferencia, y en la segunda se excluyen las hembras.

Unas y otras pueden ser *puras* ó *limitadas*, según que el monarca ejerza su autoridad sin restricciones, ó con el concurso de ciertas instituciones no incompatibles con la unidad de la soberanía.

Monarquía electiva. Históricamente considerada coincide con los periodos de infancia de algunas naciones, más guerreras y militares que políticas y civiles, y en los que el valor y los talentos estratégicos, haciéndose notar por hechos que todos presenciaban ó por lo menos cuyos resultados conocían, daban la preferencia. Teóricamente tiene la electiva una ventaja muy importante sobre la hereditaria, y es que por la elección se puede escoger al *más digno* en vez de aceptar forzosamente al indicado por la herencia, cualesquiera que sean sus condiciones; por más que esta ventaja no siempre lo sea en el terreno de los hechos, sirviendo muchas veces la elección para encumbrar al más osado ó intrigante.

El modo de elección es también, si se quiere, más obvio y útil á los pueblos reducidos, donde se puede, en primer lugar, conocer al candidato y sus dotes; y en segundo, emitir realmente su voto todos los interesados en el acto.

Esta forma tiene los inconvenientes que siguen:

Realiza muy imperfectamente las condiciones de unidad y perpetuidad en el poder. Faltan en ella la energía y vigor del poder, porque su depositario no se considera más que como un simple delegado, cuya autoridad depende de la voluntad ó capricho de los electores. Es ocasionada á revueltas ó trastornos, promovidos al verificarse la elección por los ambiciosos que aspiran al trono ó á colocar en él á sus parciales. Por esto dice Pacheco que la elección de los monarcas en la época moderna sería una anarquía regularizada, una revolución permanente, y que se formará idea de ello, comparando lo que sucede en las elecciones de diputados, habiendo un rey, una autoridad suprema, con lo que sucedería eligiendo un rey, y faltando por lo mismo una autoridad superior que se interpusiera atajando las revueltas y contiendas civiles.

El rey electo sería casi siempre un rey de partido, que duraría simplemente el tiempo que predominase éste, ó el que pudiera sostenerse por la fuerza.

La elección podría recaer sobre un extranjero (1), lo que sobre ser antinacional, sería también una contradicción política, puesto que para desempeñar cargos públicos se exige como primera condición en todos los Estados la nacionalidad, y se elevaría al primero de los puestos á quien no tenía tal condición.

La elección de un extranjero tendría además el inconveniente de lanzar al Estado fácilmente en guerras internacionales, y de ser tal vez la nación un simple satélite de la patria del rey, si ésta era poderosa.

Como prueba de la bondad de la monarquía electiva presentan algunos, entre ellos Edgar Quinet, citado por Galiano, el ejemplo del Pontificado, que casi siempre recayó en varones esclarecidos; pero esta observación pierde su fuerza, si se nota: que en la elección de los pontífices se subordinan los intereses materiales á los espirituales, lo que produce tendencias más levantadas por ser más noble el espíritu; que esta elección la verifica el Sacro-Colegio, que no es al fin y al cabo en su mayoría otra cosa que una reunión de hombres doctos y distinguidos por sus virtudes; y por último, para los católicos, que tal reunión está asistida por las luces del Espíritu Santo, las que invocan por medio de prácticas piadosas preparatorias; á lo que debe añadirse que el método ó procedimiento para la elección de los pontífices ofrece en lo humano más garantías de acierto que ningún otro conocido.

Monarquía hereditaria. Considerada bajo el punto de vista histórico ha contribuido grandemente á la formación, robustecimiento y consolidación de las nacionalidades. Teóricamente, aunque fija y personificada en un hombre, la monarquía se hace, por decirlo así, inmortal, porque la herencia impide que jamás esté vacante, incierta ó suspendida la autoridad soberana, y llena por este medio más adecuadamente que ninguna otra institución la idea del gobierno, porque el gobierno, según su naturaleza, es perpetua vida, perpetua atención, perpetua acción sobre las cosas públicas (2).

La solidez y permanencia que da la herencia á las monarquías, esta estabilidad, hace del monarca, no una criatura humana, sinó una institución, rodeándole de gran prestigio, fuerza

---

(1) Este inconveniente es también propio de la hereditaria, aunque en ésta el llamado al trono puede y debe haberse educado ya conforme al espíritu de la nación que ha de gobernar.

(2) Pacheco—*Lecs. de Dcho. pol.*, pág. 101.

y brillo. Mata además las ambiciones, porque no hay competidores, ó son pocos en el terreno legal, y evita por lo mismo los trastornos inherentes á la elección.

Evítase con ella tambien, el desprestigio de la autoridad del monarca, por la independencia que á este da el no haber recibido su poder de la voluntad de ningún súbdito, sinó de la misma ley directamente, y porque, cuando un poder se funda en los misterios de la trasmisión y en la legitimidad de los siglos, es mucho más estimado que aquel otro, cuyo origen se ha visto y á cuyo depositario actual se ha considerado como un igual ó tal vez como un inferior.

Los inconvenientes de esta forma se resumen principalmente en la ineptitud y maldad posibles de los llamados á la corona, y en los peligros de las minorías y regencias. A éstos puede añadirse que las conmociones que se dirigen contra los tronos seculares trascienden hasta los cimientos de la misma sociedad.

Monarquía hereditaria *agnaticia*. Se llama así aquella en que suceden exclusivamente los varones. Presentan como ventaja de este sistema las condiciones especiales que tiene el hombre respecto á la mujer para el gobierno, sobre todo en circunstancias graves y anormales, como lo son las de revoluciones y guerras, en las que es preciso que las reinas tengan el temple de alma de las heroinas.

Los inconvenientes de este sistema se conocen por su comparación con los del sistema regular, siendo las ventajas del uno inconvenientes del otro.

Monarquía hereditaria *regular*. En ésta suceden varones y hembras, aunque en igualdad de circunstancias son preferidos aquellos. Son sus ventajas: considerar la monarquía como una institución, elevándola por cima de la material distinción del sexo; facilitar la aplicación del principio hereditario, por extenderse á más personas la sucesión y poner obstáculos á que se acabe el número de los llamados; facilitar por el matrimonio de las reinas los cambios de dinastías, lo que puede ser provechoso cuando éstas se han gastado, en la acepción política de la palabra, ó se han hecho impopulares; y dar origen á Estados poderosos por la unión matrimonial entre soberanos de los pequeños.

A la objeción contra este sistema, fundada en la preeminencia del sexo masculino, puede también contestar la historia registrando en sus páginas los nombres de Isabel de Inglaterra, como reina, los de Catalina de Rusia, de María Teresa de Austria, de Dª Maria de Molina y de Isabel la Católica de Castilla.

Monarquía pura. Presenta como ventajas la mayor robustez del poder, la mayor unidad de miras y tendencias y el mayor vigor y rapidez en la acción, por asumir el monarca los caracteres de legislador, administrador y juez. Tiene el inconveniente de degenerar fácilmente en despotismo ó por lo ménos de facilitar la ejecución de actos tiránicos.

Monarquía limitada. Ofrece mayores garantías de acierto en las resoluciones soberanas, sujetando éstas á ciertos preliminares indispensables; no se halla tan abocado al despotismo el ejercicio del poder supremo por el contrapeso que halla éste en las instituciones políticas, y en ella están más asegurados los derechos del individuo.

Se halla expuesta á hacer de la institución real un objeto de burla, sobre todo en los pueblos que, llevados de una excesiva suspicacia, hacen casi de nombre la autoridad del monarca por el cúmulo inmenso de las instituciones políticas que la rodean.

CAPÍTULO V

DE LA FORMA REPUBLICANA

I—SUS CARACTERES, VENTAJAS É INCONVENIENTES EN GENERAL

Llámase república la forma de gobierno en que el poder soberano no está ejercido por una sola persona física. Esto no quiere decir que en las repúblicas haya varios poderes, pues, como hemos demostrado, la pluralidad de soberanos es incompatible con el orden y con el gobierno.

La forma republicana supone un período reflexivo en la vida de los pueblos, porque su mecanismo es más artificioso y alambicado que el de la monarquía.

Sus caracteres pueden reducirse á tres: uno fundamental, y los dos últimos menos esenciales. El primero consiste en el *fraccionamiento de la soberanía* ó, si se quiere, en la división de su ejercicio entre varias personas; el segundo lo constituye lo *temporal y amovible* de las magistraturas, y el tercero está en el *origen* de estas magistraturas supremas, que es siempre *la elección*.

Hemos dicho que los dos últimos no son esenciales, porque ha habido en efecto algunas repúblicas y puede haberlas, principalmente aristocráticas, en que tales caracteres no existan.

Hé aquí ahora expuestas sucintamente las ventajas y los in-

convenientes atribuidos por H. Baudrillart (1) á la república, cualquiera que sea su especie.

A la idea de la república se enlazan pensamientos muy elevados, sentimientos muy nobles y generosos: en las monarquías el homenaje del hombre al hombre ocupa un gran lugar; pero este homenaje, aunque puede ser compatible con el bien público y llegar hasta el heroismo algunas veces, es menos puro y sublime, menos digno que el homenaje que se rinde á una cosa superior al hombre mismo, es decir, á la patria, á ley ó al Estado. Las preocupaciones egoistas y el interés personal suelen ser reemplazados por el amor á la patria, y por el generoso sacrificio de cada uno á todos y de las pequeñeces del individuo á la majestad de la justicia.

A esta idea noble de abnegación y desinterés, viene á unirse otra idea más arrebatadora, la de la igualdad con la libertad. La igualdad es de tal modo la pasión de las almas republicanas, que aun las repúblicas más aristocráticas no se eximen de esta ley común á todas, aunque la práctica y el culto de la igualdad se concentren en estas repúblicas aristocráticas en un círculo más restringido en vez de extenderse á todos los ciudadanos. Esto nos muestra la *naturaleza* y el fin de la institución republicana, que consiste en ser un gobierno fundado sobre el interés general y la igualdad, teniendo por base, como afirmaba Montesquieu, la virtud cívica, y por móviles principales el patriotismo y la popularidad con los honores que ella adjudica. Hé aquí porqué la república ha producido tantas virtudes del orden más sublime presentadas por la historia á la admiración de las generaciones futuras.

Mas lo que constituye la grandeza de esta forma de gobierno, produce también sus dificultades y peligros.

La igualdad, que es el alma de las repúblicas, tiene dos enemigos poderosos: la ambición, que conspira contra ella; y la envidia, que la exagera. Aquella no puede resignarse á aceptar el yugo de la ley común; ésta se revuelve ó se subleva contra la superioridad de la fortuna ó la del mérito y se esfuerza en nivelar aquella y en denigrar ésta. Los impuestos dirigidos contra los ricos, los proyectos de leyes agrarias, los privilegios en favor de los pobres, la suspicacia contra la parte acomodada y distinguida de la población, toman de ella nacimiento. No hay histo-

(1) Blok, *Dic. de la pol.* tom. II, págs. 763 y sig.

riador ni publicista ilustrado que no haya hecho notar que la envidia, las ambiciones, las sospechas y el espíritu de versatilidad son los escollos peculiares de las repúblicas, como la intriga y el favoritismo lo son de las monarquías. Pero los primeros de estos vicios son propios de la mayoría; los segundos no pertenecen sinó á un pequeño número.

De aquí viene la expresión, que jamás se aplica á la monarquía, "un pueblo no está *maduro* para la república.„ En efecto, la igualdad exige caracteres, educación y costumbres apropiadas. Lo mismo sucede con la libertad, sin la cual no es posible más igualdad que la triste y vergonzosa de la esclavitud.

Para gobernarse á sí mismo y para tomar parte en el gobierno de la cosa pública, es necesaria una suma de luces, una mezcla de firmeza y de moderación, que no están distribuidas por todas partes en dosis suficientes para asentar un estado de cosas regular y permanente. Siendo el número, en nombre de la igualdad, uno de los elementos esenciales de la institución republicana, si los corrompidos, los incapaces, los espíritus fáciles de seducir y arrastrar forman la mayoría, todo se ha perdido. O la anarquía, ó un dictador; no hay término medio.

Otra dificultad de la república se revela en el siguiente dicho de Montesquieu. "El gobierno es como todas las cosas del mundo; para conservarle es necesario amarle. Jamás se ha oido decir que los reyes no amasen la monarquía y que los déspotas odiasen el despotismo. La república no puede ser una excepción; para que ella se arraigue en un país no basta que una minoría la quiera ó que quiera imponerla; *es menester una nación de republicanos tan dispuesta á recibirla como capaz de soportarla.*

También sucede con frecuencia en las repúblicas que la mayoría oprime á la minoría, cuando no es ésta la que domina por el terror. Y si esto no puede considerarse como una ley fatal é inevitable, es, por lo ménos hasta la fecha, la historia de la mayor parte de las repúblicas.

II—VARIANTES DE LA FORMA REPUBLICANA Y VENTAJAS É INCONVENIENTES DE CADA ESPECIE

A dos especies principales pueden reducirse, según se atienda, ó al número y calidad de las personas que comparten el poder, ó á la diversa organización que pueda recibir el Estado aun dentro de esta misma forma. Bajo el primer aspecto puede ser la república: *aristocrática* cuando la participación en el poder se circunscribe á unos pocos que se han elevado sobre el pueblo en general por su linaje, riqueza, ó saber; y *democrática,* cuando todos los ciudadanos son llamados á participar directa ó indirectamente en las funciones del gobierno.

La *aristocrática,* considerada sólo dentro de la forma general republicana, tiene la ventaja de conferir el poder á los que á priori pueden presentar mayores títulos de aptitud para su ejercicio; pero sus títulos de legitimidad son nulos en el terreno puramente teórico, porque no pueden invocar ni la delegación de Dios, como los monarcas de derecho divino, ni la delegación nacional, como los gobiernos populares. Por eso sin duda no existe en la actualidad; ni es probable que vuelva á conocerse tal forma de gobierno, porque ni el valor, ni la dignidad, ni las riquezas, ni el saber son hoy por fortuna patrimonio de ninguna clase, y la misión de las antiguas aristocracias, en el sentido extricto de esta palabra, ha concluido.

La república *democrática* puede decirse que reune en grado más alto las ventajas é inconvenientes que antes se han expuesto de la república en general, y tiene sobre la aristocrática, la ventaja de presentar un título de legitimidad en favor de los depositarios del poder. Este título es la elección popular, que se funda en la soberanía nacional, cuyo dogma político, aunque controvertido y no muy demostrado, en el sentido vulgar de la palabra, tiene no obstante muchos prosélitos.

Bajo el punto de vista de la organización que puede recibir el Estado, aun dentro de la forma republicana, se distingue la república en: *unitaria,* en que el Estado tiene la consideración de una sola entidad ó personalidad política, y cuyas partes, aun-

que conserven su personalidad jurídica en otro orden, por ejemplo, como sociedades religiosas, corporaciones industriales, municipios, provincias, etc., no son políticamente independientes y se resuelven en la unidad territorial, política y administrativa; y *federativa* ó *federal,* que supone la personalidad política de cada una de las porciones que constituyen el Estado, conservando estas su autonomía é independencia en el orden administrativo, y sujetándose sólo á ciertas obligaciones y obteniendo ciertos derechos de sus consortes en virtud de un convenio ó *pacto federal* que viene á ser el vínculo de unión y medio de conservar la entidad nacional (1).

La república unitaria, comparada con la federal, ofrece estas principales ventajas: mayor vigor y robustez en el organismo político nacional; mayor conformidad con el principio de unidad del poder; mayor actividad y rapidez en la ejecución de las resoluciones; mayor uniformidad en la administración, y mayor igualdad en la distribución de las cargas públicas; pero es ménos conforme con el espíritu de libertad é independencia en que se fundan las repúblicas; es mucho más expuesta á degenerar en opresiva; se acomoda menos á la diversidad de necesidades y tendencias, propias de los distintos lugares que forman el Estado, y presenta muchas más dificultades prácticas para el ejercicio de los derechos políticos.

Comparada esta forma con la monárquica tiene todos los inconvenientes y ninguna de las ventajas de la monarquía electiva, con la cual se confunde fácilmente.

Ventajas de la *república federal.*—Por medio de esta forma se distinguen perfectamente las diversas personalidades del Estado, conservando á cada una su esfera propia de vida y acción, su autonomía, é impidiendo que estas personalidades se confundan y absorban en la superior del Estado. Se acomoda mejor á la satisfacción de las varias necesidades del Estado, que suelen ser diferentes según los diversos territorios que le constituyen, por la topografía, educación, costumbres, clases de industrias, etc. Dificulta la conquista del pais por las potencias extranjeras, presentando un foco de resistencia tenaz en cada una de las partes del territorio correspondiente á cada entidad política, porque cada uno mira su *cantón* como cosa propia en virtud de la intervención más inmediata que tiene en la gestión pública.

---

(1) Véase la página 78.

Simplifica la administración haciéndola á la vez menos dispendiosa. Facilita la distríbución de las cargas públicas en proporción á los beneficios que se reportan, lo cual es más equitativo que una igualdad absoluta.

Inconvenientes.—Afloja los vínculos sociales, sacrificando casi siempre los intereses generales del Estado á los particulares de localidad. Disminuye la importancia internacional del Estado, haciendo á éste menos respetable por la falta de unión entre sus elementos. Engendra fácilmente el caciquismo en los cantones, convirtiendo casi siempre la administración de éstos en un negocio ó especulación de los más osados é inmorales, por falta de freno superior que los reprima. Agrava los funestos resultados de las discusiones políticas, haciéndolas personales, germen de rencores y odios, y, desarrollando en gran manera el espíritu de venganza, da por resultado la opresión más vejatoria de los vencidos y la más insolente petulancia de los victoriosos.

CAPITULO VI

GOBIERNO REPRESENTATIVO

I—IDEA, NATURALEZA Y RAZÓN DE SER DE ESTA FORMA DE GOBIERNO

Llámase en general gobierno representativo aquella forma de gobierno que buscando la reunión en el poder del mayor grado de inteligencia, fuerza y justicia, llama á la participación en sus funciones, directa ó indirectamente, á todos los elementos sociales y á todos los intereses por medio de la *representación.*

Como se ve por esta definición, el gobierno representativo en general recibe este nombre, más que por el número y calidad de las personas depositarias del poder, por el espíritu y tendencias que le son propias, y no es en abstracto aplicable exclusivamente á las monarquías, sinó que puede extenderse á toda especie de gobiernos, cuya organización procure aquellos fines. Sin embargo, en la práctica se aplica con frecuencia á las monarquías constitucionales, que separándose del carácter exclusivista de las monarquías puras y de las repúblicas, que pretenden que el rey ó el pueblo lo sean todo respectivamente, busca, por decirlo así, un término medio por una acertada combinación que dé á cada cual lo que le corresponde sin desdeñar ni desconocer la verdadera importancia de cada uno.

La *representación,* que da nombre á esta forma de gobierno, no debe confundirse con la *delegación directa,* que sirve de base á la teoría de la *soberanía popular*, porque ésta en rigor lógico

no produce *representantes* sinó *mandatarios*, cuyos poderes son revocables por la sola voluntad de los *mandantes,* mientras que aquellos no son amovibles, ni terminan sus funciones, sinó por medio de la ley, de la que reciben su misión, aunque el modo legal de su nombramiento sea la elección.

Distínguense además los mandatarios de los representantes, en que la acción de éstos es espontanea, obrando, en consecuencia, del modo que les parece más conveniente á los intereses y elementos sociales que representan, y teniendo iniciativa; mientras que los mandatarios, verdaderamente tales, sólo pueden obrar dentro de los límites y conforme á los poderes que han recibido.

La naturaleza de este gobierno es mixta y representada por un organismo completo, porque su tendencia es abrazar la sociedad entera, sin exclusión de ninguno de sus elementos naturales y constitutivos; creyendo que en ninguno de ellos reside exclusivamente la *soberanía de derecho* ú originaria; y procurando la alianza del principio unitario, personificado en el jefe del Estado, con la aristocracia y el pueblo, por la *representación* de estos dos elementos.

La razón de su existencia está en los abusos á que puede entregarse el poder y en los excesos que puede ocasionar una libertad exagerada; y la necesidad de la representación se ve en la imposibilidad de que las personas sociales ó colectivas realicen por sí mismas todas aquellas funciones que se relacionan con la vida, de donde surge la precisión de investir á alguno ó algunos individuos para que, en nombre de la sociedad, desempeñen tales funciones ó *la representen.*

La representación, necesaria en sí, puede aparecer como *voluntaria*, si se atiende á que no se concreta ó confiere á determinadas personas, sinó es por la voluntad social que las designa. Esta designación puede ser *expresa*, mediante manifestación explícita de la voluntad, ó *tácita*, por el consentimiento implícitamente prestado á los hechos en cuya virtud fueron investidas ciertas personas con la representación. Cualquiera que sea el modo de designación, el representante lo es de la sociedad entera y no sólo de las personas que intervinieron en su nombramiento, porque, de otra suerte, y siendo imposible que la sociedad actúe por sí misma en ciertos casos, quedarían sin actuar las fuerzas correspondientes á las personas que no intervinieron, ó actuarían aislada y caprichosamente sin relación con el fin común, no obstante ser factores de la fuerza social.

Consecuencia de esto y de ser necesaria la representación es que los representantes deban ser independientes en el ejercicio de la función para que fueron designados, á lo que se opone el, anteriormente aludido, *mandato imperativo,* insostenible en buenos principios, pues, como dice Stuart Mill (1), el ejercicio de esta función (para que sea bien desempeñada) ha de encomendarse á espíritus superiores, preparados para esta misión especial por una larga meditación y un estudio práctico; y dicho se está que los espíritus superiores difieren del vulgo, y sus soluciones han de ser necesariamente distintas de las de éste, quien no puede apreciar con tan elevado criterio las razones en pró ó en contra, ni la conveniencia, ni la oportunidad de las soluciones, y sería grandemente impolítico é irracional sujetar al representante, por un compromiso previo, al criterio ó á la voluntad del elector. El representante ha de tener además toda la independencia necesaria para cumplir dignamente con las obligaciones del cargo, lo cual no obsta, para que, afiliado acaso en un partido político ó habiendo expuesto ante los electores su manera de pensar en las cuestiones capitales, esté moral y políticamente obligado á no defraudar las esperanzas del partido ó de los electores, que, por virtud de sus manifestaciones, le distinguieron con el voto.

II—BASES DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO, SUS VENTAJAS É INCONVENIENTES

La base *fundamental* de este gobierno es la *participación* de los elementos sociales en el ejercicio de la soberanía en proporción de la capacidad que la ley les reconozca, para obrar de conformidad con la razón y la justicia.

De esta base fundamental se deducen las bases ó principios *formales* de su organización que se resumen en los siguientes: 1ª *pacto político* (tácito ó expreso) entre el poder y los diversos elementos sociales con derecho á representación: 2ª *garantías* jurídicas de la libertad individual, é intervención del país

(1) *Le Gouvernement representatif,* chap. XII

en el gobierno, ó gobierno del país por el país: 3ª *división*, separación, independencia y relaciones armónicas de las funciones del poder: 4ª *plenitud* de la potestad ejecutiva en el jefe del Estado: 5ª *concurso* de una representación nacional en el ejercicio de la potestad legislativa: 6ª fiscalización de la administración responsable por las cámaras, ó sea, *responsabilidad ministerial:* 7ª fiscalización de las cámaras por la opinión ó *publicidad* de sus sesiones.

Estas bases formales pueden reducirse á los tres principios reconocidos por todos los partidarios de este sistema:

División de poderes ó funciones, encaminada á impedir la omnipotencia del poder.

Principio electivo, por el que se realiza la intervención del país, contribuyendo á que cada poder se mantenga y ejercite dentro de su peculiar esfera.

Principio de publicidad, que estableciendo una doble corriente del poder á la sociedad y viceversa, tiende á que el poder no se aisle jamás, renovándose y fortaleciéndose en el espíritu de la sociedad (1).

Ventajas. Hace del Estado prácticamente lo que es en idea; esto es, un asunto de todos. Establece un lazo á la vez político y moral entre los individuos y el orden general. Fortalece los poderes por el apoyo que encuentran en el asentimiento público. Eleva á cada uno en su propia conciencia por la parte que toma en la realización de la idea del derecho y del orden del Estado. Es un medio poderoso de educación popular, facilitando por lo mismo el desarrollo de la inteligencia política. Mantiene los poderes en una justa armonía con las necesidades, con los intereses y con la manera de sentir y querer de la nación. Da á esta una inspección eficaz sobre los poderes, por medio de las elecciones, obligando á la representación á empaparse sin cesar en la conciencia pública. En suma, el gobierno representativo, invistiendo á la autoridad de un poder suficiente y de una digna independencia, instituye al mismo tiempo una intervención ejercida por una parte por los poderes entre sí, y por otra sobre todos los poderes por la conciencia pública ilustrada por la prensa, por las asociaciones, etc. Los dos principios, de *fijeza* y de *movimiento*, necesarios en todo Estado para su vida y perfeccionamiento pueden tener en esta forma una expresión exacta;

---

(1) V. Ferran.—*Extrac. me. de un curso de Dcho. pol.*, págs. 83 y 84.

el primero en la cámara aristocrática, y el segundo en la cámara popular.

El principio representativo supone la existencia de una sociedad consentida por todos sus miembros, fundada en la igualdad de derechos y deberes, en el trabajo y la cooperación de todos para el bien común, en la armonía de las partes, en los intereses generales y permanentes de una sociedad que á nadie violenta, que á nadie menosprecia, que *contiene en sí juntamente el elemento de la conservación,* porque quien tiene más y más sabe puede hacerse valer más, y *el elemento del progreso,* con la conservación inseparable de él, porque deja libre la manifestación de todo lo que puede ayudar á la sociedad.

Inconvenientes.—Se afirma en contra de esta especie de gobierno que produce *guerras de cartera,* es decir, luchas ardientes para elevarse al poder, puesto á concurso de elocuencia ante las cámaras que le adjudican; que estas guerras de cartera trastornan y perturban la seguridad del país y quitan el espíritu de asiduidad á los negocios; que esta teoría exagera el poder de las asambleas, poco aptas para el gobierno; que la responsabilidad ministerial, si el gobierno reviste la forma monárquica, es una *ficción* desmentida por los sucesos, puesto que las revoluciones siempre han hecho más responsables á los reyes que á los ministros, contentándose casi siempre con un destierro más ó menos largo para éstos, mientras que se condenaba á aquellos á la proscripción.

Estos inconvenientes, dice Baudrillart, muchos de ellos verdaderos, no lo son sin embargo en la teoría, pudiendo más bien considerarse como abusos en la práctica; lo que, sin embargo, no autoriza para condenar un sistema que somete el asunto en último término al cuerpo electoral y que declara á los ministros responsables ante las cámaras.

CAPÍTULO VII

DE LA MONARQUÍA REPRESENTATIVA

I—CARÁCTER Y AUTORIDAD DEL MONARCA

Siendo el gobierno representativo tan compatible con la forma monárquica como con la republicana y hallándose la monarquía, llamada representativa, muy extendida en los modernos tiempos y en Estados poderosos, conviene determinar con exactitud el carácter y la autoridad que corresponde al monarca en esta forma de gobierno.

El monarca es el centro á cuyo alrededor vienen á reunirse y coordenarse los poderes del Estado para formar un solo todo. Si estos poderes sirven por una parte de freno y límite al poder real, éste, por la suya, limita también estos poderes y les da impulso y dirección. Así es que, mientras las cámaras, por ejemplo, examinan, discuten y votan los proyectos de ley, el monarca puede tambien proponerlas y á él solo corresponde sancionarlas y promulgarlas: el poder ejecutivo está encomendado al rey, y los funcionarios todos de la administración pública se mueven por impulso más ó menos directo de los ministros á quienes aquel nombra y destituye: el monarca manda las fuerzas militares de mar y tierra: representa también al Estado en sus relaciones exteriores; y hasta el poder judicial arranca de él, nombrando á los magistrados, y casi puede afirmarse que le ejerce

en algun modo al corregir los abusos, al templar la severidad de los fallos y al conceder indulto á los penados.

El monarca, pues, teniendo parte en el poder legislativo por la iniciativa y la sanción de las leyes, asumiendo por completo el poder ejecutivo, é interviniendo en el poder judicial, por el nombramiento y destitución de los jueces, por el ministerio fiscal y por el ejercicio del derecho de gracia, sirve para dar unidad al mecanismo político, en un régimen que profesa como dogma la separación de los poderes para garantía de la libertad y seguridad individual.

La representación social, que el rey tiene en esta clase de monarquías, hace necesario que se le rodee de gran prestigio, si no se quiere que, al separar los poderes ó al distribuir su ejercicio, se rebaje de tal modo la consideración debida al monarca, que éste venga á confundirse con uno de tantos funcionarios, lejos de ser el soberano de la nación y el representante de la unidad del Estado. Por esto se ha juzgado indispensable declarar en las constituciones monárquicas que la persona del rey es sagrada é inviolable.

La irresponsabilidad é inviolabilidad del monarca se apoya también en la razón, que las ve como una consecuencia necesaria de la institución real. No se concibe en efecto que haya una persona irresponsable sin que haya otra ú otras que puedan exigir y hacer efectiva la responsabilidad de aquella; y no es posible suponer que la persona que ha de residenciar á la responsable sea inferior ó igual á ésta, por lo menos en el momento y por el hecho de pedirla cuenta de sus actos. Pues, si el monarca al ser residenciado se hace inferior bajo algun aspecto á otros individuos, funcionarios, autoridades ó representantes de la nación, deja de ser verdadero soberano para convertirse en súbdito, porque á otro poder está sujeto.

Esta doctrina es compatible aun con las mismas monarquías proclamadas en las constituciones que se han llamado democráticas, porque ya hemos dicho que esta denominación se refiere, no á la forma, sino al espíritu ó tendencias del gobierno.

II—ATRIBUCIONES DEL REY EN LAS MONARQUÍAS REPRESENTATIVAS

Por lo dicho en el párrafo anterior se comprende que las atribuciones del monarca serán correspondientes á todas y á cada una de las funciones del poder social, puesto que en todas ellas ha de tener participación, si ha de ser verdadero soberano. Tendrá, pues, atribuciones en el orden legislativo, así como en el ejecutivo.

Las atribuciones *legislativas* del monarca pueden ser de dos clases: directas é indirectas, según la clase de intervención que representen. Prescindimos de estas últimas como menos importantes, en cuanto legislativas, y porque algunas de ellas, como el nombramiento de senadores, la convocación y disolución de las cámaras, etc., pudieran ser consideradas por algunos como propias de la función á que Benjamin Constant ha llamado poder real, y hoy comunmente se llama *moderador*. En cuanto á las directas, todas pueden reducirse á la iniciativa, á la sanción y al *veto*.

Al monarca corresponde la *iniciativa* ó el derecho de proponer leyes, no sólo porque debe participar de todas las funciones del poder, siendo el soberano, sino también porque no hay razón alguna para negar á quien más conocimiento debe tener de las necesidades *generales* el derecho de indicar los medios de satisfacerlas. No quiere esto decir que á él sólo corresponda la iniciativa, partiendo como se parte de que la representación pública es conveniente, ni tampoco que él haya de ejercer este derecho por sí mismo. La iniciativa ha de corresponder también en este régimen á los representantes del país; y en cuanto á la real debe ejercerse por medio de los ministros.

Discutidos y aprobados por las cámaras los proyectos de ley, deben presentarse al monarca para su *sanción*. En este punto ya se suscita contienda entre los publicistas sobre si esta prerogativa debe ser considerada como una mera fórmula honorífica, ó si por el contrario la aprobación real ha de ser necesaria para la validez de las leyes, pudiendo el monarca concederlas ó ó negarlas su sanción por la interposición del *veto*.

La primera de estas opiniones no parece que se armoniza mucho con el prestigio de la autoridad real, porque, como dice

Benjamin Constant, un poder, que se ve obligado á prestar su apoyo á la ley con la cual no está conforme, pierde pronto su fuerza y la pública estimación. La fuerza, porque sus subordinados pueden desobedecerle, seguros de que al hacerlo no le causarán disgusto. La estimación, porque ejercerá su autoridad para llevar á cabo medidas condenadas por su razón y su conciencia, y le faltará celo para ejecutar la misma ley que desaprueba porque no hay hombre que haga esfuerzos para vencer una resistencia favorable á su opinión, antes al contrario, cada obstáculo será para él un secreto triunfo.

El *veto*, pues, ó el derecho del monarca á negar su sanción á una ley que no considera justa ó conveniente, es una consecuencia de la institución real; es más, es una condición necesaria para la existencia verdadera de la autoridad del rey.

Algunos, sin embargo, partiendo de un supuesto falso, miran como absurda la prerogativa del veto, fundándose en que es injusto que la voluntad de un solo hombre prevalezca sobre la voluntad de una nación, emitida por sus representantes.

A esta objeción se contesta que el monarca no es simplemente una persona, que es el representante más genuino de la nación, y que, si así no fuera, la dignidad real estaría de sobra, siendo, como dice Alcalá Galiano, una excrescencia en la constitución.

Tiene además el veto otras ventajas como medida preventiva contra la excesiva multiplicidad de leyes, porque evita que se tomen inconsideradamente acuerdos, cuyo éxito casi siempre es desconocido, é impide además en cierto modo que los representantes en las asambleas se distribuyan el país, adjudicándose cada uno su provincia ó distrito respectivo para plagarle de leyes y cambiarlas á cada instante, achaque que ha sido, según Rossi, uno de los más perjudiciales á la causa de la libertad.

También ha producido discordia entre los partidarios del régimen que nos ocupa la discusión acerca de la conveniencia de preferir el veto *suspensivo* al *absoluto* ó viceversa.

El veto suspensivo retardando la sanción definitiva de la ley, ha sido considerado como un medio de poner en armonía los acuerdos de las asambleas de representantes con la majestad real. Pero este medio, aunque lo fuera, ninguna ventaja produce, y es por el contrario depresivo de la autoridad del monarca y perjudicial bajo el punto de vista práctico. En los asuntos urgentes es tan pernicioso como el absoluto, porque difiere la satisfacción de una necesidad apremiante. En los negocios que admiten

espera se hace sin necesidad una especie de afrenta y de violencia al monarca, porque, sinó hubiera veto de ninguna clase, promulgaría y haría ejecutar todas las leyes votadas por las cámaras; pero, negada una vez la sanción real y votada la ley de nuevo ó transcurrido el tiempo legal para no necesitar sanción, aparece el monarca derrotado despues de haber combatido con empeño contra lo reclamado tal vez por la justicia ó por la pública conveniencia.

El veto absoluto es por lo dicho el único aceptable en buenos principios, y así lo han reconocido muchas constituciones modernas.

Sancionada una ley por el monarca ha cesado la misión del poder legislativo y deja entonces su plaza al poder ejecutivo, cuyo jefe supremo, el rey, ha de tener atribuciones adecuadas al fin que ha de realizar.

Entre las atribuciones reales en materia *ejecutiva* figuran en primer término la *promulgación* y *publicación* de las leyes. De la voluntad expresada por la ley al acto que esta manda, prohibe ó permite ejecutar hay una distancia suma, como la hay del *querer* al *poder* humano; y para llegar á conseguir los fines de la ley, preciso es antes que nada presentarla solemnemente á la nación como precepto soberano y hacer despues que todos los obligados á cumplirla y respetarla puedan conocerla. Estos actos previos para que las leyes sean ejecutadas no deben ser encomendados á otra institución que el rey, porque la majestad de la ley exige que se haga pública por la majestad del monarca, y porque solo el jefe supremo del Estado puede dirigirse á la nación entera sin que la dignidad de ésta se resienta y sin que pueda pretextarse falta de jurisdicción, para desobedecer los mandatos de quien la ejerce en todo el territorio y sobre todas las personas.

Para el cumplimiento de las leyes son necesarias ciertas medidas, además de las expuestas, porque todo lo humano se realiza sólo en condiciones adecuadas, siendo inútil en otro caso pretender nada provechoso. Estas medidas, cuyo objeto es proporcionar circunstancias favorables para la ejecución de las leyes, se manifiestan por *decretos, reglamentos* y otras disposiciones análogas, que, proponiéndose aquella ejecución, corresponderán al poder ejecutivo, y por lo mismo á su jefe supremo, con el nombre de potestad *reglamentaria,* que, si no es ejercida por él directamente, y no lo es en las monarquías representativas,

habrá de serlo por sus delegados; y de aquí la facultad de *nombrar y destituir* á sus ministros que la razón reconoce al rey.

Del carácter preeminente que el rey ha de tener, aun en las monarquías que nos ocupan, deriva otra de sus más altas prerogativas, la facultad de disolver las asambleas deliberantes cuando se hacen incompatibles con el gobierno. Esta preeminencia, por la que el rey aparece superior á todas las demás instituciones sociales, es una necesidad de los gobiernos representativos, porque concurriendo las asambleas juntamente con el rey á la formación de las leyes, si surge desavenencia entre ellos y no es posible el acuerdo, alguno habrá de ceder, y el que ceda, si lo hace no espontaneamente, sinó en virtud de la ley fundamental, será inferior ante la misma, y al serlo el rey, dejaría de ser tal para convertirse en un súbdito de superior ó inferior jerarquía. La disolución es además el único recurso posible contra el desorden consiguiente á la lucha de los poderes, convirtiéndose en una especie de llamamiento á la nación, para que en las nuevas elecciones venga á indicar de qué parte están en su opinión la justicia y el acierto; lo cual lejos de menoscabar la dignidad de un pueblo le enaltece, viniendo como á erigirle en juez de las discordias entre el monarca y las cámaras. Esta es la atribución más notable del rey, como poder *moderador*.

Como representante supremo del Estado, y en su nombre, ha de dirigir las relaciones con los demás Estados, nombrando al efecto ministros cerca de las naciones extranjeras y recibiendo á los que éstas acrediten para sostener ó promover las relaciones internacionales, que tanto influyen en el progreso y bienestar de toda la humanidad, cortando unas veces querellas, facilitando otras el comercio y contribuyendo á la propagación de los adelantos. Pero las relaciones pacíficas y amistosas, que tanto bien producen á los hombres, no siempre se conservan, y la diplomacia es muchas veces impotente para arreglar las discordias que se suscitan entre los pueblos, viéndose éstos precisados entonces á decidir por las armas y la fuerza lo que la razón y la prudencia no pudieron conciliar. Mas la decisión del momento en que es preciso sustituir la fuerza á la razón, ó lo que es lo mismo, la facultad de *declarar la guerra* es también y debe ser atribución real en esta clase de monarquías; y no sólo porque el rey represente á la nación para un objeto de tamaña trascendencia, sinó también y muy principalmente porque la prudencia aconseja que esta clase de negocios no se traten con publicidad, porque una noticia falsa, una palabra imprudente

puede comprometer el éxito de las negociaciones y, lo que es peor acaso, el resultado de la lucha. Objétase que tan grave asunto no debe encomendarse á la voluntad de uno solo, porque el carácter, la ambición, el arrebato del momento, puede lanzar á los pueblos en una lucha desastrosa, ó en empresas temerarias; pero á esto se contesta que la misma ó análoga influencia pueden ejercer y han ejercido las pasiones y la ambición en los cuerpos deliberantes; y sobre todo, aunque el achaque fuera propio de uno solo, como las guerras no se hacen sin recursos, sin hombres y sin dinero, estando reservada al poder legislativo la votación de los subsidios y del contingente militar, de éste dependerá en todo caso que la guerra se lleve á cabo.

También corresponde al rey el *mando superior* de los ejércitos de mar y tierra, aunque haya habido autores partidarios del régimen representativo, como Benjamin Constant, que se han manifestado perplejos en este punto, sin duda por miedo á la tiranía; mas, á poco que se medite, se comprenderá lo racional de esta regia facultad. La misión de los ejércitos, como de toda fuerza pública, es mantener el orden interior, hacer respetable al Estado en el exterior y coadyuvar al cumplimiento de las leyes luchando contra las resistencias materiales que se les opongan. Por su naturaleza viene, pues, á formar parte del poder ejecutivo, y mientras no haya razón que demuestre lo absurdo é inconveniente de encomendar su mando al jefe superior en el orden ejecutivo, á éste debe reconocerse tal derecho. Pero lejos de haber razones en contra de esta facultad las hay por el contrario poderosas en su favor. La unidad de movimiento y dirección aumenta sin duda alguna el alcance de toda clase de fuerzas; la prontitud, la rapidez, la oportunidad, son la mayoría de las veces prenda segura del triunfo; y estas condiciones no se consiguen siendo muchas las voluntades que previamente han de armonizarse para obtenerlas. Si la unidad en la ejecución es garantía del éxito, como la pluralidad en el consejo suele ser medio de acierto, no puede corresponder racionalmente á ninguna corporación el mando de los ejércitos. Hay además otra razón poderosa, y es que, hallándose encomendado este mando á otra institución que al rey, al poner esta facultad en otras personas ó corporaciones se organiza la fuerza pública desigualmente, surgen la emulación y los celos entre los diferentes ejércitos ó fuerzas mandadas por diversos jefes, se les expone á servir á los ódios, rencillas y ambiciones de éstos, y en una palabra, se mantiene un foco perenne de discordia.

CAPÍTULO VIII

DE LOS CUERPOS COLEGISLADORES

I—SUS VENTAJAS É INCONVENIENTES.—SU NÚMERO

La participación de estas asambleas en la función legislativa, según el sistema de organización política en los gobiernos representativos, produce grandes ventajas y está, como todo lo humano, sujeta á graves inconvenientes.

Lo numeroso de los representantes que las componen es causa, por de pronto, de que á ellas concurran personas de toda clase de ilustración, inspiradas en distintos sentimientos y animadas de diversos deseos, siendo por tanto casi imposible que se proponga cuestión alguna que no pueda ser resuelta con acierto por falta de razones que la ilustren; pero esta misma ventaja se torna en inconveniente al considerar que no es la *calidad* de los votantes, sino el *número*, lo que en último término ha de decidir de la admisión de los proyectos; que la mayoría de los votantes, además de ser imperita, pues no hay hombre universal en sus conocimientos, presta poca atención á la discusión de las leyes, sobre todo cuando no versan sobre asuntos de gobierno ó de política, permaneciendo extraña casi siempre á lo que no se relaciona con esto de un modo inmediato; que los votos son emitidos muchas veces á impulso de la pasión ó de las exigencias políticas, haciendo de la mayoría de los proyectos cuestión de partido; y por último, que en las discusiones de estos cuerpos

está siempre el poder *puesto á pública subasta* de astucia ó de osadía, según el dicho ingenioso de un distinguido político.

Algo se obvian, no obstante, los inconvenientes relativos á la discusión y votación de las leyes menos políticas con el nombramiento de comisiones especiales, compuestas de hombres competentes, para que estudien, modifiquen ó propongan las reformas que han de hacerse en los proyectos.

En cuanto al problema sobre el número de cámaras ó asambleas se han dividido los publicistas, pretendiendo unos que basta una sola cámara, porque una sola es la nación y unos los intereses generales, y porque las dos cámaras, sobre servir sólo de injustificado entorpecimiento, representan, más que el derecho y la conveniencia de todos, el interés exclusivo de una clase ó, lo que es lo mismo, un privilegio.

"La ley, se ha dicho, es la voluntad del pueblo; un pueblo no puede tener á la vez dos voluntades diferentes sobre el mismo objeto; luego el cuerpo legislativo, que represente al pueblo, debe ser esencialmente uno."

Este argumento, que hasta por su forma silogística es el más importante en defensa de la cámara única, pierde toda su fuerza considerando: que la ley no es la voluntad del pueblo sino *fórmula expresiva del derecho;* que hallar la relación entre el derecho y su fórmula la ley no es obra de la voluntad sinó del entendimiento; y que, aun concedido que la ley fuera voluntad del pueblo, si la voluntad de éste ha de manifestarse necesariamente por medio de representantes, no es contradictorio con la unidad de voluntad que los representantes discutan y acuerden separadamente y que se exija la concurrencia de opiniones y de votos para decretar la ley. Pretender otra cosa y sostener que las leyes deben ser formadas por corporaciones (sea una sola ó dos) compuestas de muchos individuos, y por consiguiente de muchas voluntades distintas, es una contradicción inexplicable.

Entre los partidarios de la dualidad de cámaras unos dicen que, buscando esta clase de gobierno la representación de todos y cada uno de los intereses y de las tendencias sociales, cuando estos intereses sean tan fuertes, tan poderosos que ellos basten para imprimir á la sociedad una dirección determinada, ó influyan notablemente en la marcha de aquella, no hay razón alguna para negarle su representación especial por medio de una cámara propia. En otros términos; esta es, segun Pacheco, una cuestión de circunstancias y que debe resolverse conforme

á las mismas. Si existe actualmente aristocracia con intereses atendibles, merecedora de ocupar un puesto en la soberanía, debe tener su representación especial, su cámara; y los buenos principios políticos exigirán por tanto dos cámaras. Este sistema ha sido llamado por Rossi "de organización social„ porque representa los dos elementos que se manifiestan en la sociedad con carácter predominante; el *conservador* y el *progresivo*.

Otros sostienen que el fundamento de la dualidad de cámaras está en la conveniencia de que los proyectos de ley se depuren, en que se discutan una y otra vez, inspirándose en diversos criterios, para que las leyes sean producto de una madura reflexión y no el fruto de la precipitación ó intemperancia. Esta razón no justifica bastante la existencia de dos cuerpos de representantes, porque el mismo resultado podría obtenerse por otro procedimiento sin necesidad de recurrir á un medio tan extraordinario y que complica de tal modo el organismo político.

Otros por fin, tal vez con más acierto, ven la necesidad de las dos cámaras en la naturaleza misma del gobierno representativo y en sus aspiraciones y tendencias. Como éstas son las de evitar en lo posible que haya poder alguno ilimitado y absoluto, se ha visto como indispensable la coexistencia de dos cuerpos iguales en atribuciones, idénticos por la función que desempeñan y análogos en representación social, y que por lo mismo se sirvan mútuamente de limitación y contrapeso. Esta causa, á que algunos atribuyen la dualidad, nos parece la más fundada en razón, dado el régimen político en que se manifiesta; pero no debe considerarse como única, porque de nada serviría reconocer la necesidad de las dos cámaras para su limitación recíproca, sinó representarán elementos sociales realmente distintos, si las dos procediesen del mismo origen, si ambas estuvieran animadas de los mismos sentimientos y deseos. Esta observación debe tenerse en cuenta al criticar los varios procedimientos ó sistemas empleados para organizar la alta cámara, de los que nos ocuparemos á continuación.

Laveleye, contestando al silogismo de Sieyes y á los defensores de la cámara única, afirma: que la ley no puede ser expresión de la voluntad del pueblo, por la sencilla razón de que, no entendiendo el pueblo absolutamente nada sobre las cuestiones debatidas, no puede tener voluntad en este asunto: que las leyes sociales y políticas son como las leyes matemáticas, asunto de estudio y de observación y no basta la voluntad, si falta inteligencia: que la política es (aunque nunca lo comprendieron los

demócratas franceses de la antigua escuela) una ciencia de observación, y ésta enseña que con dos cámaras se gobierna mejor y se hacen mejores leyes que con una sóla; ejemplo, Inglaterra y los Estados-Unidos: que todo poder ilimitado tiende á la tiranía y que el despotismo de una asamblea es más temible que el de un monarca, porque éste tiene siquiera el sentimiento de su responsabilidad moral ante su pueblo ó ante la historia, mientras que en una asamblea no hay nunca el freno de la responsabilidad individual de ninguna clase; y, por último, que en un régimen democrático, donde todos los poderes, incluso el ejecutivo, están sujetos á una renovación constante, es absolutamente necesario que haya (y principalmente para la política exterior) una institución cuyo espíritu de consecuencia y de tradición pueda influir eficazmente en la marcha de los negocios (1).

II—SISTEMAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ALTA CÁMARA

El elemento conservador al que debe representar la alta cámara, llamada entre nosotros senado, está formado en todos los paises por las clases más elevadas de la sociedad, por las aristocracias de todo género. Todo sistema de organización de este cuerpo deberá por lo mismo buscar el medio más adecuado para obtener una representación genuina del elemento aristocrático, en el sentido etimológico de esta palabra. No todos los sistemas lo han conseguido, ni tienen en sí condiciones para conseguirlo; los unos por desnaturalizar la representación de estas cámaras, y los otros por interpretar demasiado estrechamente unas veces, y otras con mucha latitud la palabra aristocracia. Agrégase á esto la dificultad de resolver esta cuestión, por el doble aspecto que reviste. Para decidir de la bondad de un sistema es preciso estudiarle primero en su aptitud intrínseca, en las condiciones que le hacen ó no recomendable por sí mismo, y despues en su utilidad relativa, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempos y lugares en que se ha de plantear.

Entre los varios sistemas propuestos ó seguidos para la or-

(1) *Essai sur les formes de gouvernement,* Chap XXX.

ganización de la alta cámara, se recomienda por su naturaleza el que confiere por la *herencia* el cargo de representante. La cámara constituida por este medio es la que tiene en sí misma más condiciones de dignidad é independencia, porque no debe su nombramiento al rey ni al pueblo, sinó á la ley, y porque sus miembros, que sabían previamente que habian de llegar á serlo, pueden estar preparados para el buen desempeño del cargo por medio de una educación previsora, que trasmita á los hijos los hábitos de gobierno y el tacto político de los padres juntamente con su posición social. Además, la renovación por la herencia es la mejor y más conforme con la naturaleza de una cámara que representa los intereses más estables y permanentes, el elemento conservador, porque esta renovación viene ya preparada de antemano y se hace con lentitud y por partes.

Pero la aristocracia en el sentido estricto de la palabra, la aristocracia de la cuna y de la propiedad, no puede crearse de repente por la ley y es necesario que exista previamente; y para su existencia es preciso que la propiedad esté vinculada y que los honores y las distinciones se trasmitan de padres á hijos, de antecesores á herederos, porque de otro modo, en vez de nobles ó aristócratas de la sangre, habrá acaso hombres eminentes por sus obras, por su ciencia y su virtud, y en vez de mayorazgos ó aristócratas de la propiedad podrá haber ricos y aun poderosos capitalistas; pero ni en uno ni en otro caso habrá verdadera aristocracia. Por eso este sistema, aunque conforme con el principio en que se funda la representación de las clases más elevadas, no subsiste en su pureza en ninguno otro país más que en Inglaterra, donde la organización social hace posible la existencia de los lores.

El sistema *vitalicio* es otro de los ensayados para constituir la alta cámara. Según él, el monarca escoje y nombra las personas que han de estar revestidas de tan alta dignidad, y éstas adquieren en su virtud el derecho de representar á la nación en aquel cuerpo; derecho que conservan durante la vida aunque sin trasmitirle á sus descendientes. Este sistema puede ser de dos especies: una, en que la elección es completamente libre, pudiendo el rey escojer los representantes, á quienes en lo sucesivo llamaremos senadores para mayor claridad, de entre todos sus súbditos: y otra, en que la ley fundamental prefija ciertas categorías dentro de las cuales ha de hacerse precisamente la elección. El nombramiento libre puede ocasionar muchos abusos; y en la designación restringida, además de indicar descon-

fianza, según dicen algunos, puede suceder que no se hayan incluido ó que no quepan en el cuadro de las categorías ciertas eminencias sociales cuya intervención en la alta cámara sería muy conveniente. Estas dos observaciones han servido para formular argumentos contra uno y otro sistema. Sin embargo la desconfianza que arguye la restricción impuesta al rey en el nombramiento de senadores no es objeción de importancia en el régimen representativo, á menos de condenar éste, porque todo él tiene su fundamento en la desconfianza ó en el temor de que el poder abuse. Respecto á la posibilidad de que haya alguna eminencia verdadera que no esté incluida en las categorías de elegibles será muy difícil que suceda, si los cuadros están bien hechos, y aun, dado que estuviera excluida alguna eminencia, sería esto sin duda preferible á facilitar inconsideradamente la entrada en aquel cuerpo á toda clase de nulidades, creando tal vez al poder compromisos momentaneos de que estaría libre en otro caso.

La trascendencia suma que entraña la regia prerogativa de nombrar senadores, se comprende fácilmente sólo con notar que en muchos casos se han nombrado senadores para decidir una votación empeñada ó para sostener un ministerio impopular. Por lo mismo es necesaria mucha circunspección y prudencia para hacer nombramientos de esta clase, debiendo tener siempre presente que no es un acto de política ministerial, sinó de política real y nacional, y que el cargo que se confiere no es temporal y transitorio, sinó permanente. El sistema de la senaduría vitalicia ha sido aplicado principalmente en Francia, y se diferencia notablemente del sistema hereditario por el carácter que reviste la cámara formada por aquel procedimiento, pues mientras la hereditaria es más política, porque representa genuinamente un elemento social, y más natural y espontanea, porque recibe su valor de la institución misma, la vitalicia es más artificial, como producto de la reflexión, y suele estar más dispuesta para legislar y tomar acuerdos de carácter administrativo, porque todo su valor, toda su fuerza la recibe de las personas que la constituyen.

La constitución de la cámara alta por *elección* es otro de los sistemas que se han ensayado. Consiste en que los electores de una nación designen las personas que han de formar aquella, aunque por un procedimiento distinto del que se sigue para la elección de diputados, y que ordinariamente suele ser la elección por grados.

Entre las ventajas de este sistema se enumeran principalmente el mayor poder político, que ha de tener la cámara, y su mayor popularidad, si se compara con la hereditaria y con la vitalicia, porque representa á la opinión pública manifestada por el sufragio de los que tomaron parte en la elección. Pero, aun concedida esta ventaja, tiene de malo este sistema que la cámara á que da origen, exige renovaciones y es por lo mismo temporal; pierde su naturaleza y viene á convertirse en una repetición de la cámara popular; no tiene la independencia que aquellas, porque, cuando el representante ha de presentarse de nuevo á los electores, para que estos sancionen con sus votos la conducta seguida por aquel en el desempeño de su misión, estará siempre recelando si su conducta merecerá ó nó la aprobación de sus comitentes. Añádase á esto que en las cámaras electivas suele haber menos hombres capaces de gobernar y administrar que en las formadas por nombramiento real, pues mientras para constituir éstas recaen de ordinario los nombramientos en personas distinguidas en las ciencias, en la administración, en la política y en la milicia, para las cámaras electivas, son preferidos casi siempre los grandes propietarios é industriales.

Además de los sistemas expuestos hay otros que aún no han sido ensayados; pero entre los cuales merecen algunos que se haga de ellos especial mención. Así sucede, por ejemplo, con el llamado de *renovación interior*, según el cual, la cámara misma elegiría los miembros que habian de formar parte de ella, á medida que ocurrieran las vacantes. Con tal sistema habría espíritu de corporación, se conservarían las tradiciones, se compondría de seguro en su mayor parte de personas razonables y sensatas, que por lo mismo no se opondrían sistemáticamente á todas las innovaciones, á pesar del espíritu de resistencia que su misma organización había de darle.

Para esta organización surgen, sin embargo, dos dificultades: primera, que la constitución primitiva de tal cámara sería imposible dentro del sistema y habría necesidad de apelar en un principio á cualquiera de los otros sistemas para constituirla; segunda, y es la más grave, que en el caso de producirse una colisión entre las dos cámaras, sería imposible resolver legalmente la cuestión, porque á ello se opondría la existencia perpetua de esta cámara; cosa que no sucede en las cámaras electivas ni en las vitalicias, pues en las primeras se zanja la dificultad disolviendo las cámaras, y en las segundas se obvia el inconve-

niente, nombrando más senadores que impriman á la política de aquel cuerpo otra distinta dirección (1).

III—ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA POPULAR

Las asambleas populares desempeñan uno de los papeles más importantes, sinó el principal en las monarquías representativas. A ellas se presentan en primer término la leyes que más afectan al interés individual, las de contribuciones y servicio militar; ellas influyen de un modo eficacísimo en el llamamiento y

---

(1) Pacheco presentó un proyecto de organización del senado, en que figuraban senadores natos y elegidos; pero con tales condiciones que le constituian en un senado especial, *sui generis*. Hé aquí en extracto lo que decía su autor.

Los senadores *natos* serían: 1° Los arzobispos, porque éstos son la verdadera y más alta aristocracia de la Iglesia; y la Iglesia debe tener representación, porque su espíritu ha marchado siempre á la par del espíritu nacional, y con su auxilio y casi siempre en su nombre, se han realizado las más grandes y gloriosas empresas: 2° Los capitanes generales, príncipes de nuestro ejército; y 3° El presidente del tribunal supremo, príncipe de nuestra magistratura; porque aquellos y éste tienen, por lo que son y representan, títulos suficientes para entrar en el cuerpo conservador como la expresion insigne, la representación más digna y veraz de los órdenes del Estado. Tal era el primer elemento del senado, que yo defendía.

Segundo elemento.—Una representación especial de la grandeza de España: doce de sus individuos, nombrados ó elegidos por todos en asamblea general. Es verdad que la grandeza de España no es lo que fué, ni en importancia personal, ni en riqueza, ni en consideraciones sociales, y que al mismo tiempo que ella ha descendido, las clases medias se han elevado; pero aún quedan restos de esa grandeza pasada, quedan tradiciones, nombres, bienes, consideración, queda en fin un elemento de aristocracia, aunque algo debilitado y poco poderoso. Por esto creía yo que debía tener representación y la elección propuesta me parecía el mejor medio, que no es nuevo por otra parte, pues así se eligen los diez y seis pares de Escocia.

Tercer elemento.—Como, además de las dichas, se han formado en los tiempos modernos otras aristocracias, también éstas habrían de tener su representación en la cámara y, como para darlas tal representación no habría otro procedimiento más que el nombramiento real ó la elección, yo admitía el nombramiento real, señalando categorías de todas las clases distinguidas del Estado, y admitía también la elección hecha por un corto número de electores en un cortísimo número de elegibles, porque el nombramiento real produce distinguidos administradores, y la elección de los grandes contribuyentes produce poder político.

Tal cámara me parecía dotada de cierta flexibilidad, porque se podía obtener ésta, ya por el aumento de senadores de real nombramiento, ya por la disolución á que se podría recurrir en casos supremos.

Sería también política por tener la representación del clero, de la riqueza, de los grandes, de la propiedad, de la industria, del saber, palancas todas pode-

caida de los ministerios; en ellas se manifiesta más notoriamente la opinión, y de ellas surgen casi siempre todas las innovaciones legales. Es, pues, de la más grande importancia constituir estas cámaras de un modo adecuado para que puedan por su misma organización cumplir bien su cometido.

Por de pronto es necesario que estas cámaras representen las ideas, los intereses y las aspiraciones del pueblo. Pero entiéndase que el pueblo no le constituye exclusivamente la clase ínfima de la sociedad; es más, esta clase ínfima, á pesar de ser la más numerosa, no puede ni debe tener en la constitución de la cámara popular—en España congreso de los diputados—una

---

rosísimas en la máquina del Estado. Sería también un cuerpo legislativo y administrativo, porque allí estarían los hombres eminentes de todos los ramos.

Sin embargo, á este sistema se han hecho varias objeciones.

La primera, que no sería tan independiente como la de los pares hereditarios, ni aun como la de los vitalicios. En cuanto á lo primero, no cabe duda que es cierta la objeción, y tanto más cuanto que nosotros hemos considerado la cámara hereditaria como el ideal, que no podemos nosotros obtener porque no son nuestras circunstancias iguales á las de Inglaterra. En cuanto á la cámara vitalicia no creemos que tenga más independencia, porque la han de componer principalmente empleados, como generales, magistrados, consejeros, jefes de administración, etc.; en una palabra, personas que puedan obtener ó esperar algo del monarca, y algo á que tal vez den más importancia que á la dignidad senatorial. Y por otra parte, la independencia, si es absolutamente indispensable en los tribunales, no lo es tanto en política donde todos dependemos algo, siquiera sea de la opinión: lo que sí es preciso es que sólo dependamos de aquello de que dependerse debe.

Es cierto que en esta cámara hay más dependencias que en otra alguna, porque los nombrados por la corona, de ésta dependen, y los nombrados por elección, de sus comitentes; pero acaso estas dependencias sean ventajas, porque unas neutralicen ó moderen las otras; por ejemplo, la corona, nombrando más senadores, puede obtener sus deseos, y los electores, eligiendo, hacer frente á la arbitrariedad que disolvió la cámara cumplidora de su deber.

Otra objeción es que tal sistema es un ensayo y que no deben hacerse ensayos en esta materia. Esta objeción es y no es cierta. El proyecto sería ensayo considerado en su totalidad; pero no en sus elementos: en Inglaterra hay pares natos, los lores eclesiásticos: representantes de la grandeza son los pares de Escocia: vitalicios con real nombramiento los de Francia; y el senado belga está formado por elección. Pero, aun siendo un ensayo, no debe desecharse, sinó cuando hay un recurso siquiera mediano para llenar la necesidad que el ensayo puede satisfacer, ó estuviera erizado de peligros su planteamiento.

Análogo á éste por su base es el sistema que ha servido en España para constituir el senado actual, que, siendo mixto por dar entrada en la cámara á sus miembros, ya por derecho propio, ya por nombramiento real, ya por elección indirecta del pueblo, (diputaciones y compromisarios), academias, cabildos, universidades, etc., representa de hecho el elemento conservador de todas las fuerzas sociales; de la virtud, de las tradiciones nacionales, del saber, de la propiedad y de la industria, y no puede decirse que esté exento de importancia política, cuando un considerable número de senadores está en comunicación directa con la opinión pública, con el espíritu nacional.

influencia predominante, porque esto no sería racional ni conveniente. No diremos, como algunos, que la clase ínfima es la que menos contribuye al sostenimiento de las cargas públicas, porque las contribuciones indirectas y el servicio militar sobre ella pesan igualmente que sobre las demás clases sociales; pero sí afirmamos que su falta de hábitos políticos, su falta de conocimiento de las personas y de las cosas públicas la excluye racionalmente de muchas de las funciones para cuyo desempeño son condición indispensable aquellos hábitos y conocimientos. Es, pues, necesario fijar un límite dentro del cual se conceda el ejercicio de la funcion política que se desempeña al cooperar por medio del sufragio á la constitución de la cámara representante de los intereses del pueblo, de los intereses democráticos; á la constitución de la cámara baja ó popular. Este límite se determina en general cuando se establece que nadie tenga derecho á tomar parte en las elecciones sin que sepa lo que va á hacer; para lo cual es preciso, en primer término, que conozca, siquiera sea someramente, el asunto de que se trata, y despues, si tal ó cual persona reune las condiciones necesarias para cumplir la misión que se le va á confiar. De donde lógicamente se deduce que no basta ser ciudadano, ni tener intereses que legítimamente exijan representación, ni contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, para tener derecho á elegir los diputados de la nación; y que, siendo la inteligencia, el conocimiento de lo que se hace, la condición primera para que la cámara popular esté organizada según razón, el derecho de votar para constituirla se hallará circunscrito á los capaces, y será por lo mismo restringido. En cuanto á esta restricción, hay diversas opiniones, pretendiendo unos que debe fijarse por la contribución exclusivamente, mientras que otros afirman que ésta no es la única circunstancia expresiva de la aptitud electoral. Los primeros dicen que quien no ha tenido capacidad suficiente para proporcionarse un capital ó explotar una industria hasta el punto de pagar tal ó cual cuota, no ha demostrado mucha inteligencia ó mucho celo para sus propios y peculiares intereses, y es de presumir que menos aptitud y celo desplegará en los públicos. Esto, que será verdad en muchos casos, puede á lo sumo servir para demostrar que quien no pague contribuciones directas no deberá ser elector, pero no prueba que todo el que las pague deba serlo. Los segundos afirman que la marcha de la sociedad y su situación política interesa á todos sin distinción, lo mismo á los

contribuyentes que á los que no lo son, y que por lo mismo debe extenderse el derecho de sufragio á todos aquellos en quienes pueda presumirse racionalmente capacídad para ejercerle, excluyendo únicamente á los faltos de esta capacidad.

Por nuestra parte hemos dicho, al hablar del derecho electoral, que la capacidad intelectual del elector y la posibilidad de expresar su voluntad, debe ser la única medida de la restricción de este derecho, porque á todos interesa más ó menos el modo de ser social.

En cuanto al medio más adecuado para determinar qué personas pueden presumirse aptas, y cuales no, es cuestión eminentemente práctica y cuya solución depende, como todas las de su clase, de las circunstancias de tiempos y lugares. Nosotros, sin embargo, ya digimos que declararíamos ineptos desde luego á todos los que no supieran leer y escribir, porque, si bien es cierto que podrían acaso comprender lo útil ó perjudicial, según los casos, sería imposible que emitieran libremente su opinión.

Es también cuestión de importancia en la organización de la cámara popular, hallar el medio más adecuado para que sea verdadera representación de la mayoría del país y para que las minorías puedan hacer oir su voz y se conozcan sus ideas y aspiraciones.

Puede, en efecto, suceder que la mayoría del parlamento no represente la mayoría de los electores, pues dividida, por ejemplo, la nación en circunscripciones ó colegios de número desigual de electores, ó en los que los electores toman distinto interés en la elección y se abstienen algunos, pueden resultar elegidos, por haber obtenido mayoría en su distrito, candidatos con menor número de votos que otro ú otros de distinta circunscripción en ésta vencidos.

Para obviar este inconveniente, y para dar á las minorías la representación que por derecho les corresponde, en razón de su fuerza numérica, se han ideado algunos sistemas, entre los que figuran como principales el *acumulativo*, el del voto *restringido* y el *proporcional*.

El primero consiste en que cada elector disponga de tantos votos como representantes corresponden á su distrito y en que pueda emitirlos todos á favor de un solo candidato, ó de dos, ó de tres, según lo estime conveniente, y de este modo, poniéndose de acuerdo una parte de los electores, y dando todos sus votos á un solo candidato, pueden sacarle triunfante, y la minoría estará así representada. Este procedimiento, sin embargo, no

produce una representación verdaderamente proporcional á las fuerzas numéricas de cada partido; no da valor moral al triunfo del candidato, porque, en último análisis, aunque los votos emitidos á su favor sean muchos, no representará más que á un número limitado de individuos y por consiguiente de opiniones; y por último, exige en los directores de la elección un conocimiento exacto de las fuerzas de cada partido para que no se malgasten ó sean como perdidos muchos votos.

Por el sistema restrictivo se limita la facultad del elector en relación con el número de representantes correspondientes á cada distrito: si son tres puede cada elector votar dos solamente, si cinco tres, etc., y de este modo las minorías, si no son muy insignificantes, pueden tener representación. Tal procedimiento, sobre no dar tampoco una representación proporcional, limita arbitrariamente el derecho de los electores, y no hay razón alguna para mermar la representación que á cada partido corresponde según su fuerza.

El sistema proporcional, llamado también de *cociente electoral* y expuesto en sus fundamentos por M. Andræ, en Dinamarca, y M. Hare, en Inglaterra, aunque más complicado, es mejor que los dos anteriores y, bien aplicado, podría conducir á obtener un número de representantes proporcionado al número de adictos á cada partido. Consiste el procedimiento en buscar, por medio de una operación aritmética, que cada partido tenga un número de representantes en proporción con el número de electores en él afiliados; así, suponiendo que en un distrito hay tres mil monárquicos, dos mil republicanos y mil anarquistas y que hubieran de nombrarse seis representantes, deberían serlo tres monárquicos, dos republicanos y un anarquista, y para obtenerlo, la base de la operación sería que cada elector presentara una lista de seis candidatos por el orden de su preferencia, y al hacer el escrutinio se contaría el número de votos y se dividiría por mitad y los candidatos que pasaran de ésta serían desde luego proclamados, y aunque tuvieran más votos no se les computarían, sinó que se adjudicarían á los que fueran en segundo lugar en la misma papeleta de los proclamados, y así sucesivamente.

Las combinaciones y modificaciones introducidas en este sistema han sido varias, pero su exposición y análisis es más propio del derecho administrativo, bastando en el político dejar consignado el principio de que todas las opiniones arraigadas deben tener su representación en el parlamento, siquiera para que sean conocidas y discutidas, sin perjuicio de que los desig-

nados por el voto de los electores para la representación hayan de sujetarse á las condiciones prescritas en las leyes para entrar en posesión de su cargo y para ejercerle.

Respecto á cualidades en los elegibles para el cargo de representantes, creemos que no deben exigirse más que las generales de aptitud legal plena para ejercer actos jurídicos, ó lo que es lo mismo, la mayoría de edad y la consideración de ciudadano, porque las demás, de inteligencia, probidad y celo, necesarias para cumplir bien su cometido, se determinan ó suponen en cada representante al distinguirle con su voto los electores.

CAPÍTULO IX

DE LOS MINISTROS DE LA CORONA

Desde las primeras fases de la evolución social, dice Herbert Spencer, se hallan hombres elegidos por el jefe del Estado para ayudarle en los negocios. Unas veces son los parientes de los príncipes, por la confianza que les inspiran; otras los servidores domésticos y los amigos, por los informes que les suministran, por los consejos que les dan y como conocedores de sus gustos y deseos; y otras los sacerdotes, por el prestigio de su cargo, por el auxilio sobrenatural que de ellos se espera ó por su ascendiente sobre el pueblo. Pero ni las atribuciones de estas varias clases de ministros son idénticas, ni su cargo, más ó menos efímero, puede considerarse como verdadera institución política necesaria en el organismo del Estado.

No aludimos, pues, ahora á esta clase de auxiliares, cuya situación, funciones, consideración y derechos dependen únicamente de la voluntad de los príncipes; nos referimos á la institución ministerial, necesaria en las monarquías representativas para armonizar el carácter sagrado é inviolable de la persona del rey con la necesidad social de que los actos del poder sean la expresión del derecho, de la justicia y de la conveniencia pública.

Considerada así la institución, son los ministros, en las monarquías representativas, agentes supremos responsables que, nombrados por el rey y bajo su autoridad, ejercen el poder ejecutivo en un ramo del gobierno ó de la administración del Estado.

En virtud de esta institución aparece, por una parte, la voluntad regia como verdaderamente soberana, mandando lo que tiene á bien sin que se menoscabe su majestad por tener que

rendir á nadie cuenta alguna de sus actos; y por otra, garantidos los derechos y los intereses sociales con la seguridad de que los actos arbitrarios ó injustos que emanen del poder no quedarán impunes, sino que serán castigados en la persona de quien por malicia ó negligencia tuvo el mal acuerdo de aconsejarlos.

Conciliada en teoría por este medio la majestad soberana con los fueros de la justicia, se ha creido hallar en la práctica un modo seguro de acreditar la intervención de los ministros en los actos del poder soberano por medio de la firma con que deben ir refrendadas todas las disposiciones emanadas de aquel poder; y en efecto, puesta la firma del ministro al pie de una disposición, probado está que se ha tomado con su consejo, que él acepta la responsabilidad de tal acuerdo, y que no ha sido un mero agente pasivo y ciego.

La exigencia de la firma ministerial para el valor legal de los acuerdos del monarca ha sido considerada por algunos como depresiva de la autoridad de éste; más los que tal cosa afirman olvidan ó aparentan olvidar que se discute dentro de los principios del gobierno representativo, de la forma de gobierno fundada en la conveniencia de que no haya poderes absolutos. Por lo demas, está claro que, cuanto mayores sean los requisitos que se exijan para la validez legal de los actos del poder, tanto más se le limita, sin que esto sea conceder que no pueda ser soberano porque el ejercicio de sus facultades esté sujeto á condiciones que, en último análisis, no le impone ningún otro poder constituido, sino sólo la ley fundamental del Estado.

Otro de los hechos en que notoriamente se manifiesta el deseo de rodear al monarca de todo el prestigio compatible con los principios en que se funda el gobierno representativo, es la costumbre de que los ministros ejerzan la iniciativa correspondiente al rey en materia legislativa, para evitar los inconvenientes que podría originar la presentación de proyectos de ley en nombre del monarca. Si se presentaran en nombre de éste, ó infundiría tal respeto la voluntad regia manifestada por medio del proyecto que desaparecería la libertad de los cuerpos deliberantes, haciéndose estos inútiles, ó se desecharía algunas veces el proyecto, haciendo un marcado desaire á la autoridad real ó indicando implícitamente su falta de conocimiento ó de buen deseo respecto á las públicas necesidades; y en todo caso se sacaría de su esfera al poder supremo, para hacerle blanco de todas las opiniones.

Por el contrario, presentados los proyectos por el ministro,

hay amplia libertad para examinarlos y discutirlos sin temor á que se lastime lo inviolable.

La responsabilidad de los ministros puede ser individual ó colectiva, según la especie de actos que la motiven. Cuando los actos ministeriales representan el ejercicio de funciones privativas ó peculiares de su ministerio, la responsabilidad debe ser individual, debe exigirse al ministro que haya expedido la órden ó haya ejecutado el acto digno de corrección; pero, si la disposición inconstitucional, injusta ó inconveniente ha sido adoptada por todos, la responsabilidad será entonces solidaria ó colectiva.

Esta responsabilidad puede hacerse efectiva, cuando los actos que la motivan son meramente políticos; ó por la opinión pública, que tiene su manifestación principal en la prensa periódica, siquiera esta no la interprete genuinamente en muchos casos; ó por las cámaras, que aprueban ó reprueban los actos ministeriales con sus votos de confianza ó de censura; ó por el mismo monarca, que nombra ó separa á los ministros según le place.

Cuando los actos del ministro revisten el carácter de verdaderos delitos, debe distinguirse entre los independientes del cargo ministerial y aquellos otros cometidos con ocasión ó por medio del cargo. En el primer caso la justicia penal ordinaria debería aplicarse á la persona, sin consideración á sus funciones públicas; en el segundo debe someterse el asunto á un tribunal especial y conocerse de él por procedimientos especiales en relación con su índole compleja y con el prestigio de las instituciones.

Acerca del tribunal que debe exigir la responsabilidad á los ministros y de la institución que ha de acusarlos, la práctica más generalizada ha sido la inglesa, según la cual, desempeña la cámara alta las funciones de tribunal, correspondiendo la acusación á la cámara popular. En pura teoría, aunque dentro de los principios representativos, sólo es necesario consignar; primero, que el tribunal destinado á juzgar á los ministros ha de tener reconocida competencia en los negocios públicos, puesto que los hechos que han de someterse á su decisión revestirán casi siempre un carácter político y social predominante; y segundo, que este tribunal sea tan elevado cual corresponde á la categoría y consideración social de quien, con razón ó sin ella, fué un dia llamado á los consejos de la corona.

CAPÍTULO X

DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

La función judicial es, según digimos, una manifestación de la ejecutiva, y su ejercicio está encomendado en las monarquías representativas á los tribunales de justicia, que la administran en nombre del rey.

Representando el monarca el poder soberano del Estado, racional es que le corresponda la decisión de las contiendas ó conflictos de los individuos entre sí ó con la sociedad; pero la separación de funciones del poder, que el sistema representativo ha considerado necesaria para armonizar el orden con la libertad, exige que el rey no administre la justicia por sí mismo y que encomiende ó delegue esta facultad en los jueces ó magistrados. A esta exigencia del sistema se une también, para justificarla bajo otro aspecto, la imposibilidad material de que un solo hombre pueda conocer de todos los negocios que ocupan á los tribunales, aunque sólo se trate de los superiores que conocen en apelación; imposibilidad que aparece aún más notoria, si ese mismo hombre ha de aplicar su atención á otra multitud de negocios. La delegación, pues, del poder judicial es absolutamente indispensable dentro de los principios del sistema; pero hay más, esta delegación debe ser de tal índole que una vez ejercida la autoridad delegada sean definitivos los resultados de este ejercicio, sea el fallo irrevocable, sin perjuicio, se entiende, de los recursos y trámites procesales establecidos por la ley como garantía de acierto.

En cuanto á la organización más conveniente para que los

tribunales cumplan bien su misión, se suscitan varias cuestiones relativas, ya á las circunstancias que deben concurrir en las personas encargadas de administrar justicia, ya al carácter legal de que han de estar revestidas, ya á su número y calidad.

Para desempeñar rectamente las funciones judiciales son necesarias en el juez ciertas condiciones de aptitud intelectual y moral: en otros términos, para administrar justicia es preciso conocer primero en cada caso de qué parte está el derecho, y querer despues resolver conforme á él.

El conocimiento de lo que es justo exige previamente el de las leyes que han de aplicarse, el de los hechos sometidos á la decisión judicial y el de las relaciones entre el hecho y la ley que le regula. Este conocimiento no puede adquirirse repentinamente y sin esfuerzo; es el resultado de un trabajo asíduo y continuado, y no debe por lo mismo afirmarse de ninguno en quien no se presuma legalmente. Esta aptitud no puede racionalmente suponerse en los miembros de los *jurados* de ciudadanos, aunque sólo hayan de recaer sus decisiones sobre la declaración de culpabilidad ó inculpabilidad de los presuntos delincuentes. La distinción entre los *jueces del hecho* y *del derecho* arguye, en nuestra opinión, una ignorancia completa de la naturaleza de las cosas y de los hombres, ó una intención bastarda al hacer depender de hombres sin aptitud la imputación de los actos. Lo probaremos.

"Para decidir si un hecho es ó no punible, dirán los partidarios de los tribunales del hecho ó del *jurado*, y si una persona es ó no autora, cómplice ó encubridora del hecho, basta conocer lo que éste es y la ley que le prohibe, pues de otro modo sería inícua la ley castigando á quien falta á preceptos que desconoce y que no puede conocer por la naturaleza misma de las cosas." A esto contestamos que para conocer si un hecho está ó no prohibido por la ley, no es necesaria en verdad gran penetración; pero no sucede así para saber si tal ó cual persona es responsable de un delito, y si en él han incurrido estas ó aquellas circunstancias, porque esto, además del conocimiento de la ley y del hecho, requiere el profundo de la naturaleza humana, de los móviles que en el hombre influyen para determinarle á obrar, de las condiciones especiales que concurren en los presuntos reos, de la relación que existe entre unos y otros hechos, y sobre todo de la índole de las pruebas y del valor que debe atri-

buírseles; lo cual ciertamente no se adquiere, ni adquirirse puede con la lectura somera de los artículos de la ley correspondiente, hecha cuando ésta se va á aplicar; y no puede adquirirse fácilmente, no ya por los ciudadanos, muy probos, muy honrados si se quiere, designados por el azar y cuya ocupación no ha sido de ordinario el estudio, pero ni aun por los que han consagrado á éste largas vigilias, como lo prueban la distinta manera de ver varios tribunales en un mismo asunto, las sentencias diversas y aun contradictorias, que por desgracia se repiten, dictadas unas en primera instancia y otras en alzada. Si á esto se objeta que la diversidad entre unos y otros fallos proviene, no de ignorancia y si de malicia, añadiremos que aun concediendo que así fuera en asuntos civiles, donde el interés individual puede hacer sentir su influencia por el cohecho ó el soborno, no debe racionalmente presumirse, cuando se trata de criminales, que no tienen contra sí otro adversario que la ley.

El ejercicio de la magistratura judicial exige evidentemente conocimientos especiales y creemos por lo mismo que debe constituir una carrera.

Respecto á moralidad en los juzgadores hay un axioma jurídico según el cual de nadie ha de sospecharse mal sin que haya prueba; pero esto, que es aceptable para la decisión de los asuntos, no puede servir de regla cuando se trata de organizar los tribunales conforme á los buenos principios de la ciencia administrativa, que prescribe organizar los servicios públicos de una manera adecuada al modo de ser en realidad las personas y las cosas, y no como deben ser ó como la ley supone que son. Por esto se ha procurado rodear á los jueces de las condiciones suficientes para asegurar su independencia, teniendo en cuenta que el hombre no suele separarse del camino recto del bien sinó cuando á ello le estimulan el miedo, la fuerza ó el interés. Estas condiciones se ha creido que debían ser principalmente *la inamovilidad*, para ponerlos á cubierto de la presión y veleidades del poder; la *remuneración decorosa*, para evitarles la tentación de sacrificar alguna vez la justicia á una necesidad apremiante; y la *responsabilidad* de sus actos, para estimularles también á cumplir su deber por el temor al castigo, si por acaso olvidaran la alta misión que les está confiada.

SECCIÓN IV

COMBINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA CONSTITUCIÓN Y SUS CLASES

La palabra *constitución* tiene dos acepciones diversas, significando, ya el modo de ser político propio de un Estado producido por la combinación espontanea de todos sus elementos, fuerzas y tendencias, ya el código en que metódica y sistemáticamente establece el legislador en breves y comprensivas fórmulas las reglas de derecho ó los preceptos jurídicos destinados á regular las relaciones entre el poder y el súbdito y á organizar el Estado en sus funciones esenciales. A la primera se ha llamado constitución *interna;* no falta en ningún Estado; pero se distingue en cada uno de ellos como se distinguen en las personas la constitución física de cada una y su carácter moral. En la segunda acepción, como código fundamental, recibe el nombre de constitución *externa*, y sólo la tienen aquellos pueblos que han

llegado á cierto grado de cultura, siendo una garantía para el acertado ejercicio del poder y de los derechos de los ciudadanos (1).

Como en el modo de ser característico de cada Estado pueden influir dos especies de causas, correspondientes unas al *orden moral* y las otras al *orden físico*, síguese que los elementos esenciales de la constitución interna de todo país pueden clasificarse en dos grupos, correspondientes también á cada uno de aquellos dos ordenes.

Los *elementos morales*, que determinan la constitución interna de un pueblo, pueden reducirse á cuatro: la *religión*, la *tradición*, las *leyes* y las *costumbres*.

Consideramos la *religión* como el primero y más importante de estos elementos, porque, traspasando la esfera de lo humano y lo finito, hace fijar al hombre en su último y superior destino; se le presenta como la aspiración más noble de su alma, á cuya realización debe tender constantemente, viniendo á ser de este modo la fibra más delicada de su sensibilidad y el resorte más poderoso de sus actos. La *tradición*, resumiendo las glorias y desdichas de la patria, las presenta como un ejemplo permanente que deben imitar los pueblos ganosos de su engrandecimiento, ó como una lección dolorosa, para que eviten la repetición de aquellas desgracias; y bajo uno y otro aspecto ejerce grande influencia en el espíritu de las naciones, que no han perdido los rasgos distintivos de su fisonomía. Las *leyes*, imprimiendo una dirección reflexiva á la actividad humana, y las *costumbres*, determinando esta misma actividad de un modo más espontaneo, por los efectos naturales del hábito, son también elementos influyentes en el modo de ser íntimo de los pueblos; aunque estos elementos hayan sido á su vez un resultado más ó menos directo de la religión y de la tradición.

Los *elementos físicos*, que influyen en la constitución interna, pueden también reducirse á cuatro: las *razas*, el *territorio* nacional, el *clima* y la *población*.

Las *razas*, porque, desarrolladas de distinta manera en ellas las facultades físicas y anímicas, este distinto desarrollo

---

(1) Las reglas jurídicas, referentes á la organización fundamental del Estado y manifestadas en forma de costumbres y leyes sueltas, no son verdadera constitución, aunque puede decirse con propiedad que son *constitucionales* por recaer sobre el mismo objeto que aquella.

produce también diferencias en las aspiraciones, sentimientos y ocupaciones predilectas. El *territorio,* porque su extensión, calidad y posición diversa dan lugar también á industrias y hábitos diferentes. El *clima*, porque su varia influencia en el organismo moral y físico ennoblece y fortifica ó deprime y rebaja los caracteres, excita las diversas facultades y produce también explotaciones y especulaciones diferentes según los paises. La *población*, porque aumentando ó disminuyendo las necesidades públicas en proporción de aquella, facilitando ó dificultando respectivamente la comunicación entre los habitantes y haciendo, lo mismo que el territorio, más ó menos posible la intervención de los ciudadanos en la gestión pública, no puede desconocerse su importancia bajo el punto de vista en que ahora la consideramos.

A la manera que en la constitución interna de un país hay que considerar varios elementos que determinan su modo especial de ser, también en toda constitución externa ó código fundamental debe haber dos partes: una *dogmática* en que se expongan los derechos y deberes de los ciudadanos y se consignen las garantías de aquellos; y otra *orgánica*, relativa al número y distribución de los poderes públicos y sus funciones, con las facultades esenciales de cada uno, para impedir las invasiones mutuas y la confusión y el desorden que esto podría engendrar.

Hemos dicho que la parte *dogmática* debe contener no sólo los derechos de los ciudadanos sinó también sus garantías, que consisten principalmente en los trámites y procedimientos generales que han de seguirse en la limitación legal de estos derechos y en la sanción de sus infracciones, porque la sola declaración de aquellos derechos sin garantías positivas facilitaría los atentados posibles de las autoridades, sobre todo de las gubernativas. La responsabilidad de éstas se haría probablemente ilusoria, por lo mismo que no estaba graduada, mientras subsistiera el gobierno que autorizara la infracción; y por el contrario podría hacerse sumamente grave y desproporcionada, si hubiera de exigirla un gobierno inspirado tal vez en sentimientos de odio ó de venganza respecto á su antecesor.

Con el objeto, pues, de que los derechos de los ciudadanos no sean ilusorios y de que los abusos en esta materia no queden impunes, la razón aconseja que la declaración de un derecho, ya que se ha hecho necesaria, vaya seguida de la garantía correspondiente. La historia de las arbitrariedades gubernamenta-

les confirma la necesidad de consignar en estos códigos garantías precisas, circunscritas y con sanciones eficaces.

Prueba de esto la tenemos, sin recurrir á los pasados tiempos en que los derechos del ciudadano se atropellaban porque se aparentaba desconocerlos ó porque dominaba un espíritu eminentemente autoritario, en el periodo constitucional de España, en que las épocas de elecciones, principalmente, han ofrecido por desgracia ancho campo á las arbitrariedades sin necesidad de recurrir á la enumeración de los atropellos cometidos por los partidos vencedores contra los vencidos y dictados, no solamente por los odios, animosidades y egoismo político, sinó también en muchas ocasiones, sobre todo en poblaciones pequeñas, por los rencores personales.

Las condiciones que han de reunir para ser buenas las constituciones escritas son de dos clases: unas relativas al *fondo* y contenido de la ley fundamental, y las otras ralativas á su *forma material.*

Las relativas al fondo, que pueden llamarse *intrínsecas*, son las siguientes: 1ª, *reconocimiento* de los derechos naturales del individuo y *consignación*, *límites* y *garantías* de los derechos y deberes políticos del ciudadano; porque la indecisión y vaguedad del legislador en esta materia, al establecer la limitación jurídica de las diversas manifestaciones de la libertad individual, así como la garantía constitucional que las ampara, facilitan la arbitrariedad, pudiendo hacer ilusorios aquellos derechos y estableciendo tal vez diferencias enormes en la punición de las infracciones, por el criterio distinto de las personas encargadas de hacer efectiva la responsabilidad contraida: 2ª, *organización* de los poderes, tanto centrales como locales; porque si esta organización se concreta á los poderes centrales, es punto menos que imposible que la armonía entre unos y otros subsista más tiempo que el de la duración en el poder de las personas representantes de las teorías adoptadas en la constitución: 3ª, *determinación* de los medios materiales de acción reservados al poder supremo para llenar sus fines propios, como consecuencia de su soberanía; porque, si los medios indicados se dejan á la elección libre del poder, puede surgir contradicción entre la existencia de los derechos del ciudadano y los medios que el poder crea necesarios para llenar su cometido, puesto que estos medios siempre estarán representados, de un modo ó de otro, por prestaciones personales ó materiales de los ciudadanos; añadiéndose á esto,

que, ó se erige la arbitrariedad gubernamental en regla de conducta, ó se le priva de los medios indispensables para cumplir su misión.

Las condiciones de forma ó *extrínsecas*, pueden reducirse á tres: *método* para facilitar su aprendizaje, puesto que interesa á todos y es una condición indispensable para que todos participen en el gobierno, siquiera sea indirectamente, y además, para hacer más obvia y expedita su aplicación ó interpretación en caso necesario: *claridad* para no hacer imposible su comprensión á las clases menos ilustradas, llamadas, como las demás, á ser regidas por el código fundamental y á responder de su observancia ó infracción; y *precisión*, para evitar las arbitrariedades á que darían márgen la *vaguedad*, la *difusión* y el *casuismo*, vicios principales relativos á la forma, de que pueden adolecer las leyes políticas.

Entre la parte dogmática y la orgánica de las constituciones escritas ha de haber estrechas relaciones, análogas á las que naturalmente existen entre el hombre, elemento material del Estado, y el gobierno, representación de su elemento formal, y que se reflejan en la constitución interna de los pueblos. Así sucede que, en la organización política de un país, á un gobierno republicano corresponde naturalmente mayor extensión en los derechos políticos de sufragio y de opción á los puestos públicos, porque en esta forma el gobierno es asunto de todos, puesto que en la voluntad de todos se supone que reside la soberanía.

Por la misma razón será más amplia la libertad de emisión y publicación del pensamiento, porque, si todos han de intervenir mediata ó inmediatamente en la dirección del Estado, preciso es que todos puedan inspirarse en las ideas, en los sentimientos y en los deseos de todos, para que las tendencias sociales se manifiesten claramente y las necesidades del pueblo, siendo conocidas, puedan ser satisfechas.

Lo mismo sucederá con la libertad de enseñanza, con la de profesión, con la de industria, y en general con todas las libertades del individuo, porque, si á éste se reconoce aptitud bastante para intervenir en el gobierno, es decir, para dirigir la sociedad, sería un contrasentido no suponerle aptitud suficiente para dirigirse á sí mismo y creerle necesitado de la enseñanza oficial, para que no le inculquen el error por no saber elegir maestros; de la protección industrial, para que no le engañen con los productos por no saber distinguir entre los industriales

probos y los charlatanes; de la restricción profesional, para que no le estafen ó ponga en riesgo su vida, su honra y sus intereses por falta de tino á quien encomendar su conservación ó su defensa.

Por el contrario, en un Estado organizado según la forma monárquica, todas estas libertades estarán más restringidas, y tanto más, cuanto más se acerque el sistema á la monarquía pura, porque, si en la república se parte del supuesto de la autonomía del individuo y de la igualdad de aptitudes, en la monarquía se cree que muchos no se bastan á sí mismos, y que necesitan por tanto de la tutela social.

Idéntico resultado se obtiene si, partiendo de las condiciones y circunstancias del individuo, procuramos indagar cual sea la organización del poder público más conforme con aquellas. Así, en un Estado donde la inteligencia, la rectitud de intenciones, los hábitos de obrar bien, sean condiciones que prevalezcan en los individuos, y donde por estos mismos hábitos y circunstancias sea posible el reconocimiento más amplio de los derechos del hombre y del ciudadano, será la forma republicana, no sólo posible, sino la más propia y adecuada á la realización del fin social. A la inversa sucederá en un pueblo cuyos habitantes, faltos de ilustración, de virtudes cívicas, de hábitos de gobierno, sean incapaces, no sólo de intentar la realización del fin social, pero ni aun de conocerle. En tales pueblos el gobierno de uno solo, más ó menos limitado ó modificado en proporción con el estado intelectual y moral de los ciudadanos, es la única forma capaz de contener á la sociedad dentro del camino que la conduce hácia su fin. De otro modo, á la libertad del individuo y á su pretendida autonomía, sustituirá probablemente un atroz libertinaje y una salvaje indisciplina.

No vaya á creerse por esto que todos los pueblos regidos por el sistema republicano son ilustrados y virtuosos, y que, por el contrario, los pueblos monárquicos están sumidos en la barbarie: la forma de gobierno es á los pueblos lo que el vestido á los individuos, si el símil se nos permite: hay trajes elegantes y que permiten los movimientos libres y desembarazados, porque son adecuados al cuerpo que los viste, mientras que en otros sucede todo lo contrario; y los hay además que á simple vista deslumbran y presentan como envidiable á quien los lleva; pero que esta primera impresión desaparece, poniendo en ridículo á su portador, desde el momento en que se sabe que tales

trajes son prestados. Pues lo mismo sucede con los pueblos: hay algunos, que llevados de la vanidad de que se les crea capaces, se han lanzado á la república, labrando así su desdicha; mientras que otros, más humildes, pero también más sesudos, se han contentado, por decirlo así, con un vestido no tan brillante, dejándose dirigir bajo la forma monárquica, aunque hayan procurado, sin embargo, su modificación paulatina.

CAPÍTULO II

RELACIONES ENTRE LA CONSTITUCIÓN INTERNA Y LA EXTERNA

Para comprender las relaciones que existen entre el modo de ser de un pueblo y su código fundamental, preciso es tener presentes los principios de las dos escuelas que se disputan en el campo del derecho el honor de dirigir la sociedad, pues mientras que una parte de un ideal preconcebido, al cual quiere ajustarlo todo, otra, más práctica, menos idealista, cree que el modo de ser los pueblos, y hasta las reformas é innovaciones surgen, por decirlo así, espontaneamente, y es necesario aceptarlas tales como se presentan. La primera de estas dos escuelas, llamada racionalista ó filosófica, cree que la misión del político está en procurar á todo trance la realización de su ideal, ya adoptando disposiciones que á este fin conduzcan, ya eligiendo para los cargos públicos á personas que representen sus ideas, ya haciendo propaganda en favor de las mismas por cuantos medios le sugiera su inventiva. La segunda escuela, llamada histórica, considera las instituciones político-fundamentales como una especie de producción orgánica de la naturaleza y de la vida de los pueblos, como un resultado de sus hábitos, de sus instintos, de sus deseos inconscientes, y no como el fruto de sus esfuerzos y designios deliberados. La política, según esta escuela, consiste en conocer bien al pueblo cuya dirección se pretende, en acomodar esta dirección á lo que el pueblo es en realidad, sin torcerle, sin violentarle, dándole lo que su situación ó modo de ser actual exige; sin apetecer reformas, ni procurar innovaciones, que siempre le desnaturalizan, cuando ellas no se vienen espontaneamente y

por la marcha regular y ordenada de las cosas y de los acontecimientos.

Ninguna de estas dos teorías es verdadera, si se adopta como exclusiva.

No todas las instituciones, por buenas que sean en abstracto, convienen á todos los pueblos. Es irracional pretender que los pueblos inteligentes y virtuosos pueden ser regidos por las mismas instituciones que los pueblos ignorantes y viciados. Si las instituciones libres, si la participación de todos los ciudadanos en la gestión pública son un medio adecuado de llegar al fin social en los pueblos cultos y de virtud cívica, estas mismas instituciones serían una rémora continua para llegar á aquel fin en un pueblo inculto, grosero y egoista. Nadie desconoce que, si la consideración del bien y del propio decoro es móvil suficiente en un hombre pundonoroso, son, por el contrario, muchos los hombres para quienes no hay estímulo bastante fuera del mezquino interés ó del temor al castigo. Prescindir por tanto de lo que los pueblos son realmente y pretender que puedan ser regidos con fórmulas abstractas, es una verdadera ilusión, es una utopia. El ideal de las instituciones es indudablemente lo mejor; pero no siempre es factible lo mejor. Cuando se ha dicho por algunos que "lo mejor es enemigo de lo bueno„ se ha querido indicar que no siempre es posible obtener lo más perfecto, y que entre un ideal de perfección imposible y una realidad menos mala es preferible esta última, porque, despues de todo, el hombre no puede ser perfecto y su misión en la tierra consiste en procurar ser cada vez mejor, cosa que no conseguirá en verdad pretendiendo salvar de un salto los obstáculos que se le ofrezcan en el camino del bien.

Los que presentan las instituciones políticas como un mero resultado de la actividad espontanea de los pueblos, y condenan todo lo que no es un reflejo de esta misma actividad, principian estableciendo una diferencia absurda entre el hombre, individuo, y la sociedad, agregación moral de hombres; pues, mientras conceden al hombre individuo la facultad de conocer lo mejor y de aspirar á ello reflexivamente y por el propio esfuerzo, sin esperar á que espontaneamente se produzca, niegan á la agrupación política esta misma capacidad y la condenan al fatalismo, á la rutina y á la inercia. Por otra parte, el mecanismo político ha de ser manejado por hombres, y por lo mismo no basta el simple consentimiento de éstos para que produzca resultados provechosos; es preciso además que directa ó indirectamente, de

un modo ó de otro, se interesen en estos resultados y coadyuven á la expedición de los movimientos.

Como consecuencia de esto diremos que las instituciones políticas para ser buenas, además de sus cualidades intrínsecas, han de reunir algunas otras condiciones que sean la fiel expresión de la armonía que debe haber entre los varios elementos del Estado. Así, pues, deben ser tales que no repugnen al pueblo que ha de regirse por ellas; y el pueblo, por su parte, debe tener la aptitud y la voluntad suficientes para hacer todo lo que sea necesario para la conservación y el libre ejercicio de aquellas instituciones, absteniéndose de todo lo que pudiera serles embarazoso ó perjudicial. Sin la adhesión del pueblo á las instituciones se crea un estado de lucha perpetua, aunque solo sea latente, entre el gobierno y los súbditos; y sin la aptitud suficiente ó la voluntad de estos para contribuir en la medida de sus fuerzas al cumplimiento de los fines sociales, se dificulta la realización de tales fines, porque falta la unidad de miras y de acción necesaria en toda sociedad.

De donde se sigue que las instituciones políticas no son buenas ni malas en absoluto; que se relacionan íntimamente con el estado moral y material de los pueblos; que para obtener lo mejor en esta materia es preciso tener siempre en cuenta estos dos principios; el filosófico, que nos presenta lo bueno en sí, intrínsecamente y con absoluta independencia del medio en que se ha de realizar, y el histórico, que poniéndonos ante la vista las circunstancias de tal ó cual pueblo nos da á conocer su aptitud política para plantear las instituciones reconocidas como buenas en pura teoría; y, por último, que los cambios bruscos, las revoluciones injustificadas, la ruptura completa con el pasado pueden producir, y de hecho producirán en los Estados, males tan graves por lo menos como el quietismo y el apego desmedido á todo lo antiguo.

En política, como en todo, lo racional consiste en tener siempre á la vista el ideal, el tipo de perfección; pero atendiendo también á las circunstancias que nos rodean, á las condiciones en que nos hallamos, para intentar llegar á aquel según lo permitan estas.

Por todo lo dicho podemos concluir que la constitución externa ó ley fundamental de un país será tanto mejor cuanto con más exactitud consigne los principios políticos que, expresando el ideal posible, puedan desarrollarse en la práctica en armonía con la constitución interna ó modo de ser íntimo de aquel pueblo;

pues de otro modo se establecería una lucha entre lo real y lo ideal, entre la teoría y la práctica, que daría por resultado la ruina de la sociedad.

De aquí que, no obstante el carácter de permanencia propio de las constituciones ó leyes fundamentales, no sean estas por su naturaleza irreformables, pues cambiando con el transcurso del tiempo las circunstancias de los pueblos; modificándose su carácter por la mayor ilustración y cultura, por el nacimiento de nuevas industrias, por la comunicación y roce con otros pueblos, se hace preciso organizarlos en armonía con las nuevas necesidades, reformar la constitución externa del país conforme á las exigencias de su nuevo modo de ser.

La necesidad de esta reforma puede ser conocida por los poderes constituidos y provocada por los mismos, cuando, atentos á la marcha social, procuran ante todo el bien público y le anteponen, si es preciso, á la propia utilidad. Para tales casos conviene que esté prevista en las leyes fundamentales la competencia correspondiente á cada uno de los poderos, si en la organización política domina la ley de la separación de funciones, y aun la que puede corresponder á los mismos ciudadanos, si domina el principio de que en la sociedad radica virtualmente el poder ó la soberanía; pero en todo caso, debe constar en la misma constitución el modo de reformarse.

Una reforma en la constitución hecha por modo tan natural y suave dificilmente dejará de ser benéfica, y seguramente se podrá por este medio apreciar mejor las razones en pró ó en contra de las reformas proyectadas, puesto que el orden y la tranquilidad con que han de plantearse son garantías de acierto.

Pero no siempre se hallan los depositarios del poder público dispuestos á buscar el bien general; y entonces, si por espíritu egoista ó refractario á toda reforma reconocidamente útil, ó por su mala gestión, ó por abuso del poder que ejercen, surge una revolución, ésta puede también llevar al cambio de la constitución, á la modificación de las instituciones fundamentales. No es necesario decir que los cambios producidos por las revoluciones no pueden ser muy estables, como dictados por la pasión más que por la razón fría, ni que las revoluciones por sí son grandemente perniciosas para el sosiego y aun para el bienestar público, porque siempre producen alarma, inquietud, recelos y temores; pero, aun así, hay casos en que las demasías del poder ó su apatía las hace inevitables y, aunque siempre son procedimien-

tos antijurídicos, pueden hacerse necesarios cuando el poder es tiránico ó inepto, y no hay dentro de las leyes remedio para estos males.

También puede producirse un cambio en la constitución por los llamados *golpes de Estado*, reformas impuestas por los depositarios del poder, que ordinariamente se valen de la fuerza pública para el logro de sus propósitos, y casi siempre la emplean para robustecer más su autoridad y extender el límite de sus atribuciones, ó investirse con otras nuevas hasta el punto de erigirse, siquiera sea por el momento, en verdaderos dictadores. Estos cambios bruscos é ilegales, dignos de reprobación por lo mismo en la mayoría de los casos, pueden cohonestarse algunas veces ante la razón y la opinión sensata cuando son el único medio de poner fin al estado de anarquía, de desorden y perturbación gegeneral que, por la debilidad de las autoridades ó por pretensiones exageradas é injustas del pueblo, ha llegado á constituir un mal grave en la sociedad. Nótese, sin embargo, que, aun siendo útiles en ocasiones para el bien público ulterior las revoluciones y los golpes de Estado, los poderes creados por virtud de tales procedimientos no son legítimos y necesitan legitimarse, ya por el asentimiento general del país que los acepta, ya por el transcurso del tiempo juntamente con los actos de buen gobierno y administración que hagan notoria su utilidad.

CAPÍTULO III

CARÁCTER DE LAS CONSTITUCIONES SEGÚN EL ELEMENTO QUE EN ELLAS PREDOMINA

Al constituirse los Estados y al ser formadas las leyes se han dejado sentir desde tiempos muy antiguos dos opuestas tendencias que, desarrollándose progresivamente, han llegado á convertirse en dos verdaderos sistemas de organización social, aunque no siempre aparezca en ellos como predominante el aspecto político y ceda este muchas veces en interés al económico.

Estas dos tendencias se hallan expresadas por el individualismo y el socialismo, que cuentan entre sus parciales políticos republicanos y monárquicos, y en los que por lo mismo se considera la forma de gobierno como cuestión accesoria. Así nos ofrece la historia ejemplos de una república eminentemente socialista en la antigua Esparta, y de tendencias mucho más individualistas en la de Atenas. La república de Venecia en los tiempos medios era también socialista, y es individualista la moderna de los Estados-Unidos. La monarquía castellana, tributando al rey un respeto casi divino, pudiera llamarse socialista porque tal homenage le vindicaba el interés social; y la monarquía aragonesa con sus Cortes, con su Justicia y sus libertades presenta un carácter más individualista.

No es, pues, la forma de gobierno, sino el elemento del Estado que aparece predominando lo que imprime á las constituciones tanto internas como externas ese sello especial; siendo

individualistas, cuando el individuo, el elemento material del Estado es atendido con preferencia, y socialistas, cuando se busca principalmente en ellas la consolidación de los vínculos sociales, la conservación del orden, del elemento del Estado á que hemos llamado formal.

Tanto el individualismo como el socialismo han salido muchas veces del campo de la política, invadiendo también el de otras ciencias y adquiriendo tal importancia que su estudio, siquiera sea superficial, ha llegado á hacerse indispensable.

I—DEL INDIVIDUALISMO

El individualismo puede considerarse como una doctrina filosófica ó como un sistema de organización política. Como doctrina filosófica considera la sociedad solamente como medio para la realización del fin del individuo; y como sistema de organización política atribuye al individuo el derecho de intervenir en la constitución del Estado, cuando menos por el sufragio.

Bajo uno y otro aspecto el individualismo tiene su fundamento en el aprecio de la dignidad humana, en el conocimiento de que cada individuo es por sí mismo responsable de sus actos y de la realización de su destino, en una palabra, en la libertad del hombre.

El origen del individualismo se atribuye por unos á la doctrina de Nuestro Señor Jesu-Cristo, y por otros á los germanos. El cristianismo, en efecto, predicando la igualdad de la naturaleza humana, el amor y la caridad, hizo considerar á los hombres como hermanos, y de esta consideración surgió necesariamente la consecuencia de que, si un hombre tenía derechos, también los tendría otro hombre y, si los unos estaban ligados al cumplimiento del deber, no había motivo racional para que otros se eximieran de él. Sin embargo, como las ideas y las instituciones exigen para encarnarse y extenderse, digámoslo así, materia adecuada, las ideas que el cristianismo trajo al mundo puede decirse que no germinaron por completo hasta la aparición en la historia de una nueva raza, de los germanos, pueblo dotado de un sentimiento de independencia que se habia perdido ya en el mundo romano.

Hay filósofos para quienes el individualismo representa solamente una evolución de la razón humana y el progreso social que entraña sólo á la razón es debido. Prescindiendo de la historia, que demuestra la aparición del individualismo después de la predicación cristiana, diremos que, si estos filósofos pretenden despojar al cristianismo de la gloria de haber restablecido la dignidad humana, no consiguen su objeto, porque, siquiera fuese como idea, se hallaba ya este progreso en la religión de Jesu-Cristo, antes de las *conquistas racionales* de estos filósofos y de sus predecesores.

Esto no obstante, el individualismo no se erigió en sistema hasta la revolución de Francia, por más que tuviera en Inglaterra verdaderos precursores.

Por la revolución francesa se proclamaron los derechos individuales como absolutos, ilimitados, sin trabas; se llevó hasta la exaltación y el delirio la apoteosis del hombre y, para deificarle, se intentó abolir al mismo Dios. A pesar de esto, si en el terreno de las ideas se afirmaba tanto el respeto al individuo, en la práctica no era ya tan sagrado, como lo prueban los atropellos y matanzas de la misma revolución. Y es que la revolución proclamaba el absurdo, lo imposible, al proclamar la ilimitación de los derechos individuales; porque, viviendo el hombre en el Estado, éste ha de tener derechos para realizar su fin, los que serán límite y cortapisa de los derechos del individuo, así como los derechos de cada individuo serán tambien limitación de los derechos de los demás ó, si se cree, como nosotros, que no puede haber colisión de derechos, el ejercicio de las facultades, que como condición de mejora humana se erige en derecho, estará limitado por el ejercicio de otras facultades análogas de otro individuo ó del Estado.

Convencidos algunos individualistas de que no hay derechos ilimitados, dicen que estos derechos se limitan por sí mismos, lo que es un contrasentido, y que el legislador no puede limitarlos, lo que es pernicioso para la sociedad por el estado de anarquía y disolución á que habría de arrastrarla.

Por lo dicho se vé que la declaración de los derechos individuales como absolutos é ilimitados es acaso el primer dogma de este sistema, cuando se trata de formularle.

Otra creencia adoptada por el sistema es que la soberanía reside en todos los asociados y que el poder está en la voluntad del mayor número. De aquí puede originarse la contradicción

de que, dependiendo la ley de la voluntad, ésta puede respetar ó no los derechos individuales y, de cualquier modo, siempre obrará en justicia; porque, según esta teoría, lo que acuerde el mayor número, es decir, la voluntad, será siempre la expresión del derecho.

Al individualismo es tambien debido el sufragio universal, y se funda en que, teniendo voluntad todos los asociados, todos deben intervenir en la constitución y gestión pública.

El sufragio universal puede considerarse, según dejamos repetido, de dos modos: ó bien como el derecho de todo ciudadano á votar directamente y por si mismo las leyes, ó como el derecho que á todos corresponde de participar indirectamente en la formación de las leyes, nombrando delegados; es decir, como derecho electoral. Bajo cualquiera de estos aspectos el sufragio universal es absurdo y, como absurdo, imposible, porque, buscando en la voluntad su fundamento, no hay razón para excluir á nadie y habrán de tener participación los menores de edad, mujeres, criminales, etc, y si á estos se exceptúa, el sufragio no es ya universal sino restringido, quedando solo en cuestión quienes han de gozar este derecho. Como derecho á votar directamente la ley es, además de absurdo, impolítico, por la dificultad de llegar á un acuerdo y por los trastornos sociales á que es ocasionado. De esto nos da un ejemplo lo ocurrido en Francia durante la asamblea legislativa, de donde, votada una proposición, pasaba á los departamentos para su aprobación, y, si la mitad mas uno de éstos no la aprobaba no llegaba á ser ley.

Otra de las instituciones del individualismo es el jurado, basándose esta teoría en que, si la idea del derecho se tiene por la conciencia, como todos tenemos conciencia, todos debemos juzgar en materia de derecho.

Este razonamiento es sofístico, porque, si es cierto que la idea del derecho se manifiesta á toda conciencia, no basta esta idea para decir á quién corresponde ó quién ha infringido el derecho, debiendo tenerse en cuenta, no solo la ley natural, sino también lo que dispone la positiva, las circunstancias del hecho, la relación entre éste y la ley, las circunstancias y cualidades del agente, y la relación entre todos estos puntos; conocimiento que no se obtiene por intuición, sino que se llega á él, y no siempre, despues de largas fatigas. Corrobora lo absurdo del jurado el que sus mismos partidarios no admiten á constituirle á todos los que tienen conciencia, excluyendo á los que reputan

que la tienen pervertida y á los que consideran sin bastante reflexión, como los menores, ó sumamente impresionables, como las mujeres.

Finalmente, el individualismo produce muchos males, que reconocen por causa el egoismo, vicio inherente á este sistema y del que ofrecen una prueba las mismas teorías de sus prohombres, de las que se pretende deducir que todo bienestar social ha sido resultado del pensamiento del interés privado, así que, según Rousseau, un hombre se asocia á otro por el interés ó utilidad que le reporta; y lo mismo se disociaría si así le conviniera, debió añadir para ser consecuente.

II—DEL SOCIALISMO

Opuesta á la anterior es la teoría socialista, que tanto en política como en economía mira como objetivo el bien de la comunidad postergando completamente al individuo, porque considera á la nación como una entidad con vida propia é independiente de la de los individuos que la forman, y deposita en el Estado toda la inteligencia y la fuerza individuales.

El origen filosófico del socialismo está en las ideas panteistas, según las que, siendo los seres inferiores emanaciones ó evoluciones sucesivas de otros seres superiores, todo lo reciben de éstos, y la vida y la perfección de éstos es tambien la vida y perfección de aquellos, como que participan de su esencia.

Sabido es que en este sistema los conceptos ó ideas generales representan seres de realidad igual á los conceptos individuales; y así es como, viendo en la naturaleza un ser real, lo ven tambien en la humanidad y en la nación y en la familia, respectivamente subordinados unos á otros; y cuya subordinación implica que los más elevados en la escala vindican con derecho la preferencia.

Conforme con su origen filosófico, el socialismo aparece históricamente en el Oriente, cuna del panteismo: sus reyes, sus castas, el despotismo de aquellos y los irritantes privilegios de las superiores de éstas prueban hasta que punto el Estado ó sus representantes lo eran todo, mientras no era nada el individuo. Grecia, puesta más en contacto con el Oriente, cuya filosofía se

filtró en ella, siguió el rumbo marcado por la idea asiática y estableció instituciones y leyes, sobre todo en Esparta, que desarrollan hasta lo inverosímil en la práctica las ideas socialistas. Toda la antiguedad se inoculó más ó menos de la idea socialista, aunque la índole particular de algunos pueblos, les hiciera adoptar instintivamente algunas instituciones ó leyes en que se descubre más ó menos confuso un fondo individualista.

Pero el socialismo de los tiempos antiguos se refería principalmente á la organización política, á las instituciones que han de regir la sociedad y á la distribución de las diversas funciones sociales; su fin directo é inmediato puede decirse que era el engrandecimiento de la entidad social independientemente de los individuos que la constituían, pues, si bien es cierto que algunos filósofos socialistas quisieron asegurar á los individuos los medios de vida, aboliendo la propiedad particular y echando sobre el Estado el sostenimiento del individuo, no lo hicieron movidos por otra causa que el temor de que el individuo atento á sus propios intereses descuidara los del Estado. Buena prueba de ello es que sólo buscaban el perfeccionamiento del individuo en tanto que este podía ser más útil á la sociedad, creando ó formando ciudadanos más robustos y más ágiles, para que sirvieran al Estado de defensa, y más astutos, para que más fácilmente triunfaran de los enemigos; ahogando en ellos, por otra parte, hasta los sentimientos más nobles, generosos y naturales, por ejemplo los de familia, porque podrían ser en algun caso perjudiciales al Estado.

El socialismo moderno, basado en ideas más materialistas, se propone como fin directo la organización económica, es más positivista, y si trata de introducir innovaciones en la organización social y política, es porque considera estas como medios más ó menos adecuados para la mejor realización de sus fines económicos.

Mas no se crea por esto que los socialistas modernos sean originales, no ya en la idea, pero ni aun en muchos de los medios. Sabido es que Platón, buscando un gobierno perfecto, proclamó la comunidad de bienes y su distribución por el Estado.

Moro, el canciller de Inglaterra, se declara igualmente contra la propiedad; quiere que los bienes sean comunes, que la tierra y sus frutos sean del dominio social, y que todo el que necesite alimentos, útiles ó vestidos recurra al magistrado encargado de la distribución general. En compensación los magistrados dispondrán de los brazos y de la inteligencia de cada miembro

de la sociedad, señalándole su oficio y regulando el empleo de su tiempo. La sociedad vendrá á ser así una máquina montada y regulada metódicamente. *Morelly* va más lejos y establece que los trabajos agrícolas se ejecuten por una especie de conscripción, que todo ciudadano esté consagrado á ellos desde la edad de veinte á la de veinticinco años, que todo individuo convicto de haber querido introducir "la detestable propiedad„ sea encerrado como un loco furioso y enemigo de la humanidad en un edificio construido en el lugar de las sepulturas públicas, que su nombre se borre para siempre de la lista de los ciudadanos y su familia se agregue á otra. *Babeuf*, siguiendo estas ideas, califica á los propietarios de conspiradores. En su opinión, el establecimiento de la comunidad no tiene el carácter de una reforma libremente consentida, y pretende hacerla penetrar á viva fuerza en la sociedad. La ciencia del poder consiste, según él, en suprimir todo obstáculo, y el mejor gobierno es el que se arregla de manera que no tiene impugnadores. Los grandes centros de población le embarazan y de un plumazo los suprime, y poco menos hace con las villas y lugares. El lujo es también perjudicial según él, y deben desaparecer los palacios y habitaciones lujosas, consintiéndose á lo sumo la magnificencia en los monumentos públicos. Las casas deben ser construidas por un modelo uniforme, de modo que no exciten la envidia. En cuanto á los vestidos, la igualdad y la simplicidad deben regular su forma y materia; la ley lo concede todo á la salubridad, nada á la vanidad. Los mismos cuidados en cuanto á la educación de los ciudadanos; el Estado se hace cargo de ellos desde la cuna hasta la tumba, hace de ellos cultivadores y obreros y los educa más para servicios útiles que de placer. "Todo lo que no es comunicable á todos, dice Babeuf, debe ser proscrito.„ Y en virtud de este *axioma* considera las artes y las ciencias con una desconfianza muy próxima á la hostilidad (1).

Estas aberraciones han tenido panegiristas aun fuera de la escuela, excitando algunas de ellas las simpatías de hombres notables por la rectitud de su juicio y sentimientos, que se han dejado llevar de su filantropía. La historia, además, registra algunas instituciones en las que fácilmente se nota un carácter socialista. No fueron otra cosa las ordenes monásticas, si bien es cierto que éstas, no basadas sobre el egoismo, ni el deseo de

(1) Louis Reybaud. *Dicc. de l'Econ. polit.*, t. II, pag. 630.

goces materiales, sino más bien sobre la abnegación de sí mismo, la mortificación y la obediencia, pudieron existir realmente sin producir perturbaciones ni trastornos en la sociedad.

Mas no siempre fué el socialismo resultado de móviles tan dignos. La tendencia general hacia los bienes materiales, alimentada y propagada por el sensualismo, indujo á algunos espíritus á la idea de trasformar la sociedad humana asentándola sobre nuevas bases y convirtiéndola en una *asociación* de goces iguales para todos. Este proyecto fué concebido casi al mismo tiempo en Inglaterra y Francia por Roberto Owen y Carlos Fourrier, aunque intentado por cada uno de distinto modo.

La doctrina socialista de *Owen* parte de que "el hombre no es más que un producto de las circunstancias exteriores.„ Esta proposición abraza todas las demás: de ella resulta claramente que, haciendo iguales las circunstancias, se haría á los hombres iguales en inteligencia, en deseos y en goces. Descartando así la *libertad* y la *responsabilidad* humana, Owen trata de fundar una sociedad en la cual no haya elogio, ni reprensión, ni recompensa, ni castigo; sociedad en la que, recibiendo todos una misma instrucción, sean iguales bajo el punto de vista del carácter y de los intereses, y vivan por la comunidad de bienes, como una sola familia, sin distinción de las familias particulares; lo cual es lógico, porque negada la existencia de un principio espiritual *propio* en el hombre, no hay razón alguna para admitir la existencia de una propiedad y de una familia propias para los individuos. Pero esta doctrina era harto superficial para ejercer gran ascendiente en los ánimos y para llegar á ser un resorte poderoso de organización práctica. Cierto es que Owen pudo, merced á su influencia personal, dirigir durante bastante tiempo una sociedad industrial (New-Lanark) organizada bajo la base de algunos de estos principios; pero todas las sociedades que otros han intentado constituir sobre estas bases en América é Inglaterra se han visto obligadas á disolverse al cabo de pocos años.

La teoría de Owen tuvo, pues, una vida tan efímera como había de tenerla en justicia, suprimiendo como suprimía la existencia futura, contentándose con proveer á la terrestre, única, decía, accesible á nuestros medios de conocer, y aboliendo la responsabilidad, el mérito y el demérito, por atribuir tanto el carácter como los actos del hombre á las circunstancias que le rodean.

Carlos Fourrier, afirmaba que, si las pasiones son la causa

de tantos males, es porque han sido más bien comprimidas que arregladas.

Las primeras bases del sistema se hallan en su *Teoría de los cuatro movimientos*. Estos eran: el movimiento *social* que explica las leyes conforme á las cuales existe y marcha la sociedad; el movimiento *animal*, por el que se explican las leyes conforme á las cuales la Providencia distribuye las pasiones y los instintos entre todos los seres creados; el *orgánico*, que explica las leyes según las que se han distribuido las propiedades, las formas, colores y sabores de las sustancias; y el *material*, las leyes del movimiento de gravitación.

Para resolver su problema que consiste "en encontrar una forma social en la cual todas las atracciones y pasiones humanas se encuentren satisfechas,„ propone la abolición de las casas particulares y el establecimiento de *falansterios*, edificios vastos con destino á la habitación de los asociados y arreglados de manera que aseguren á los habitantes los mayores goces posibles. Cada familia podría alojarse y vivir según su fortuna y seguir su inclinación á la agricultura, industria ó comercio. La propiedad sería colectiva, representando el valor del territorio en acciones cuyos portadores tendrían derecho á los beneficios en la medida de su capital. Los productos de la *falange* deberían repartirse entre los tres agentes de la producción, trabajo, talento y capital.

La doctrina de Fourrier tiene una base sensualista que se advierte en su tendencia constante hácia los goces sensibles, y en el principio de que el bien y el mal de los hombres dependen únicamente del *mecanismo exterior* de la sociedad. Esta doctrina, se distingue del sensualismo ordinario en que admite ciertas facultades innatas bajo el nombre de *pasiones;* pero mira equivocadamente estas pasiones como buenas en su totalidad en sí mismas, sin que estén sometidas á ningún poder moral y moderador; creyendo que sólo es necesario un mecanismo exterior para convertirse, mediante su concurso, en útiles resortes de la acción social. Este mecanismo, esta forma social, cree Fourrier haberla encontrado en el falansterio. La teoría falansteriana es enteramente formalista, porque no concede importancia sino á las *combinaciones* de las pasiones sin estudiar su *fondo*, ni lo que tienen de vicioso, y sin reconocer los principios universales del bien y de la justicia, esto es, la moralidad, que son los móviles más poderosos de la vida humana. Esta teoría, sin embargo, no puede llamarse completamente

comunista, porque no intenta abolir la *propiedad individual*, sino sólo organizarla en interés de la producción común, distribuyendo los productos entre las tres fuerzas que cooperan á ellos, el talento, el capital y el trabajo (1).

La doctrina de *Saint-Simon* y sus secuaces ha sido resumida por Reybaud, en la forma siguiente:

"Proponíanse someter el mundo á una especie de *teocracia*. La división del poder entre lo temporal y lo espiritual les parecía ser el origen de la mayor parte de nuestros males, porque la humanidad, dividida entre estos dos principios, el religioso y el civil, se aniquilaba en un combate, en que cada una de las fuerzas equilibraba á la otra. Este conflicto debía desaparecer: era necesario confundir en las mismas manos lo espiritual y lo temporal y no dar la dirección de las almas á los unos y la de los cuerpos á los otros..... Esta lucha impía debia terminar por una fusión de influencia y de autoridad. En vez de un papa y de un emperador era necesario proclamar un *padre* que reuniese los dos títulos y los dos poderes y, distribuyendo la sociedad en tres clases, la de los sabios, la de los artistas y la de los industriales, encomendar su dirección á los más grandes sabios, artistas é industriales. Estos detentadores de la autoridad no tendrían necesidad de investidura, porque debian sentir en sí mismos su poder y asignarse su verdadero lugar: la familia humana los reconocería por sus obras. Por otra parte, el lazo nuevo de las sociedades, bajo un régimen semejante, debería ser la afección, no el miedo, y los más afectuosos se sobrepondrían naturalmente á los demás, dando el ejemplo á los individuos de la jerarquía inferior. Formada así la cadena de los principios, todo marcharía de la manera más natural; cada una ocuparía su puesto según su capacidad, y la capacidad se ordenaría en razón de las obras. Desde entonces la humanidad no formaría más que una sola familia, y la tierra un solo campo cultivado en común y á porfía; pero cuyos frutos serían repartidos entre los diversos cooperadores conforme á una ley de justicia distributiva en que todo que daba á discreción de los más capaces.„

El *sansimonismo*, partiendo, según Ahrens, de una explicación bastante superficial del cristianismo, se apropió despues algunas ideas de la organización económica de Fourrier. Sus pretensiones no se limitaban á organizar la producción y el

(1) Ahrens, *Dcho. nat.* 2ª edic. española, pag. 88.

consumo; quería principalmente fundar una religión nueva, y bases nuevas también para la moral, la ciencia y el arte. En este punto fué superior el sansimonismo á todas las doctrinas anteriores, porque reconoce la íntima relación y subordinación de las bases económicas de la sociedad á las condiciones religiosas y morales de los miembros que la constituyen. Sin embargo, bien analizada esta doctrina, descubre siempre el panteismo en sus más groseras consecuencias, trastornando por completo los fundamentos de la moral.

Otra pretensión tuvo esta escuela; la de armonizar el paganismo, que históricamente representa el principio material del hombre, con el cristianismo, que representa el elemento espiritual. Pero en la manera de armonizar estas tendencias la doctrina de Saint-Simon sale perdiendo la parte más noble, el espíritu, pues lejos de idealizar la materia, como lo intentaba el panteismo, se materializan todas las relaciones morales, descendiendo aquel hasta el nivel de ésta y, lo que es peor, ocultando bajo la capa de religión el más repugnante sensualismo.

En las teorías socialistas modernas de Louis Blanc y Proudhon sólo se contienen algunas miras parciales, que tal vez por su misma limitación son, sin embargo, las que cuentan más prosélitos entre la muchedumbre.

III—COMPARACIÓN DE AMBOS SISTEMAS

Aunque opuestos, nótase algo de común entre el individualismo y el socialismo moderno, porque las tendencias de ambos sistemas son mejorar la suerte humana.

Esto no obstante, sus diferencias son esencialísimas, pues mientras el primero cree llegar á su ideal por la consagración de la autonomía, por la independencia más completa del individuo y el ejercicio de la libertad sin restricciones, esperándolo todo de la iniciativa y acción privadas, el socialismo por el contrario juzga que la sociedad y el poder público, que la representa, tienen la misión no sólo de facilitar los medios para la realización del bien social y particular, sino de labrarle directamente, ya por la organización del trabajo y de la propiedad, como he-

mos visto, ya por la prestación directa de auxilios á los menesterosos, etc.

Ambos sistemas son funestos en su aplicación exclusiva, no solo por la exageración del principio de que respectivamente parten, sino también porque conducen á la anulación del principio opuesto.

Añádese á esto que de ambos puede surgir la tiranía.

Del individualismo, porque, debilitando el freno que contiene al hombre y le impide que se extralimite al buscar la satisfacción de sus apetitos y deseos, le concede una libertad excesiva en menoscabo, tal vez, de los derechos ajenos, y trocando de este modo en tiranía para unos lo que para los otros pudiera ser libertad.

Surge también del socialismo, porque invocando los gobernantes el bien ó la conveniencia pública pueden fácilmente hallar pretexto para imponerse, obligando á los súbditos á aceptar y obedecer disposiciones que la ignorancia, la malicia y el egoismo dictan en nombre del interés social.

El principio individualista aparece menos elevado, porque antepone al público el interés particular y da pábulo al egoismo, causando al Estado un verdadero mal desde el momento que presenta bajo un punto de vista menos digno los fundamentos de la sociedad y del gobierno. Como compensación hay otro aspecto por el cual no carece el individualismo de cierta nobleza, porque engrandece la personalidad considerando al hombre, no como una molécula de la sociedad, sino como un verdadero elemento esencial de ella, á la que trasciende y en la que hace sentir el modo de ser del individuo de una manera decisiva, elevándose ó descendiendo el nivel de la cultura y dignidad social á medida que se elevan ó deprimen la cultura y dignidad de aquel.

El principio socialista, según el cual las voluntades y hasta los derechos individuales deben ceder ante el interés general, es sin duda más digno y mucho más seductor; pero en él hallan también un pretexto constante la arbitrariedad y el despotismo. Quien manda en nombre del provecho general se cree autorizado para todo, y no vacila ante la conculcación del derecho ó ante el perjuicio de los individuos, si él obtiene lo que llama ó pretende hacer pasar por pública conveniencia.

Síguese de lo expuesto que cualquiera de estos sistemas tiene sus ventajas al par que inconvenientes graves, y que el medio más adecuado para evitar éstos y conseguir aquellas es sin duda el de aceptarlos combinados, procurando evitar siem-

pre su predominio exclusivo. La razón principal de esto, además de las indicadas y que pueden llamarse á posteriori, porque se toman de los efectos, la hallamos nosotros en el estudio de la naturaleza del Estado.

Si el Estado es una sociedad, como ésta supone dos elementos, la agregación y el orden, anulando uno de los dos, desaparece la sociedad y con ella el Estado.

Pues el socialismo implica realmente la anulación del individuo, porque se sirve de él como simple medio y desconoce lo que le es esencial, su personalidad; y el individualismo, por el contrario, lleva á la anulación del orden, á la desorganización social, pretendiendo que prevalezca en todo y sobre todo la libertad del individuo. Todo ser compuesto subsiste á condición de que subsistan sus elementos; si uno de éstos desaparece ó es absorbido por otro, el compuesto cambia de naturaleza, deja de ser lo que era para convertirse en otro ser. Por lo mismo, si la tendencia individualista prevalece con exclusión, se anula la forma del Estado, esto es, el orden; si prevalece el socialismo se anula al individuo, esto es, la materia, y en uno y en otro caso se desnaturaliza por completo la sociedad política.

SEGUNDA PARTE

HISTORIA DEL DERECHO POLÍTICO ESPAÑOL

HISTORIA DEL DERECHO POLÍTICO ESPAÑOL

SECCIÓN PRIMERA

FORMACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL

CAPÍTULO PRIMERO

PRIMEROS POBLADORES.—DOMINACIÓN ROMANA

No pasando de meras conjeturas y aventuradas opiniones lo que se dice respecto á la primitiva población de España y conservándose apenas rastros por medio de los que pudiera construirse la historia de aquella lejana época, no es posible ciertamente determinar cual fuese la influencia de aquella población en la constitución de la nacionalidad y del Estado español. Haremos, pues, caso omiso de aquellos nebulosos tiempos, no sólo porque las leyes y las influencias históricas han de buscarse en hechos claros, trascendentales y comprobados, cuando sobre ellos se quiere basar las instituciones de los pueblos, sino tambien porque el trabajo de escudriñar, descubrir y demostrar los arca-

nos de la antigüedad corresponde á la crítica histórica, para la que nos sentimos sin fuerza, y que ahora no es tampoco objeto nuestro.

Dejando, pues, á un lado las versiones que, fundadas en esa común tendencia de los pueblos y de los individuos á buscarse un remoto origen, como si valiese más un pueblo viejo y una raza caduca que una sociedad naciente y vigorosa, atribuyen la población de España á Tubal y Tarsis, nietos de Noé, ó á Hércules y otros héroes de la fábula griega, es opinión corriente que los primeros pobladores de España fueron los iberos, descendientes de Jafet y pertenecientes á la raza aryo-celta ó indo-europea, aunque tampoco faltan historiadores que atribuyen esta población á algunas tribus pelásgicas descendientes de Javan. Conforme á la primera de estas dos opiniones, que es la más admitida, de los iberos quedó á España el nombre de Iberia y á su rio principal el de Ebro. A los iberos siguieron los celtas, también de origen asiático y descendientes de Jafet, quienes, establecidos en un principio en las Galias é Islas Británicas, bajaron despues á España (algunos piensan lo contrario) ocupando su parte septentrional mientras los iberos descendian á las fértiles regiones del mediodía. De la fusión que, andando el tiempo, se realizó entre los dos pueblos surgieron los celtíberos, que ocuparon el centro, considerados por algunos historiadores como la raza indígena de España y de cuya lengua primitiva no difiere mucho, según afirman, el euskaro ó actual vaseuence.

Es de presumir que la vida de estos pueblos fuese patriarcal y aislada dentro de cada ciudad, sin vínculos de nacionalidad, y bien puede afirmarse que su organización y modo de ser hubo de influir muy poco en las posteriores y que de ningún modo llegaron á constituir Estado, porque esta manifestación de la vida social es sólo propia de pueblos adelantados en cultura.

A la población por los aborígenes siguió la colonización, llevada naturalmente á cabo por pueblos más cultos.

Fueron las primeras colonias las fundadas por los fenicios, que hácia fines del siglo xv antes de Jesucristo, se establecieron en el litoral del Mediterráneo desde Cádiz hasta Murcia y, acogidos benévolamente por los naturales, es presumible que enseñaran á éstos el alfabeto, los rudimentos de la industria minera, elaboración de metales y las artes más precisas. Pero la avaricia y el espíritu de dominación desarrollados en los fenicios á medida que se apoderaban de las riquezas del país, llegaron á hacerse insoportables para los indígenas y produjeron una lu-

cha, cuyo término fué la pérdida por los fenicios de todas sus colonias, excepto Cádiz, la más fuerte, donde se encerraron y permanecieron hasta ser expulsados más tarde por los cartagineses, á quienes llamaron en su auxilio.

Los fenicios dieron á la península el nombre de España y sus principales colonias, además de Cádiz, fueron Málaga, Sevilla y Córdoba.

Establecidos aún en España los fenicios, vinieron hacia el siglo VIII antes de Jesu-Cristo los griegos, que, procedentes del Archipiélago y émulos de aquellos en las empresas marítimas por el Mediterráneo, fundaron colonias en las costas orientales, entre otras la celebérrima Sagunto, Rosas, Ampurias y Denia, y congeniando con los naturales llegaron á fundirse en un solo pueblo y, comunicándoles su cultura, echaron los gérmenes de la civilización española.

Llamados, según unos, por los fenicios y por los naturales, según otros, llegan los cartagineses á la península, se ponen de parte de los indígenas, lanzan á los fenicios de Cádiz y se dedican á cultivar la amistad de los españoles, explotando el comercio con ellos y comunicándoles también su civilización. Pero esta situación dura muy poco.

Deseosos los Cartagineses de indemnizarse de la pérdida de la Sicilia, que en Italia les produjo la primera guerra púnica, quieren trocar en señorío y dominación este amistoso trato y su jefe Amilcar Barca somete la Bética, atraviesa con sus armas victoriosas las comarcas de los bastetanos y contestanos (Murcia y Valencia), pasa el Ebro y funda á Barcelona, llamada así de su familia Barca.

Una sublevación de los celtíberos atajó los proyectos de Amilcar, que, vencido por Orisón, régulo ó jefe de aquellos, pereció acaso en el combate ó al atravesar en su fuga el rio Guadiana, según opinan los más de los historiadores.

Asdrúbal, su yerno, le sucede y vence á Orisón, á quien, se dice, mandó crucificar; pero, vengada la muerte de Amilcar y creyendo más político atraerse con dulzura á los naturales, casa con una española, contrae alianzas con algunas tribus y ajusta un tratado con Roma, obligándose á respetar las colonias griegas, que se habían puesto bajo la protección de esta república.

La muerte de Asdrúbal por un esclavo, á cuyo dueño había mandado aquel matar, influye poderosamente en el destino ulterior de la península.

Designado Anibal para sucederle en el mando del ejército, despues de realizar algunas rápidas conquistas en el interior, deja estallar el odio que le había hecho jurar su padre Amilcar contra los romanos y, para provocarlos, pone sitio á su aliada Sagunto, que, despues de heróica resistencia, entregada á sí misma y sin que los romanos le prestaran otro auxilio que vanas y despreciadas gestiones diplomáticas, sucumbe por fin al hambre, pero dejando sólo en poder del vencedor un montón de ruinas y cadáveres envueltos aún por las llamas á que se entregaron sus heroicos defensores, por no verse sujetos al yugo enemigo. (219 a. de J. C.)

Roma vuelve al fin de su apatía y, mientras Anibal invade la Italia, manda á España varios generales, que luchan con los cartagineses con desigual fortuna, hasta que Publio Cornelio Scipión, joven como Anibal, encargado del mando de las legiones, inaugura su campaña tomando á Cartagena, que había sido fundada por Asdrúbal, y se capta las simpatías de los españoles con su conducta noble y generosa.

Desde este momento el porvenir de España está prefijado. Llevados los españoles de su hidalguía, auxilian á Scipión contra los cartagineses y principian á labrar inconscientemente las cadenas que habian de sujetarlos á Roma.

Expulsados los cartagineses de Cádiz, su último baluarte, y mientras Scipión llevaba la guerra al Africa y derrotaba á Anibal en la batalla de Zama, algunas tribus españolas mandadas por Indivil y Mandonio se alzaban contra los romanos; pero derrotadas por éstos y muertos sus jefes, inicia Roma descaradamente su dominación en la península contra la que en vano protestan los españoles con sublevaciones parciales motivadas por las exacciones, rapiñas y tiranía de los gobernadores, entre los que se distinguieron: por su crueldad Caton el Antiguo (en cuyo tiempo fué dividida la península en Citerior y Ulterior y encomendada á dos pretores), y por su avaricia y carácter sanguinario Lúculo y Galba.

La conducta alevosa de estos últimos provoca el levantamiento de Viriato, quien logra sobre las armas romanas preclaras victorias haciéndolas pasar por vergonzosas humillaciones, de que sólo pudo librarse Roma por la perfidia del senado y del cónsul Cipión, quien sobornando á los enviados por Viriato para tratar, consigue que éstos asesinen á su jefe mientras dormía, y concluye la guerra por tan vil medio. (140 a. de J. C.)

Apenas terminada la guerra de Viriato, surge la de Numan-

cia, provocada por Roma, y en la que llega á vacilar el poderío romano ante el heroismo de los españoles, viendo aquella humilladas sus águilas y derrotados uno tras otro sus generales hasta que sitiada por hambre la inmortal Numancia, logra el consul Scipion Emiliano penetrar en ella, despues que sus habitantes la habían reducido á un montón de cenizas, prefiriendo morir abrasados entre las llamas, por ellos mismos encendidas, á la ignominia de humillar su cuello al vencedor.

Sujeta España despues de la destrucción de Numancia, sólo algunas sublevaciones parciales se suscitan, principalmente por los lusitanos, hasta que la venida de Sertorio, fugitivo de Roma, reanima el espíritu guerrero de los españoles, que vuelven á triunfar de los romanos; pero una nueva alevosía cometida por Perpenna, que envidioso asesina á Sertorio en un banquete para sucederle en el mando, facilita el triunfo de Pompeyo, quien derrota al traidor y le condena á muerte.

Quedó, al cabo, subyugada España despues que Augusto venció á los cántabros y astures, que aún resistían, sometiéndolos, ó dándolos por sometidos; dividiendo entonces la península en Tarraconense, Lusitania y Bética, y fundando varias ciudades, entre ellas Zaragoza, Leon, Badajoz y Mérida.

Desde aquella fecha hasta la invasión visigótica siguió España la suerte de las demás provincias del imperio.

Sus habitantes obtienen los privilegios de los pueblos del Lacio, que les concede Vespasiano.

Es dividida en Bética, Lusitania, Tarraconense y Galicia por Adriano, quien, siguiendo las huellas que le trazara Trajano, levanta monumentos y hace en ella obras de pública utilidad.

Son rechazadas por los legales imperiales las primeras tribus africanas que asoman por Andalucía en tiempo de Marco Aurelio; y algunas hordas de francos penetran en España por el Oriente de los Pirineos en el reinado de Galieno.

Por fin, en tiempo de Constantino es dividida la diócesis de España, que formaba parte de la prefectura de las Galias ó de Occidente, en seis provincias: Galáica, Lusitana, Tarraconense, Cartaginense, Bética y Tingitana.

CAPÍTULO II

MONARQUÍA VISIGODA

Muerto Teodosio *el Grande*, que había tenido á raya á los bárbaros en las fronteras del imperio, y muerto también Stilicón ministro del débil Honorio, invaden los suevos la península y se establecen en Galicia; los vándalos se extienden por las comarcas de Andalucía, y los alanos ocupan el centro, hasta que, confundidos más adelante con los vándalos, pasan al Africa.

Poco tiempo despues, á principios del siglo V de nuestra era, los visigodos ó godos occidentales mandados por Ataulfo, cuñado del emperador Honorio, vienen á España en virtud del convenio celebrado con éste; guerrean, auxiliados por los hispanoromanos, con las otras razas que se habían apoderado del territorio; conquistan gran parte de las provincias del Norte y Oriente de la península, y *echan los cimientos del reino godo*, fijando Ataulfo su corte en Barcelona, donde murió (417) víctima de una conspiración hija del disgusto producido en los belicosos godos por el amistoso trato de su jefe con los romanos.

En el reinado de Walia son vencidos los vándalos y arrojados de la Lusitania los alanos, por cuyos servicios, agradecido Honororio, quien creía ó simulaba creer que estas guerras y conquistas se hacían en nombre del imperio, *cedió* la parte meridional de la Galia, llamada *Aquitania*, al rey godo, quien estableció en Tolosa su corte.

Teodoredo, pariente y sucesor de Walia, mirando con más interés que el español el territorio de la Galia, no procuró evitar que los vándalos asolaran aquel, recobrasen parte del anterior-

mente perdido y estrecharan más y más la naciente monarquía visigoda hasta reducirla á los límites de Cataluña. En cambio *extendió sus conquistas hasta el Ródano* y, aunque murió peleando contra los hunnos en la batalla de Chalons ó de los Campos Catalánicos, el triunfo obtenido sobre Atila por los romanos, francos y godos aliados, salva á los respectivos imperios.

Durante este reinado dejaron también los vándalos definitivamente la península y pasaron al Africa, cuyas puertas las abrió la traición del conde Bonifacio resentido de la corte imperial, en cuyo nombre gobernaba el territorio.

Teodorico, hijo del anterior y sucesor de su hermano Turismundo, víctima del fratricidio, logró despues de varias victorias contra los suevos y de haber muerto á su rey Rechiario *encerrarlos en los límites de Galicia;* y su hermano y sucesor Eurico, que subió también al trono por medio del fratricidio, expulsa por completo á los romanos de la península, extiende su dominación *por el territorio de los suevos y más allá del Ródano y del Loire* en las Galias, y *da* á los godos *el primer código* de leyes escritas, sancionando en él las antiguas costumbres, reduciéndolas á escritura, fijando el derecho y dando un gran paso mediante el cual la nación goda habría de constituirse en verdadero Estado.

Su hijo y sucesor Alarico fija también la consideración y y relaciones jurídicas de los españoles *promulgando el código de su nombre* ó *Breviario de Aniano;* pero en la guerra que su intransigencia arriana provocó contra Clodoveo, rey de los francos, es derrotado y muerto en la batalla de Vougle ó de Poitiers, *perdiendo* los visigodos la *Aquitania*, con la que aumentó sus Estados el rey franco.

Atanagildo, auxiliado por los bizantinos, vence á su rival Agila en la lucha por el trono; pero paga caro el auxilio que le prestaron aquellos *cediéndoles toda la parte de las costas mediterraneas comprendidas entre Gibraltar y Valencia,* desmembrando así el Estado visigótico, cuya corte había fijado en Toledo, aunque, arrepentido más tarde y tomando ocasión de las exageradas pretensiones de sus antiguos aliados sobre el territorio español, inicia contra ellos la lucha que habia de continuar felizmente Leovigildo, *recobrando algunas ciudades del poder de los griegos.* Tambien consigue Leovigildo, aprovechando las divisiones intestinas de los suevos, someterlos á su dominación.

Abjurando Recaredo el arrianismo en el concilio III de Toledo (589 d. de J. C.) *da el primer paso para la fusión* de los

godos con los hispanos-romanos, que eran católicos; y, rechazando una invasión de los francos en la Septimania y algunas incursiones de los bizantinos, afirma el Estado visigótico, á cuya organización tambien se aplica promulgando acertadas leyes.

Sisebuto logra reducir á sólo algunas plazas de los Algarbes las posesiones de los bizantinos, expulsados despues completamente por Suintila, quien sometió tambien á los inquietos vascos.

Favorece Recesvinto *la fusión de godos y españoles* aboliendo la ley que prohibía el matrimonio entre ellos, y convoca algunos concilios, el VIII toledano principalmente, de gran importancia para los fines del Estado y su organización.

En tiempo de Egica se promulga la compilación de leyes llamada *Fuero Juzgo,* iniciado por Chindasvinto, que funde en uno los dos pueblos al abolir toda distinción entre godos y romanos.

La venganza de los hijos de Witiza, auxiliados por su tio el obispo D. Opas y por el conde D. Julián, gobernador de Ceuta, provoca la invasión de los sarracenos, que concluyen casi de un solo golpe en la batalla de Guadalete con D. Rodrigo y con la dominación visigoda, que se había consolidado despues de tres siglos de constante lucha (414 á 711), logrando despues los invasores llevar á cabo la sumisión completa de la península en solos unos dos años.

Las armas victoriosas de Tarik y de Muza no hubieran conseguido, sin embargo, tan rápido triunfo, á pesar de la traición del Guadalete, si la fusión entre godos y españoles se hubiera realizado por completo; si el sistema electivo no hubiera debilitado el poder público; si los judíos, tan perseguidos, no hubieran sido un enemigo oculto, y si el vicio no hubiera mermado tanto el vigor y el patriotismo.

CAPÍTULO III

RECONQUISTA

I—REINO DE ASTURIAS Y LEÓN

Proclamado rey Pelayo por los refugiados en Asturias, después de haber derrotado completamente en Covadonga á los árabes mandados por Alkama, teniente del emir Alahor (718), y reanimado el valor de los españoles con tal suceso y con las victoriosas correrías de Alfonso I, *el Católico*, por Galicia y Portugal, extienden sus conquistas por las llanuras de Castilla y *se apoderan de sus principales ciudades*, aunque no pueden conservarlas todas.

Son derrotados los árabes en Lugo por Alfonso II, *el Casto*, quien llega hasta Lisboa, fija su corte en Oviedo, funda su catedral, restablece muchas leyes y costumbres visigodas, y en su tiempo ocurre la *invención del sepulcro* del apóstol Santiago, hecho que influyó notablemente en la reconquista, inspirando entusiasmo á los españoles la advocación en las batallas de su Santo Patrón.

Rechaza Ramiro I en Galicia una invasión de los piratas normandos, á quienes obliga á reembarcarse, echándoles á pique muchas naves, y contribuye también á la reconquista venciendo á los musulmanes en varios encuentros.

Gana Ordoño I la batalla de Clavijo ó de Albelda al célebre moro Muza, quien, aunque de linaje godo, había renegado al ini-

ciarse la invasión sarracena y, sirviendo y sublevándose alternativamente contra los califas, llegó á fundar en Aragon un poderoso Estado. Dirige despues Ordoño sus expediciones hacia el sur del Duero, desmantelando algunas ciudades que no podia conservar, como Coria y Salamanca, y reedifica Tuy, León y Astorga.

Alfonso III, *el Magno,* vence á los árabes en las márgenes del Cea; obtiene más tarde una señalada victoria sobre los mismos, que habían invadido Galicia; invade á su vez el territorio enemigo; les arrebata Zamora; penetra en la Lusitania, llevándolo todo á sangre y fuego; rechaza nuevas incursiones; levanta castillos para asegurar sus conquistas, y aun después de haber sido destronado por sus hijos, gana á los árabes de Toledo una batalla, retirándose por último á Zamora, donde murió (910).

El territorio de Castilla, *ensanchado considerablemente* con las conquistas de este monarca, fué gobernado desde entonces por condes ó jefes militares, con facultades tan omnímodas, que los impelían á desear emanciparse de los reyes de Asturias; y no tuvo pequeña parte uno de estos condes, Nuño Fernandez, cuya hija estaba casada con García, primogénito de Alfonso III, en la sublevación de aquel contra su padre.

La conspiración de los hijos de Alfonso, que concluyó con la renuncia de éste, produjo *la división del reino* entre los desnaturalizados hijos, tomando García para sí el territorio y la ciudad de Leon, tocando á Ordoño Galicia y la parte septentrional de Lusitania, y quedando Asturias para Fruela.

La muerte prematura de García, á quien sucede su hermano Ordoño II, produce la unión de Galicia y de Leon, y la muerte de Ordoño, con la elevación de Fruela en perjuicio de sus sobrinos los hijos de aquel, la de Asturias, *volviendo* todos estos Estados *á formar un solo reino*, el de Leon (924).

De estos monarcas, García llegó en una de sus expediciones hasta Talavera, y Ordoño II venció á los moros en la famosa batalla de San Esteban de Gormaz; pero fué á su vez vencido en compañía de García Sanchez de Navarra, á quien había ido á auxiliar, en la desgraciada batalla de Valdejunquera, y para vengarse de este desastre castigó rigorosamente á los condes de Castilla, Nuño Fernandez, Abolmondar, *el Blanco,* y Fernando Ansurez, por no haber acudido á la batalla, lo que fué causa de *la separación de Castilla* bajo el gobierno de dos jueces, Laín Calvo y Nuño Rasura.

Recibe la reconquista un grande impulso en tiempo de Ra-

miro II, que invadiendo el centro de España *conquista Madrid* y, auxiliado por el conde Fernan Gonzalez, penetra hasta Osma y más tarde, en unión con el mismo conde de Castilla derrota en la batalla de Simancas al califa Abderraman III que mandaba en persona los formidables ejércitos musulmanes.

Las triunfadoras armas del emir Almanzor obligan á Bermudo II, *el Gotoso*, á abandonar la capital de su reino y á refugiarse en Asturias, donde murió con el sentimiento de ver destruido León y *reducida la reconquista* á sus primeros límites (999).

En el reinado de Alfonso V, *el Noble*, y cuando por sus pocos años estaba aún sometido á la tutela del conde de Galicia, Melendo Gonzalez, tiene lugar la celebérrima batalla de *Calatañazor* en la que, unidos leoneses, castellanos y navarros, derrotan completamente al caudillo musulman Almanzor, quien muere en Medinaceli á consecuencia de las heridas recibidas en el combate y tal vez de melancolía por su derrota, de la que, sin embargo, no supieron los cristianos sacar todo el provecho debido. Alfonso V *reedificó á León* y, para facilitar su repoblación, celebró en ella el famoso concilio de su nombre, en el que se redactaron los *fueros* que concedian á sus habitantes multitud de inmunidades y privilegios (1020).

En tiempo de Bermudo III, y para que cesaran las rivalidades entre Navarra y León, tiene lugar el matrimonio de doña Sancha, hermana de aquel, con Fernando, hijo segundo del rey de Navarra, Sancho Garcés *el Mayor*, bajo la condición de que los nuevos esposos se llamarian reyes de Castilla y, aunque este matrimonio no produjese los efectos deseados al celebrarle, fué *origen de la unión de Castilla*, cedida á Fernando por su padre, *y de León*, cuando por muerte de Bermudo en la guerra, por él provocada contra su cuñado, entró éste á sucederle en virtud de los derechos de su esposa doña Sancha.

II—CASTILLA Y LEÓN

Deseando Fernando I, *el Magno*, atraerse el afecto de los leoneses, que le miraban con recelo desde la muerte de Bermudo, reune el concilio de Coyanza, hoy Valencia de don Juan, y ratifi-

ca á la ciudad de León los buenos fueros que le había dado Alfonso V (1050). Utiliza entonces las grandes fuerzas de que podía disponer por la unión de los dos reinos para continuar la reconquista y al efecto hace una invasión en la Lusitania, en donde *se apodera de importantes plazas*, devasta los territorios de Salamanca, Guadalajara y Madrid, hace tributario al rey moro de Toledo y llega hasta amenazar á Valencia, cuyo sitio se vé precisado á levantar por sentirse acometido de una grave dolencia que había de conducirle al sepulcro (1065).

Al morir, *divide el reino* entre sus hijos, dejando á Alfonso Leon y Asturias, á Sancho Castilla, á García Galicia, á doña Elvira Toro, y Zamora á doña Urraca; división impolítica, semillero de discordias entre los hermanos y perjudicial para la empresa de los cristianos contra los árabes.

Proclamado Alfonso VI rey de León y Castilla despues de la muerte de su hermano Sancho bajo los muros de Zamora y de haber jurado en manos del Cid ante la nobleza castellana no haber tenido parte en la muerte de aquel, y reducido á prisión su otro hermano García, que con el auxilio del rey moro de Sevilla quiso reivindicar la Galicia, de que le despojára don Sancho, realiza el monarca cristiano, aliado con Almamum ó Alimenon de Toledo, una atrevida incursión por las tierras de Córdoba y Sevilla, á cuyos monarcas hace tributarios. Muerto despues su amigo Almamum y el hijo de éste, Hixen, se considera Alfonso desligado de todo compromiso con los moros y emprende la *conquista de Toledo*, que lleva á cabo (1085) auxiliado por algunos nobles extranjeros, entre los cuales figuran Raimundo y Enrique de Borgoña, á quienes recompensó Alfonso, dando al primero la mano de su hija Dª Urraca y al segundo, *con el Portugal en feudo*, la de Teresa, cuyo hijo fué más adelante el fundador de la monarquía portuguesa Los árabes que, según lo estipulado al rendirse Toledo, quedaron en la ciudad conservando sus haciendas, sus leyes y una mezquita para el ejercicio de su culto, se llamaron *mudéjares*, como antes se había llamado *muzárabes*, á los cristianos que se habian quedado entre los moros, en análogas condiciones.

Conquistada Toledo, mueve Alfonso guerra al rey de Sevilla; pero, intimidado éste, llama en su auxilio á los *almoravides* de Africa, quienes al mando de su rey Jusuf derrotan á los cristianos, primero en Zalaca, cerca de Badajoz, y más tarde en la desgraciada batalla de *Uclés* ó de los *Siete condes*, donde perecieron el infante D. Sancho, único hijo varon del rey, y todos los

capitanes de la hueste, que lo eran los principales condes del reino, á quienes Alfonso, por ser ya viejo y achacoso, había encomendado la dirección y el cuidado de su hijo que sólo tenia once años.

Esta doble desgracia precipitó la muerte del monarca, sucediéndole su hija Dª Urraca, en cuyo reinado las guerras y desavenencias con su segundo marido Alfonso I de Aragon impiden el adelanto de la reconquista por parte de Castilla.

Invade Alfonso VII, hijo y sucesor de Dª Urraca, las comarcas de Andalucía, asolando las de Sevilla y Jerez, y aprovechando luego las luchas de los *almoravides* con los *almohades*, que acababan de llegar de Africa llamados por los régulos andaluces, realiza con el auxilio de las flotas catalanas la *conquista de Almería*, guarida de moros piratas, aunque poco tiempo despues volvió á caer esta plaza en poder de los almohades.

Arraigada la errónea opinión de considerar los reyes sus Estados como cosa propia, *comete la imprudencia de dividir* los que tanto había costado reunir, entre sus dos hijos, dejando el de Castilla á Sancho III y á Fernando II el de León, aunque por fortuna duró poco esta división.

Declarado mayor de edad Alfonso VIII de Castilla, *el de las Navas*, hijo de Sancho III, *el Deseado*, se apodera tras larga resistencia de la plaza de *Cuenca;* pero derrotado despues completamente en la desgraciada batalla de *Alarcos* por los almohades de Africa, á quienes el mismo provocara, vese precisado á ajustar treguas con sus vencedores. Culpando entonces de su desgracia al monarca de León, su primo, por no haberle auxiliado, surge entre los dos reyes cristianos una contienda que *terminó por el matrimonio de Alfonso IX de León con Dª Berenguela*, hija de Alfonso VIII de Castilla. Rota despues la tregua con los almohades, coaligado el rey de Castilla con Sancho, *el Fuerte*, de Navarra y Pedro II, *el Católico*, de Aragón y auxiliado con algunas fuerzas venidas del extranjero, pues Inocencio III había concedido á esta empresa los privilegios de cruzada, gana á los agarenos, mandados en persona por su rey Mohamed-Aben-Jacub, *la famosísima batalla de las Navas* en que es derrotado por completo el ejército musulman, cuatro veces mayor que el de los cristianos, huyendo precipitadamente el rey Jacub y dejando el campamento cubierto de cadáveres y riquísimos despojos, inclusa su propia tienda. La Iglesia conmemora esta jornada con el Triunfo de la Santa Cruz, pues en ella venció á la Media

Luna totalmente, y á partir de aquel momento *puede considerarse asegurada ya la reconquista* (1212).

Fernando II de León *tomó* á los moros la plaza de *Alcántara* y su hijo Alfonso IX, en los últimos años de su reinado ensancha *con la conquista de Cáceres y Mérida* sus dominios, que pasan, al morir este monarca, á su hijo Fernando III, *el Santo*.

Este, que era ya rey de Castilla por abdicación de su madre Dª Berenguela y había ganado á los moros muchas ciudades, entre ellas Andujar, Martos y Baeza, hace después de la muerte de su padre un arreglo amistoso con sus hermanas Dª Sancha y Dª Dulce, á quienes aquel había dejado injustamente el reino de León, y *ceñidas así las dos coronas* (1230) que no habían de volver á separarse, dirige sus armas contra los moros *ganándoles Ubeda, Córdoba, la soberbia capital del Califato, Murcia con toda su comarca, Jaen,* que le entregó el rey de Granada declarándose además su tributario, y tras largo asedio y obstinada resistencia, *Sevilla* que se rindió á discreción, saliendo de ella con su rey Abul-Hasan más de trescientos mil moros. Caen también en poder de D. Fernando III en los últimos años de su glorioso reinado las plazas de *Sanlúcar, Jerez, Cádiz* y *Arcos*, y cuando se disponía á llevar la guerra al Africa proyectando una expedición contra Ceuta fué acometido de una grave enfermedad en Sevilla, donde murió, dejando un nombre de los más ilustres tanto por sus victorias cuanto por sus virtudes y las útiles reformas que llevó á cabo. Mandó traducir el *Fuero Juzgo,* proyectó un código general, creó un cuerpo consultivo de donde más adelante había de nacer el Consejo de Castilla, instituyó gobernadores y jueces reales, adelantados y merinos, incorporó la universidad de Palencia á la de Salamanca, fundada por su padre Alfonso IX, concediéndole grandes privilegios, fundó las tres más grandiosas catedrales de España, Burgos, Toledo y Sevilla, y regularizó la administración pública.

Comienza felizmente el reinado de Alfonso X, *el Sabio* (1252), con la reconquista de algunas plazas que habían vuelto á poder de los moros, y algunos años después se apodera del *condado de Niebla* y de otros pueblos en los Algarbes, que cede á su yerno Alfonso III de Portugal en calidad de feudo. Los moros de Andalucía instigados por el de Granada, Alhamar, feudatario de Alfonso, se sublevan contra éste, y auxiliados por los *benimerines* de Africa que habían sido llamados por el granadino, *ponen en grave riesgo* las conquistas de San Fernando, no pudiendo impedir D. Alfonso que el de Granada negase el tributo conven-

cido ni la *pérdida de muchas plazas* de las que le dejara su padre.

El derecho debe á este rey, además de la publicación del *Fuero Real* y del *Espéculo*, la del código inmortal, *Las siete Partidas*.

Sancho IV, el *Bravo*, segundo hijo y sucesor de Alfonso, se apodera de *Tarifa* que, sitiada despues por el infante D. Juan, coaligado con los de la Cerda sus sobrinos y auxiliado por los benimerines, es testigo del heroismo de su defensor D. Alfonso de Guzman, *el Bueno*.

Durante la menor edad de Fernando IV, *el Emplazado*, el infante D. Juan y D. Alfonso de la Cerda, unidos con gran parte de la nobleza y secundados por los reyes de Aragón y Portugal, *se reparten el reino*, tomando el primero León, Asturias y Galicia, y el segundo Castilla, Toledo y Andalucía. Dª María de Molina, madre de Fernando, pudo separar de la liga al rey de Portugal casando á su hijo con una infanta hija del portugués, y contentó al de Aragón señalando una pensión á sus protegidos, los infantes de la Cerda, mediante la renuncia de éstos á sus derechos á la corona. Declarado Fernando mayor de edad, conquista la plaza de *Gibraltar*, en cuyo cerco murió Guzman *el Bueno*, y puso sitio á Algeciras, aunque se retiró sin tomarla porque el rey de Granada, Mohamed, le pidió la paz, reconociéndose vasallo suyo.

Los benimerines de Africa derrotan en el reinado de Alfonso XI, *el Justiciero*, una flota castellano-aragonesa que guardaba el estrecho para contener la invasión, y se apoderaron de *Gibraltar;* pero rehechas las fuerzas cristianas y mientras se prepara una segunda armada, marcha Alfonso, auxiliado por los reyes de Portugal y Aragón en socorro de Tarifa, sitiada por los moros africanos y granadinos, y encontrándolos en número tres veces mayor á orillas del rio *Salado* los derrota por completo (1340), ganándoles una batalla tan importante, como lo fueron tiempo antes la de Calatañazor y de las Navas, pues, cogidos los moros entre los sitiados que salieron de la plaza y las tropas del rey, sufrieron la más espantosa carnicería y perdieron por completo la esperanza de volver á dominar la España. No contento con este triunfo y para sacar de él todo el provecho posible, pone Alfonso sitio á *Algeciras*, que cae en su poder tras larga y tenaz resistencia (1344) á pesar de haberse defendido los árabes con la pólvora y aun con la artillería. Sitiando después

á Gibraltar muere víctima de una epidemia. Hizo también este monarca el *Ordenamiento de Alcalá*.

En el reinado de Enrique II, *el Bastardo*, y durante una guerra de éste con D. Fernando de Portugal, vuelve á caer la plaza de *Algeciras* en poder de los moros.

El matrimonio de D. Juan I con Dª Beatriz, infanta de Portugal, á condición de que ésta heredase, si su padre moría sin sucesión masculina, pudo determinar la reincorporación de Portugal á Castilla; pero, no obstante haber muerto sin hijos el monarca lusitano, los portugueses proclamaron al Maestre de Avis, D. Juan, quien derrotó á los castellanos en Aljubarrota y acabó con sus pretensiones.

Son conquistadas *las Canarias* por el conde de Bethencourt, aventurero francés, *é incorporadas* á España en tiempo de Enrique III, *el Doliente*, quien le ayudó para su empresa con hombres y dinero.

En tiempo de D. Juan II, su tio y tutor D. Fernando, que con rara abnegación rechazó las sugestiones que se le hicieron para que se apoderase de la corona, dirige las armas castellanas contra los moros de Granada, tomando la ciudad de *Antequera*, de donde vino el nombre con que se conoce en la historia á este ilustre príncipe, llamado despues al trono de Aragon por el compromiso de Caspe.

El reconocimiento de Dª Isabel por su hermano Enrique IV, *el Impotente*, como heredera del trono por el famoso tratado de *los Toros de Guisando*, nombre de la venta en que se celebró y en cuyos campos fué proclamada aquella sucesora de su hermano, es uno de los acontecimientos más faustos é influyentes en la consolidación del Estado español, pues, aunque más adelante se revocara aquel tratado por Enrique, disgustado del matrimonio de su hermana con D. Fernando de Aragon, como fué un verdadero pacto entre el rey y la nobleza, que apoyaba á aquella, no se cumplió la voluntad del monarca y, á su muerte, le sucedió la ilustre princesa que había de llenar de gloria las páginas de la historia patria con el nombre de Isabel I, *la Católica*.

CONDADO DE CASTILLA.—No es posible fijar con exactitud la época en que tuvo origen, aunque sí puede afirmarse que ya en tiempo de Alfonso II, *el Casto*, había algunos jefes militares, que, con el nombre de *Condes*, habían recibido en feudo para su defensa algunos territorios y castillos en la frontera, que procuraban extender por medio de incursiones en el terreno de los

árabes. Entre estos condes creen algunos historiadores que había uno, el de Burgos, superior á los demás.

Aunque feudatarios de los monarcas de Oviedo, las extraordinarias facultades de que gozaban, les ofrecían motivo y estimulaban el deseo natural en toda autoridad de proclamarse independiente.

Así que, en el reinado de Ordoño II, algunos se negaron á concurrir á la desgraciada batalla de Valdejunquera, tal vez por no reconocerse feudatarios ó hacer alarde ó tentativa de independencia, y el duro castigo que Ordoño les impuso, haciéndoles decapitar, según unos, ó morir en prisiones, según otros, lejos de afirmar á Castilla en la obediencia, hizo que se *proclamara independiente*, encomendando su gobierno á dos jueces, Nuño Rasura, encargado de los asuntos civiles, y Lain Calvo, de los militares.

Este gobierno, de cuya existencia dudan algunos, duró muy poco, apareciendo de nuevo los condes, entre quienes figura en primera línea Fernan Gonzalez, que alcanza una independencia completa, á lo menos de hecho, por cuya razón y por haber contribuido grandemente á la reconquista se le atribuyen mil proezas cantadas en romances populares y patrióticos.

Despues de la desgraciada muerte de Garci-Fernandez, herido y hecho prisionero peleando contra Almanzor, logra su hijo y sucesor Sancho García vengar la muerte de su padre contribuyendo con los monarcas de León y Navarra á la derrota de Almanzor en Calatañazor. Se conoce á este conde con el nombre de Sancho, *el de los Buenos fueros* y se le atribuye por algunos la publicación del *Fuero Viejo*.

Con D. García, hijo del anterior, asesinado traidoramente por los Velas, cuando iba á contraer matrimonio con Dª Sancha, hermana de Bermudo III, *concluye el Condado privativo de Castilla*, pues, habiéndole heredado Dª Mayor, casada con Sancho III de Navarra, éste le dejó al morir, con el título de reino, á su hijo Fernando I, quien, como digimos, *unió á éste el de León* por los derechos de su esposa Dª Sancha, la prometida que fué de D. García.

III—REINO DE NAVARRA

Consideran algunos historiadores como coetánea de la de Asturias la reconquista pirenáica y, aunque nada puede asegurarse con certeza por falta de testimonios fehacientes, se cree tuvo su origen en el pequeño territorio de Sobrarbe, en el alto Aragón, donde, reunidos para dar sepultura á un ermitaño, algunos guerreros se comprometieron á pelear contra los árabes, eligiendo por caudillo á Iñigo Arista, según unos, y á Garci-Gimenez, según otros, quien *conquistó Pamplona* y se fijó en Navarra, dejando el gobierno de Aragón al conde Aznar. Los que consideran á Garci-Gimenez como primer rey de Navarra dicen que en tiempo de su sucesor Iñigo Garcés, Arista, ocurrió la expedición de Carlo-Magno á España y su célebre derrota en Roncesvalles.

La oscuridad en que están envueltos estos primeros tiempos de la historia de Navarra les da poca importancia, especialmente para nuestro particular propósito, pues ni los hechos, ni las personas aparecen con claridad bastante para atribuirles influencia.

Pero ya adquiere verdadera importancia el reino de Navarra en tiempo de Sancho III, *el Mayor*, llamado tambien Garcés *el Mayor* (999), pues compartió la gloria de Calatañazor con el conde de Castilla y el regente de León y, casado con Dª Mayor, hermana de García, último conde de Castilla, adquiere á la muerte de éste su condado, *que es incorporado á Navarra*, no obstante las protestas y reclamaciones armadas de Bermudo III de León. Siguiendo la funesta costumbre que, importada de Francia, se extendió despues á Castilla por sus sucesores, de considerar el reino como patrimonio de los monarcas, *le divide entre sus hijos* dejando al mayor, García, la Navarra, á Fernando Castilla, á Ramiro el pequeño territorio de *Aragón*, *que se erige entonces en reino independiente*, y á Gonzalo los condados de Sobrarbe y Rivagorza.

Elegido Sancho Ramirez de Aragón por voluntad de los navarros para suceder á su primo Sancho IV de Navarra, *el Despeñado*, marchan *otra vez unidos* Navarra y Aragón por espacio de medio siglo, hasta que descontenta Navarra de la elección

de Ramiro II *el Monje*, hermano de Alfonso *el Batallador*, hecha en las cortes de Borja, se separó otra vez proclamando á García Ramirez, nieto de Sancho *el Despeñado* ó de *Peñalen*, en el parlamento de Pamplona, *erigiéndose independiente* y llamando á su nuevo rey García Ramirez IV, *el Restaurador de la Patria*. Este sostuvo luchas con Ramiro de Aragon y principalmente con Alfonso VII de Castilla, quien obligó al navarro y al aragonés á declararse vasallos suyos.

Sancho VII, *el Fuerte*, toma gloriosísima parte en la batalla de las Navas y, al morir sin sucesión, *deja el reino á Jaime I de Aragón, el Conquistador*.

Pero, deseosos de conservar su independencia, suplicaron á Jaime los navarros que les permitiera nombrarse rey, gracia que aquel les concedió, designando en su virtud á un sobrino de Sancho *el Fuerte*, Teobaldo I, conde de Champaña, desde cuya época se inician las dinastías extranjeras que han de hacer de Navarra *un Estado feudatario de Francia*, llegando poco tiempo despues á formar parte de la monarquía francesa por consecuencia del matrimonio de Juana I con Felipe *el Hermoso*, de Francia.

Separada nuevamente de la monarquía francesa á la muerte de Luis X, que la dejó á su hija Juana, lleva Navarra una existencia más ó menos agitada durante los reinados de Carlos II, *el Malo*, Carlos III, *el Noble*, y Blanca, casada con Juan hermano de Alfonso V de Aragón, hasta que, por muerte de éste, le sucede en Aragón su hermano Juan, quien, lejos de respetar los derechos de su hijo el príncipe de Viana y el testamento de éste, que los trasmitía á su hermana, llamada también Blanca, conservó por la fuerza la corona de Navarra, que trasmitió á su hija Leonor, envenenadora de Blanca, y quien sólo gozó un mes el fruto de su fratricidio. Sucedióla Francisco Febo, que reinó sólo dos años; y á éste, Catalina, esposa de Juan de Albrit, á la que destronó D. Fernando *el Católico*, fundándose en la donación hecha por Blanca á favor de Enrique IV de Castilla, su esposo, en que Juan de Albrit había sido excomulgado por el papa, como aliado de Luis XII de Francia, y sobre todo en el derecho de conquista, que todo lo sanciona, ya que no lo justifique en todos tiempos.

IV—REINO DE ARAGÓN

Ramiro I, hijo de Sancho, *el Mayor,* de Navarra, instituido por su padre primer rey privativo de Aragón (1035), *extiende su pequeño Estado* con la incorporación á él de los de Sobrarbe y Rivagorza, que heredó por muerte de su hermano Gonzalo.

Sancho Ramirez, su hijo, queriendo vengar á su padre, derrotado y muerto por los moros de Zaragoza, comienza su reinado apoderándose de Barbastro y Grau, *ensanchando después su reino con el de Navarra* á la muerte de Sancho *el Despeñado*; gana á los árabes de Castilla, Piedra-Tajada y Monzón, y muere de un flechazo en el sitio de Huesca, haciendo jurar á sus hijos Pedro y Alfonso que no levantarían, hasta tomarla, el cerco de aquella plaza, como en efecto lo consiguió Pedro I (1096).

En tiempo de Sancho Ramirez se supone compilado *el Fuero de Sobrarbe.*

El malhadado matrimonio de Alfonso I, *el Batallador*, que sucedió á su hermano Pedro, con Dª Urraca de Castilla le empeña en una guerra con los castellanos; pero, anulado aquel y abandonadas sus pretensiones sobre Castilla, renueva la guerra contra los valies árabes y *conquista Zaragoza* (1118), tras porfiada resistencia, *y las principales poblaciones comprendidas entre el Ebro y el Jalon*; hace una expedición á Gascuña; se interna por Valencia, y llega hasta las playas de Málaga, siendo, por fin, derrotado y muerto ante los muros de Fraga, por el rey de Lérida que venía en socorro de la plaza por aquel sitiada.

Al morir dispuso Alfonso del reino, como si fuera su patrimonio ó propiedad particular, dejándolo á los Templarios, Hospitalarios y caballeros del Santo Sepulcro; pero su voluntad no fué cumplida, eligiendo los nobles aragoneses á su hermano Ramiro II, *el Monje.*

Casado éste, previa dispensa, abdica al poco tiempo en su hija Petronila niña de dos años, y la da en esponsales al conde de Barcelona Ramon Berenguer IV, dejando así preparada la unión de Aragon y Cataluña.

Unidas las coronas de Aragon y Cataluña en el hijo de Berenguer y Petronila, Alfonso II, ensancha éste sus Estados con

el Rosellón y la Provenza, habidos también por herencia; toma á los moros la plaza de *Teruel* y ayuda á Alfonso VIII en la conquista de *Cuenca* por lo que, agradecido el castellano, le releva del feudo á que venían obligados los monarcas aragoneses desde el reinado de Ramiro II, *el Monje*, abuelo de Alfonso.

Surge la liga llamada *Unión* entre los nobles aragoneses, disgustados por haberse obligado el monarca á pagar un censo á la Santa Sede y haber impuesto un nuevo tributo llamado monedaje, en tiempo de Pedro II *el Católico*, que, si cometió otras faltas, tuvo también la gloria de asistir á la batalla de las Navas.

La *conquista de Mallorca* llevada á cabo por Jaime I, *el Conquistador* (1223), con el auxilio de los barones, prelados y ciudades; la de *Menorca* que realiza después; la de *Ibiza*, conquistada por el arzobispo de Tarragona; la toma de *Peniscola*, *Morella y Vinaroz*, y sobre todo la de *Valencia* (1238), son hechos que legitiman suficientemente el título del monarca que los llevó á feliz término, y *ponen cima á la obra de la reconquista en Aragón*. Comete, sin embargo, la falta de *dividir sus Estados*, dejando Mallorca á su hijo Jaime II, y erigiendo en reino independiente las Baleares.

Importantes modificaciones sufre el reino de Aragon en tiempo de Pedro III, *el Grande*, que hace feudatario á su hermano Jaime de Mallorca y es proclamado rey de *Sicilia* contra las pretensiones de Carlos de Anjou, despues de los terribles acontecimientos llamados *Vísperas Sicilianas*, lo que produjo guerras entre Aragon y Francia, funestas para esta última, pues, aunque Carlos de Valois invadió el Ampurdan y se apoderó de Gerona, tuvo que abandonarla después y pereció, víctima de una epidemia que se desarrolló durante el sitio, en Perpiñan, á donde se había retirado. Para obtener el concurso de los nobles aragoneses en todas las guerras que sostuvo se vió precisado Pedro *el Grande*, á otorgarles el oligárquico privilegio de la Unión.

Este privilegio es confirmado por Alfonso III, *el Franco*, despues de haber conquistado *Mallorca* destronando á su tio D. Jaime, que había auxiliado á los franceses contra Aragón.

Entra en posesión del reino de Sicilia, por renuncia del príncipe de Salermo á su favor, D. Jaime II, *el Justiciero*; pero llamado después al reino de Aragón por muerte de su hermano Alfonso III, *el Franco*, renuncia definitivamente á la posesión de Sicilia en favor de los anjevinos por el tratado de *Agnani*, recibiendo en compensación las islas de *Córcega* y *Cerdeña*. Los sicilianos, sin embargo, no aceptaron la dominación anjevina y se

declararon independientes, proclamando á D. Fadrique, hermano de D. Jaime, con quien sostuvo guerra por empeñarse éste en obligarle á cumplir el tratado de Agnani.

Alfonso IV, *el Benigno*, hace una repartición de las comarcas y ciudades del reino de Valencia entre el infante D. Pedro, hijo de su primera mujer, y los hijos de la segunda, Dª Leonor, hermana de Alfonso XI de Castilla; pero los valencianos protestaron contra esta desmembración enviando al rey una comisión presidida por Guillen de Vinatea, que hizo ver al rey su enérgica decisión de perder vidas y haciendas antes de consentirla y, en efecto, no se realizó.

Con especiosos pretextos declara Pedro IV, *el Ceremonioso*, la guerra á su cuñado Jaime II de Mallorca y explotando las pocas simpatías de éste en las Baleares, logra que le proclamen rey, *reincorporando á la corona aragonesa aquellas islas*, así como el *Rosellón* y la *Cerdeña*. Rompe y anula más adelante este monarca el *Privilegio de la Unión* despues de haber derrotado en Epila á los nobles coaligados para oponerse á la voluntad del monarca, quien declaró, violando las leyes del reino, heredera á su hija, única entonces, Dª Constanza. La sucesión masculina, que posteriormente tuvo el rey, puso fin á estas discordias. También se *agregó nuevamente á Aragón la Sicilia* por el fallecimiento sin sucesión de D. Fadrique casado con doña Constanza, la hija de D. Pedro IV, el cual encomendó el gobierno de aquella isla á su segundo hijo don Martin *el Humano*.

Llamado éste, por muerte de su hermano Juan I, *el Cazador*, á la corona aragonesa, deja el gobierno de Sicilia á su hijo dón Martín; pero, muerto éste antes que su padre, se hizo en cabeza del mismo *la unión de las dos coronas* que hubiera tenido lugar en la de su hijo, á no haber fallecido.

Por adopción de Juana II, de Nápoles, adquiere Alfonso V, *el Magnánimo*, este reino y, despues que la volubilidad de la reina quiso deshacer lo hecho y adoptar á Renato de Anjou, *es incorporado Nápoles* por la fuerza de las armas á Aragón bajo el cetro de Alfonso. Esta unión dura poco, sin embargo, porque el mismo Alfonso, al morir, dejó el reino de Nápoles á su hijo natural Fernando y el de Aragón con Sicilia y Cerdeña á su hermano Juan, que era ya rey de Navarra y quien, despues de un largo reinado de luchas intestinas contra los catalanes, partidarios del desgraciado Carlos príncipe de Viana, deja la corona á su hijo Fernando, casado ya con doña Isabel I de Castilla.

CONDADO DE BARCELONA.—Confinando este país con el pode-

roso reino de los francos, fué en su origen más bien francés que español, recibiendo desde luego los catalanes auxilio de aquellos para combatir contra los árabes.

Ludovico Pio, hijo y sucesor de Carlo-Magno, se apodera de esta región al frente de una hueste compuesta de francos de la Aquitania y de Catalanes y forma de ella un gobierno llamado *Marca hispana*, que se extendió más allá de los Pirineos y que Carlos, *el Calvo*, sucesor de Ludovico, dividió despues en dos condados, formado uno por el territorio francés ó transpirináico y el otro, cuya capital fué *Barcelona*, por el territorio español; pero dependiente éste, como aquel, de los monarcas franceses por más de medio siglo, hasta que *se emancipó* en tiempo de Wifredo *el Belloso* (874), quien ensanchó su territorio con el ganado á los árabes en la provincia de *Tarragona*.

Despues de los poco importantes reinados de su hijo Borrel I, que le sucedió, y de Suniario ó Suñer, *invade Almanzor el condado catalán*, apoderándose de Barcelona y precisando al conde Borrel II, hijo de Suniario, á refugiarse en las vertientes de los Pirineos, de donde pudo salir al año siguiente y *recobrar á Barcelona*, mientras Almanzor estaba ocupado en otras empresas.

Carecen de importancia, bajo el punto de vista en que ahora los estudiamos, los reinados siguientes hasta Ramon Berenguer *el Viejo*, que agregó á sus Estados, por conquistas hechas á los infieles, las importantes plazas de *Lérida* y *Tortosa* y algunos otros territorios, entre ellos el condado de *Carcasona*, por conciertos matrimoniales. Reune también cortes en Barcelona y en ellas promulga el famoso código de los *Usatges*, que tendió á debilitar el poder nobiliario y puede considerarse como el origen de las instituciones democráticas de Cataluña.

Ramón Berenguer III, *el Grande*, hijo de Ramón Berenguer II, *Cabeza de Estopa*, recobra Tarragona conquistada antes y vuelta á perder por su tio Berenguer Ramón II, *el Fratricida*, ensancha sus Estados con el condado de *Provenza* por su matrimonio con Dulce, hija de los condes de aquel país, y auxiliado por los pisanos, á quienes antes él había prestado ayuda en sus luchas con los piratas moros que infestaban las Baleares, extiende los límites de su territorio á expensas de los árabes. Sus expediciones marítimas contribuyen poderosamente al engrandecimiento naval de Cataluña y al desarrollo de su comercio.

Ramón Berenguer IV, *el Santo*, toma parte en la conquista de Almería; recobra las plazas de Tortosa y Lérida; se apodera

de Fraga y Mequinenza; *expulsa completamente á los árabes del territorio catalán*, y por su matrimonio con Dª Petronila, hija única y heredera de Ramiro II, *el Monje*, *se unen* las dos coronas de Aragon y Cataluña en las sienes de Alfonso II, hijo de este matrimonio (1162).

V—PORTUGAL

Aunque no parezca del todo oportuno ocuparnos aquí del Estado portugués, como nació de España, influyó despues de independiente en la obra de la reconquista, contribuyendo á la expulsión de los árabes, común enemigo, y formó parte de la monarquía española, siquiera fuese á su pesar y por poco tiempo, consignaremos los hechos de más influencia directa ó indirecta en la formación del Estado español, en el modo con que hoy existe.

Concedida por Alfonso VI de Castilla la mano de su hija natural, Dª Teresa, á Enrique de Borgoña en recompensa del auxilio que le prestara este noble francés en la conquista de Toledo, le dió en dote el territorio portugués convertido en condado feudatario de Castilla; pero, muerto Alfonso VI, tanto Enrique de Borgoña, como Dª Teresa, despues de la muerte de su esposo, aprovechan las guerras y disensiones en que se vió envuelta Castilla durante el reinado de Dª Urraca y de su hijo Alfonso VII y obran como soberanos independientes, hasta el punto de rebelarse contra su sobrino el de Castilla, tomando parte por el rey de Aragón, *el Batallador*, y en contra de aquel.

Entusiasmados los portugueses con Alfonso Enriquez, hijo de aquellos, despues de la famosa batalla de *Ourique*, ganada á los árabes, *le proclaman rey* (1139) sobre el campo de batalla, lo cual fué aprobado posteriormente por las cortes de Lamego, no obstante las protestas armadas de Alfonso VII, quien aceptó despues los hechos consumados reconociendo la *independencia de Portugal*, y quedando obligado el rey Alonso Enriquez á prestar vasallaje al castellano por el condado de Astorga, cedido á aquel en calidad de feudo. Las conquistas de *Santarén*, *Lisboa* y otras ciudades al Sur de Portugal formaron también parte de la gloria de Alonso Enriquez, quien tal vez, si la invasión de los *almohades* no lo impidiera, hubiera llevado á cabo la completa reconquista de su patria.

Sancho I, su hijo y sucesor, continua guerreando contra los moros con varia fortuna; y, aunque las discordias intestinas impidieron á su hijo y sucesor Alfonso II asistir personalmente á la batalla de las Navas, envió á ella algunas fuerzas que contribuyeron al feliz éxito de este glorioso hecho de armas, tan trascendental para la suerte de las monarquías cristianas.

La conquista por Alfonso III de los *Algarbes,* que le fueron disputados en un principio por Alfonso X, *el Sabio,* y cedidos después, si bien como feudo de Castilla, cuyo vasallaje fué alzado más adelante á Dionisio I por Fernando *el Emplazado;* la parte que Alfonso IV tomó en la célebre batalla del *Salado,* el matrimonio de Beatriz hija de Fernando I con D. Juan I de Castilla; la batalla de Aljubarrota, ganada por el hijo bastardo de Pedro I, el gran maestre de Avis D. Juan I de Portugal, á Juan I de Castilla, que alegaba derechos á esta corona por ser esposo de Dª Beatriz; la intervención de Alfonso V *el Africano,* en los asuntos de Castilla, como prometido esposo de Juana la Beltraneja; la muerte de D. Sebastian en la batalla de Alcazar-Quivir en Africa; la elevación consiguiente al trono del anciano y achacoso cardenal D. Enrique, tio del malogrado monarca; la designación que hizo el cardenal como su sucesor á favor de D. Felipe II; y la lucha sostenida por éste contra el bastardo D. Antonio, prior de Ocrato, pretendiente también á la corona, lucha que terminó por la sumisión de Portugal al castellano, son los hechos de este reino, que, desde aquel monarca, tuvieron una influencia más ó menos directa en la formación y modificaciones del Estado español.

La forzosa unión de Portugal á España no se avenía con el carácter ni deseos de los portugueses, así es que en la primera ocasión que se presentó pensaron en recobrar su independencia, como lo hicieron en tiempo de Felipe IV, aprovechando el disgusto ocasionado por el gobierno del favorito conde-duque de Olivares y los conflictos y guerras que su desacertado gobierno provocó á la monarquía dentro y fuera de España.

Tramada, pues, y hábilmente dirigida en Lisboa una conspiración, á que dió indiscreta ocasión el de Olivares mandando que todos los nobles portugueses se presentaran en Madrid al frente de sus tropas para ir contra Cataluña, se reunieron en efecto en Lisboa, y allí estalló un movimiento insurreccional contra España, cuyos resultados fueron la elevación al trono de Portugal del duque Juan de Braganza y *la definitiva independencia* de este reino.

VI—CASTILLA Y ARAGÓN UNIDOS

Elevada Isabel I al trono de Castilla con gran contento y entusiasmo de los castellanos; derrotados los partidarios de la Beltraneja en la célebre y decisiva batalla de Toro (1479), no obstante el auxilio del monarca de Portugal, Alfonso V, á quien había sido prometida la mano de aquella princesa; afirmada y completamente legitimada su posesión en el trono por muerte de la Beltraneja; y arreglado el modo de gobernar sus Estados con Fernando V de Aragon, su esposo, sin menoscabo de los derechos de ninguno en sus respectivos reinos, procuran los Reyes Católicos organizar la administración por medio de acertadas reformas y útiles instituciones, y concluir la obra de la unidad nacional, expulsando completamente de España á los árabes, quienes dan pretexto á la guerra, conforme á los deseos de los reyes, con la contestación altiva de Muley-Hacen al embajador español, que le demandaba los tributos atrasados, prometidos por los granadinos á Fernando III, y con la toma de *Zahara*, que llevó á cabo, dando muerte á todos sus moradores cristianos.

Rotas, pues, las hostilidades, inaugúrase la campaña con la toma de *Alhama* por los cristianos; pero sufren una derrota en Loja, cuyo sitio se ven obligados á levantar, á la que siguió otra aun más importante, siendo sorprendido y muerto con casi toda su hueste el maestre de Santiago por Muley-Hacen, en la Sierra de la Ajarquía, hasta donde había llevado á los cristianos su temerario arrojo.

La noticia que de estos descalabros llegó á los Reyes Católicos, fué compensada en cierto modo con la de la anarquía que reinaba en el interior de Granada y con la derrota y prisión de Boabdil frente á Lucena. Puesto éste en libertad en virtud de pactos favorables á los cristianos, vuelve á Granada, donde se renuevan las guerras intestinas, primero con su padre y despues con su tio Abdallah, *el Zagal*, guerrero muy popular, hasta que, viendo los moros que estas luchas intestinas sólo podian favorecer á los cristianos, hacen un convenio tio y sobrino, pues ya había muerto Muley-Hacen, mediante el cual se distribuyen las provincias del reino; pero residiendo ambos en Granada.

Los Reyes Católicos, juzgando estos convenios contrarios al

pacto celebrado anteriormente con ellos por Boabdil, llevan sus armas contra las ciudades pertenecientes á éste, tomando á *Loja y Velez-Málaga*, y derrotado *el Zagal* que acudía en defensa de la última, le destronan los granadinos, quedando Boabdil por rey único. Sigue á estos triunfos la toma de *Málaga*, que se defendió heróicamente, y las de *Baza*, *Almería* y *Guadix*, hasta que al fin queda sola Granada, si bien fuerte y bien provista, destrozada interiormente por las contiendas civiles. Rendida al cabo despues de nueve meses de resistencia y de haber presenciado actos de enérgica decisión por parte de los cristianos, como la fundación de *Santa Fé* en el lugar mismo del campamento que había sido presa de las llamas, abre sus puertas á los ejércitos de la cruz, que el dia *2 de Enero de 1492* entran triunfantes en la ciudad de Boabdil al mismo tiempo que éste la abandona para siempre, y *queda consumada* la obra épica iniciada en las ásperas montañas de Asturias y Sobrarbe y llevada á feliz término, después de siete siglos de lucha, en las fértiles vegas de Granada.

Restaurada por completo la dominación cristiana en la península, ensanchan los Reyes Católicos sus dominios con los territorios descubiertos por Colon en el Nuevo-Mundo (12 de Octubre de 1492), *San Salvador*, *Cuba*, *Santo Domingo* y otras islas, de que aquel tomó posesión en nombre de los reyes de Castilla.

Hace más adelante el rey Católico un convenio con Luis XII de Francia para repartirse el reino de Nápoles á costa de don Fadrique, á quien despojan; pero, desavenidos poco tiempo después el francés y el español por cuestión de límites, surge la guerra en que el gran capitan Gonzalo de Córdoba, después de haberse cubierto de gloriosos laureles en las batallas de Ceriñola y Garellano, ganadas á los franceses, se apodera de la fortísima plaza de *Gaeta*, viéndose por todos estos desastres obligado Luis XII á pedir una tregua de tres años, *quedando en el interin como rey de Nápoles* Fernando *el Católico* y en su nombre, como virey, Gonzalo de Córdoba, quien recompensó á sus compañeros de armas con tal liberalidad, que excitó el enojo del rey Fernando (1504).

Muerta Dª Isabel é incapacitada su hija Dª Juana para el gobierno, entra D. Fernando á desempeñar la regencia de Castilla en nombre de su hija, y secundando los propósitos que tuvo Fernando *el Santo* y las indicaciones de Cisneros, pasan al Africa las armas españolas y caen en su poder las plazas de *Mazal-*

quivir, Peñón de la Gomera y Orán, conquistadas por Cisneros (1509) aunque bajo la dirección de Pedro Navarro, famoso y experto caudillo; pero se ven obligadas á suspender la proyectada conquista de Africa por el terrible descalabro que en las islas Gelves sufrió nuestro ejército.

Asegurada la conquista del reino de Nápoles é *incorporada la Navarra* á sus Estados por la fuerza del derecho y de las armas, muere poco después D. Fernando, dejando por heredera universal á su hija Dª Juana, en cuya cabeza quedan definitivamente unidas las coronas de Castilla, Aragon y Navarra y *realizada por completo la unidad del Estado español* (1516).

CAPÍTULO IV

ESPAÑA BAJO LA CASA DE AUSTRIA

Con el advenimiento de Carlos I al trono de Castilla *únense* con ésta *el imperio de Alemania y los Paises-Bajos:* engrandecimiento que, si pudo halagar al monarca, fué manantial fecundo en disgustos para los españoles y de conflictos en la administración de España, la que, entregada á los flamencos y desatendida por D. Carlos, ve levantarse en rebelión las Comunidades de Castilla, de carácter político, y las Germanías de Valencia, más socialistas, como dirigidas por los artesanos contra los nobles y entregadas á multitud de excesos y violencias; pero ahogadas al fin, en sangre, como aquellas. La prepotencia exterior de España llegó, con todo, en este reinado á un grado inverosimil.

Ensánchanse los dominios españoles allende los mares con la conquista de *Méjico* por Hernán Cortés con un puñado de valientes, y con la del *Perú* que realizan Francisco Pizarro y Diego de Almagro, aterrando á los indios con sus actos de ferocidad y tiranía (1520 y 1521).

Más útiles acaso, si el éxito las coronase, hubieran sido las expediciones á Berberia, constante pensamiento de Cisneros, para destruir las guaridas de piratas que infestaban el Mediterráneo. Feliz fué, sin embargo, la expedición contra Barbaroja que dió por resultado la toma de la *Goleta* y después, tras porfiada lucha, la de *Tunez,* donde repuesto por el emperador Muley-Hacen, que había sido destronado por aquel corsario, reciben la

libertad veinte mil cristianos y un golpe de muerte los piratas. Pero la expedición contra Argel, que el emperador se obstinó en llevar á cabo contra el parecer de Andrés Doria, y quiso dirigir en persona, fué sumamente desgraciada, pues los huracanes y lluvias torrenciales, efecto de la estación, destruyeron la mayor parte de las naves y precisaron á D. Carlos á abandonar la empresa sin honra ni provecho.

Después de otra desgraciada expedición al Africa en tiempo de Felipe II, lógrase en una nueva evitar la pérdida de Orán y Mazalquivir y recobrar el Peñón de la Gomera, perdido algunos años antes.

Salvada la cristiandad en la batalla de *Lepanto*, pasa don Juan de Austria al Africa y reconquista *Tunez* (1573).

Tiene tambien importancia suma, y acaso más que otro alguno de los ocurridos en tiempo de Felipe II bajo nuestro especial punto de vista, porque representa la verdadera unidad nacional en la Península, el hecho de la *incorporacion de Portugal* á España después de la muerte del cardenal Enrique en virtud del testamento de éste y de la decisión de una junta de letrados y, sobre todo, por el ejército que capitaneado por el duque de Alba derrotó completamente en Alcántara á las tropas del otro pretendiente, el prior de Ocrato (1580).

La sublevación de los *Paises Bajos*, en la que se distinguieron el duque de Alba por sus conocimientos militares y por su crueldad, D. Juan de Austria por su espíritu conciliador, y Alejandro Farnesio, duque de Parma, por su genio militar y político, terminó, tras larga y porfiada lucha, viéndose precisado Felipe II á autorizar *su separación* abdicando la soberanía de los mismos en su hija Isabel Clara, casada con el archiduque Alberto de Austria; medida que no satisfizo por completo á los insurrectos, quienes, capitaneados por Mauricio de Orange, siguieron luchando hasta conseguir su total independencia (1598).

Felipe III se ve precisado á reconocer, si quiera fuese implícitamente, por el tratado de la Haya la *independencia de Holanda*, no obstantes los triunfos y toma de Ostende por el marqués de Spínola, mandado por Felipe en apoyo del archiduque Alberto, empeñado en sostener el dominio de las provincias que le había dejado Felipe II.

También son expulsados de España durante este reinado, los *moriscos*: medida criticada fuertemente por los escritores modernos como antieconómica y perjudicial para la agricultura, y recibida con aplauso por algunos escritores contemporáneos

del suceso, entre ellos Cervantes, como acertada para la seguridad del Estado y para el fin religioso.

En tiempo de Felipe IV tiene España que pedir la paz á Francia despues de la batalla de Rocroy, donde fué derrotada nuestra famosa infantería por los franceses aliados de los Paises Bajos, que habían vuelto á España por cesión hecha á Felipe IV por su tia la princesa Margarita, estipulándose en garantía de aquella paz, firmada en los Pirineos (1659), el matrimonio de María Teresa, hija de Felipe IV, con el delfin de Francia, Luis XIV.

También los catalanes, mal contentos con el gobierno del Conde-Duque, se sublevan pidiendo primero auxilio á Francia y declarándose después súbditos de Luis XIII, á quien proclamaron conde, hasta que arrepentidos los catalanes y rendidas sus principales ciudades, entre ellas Barcelona, que ya no podía resistir más á las fuerzas de mar y tierra mandadas por D. Juan de Austria, terminó la guerra con la sumisión de Cataluña bajo la promesa de que se conservarían sus fueros (1652).

Consecuencia de esta lucha fué la pérdida del *Rosellon*, así como durante las guerras de Flandes se perdieron *Thionville*, *Mardich, Dunquerque,* etc., y en el Nuevo-Mundo la *Jamáica,* viéndose también España obligada á aceptar el artículo del tratado de Westfalia por el que se *reconocia la independencia* de las provincias unidas de Flandes.

Más funesto aún fué el levantamiento de Portugal que, coincidiendo con el de Cataluña, aunque contrario en un principio á los portugueses, dió por resultado final, despues de las derrotas sufridas por los españoles en Evora, Beyra y Villaviciosa, el reconocimiento implícito de la independencia de Portugal bajo el cetro del duque de Braganza, á quien habían proclamado rey los lusitanos con el nombre de Juan IV (1668).

También ocurrió en Nápoles el movimiento insurreccional mandado por Masaniello, de bastante duración, porque, declarados independientes los napolitanos y erigidos en república, contó con el poderoso auxilio del duque de Guisa, á quien ofrecieron la soberanía; pero, desunidos los sublevados, abandonado el de Guisa por Francia y tomada Nápoles, fueron rindiéndose las demás ciudades y sometidas nuevamente á España.

Durante la menor edad de Carlos II, *el Hechizado*, se apoderan los numerosos soldados de Luis XIV, capitaneados por los ilustres generales Turena y Condé, de la importante provincia que desde entonces se llamó *Flandes francesa* y cuya soberanía

fué reconocida á Francia por la paz de Aquisgran (1668), y poco tiempo después pierde también España el *Franco-Condado* por la paz de Nimega (1678). Es también *reconocida la independencia de Portugal* y el derecho á reinar de la dinastía de Braganza por gestiones de Inglaterra que había auxiliado á España en la guerra contra Francia.

Perdidas las esperanzas de que Carlos II tuviera sucesión, se da el tristísimo espectáculo para España de que las grandes potencias acordaran su repartición sin contar para nada con ella ni con su débil monarca. Este mismo desprecio contribuye sin duda á que el rey, ofendido en su altivez, haga un alarde de independencia, designando para sucederle al príncipe de Baviera; pero, muerto éste, se renuevan las intrigas diplomáticas y se acuerda una nueva repartición por los tratados de Londres y de la Haya (1700), mientras que Carlos II se resuelve al fin, después de largas vacilaciones é instigado por el cardenal Portocarrero, á nombrar heredero á Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, muriendo Carlos poco tiempo después y acabando con él su dinastía.

CAPÍTULO V

ESPAÑA BAJO LA CASA DE BORBON

Con la guerra de sucesión, que surgió á la muerte de Carlos II, los ingleses, partidarios del archiduque Carlos, se apoderan de *Gibraltar*, que estaba casi abandonada; piérdense también *Orán*, *Menorca* y *Cerdeña;* y por el tratado de Utrech (1713) que puso término á la guerra, reconociendo á Felipe como rey de España y de sus Indias, perdió España, además de Gibraltar y Menorca, cedidas á Inglaterra, las posesiones de *Italia* y *de los Paises Bajos,* sin que los esfuerzos posteriores de Alberoni, ministro de Felipe V, y la toma por su escuadra de Cerdeña y Sicilia fueran bastantes á recobrar la Italia, como era su propósito, pues, aliadas las grandes potencias, Inglaterra, Francia, Austria y Holanda, por el tratado de la Cuádruple alianza, destrozan á nuestra escuadra en las aguas de Siracusa y es obligado Felipe V á pedir la paz, que le fué otorgada á condición de ceder las dos islas recobradas y de desterrar de España al ministro Alberoni.

Después de la muerte de su hijo Luis y durante su segundo gobierno obtiene Felipe por medio de un tratado secreto, concertado en Viena por el ministro Riperdá, la cesión, mediante otras condiciones onerosas para España, de los ducados de Parma, Plasencia y Toscana á favor de su hijo el infante Carlos y, aunque este tratado no se cumplió entonces por la oposición de las grandes potencias, más adelante fué, por otro tratado, asegurada al infante D. Carlos la soberanía de estos ducados.

Rotas posteriormente las amistosas relaciones entre el rey y el emperador de Alemania y aprovechando Felipe la guerra civil en que éste se hallaba comprometido por la sucesión al trono de Polonia, invade el infante D. Carlos y conquista el reino de Nápoles, al que agrega despues el de Sicilia, logrando más tarde, tras largas negociaciones, que en virtud del tratado de Viena (1738), se reconozca á Carlos como rey de Nápoles y Sicilia, *independiente de España,* mediante la renuncia á los ducados de Parma, Plasencia y Toscana; los que, no mucho más tarde, volvieron á poder de Felipe, quien los atacó en ocasión de hallarse Alemania agitada por la guerra civil motivada por la sucesión al trono imperial, y dió á su otro hijo, el infante don Felipe.

Sostiene Fernando VI con energía la guerra en Italia hasta que logra por la paz de Aquisgran (1748) asegurar para su hermano Carlos la corona de Nápoles y que su otro hermano Felipe sea reconocido soberano de los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla.

De carácter bondadoso Fernando VI y convencido de que la paz es el mejor medio para conservar y labrar la ventura de los pueblos, permanece extraño á las guerras suscitadas entre Inglaterra y Francia, no obstantes las sugestiones y proposiciones ventajosas que por una y otra se le hicieron, ofreciéndole la primera la restitución de Gibraltar y la segunda la de Mahón. Merced á ésta pacífica y sabia política puede consagrarse al desarrollo de la cultura intelectual, moral y material del Estado, fundando instituciones y establecimientos útiles, erigiendo monumentos y dejando al morir repletas las arcas del tesoro que había recibido exhaustas por tantas guerras.

Abandona Carlos III, su hermano y sucesor, la prudente política de neutralidad, suscribiendo con Francia el desdichado Pacto de Familia (1761) por el que se comprometieron ambas naciones á pelear contra el enemigo de cualquiera de ellas, y que tan funesto había de ser para España. Pierde ésta por de pronto las *Floridas* que se vió precisada á ceder á Inglaterra á cambio de la Habana y Manila, que habían caido en poder de los ingleses. Auxilia imprudentemente también el monarca español la insurreccion de las colonias inglesas contra la metrópoli sin preveer las consecuencias de este paso, teniendo nosotros, como teníamos, grandes territorios en América, é intenta inútilmente la reconquista de Gibraltar. Los únicos ventajosos resultados de la guerra con los ingleses fueron la reconquista de la *Florida* y de

Menorca, reconociéndose nuestro derecho á su posesión en el tratado de paz de París (1783).

La administración pública, la instrucción, la agricultura, la industria, el comercio y las bellas artes, recibieron gran desarrollo en este reinado, compensando en algo los desastres y pérdidas de las guerras.

En el desdichado reinado de Fernando VII se *emancipan las colonias* que tenía España en el continente americano, aprovechando la guerra de la Independencia que impedía mandar tropas á aquellas apartadas regiones y, aunque terminada la guerra se trató de enviar un ejército para sofocar la insurrección, sublevado éste por Riego en las Cabezas de San Juan (1820), no pudo realizarse lo proyectado. Mandadas después tropas á reprimir el movimiento, son derrotadas por completo en la decisiva batalla de Ayacucho, que aseguró la independencia, y su pérdida para España, de los paises insurrectos, erigiéndose en repúblicas *Buenos-Aires, Chile, Venezuela, Méjico y el Perú.*

En el reinado de Isabel II tiene lugar la guerra de Marruecos, cayendo *Tetuán* en poder de nuestras tropas, aunque se devolvió luego al hacer la paz (1860) á cambio de unas pesquerías en la parte occidental del imperio marroquí, y sin sacar todo el provecho debido de nuestras victorias por la malquerencia y el egoismo de Inglaterra.

También se anexionó á España la isla de *Santo Domingo* (1861); pero sublevada después se produce una guerra costosa y sin gloria para nosotros, que terminó al fin por el abandono de aquella isla destrozada interiormente, como casi todas las colonias que en el reinado anterior se habían separado de la metrópoli, por luchas intestinas.

Durante el periodo constituyente de 1869; en el reinado de Amadeo de Saboya; en el periodo republicano, y durante la restauración de D. Alfonso XII no ha sufrido el Estado español modificaciones en su territorio.

SECCIÓN SEGUNDA

ELEMENTOS DE NACIONALIDAD

CAPITULO PRIMERO

LAS RAZAS

Por lo dicho en la sección anterior sabemos que, además de los iberos y celtas, de cuyo carácter, costumbres é instituciones nada puede afirmarse con certeza, aunque si está probado su amor á la independencia por las resoluciones extremas á que solían entregarse sus ciudades antes que rendirse, fundaron sucesivamente colonias y poblaron la España los fenicios, los griegos, los cartagineses, los romanos, los godos y los árabes.

I—Los *fenicios,* habitantes de la comarca situada entre la Siria, la Judea y el Mediterráneo, llegaron á tal grado de cultura y desarrollo industrial, que el comercio de sus dos principales ciudades, Sidón y Tiro, se extendió por todos los pueblos bañados por aquel mar.

Lo estéril del país que habitaban y la necesidad de proporcionarse recursos fuera de él les hizo aventurarse á las empresas marítimas y dedicarse al arte de la navegación, para cuyo ejercicio les proporcionaban los montes del Líbano maderas abundantes con que construir sus naves, y lo accidentado de sus

costas puertos seguros para albergarlas. Su espíritu aventurero les llevó hasta la tierra de Ofir (hoy península de Málaca) y á la inverosímil empresa de dar la vuelta al Africa; y su carácter especulador llenó de colonias las islas de Chipre y Rodas, la Grecia, la Sicilia, la Cerdeña y, según hemos dicho, nuestra España, donde Cádiz llegó á ser el centro de su comercio. Sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de la navegación, por una parte, y los conocimientos adquiridos en sus viajes, por otra, hubieron de proporcionarles cierta cultura en aritmética, geometría, mecánica, geografía, etc.; y se les atribuye la invención de la escritura alfabética, que tanto había de influir en la civilización y en el progreso de las ciencias. Sus manufacturas fueron muy renombradas por la elegancia de sus obras en madera, hierro, plata, oro, y bronce, por la blancura y finura de sus telas de lino y por los objetos de vidrio, que también creen algunos debido á su invención, así como la de la púrpura. La magnificencia de sus edificios, afirma Strabon, que superaba á los de la misma Roma, si bien es cierto que por las ruinas llegadas hasta nosotros, parece que en sus construcciones atendian más á la utilidad que al explendor. Pero, á fuer de buenos mercaderes, su espíritu egoista les vedaba hacer partícipes á los demás de sus adelantos; así que, lejos de comunicar á los otros pueblos los secretos de la navegación, y de fomentar la comunicación entre ellos, evitaban con cuidado ser seguidos en sus excursiones; y cuandó algunos otros marineros se aventuraban á hacerlo, ó procuraban desorientarlos, ó lanzaban sus mismas naves por entre escollos y pasos peligrosos, con riesgo de su propia vida, para que aquellos perecieran, ó si por acaso en alta mar se encontraban con ellos y no temian ser descubiertos, los atacaban como corsarios, los mataban y echaban á pique sus naves.

Su religión estaba llena de prácticas supersticiosas, y en su culto, principalmente en el tributado á Venus y Adonis, se mezclaba la licencia con los sacrificios sangrientos.

Su gobierno fué monárquico, pues aunque alguna vez intentaron regirse por magistrados, *suffetes*, esto fué transitorio. La elección de los altos funcionarios se hacía, no obstante, por el pueblo y de aquí que los reyes no pudieran ejercer un poder despótico, por más que su autoridad fuese suprema y su imperio duradero.

II—Los antiguos *griegos* que se llamaban *autóchthonos*, ó nacidos en el mismo suelo, y entre ellos los arcadios, que exageraban sus pretensiones hasta el punto de apellidarse *proselénoi*, ante-

riores á la luna, fueron conocidos todos con el nombre de *pelasgos*, como procedentes de la raza pelásgica originaria de Asia. Pero ya antes de la inmigración de los pelasgos (18 siglos antes de J. C.) habian llegado á Grecia algunas colonias del Oriente y aun se cree que de Egipto y de Fenicia. En el siglo XIV antes de J. C. Pelops llegó de Frigia con una colonia, y la península conquistada por su gente lleva aún el nombre de Peloponeso. La población, sin embargo, había sido ya renovada por otra raza, la de los *helenos*, que dió su nombre á todo el país (*Hellade*) y se dividió en cuatro ramas: los *dorios*, los *colios*, los *jonios* y los *aqueos*, con cuyo establecimiento terminó la edad de formación de la Grecia.

La raza griega, privilegiada entre todas las conocidas, las ha excedido con mucho y ninguna ha podido realizar hechos ni producir hombres tan grandes, en un país tan limitado y de población tan exigua. Activos, valientes, emprendedores, dotados de una imaginación viva y ardiente y de un entendimiento flexible, eran tan aptos para el estudio de la filosofía como para el manejo de los negocios, para los trabajos de la guerra como para los propios de la paz, y bajo todas las formas de gobierno, desde la monarquía hasta la república, en la ciudad y en la federación, mostraron el mismo carácter y se hicieron notar por el imperio de su palabra elocuente, por la superioridad de su inteligencia y por su amor á la libertad. Su lengua, de gran riqueza y flexibilidad, era apropiada para las dulzuras de la poesía y para la severidad de la historia, para los arranques sublimes de la oratoria y para las sutilezas dialécticas, y en todos los géneros dejaron monumentos imperecederos de su saber y aptitudes. Su poesía, religiosa primero con Orfeo y épica con Homero, se hace después lírica, y es guerrera con Tirteo, erótica con Safo, graciosa con Anacreonte, patética con Simónides, satírica con Arquíloco y heróica con Píndaro. Esquiles, Sófocles y Eurípides elevan la tragedia hasta la perfección; Aristófanes y Menandro brillan en la comedia social y de caracteres y costumbres. La filosofía, materialista con Thales y la escuela jónica, se hace espiritualista con Pitágoras, moralizadora con Sócrates, es elevada á su más alto grado por Platón y Aristóteles y rodeada de severidad por el estóico Zenón. Temístocles, Pericles y Alcibíades, gobiernan el pueblo por el influjo de su talento y de su palabra; y la arrebatadora elocuencia de Demóstenes, el más grande orador de todos los tiempos, es más temible para Filipo de Macedonia que todos los ejércitos de Grecia. La historia mira como

padre al griego Hesiodo; las primeras nociones de matemáticas y astronomía fueron importadas de Egipto por Pitágoras y Thales; la medicina cuenta los nombres de Hipócrates y Galeno; la geografía matemática é histórica los de Hiparco, Eratóstenes, Strabón y Ptolomeo; la escultura los de Fidias y Praxiteles; la pintura los de Parrhasio, Zeuxis y Apeles, y la arquitectura, en sus tres órdenes dórico, jónico y corintio, es admirada todavia por su severidad, por la pureza de sus líneas, por la elegancia y la ligereza de la construcción.

El valor, la pericia, la extrategia, el arte de la guerra, tienen también sus tipos en la Grecia, y los nombres de Leónidas y Milcíades, de Temístocles y Epaminondas, de Filipo y Alejandro están escritos para siempre en los anales de la humanidad.

Su consejo de los *Anficciones,* reunión periódica de diputados ó representantes de los pueblos primitivos de la Grecia, en que se discutía y resolvía sobre ceremonias religiosas y sobre las cuestiones ó diferencias surgidas entre las ciudades ó pueblos anficciónicos; sus juegos *pyticos*, *ístmicos*, *nemeos* y *olímpicos*, parecían querer recordar á los griegos su origen y mantener entre ellos la concordia y un pensamiento común.

La grandeza del pueblo griego y su pasión por la celebridad no le pudo permitir hacer del comercio una ocupación predilecta. Sin embargo, Corinto fué por su situación la escala necesaria del comercio del Asia, Egipto é Italia, y Rodas, más industriosa, se enriqueció extraordinariamente con la exportación de vinos, madera, miel, mármol, etc. La marina llegó á perfeccionarse bastante después de la invasión de los persas y les permitió lanzarse á expediciones de alta mar y llevar colonias á las tierras occidentales, á Italia, al Mediodía de Francia y al Oriente de España, según hemos indicado.

En suma; primera escuela de las ciencias y las artes y cuna de la civilización europea, la Grecia sirvióle también de valladar contra las invasiones asiáticas, y las batallas de Maratón, Salamina y Platea harán su nombre imperecedero y reivindicarán para siempre la gratitud de todos los pueblos cultos. Sus colonias esparcieron las semillas de la civilización por Occidente y las empresas de Alejandro en Asia, á cuyo éxito contribuyó sin duda alguna, tanto como la fuerza de las armas, la habilidad y dulzura del gran macedonio, puso en comunicación más inmediata los pueblos de Oriente con Europa, y de allí surgió el primer imperio civilizado. Y cuando, entibiado el ardor patriótico, extinguida la sed de gloria militar y el entusiasmo por la libertad,

decayó la grandeza nacional de la Grecia, todavía supo atraer hácia sí las miradas de los demás pueblos por el culto de lo bello, por el desarrollo de las artes y de la literatura, por el refinamiento de las costumbres y por los explendores del lujo.

III—Colonia de Tiro, la ciudad de Cartago, fundada en la costa septentrional del Africa hacia el año (880 a. de J. C.), sus habitantes, como de la misma raza que los fenicios habían de tener los mismos rasgos típicos; su carácter moral, sus costumbres, sus aspiraciones y hasta su cultura habían de ser análogas á los del país que fué su origen, con el que sostuvo siempre comunicación y cordial trato. Su lengua era la de los fenicios; su religión idéntica y también en ocasiones sanguinaria (en las grandes calamidades sacrificaban niños para aplacar á los dioses); su predilección por el comercio y las empresas marítimas, análoga á la de los fenicios, y si estos realizaron un viaje alrededor del Africa, los cartagineses le intentaron para establecer colonias ó factorías en su costa bajo la conducta ó dirección de Hannón que, sino pudo terminarse, fué muy útil bajo el punto de vista geográfico, y de él nos queda una relación en griego conocida con el nombre de *Periplo*. Desarrollado portentosamente su comercio y sirviendo por decirlo así de intermediario en el movimiento de los productos de todos los pueblos llegó á ser Cartago centro de este movimiento y depósito de grandes riquezas que sirvieron para aumentar su poderío; pero, achaque de todos los pueblos comerciales, los cartagineses se hicieron codiciosos y egoistas; el deseo de gozar los placeres que las riquezas proporcionan y lo reducido de su población les acostumbró á pagar soldados y sus principales tropas eran sacadas de los pueblos aliados y tributarios: los númidas formaban su caballería, los españoles su infantería, los baleares les daban sus honderos, los cretenses sus flecheros y los galos sus tropas ligeras; pero estas tropas, si bien les permitían formar ejércitos poderosos y realizar grandes conquistas sin molestar á su población ni derramar su sangre, sólo les fueron útiles mientras la fortuna coronó sus empresas con el éxito; más, cuando llegó el tiempo de la desgracia, no pudieron resistir estos ejércitos mercenarios y sin amor á lo que no era su patria el choque de las legiones romanas, compuestas de ciudadanos guiados por su entusiasmo y que combatían por su patria, por sus lares, por sus familias y haciendas. Así que, mientras Roma, su rival, después de uno y otro desastre se mostraba más altiva, resuelta y denodada, cuando cambió la fortuna y fueron derrotados los ejércitos de Cartago, esta se vió muy pronto obli-

gada á pedir la paz, y desapareció al cabo, no obstantes sus artificios y habilidades diplomáticas.

La organización política de Cartago, monárquica en un principio, fué modificada después dejando los reyes su plaza á los *suffetes*, magistrados probablemente anuales y elegidos por la asamblea general del pueblo, cuyas atribuciones es posible que semejaran á las de los cónsules romanos.

El poder legislativo residía en un *senado*, compuesto, según unos, de un número indeterminado, y según otros, de quinientos ciudadanos, pertenecientes á las clases más acomodadas. Este cuerpo, además de redactar las leyes, decretaba los impuestos, declaraba la guerra, concertaba la paz, recibía á los embajadores, oía las quejas de las provincias y decidía en todos los asuntos de su competencia por mayoría de votos: en caso de empate pasaba el asunto á la asamblea del pueblo. Del seno de esta corporación se nombraba un *consejo* llamado *de los ancianos*, compuesto de ciento ó ciento cuatro individuos, cuyo cargo se cree era perpetuo y análogo al de los éforos en Esparta ó al de los censores en Roma y aunque no se puede afirmar con certeza, ni cómo se designaba, ni cuáles eran las atribuciones de este consejo oligárquico, parece estuvo investido de la principal autoridad política y judicial.

A este consejo, erigido en tribunal, eran llamados los generales para dar cuenta de su conducta y cuando la suerte de las armas no les había sido propicia les imponía graves penas, generalmente la muerte en cruz, olvidando inicuamente los prósperos sucesos, y como si la voluntad de los generales fuera la causa única del éxito en las empresas militares. Otras veces, aun vencedores, les condenaba al destierro, para que no pudieran usurpar el poder y convertirse en tiranos, ó más bien para que no pudieran oponerse á los planes del senado y consejo aristocráticos. El senado se dividía en *pentarquías*, secciones de á cinco, que tenían encomendada la gestión administrativa, y cuyos cargos, gratuitos y venales, no salían por lo mismo de manos de la aristocracia. Estos comités juntamente con el senado y el consejo de los ciento, anulaban el poder y la influencia de los suffetes y de la asamblea del pueblo.

Como el comercio era el principal interés de Cartago, se atendía con cuidado á organizarlo todo para asegurar su prosperidad; los mercaderes hallaban facilmente colonias, sobre todo en la costa de Africa, donde poder traficar, y hasta el mismo gobierno enviaba gentes pobres á los paises sometidos, para coloni-

zarlos, atrayéndose de este modo al pueblo á quien proporcionaba medios para poderse enriquecer. Por desgracia estos colonos, que se establecían por poco tiempo en comarcas distantes de la metrópoli, las explotaban codiciosamente á fin de volver cuanto antes á su patria para gozar el fruto de sus rapiñas, y esta fué sin duda la causa principal del odio que excitaba la dominación cartaginesa y de la facilidad que encontró Roma en nuestra España para proporcionarse aliados decididos contra su antipática rival.

IV—El origen de *Roma,* cuya dominación tanto y por tanto tiempo se hizo sentir en España, parece verosímil fué debido á una emigración de guerreros de Alba Longa que, nacidos en la época llamada en la antigua Italia *primavera sagrada*, estaban consagrados á la divinidad para aplacar su cólera, y por no haber sido inmolados se les reservaba para formar colonias andando el tiempo.

Es tambien probable que sus primeros fundadores, deseando aumentar la población, recibieran en su seno á todos los vagamundos que erraban por los contornos y que, necesitados de mujeres para perpetuar la vida de su ciudad naciente, acudieran al engaño y á la violencia que provocó la guerra con los sabinos, funesta acaso para los romanos sin la intervención de las mujeres cuyas lágrimas y ruegos, aplacando el furor de los combatientes, consiguieron la paz. Por virtud de ésta se fundieron en uno los dos pueblos, conviniendo en que Rómulo y Tacio reinarian juntos, que la ciudad conservaría el nombre de Roma y el pueblo ó los ciudadanos tomarian el nombre de *quirites*, de Cures, capital de los sabinos, extendiéndose el recinto de la ciudad y doblándose el número de senadores para dar entrada en el senado á los sabinos. Aumentado sucesivamente el territorio y la población de Roma por consecuencia de las continuas luchas que sostuvo con los pueblos del Lacio, llegó á hacerse por fin dueña de toda la Italia, cuyos pueblos fueron incorporados como agregados ó aliados, aunque no á todos se concedieron iguales derechos. Por de pronto la diferencia de origen se conservó, aun entre los dos primeros pueblos, por su distinción en dos tribus; la de los *ramnes* ó *ramenses*, compuesta de los romanos, bajo Rómulo; y la de los *titios* ó *titienses*, compuesta de los sabinos de Cures, bajo Tito Tacio. Los reyes, sin embargo, se eligieron alternativamente de las dos tribus. A éstas se añadió más tarde una tercera, la de los *luceres*, compuesta de etruscos de una colonia llevada á Roma por el *lucumón* Cœles

Vilenna en tiempo de Tulo Hostilio y á la que Tarquino Prisco equiparó en derechos con las anteriores.

Luchando los romanos desde el principio por la existencia de su patria, vese también desde luego predominando en ellos el valor y un patriotismo sin límites: procuran organizar su pueblo en relación con su carácter y con las necesidades de la guerra; y buscan el engrandecimiento de su ciudad por una política habil, procurándose aliados, admitiendo de buen grado los usos, religión é instituciones de los pueblos del Lacio sometidos, y facilitando así una fusión completa. "De todos los pueblos del mundo, dice Bossuet, el más fiero, el más atrevido, pero también el más prudente en sus consejos, el más constante en sus máximas, el más avisado, el más laborioso y, en fin, el más paciente, ha sido el pueblo romano. De todo esto se formó la mejor milicia y la política más previsora, la más firme y la más consecuente que existió jamás. El fondo de un romano, por decirlo así, era el amor de su libertad y de su patria. Una de estas cosas le hacía amar la otra; pues por lo mismo que amaba la libertad amaba también la patria como á una madre que le nutría en sentimientos igualmente generosos y libres. Bajo el nombre de libertad se figuraban los romanos, lo mismo que los griegos, un Estado en que nadie estuviera sujeto más que á la ley y donde la ley fuese más poderosa que los hombres.„

Esto explica en cierto modo porqué los romanos consagraron al derecho una atención preferente, y aunque su derecho civil hubo de resentirse en un principio del origen de su ciudad, formada por pueblos distintos, las repetidas instancias y reclamaciones, más ó menos pacíficas, de las postergadas, hubieron de conseguir al cabo el reconocimiento y la declaración, en una ó en otra forma, de lo racional y equitativo, hasta el punto de que los preceptos, las reglas y las máximas jurídicas de los romanos se invoquen hoy mismo con éxito en los pueblos civilizados.

Hasta las Doce Tablas la historia de Roma está llena de luchas entre los patricios y plebeyos, en que al cabo triunfan estos, obteniendo sucesivamente el nombramiento de los tribunos, el edilato, la fuerza legal de los plebiscitos, y la promulgación de las leyes de las Doce Tablas que establecieron el principio de igualdad legal de los dos órdenes.

Desde esta época el derecho se manifiesta en dos formas distintas: derecho escrito y derecho no escrito. El escrito compuesto: 1° de las *leyes*, formadas en los comicios por centurias á

propuesta de un magistrado que presidía el Senado: 2° de los *plebiscitos*, formados en los comicios por tribus á propuesta de los tribunos de la plebe, que, obligatorios en un principio sólo para los plebeyos, llegaron con el tiempo á alcanzar fuerza general de obligar: 3° de los *senado-consultos*, formados por el Senado sin participación del pueblo y cuya fuerza obligatoria no fué reconocida por éste hasta que se les dió general á los plebiscitos. El derecho no escrito comprendia: la costumbre, tradición de los antiguos *(mores majorum)*, la opinión generalmente admitida *(consuetudo)* y la autoridad de la cosa juzgada *(auctoritas rerum perpetuó similiter judicatarum)*. La fuente principal de las reglas jurídicas manifestadas en esta última forma era el *edicto del pretor*, magistrado anual encargado de administrar justicia, ya entre los romanos solos *(prætor urbanus)*, ya entre los romanos y los extranjeros *(prætor peregrinus)*. Las decisiones de éste llegaron á constituir el llamado *jus gentium*, conjunto de principios comunes á todos los pueblos, que aplicado en un principio sólo á los extranjeros se hizo con el tiempo extensivo á los romanos.

Para prevenir la sospecha de parcialidad, cada año publicaba el pretor el conjunto de reglas que se proponía seguir en la administración de justicia. Estas reglas eran admitidas generalmente por el pretor que sucedía al anterior y adicionadas con otras nuevas, si lo juzgaba conveniente, y por ellas se fué templando el rigorismo del derecho extricto, haciéndole más equitativo por medio de las *exceptiones* y *præscriptiones* y por las *restitutiones* y *fictiones juris*. El conjunto de reglas debidas á los pretores se comprendía con el nombre genérico de *jus prætorianum* ú *honorarium*. Otra fuente del derecho no escrito eran los trabajos y consultas de los jurisconsultos (*responsa prudentum*).

Desde la terminación de la república las fuentes del derecho fueron: 1° los *decretos del pueblo*, leyes ó plebiscitos: 2° los *senado-consultos*, dictados á propuesta del príncipe: 3° las *constituciones imperiales* que comprendían: los *placita* ó *constitutiones*, ordenanzas ó reglamentos dictados por el príncipe; los *decreta* decisiones dictadas sobre las elevadas en apelación al consejo privado del emperador; y *rescripta* instrucciones que el príncipe dirigía á los funcionarios ó á los particulares: 4° *los edictos* de los pretores; y 5° *las opiniones de los jurisconsultos*. De estas fuentes se formaron andando el tiempo los códigos en que habían de calcarse muchas leyes modernas, y no es necesa-

rio decir hasta que punto la influencia del derecho romano se hizo sentir en nuestra patria, sujeta tanto tiempo á Roma, recordando que el Breviario de Aniano ó de Alarico, *Lex romana,* fué extractado de los códigos Hermogeniano y Teodosiano, y que las Partidas, el monumento más notable del derecho patrio, vigente aún en muchas de sus disposiciones, está basado en gran parte en aquel derecho.

La organización política de Roma, monárquica en un principio, pero templada por la intervención del senado y de los comicios en los asuntos graves del Estado, y republicana con marcado tinte aristocrático despues de la expulsión de los Tarquinos, fuese democratizando posteriormente á medida que los plebeyos hicieron valer su importancia; y sus *cónsules*, investidos á veces de amplios poderes cuando lo exigia la salud pública; sus *censores,* que mantenian elevado el nivel moral del pueblo; sus *pretores,* que administrando justicia cultivaron con éxito el derecho y le hicieron más humano; sus *tribunos*, que eran un valladar inexpugnable contra las invasiones del poder; y aun su mismo *dictador,* que concentraba todos los poderes y atribuciones en épocas gravísimas y excepcionales, son instituciones que demuestran hasta qué punto llegaba la previsión de los romanos y cuánto velaban porque la grandeza de su pueblo no sufriera menoscabo. Por desgracia, cuando la astuta habilidad de Augusto trocó de hecho el gobierno republicano en monarquía, aunque respetando en la forma las instituciones republicanas, dió el primer paso para el imperio, que con sus arbitrariedades, con su inmoralidad y despotismo, su apego al fausto y á los goces sensuales había de rebajar el carácter de aquel pueblo tan grande, debilitándole y haciéndole impotente para resistir las repetidas invasiones de los pueblos bárbaros, que traían todo el vigor de las nuevas razas.

Para las artes no estuvieron dotados los romanos de originalidad y fuerza creadora. De los etruscos recibieron las primeras nociones de arquitectura y con el tiempo hubieron de imitar á los griegos. Sin embargo, aunque inferiores á éstos en el gusto y pureza de las construcciones, imprimieron á sus obras un carácter notable de solidez y utilidad y se dedicaron á diversos géneros que los griegos habían descuidado, como cloacas, acueductos, anfiteatros, mausoleos, arcos de triunfos, caminos públicos, termas, etc. En sus imitaciones de los griegos prefirieron el orden corintio, al que supieron dar nuevas formas sin privarle de sus rasgos distintivos; y sustituyeron el empleo del arco y de la

bóveda á las plata-bandas y á los techos rasos, pudiendo utilizar de este modo materiales pequeños y dar á los edificios dimensiones grandiosas. De sus monumentos se conservan aún muchos recuerdos en España como los acueductos de Segovia y Mérida, el anfiteatro de Sagunto, el *Monte furado* ú horadado en Galicia para dar paso al rio Sil, las ruinas del templo de Augusto en Tarragona, etc. En la escultura no registra la historia el nombre de un solo escultor romano que pueda llamarse grande, lo cual se explica porque, desde las guerras púnicas, los romanos llevaban de los pueblos vencidos una cantidad considerable de estátuas, que, si por de pronto no servían más que para decorar los triunfos, llenaron después las plazas, los monumentos públicos y las casas de los particulares, dispensándoles sus espoliaciones del estudio y trabajo en este arte. Otro tanto se puede decir de la pintura, pues la mayoría de las obras de algún mérito que había en Roma ó fueron despojos de los vencidos ó ejecutadas por artistas griegos. La música no fué en realidad cultivada por los romanos; así que ni los cantos de los *Arvales,* ni las danzas de los *Salios,* ni los acompañamientos de flautas en las ceremonias fúnebres pueden llamarse manifestaciones del arte, y cuando los músicos griegos y asiáticos afluyeron á Roma, la música griega estaba ya en decadencia, por lo que, si bien las ejecuciones musicales fueron grandiosas por el número de músicos y cantores, que llegó á 11.000 en una naumaquia de tiempo de J. Cesar, es difícil hallar en ellas lo que constituye la esencia de este arte bello.

No así en la literatura. La literatura romana fué original en ciertos géneros como la sátira, la epístola y algo también en la elocuencia, y aunque imitó á Grecia en la poesía, en la filosofía y en las ciencias, llegó en su imitación á igualar á los modelos. Es verdad, que dramática y positiva como el genio político de los romanos, da poco á la imaginación y á la fantasía y busca más las aplicaciones á la conducta en la vida; que atenta principalmente á los negocios y á la política, casi no se preocupa de lo relativo al alma y á los problemas del destino humano; que está falta de la riqueza y de la inspiración inagotable del genio griego; pero tiene la literatura latina el mérito y la originalidad de haber igualado la precisión y el vigor de su lenguaje con la firmeza y la energía del pueblo rey.

V—Los *bárbaros* que á fines del siglo IV y principios del V invadieron la península son considerados generalmente como de *raza germánica.* Importa por lo mismo conocer lo que pasa

como opinión más autorizada respecto al carácter y costumbres de los germanos, y lo que especialmente puede decirse de los godos, que asentaron su dominación en España logrando expulsar de ella ó anular á los demás pueblos. La antigua Germania, situada probablemente entre el Rihn por el Oeste, el mar Báltico por el Norte, el Danubio por el Sur y cuyos límites orientales no es posible determinar con aproximación, efecto de las guerras continuas de estos pueblos con los slavos, estaba en tiempo de los romanos cubierta de inmensos bosques, y aunque su clima era duro por lo elevado de sus montañas y las inundaciones de sus rios, tenia también extensos terrenos muy abundantes en pastos.

Los pueblos habitantes de esta comarca cambiaron frecuentemente de morada por las guerras incesantes que sostenian con sus vecinos, y muchos desaparecieron, fueron sometidos á otros ó emigraron. Desde mitad del siglo III de nuestra era á fines del IV parece que había en la Germania cuatro grandes confederaciones: la de los *sajones* al Norte; la de los *francos* en el bajo Rihn; la de los *alemanes* en el alto Rihn, y hacia el Danubio la de los *godos*, que comprendía también los *hérulos* y los *gépidos*. Había además muchos pueblos aislados entre los que se cuentan los *marcomanos*, los *suevos*, los *borgoñones* y los *lombardos*.

Los caracteres físicos de esta raza eran una gran talla, una fuerza extraordinaria, ojos azules, piel blanca y blonda cabellera que dejaban crecer, como distintivo de hombres libres. Acostumbrados desde la infancia á los rigores del clima, iban casi desnudos consistiendo por lo general su escaso vestido en una capa corta ó en una piel sobre las espaldas. Su alimento era la carne que les proporcionaban la caza ó sus propios rebaños, la leche de los mismos y frutas silvestres. El amor á la libertad y la pureza de costumbres formaban los rasgos principales de su carácter moral. Era costumbre general la monogamia, aunque sólo algunos príncipes, y muy raramente, tomaban dos mujeres para facilitar la unión entre familias poderosas, y más por ostentación que por perversión ó vicio. Las mujeres no llevaban dote al matrimonio; al contrario, la recibían de su esposo y consistía ordinariamente en un par de bueyes, un caballo de batalla, escudo y armas, para indicar que la mujer debía compartir con su esposo las fatigas y los peligros de la guerra. El adulterio era muy raro; la mujer culpable, desnuda y con los cabellos cortados era echada de casa del marido y paseada por la población azotándola con varas. Las madres y sus mujeres les

acompañaban á la guerra y no era cosa extraña verlas rivalizar con los hombres en valor, estimularles en la pelea, contenerlos en la fuga, restablecer el combate; y cuando la fortuna les era adversa ahogaban algunas veces á sus hijos y se daban la muerte con sus propias manos para evitar la esclavitud. La hospitalidad era también un distintivo de los germanos; nadie, sin desdoro, podia rechazar á un huesped, conocido ó desconocido, y cuando marchaba se le daba cuanto en la casa le había gustado; pero también se le pedía con la misma libertad. Al lado de estas grandes cualidades tenian los vicios comunes á todos los pueblos bárbaros: la embriaguez, el juego, las reyertas sangrientas, y los odios hereditarios. Entre los suevos del Mediodia parece no se conoció la propiedad individual del terreno: todos los años se distribuian las tierras entre las familias y ninguna podia conservar la suya pasado un año; parte de la población quedaba cultivando las tierras mientras la otra estaba empeñada en lejanas empresas. Las tribus septentrionales tenian más fijeza; cada padre de familia se hacía su cabaña aislada cerca de una fuente y de un monte para el sostenimiento de sus ganados y se dedicaba al cultivo de cereales, legumbres, lino; etc. Su vida era un término medio entre la completamente pastoral de los slavos y la sedentaria y agrícola de los romanos. La población se dividía en cuatro clases: 1ª los *esclavos,* compuesta por prisioneros de guerra, náufragos y hombres que habian perdido en el juego su libertad: 2ª los *colonos,* especie de siervos de la gleba con domicilio propio, hogar y familia; pero con la obligación de pagar al señor un canon ó renta anual en cereales, comestibles y ropas, sujetos también al servicio militar y sin el derecho de tomar parte en las asambleas de la nación: 3ª los *hombres libres* ó *nobles*; y 4ª los *príncipes* ó magnates, simples particulares poderosos, á los cuales se unian en calidad de compañeros otros nobles menos ricos que les asistian en las guerras. Al lado de estos jefes particulares estaban los magistrados de la tribu.

En cada cantón había un magistrado para administrar justicia y terminar las discordias. El nombre de *rey* fué dado en tiempo de César al jefe común militar de los suevos que les conducia en la guerra, y en tiempo de Tácito parece se aplicó también á un magistrado que sólo ejerció funciones civiles y judiciales. En la mayoría de las tribus germánicas el rey era elegido de la familia más distinguida y el cargo era en ella hereditario. Su poder era limitado, principalmente en los pueblos occidentales y en los de las costas del Occéano. Por cima de él estaba la asam-

blea general de la nación, compuesta de todos los hombres libres y que se reunía muchas veces en los dias de plenilunio ó novilunio. A ella acudia armado el pueblo, y la conservación del orden estaba encomendada á los sacerdotes. La aprobación de las proposiciones del rey se indicaba por el golpeo de los escudos con las armas, y la desaprobación por murmullos y gritería. En estas asambleas eran sentenciadas todas las causas de interés general que llevaban aneja la pena de muerte: ésta no podía ser impuesta sino por toda la nación y ejecutada por los sacerdotes. En algunas tribus el poder real era mucho más ilimitado. Para el caso de guerra se elegía un jefe conocido por su bravura, al cual obedecian todos los *príncipes* ú *optimates* y sus compañeros, y mandaba el ejército mientras el rey permanecia a frente de la tribu. Cuando había peligro general para la tribu, todos los guerreros tomaban las armas y hasta las mujeres y los niños seguian en carros á los ejércitos. Antes del combate cantaban una especie de himno guerrero poniendo los escudos delante de la boca para aumentar el ruido y espantar á los enemigos. Era ignominioso perder el escudo en la pelea; pero la huida ó retirada para volver después sobre el enemigo, se consideraba como acto de prudencia y no como cobardía.

Como consecuencia del espíritu independiente de los germanes, eran muy limitadas las atribuciones de sus magistrados, no pudiendo prender á un hombre libre, ni aplicarle pena alguna corporal.

La venganza privada era reconocida y sancionada como un derecho, y todo individuo estaba obligado á vengar los agravios de sus deudos y amigos, haciéndose de este modo implacables las enemistades y los odios de raza; pero podian expiarse los agravios por medio de multas ó composiciones, que se dividían entre el rey ó el Estado y los ofendidos ó sus parientes. Entre éstos los sobrinos maternos eran tan queridos de sus tios como de sus padres y había quien consideraba aquel vínculo como más estrecho.

En general los germanos eran supersticiosos; sacrificaban los prisioneros en honor de Marte; le ofrecian también las primicias del botín de guerra, y cuando tronaba, pensando que se hacía fuerza á los dioses, lanzaban sus flechas á lo alto para ayudarles. Creian en la inmortalidad del alma y en los premios y penas de la otra vida. Los sacerdotes custodiaban las enseñas militares de la nación, presidian las asambleas y ejecutaban las sentencias capitales, pues sólo ellos tenian el poder de herir á un hombre

libre. Había también sacerdotisas á quienes atribuian el don de predecir los acontecimientos futuros.

Además de los rasgos propios de la raza germánica, distinguíanse los *godos* por la pureza de sus costumbres y por la fidelidad á sus mujeres; por el cariño y afecto á sus parientes y amigos á quienes defendian como á sí mismos; por su compasión hacia los pobres, á quienes procuraban descargar del peso de los tributos que imponian á los ricos; por su confianza en Dios, á quien acudian y se encomendaban en sus empresas; y no obstante ser arrianos en su mayoría, respetaban á los sacerdotes católicos. Esto es principalmente lo que del carácter moral de los godos dicen los historiadores contemporáneos á su irrupción en el imperio de Occidente, y por más que la pintura sea algún tanto exagerada, es lo cierto que el sentimiento de la dignidad personal, la frugalidad y la templanza, el respeto á la mujer, la fidelidad conyugal y el horror á la esclavitud, aparecen constituyendo el fondo del carácter moral de este pueblo, en quien se infiltraron bien pronto las ideas y máximas del cristianismo y que mostró desde luego gran gusto por la legislación romana, lo que había de facilitar mucho andando el tiempo la fusión de ambos pueblos en la península.

De la organización política de los visigodos nos da idea el Fuero Juzgo; pero de ella habremos de ocuparnos más adelante, bastando ahora consignar que en dicho código se proclamó, al menos implícitamente, el principio de igualdad ante la ley, reconociendo que ésta, además de expresión del derecho, ha de ser universal, igual para todos, extraña á todo interés particular y dada para el pró común; y se fundó la legitimidad del poder público en la justicia y la verdad por ser su origen divino, y en la observancia de las leyes á que súbditos y príncipes deben acomodar sus actos y están igualmente sujetos.

VI—La Arabia, extensa comarca situada en la parte Occidental del Asia y comprendida entre el Mar Rojo por el Oeste, el golfo Pérsico y el Océano Indico por el Oriente, el golfo de Adem y el Océano Indico por el Mediodia, no tiene límites determinados por el Norte, donde sus vastos desiertos se confunden con los de la Siria y la Caldea. Los griegos y los romanos la dividían en Arabia *Feliz*, correspondiente al *Iemen* actual, *Petrea* y *Desierta*. La Arabia fué una de las comarcas de más antiguo habitadas. Mucho tiempo antes del islamismo todas las tribus árabes se dividían en dos razas. La más antigua, habitante del Iémen, se decía descendiente de Kahtan, que es el Jektan

de la Biblia, y la más moderna, originaria del *Hidjaz*, la Arabia Petrea de los antiguos, consideraban como su progenitor á Adnán, nieto de Ismael.

Los habitantes del Yemen ó Arabia feliz cultivaban sus campos y comerciaban con las Indias Orientales, la Persia, la Siria y la Abisinia; pero la mayoría de los árabes se dedicaban al pastoreo, haciendo vida nómada y plantando por el momento sus tiendas donde el terreno les ofrecía pastos y aguas para sus ganados. La necesidad de defender á sus familias y ganados, ó de proteger las carabanas comerciales que trasportaban sus mercancías á través del desierto, les precisaba á ejercitarse en las armas, con lo cual vino á ser el pueblo árabe pastor y guerrero á un tiempo, valiente é impetuoso, franco y hospitalario por sus tradiciones y costumbres patriarcales; pero violento, colérico é implacable en su venganza, de la que hacía una especie de culto, se trasmitía por herencia y era inextinguible en las familias y en las razas. La historia de los árabes durante su dominación en España, donde, desde los odios y rencores entre Muza y Tarik, los enconos y rivalidades entre los caudillos y los emires se reproducen constantemente, prueba hasta que punto podía llegar la saña y el caracter vengativo de estas gentes, que en medio de su fanatismo religioso y de su odio á los cristianos, hacían muchas veces treguas con ellos y hasta invocaban su ayuda para luchar entre sí en fratricida guerra, desconociendo en su ciega ira cuánto favorecían con sus discordias la causa de los cristianos y cómo labraban su propia ruina.

La religión natural, en un principio la de los árabes, fué reemplazada andando el tiempo por multitud de creencias, el judaismo, el sabeismo, la idolatría y las heregías cristianas, hasta que todas dejaron su puesto al islamismo, predicado por Mahoma, y cuyos dogmas se contienen en el *Corán*, código á la vez religioso, moral, político, civil y militar de los musulmanes. Prescindiendo ahora de la parte literaria de este libro dictado á Mahoma, según los árabes, por el angel Gabriel, y del orden y método, que para nuestro actual propósito no es indispensable conocer, su dogma fundamental es la unidad de Dios y la misión profética de Mahoma: «*No hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta.*» Este dogma que tendió á destruir la idolatría, fué sin duda un gran paso para la civilización de aquellas regiones y acaso aprendido por Mahoma en su comunicación con los judios y cristianos. Son, además de la existencia y unidad de Dios, enseñanzas dogmáticas del Corán: la existencia de los

ángeles; la inmortalidad del alma; la verdad de las escrituras y de los profetas; la resurrección; el juicio final; los premios y penas, aunque sensuales, de la otra vida, y la inmutabilidad de los decretos de Dios, que ha determinado de antemano el bien y el mal; de donde vino la frase *estaba escrito*; expresión gráfica del fatalismo que pesa sobre los hijos del Islam.

Las principales obligaciones del musulmán se hallan contenidas en las palabras con que Mahoma dice contestó el angel Gabriel cuando éste le preguntó en que consistía el islamismo: En creer que no hay más que un Dios, dijo Mahoma, y que yo soy su profeta; en observar rigorosamente las horas de oración; en dar limosna; en ayunar el *Ramadán*, y en hacer el viaje á la Meca, si es posible. Se prescriben además como deberes de todo islamita las abluciones ó purificaciones, la santificación del viernes, por creer que en tal dia crió Dios al hombre y porque en él hizo Mahoma su entrada en Medina, la abstención del vino y demás licores fermentados, la de la carne de puerco y de cualquiera otro animal que hubiera muerto ahogado ó de una caida ó herido por otro animal ó sacrificado á los ídolos; pero los árabes de España no cumplieron con fidelidad estos preceptos disculpándose con la dureza del clima y las fatigas de la guerra. Se prohiben los juegos de azar; pero se permite la poligamia hasta con cuatro mujeres y varias esclavas. La limitación en el número de mujeres no comprendió á Mahoma, quien pretendía haber recibido de Dios el privilegio de tomar cuantas mujeres y concubinas quisiera, inclusa la perteneciente á otro. El divorcio era lícito para los hombres por causas livianas; mas no así para las mujeres que debían fundarlo en poderosas razones. Tales eran los principales preceptos morales del Corán.

En el orden civil son de notar como disposiciones de este libro, la consideración igual que daba á los hijos de las mujeres y de las concubinas, teniendo únicamente por bastardos á los hijos de las mujeres públicas y de padre desconocido; la desigual distribución de las herencias, de las que correspondía á los hijos varones doble parte que á las hembras; el castigo del robo consistente en la pérdida de la mano; la pena del homicidio que se castiga con la muerte, aunque se admite también la composición con los parientes; la del talion, admitida para los homicidios y las injurias personales; y la del adulterio que se castiga con la muerte siempre que se pruebe con cuatro testigos presenciales, entendiendo que el testimonio de dos mujeres es equivalente al de un hombre.

La propaganda de la doctrina de Mahoma por medio de la guerra es lo más notable del Corán, y en él se ven multitud de preceptos encaminados á hacer del pueblo árabe una nación de guerreros á servicio de la idea religiosa. La guerra á los que el Corán llama infieles se reputa como el servicio más agradable á los ojos de Dios: los que sucumben combatiendo por la fé son considerados como mártires y entran inmediatamente á gozar los placeres del Paraiso; y la obligación de acudir á las armas sin excusa ni pretexto alguno es común á todos los musulmanes capaces de llevarlas, cuando se llama á la guerra santa. En las guerras contra los llamados infieles les daban á elegir entre convertirse al mahometismo, ó pagar un tributo continuando en la práctica de su religión, ó aceptar las consecuencias de la lucha en la que, si vencían los musulmanes, condenaban á muerte á los vencidos, ó los reducían á cautiverio, así como á sus hijos y mujeres.

El Corán hizo de los árabes un pueblo conquistador por el fanatismo que supo inspirarles; pero en cambio, la fatalidad que hacía pesar sobre ellos el despotismo á que estaban sujetos, por reconcentrarse todos los poderes y atribuciones sociales en un sólo hombre, monarca, pontífice, juez y caudillo á un tiempo; la falta de verdaderas jerarquías en todos las órdenes por consecuencia del poder absorbente de aquel; y la oposición á toda clase de innovaciones y reformas en la legislación, condenó al pueblo musulmán á la inmovilidad, por lo menos en su organización política.

Sin embargo, los árabes de España se hicieron pronto independientes, nombrando un *emir* ó jefe que, á imitación de los califas, reunió la potestad civil y religiosa y fué designado por los *jeques*, personajes principales y ancianos de las tribus; fundando una dinastía propia, que llegó á convertirse en califato, é introduciendo algunos cargos desconocidos en el Oriente.

El *mexuar* ó *meschua*, establecido por Abderramán, era una especie de consejo de Estado al que solía consultarse en casos graves; intervenía para dirimir las luchas intestinas, y de él salían los altos funcionarios, entre los que descollaba el *hagib* ó primer ministro, con atribuciones que abarcaban todos los ramos de la administración pública. Al frente de las provincias se hallaban los *walíes* ó gobernadores, dependientes directamente del emir ó del califa, y bajo la autoridad de aquellos estaban los *wazires*, lugartenientes de distrito, y los *alcaides*, comandantes de fortaleza.

La administración de justicia competía á los *cadíes*, quienes podían también en caso de necesidad reemplazar á los *imanes* ó sacerdotes, y entre ellos el *cadí* de los *cadíes*, que era su presidente, tenía jurisdicción tan elevada y sus facultades eran tales, que hasta los emires y califas no podían dispensarse de comparecer ante su tribunal cuando por él eran citados. A las órdenes de los cadíes había un subalterno, llamado *alwacil*, para prender á los delincuentes y ejecutar las sentencias.

La sucesión al trono era parecida á la entonces vigente en la monarquía de Asturias y León. El califa ordinariamente asociaba al trono á su hijo predilecto ó cuando menos le designaba como sucesor, *alhadí*, y para hacer la designación eran convocados los altos funcionarios y los jeques principales de las tribus á los que el monarca pedía su reconocimiento. Muerto el califa era aclamado solemnemente el príncipe jurado y se oraba por él en todas las mezquitas ó *aljamas*; sin que obstaran, ni esta aclamación, ni aquel reconocimiento anterior para que los que se creían injustamente postergados hicieran protestas y reclamaciones y provocaran disturbios que muchas veces llegaron á tomar las proporciones de verdaderas guerras civiles.

En sus ejércitos, además de los carros y acémilas, se sirvieron de los camellos, traídos á España para el trasporte de la impedimenta y campamentos. La fuerza principal y que más estimaban era la caballería, ligera como el viento y montada por hábiles ginetes, de gran éxito en las *algaras* ó rápidas incursiones y sorpresas; pero que no siempre podía luchar ventajosamente en las grandes batallas con la infantería cristiana.

La marina de los árabes españoles, insignificante en un principio, tomó gran vuelo desde Abderramán I, hasta el punto de ser poderosa con el tiempo para contener las invasiones de los moros de Africa y las de los francos de Aquitania y tener en constante alarma á las poblaciones del Mediterráneo, asaltadas continuamente por corsarios sarracenos de España, que las destruían y saqueaban, reduciendo á cautiverio á los hombres, mujeres y niños que cogían.

La civilización musulmana llegó al más alto grado de esplendor en los reinados de Abderramán III y de su hijo Alakén II, quienes protegieron las artes, las ciencias y la literatura, llenaron de grandiosos palacios y de suntuosas mezquitas la capital del califato, á donde acudían embajadores de casi todos los soberanos extranjeros, ganosos de adquirir la amistad del califa; donde se cultivaban las ciencias, se encontraban medios abun-

dantes de ilustración en sus numerosas escuelas, en sus famosos liceos y en el saber de sus renombrados maestros, y se custodiaban los más grandes monumentos producidos por la inteligencia humana en sus bien provistas bibliotecas. Aún se conservan recuerdos de aquella civilización y grandeza en las preciosas obras de arquitectura, que en Córdoba, Sevilla, Granada, etc., causan la admiración de los viajeros y son reproducidas sin cesar por el grabado, la fotografía y la escultura. El genio y la cultura de los árabes, no obstante el antagonismo de religión y de raza, hubo de influir por precisión en el modo de ser de los Estados cristianos, siquiera por la comunicación establecida entre unos y otros, ya por el auxilio que á veces se demandaban y prestaban en sus luchas intestinas, ya por el trato amistoso entre algunos monarcas árabes y cristianos, entre los que pueden citarse como ejemplo Alfonso VI y Almamum de Toledo, y Sancho I el *Craso* y Abderramán III, en cuya corte fué aquel curado de su obesidad y de quien recibió auxilios poderosos para recobrar el trono.

CAPITULO II

EL TERRITORIO

Que las diversas condiciones del territorio pueden, según dijimos en la introducción, influir en el modo de ser político de un país, es cosa clara. La facilidad ú obstáculos que opone su estructura física á la comunicación entre los distintos pueblos; la diversidad ó semejanza de producciones naturales; la analogía de costumbres, de necesidades y de industrias, ó la oposición de hábitos y caracteres derivada del diferente ejercicio que por precisión ha de darse á la actividad según los objetos que, como materias primeras, le ofrece la naturaleza del suelo, hacen más ó menos conveniente que otro, cierto régimen político, más ó menos posible la centralización ó descentralización administrativa, y presentan mayores ó menores facilidades para la formación y conservación de la unidad nacional.

Los rigores del frío hacen difícil la vida por falta de medios de subsistencia, y las familias sujetas á ellos tienden á diseminarse en busca de los escasos productos que el terreno les ofrece. El calor excesivo enerva las fuerzas é inclina á la voluptuosidad y á la indolencia. De donde, mientras los habitantes de aquellos climas necesitan más de la propia iniciativa porque cuentan muy poco con el auxilio de sus semejantes, los de estos son más á propósito para dejarse impulsar y se prestan fácilmente á la dirección agena. Las comarcas situadas á orillas de los ríos caudalosos ó en las riberas del mar, ofrecen medios poderosos para la producción agrícola é industrial, para la navegación y el comercio; y las comodidades de la vida, el frecuente

trato y comunicación con otros, hacen á sus pobladores aptos para la cultura y para las relaciones mútuas, les facilita el cambio de vivienda sin riesgo y sin pena, y determina cierta volubilidad en su carácter haciéndole acomodaticio y social. Por el contrario, lo accidentado del terreno en los paises montañosos exige el contínuo ejercicio de las fuerzas de sus habitantes; facilita su desarrollo, agilidad y robustez; los hace altivos y valientes, acostumbrándolos á luchar con los peligros; y dificultando su comunicación con otras comarcas, los liga fuertemente al territorio en que viven, por cuya independencia luchan hasta el heroismo cuando las circunstancias lo exigen. Añádase á estas diferencias la derivada naturalmente de la consideración distinta que ante la ley ha tenido la propiedad territorial, ya por el origen de las adquisiciones, ya por la clase ó estado de los propietarios, y se verá fácilmente que ha debido engendrar modos de ser diversos en las cosas y, por ende, en las personas que de las cosas viven. Estas indicaciones bastan para justificar que el conocimiento del territorio nacional y principalmente de su consideración legal, es factor que ha de tenerse en cuenta para apreciar con justicia y según razón las instituciones políticas de los pueblos.

Si á los límites naturales se hubiera exclusivamente de atender, la península ibérica estaría sin discusión llamada á constituir un solo Estado, que á poder ser uno por el pensamiento y las aspiraciones como puede serlo por el territorio, ocuparía lugar preferente entre las potencias, por su historia y por su fuerza. Sin embargo, aunque los límites de la península pudieran determinar la formación de un solo Estado nacional, éste debería organizarse, para serlo racionalmente, con una base descentralizadora, sobre todo para las grandes comarcas, si la estructura del territorio hubiera de consultarse. Cortado éste por altas montañas y caudalosos rios, forma cuencas y planicies con climas, producciones, industrias y caracteres diversos que dan lugar á regiones distintas entre sí aun las del mismo centro, y mucho más diferentes de las inmediatas á las costas. Pero dejando á un lado el estudio de la estructura del terreno y sus condiciones climatológicas, cuyo conocimiento nos presta la Geografía y no es peculiar de nuestro actual propósito, veamos á grandes rasgos la distinta consideración que ha tenido en nuestra patria la propiedad territorial á partir del imperio visigótico, con el que comenzó realmente el Estado español.

Lo mismo en España que en la mayor parte de Europa, se

conocieron desde el siglo v hasta el siglo viii, y aun con posterioridad á éste, tres clases de propiedad territorial, llamándose las tierras que constituian cada especie *alodiales*, *beneficiales* ó *tributarias*.

Las alodiales, así dichas de la palabra *alodio*, *loos* lote, suerte, fueron en un principio las tierras que conquistadas por los invasores se sortearon entre ellos. El alodio sólo se tenía, según frase de la época, de Dios y de la espada, y en esto se distinguieron durante mucho tiempo las tierras alodiales de cualesquiera otras, aun de las poseidas en plena propiedad por otro título que no fuera el de la conquista; aunque más adelante se aplicó ya la denominación de alodiales, á todos los terrenos poseidos en propiedad plena, desapareciendo la distinción primitiva. Tenian estas tierras por carácter peculiar, juntamente con la plenitud de la propiedad y los derechos á ésta inherentes, el ser independientes de todo otro que no fuera su dueño, sin estar sujetos á servidumbre, pecho ni tributo, y sin que la inmunidad de tales tierras se menoscabara porque sus dueños pudieran estar sujetos á ciertas cargas ó gavelas respecto al rey, como regalos en ciertas épocas, medios de trasporte para el príncipe ó sus enviados, servicio militar, etc.

En esta clase fueron sin duda comprendidos los dos tercios del territorio que los visigodos vencedores tomaron para sí, dejando el resto á los vencidos.

Los *beneficios*, que algunos historiadores miran como origen del régimen feudal, debieron surgir naturalmente de las relaciones que antiguamente sostenian en la Germanía los jefes con sus compañeros de armas, pues encargados aquellos, según Tácito, de la subsistencia de éstos, y estando su poder en relación con el número de adictos, érales necesario atraerlos y conservarlos en su devoción por medio de regalos de armas y caballos ó por la distribución del botín, producto de contínuas guerras.

Las mercedes y recompensas con que los jefes remuneraban á sus compañeros cambiaron despues de carácter cuando, realizada la conquista, se asentaron en los territorios conquistados, y la propiedad particular de jefes, caudillos y reyes, visigodos especialmente, vino á constituirse por tierras arrebatadas á los habitantes del país ó á otros bárbaros que le habian dominado con anterioridad. Estas tierras aumentadas en lo sucesivo, ya por la conquista, ya por confiscaciones impuestas como pena, ó arbitrariamente, fueron empleadas para recompensar los servicios de los compañeros y para reclutar otros nuevos, á quienes

atraía bajo la bandera del señor la esperanza de sus mercedes. Este fué el origen de los beneficios, cuya antigüedad data del establecimiento de los bárbaros en un territorio fijo.

Los beneficios se concedian ó á título de perpetuidad, ó por tiempo limitado, ordinariamente por la vida del beneficiado: en este caso se llamaban *precarios*. Algunos eran revocados por la voluntad de los donantes, caprichosa á veces; pero excitada y justa otras por la traición ó deslealtad de los beneficiados. En la propiedad beneficial notáronse bien pronto dos opuestas tendencias; la de los señores ó reyes donantes, á sostener su limitación por tiempo y su carácter revocable, y la de los donatarios, á conservarla perpetuamente y á trasmitirla por herencia. Donde triunfó esta última surgió el régimen feudal.

Contra la opinión de algunos autores que juzgan los beneficios donaciones puramente graciosas, sin obligación alguna por parte de los donatarios, dedúcese de su orígen que llevaban aneja la obligación de acompañar y ayudar á los señores en sus empresas y la de serles fieles y leales, y buena prueba es que eran privados de ellos cuando á tales deberes faltaban. La propiedad territorial, alodial ó beneficial, cambió las relaciones entre los señores y los hombres que componían su hueste, pues si en un principio éstos vivían con su jefe lo mismo en la paz que en la guerra y eran propiamente sus *vasallos*, es decir, *comensales* ó compañeros, cuando, dispersándose, fueron á ocupar su propiedad y á habitar en sus tierras, los derechos y deberes recíprocos no surgían ya tan espontaneamente de la naturaleza de las cosas, haciéndose necesario determinarlos de un modo concreto.

Tributarias eran aquellas tierras, que además de no pertenecer en dominio pleno á aquel que las cultivaba, estaban sujetas al pago de un canon ó tributo. Aunque esta propiedad existía ya en España con anterioridad á la invasión de los bárbaros, se aumentó considerablemente despues de ella. Es posible que que el tercio de las tierras dejadas á los habitantes por los invasores quedara en esta condición y lo es también que, al establecerse en un territorio determinado un jefe poderoso, no se le apropiara todo, sino que dejara parte de él á sus antiguos poseedores contentándose con exigirles el pago de algun tributo ó la prestación de ciertos servicios. Además, las luchas que contínuamente se suscitaban entre los mismos conquistadores, y las peripecias de la conquista, que no fué obra de un solo dia, debieron reducir á la condición de tributarias muchas tierras libres, per-

tenecientes á los antiguos habitantes ó á jefes bárbaros, más débiles que sus adversarios, ó que buscaban la protección de los más fuertes pagándoles un tributo en cambio de la seguridad que esto les proporcionaba para sus personas y sus cosas. Añádese á esto que muchos propietarios, ya alodiales, ya beneficiales, no pudiendo por sí cultivar sus tierras, las enagenaban á simples labradores mediante ciertas condiciones, prestaciones ó rentas estipuladas al efecto, y que por su multiplicidad y variedad de formas originaron la diversidad de derechos que con el tiempo se llamaron *feudales*.

La distinta condición de las tierras produjo la consideración diversa de las personas en relación con la propiedad, pues mientras los dueños de tierras alodiales eran como tales independientes, los de tierras beneficiales eran vasallos y dependían en cierto modo del señor á quien debían el beneficio, y los de tierras tributarias estaban sujetos á muchas y muy varias obligaciones en relación con el modo y forma de sus adquisiciones y con el origen de los censos, cánones ó tributos anejos á los terrenos que explotaban.

Esta diversidad de condición de los terrenos pasó con leves modificaciones desde los visigodos á los Estados cristianos que se fueron formando en la época de la reconquista, y así se ven en este período tierras ingenuas ó exentas de pechos y tributos, y tributarias ó sujetas al pago de aquellos. Estas tierras cambiaban á veces de condición según era la de su propietario, de modo que cuando un terreno tributario pasaba á ser propiedad de una persona exenta, invocando ésta sus privilegios los hacía extensivos á todas sus adquisiciones, lo cual hubiera hecho imposible el sostenimiento de las cargas del Estado, si éste no acudiera á limitar la adquisición de tierras tributarias por personas exentas, prohibiéndola en general, excepto en aquellos casos en que por privilegio particular se concediera.

También se distinguieron durante la reconquista y después de ella otras cuatro especies de tierras: de *realengo*, las que radicaban en los lugares sujetos inmediatamente al señorío del rey, quien tenía en ellos la plenitud de la jurisdicción, y en los que todas las atribuciones del poder social, inclusa la recaudación de pechos, censos y tributos, se ejercían por delegados del monarca: de *abadengo*, propias de las iglesias y monasterios y en las que los obispos y abades tenían jurisdicción diversa según los títulos, modo y forma de estas adquisiciones, debidas principalmente á la liberalidad de los reyes ó á la de simples parti-

culares: de *señorío*, procedentes unas de las antiguas casas solariegas y otras de mercedes hechas por los reyes á los nobles y caballeros, ya en premio de sus servicios, ya como donación graciosa hacia sus devotos ó afectos, y en las que también ejercían los señores la jurisdicción que con la propiedad les fué otorgada; de *behetría*, las comprendidas en el término de un lugar de los así llamados, que ordinariamente eran las más exentas de gravámenes y cuyos dueños se estimaban independientes hasta el punto de juzgar que sus prestaciones eran hijas, más que de la obligación, de espontanea voluntad.

Como estas tierras estaban más ó menos gravadas con impuestos y sujetas á jurisdicciones distintas según fuese su poseedor, se prohibió varias veces por las leyes su trasmisión á señores de otra clase, así que las de realengo no podian enagenarse á las iglesias y monasterios, ni estas pasar á realengo, como ni las de señorío ó solariegas á behetría ó recíprocamente; pues entendiendo nuestros antiguos legisladores ser necesaria la propiedad territorial para el prestigio é independencia del poder y para la conservación de instituciones ú órdenes sociales convenientes en el organismo del Estado, como los institutos religiosos y la aristocracia, así como para la de las libertades locales, contrapeso de los anteriores, cuidaron en sus disposiciones de que no se absorbieran unos por otros dichos elementos, de que no perecieran por falta de los medios materiales que la propiedad ofrece, y de no quedar sin recursos para las atenciones del fisco, si por acaso la mayor parte de la propiedad fuese á parar á manos inmunes.

Vese por lo dicho que desde tiempos muy antiguos hubo en España propiedad territorial de condición diversa, y esta desigualdad, así como la prohibición de enajenar bienes raices pertenecientes á ciertas instituciones ó fundaciones religiosas, científicas y benéficas, ó á ciertas personas, nobles, caballeros y fijodalgos, se ha conservado hasta época muy reciente, en que la influencia de otras ideas, principalmente económicas y políticas, ha hecho cesar las diferencias sujetando toda propiedad al pago de impuestos y declarando libre su trasmisión.

CAPÍTULO III

LA RELIGIÓN

La influencia de las ideas religiosas en la vida política y social de nuestra patria se hizo sentir notablemente desde que en ella se establecieron los visigodos. Atraidos éstos al arrianismo por la predicación de Ulfilas, profesaban los errores de esta secta cuando vinieron á España y el apego á sus doctrinas se tradujo por una intolerancia tal, que puso á veces en peligro la naciente monarquía, ya provocando guerras desastrosas, como la que costó á Alarico el trono con la vida en la batalla de Poitiers, ya suscitando luchas intestinas, como la sostenida entre Leovigildo y su hijo, y dificultando la fusión de los conquistadores arrianos con los hispano-romanos, católicos en su mayoría. Convertido Recaredo al catolicismo, desaparece el obstáculo que la diversidad de religión oponía á la unidad nacional, y el espíritu cristiano se abre paso en las leyes y en la organización del Estado, inspira los más trascendentales acuerdos de los concilios toledanos y prepara la fusión en uno solo de ambos pueblos. Cuando más adelante, repuestos los cristianos de la sorpresa y aturdimiento que les causara la brusca y rápida invasión musulmana, la religión congrega á un puñado de valientes en las montañas de Asturias y de Sobrarbe, en nombre de la Cruz y con su auxilio emprenden la obra épica de la reconquista, de que ningún otro pueblo tiene ejemplar en la historia y llevada á cabo con el concurso de la fé, de la constancia y del amor de la libertad y de la patria. El espíritu religioso reanima á los abatidos españoles despues de Covadonga y en la batalla de Clavijo; reune los estados cristianos en la de Calatañazor;

les alienta en la inmortal de las Navas de Tolosa; palpita en todas las empresas de los monarcas españoles; se siente hasta en las frases sublimes con que el jefe de los comuneros contiene los arranques de Juan Bravo al subir la escalera del patíbulo; acompaña con Fray Bartolomé de las Casas á los héroes y á los aventureros españoles más allá de los mares; empuja las flotas de don Juan de Austria contra las hasta entonces invencibles de los turcos; opone tenaz resistencia al desarrollo y á la invasión en España de la anárquica Reforma; lucha por la independencia de la patria contra el coloso del siglo XIX; se manifiesta vivo y grande en la primera constitución española al proclamar, no obstante la perturbación producida en los espíritus por los filósofos, enciclopedistas y revolucionarios franceses, que "la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera;„ y produce violentas sacudidas ó sirve de pretexto á terribles luchas civiles en los modernos tiempos cuando la impiedad ó la imprudencia política atenta contra el sentimiento de los españoles.

Pero el fervor religioso se manifestó desde los primeros tiempos intolerante y hasta cruel con los sectarios. El Fuero Juzgo contiene en su libro XII, títs. II y III dupl. muchas leyes que tienden á hacer imposible la vida de los judíos en el reino visigodo, prohibiéndoles celebrar la pascua, guardar el sábado, circuncidarse y casarse según su ley, abstenerse de los manjares prohibidos, prestar testimonio contra los cristianos, etc.; sancionando todas estas disposiciones, aceptadas por los judios según la ley XVI, tit. II del código romanceado, con la pena de muerte ó con la más dura servidumbre, y ratificándolas y aumentándolas con otras posteriores insertas en el mismo libro, que prueban hasta qué punto las ideas más grandes y los sentimientos más elevados pueden engendrar la tiranía y la injusticia, cuando arraigan en mentes extraviadas ó en corazones sobreexcitados por la pasión. Sin embargo, sean cualesquiera las censuras que merezca la conducta intolerante de los visigodos católicos para con los judíos, tal crítica no mermará en nada los servicios que la Iglesia prestó á aquella sociedad, ni los méritos contraidos por los obispos en la obra de la civilización. El mismo Fuero Juzgo nos suministra pruebas inequívocas de esta influencia transcribiendo cánones de los concilios en que, ora se encarga á los reyes sean justos y misericordiosos, ya se previenen los trastornos y ambiciones desmedidas procurando asegurar la libertad en la elección de los monarcas y evitar interreg-

nos, ora se inculca á los príncipes que tengan virtudes patrióticas y que no sean arbitrarios ni déspotas con los súbditos, ya se hace distinción entre los bienes del príncipe como tal, y los que pueda tener como particular, acaso para prevenir toda tendencia á los reinos patrimoniales, etc., etc. Leyes II y sig. del título primero.

Y aun cuando el extravío de los que mandan pudiera desnaturalizar el sentimiento religioso y hacerles abusar de su poder en nombre de éste, siempre sería cierto, como dice Montesquieu, "que la religión es el único freno capaz de contener á los que las leyes no contienen; que el príncipe que ama y teme la religión es un leon que cede á la mano que lo apacigua y acaricia; que la religión cristiana es contraria al despotismo puro por cuanto la dulzura que recomienda el evanjelio se opone á la cólera despótica de que los príncipes necesitan para cometer injusticias y ejercitar sus crueldades, y los hace también más capaces de sujetarse á las leyes y de conocer que no lo pueden todo; que, aun sin proponerse al parecer más objeto que la felicidad de la vida futura, la religión cristiana forma también la de la presente; y que los principios del cristianismo, bien grávados en los corazones, serían infinitamente más fuertes que el falso honor de las monarquías, las virtudes humanas de las repúblicas, y el temor servil de los Estados despóticos.„

Con ser tan cierta la benéfica influencia de las ideas religiosas, la consideración, el respeto, los privilegios que con frecuencia otorgaron los reyes á los ministros de la religión llevaron á ciertos espíritus, en quienes ha predominado principalmente el sentimiento de la igualdad, á declamar contra preeminencias tales y, cegados por la pasión, á confundir en un solo anatema la religión y los privilegios concedidos á los ministros, á las iglesias, fundaciones é instituciones religiosas. Es muy cierto, por lo que hace á nuestra España, que, desde la monarquía visigoda, fueron rodeados los ministros é instituciones eclesiásticas de franquicias, mercedes y distinciones que los constituían en una situación excepcional y preeminente y daban al clero godo uña grande autoridad en todas las esferas sociales. Así lo prueban entre otras la ley I, título preliminar, en que el rey Sisenando encarga á los padres del concilio que velen por la guarda de los derechos de la Iglesia y que enmienden las faltas y corrijan los abusos; la XXVIII, lib. II, tit. I, en que Flavio Rescindo encarga á los obispos "amonesten los iuezes que iudgan tuerto contra los pueblos que meioren, é que fagan buena

via é que desfagan lo que iudgaron mal;„... la I, tít. I, lib. V, en que se establece la amortización eclesiástica: "é por ende establecemos que todas las cosas que fueren dadas á las eglesias ó por los príncipes ó por los otros fieles de Dios, que sean siempre firmadas en su juro de la eglesia;„ y las I, II y IV, tít. III, lib. IX, relativas al asilo eclesiástico; disposiciones que, como toda ley referente á privilegios de la Iglesia, han sido criticadas con más ó menos dureza en los modernos tiempos. Pero, "como no fué la violencia, dice el Sr. Colmeiro, el medio usado para enseñorearse del corazon de los pueblos, importa descubrir el misterio de aquella blanda y suave dominación„... "Cuando los reyes visigodos, continúa el autor citado, se propusieron levantar una monarquía fuerte y duradera en España, buscaron el arrimo del clero como la yedra se reclina en algun tronco que la sustenta, y un clero, tan señor de las voluntades que ofrece una parte de su autoridad al príncipe, no es maravilla si se reserva otra mayor para sí mismo. Las leyes y los cánones se prestaban mútuo socorro: el código criminal y el eclesiástico se completaban juntando á la pena la penitencia; y en suma, si el sacerdocio impartía el auxilio del imperio para dominar las conciencias, también en cambio el imperio solicitaba el ayuda del sacerdocio para mejor reprimir los actos externos..... La pompa de las ceremonias cautivando el ánimo de la muchedumbre:... el derecho de asilo mitigando el rigor de las leyes: la emancipación de los esclavos, la protección de los libertos y su promoción á las órdenes mayores; el socorro dispensado á los pobres, huérfanos y viudas y en general á cualquiera persona miserable: la igualdad de todos los hombres en la casa de Dios, donde se confundían el libre y el siervo, el noble y el plebeyo, el godo y el romano: la enseñanza del clero en las escuelas, abiertas á la juventud inclinada á las letras, todo contribuía á que los obispos y sus ministros se grangeasen el amor y el respeto de las gentes en un periodo de nuestra historia en el cual los derechos y deberes políticos cedían el paso á los afectos é intereses religiosos.„

Iniciada la reconquista bajo la enseñanza de la cruz y á su amparo, los primeros triunfos de los cristianos fueron mirados como favor especial del cielo, y la intolerancia religiosa hubo de reproducirse contra los judíos y manifestarse dura y enérgica en los primeros tiempos contra los moros, á quienes miraban aquellos como enemigos de su Dios y de su patria. Sin embargo, el carácter humilde y astuto de los judíos les facilitó intruducirse en los pueblos y ciudades, y con su habilidad en el manejo de

los negocios, juntamente con la tenacidad en sus propósitos y con su pericia y saber, llegaron á insinuarse en el ánimo de algunos monarcas cristianos que utilizaron sus servicios como médicos, recaudadores de tributos, tesoreros y administradores de las rentas reales. Pero estas distinciones de los reyes y aun los mismos ordenamientos y concesiones que á veces pudieron obtener no les libraron del estigma, ni se les permitió vivir mezclados con el resto de la población, sino en barrios aislados, á que llamaban *juderías*, ni el odio del pueblo cesó nunca de perseguirles, desbordándose á veces en asonadas y motines en que corría la sangre hebrea.

La lucha con los moros, de raza y religiosa á un tiempo, hubo de ser en un principio de esterminio, aun más por parte de los cristianos que por parte de los conquistadores, fenómeno que fácilmente se explica, sin recurrir á la mayor cultura y mayor habilidad política de los árabes, por la tendencia á disfrutar tranquilamente la posesión adquirida y por la benevolencia natural que el bienestar engendra. Prueba es de ello que, cuando los cristianos lograron extender su territorio y se consideraron con fuerza y con vigor bastante para conservar su independencia en él, se modificaron sus relaciones con los musulmanes, á quienes prestaban y pedían en ocasiones auxilio y permitieron tambien vivir dentro del territorio recobrado, á la manera como algunos cristianos vivieron desde el principio, con el nombre de *muzárabes*, en el país conquistado por los sarracenos. En estas alternativas vivieron, pues, moros y judíos en los estados cristianos durante la reconquista hasta que las medidas trascendentales adoptadas por los Reyes Católicos cambiaron radicalmente el aspecto de estas relaciones.

El celo religioso de los monarcas; la aversión de los cristianos á los judíos y á los moros; el peligro, verdadero ó supuesto, que las inteligencias entre unos y otros ofrecian para la reconquista y su consolidación; la codicia insaciable de aquellos, que tenía vejados con exhorbitantes usuras y exacciones á nobles, caballeros y pecheros y para cuyo correctivo ni bastaban leyes ni servian tasas contra la astuta sutileza de aquellos logreros, tan hábiles para eludirlas como para explotar la necesidad agena; y por último, el espíritu de la época, intolerante de suyo en todas partes, llevó á los Reyes Católicos, juzgando insuficientes los medios represivos consignados en anteriores disposiciones, á pedir primero para sus estados el establecimiento de la Inqui-

sición, conocida ya en Aragón y en otros pueblos de Europa, y á decretar despues la expulsión de los judíos.

El establecimiento de la Inquisición, con su jurisdicción, procedimientos y penas especiales, ha exaltado en los modernos tiempos las pasiones y llevado la lucha á los espíritus, presentándolo, de un lado, como tribunal horrendo, instrumento de despotismo político y religioso, contrario á la humanidad y á la dulzura evangélica, opuesto á la civilización y al progreso de la inteligencia y avasallador, suspicaz, receloso y egoista, mientras que, de otra parte, se ha estimado como valladar en que se estrellaron las maquinaciones de los enemigos de la patria, salvaguardia y garantía del orden y de la autoridad en aquellos tiempos de turbulencia y de lucha material y en las conciencias, sostén de la unidad nacional, dique á la invasión en España de la heregía y baluarte de la unidad en la fé, compañera inseparable de nuestra gloria.

No es nuestra misión escudriñar lo que haya de verdad en los rudos ataques de los unos, ni en las apasionadas alabanzas de los otros; pero sí es justo consignar que, como hecho histórico, tiene su explicacion satisfactoria, á más de las causas indicadas arriba, en que fué una institución común á toda Europa desde que las heregías armadas amenazaron, juntamente con las creencias religiosas y con los preceptos morales, la existencia de los tronos, de la propiedad y de la familia, y pusieron en peligro la vida de muchos estados y aun de la misma sociedad, con sus disturbios, con sus revueltas y sus guerras. Es cierto que la pluma y el pincel han cargado de negras tintas todos los cuadros destinados á representar escenas del tribunal terrible; pero acaso sea tambien cierto, como dice Balmes, que se han resucitado de golpe otros siglos con su rigor, con su dureza, y todo exagerado, todo agrupado, presentando en conjunto hechos ocurridos en diferentes lugares y en el transcurso de largo tiempo; "y no deben perder nunca de vista el orador ni el escritor que no es legítimo el movimiento excitado en el ánimo si antes no le convencen ó no le suponen convencido; y además, es una especie de mala fé tratar únicamente con argumentos de sentimiento materias que por su misma naturaleza sólo pueden examinarse cual conviene, mirándolas á la luz de la fria razón.„

Por otra parte, cualesquiera que fuesen los rigores de la Inquisición española, no debe hacerse de ellos cómplice á la religión, ni aun á la misma autoridad eclesiástica. "Los encausados

por la Inquisición ó que temían serlo, observa también el autor del *Protestantismo comparado con el Catolicismo,* procuran de todas maneras sustraerse á la acción de este tribunal, huyen de España y se van á Roma;..... Roma se inclinaba siempre al partido de la indulgencia; en bula expedida en 2 de Agosto de 1483 el Papa hacía notar á los reyes Fernando é Isabel que la misericordia para con los culpables era más agradable á Dios que el rigor de que se quería usar, como lo prueba el ejemplo del Buen Pastor corriendo tras la oveja descarriada;..... en la Inquisición de Roma, no se ha llegado jamás á la ejecución de una pena capital, á pesar de que durante este tiempo han ocupado la silla apostólica Papas muy rígidos y muy severos en todo lo tocante á la administración civil;..... y por último, los Papas con un tribunal de intolerancia no derramaron una sola gota de sangre, mientras que los protestantes y los filósofos, la hicieron correr á torrentes.„

De todos modos, el tribunal de la Inquisición, en lo que significa intrusión del Estado en el fuero interno, intolerancia del poder civil con las creencias y presión en las conciencias, es contrario á lo que dicta la razón y enseña el derecho, y su abolición en España ha de mirarse, considerada imparcialmente, como un verdadero adelanto en el orden jurídico y social.

Además de la expulsión de los judíos, dictada por los Reyes Católicos y á que aludimos antes, no fué tampoco extraña á la influencia del espíritu religioso, aunque pudo también obedecer á motivos políticos, la expulsión de los moriscos en tiempo de Felipe III.

Desde la conquista de Granada y por virtud de las capitulaciones para su entrega quedaron en España muchos moros á quienes se garantizó el ejercicio de su culto y la conservación de sus mezquitas, á semejanza de lo que sucedió con los *mudejares* despues de la conquista de Toledo por Alfonso VI; pero, sea que el celo irreflexivo, la intolerancia de los cristianos y los abusos cometidos contra los moriscos para convertirlos y bautizar á sus hijos excitaran la cólera de los recien conversos; ó que fueran naturalmente inquietos, descontentos y mal avenidos con la pérdida de su antigua patria y con la sujeción actual, es lo cierto que aun á raiz de la reconquista, en tiempo de los Reyes Católicos, se levantaron los moros de las Alpujarras y que en tiempo de Felipe II se sublevaron de nuevo bajo la dirección de Aben-Humeya, llamado como cristiano D. Fernando de Valor, proclamándose independientes, defendiéndose durante dos años en las

asperezas de la sierra y haciendo vida de foragidos, hasta que D. Juan de Austria pudo someterlos, con lo que concluyó la insurrección, cuyos mantenedores fueron castigados duramente, internándolos y diseminándolos por las distintas provincias, para que no pudieran en lo sucesivo ponerse de acuerdo ni comunicarse con los moros que habian pasado el estrecho.

La enemiga y aversion mutua, nunca extinguida entre los cristianos antiguos y los nuevamente convertidos; el natural avieso de estos; su tendencia á evitar todo trato con aquellos y á impedir que nadie se enterase de su modo de vivir; la misma envidia que excitaban la comodidad con que vivían y las riquezas que con su industria y economía llegaron á atesorar, hacían imposible toda unión entre unos y otros y decidieron en tiempo de Felipe III su expulsión, en lo cual ciertamente el monarca no hizo otra cosa que dejarse llevar por la opinión, de la que participaban hombres tan eminentes como Cervantes y el Arzobispo de Valencia, Juan de Rivera, pues no faltaban racionales motivos para creer en las secretas inteligencias de los moriscos con los africanos y con los turcos, á lo cual se podía añadir la continua excitación en que vivían, como materia dispuesta para toda clase de trastornos, única esperanza de volver á los pasados tiempos. Sin embargo, aunque la expulsión de los turbulentos moriscos pudiera cohonestarse como medida política impuesta por la necesidad para conservar la paz interior, no menguaría en nada tal disculpa las pérdidas que produjeron en el orden económico el abandono de los campos, la despoblación de las ciudades y la desaparición de muchas industrias; ni justificaría nunca la manera cruel como se llevó á efecto, ni las vejaciones, injusticias y malos tratamientos de que se hizo víctimas á los desdichados moriscos.

Como contraste con las medidas anteriores y para rendir culto á la imparcialidad, deben notarse dos hechos de trascendencia más ó menos directa al orden religioso; la expulsión de los jesuitas por Carlos III, y la abolición de las órdenes monásticas en los primeros años del reinado de Isabel II.

La primera de dichas medidas, dictada, segun los detractores de los jesuitas, por la intervención que se les atribuía en casi todos los asuntos políticos, por la influencia que alcanzaban en las cortes de los reyes, por su grande ascendiente sobre el pueblo, y otras análogas, fué debida principalmente, segun Guillermo Coxe, al «buen éxito de los medios que emplearon sus enemigos para hacer creer al Rey que el levantamiento que acaba-

ba de verificarse en Madrid había sido excitado por sus intrigas y que estaban formando otras contra su propia familia y aun contra su persona.„

La manera como se llevó á cabo la expulsión fué por lo misteriosa verdaderamente inquisitorial, aunque dirigida por los que pudieran llamarse precursores del liberalismo en España, tomándose las mayores precauciones y siendo tan rápida la ejecución, que los habitantes de la capital no supieron lo que había ocurrido hasta por la mañana, cuando ya estaban lejos los jesuitas embarcados para Civita Vecchia, donde no pudieron desembarcar, permaneciendo mientras tanto "amontonados como criminales á bordo de los buques de trasporte durante la estación más enfermiza y en un clima mortífero. Un número considerable de ancianos y de enfermos, ó de los que habían padecido al cambiar de repente su modo sedentario de vivir, perecieron á vista de tierra; y en fin, despues de haber cruzado por el Mediterráneo durante muchos dias, expuestos á las tempestades y borrascas, fueron acogidos en la isla de Córcega. Los que tuvieron la desgracia de sobrevivir á las fatigas anteriores fueron depositados como fardos de mercancías, acostados en el suelo, y careciendo casi de las cosas necesarias á la vida.„

En las colonias fué ejecutada la sentencia de la expulsión con no menos misterio y prontitud, y es digna de notar, como la más elocuente protesta contra el rigor y arbitrariedad de las medidas tomadas contra ellos, la conducta obediente y sumisa de los jesuitas, aun en los mismos puntos donde hubieran podido, si quisieran, oponer eficaz resistencia. "Se miraba la ejecución del decreto, continúa el autor de *España bajo la Casa de Borbón*, como muy difícil en el Paraguay, temiéndose que los jesuitas que se habían opuesto con las armas á las cesiones hechas al Portugal, acostumbrados como estaban, hacía tanto tiempo, á gobernar con un poder absoluto á recien convertidos que los adoraban, se negasen á someterse tranquilamente á lo que de ellos se exigía; pero no hubo allí tampoco la menor oposición. Manifestaron los jesuitas la mayor resignación; y todavía más notable porque, humillándose ante la mano que los oprimía, sosegaron á la muchedumbre irritada, y se dejaron conducir hasta la costa, donde los embarcaron para llevarlos á Europa.„ Y Pages, citado por el mismo autor, se expresa así respecto á los jesuitas de la isla de Samar (Filipinas): "hallándose en una posición en que hubiera podido el extremado cariño de los indios hacia sus pastores, con muy poca ayuda de su parte, dar lugar á

todos los desórdenes que acompañan á la violencia é insurrección, los he visto obedecer el decreto de su abolición, con la deferencia debida á la autoridad civil, y al mismo tiempo con la calma y firmeza de almas verdaderamente heróicas.„

Por último y siguiendo la narración de Coxe, "despues de reducirlos á tal estado de proscripción, no solo les fué prohibido el justificar su conducta, sino que se declaró que, si un solo jesuita trataba de publicar la más pequeña defensa á favor suyo, se quitaría á todos al instante la pensión, y que todo súbdito de España que se atreviera á publicar un escrito, fuese en pró ó en contra de la orden abolida, sería castigado como culpable de lesa magestad, cuyas medidas serian apenas inteligibles para nosotros que vivimos bajo un gobierno libre, si no fuese probada su verdad por el edicto mismo de su expulsión.„

A la abolición general de las órdenes monásticas precedió la matanza de frailes en Madrid (1834), hecho que, narrado y juzgado, si bien con cierta parsimonia, tomamos de la *Historia de España* continuada por E. Chao, cuyo testimonio no debe infundir sospechas á los más liberales. Invadida la capital por el cólera-morbo, que había recorrido varias provincias, "no faltó, dice, quien esparciera la voz de que mataba menos el cólera que el veneno que los frailes echaban en las aguas; y el pueblo, siempre crédulo, le dió fé. Bastó sorprender en la fuente de la Puerta del Sol á un muchacho con un papel de polvos, que se dijo ser el supuesto veneno, para que se alzase un clamor feroz pidiendo venganza y esterminio. Las turbas encrespadas, siguiendo inadvertidas á ciertos guias, acometieron el colegio de jesuitas, sito en la calle de Toledo, forzaron las puertas, invadieron los claustros, y apenas quedó uno con vida de cuantos hallaron. Otros grupos se dirigieron á los conventos de San Francisco el Grande y Santo Tomás, que en breve quedaron también cubiertos de cadáveres. En vano veían inermes á sus moradores é implorando piedad; unos á tiros, otros á sablazos ó puñaladas, sucumbían bajo el brazo de hombres desalmados y furiosos. Si alguno de aquellos infelices intentó defender su vida, solo consiguió enardecer á los asesinos y alcanzar más fiera muerte. Perecieron así más de cien, casi á presencia de las mismas autoridades, que con asombro general nada hicieron ni para precaver ni para reprimir tales excesos. Tildóse por esto á varios de connivencia; pero nada pudo saberse claramente.„

Tal fué el preludio de los decretos de 4 de Julio, 25 de Julio y 11 de Octubre de 1835 dictados, en una ó en otra forma, con-

tra los institutos religiosos; de 30 de Octubre de 1836 suprimiendo todos los conventos, monasterios, colegios, congregaciones y demás casas de comunidad ó de instituto religioso de varones, inclusos los de clérigos regulares y los de las cuatro órdenes militares y de San Juan de Jerusalem; y por último, de la ley de 22-29 de Julio, extinguiendo en general todos los conventos.

No hallamos medio de cohonestar los hechos y disposiciones precedentes, como tampoco los análogos que siguieron á la revolución de 1868, con las ideas profesadas y principios proclamados por sus fautores; ni podemos hallar razones para hacerlos compatibles con el derecho natural de reunión y asociación consignado en todas las constituciones medianamente liberales (1).

---

(1) Las disposiciones principales, consignadas en las constituciones españolas respecto á religión, son las siguientes:

Const. de 1812.—Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquiera otra.

Const. de 1837.—Art. 11. La Nación se obliga á mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles.

Const. de 1845.—Art. 11. La religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga á mantener el culto y sus ministros.

Const. de 1856 (no promulgada).—Art. 14. La Nación se obliga á mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Pero ningún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus opiniones ó creencias religiosas mientras no las manifieste por actos públicos contrarios á la religión.

Const. de 1869.—Art. 21. La Nación se obliga á mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público ó privado de cualquiera otro culto queda garantido á todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable á los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.

Const. de 1876.—Art. 11. La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La Nación se obliga á mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus ideas religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido á la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado.

CAPÍTULO IV

EL LENGUAJE

Es la palabra, entre todos los signos, el más expresivo de que el hombre puede servirse y el más adecuado para la comunicación del pensamiento y de los afectos del alma. Desde la duda hasta la certeza, desde el más liviano deseo hasta la pasión más vehemente, desde la indecisión y la perplejidad hasta la resolución más inquebrantable y enérgica, todo puede trasmitirse por el lenguaje hablado, y aun todo puede modificarse también á medida que se depura y cultiva la palabra. No es fácil que quien sólo escucha frases rudas y groseras modifique la aspereza de su natural carácter, ni sería muy extraño que llegara á hacerse culto y hasta amable el hombre acostumbrado á un lenguaje digno y dotado de cierta flexibilidad en sus formas y de cierta dulzura en sus vocablos.

La natural expansión del hombre y su tendencia á la sociedad le llevan á buscar la comunicación con sus semejantes, y entre estos, prefiere á aquellos de quienes con más facilidad se hace entender y cuyo interior puede penetrar con menor esfuerzo. De aquí que en la formación de las sociedades primitivas, aparte las familiares constituidas por los vínculos de la sangre, las diversas agrupaciones fueron naturalmente producidas por las afinidades que estableciera un común lenguaje, pues, sin este medio, fuera árdua empresa hacer conocer á los demás los deseos y necesidades de cada cual, ni demandar su satisfacción, ofreciendo en cambio el propio auxilio para satisfacer las ajenas. Así el lenguaje, ayudando á la formación de las primeras sociedades, llega á ser elemento importante para la constitución de

las naciones, á tal punto que no faltan pensadores por quienes este elemento se considera como el característico de la nacionalidad. Pero, así como la comunidad de medios de expresión aproxima á los hombres, la diversidad de signos empleados para comunicar sus pensamientos los separa y dificulta su unión y mucho más su fusión completa en una entidad política. Para que las sociedades adquieran la cohesión necesaria hasta formar estados y para que estos se constituyan en verdadera unidad, no por las exigencias del poder y de las leyes, ni por la fuerza material que conserva unidas las partes comprimiéndolas, sino espontáneamente y por la marcha natural de las cosas, es preciso buscar la uniformidad en los medios de expresión, adoptar un común lenguaje, que sirva á los miembros del estado para comunicarse entre sí, y facilite la acción del poder público, asegurándole de que sus disposiciones y mandatos serán perfectamente entendidos por los súbditos ó ciudadanos á quienes se hagan saber para su acatamiento. Y, como los estados no se han formado ordinariamente, sobre todo los actuales, por agrupaciones ó sociedades en que dominara un lenguaje común, y en nuestra España, que ha sufrido tantas invasiones y dominaciones distintas, sucedió esto acaso menos que en ningun otro pueblo, y aun hoy mismo hay comarcas que se resisten con cierta tenacidad á aceptar el lenguaje nacional, no será inútil conocer, siquiera someramente, cuales fueron los diversos idiomas y dialectos que dominaron en la península.

"Cual haya sido la primera lengua de España, dice el señor Mayans y Siscar, nadie puede afirmarlo, ni aun valiéndose de probables conjeturas; porque la tradición que alegan muchos españoles no tiene la autoridad que requiere una legítima probanza, ni en los términos en que se supone es posible.„

A seguir la opinión de ciertos escritores modernos, no parece probable que los españoles anteriores á la conquista romana tuvieran una lengua única, ó al menos no ha podido precisarse por los historiadores y filólogos. Por el contrario, algunos afirman que en tiempo de Augusto se hablaban en España diez idiomas, entre los que pueden mencionarse el *cántabro,* el *celtíbero* y el llamado *español antiguo,* sin que pueda fijarse con claridad si este último nombre corresponde al *vasco*, al *bástulo*, al *turdetano*, ó á otro dialecto cualquiera. Con todo, entre las lenguas ó dialectos antiguos merecen notarse especialmente el *vascuence* ó *euskaro* y el *asturiano.*

El *vascuence*, si bien bastante distinto de lo que era toda-

vía en el siglo VI, es hoy la lengua más antigua de Europa; no puede referirse á ninguna de las dos grandes familias, indo-europea y semítica, y aunque se ha pretendido que tiene relaciones con la céltica, no hay razón sólida que tal afirmación autorice. Autores hay que entienden que, consultando el itinerario y los rasgos de la antigua raza cuyos restos hablan hoy esta lengua, puede referirse al antiguo berebere, hablado por los pueblos que habitaban de muy antiguo, antes de la venida de los cartagineses y de los romanos, el Norte de Africa, y que de ningun modo debe confundirse con el moderno berberisco, idioma degenerado, mezcla de palabras árabes, turcas y de otros pueblos, sino al berebere puro que se habla en el N. E. de Africa, en los confines de Abisinia. La simplicidad de la mayoría de sus raíces prueba su remota antigüedad. Estas raíces son generalmente monosilábicas y forman, no obstante, un sentido completo, aunque general y abstracto. Combinadas entre sí ó con ciertas desinencias significativas, bastan para la expresión de las ideas y relaciones más varias y delicadas. Esta lengua no tiene géneros, así que en el verso no puede haber rimas masculinas y femeninas alternadas; y la cuantidad silábica es tan importante, que influye en el cambio de significación de las palabras.

Después del vascuence es el asturiano, ó *lengua bable*, la más antigua de las que se hablan en la península. Esta misma antigüedad y cierta pureza, debida al valladar que la comarca asturiana tiene en sus montañas, la hacen muy útil para interpretar algunos antiguos monumentos de la literatura española, hallándose aun hoy mismo, entre los campesinos del país, muchas palabras y frases usadas en muy antiguos romances. La energía y sonoridad de esta lengua es muy notable; y su riqueza es mucho mayor de lo que podría pensarse, tanto que tiene una multitud de palabras propias, que el castellano se vió precisado á tomar de los árabes.

Los fenicios y los cartagineses debieron influir en las modificaciones que sufriera el lenguaje primitivo de España; pero, como sus idiomas no representaban un lazo social, ni tenían el arraigo de una literatura nacional, esto favoreció sin duda, á la venida de los romanos, el progreso del latín, que no tardó en prevalecer.

La invasión de los bárbaros debió modificar muy poco tal estado de cosas. La dominación de los alanos, vándalos y sue-

vos fué bastante efímera, y los visigodos tenían más propensión á aceptar la lengua y costumbres de los vencidos que á imponerles la suya propia, así que el latín continuó siendo la lengua dominante en el país, no obstante la introducción de algunos elementos germanos.

Mucha mayor influencia ejercieron en esta materia los árabes, cuya lengua y literatura, ya cultivadas, fueron habladas fácilmente y comprendidas por los pueblos sujetos á su dominación, y esto, juntamente con el sello del génio árabe, produjo acaso el español moderno, que recibió el nombre de *romance*, formado, como las demás lenguas neo-latinas, del latín, como fondo principal, y de algunos elementos germánicos; pero con la adición de un elemento árabe, como rasgo distintivo, y hablado en varios dialectos, sin que llegara á ser lengua nacional hasta que fueron reuniéndose en uno varios estados cristianos. Entre estos varios dialectos de origen latino merecen especial mención: el *lemosino*, hablado en la costa oriental, Cataluña y Valencia; el *gallego*, que dió origen al *portugués*, en la costa occidental; y el *castellano*, en el centro, que, cuando los demás estados cristianos se unieron á Castilla, absorbió los otros idiomas, excepción hecha del portugués, el cual, por las circunstancias políticas que hicieron de Portugal un estado independiente, siguió con independencia su natural desarrollo.

El *lemosín*, dialecto de grande analogía con el catalán y uno de los de la lengua provenzal, se cree importado por los monjes, prelados y caballeros franceses que en 1212 fueron á establecerse en Cataluña; y en él parece se escribió el código que Jaime I dió en 1238 á los habitantes de Valencia. El catalán, cuyas formas difieren del castellano mucho más que el portugués, es rudo y un tanto oscuro, y aunque no exento completamente de energía, de gracia y de riqueza, detenido en su desarrollo, está menos pulimentado que el castellano. Su existencia aislada, su individualidad por decirlo así, estuvo ligada á la existencia independiente del condado de Cataluña, donde se habló; y tiene grandes afinidades con todos los dialectos del Mediodía de Francia, lo cual se explica fácilmente recordando que los condes de Barcelona fueron también mucho tiempo condes de la Provenza y de Mompeller. Idéntico en su origen con el catalán puede considerarse el valenciano, sin que las diferencias entre ambos sean tales que impidan á los habitantes de ambas regiones entenderse sin gran dificultad, consistiendo aquellas principalmente en modismos locales y sobre todo en la pronun-

ciación, que es mucho más dulce y armoniosa en los valencianos.

El dialecto *gallego*, tan diferente del castellano casi como el mismo catalán, aunque tampoco ofrece grandes analogías con éste, las tiene mucho mayores con el portugués, siguiéndole casi por completo en las formas de la conjugación. Estas analogías se explican porque durante más de dos siglos, hacia el XII y XIII, el portugués y el gallego formaron un solo idioma hasta que la independencia de Portugal permitió á su lengua desarrollarse y pulimentarse, quedando el gallego estacionario desde entonces y reducido á dialecto local. Sin embargo, el gallego participa de la riqueza del castellano y de la tendencia á las contracciones y á la supresión de ciertas palabras. Y, puesto que son comunes en su origen el gallego y el portugués, debemos notar, respecto á éste, que es tal vez entre las lenguas neo-latinas la que conserva más semejanzas con el origen común, así que algunos eruditos han podido formar pequeñas composiciones latinas con solas palabras portuguesas, sin que por esto haya de desconocerse que el latín fué notablemente alterado por la pronunciación de los antiguos lusitanos, cuya dureza se traduce sin duda en el sistema de contracciones que resulta en el portugués. La conquista árabe ejerció escasa influencia en el idioma portugués, hasta el punto de no usar ninguna de las guturales que los castellanos, se cree, recibieron de los árabes y hoy forman uno de los caracteres de la lengua. De esto resulta más dulzura en el portugués, sin que la falte la concisión enérgica del latín, ni la nobleza, riqueza y gracia del castellano.

También de origen latino, el *castellano* fué durante algun tiempo uno de tantos dialectos neo-latinos, como el catalán y el gallego, hasta que el progreso del reino de Castilla le fué generalizando, llegando á ser la lengua dominante en España, cuando ésta formó un solo reino. Tiene esta lengua más semejanzas aún con el latín que el italiano, como lo prueban las leves diferencias con que ha recibido muchas palabras latinas y la conservación de las formas principales en la conjugación, excepción hecha de la voz pasiva, suprimida sin duda por la influencia germana, así como la sustitución de la declinación por el uso de las preposiciones. Pero también adoptó el castellano muchas palabras árabes, principalmente para la designación de algunos cargos ú oficios públicos y de instrumentos y prácticas agrícolas é industriales. Son de notar en esta lengua la existencia de dobles auxiliares, como *haber* y *tener*, la de los verbos *ser* y *estar* para

significar la esencia y el modo, y la construcción, que es también inversa, aunque no tanto como la latina. En la pronunciación es también digno de mencionarse el uso de las guturales fuertes ó aspiraciones, que unos juzgan vestigio de los germanos, mientras que otros le consideran indígena y los más importado de los árabes. La riqueza, la gravedad y la energía, no exenta de gracia, de esta lengua la hacen menos oscura que el francés y menos fastidiosa que el italiano, excesivamente dulce. Acaso sea demasiado redundante y ampulosa, efecto del sello de orientalismo que le imprimieran los árabes; pero no por eso deja de ser un hermoso idioma, que alcanzó un gran favor durante bastante tiempo en la vecina Francia, haciéndose de moda entre las clases elevadas desde el reinado de Enrique II hasta el de Luís XIV. "Sepa, pues, todo buen español, dice el señor Mayáns, y todo el mundo, que tenemos una lengua abundantísima y suave, y que podemos usar de ella con la mayor propiedad y energía; con brevedad, sublimidad, elegancia y armonía; y por decirlo en una palabra, con elocuencia. Pero este don no es dado á cualquiera. Los medios para conseguirlo son, estudiar muchísimo; preguntar y aprender de todos cuanto sea posible, para saber la naturaleza y propiedades de las cosas y sus nombres; averiguar los orígenes de los vocablos y su uso más común y expresivo para la propiedad; leer los mejores autores para imitarlos, si son de extraña lengua, en el pensar; si de la propia, en el pensar y decir; y ejercitarse en escribir, sujetándose á la censura de los que lo entienden, que son poquísimos.„ (1)

---

(1) Desde el fuero de Burgos, otorgado en 1075, y en otros muchos privilegios y cartas-pueblas se ven vestigios del idioma castellano; pero como dato seguro para afirmar que el idioma vulgar fué la lengua oficial de la chancillería real, hay que acudir á Fernando III, que al dar á Córdoba el Fuero-Juzgo, dice: Statuo et mando quod *Liber Judicum*, quod ego missi Cordubam, *translatetur* in *vulgarem*, et vocetur *forum de Corduba*. Comprueba más esto el que en el reinado siguiente se dice en la Partida II, tit. IX, ley IV, que el canciller del rey debe estar instruido «en *leer et escrebir en latin et romance*..... para que las cartas que mandare facer sean *dictadas et escriptas* bien, etc.»

Respecto al uso oficial de la lengua catalana se sabe que Jaime I escribió su crónica en catalán, otorgándose también documentos en este idioma, así como en valenciano y mallorquín.

Por resolución de 11 de Diciembre de 1787, ley IV, tít. X, lib. V, Novísima Recopilación, se acordó que, en las islas Baleares se ejecutaran los despachos en lengua mallorquina; previniendo se procure mañosamente ir introduciendo la lengua castellana en aquellos pueblos.

SECCIÓN TERCERA

CONSIDERACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA DE LAS PERSONAS EN ESPAÑA.

CAPÍTULO PRIMERO

DOMINACIÓN ROMANA Y MONARQUÍA VISIGODA

Nada más útil para juzgar de la constitución y del gobierno de los pueblos que el estudio de las condiciones y circunstancias de las personas que han de ser gobernadas. No es posible que los hombres de caracter duro é independiente sufran con paciencia un precepto altanero ni se allanen fácilmente á soportar una tutela humillante ó una intervención minuciosa en todos sus asuntos; como no es fácil tampoco que salgan de su apática inercia, sino estimulados por enérgicas disposiciones, aquellos á quienes la natural indolencia ó el hábito de ser regidos y de hallar por todas partes la mano del Estado ha hecho indiferentes para todo lo público é incapaces para sentir el amor propio ultrajado por las autoridades que todo lo piensan, que todo lo acuerdan y que todo lo hacen por sus subordinados, mal que pese á la dignidad ofendida ó á la justa libertad mermada. De este estudio surgirá necesariamente la enseñanza de que el estado, cuyos elementos individuales son homogeneos, hallará más pronto y fácilmente la constitución que le es ade-

cuada; mientras que aquellos otros, formados por agrupaciones con caracteres, hábitos y condiciones diversas, luchan y se agitan constantemente, cuando no los cohibe la fuerza, para encontrar una organización y una forma política apropiada. Así se explican la inmovilidad política de ciertos pueblos y la volubilidad é inconstancia de otros, por ejemplo el nuestro, formado por tan varios elementos, que exigen cierta flexibilidad en las leyes fundamentales y rechazan instintivamente todo dogmatismo exagerado. En tal sentido consideramos convenientes las indicaciones someras, que hacemos á continuación, sobre la consideración social y jurídica de las personas que, tras largos movimientos y agitaciones, han llegado á formar la nación y á constituir el estado español.

De la consideración diversa que pudieran tener las personas en los pueblos primitivos nada puede afirmarse; pero es de suponer que, por lo menos, la línea divisoria entre libres y esclavos había de existir ya, dadas las opiniones erroneas sobre los derechos del vencedor y el mal llamado derecho de gentes de estos pueblos y de todos los anteriores al cristianismo.

Durante la *dominación romana*, además de la profunda distinción que entre los hombres establecía la esclavitud, se dividían los españoles en tres clases: la *privilegiada*, la *de los curiales* y el *pueblo bajo*.

Constituían la clase privilegiada: los *senadores*, cuyo número, nombramiento y destitución dependían en absoluto de la voluntad del emperador: los *clarísimos*, á quienes también el emperador investía con este título, que recaía de ordinario sobre personas distinguidas por sus servicios al imperio en el desempeño de las magistraturas más elevadas: el *clero* todo, sin distinción de jerarquías; la *milicia cohortal*, que tenía á su cargo la conservación del orden en el interior de las poblaciones y la ejecución de las leyes; servicio al que, una vez adscritos, quedaban obligados, no solo por sí, sino por sus descendientes, sin poder salir de esta clase para pasar á otra más elevada: los *militares todos*, ya sirvieran en las legiones, ó en las tropas palatinas ó, andando el tiempo, en los cuerpos de los bárbaros auxiliares del imperio.

La exención de los oficios y cargos municipales constituía la preeminencia más importante de todas estas clases, y esto solo bastaba para considerar como privilegiados á los que de ella disfrutaban.

Todos los habitantes de una ciudad que no pertenecían á la

clase privilegiada y tenían una propiedad territorial de más de veinticinco yugadas formaban la clase de los *curiales*.

La situación de estos, que en un principio fué estimada, como apetecidos los cargos de la curia, se hizo excesivamente ominosa y precaria cuando las necesidades del despotismo aumentaron sin cesar por el peligro que ofrecían los bárbaros que constantemente avanzaban y á quienes era preciso vencer ó comprar; por las exigencias del populacho romano acostumbrado á comer sin trabajar y á divertirse en los espectáculos públicos á costa del erario; y por el descontento é imposiciones de los soldados, única fuerza disponible para contener á unos y otros. Todo esto hacía necesarios grandes recursos, y para procurárselos, el despotismo imperial impuso á los curiales, principalmente desde Diocleciano, sacrificios inmensos, haciendo insoportable la situación de aquella clase, sobre la que pesaban cargas y gabelas sin cuento. Estaban, en primer término, obligados los curiales á atender á las necesidades del municipio con su propio peculio, si las rentas públicas no bastaban, administrando en cambio los negocios de aquel; pero siendo responsables, personal y solidariamente, de su gestión. Tenían á su cargo la recaudación de los tributos bajo la responsabilidad de sus propios bienes, con los que habían de cubrir las faltas ó partidas fallidas, aunque, como pequeña compensación, eran atribuidas á la curia las tierras abandonadas por sus dueños, cuya contribución se distribuía entre las demás propiedades de los curiales, á menos que alguien quisiera hacerse cargo de aquellas, pagando la cuota que les correspondía. No podía ningún adscrito á la curia vender, sin permiso del gobernador de la provincia, los bienes cuya posesión le daba el carácter de curial. Las personas extrañas á la curia estaban obligadas á ceder á ésta la cuarta parte de los bienes que hubieran heredado de los curiales; y análoga obligación pesaba sobre las viudas é hijos de los curiales que contraían matrimonio con quien no fuese curial. Tampoco podían los curiales sin hijos disponer por testamento más que de la cuarta parte de sus bienes, quedando el resto á favor de la curia. Necesitaban licencia del juez de la provincia para ausentarse del municipio, aunque fuese por poco tiempo; y cuando algún curial, deseoso de sacudir el yugo, lograba evadirse, eran confiscados sus bienes en favor de la curia. Por último, sobre los curiales, pesaba exclusivamente el tributo llamado *aurum coronarium*, que debía pagarse al príncipe en ciertas solemnidades ó acontecimientos públicos.

Como pequeña compensación á esta especie de esclavitud de sus personas y sus cosas estaban exentos de la tortura, excepto en casos muy graves, y de las penas aflictivas é infamantes, y tenían además derecho á ser mantenidos por el municipio en caso de pobreza.

Como miembros de la curia, todos los curiales tenían en ella asiento, y para la deliberación y resolución de cualquiera negocio debían ser todos convocados, tomándose los acuerdos á pluralidad de votos y siendo precisa la asistencia de las dos terceras partes de aquellos. Los nombres de los curiales estaban inscritos por categorías en un registro llamado *Album Curiæ*.

El pueblo bajo se componía de toda la gran masa de la población que, por carecer de propiedad territorial bastante, no estaba inscrita en la curia.

Tal era en suma la distinta consideración de los españoles cuando los bárbaros del Norte invadieron la península.

Bajo la *monarquía visigoda* el pueblo se dividía en *nobles* y *plebeyos; patronos* y *libertos; señores y siervos*. En la nobleza se distinguían los *primates* ú *optimates* de los señores, como se distinguían entre los romanos los senadores y los équites, y actualmente se distinguen los grandes y los caballeros. Este nombre de *caballero* parece provenir del privilegio de tener caballos y de poder regalarlos á la novia como dote, cosa sólo á los nobles permitida.

Las clases que no eran nobles entraban en la denominación común de *viliores* y, aunque algunos escritores piensan que en esta clase estaban comprendidos sin distinción todos los veneidos, otros, reconociendo que la nobleza goda había de tener por la fuerza natural de las cosas cierta preeminencia sobre la hispano-romana, entienden que no se habría de incluir entre el vulgo del pueblo y considerar como viles á muchos hispanos-romanos que desempeñaban las primeras magistraturas. Citan los que de este modo opinan, en corroboración de su aserto, los nombres latinos de obispos que figuran en las actas de los concilios toledanos ó de miembros del oficio palatino. Sin embargo, respecto á lo primero, pudiera observarse que el sacerdocio era una excepción y no patrimonio exclusivo de ninguna raza, y respecto á lo segundo, bien pudieran aquellos haber llegado al oficio palatino desde las clases más humildes, cuando los concilios y las leyes se vieron precisadas á corregir el abuso de elevar á tan alto rango á personas de condición servil.

Entre la misma nobleza goda había cierta jerarquía, figu-

randoen primera línea los *primates*, llamados también magnates ó próceres, que pertenecían al oficio palatino; seguían los *duques*, *condes* y *gardingos*, que desempeñaban cargos elevados en la milicia, ó en la administración pública, ó en la casa real; después los *leudes*, militares, segun se cree, que aceptaban libremente el servicio y formaban parte de la hueste real sin otros compromisos más que los que su devocion al rey y el juramento prestado les imponían, ni otros derechos que los premios á que su conducta les hiciera acreedores ó la liberalidad del rey les concediera, consistentes de ordinario en armas y caballos ó en tierras que adquirían en pleno derecho y con facultad de trasmitirlas, á menos que por infidelidad al juramento prestado los perdieran.

También enumeran algunos autores entre la nobleza, aunque como su último grado, á los *buccellarios*, militares á servicio de los próceres en forma análoga á la en que los leudes prestaban sus servicios al rey; mas, si bien se considera, la nobleza del buccellario consistía solamente en ser ingenuo y de raza goda, pues las recompensas que del señor recibía, ya en el alimento, *buccella*, para sí y su familia, ya en tierras que le sujetaban á una especie de patronato, indican la escasa independencia de esta clase. Así es que no debía casar á sus hijas sin consentimiento del señor ó patrono, y estaba obligado á entregarle la mitad de todo lo que ganaba; debiendo además restituirle cuanto de él hubiera recibido, si abandonaba su servicio.

Entre los vencidos también se conservaron jerarquías, si bién esta distinción no tuvo en realidad influencia en el estado hasta que se fundieron las dos razas. De todos modos subsistieron las clases de *senatoriales*, *curiales*, *ingenuos* y *libertos* en forma análoga á los tiempos del imperio, aunque algo más llevadera la condición de los curiales.

En la clase inferior hacían los godos una marcada diferencia entre los ingenuos y los libertos y libertinos, hasta el punto de que algunas leyes castigaran con doble pena al liberto reo del mismo delito que el ingenuo, y otras le prohibieran, en general, dar testimonio en causas de ingenuos. En cambio los libertos del fisco fueron considerados en extremo, llegando algunos hasta los puestos más altos, incluso el oficio palatino. Los libertos del rey eran notados de desleales y volvían á caer en servidumbre perdiendo sus bienes á favor del príncipe, cuando, llamados, no acudían á la hueste. Los de las iglesias estaban sujetos y no podían

salir del patronato de aquella cuyo obispo les hubiera dado libertad, ni podían tampoco disponer de sus bienes sino en favor de la iglesia, ó de sus hijos y parientes sujetos al mismo patronato.

La *esclavitud* romana, que los godos hallaron establecida, no fué abolida por completo, pero sí la dulcificaron, trocándola en *servidumbre*; verdadero adelanto social con respecto á aquella, que equiparaba al hombre y á las cosas.

Todas las personas sujetas á *servidumbre* ó al dominio ajeno recibían el nombre genérico de siervos; pero entre estos no eran todos de grado y condición igual. Los había *idoneos* y *viles; natos* y *mancipii;* de *corte,* de *iglesia* y de *particular.*

El *idoneo* llamado también *convenibilis* se distinguía del vil en que, estimando su mayor habilidad ó talento, le empleaba su señor en ocupaciones más delicadas y honrosas: esta distinción se hallaba también sancionada en las leyes por disposiciones más favorables á los idoneos.

Nato se llamaba al siervo que lo era por serlo también sus padres, y *mancipio ó facto,* el que, siendo sus padres libres, incurría en servidumbre por pena ó por cualquiera otra causa.

El de *corte* era el más distinguido entre todos los siervos por hallarse inmediatamente sujeto al rey y por disfrutar el privilegio de tener á sus órdenes otros siervos inferiores, aunque no pudiera disponer de ellos sin permiso de su señor. El de *iglesia,* que dependía del obispo ó presidente de aquella, tenía á su cuidado los oficios mecánicos para el servicio de la misma, cuyo desempeño no parecía decoroso para los clérigos.

El *privado ó particular*, estaba, menos en la vida y el honor, tan sujeto á su señor, que en los delitos cometidos contra éste no podían intervenir ni aun los mismos jueces públicos sin autorización del dueño ofendido.

Como prueba de que la servidumbre era más llevadera que la esclavitud, debido sin duda á la influencia del cristianismo, además de que el señor no tenía, segun hemos indicado, derecho sobre la vida ni sobre el honor de los siervos, mandaban las leyes godas que en los pleitos de los ingenuos con los siervos se administrara justicia con imparcialidad, si bien es cierto que el testimonio de los últimos se admitía en muy raros y extraordinarios casos y que las indemnizaciones eran también proporcionadas á la consideración de la persona en estos pleitos. También fué conocido entre los godos, aunque abolido más tarde por los abusos á que daba lugar, el derecho de *asilo,* en cuya virtud el siervo que, huyendo de los malos tratamientos de su señor,

se refugiaba en los templos, era amparado por la Iglesia, que obligaba al dueño á venderle á otra persona más humana.

Así como la admisión ó recusación del testimonio establecía una diferencia considerable entre el ingenuo y el siervo y liberto, la aplicación del tormento, como prueba, y la distinta entidad de las penas, segun la categoría de las personas, marcaba también una diferencia muy considerable entre los mismos hombres libres entre sí.

Los nobles y personas de más valer, no podían ser sometidos á la prueba del tormento sino en las causas capitales; los ingenuos de menor categoría sólo en aquellas cuya entidad excediera de quinientos sueldos; los libertos idoneos, cuando pasara de doscientos; los rústicos, excediendo la cantidad de ciento, mientras que los siervos podían serlo por cualquiera causa, aunque no de un modo caprichoso y arbitrario, sino en la forma prescrita por las leyes.

La penalidad también era muy varia segun la categoría de las personas.

De todo esto se deduce que la igualdad ante la ley no fué muy respetada por los godos, y lo mismo sucedió, como veremos, durante la reconquista y en los siglos posteriores, hasta que en el presente coincide con el regimen representativo la mayor consideracion, por lo menos legal, á los derechos y á la dignidad del hombre.

CAPÍTULO II

CONSIDERACIÓN DE LAS PERSONAS DURANTE LA RECONQUISTA Y DESPUÉS DE ELLA

Reunidos en la incipiente monarquía asturiana los restos del reino visigodo y ensanchada despues aquella hasta formar el reino de León, fundido más tarde con el de Castilla, cuyo origen segun vimos, no fué propiamente más que una desmembración de aquel, no por distinción de origen ni de organización social, se manifiesta la semejanza en los tres reinos como un trasunto de la organización social de los godos, aunque algo modificada por el influjo de los tiempos y por las necesidades de la reconquista; así, á la manera que entre los godos se distinguían las personas por clases, hubo también después una alta nobleza y otra menos elevada; una masa común del pueblo, que llegó con el tiempo á constituir el llamado *estado llano*, y una clase ínfima, representación de la antigua servidumbre, aunque algo transformada.

La nobleza más elevada de estos reinos estaba constituida por los *magnates* ó *ricos homes*, sobre quienes pesaba principalmente la obra de la reconquista; quienes por privilegio de su clase estaban exentos del pago de las contribuciones generales; no podian ser presos por deudas, ni sometidos á la prueba del tormento y gozaban multitud de preeminencias y derechos políticos de que habremos de ocuparnos al hablar de la nobleza como poder ó elemento político-social.

Seguían los *duques*, *condes* y *marqueses*, y después los meros *fijo-dalgos*, hombres escogidos de buenos lugares ó con algo, que gozaban también de muchas franquicias, y los caballeros, cu-

yo número fué aumentado considerablemente en virtud de la concesión de los derechos de caballero hecha por Alfonso V el *Noble* á todo el que tuviera caballo para pelear.

Pueden considerarse también como parte de la nobleza, si bien formando en su última escala, los *escuderos*, llamados así del escudo con que peleaban; aunque habían de hacerlo siempre á pié hasta que alguna famosa hazaña les elevaba al rango de caballeros, recibiendo entonces la investidura de tales y pudiendo desde entonces, y no antes, usar blason en su escudo y caballo para combatir. Hay también quien atribuye el origen de este nombre á la antigua costumbre de los jóvenes fijo-dalgos, quienes para habituarse al manejo de las armas, poníanse bajo la dirección de algún famoso caballero, llevándole el escudo y sirviéndole en los combates. Los escuderos de los reyes, que desempeñaban estos cargos, pertenecían á la más alta nobleza y solían llamarse *pajes de lanza.*

La profunda línea divisoria que separaba á la clase noble de las humildes se nota con la simple lectura de las leyes del Fuero Viejo relativas á los modos de perder y recobrar la nobleza, tan humillantes para los pecheros.

Sin embargo, los fueros y privilegios, concedidos por los reyes á las ciudades más notables y á los pueblos fronterizos conquistados á los moros, permitieron que se fuera formando una clase intermedia independiente de la nobleza, á la que los reyes designaron con la denominación de *homes buenos,* que fué el nucleo de los concejos y la fuente de su poder, como la clase media es en la actualidad el nervio de las modernas sociedades.

La servidumbre continuó en España durante la reconquista; pero las necesidades de ésta y el espíritu cristiano influyeron en ella, haciéndola más suave que en otros paises. Es cierto que en un principio la condición de los siervos se diferenciaba muy poco de la de los antiguos esclavos, y que la de las *familias de criazón,* que así se llamaba á los descendientes de los siervos, los constituía en verdaderos *adscriptitii ó siervos de la gleba*, pues se hallaban de tal modo adheridos ó apegados al terruño, que le seguían en todas las vicisitudes de su trasmisión, formando como una escuela ó parte integrante de él; pero, cuando para la repoblación de las villas y ciudades se otorgó la libertad á los siervos que á ellas acudieran obligándose á su defensa, temerosos los señores de que sus siervos los abandonaran y se acogieran á las nuevas poblaciones, les cedieron solares para sí y para sus hijos á fin de que los cultivaran y explotaran, mediante úni-

camente un tributo y el reconocimiento del señorío, cambiándose así los siervos antiguos en vasallos ó solariegos.

Los doctores Asso y de Manuel en su discurso—nota al título VIII, lib. I del F. Viejo de Castilla dicen así al hablar de los solariegos.

"El origen de los vasallos solariegos es probablemente uno mismo con el de las casas solariegas. Así se llamaban en los primeros tiempos los solares ó heredades que, teniendo una casa ó castillo anexo, formaban el patrimonio y habitación de los hijos-dalgo..... Es regular que éstos destinaran para el cultivo y cuidado de sus posesiones algunos labradores ó caseros, los cuales, logrando afianzar su mantenimiento en el usufructo de aquellos bienes, tuviesen obligación de pagar el censo ó *infurción* al señor. Según esta idea, podemos colocar á los solariegos en la clase de los emphiteutas; y por consiguiente es errado el concepto de Berganza y de otros que atribuyeron á los solariegos la calidad de personas serviles. Es verdad, según expresa la ley I, tít. VII, lib. I, que el señor les podía tomar todo cuanto tuviesen, y aun prenderles el cuerpo; pero esto era en el caso de abandonar el solar, y pasarse á otro señorío sin dejarle poblado, ó bien faltando á la obligación de pagar el censo, como lo declara la ley XIII, cap. XXXII del ord. de Alcalá, que es la ley II, tit. I, libro VI, N. R. Y aun se les permitía enagenar y empeñar el solar con tal que fuese á favor de otro solariego, pues de este modo no perjudicaban al derecho del señor."

"Los solariegos, no sólo no tenían el dominio directo en los bienes que administraban, sino que tampoco podían adquirir cosa alguna, que no corriese de aquel solar, y estuviese sujeta á las mismas cargas; ni podían llevar ningunos bienes del solar á otro señorío, salvo á la behetría de aquel señor, cuyo era el solariego, y con la condición de dejar el solar poblado, á fin de que no faltase posada al señor: l. II y III, tit. I, lib. VI, N. R."

Aparte la opinión de los citados doctores, es innegable que la condición de los solariegos, tan dura en un principio que el señor podía llegar hasta tomarles el cuerpo y todo cuanto poseían sin derecho á reclamar contra tales violencias, llegó á mitigarse bastante en las disposiciones del Fuero Viejo. Una de éstas prohibe al señor tomar sus bienes al solariego *si non ficier por que;* y si abandonaba la servidumbre usando de su libertad natural, se concede al señor, como máximum, el derecho de quitarle los bienes que llevara consigo y de despojarle del solar en que habitara; pero sin que le fuera permitido prenderle ni cas-

tigarle, concediendo, por el contrario, al solariego el derecho de recurrir al rey contra los atropellos del señor. Desde el momento, pues, en que el solariego podía voluntariamente dejar de estar sometido á su señor, abandonándole los bienes y el solar, no había verdadera servidumbre, así que poco á poco se fué extinguiendo hasta que ni en la historia ni en las leyes se hallan ya vestigios de ella á principios del siglo xv.

Asi como á los antiguos siervos sustituyen los solariegos, reemplazan á éstos, en virtud de un proceso análogo, los *vasallos;* pero el vasallaje en general era de muy varias especies y, no sólo compatible con la nobleza, sino con la misma ricohombría, recibiendo el nombre de vasallo toda persona que, mediante cierta retribución, estaba obligada á prestar á otra algunos servicios. Todo aquel, aunque fuese hidalgo ó ricohombre, que recibía del rey ó de otro rico-hombre tierras, castillos, feudos ú otro cualquiera linaje de *soldada,* se constituía en vasallo suyo, obligándose á ciertos servicios, por lo común militares, que se indican en el Fuero Viejo. No es esta, pues, la acepcion en que debe tomarse la palabra vasallo, cuando se considera á esta clase como la sucesora de los solariegos. Estos hombres eran llamados *vasallos naturales,* dependientes en todo de su señor y distintos por completo de los *asoldados,* según consigna explícitamente citado Fuero, al decir: "puede haber vasallos en dos maneras; que crian, é arman, é cásanlos, é erédanlos, é otro sí puede haber vasallos é asoldados„. De esta clase se fué paulatinamente formando, con los menestrales y los pocos poseedores de tierra que no eran fijo-dalgos ni caballeros, la de los plebeyos ó pecheros, y cuando llegó á ser libre, surgió de ella el *estado llano,* en contraposicion á la nobleza y al clero.

Hubo también en Castilla, principalmente desde la conquista de Toledo por Alfonso VI, otra clase de personas llamadas *mudejares*, sarracenos, que habiendo aceptado, mediantes ciertos pactos, la dominación cristiana, residían en las ciudades conquistadas por los cristianos, conservando el ejercicio de su culto y estando sometidos á leyes y jueces propios, á diferencia de los otros moros que, prisioneros en los combates, eran sometidos á cautiverio, hasta que conseguían su libertad convirtiéndose al cristianismo ó pagando su rescate. La condición de los mudejares en los estados cristianos era análoga á la de los *muzarabes* entre los sarracenos.

En *Navarra* se distinguieron tres clases de personas: la de

los *nobles;* la de los *ruanos* y *francos;* y la de los *labradores* ó *villanos.*

La nobleza se componía, en primer término, de los *ricos-hombres,* que se creían descendientes directos de los antiguos caudillos fundadores de la monarquía y pretendían poco menos que equipararse á los reyes; seguían á estos los *caballeros*, personas de noble alcurnia ó linaje, á quienes el rey concedía aquel título en recompensa de sus servicios; tercero, los *infanzones*, también de noble linaje, pero que no habían obtenido aún los honores y título de caballeros; y por último, los *infanzones de carta*, llamados también *de abarca,* sin duda por su origen, pues eran labradores á quienes el rey concediera la hidalguía.

De sus privilegios y preeminencias trataremos al hacerlo de la nobleza en general, bastando por ahora consignar que la separación entre nobles y villanos era tal, que no podían aquellos casarse con mujer villana sin perder la hidalguía; que no obligaba al noble la palabra empeñada al villano; y que la acusación de hurto, hecha por primera vez por un villano contra un noble, era ineficaz, negando éste bajo juramento.

La clase de los *ruanos*, llamados así por vivir en grandes centros de población donde había calles ó *ruas*, aumentada después con los *francos* ó extranjeros que se habían establecido en el país, se dedicaba á la industria fabril y comercial, no estaba sujeta á servidumbre personal y fué en Navarra el núcleo de los concejos.

Los *vasallos labradores*, llamados también *villanos solariegos,* de las villas ó casas de labor en que vivían, eran descendientes de los antiguos adscripticios ó siervos de la gleba y su condición muy desgraciada, hallándose por completo á merced de los señores, quienes, se cree, tuvieron sobre ellos en los primeros tiempos el derecho de vida y muerte. Los bienes de los labradores ó villanos pasaban á sus señores á falta de parientes próximos; cuando un villano moría, sus hijos habían de implorar del señor que les permitiera seguir viviendo en sus heredades, sopena de tenerlos en prisión por cuanto tiempo quisiera; tenían también la obligación de seguirle á la guerra, de pagarle los pechos ó tributos, de no abandonarle las heredades sin dejar en ellas quien las cultivara, y estaban sujetos en todo á la jurisdicción del señor. Más adelante fué mejorando la condición de esta clase, principalmente en los pueblos de realengo, á donde por lo mismo acudieron muchos huyendo de la tiranía y

arriesgando el ser duramente castigados por sus señores, si por acaso volvían á su poder.

Análoga á la de Navarra, como su origen, fué la división de clases en el reino de Aragón.

La nobleza se componía de *ricos-hombres,* de *infanzones* y de *caballeros.*

Los *ricos-hombres de natura, ó barones,* llamados así porque no debían su creación á la voluntad del monarca, se consideraban descendientes de los doce *pares* ó nobles que se suponían autorizados por la primitiva constitución aragonesa para separarse de la fidelidad al rey, en caso de que éste violara el pacto con la nación, y hasta para sustituir en su lugar cualquiera otro soberano, aunque fuera gentil. De sus grandes privilegios trataremos en el capítulo correspondiente á la nobleza.

Seguían á estos los *ricos-hombres de mesnada,* creados por Jaime I para hacer contrapeso al poder de la antigua nobleza de *natura* y contar con un cuerpo más adicto, dando al efecto *en honor* á sus mesnaderos tierras y pueblos.

Había tambien *infanzones,* descendientes de linaje de reyes, según unos, ó de los ricos-hombres según otros, y entre éstos se distinguian los *caballeros,* infanzones que habían sido investidos con la orden de caballería; *infanzones de carta,* que sin ser de linaje noble habían sido elevados á tal condición por documento auténtico de su señor; y por último, y en general, *señores de vasallos,* personas de cualquiera condición, aun simples particulares, que tenían vasallos por haber comprado un pueblo de señorío.

A la clase noble seguían los *ciudadanos* que habitaban en las ciudades y villas de realengo; y entre éstos se llamaban *burgueses* los que se dedicaban á profesiones liberales y los que explotaban el comercio ó la industria en grande escala sirviéndose de apoderados y otros dependientes, y hombres de *condición,* los industriales y comerciantes de menos importancia y los dedicados á oficios mecánicos. Unos y otros eran libres y formaron el estado llano, cuyo prestigio fué creciendo hasta llegar á entrar en cortes.

Bajo el yugo de la altiva nobleza gemían los *vasallos* de señorío, privados de toda protección legal y sujetos á la tiranía más horrible y arbitraria. Los nobles y señores de otros lugares, que no eran de la Iglesia, podian tratar bien ó mal, según capricho, á sus vasallos y quitarles sus bienes sin ulterior recurso y sin

que el rey pudiera mezclarse en nada de esto, llevando algunos señores sus exageradas y criminales pretensiones hasta sostener que, segun fuero, podían hacerlos morir de hambre ó sed, ó de cualquiera otro modo, sin necesidad de oirlos y sin forma de proceso. El honor de los vasallos y aun de las mismas mujeres é hijas, lo mismo que la libertad y que la vida, estaba por completo á merced del señor, siendo tanto más odiosa esta esclavitud, cuanto que cualquiera hombre libre, aun sin ser noble, podía, como indicamos arriba, hacerse señor de vasallos solo con comprar tierras de señorío. En la clase humilde son también de notar los llamados *villanos de parada*, cuya suerte fué acaso peor en los primitivos tiempos que la de los mismos vasallos de señorío, pues no faltan escritores según los cuales el derecho de vida y muerte que sobre ellos tenía el señor era tan bárbaro y absoluto, que sus hijos podian despedazar al villano y repartirse sus miembros. La condición de unos y otros, primero la de estos últimos, fué no obstante mejorando con el tiempo, por influjo de causas análogas á las que en Castilla hicieron más llevadera la de los siervos y solariegos, redimiendo al fin su esclavitud, no sin protestas armadas ó insurrecciones, mediante el pago de ciertos tributos.

En Cataluña, único país de España donde se desarrolló por completo el feudalismo, formaban la nobleza más elevada, cuya organización algunos atribuyen á Carlomagno, los *condes, vizcondes*, *comitores* y *valvasores*. Los condes ó *potestades* tenían mero y mixto imperio en sus dominios, y aunque desde el siglo XIII fueron vasallos de la corona de Aragón, de la que recibieron feudos, se cree que en un principio solo prestaban homenaje al conde de Barcelona, sin ser feudatarios de nadie. Los vizcondes fueron al principio sustitutos de los condes en el gobierno y administración de justicia, confundiéndose después con los comitores y viniendo á ser un término medio entre los condes y los valvasores, que formaban el último grado de la nobleza, llamándose así los magnates que sólo contaban por vasallos cinco caballeros.

La nobleza de segunda clase se componía de *caballeros, donzells*, hijos de caballeros que aún no habían sido armados caballeros, y *generosos* ú *hombres de paratge*, descendientes de los soldados á quienes Borrell II hizo nobles por haberle acompañado en la conquista de Barcelona.

Después de esta nobleza seguía el estado llano, compuesto de tres clases ó *manos:* la *mayor*, formada por los que ejercían

profesiones científicas ó liberales y propietarios que vivían de sus rentas; la *mediana*, constituida por industriales y comerciantes de importancia, y la *menor*, compuesta de mercaderes y artesanos. Todas estas personas eran libres y en la misma condición se hallaban los habitantes de los realengos.

La clase baja estuvo compuesta en Cataluña hasta el reinado de Fernando II por los *payeses*, unos llamados de *remensa* ó *redimencia* (rescate), los más infelices y oprimidos, y otros menos vejados.

El origen de los payeses de remensa dícese que proviene de los primeros tiempos de la reconquista, pues habiendo algunos habitantes del principado aceptado la dominación sarracena y resistiéndose después, por temor á los moros, á ayudar á sus compatriotas en la obra de la reconquista, cuando ésta se realizó, los vencedores dejaron á aquellos labriegos en la misma ó peor condición en que vivían bajo los árabes. No están, sin embargo, todos los escritores conformes respecto á este origen, atribuyendo los unos á los árabes tan dura servidumbre, mientras que otros la hacen derivar de los rudos compañeros de Carlomagno. De todos modos produjo gravísimos trastornos en más de un caso hasta que en 1486 fué abolida por Fernando II de Aragón.

Las vejaciones y oprobios á que estaban sujetos estos verdaderos siervos se hallaban, por decirlo así, compendiados en los llamados, con razón, *malos usos*. Estos eran seis: *remensa personal*, en virtud del cual el siervo no podía abandonar los dominios de su señor sin previo concierto de rescate y sin poder disponer de sus bienes inmuebles: *intestia*, derecho del señor á la tercera parte y en ciertos casos á la mitad de los bienes del que moría sin testar: *cugucia*, derecho del señor á la mitad de la dote de la mujer adúltera, ó á toda si el marido hubiera sido consentidor: *xorquia*, derecho del señor á la sucesión del hombre ó mujer de remensa muertos sin herederos directos legítimos, esto es, sin hijos. Estos cuatro malos usos estaban consignados en las leyes, los dos siguientes provenían de la costumbre y eran: *arcia*, que consistía, según unos, en el derecho del señor á que la mujer de remensa lactara á los hijos de aquel, con retribución ó sin ella; y según otros, era lo que el señor exigía al vasallo cuando por culpa de éste se incendiaba alguna casa rural; y *firma de espolio forzada*, conocido en Francia con el nombre de *droit de cuisse*, que consistía en un acto ó signo de dominio sobre la recien desposada.

No todos los payeses estaban sujetos á todos los malos usos, ni eran estos iguales en todas las comarcas de Cataluña, habiendo también algunos que, aun llamándose hombres de remensa ú *hombres propios*, no estaban sujetos á ninguno de aquellos, por lo menos legítimamente, por no poder sus señores hacerlos constar en legal forma.

La fusión de los estados cristianos no fué bastante á hacer desaparecer la diferencia de clases; pero la tendencia, ya iniciada anteriormente, á disminuir los privilegios, franquicias y poder de la nobleza fué acentuándose cada vez más, y las clases humildes, por su parte, fueron redimiendo muchos de los vejámenes á que estuvieron sujetas, pudiendo afirmarse que la servidumbre había sido abolida por completo para los españoles á fines del pasado siglo y que la principal distinción entre nobles y plebeyos se redujo á la exención ó al pago de impuestos, pechos ó tributos, al acceso á ciertos cargos, y á las formalidades en los procesos y aplicación de ciertas penas. Aun estas mismas diferencias cesaron legalmente con el advenimiento y consolidación del régimen constitucional (1).

---

(1) He aquí las principales disposiciones, relativas á las personas, sus deberes, derechos y garantías, que contienen nuestros códigos políticos:

Constitución de 1812. Art. 7° Todo español está obligado á ser fiel á la Constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas.

Art. 8° También está obligado todo español, sin distinción alguna, á contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.

Art. 9° Está asimismo obligado todo español á defender la patria con las armas, cuando sea llamado por la ley.

Art. 244. Las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes en todos los Tribunales; y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas.

Art. 247. Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión, sino por el Tribunal competente determinado con anterioridad por la ley.

Art. 248. En los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas.

Art. 249. Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado en los términos que prescriben las leyes ó que en adelante prescribieren.

Art. 250. Los militares gozarán también de fuero particular, en los términos que previene la ordenanza ó en adelante previniere.

Art. 287. Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca según ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se notificará en el acto mismo de la prisión.

Art. 290. El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre que no haya causa que lo estorbe, para que le reciba declaración, mas si esto no pudiera verificarse, se le conducirá á la cárcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las veinticuatro horas.

Art. 291. La declaración del arrestado será sin juramento, que á nadie ha de tomarse en materias criminales sobre hecho propio.

Art. 293. Si se resolviese que al arrestado se le ponga en la cárcel, ó que permanezca en ella en calidad de preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará copia al alcaide, para que la inserte en el libro de presos, sin cuyo requisito no admitirá el alcaide á ningún preso en calidad de tal, bajo la más estrecha responsabilidad.

Art. 294. Sólo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y en proporción á la cantidad, á que esta pueda extenderse.

Art. 295. No será llevado á la cárcel el que dé fiador en los casos en que la ley no prohiba expresamente que se admita la fianza.

Art. 296. En cualquier estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso la pena corporal, se le pondrá en libertad dando fianza.

Art. 300. Dentro de las veinticuatro horas se manifestará al tratado como reo la causa de su prisión, y el nombre de su acusador si lo hubiere.

Art. 301. Al tomar la confesión al tratado como reo, se le leerán íntegramente todos los documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres de éstos; y si por ellos no los conociere se le darán cuantas noticias pida para venir en conocimiento de quienes son.

Art. 302. El proceso de allí en adelante será público en el modo y forma que determinen las leyes.

Art. 303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios.

Art. 304. Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes.

Art. 305. Ninguna pena que se imponga por cualquiera delito que sea, ha de ser trascendental por término ninguno á la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto precisamente sobre el que la mereció.

Art. 306. No podrá ser allanada la casa de ningún español, sino en los casos que determine la ley para el buen orden y seguridad del Estado.

Art. 308. Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese en toda la Monarquía, ó en parte de ella, la suspensión de algunas de las formalidades prescritas en este capítulo para el arresto de los delincuentes, podrán las Cortes decretarla por un tiempo determinado.

Art. 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción á sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno.

Art. 361. Ningún español podrá escusarse del servicio militar, cuando y en la forma que fuere llamado por la ley.

Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión ó aprobación alguna anterior á la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.

Art. 373. Todo español tiene derecho de representar á las Cortes ó al Rey para reclamar la observancia de la Constitución.

Constitución de 1837. Art. 2° Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción á las leyes. La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente á los jurados.

Art. 3° Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito á las Cortes y al Rey, como determinen las leyes.

Art. 4° Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales.

Art. 5° Todos los españoles son admisibles á los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad.

Art. 6° Todo español está obligado á defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y á contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.

Art. 7° No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún

español, ni allanada su casa, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

Art. 8° Si la seguridad del Estado exigiere en circunstancias extraordinarias la suspensión temporal en toda la Monarquía, ó en parte de ella, de lo dispuesto en el artículo anterior, se determinará por una ley.

Art. 9° Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó Tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que éstas prescriban.

Art. 10. No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización.

Constitución de 1845. Las mismas disposiciones y en idénticos artículos que la anterior, excepto el último párrafo del artículo 2°, relativo á la calificación de los delitos de imprenta por los jurados, y la última parte del artículo 4°, respecto á la unidad de fuero; pues uno y otra fueron suprimidos en la Constitución de 1845.

Constitución de 1869. Art. 2° Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito.

Art. 3° Todo detenido será puesto en libertad ó entregado á la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.

Toda detención se dejará sin efecto ó elevará á prisión dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente.

La providencia que se dictare se notificará al interesado dentro del mismo plazo.

Art. 4° Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez competente. El auto por el cual se haya dictado el mandamiento se ratificará ó repondrá, oido el presunto reo, dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto de la prisión.

Art. 5° Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ó extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos urgentes de incendio, inundación ú otro peligro análogo, ó de agresión ilegítima procedente de adentro, ó para auxiliar á persona que desde allí pida socorro.

Fuera de estos casos, la entrada en el domicilio de un español ó extranjero residente en España y el registro de sus papeles ó efectos sólo podrán decretarse por juez competente y ejecutarse de dia.

El registro de papeles y efectos tendrá siempre lugar á presencia del interesado ó de un individuo de su familia; y en su defecto de dos testigos vecinos del mismo pueblo.

Sin embargo, cuando un delincuente hallado infraganti y perseguido por la autoridad ó sus agentes se refugiare en su domicilio, podrán éstos penetrar en él sólo para el acto de la aprehensión. Si se refugiare en domicilio ajeno, precederá requerimiento al dueño de éste.

Art. 6° Ningún español podrá ser compelido á mudar de domicilio ó de residencia sino en virtud de sentencia ejecutoria.

Art. 7° En ningún caso podrá detenerse ni abrirse por la autoridad gubernativa la correspondencia confiada al correo, ni tampoco detenerse la telegráfica.

Pero en virtud de auto de juez competente podrán detenerse una y otra correspondencia, y también abrirse en presencia del procesado la que se le dirija por el correo.

Art. 11. Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó Tribunal á quien, en virtud de leyes anteriores al delito, competa el conocimiento y en la forma que éstas prescriban.

No podrán crearse Tribunales extraordinarios ni Comisiones especiales para conocer de ningún delito.

Art. 12. Toda persona detenida ó presa sin las formalidades legales, ó fuera de los casos previstos en la Constitución, será puesta en libertad á petición suya ó de cualquier español.

La ley determinará la forma de proceder sumariamente en este caso, así como las penas personales y pecuniarias en que haya de incurrir el que ordenare, ejecutare ó hiciere ejecutar la detención ó prisión ilegal.

Art. 13. Nadie podrá ser privado temporal ó perpetuamente de sus bienes y derechos, ni turbado en la posesión de ellos sino en virtud de sentencia judicial.

Los funcionarios públicos que bajo cualquier pretexto infrinjan esta prescripción serán personalmente responsables del daño causado.

Quedan exceptuados de ella los casos de incendio é inundación y otros urgentes análogos en que por la ocupación se haya de excusar un peligro al propietario ó poseedor, ó evitar ó atenuar el mal que se temiere ó hubiere sobrevenido.

Art. 14. Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad común y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa indemnización regulada por el juez con intervención del interesado.

Art. 15. Nadie está obligado á pagar contribución que no haya sido votada por las Cortes ó por las corporaciones populares legalmente autorizadas para imponerla, y cuya cobranza no se haga en la forma prescrita por la ley.

Todo funcionario público que intente exigir ó exija el pago de una contribución sin los requisitos prescritos en este artículo incurrirá en el delito de exacción ilegal.

Art. 16. Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones de senadores, diputados á Cortes, diputados provinciales y concejales.

Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español:

Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta ó de otro procedimiento semejante.

Del derecho de reunirse pacíficamente.

Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios á la moral pública; y por último,

Del derecho de dirigir peticiones individual ó colectivamente á las Cortes, al Rey y á las autoridades.

Art. 18. Toda reunión pública estará sujeta á las disposiciones generales de policía. Las reuniones al aire libre y las manifestaciones políticas sólo podrán celebrarse de dia.

Art. 19. A toda asociación cuyos individuos delinquieran por los medios que la misma les proporcione, podrá imponérsele la pena de disolución.

La autoridad gubernativa podrá suspender la asociación que delinca, sometiendo incontinenti á los reos al juez competente.

Toda asociacion cuyo objeto ó cuyos medios comprometan la seguridad del Estado podrá ser disuelta por una ley.

Art. 20. El derecho de petición no podrá ejercerse colectivamente por ninguna clase de fuerza armada.

Tampoco podrán ejercerlo individualmente los que formen parte de una fuerza armada sino con arreglo á las leyes de su instituto en cuanto tenga relación con éste.

Art. 21. Véase la nota de la página 334.

Art. 22. No se establecerá ni por las leyes ni por las autoridades disposición alguna preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos definidos en este título. Tampoco podrán establecerse la censura, el depósito ni el editor responsable para los periódicos.

Art. 23. Los delitos que se cometan con ocasión del ejercicio de los derechos consignados en este título serán penados por los Tribunales con arreglo á las leyes comunes.

Art. 24. Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción ó de educación sin previa licencia, salva la inspección de la autoridad competente por razones de higiene y moralidad.

Art. 25. Todo extranjero podrá establecerse libremente en el territorio español, ejercer en él su industria, ó dedicarse á cualquiera profesión para cuyo desem-

peño no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por las autoridades españolas.

Art. 26. A ningún español que esté en el pleno goce de sus derechos civiles podrá impedírsele salir libremente del territorio, ni trasladar su residencia y haberes á país extranjero, salvas las obligaciones de contribuir al servicio militar ó al mantenimiento de las cargas públicas.

Art. 27. Todos los españoles son admisibles á los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad.

La obtención y el desempeño de estos empleos y cargos, así como la adquisición y el ejercicio de los derechos civiles y políticos son independientes de la religión que profesen los españoles.

El extranjero que no estuviere naturalizado no podrá ejercer en España cargo alguno que tenga aneja autoridad ó jurisdicción.

Art. 28. Todo español está obligado á defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y á contribuir á los gastos del Estado en proporción de sus haberes.

Art. 29. La enumeración de los derechos consignados en este título no implica la prohibición de cualquiera otro no consignado expresamente.

Art. 31. Las garantías consignadas en los arts. 2°, 5° y 6°, y párrafos primero, segundo y tercero del 17 no podrán suspenderse en toda la monarquía ni en parte de ella sino temporalmente y por medio de una ley, cuando así lo exija la seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias.

Promulgada aquella, el territorio á que se aplicare se regirá, durante la suspensión, por la ley de orden público establecida de antemano.

Pero ni en una ni en otra ley se podrán suspender más garantías que las consignadas en el primer párrafo de este artículo, ni autorizar al gobierno para extrañar del reino, ni deportar á los españoles, ni para desterrarlos á distancia de más de 250 kilómetros de su domicilio.

En ningún caso los jefes militares ó civiles podrán establecer otra penalidad que la prescrita previamente por la ley.

Constitución de 1876. Art. 1°. Son españoles:

Primero. Las personas nacidas en territorio español.

Segundo. Los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.

Tercero. Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.

Cuarto. Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la monarquía.

La calidad de español se pierde, por adquirir naturaleza en país extranjero y por admitir empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey.

Art. 2° Los extranjeros podrán establecerse libremente en territorio español, ejercer en él su industria ó dedicarse á cualquiera profesión para cuyo desempeño no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por las autoridades españolas.

Los que no estuvieren naturalizados, no podrán ejercer en España cargo alguno que tenga aneja autoridad ó jurisdicción.

Art. 3° Todo español está obligado á defender la patria con las armas, cuando sea llamado por la ley, y á contribuir, en proporción de sus haberes, para los gastos del Estado, de la Provincia y del Municipio.

Nadie está obligado á pagar contribución que no esté votada por las Cortes ó por las corporaciones legalmente autorizadas para imponerla.

Art. 4° Ningún español, ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

Todo detenido será puesto en libertad ó entregado á la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.

Toda detención se dejará sin efecto ó elevará á prisión dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente.

La providencia que se dictare se notificará al interesado dentro del mismo plazo.

Art. 5° Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez competente.

El auto en que se haya dictado el mandamiento se ratificará ó repondrá, oido el presunto reo, dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto de la prisión.

Toda persona detenida ó presa sin las formalidades legales, ó fuera de los casos previstos en la Constitución y las leyes, será puesta en libertad á petición suya ó de cualquier español. La ley determinará la forma de proceder sumariamente en este caso.

Art. 6° Nadie podrá entrar en el domicilio de un español, ó extranjero residente en España, sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes.

El registro de papeles y efectos se verificará siempre á presencia del interesado ó de un individuo de su familia, y, en su defecto, de dos testigos vecinos del mismo pueblo.

Art. 7° No podrá detenerse ni abrirse por la autoridad gubernativa la correspondencia confiada al correo.

Art. 8° Todo auto de prisión, de registro de morada ó de detención de la correspondencia, será motivado.

Art. 9° Ningún español podrá ser compelido á mudar de domicilio ó residencia sino en virtud de mandato de autoridad competente y en los casos previstos por las leyes.

Art. 10. No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización.

Si no precediere este requisito, los jueces ampararán, y en su caso reintegrarán en la posesión al expropiado.

Art. 11. Véase la nota de la página 334.

Art. 12. Cada cual es libre de elegir su profesión y de aprenderla como mejor le parezca.

Todo español podrá fundar y sostener establecimientos de instrucción y de educación con arreglo á las leyes.

Al Estado corresponde expedir los títulos profesionales y establecer las condiciones de los que pretendan obtenerlos y la forma en que han de probar su aptitud.

Una ley especial determinará los deberes de los profesores y las reglas á que ha de someterse la enseñanza en los establecimientos de instrucción pública costeados por el Estado, las provincias ó los pueblos.

Art. 13. Todo español tiene derecho:

De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta ó de otro procedimiento semejante, sin sujeción á la censura previa.

De reunirse pacíficamente.

De asociarse para los fines de la vida humana.

De dirigir peticiones individual ó colectivamente al Rey, á las Cortes y á las autoridades.

El derecho de petición no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada.

Tampoco podrán ejercerlo individualmente los que formen parte de una fuerza armada, sino con arreglo á las leyes de su instituto, en cuanto tenga relación con éste.

Art. 14. Las leyes dictarán las reglas oportunas para asegurar á los españoles en el respeto recíproco de los derechos que este título les reconoce, sin menoscabo de los derechos de la Nación, ni de los atributos esenciales del poder público.

Determinarán asimismo la responsabilidad civil y penal á que han de quedar sujetos, según los casos, los jueces, autoridades y funcionarios de todas clases, que atenten á los derechos enumerados en este título.

Art. 15. Todos los españoles son admisibles á los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad.

Art. 16. Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó Tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito, y en la forma que éstas prescriban.

Art. 17. Las garantías expresadas en los artículos 4°, 5°, 6° y 9°, y párrafos primero, segundo y tercero del 13, no podrán suspenderse en toda la Monarquía, ni en parte de ella, sino temporalmente y por medio de una ley, cuando así lo exija la seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias.

Sólo no estando reunidas las Cortes y siendo el caso grave y de notoria urgencia, podrá el Gobierno, bajo su responsabilidad, acordar la suspensión de garantías á que se refiere el párrafo anterior, sometiendo su acuerdo á la aprobación de aquellas lo más pronto posible.

Pero en ningún caso se suspenderán más garantías que las expresadas en el primer párrafo de este artículo.

Tampoco los jefes militares ó civiles podrán establecer otra penalidad que la prescrita previamente por la ley.

SECCIÓN CUARTA

ELEMENTOS POLÍTICO SOCIALES

CAPITULO PRIMERO

LA NOBLEZA

En casi todos los pueblos, juntamente con las primeras manifestaciones de organización social y política, aparece una clase preeminente, que, ora por su origen, ya por las funciones que le estuvieran encomendadas, ó como depositaria de las tradiciones y glorias nacionales, ha ejercido una influencia más ó menos grande en la marcha de los estados. Desde los *brammanes* de la India, los *sparciatas* de la Laconia, los *eupatridas* de Atenas, los *patricios* de Roma y los *señores feudales* de la Edad Media hasta los modernos tiempos, en que al origen y al privilegio de raza han reemplazado en prestigio las riquezas y el talento, la historia confirma en general la existencia de este elemento social como factor de la política.

Por lo que hace á nuestra patria, ya hemos indicado quienes componían entre los godos la clase más elevada, así como algunos de sus más importantes privilegios. La influencia política de la nobleza visigoda se evidencia recordando que ella formaba el consejo de los reyes; que la elevación de éstos al trono y su deposición dependían muchas veces de la voluntad

de los magnates; que, segun disposición expresa del Fuero Juzgo, Ley VIII, tít. I, no podía tomar el reino, ni hacerse rey ningún religioso ni otro hombre si no era de linaje de los godos, y *fijodalgo* y *noble;* que éstos desempeñaron en un principio los oficios palatinos; que á los mismos estaban encomendados, como duques, condes y gardingos, los cargos más importantes de la administración y la milicia, y que sus discordias se dirimían casi siempre á espaldas de la autoridad, confiando la resolución al éxito de las armas. Únase á esto la costumbre de que cada noble podía formarse un cortejo de personas adictas á su particular servicio, ya por medio de donaciones, ya por el prestigio de su valor y de su nombre y la esperanza consiguiente de merecer sus favores ó de participar del botín y depredaciones, consecuencia de los combates, y resaltará aún más la prepotencia de esta clase en aquellos tiempos de continua lucha y cuando la organización del estado era tan débil y tan efímero el poder de los monarcas.

Tan luego como la monarquía asturiana comenzó á consolidarse reaparece la nobleza gozando de privilegios y derechos análogos á los que tuviera en tiempo de los godos, desempeñando idénticos cargos y teniendo la misma intervención en el gobierno. Este poder fué aumentándose paulatinamente, contribuyendo á ello la ambicion de los grandes, cimentada en la necesidad de su concurso para la obra de la reconquista, en la escasa autoridad de los reyes y en la falta de una clase media, incompatible con el estado de guerra y constante alarma, en que traían revuelto el país las algaradas de los moros y las luchas intestinas entre los mismos nobles ó entre los varios estados cristianos.

La independencia de Castilla, iniciada despues de la muerte de los condes Nuño Fernandez, Abolmondar *el Blanco* y Fernando Ansurez y realizada de hecho por Fernán Gonzalez con el concurso de los nobles, alienta á éstos en su camino de ambición, estimándose indispensables, no ya sólo para ensanchar el territorio castellano y rechazar las incursiones de la morisma, sino también para consolidar la independencia del nuevo estado. Así obtuvieron en tiempo de D. Sancho García, llamado *el de los Buenos Fueros,* muchos privilegios, figurando como el más notable el restringuirse á solos tres dias la obligación que tenían de servir en la hueste á sus expensas. Pero á medida que se fortalecía el poder de los monarcas tendieron éstos á amenguar el de los nobles y, así como en León Alfonso V limitó las

adquisiciones de tierras por éstos, sujetó á la jurisdicción real todas las ciudades y pueblos, y confirmó la obligación de acudir á la hueste del rey, cuando por éste fueran llamados, en Castilla las leyes del Fuero Viejo indican también esta tendencia, pues, si dicho fuero se formó, como pretenden algunos, á petición de los nobles para afirmar sus privilegios, prueba es de que se controvertían y disputaban, y si sólo fué debido á la iniciativa de los monarcas, las disposiciones del mismo muestran el espíritu que á aquellos animaba respecto á las exageradas pretensiones de la nobleza. La ley I, tít. I, que reserva al rey la exclusiva en los derechos de *Justicia, Moneda, Fonsadera* y *suos yantares;* la I, tít. III, que fija la obligación para todo fijodalgo de acudir á la hueste; la II del mismo título, que impone á todos los vasallos, aunque sean fijosdalgo, la obligación de dejar, cuando murieren, á su señor la *minción*, ó sea una cabeza de los mejores ganados; las del tít. V, relativas á la amistad, desafíos, treguas, muertes, heridas y deshonras entre los fijosdalgo, y en las que se prescriben reglas para limitar el absurdo derecho de la venganza y de la guerra privada, indican, entre otras, á la vez que los grandes privilegios de los nobles, aquel espíritu ó tendencia de los reyes. Pero ni estas leyes, ni aun la intervención del clero estableciendo, bajo pena de excomunión, la *paz de Dios,* ó sea la obligación de abstenerse en ciertas épocas solemnes de la Iglesia de actos contrarios á la paz y caridad cristianas, fueron bastantes para reprimir los abusos de la irascible soberbia de los grandes, y lo prueba la reproducción de alguna de aquellas leyes en las del Fuero Real, tít. 21, y en la 46, tít. 32 del Ordenamiento de Alcalá, sin necesidad de recurrir al testimonio de historiadores y cronistas. Con todo, en este punto la narración histórica confirma la existencia del mal que intentaban remediar las leyes, pues, según ella, lejos de cesar los retos y desafíos personales, las contiendas entre los nobles se generalizaron en diversas épocas suscitando ligas ó coaliciones y convirtiéndose en verdaderos bandos, provocados unas veces por el ódio ó emulación entre los grandes, y otras para proteger ó combatir á los diversos pretendientes al trono, y aun levantándose contra los mismos reyes. Sirvan de ejemplo los de Avila en tiempo de Alfonso VI, los de Sevilla y Múrcia bajo Enrique *el Doliente,* los del tiempo de Juan II entre el Almirante de Castilla y el conde de Benavente contra los partidarios del condestable D. Alvaro de Luna, los de Córdoba y Sevilla bajo el débil Enrique IV, la conjuración de nobles, prelados, órdenes mili-

tares y concejos capitaneados por Sancho *el Bravo* contra su padre Alfonso *el Sábio*, la coalición de los grandes durante la minoría de Alfonso XI, y otras muchas, que sólo empezaron á decrecer en los vigorosos reinados de los Reyes Católicos, contribuyendo no poco á ello la fuerza que de los concejos supieron los monarcas oponer á la de las nobles, y sobre todo el establecimiento de la Santa Hermandad, institución armada y principio de milicia permanente que, dependiendo directamente de los reyes, hizo menos necesario el auxilio de los grandes para las empresas bélicas, así como también fué menos preciso su concurso en el gobierno y administración del Estado desde que la reina Isabel, con hábil política, dispensó una especial protección á las letras y á las ciencias, dando asiento en altos puestos, como consejeros y auxiliares del poder real, á las personas más eminentes por su saber.

El carácter inquieto y turbulento de la nobleza castellana era no sólo hijo de su ocupación constante en las armas y de la necesidad de su concurso para la obra de la reconquista, sino también de sus privilegios y franquicias y de su gran propiedad territorial, cada vez más acrecentada y consolidada por las mercedes de los reyes, por los feudos y vinculaciones.

Entre aquellos privilegios es muy de notar, además de la exención de impuestos generales y de la prueba del tormento, que ya indicamos en la sección anterior, el que permitía á los ricos-hombres castellanos renunciar la naturaleza del reino, si así era su voluntad, dejar el servicio del rey y hasta hacerle la guerra; derechos consignados implícitamente en las leyes del título III, libro I del Fuero Viejo; y á tal punto era respetada la altivéz de los grandes que, si algún merino del rey prendiera á un noble malhechor, ni el mismo rey podía protejer la persona de su delegado, una vez cesado en el cargo, contra las iras del criminal ó de su familia, sino indirectamente obligando á los enojados á que le concedieran treguas de sesenta años.

No todos los nobles gozaban de iguales preeminencias y distinciones, dependiendo algunas de estas de la mayor ó menor jerarquía de aquellos.

El primer grado de la nobleza le componían, según dijimos, los *ricos hombres* que provenían de los antiguos *optimates* y tenían la primera autoridad y lugar en el Estado. Según la ley VI, tít. IX, Partida II: "Los nobles son llamados en dos maneras; ó por linage ó por bondad. E como quier que el linage es noble cosa; la bondad pasa e vence, mas quien las ha ambas,

este puede ser en verdad rico ome: pues que es rico por linage, e ome cumplido por bondad. E ellos han aconsejar al Rey en los grandes fechos, e son puestos para fermosear su córte e su reino;„ y la ley X, tít. XXV, Partida IV, dice: "Ricos omes, segund costumbre de España, son llamados los que en otras tierras dicen condes o barones.„ No debe confundirse el rico-hombre con el hombre rico ó poseedor de grandes tierras puesto que la historia presenta algunos casos de poderosos hacendados que, si quisieron llegar á la consideración de ricos-hombres tuvieron que solicitarla y obtenerla de los reyes, quienes se la conferían mediante las ceremonias necesarias al efecto.

"Eran, dice el señor Colmeiro, la divisa de la rica hombría, el pendón y la caldera en señal de que podían levantar gente de guerra, y tenían la hacienda necesaria para sustentar sus *mesnadas*. Gozaban de suma autoridad en la córte, pues ellos eran del consejo ordinario de los reyes, confirmaban los privilegios rodados, asistían á las juntas del reino, juzgábanles alcaldes de su fuero, y cuando el rey los echaba de la tierra, debía darles plazo señalado, dentro del cual saliesen con sus vasallos y sus amigos sin recibir molestia. Estaban exentos de pechos, ejercían la jurisdicción civil y criminal en los lugares de su señorío, los poblaban y les otorgaban fueros, pedían los tributos y servicios que antes satisfacían á la corona, y en suma, llevaban toda la voz del rey, siendo señores con mero y mixto imperio. Gozaban además de un notable privilegio á que llamaron *honra* nuestros mayores, el cual consistía en la inmunidad de las casas y tierras de los ricos-hombres, en donde no podían entrar los ministros de la justicia y oficiales del rey, ni para sacar pechos, ni castigar delitos, ni aun extraer criminales. Asistían estos nobles al tribunal del rey cuando se asentaba en audiencia pública á oir los pleitos y causas por su persona, y á semejanza de lo que pasaba en la córte tenían asimismo juntas de condado, y en ellas los ricos-hombres de la tierra, formando el consejo del conde, juzgaban y sentenciaban los negocios árduos ó ya entendían en la imposición y reparto de los tributos y otras cosas tocantes al gobierno.„

Andando el tiempo el título de rico-hombre se trocó por el de grande, distinguiéndose desde Cárlos I dos clases de grandeza, de las que era la primera la más antigua por su linage, emparentada con los reyes y más poderosa por sus riquezas, si bién la distinción entre una y otra vino á reducirse á actos de ceremonia en la etiqueta palaciega y de poca trascendencia,

como dependientes de la voluntad de los monarcas que establecía aquella á su capricho.

Los duques, condes y marqueses que seguían á los grandes en la jerarquía nobiliaria, fueron en un principio cargos del Estado, y aunque algunos, los duques, llegaron á alcanzar tal honra que sólo por serlo se les consideró como grandes, vinieron por último á reducirse á meros títulos honoríficos, sin más derechos ni preeminencias positivas que las comunes á las clases privilegiadas.

Las leyes XI y XII, tít. I, Partida II, nos dan idea de estas diferentes jerarquías y del poder correspondiente á las mismas. "Duque, dice la primera de dichas leyes, tanto quiere dezir como cabdillo guiador de hueste, que tomó este officio antiguamente de mano del emperador. E por este officio que era mucho honrado heredaron los emperadores á los que los tenían, de grandes tierras que son agora llamados ducados: e son por ellos vasallos del imperio. E conde tanto quiere decir, como compañero que acompaña cotidianamente al emperador o al rey faziendole seruicio señalado: e algunos condes auia a que llamauan palatinos, que muestra tanto como condes de palacio, porque en aquel logar los acompañauan, e les fazian seruicio continuamente, e los heredamientos que fueron dados á estos oficiales son llamados condados. E marques tanto quiere dezir como señor de alguna gran tierra que está en comarca de reinos."

La ley XII citada, al hablar del poder que "han los señores sobredichos, que han el señorío de las tierras, por heredamiento," dice: "E ha poderio cada vno dellos en su tierra en fazer justicia, e en todas las otras cosas que han ramo de señorio segund dizen los priuilegios que ellos han de los emperadores e de los reyes que les dieron primeramente el señorio de la tierra o segund la antigua costumbre, que vsaron de luengo tiempo: fueras ende que non pueden legitimár nin fazer ley: nin fuero nueuo, sin otorgamiento del pueblo."

No precisan exactamente nuestras leyes cuál fuese mayor grado de nobleza, si la de los caballeros ó la de los llamados fijodalgos, pues no sólo se confunden muchas veces sus privilegios é inmunidades, sino que en ocasiones ni aun se distingue en las mismas leyes entre los comunes á los mero fijodalgos y á los ricos-hombres.

Con todo, consultando las de Partida, parecen los caballeros un orden ó género de profesión, mientras que la hidalguía representa únicamente una condición social. "Cauallería fué lla-

mada antiguamente la compaña de los nobles omes, que fueron puestos para defender las tierras..... Mas en España llaman caualleria, non por razon que andan caualgando en cauallos: mas porque bien assi como los que andan á cauallo, van mas honradamente que en otra bestia, otrosi los que son escogidos para caualleros, son más honrados, que todos los otros defensores. Onde assi como el nome de cauallería fué tomado de compaña de omes escogidos para defender, otrosi fué tomado el nome de cauallero de la caualleria. (Ley I, tít. XXI., Part. II. "Sobre todas las cosas cataron que fuessen (los caballeros) omes de buen linaje, porque se guardassen de fazer cosa porque podiessen caer en verguença. E porque estos fueron escogidos de buenos logares, e con algo, que quiere tanto dezir en lenguaje de España como bien: por esso los llamaron fijos dalgo, que muestra tanto como fijos de bien.„ (Ley II. ib.) "La mayor parte de la fidalguia, ganan los omes por honrra de los padres. Ca magüer la madre sea villana e el padre fidalgo: fijo dalgo es el fijo que dellos nasciere. E por fijo dalgo se puede contar: mas non por noble. Mas si nasciesse de fija dalgo, e de villano, non touieron por derecho que fuesse contado por fijo dalgo, porque siempre los omes el nome del padre ponen primeramente delante, quando alguna cosa quieren decir. (Ley III, ib.)

La grande estima que de los caballeros se hacía, pruébanla las cualidades que, según las leyes siguientes del mismo título y Partida, debieran reunir. Conforme á ellas habían de ser cuerdos y fuertes "porque ellos han a defender la eglesia e los reyes e todos los otros. Ca la cordura les fara que lo sepan guardar a su pro e sin su daño. E la fortaleza que esten firmes en lo que fizieren e non sean cambiadizos;„ prudentes, porque por la mesura "obran de las cosas como deben e non passan a mas;„ justos, porque "las fagan derechamente;„ entendidos, "ca si lo non fuessen errarian en las cosas que auiessen de fazer;„ sabidores "ca en otra manera non podrian ser complidamente buenos defensores;„ bien acostumbrados, porque "vsando los fijos dalgo de cosas contrarias, les faze que lleguen al acabamiento de las buenas costumbres;„ mansos y humildes, "ca assi como les esta bien de auer palabras fuertes e brauas para espantar los enemigos, e arredrarlos de si quando fueren entre ellos, bien de aquella manera las deuen auer en cosas mansas e omildosas para falagar e allegar a aquellos que con ellos fueren;„ arteros ó hábiles y mañosos, "ca las mañas les fazen que se sepan armar

bien e apuestamente, e otrosi ayudarse, e ferir con toda arma, e ser bien ligeros e bien caualgantes;„ y muy leales "ca esta es bondad en que se acaban e se encierran todas las buenas costumbres, e ella es asi como madre de todas. E como quier que todos los omes la deuen auer, señaladamente conuiene mucho á estos que la ayan, por tres razones: La primera es porque son puestos por guarda e defendimiento de todos: e non podrian ser buenos guardadores los que leales non fuesen. La segunda por guardar honrra de su linaje lo que non guardarian quando en lealtad errasen. La tercera por non fazer ellos cosas porque cayan en verguença en lo que caerian, mas que por otra cosa, si leales non fuesen.„

Las leyes XXIII y XXIV del mismo título y Partida enumeran las principales distinciones y privilegios propios de los caballeros.

Son los más notables entre estos: que, si en los pleitos que tuvieren, ellos ó sus personeros omitieren en tiempo oportuno algun medio de defensa, pudieran practicarlo despues, sin que les perjudicara, para su eficacia, el fallo dictado con anterioridad; que en los juicios criminales seguidos contra ellos no pudieran ser sometidos á cuestión de tormento, excepto por traición al rey ó al reino donde moren; que no se les pudiera arrastrar, ni ahorcar, ni destrozar ó mutilar, cuando merecieran la pena de muerte, sino que les fuese cortada la cabeza ó fueran muertos de hambre si por su gran delito fuesen acreedores á tal rigor; que no perdieran sus cosas por tiempo, esto es, que no valiera contra ellos la prescripción mientras estuvieran en hueste, ó con misión del rey, ó empleados señaladamente en su servicio y por su mandado; y que pudieran hacer testamento y dejar mandas ó legados en la forma que quisieran, sin estar sujetos á las solemnidades exigidas en los testamentos de los demás hombres para su validez.

Algunos de estos privilegios fueron también propios de los fijo dalgos, siquiera no estuvieran armados caballeros, como lo prueba, entre otras, la ley VIII, tit. XXXI, Partida VII, al hablar de las cosas que han de tener presentes los jueces antes de aplicar las penas; pero la inmunidad más importante de que gozaban los caballeros y fijo dalgos era la exención de pechos ó tributos; y si bien es cierto que no fué de tanta trascendencia, ni se hizo sentir tanto en el Estado cuando la hidalguía se tenía únicamente por linaje, despues que los reyes la concedieron, ya en recompensa de señalados servicios, ó graciosamente, y aun

por venta para allegar recursos, los pechos que anteriormente pesaban sobre los nuevos fijo dalgos, hubieron de recaer sobre los labradores é industriales, cegando así las fuentes de la producción, á más de otros graves inconvenientes que de la concesión inconsiderada de esta gracia surgieron y que dieron lugar varias veces á reclamaciones de las Cortes, principalmente contra la venta de hidalguías, fundándose entre otras cosas, en que ciertos cargos eran desempeñados por hidalgos improvisados, faltos de calidad y de las condiciones adecuadas, y en que la venta de hidalguías es odiosa tanto para la clase de los hidalgos que ven mezclarse entre ellos, sólo por tener dinero, á personas de baja condición, como para la de los pecheros, en quienes se desarrolla naturalmente la envidia y el encono contra aquellos de sus iguales que, sin méritos, se elevan sobre ellos y les perjudican además con los nuevos tributos de que los otros se descargan.

Como estas reclamaciones no tuvieran eficacia bastante para concluir con el mal y por unas ú otras causas se multiplicaran excesivamente las concesiones de hidalguía, se vulgarizó ésta tanto que acabó por perder todo prestigio social, así como el abuso en las concesiones de títulos de Castilla y otros honores fué minando poco á poco la influencia de la nobleza, dándola el polpe de gracia las leyes desamortizadoras con la abolición consiguiente de los mayorazgos y quedando hoy reducida al personal prestigio de este ó el otro noble que por su saber, cultura ó riquezas sale del nivel general de los de su clase.

De origen común y de análogas instituciones los reinos de Navarra y de Aragón, como derivados del antiguo de Sobrarbe, hubo en ambos una clase noble y poderosa cuya influencia política se pretendía hacer venir del fuero primitivo y del pacto que se decía celebrado entre el rey y el consejo de los doce pares que hubieron de auxiliarle en el gobierno y administración del Estado, principalmente en los negocios graves, como los concernientes á la guerra, á las treguas y á la paz.

Blancas en sus *Aragonensium rerum Comentarii* dilucida las cuestiones relativas á la nobleza de Aragón y sus distintas clases, examinando entre otras, las opiniones de Miguel de Molina y de Pedro de Salanova; pero adhiriéndose principalmente á la del obispo D. Vidal de Canellas. Según éste, había en Aragón *infanzones* y hombres de *servicio* ó de *signo* (servitii, sive signi). De entre los infanzones unos se llamaron *ermunii* y otros *francos de carta*. De los primeros, unos eran *barones* ó *ricos*

hombres; otros *mesnaderos;* otros simples *milites* (caballeros) y otros simplemente infanzones. Eran infanzones *ermunii*, esto es, inmunes de toda prestación ó carga, de tal modo que no estaban sujetos á nadie ni por obligación, ni por servidumbre, aquellos cuya libertad y honra de condición data de tal tiempo que no lo recuerda la memoria y era en ellos como innata y natural. Infanzones *de carta* son aquellos cuya inmunidad no viene de linaje ó de la naturaleza, sino de la liberalidad de aquel á cuyo servicio estaban sujetos y que quiso concedérsela por documento auténtico; y estos tales, aunque por la especie de donación que se les hizo gocen de la inmunidad de prestar ó de servir, participan muy poco de los privilegios propios de los otros infanzones, tanto que, aun concedida esta inmunidad por el mismo rey en documento público y auténtico sólo vale con relación al concedente y á su prosapia ó sucesores; de modo que, á pesar de tal inmunidad, pueden el concesionario y su descendencia estar sujetos al servicio de otras personas como si no tuvieran tal privilegio. Los *barones*, dichos así de *bar*, esto es beato, bueno, y *ones,* hombres, son también llamados *ricos*, y su condición era esta. Cuando algún mesnadero alcanzaba del rey algun *honor*, feudo, para sostener cierto número de *milites,* se hacia rico hombre ó barón. El rey debía crear estos ricos hombres ó tomarlos de sus mesnaderos naturales de Aragón, y nunca, sino por grave causa, de los extranjeros, á menos que habitasen en Aragón y tuvieran propiedades allí y naturaleza en el mismo reino por el padre y por la madre ó por cualquiera de los dos.

Todas las ciudades y villas mayores del rey debían asignarse á los ricos hombres, y estos debían poner en ellas *zalmedinas* y *baiulos*, alcaldes ó merinos, para que rigieran en su nombre las curias de aquellos lugares y para que se respondiera ante ellos de las *caloñas*, esto es, de las penas pecuniarias y de los demás derechos que las curias solían percibir. El rico hombre percibía las prestaciones llamadas *novenarios* y las *deberias,* ó sea ciertos tributos personales, consistentes en pan, gallinas y otras varias cosas, según la costumbre. El rey podía destituir á los ricos hombres siempre y de cualquier modo que quisiera. Esta destitución tenía lugar cuando el rey verbalmente ó por escrito exigía al rico hombre la devolución del *honor*, feudo, que le había dado; y una vez destituido el rico hombre, quedaba reducido á la clase de mesnadero, aunque fuese rico y noble y llevase consigo muchos *milites*. Podía también el rey

llamar una vez al año á su servicio al rico hombre con un número de soldados proporcionado á los estipendios que percibía, y el rico hombre por su parte estaba obligado á acudir con los suyos al llamamiento del rey y á servirle á sus propias expensas durante dos meses, pasados los cuales, podía retirarse del servicio real, á menos que el rey le proporcionase vituallas para sí y sus gentes de guerra, pues en este caso debería continuar en el servicio por cuanto tiempo quisiera el rey, aunque fuese todo el año. Tenía además el rico hombre la obligación de defender la tierra del rey y principalmente aquellos lugares que le fueron concedidos *pro stipendiis,* y las iglesias y monasterios y á todos los que morasen dentro de los límites de su *honor* y los bienes de los mismos. Había también de acudir á la corte, cuando fuera llamado por el rey, y darle allí su consejo, y mientras estuviera en la corte intervenir en los juicios de los negocios arduos, pues la *justicia* del rey nunca debía administrarse sin el consejo de los *barones* y de aquellos que se hallaren presentes en la corte, siquiera por tiempo. Y cuando los barones fueran llamados á la corte para alguna entrevista con otro rey ó príncipe, ó por otra causa grave, y por la grandeza ó necesidad de los negocios fueran molestados con excesivos gastos, debía auxiliarlos el rey con liberalidad y munificencia, pues importaba al Estado y á la majestad real que los barones no se vieran obligados por la pobreza á abandonar el servicio del rey y sujetarse al de otro inferior.

Mesnaderos eran los oriundos de los ricos hombres, al menos por línea paterna, y en cuyo linaje no había memoria de que fueran vasallos sino de rey ó hijo de rey ó de conde descendiente de linaje de reyes, ó de obispo ó prelado, á los cuales se concedía especial reverencia por Dios. Estos mesnaderos, aunque no estuvieran personalmente en la mesnada ó familia del rey, no perdían, sin embargo, su consideracion de tales. Porque el rey no debía negarse, sin justa causa, á recibirlos en su milicia ó en su familia, cuando lo desearan. Podían, sin embargo, los mesnaderos morar sin desdoro con los ricos hombres, ó con otros y recibir de ellos remuneración y otros dones, no como vasallos, sino como amigos.

Miles ó simple caballero era el vasallo de cualquiera que no fuese rey, hijo del rey, conde descendiente de linaje de reyes ó prelado de la iglesia. Y todos los descendientes de estos por línea masculina eran computados entre los simples *milites*.

Simple infanzón era el que, sin ser *miles*, tenía derecho á

entrar en la *milicia*, caballería, si se presentase oportunidad y tuviera de ello voluntad.

Para fijar el sentido de algunas frases empleadas por el obispo Canellas, dice Blancas que algunas ciudades ó pueblos se llamaban *honores* por darse en feudo á los ricos hombres; que los nombres de *milites é infanzones* pueden aplicarse á los barones del orden que los romanos llamaban *equestre* y que en lenguaje vulgar equivale al de *caballeros*, llamados posteriormente hijos dalgo; así como el de ricos hombres se trocó, andando el tiempo, por el de *señores*, según consta de los varios fueros que al efecto cita.

En suma: la primera nobleza de Aragón pretendía descender de los doce pares fundadores de la monarquía; sus miembros se llamaban *ricos hombres de natura* por estimar su condición hija de la naturaleza misma y no de la voluntad de los reyes; y sus privilegios más notables eran los siguientes: el rey no podía legalmente dar tierras en *honor* ó feudo á ninguna persona que no fuera rico hombre, derecho no siempre respetado por los monarcas que concedieron también feudos á los caballeros elevándolos hasta el nivel de aquellos; tenían los ricos hombres derecho á intervenir con el rey, prestando unas veces su consentimiento y otras su consejo en los asuntos más graves, especialmente en la formación de las leyes, en la declaración de guerra, y en los tratados de paz; les correspondía el señorío de las poblaciones más importantes ganadas á los moros, percibiendo sus rentas, pudiendo distribuirlas como en feudo entre sus caballeros ó vasallos, y nombrando en las ciudades y villas de su señorío *zalmedinas* y *bailes* para administrar justicia; podían desnaturalizarse del reino ó dejar el servicio del rey y hasta hacerle la guerra, sin incurrir en la nota de desleales, ni sufrir menoscabo en su honra; tenían derecho, segun fuero, á que el rey cuidase de su casa y familia, cuando se ausentaban, aunque fuera para hacerle la guerra ó para ponerse al servicio de otro soberano; no estaban sujetos en muchos casos al pago de tributos, y no se podía imponerles pena corporal, ni prenderlos por deudas, aunque sí era lícito secuestrarles sus estados; tenían también el derecho de guerra privada, reconocido en los mismos fueros y ejercido en muchas ocasiones; y, por último y descollando, sobre todos el privilegio llamado de la *Unión*, que, sino exclusivo de la nobleza, fué ideado por ella para afirmar juntamente con la constitución aragonesa, las franquicias y derechos de su clase. Por este privilegio se permitía, dice Blancas,

y era lícito á los aragoneses unirse todos contra el rey para rechazar por la fuerza cualquier ataque hecho por el monarca ó los suyos á las leyes; privilegio que consideraron aquellos tan inherente á sus libertades como los huesos y los nervios al cuerpo humano, y que si no fué establecido por el fuero mismo de Sobrarbe, se consideraba como coetáneo de las primeras instituciones aragonesas, y tan fijo y contenido en el espíritu de todos y propio del derecho aragonés, como si fuera ley de la naturaleza, y su fuerza evidente y clara por el uso y por la razón, pues decían ser poca cosa tener leyes escritas, y aun la misma magistratura del *Juez medio* establecido en el fuero, si en caso necesario, no fuese lícito defenderlas con las armas, cuando no fuera bastante luchar con la razón Según este privilegio, confirmado por Alfonso III, al grito de *Unión*, nobles y ciudadanos acudían presurosos á las armas, entregando los primeros sus castillos á los llamados *conservadores*, jefes elegidos de entre ellos para reunir en uno las fuerzas de todos, excitando á los presentes con sus exhortaciones y ejemplo y dirigiendo á los ausentes mensajeros y cartas para ponerles al corriente y reclamar su cooperación. Sin embargo, para que nunca se entendiera que la Unión tendía á menoscabar la autoridad del rey ni á mermar sus prerrogativas y sí solo á volver por los fueros de la libertad, cuidaron mucho de hacerlo así sensible por la simbólica alegoría del sello de la Unión que representaba al rey sentado en su trono, adornado con todos los reales atributos y rodeado de caballeros y hombres armados, pero hincados de rodillas, implorando su benignidad y como dando á entender su respeto al soberano juntamente con su fuerza y la necesidad de usarla contra las injusticias y tiranía. Este singularísimo privilegio no dejaba, sin embargo, de ser anárquico y de sumir á los pueblos en violentas y perniciosas convulsiones, y no pudo durar más tiempo que el que lo consintieron la condescendencia ó la debilidad de los monarcas, así que desapareció después de la célebre batalla de Epila, ganada á los unionistas por Pedro IV, de quien se dice que, al abolirle en las Cortes de Zaragoza convocadas al efecto, como se hiciera sangre en la mano al rasgarle con su puñal, pronunció estas célebres palabras: "Privilegio que tanta sangre ha costado, con sangre de rey se había de borrar.„

Respecto á la nobleza catalana ya hemos indicado sus clases y privilegios más notables, al hablar de la consideración social y jurídica de las personas, y como Cataluña fué el único país de España donde, según la opinión más común y por efecto

sin duda del origen francés de la *Marca hispánica*, arraigó por entero el feudalismo, parécenos oportuno y bastante dar aquí una idea de ésta y de los principales derechos de los señores feudales.

Conócese con el nombre de *Feudalismo* una organización especial de los principales estados de Europa desde los siglos IX y X cuando, dividido su territorio en multitud de feudos, se unían estos entre sí por ciertos lazos, con independencia casi completa del poder central. Antes de esta época había otra especie de propiedad, los *alodios y beneficios*, que ya hemos mencionado, y aunque los señores de estos territorios tendían siempre á convertir en hereditario el derecho que ordinariamente se les había concedido sólo de por vida, había sobre ellos un poder central por lo común fuerte y enérgico. Pero, cuando el poder real fué por si solo impotente para contener las invasiones exteriores, las poblaciones se agruparon alrrededor de los señores, quienes adquirieron los derechos á la soberanía y al homenaje. Al mismo tiempo el territorio se llenaba de castillos ó fortalezas que, despues de haber servido de refugio contra los invasores, se hicieron puntos de apoyo contra la autoridad real que, á la larga, se vió precisada á sancionar el derecho hereditario y la independencia y soberanía de los señores beneficiarios, si bien reservándose el derecho de que le prestasen homenaje y fidelidad, así como algunos servicios, especialmente militares.

Los dos principales rasgos que caracterizaban este estado social eran: 1° la particular naturaleza de la propiedad feudal que, si bien plena y hereditaria por una parte, imponía al poseedor respecto al donante y al vasallo respecto al señor ciertas obligaciones, como el servicio militar y el judiciario, y en algunos casos ciertas prestaciones pecuniarias y censos; y por otro lado, daba al señor sobre su feudo todos los derechos de la soberanía, poder legislativo, ejecutivo, judicial, militar y el de acuñar moneda: 2° una distinta jerarquía entre los diversos señores del territorio, unidos entre sí, de inferior á superior, por los vínculos del *homenage* y de la *fidelidad*, que no se disolvía sino por la traición del vasallo ó por la denegación de justicia demandada al soberano. Como todos los señores feudales, podían tener vasallos y serlo, á su vez, de otro más poderoso, surgía de aquí una escala de soberanos de mayor ó menor valer desde el rey hasta el simple castellano que solo era señor de su fortaleza y del territorio anejo.

Los derechos feudales, conocidos originariamente, según al-

gunos escritores, con el nombre de *lods* ú *honores*, eran muy varios, algunos de ellos caprichosos y hasta ridículos, como dependientes de las condiciones de la concesión y de las costumbres locales; pero los principales, más importantes y generales eran: el de llamar á los vasallos á las armas, el de administrar justicia, decretar impuestos, acuñar moneda, exigir ciertos servicios agrícolas, el de tutela sobre los hijos de los vasallos, el de autorizar sus matrimonios y los de caza y pesca (1).

El feudalismo, aunque pocos, produjo algunos útiles resultados: en una época de alarma y trastornos contínuos fué, siquiera mala, una forma de organización que prestó cierto vigor al Estado para rechazar las invasiones y, acostumbrando á los señores á hacer vida de familia dentro de sus fortalezas, dulcificó algo sus costumbres, elevando la consideración de la mujer y facilitando así la educación de los hijos, cuyo respeto vindicaba el aparecer iguales en el castillo la castellana y el señor. A vuelta de estos escasos bienes, entrañaba el feudalismo graves males. Las continuas guerras civiles, efecto de la falta de un poder central fuerte y de la soberbia de los grandes, producían un estado de anarquía en que, á la corta ó á la larga, vino á reemplazar á la justicia el reinado de la fuerza. La costumbre de pelear constantemente y de hacerlo depender todo de las armas, apartó á los nobles de todo otro ejercicio que no fuera éste, y la cultura intelectual fué abandonada, haciendo una y otra cosa cada vez más rudos y soberbios á los señores, faltos de racional freno á sus pasiones. La total servidumbre de las clases inferiores que, de hombres libres en un principio, vinieron á convertirse en *siervos de la gleva* ó en *villanos*, sujetos á multitud de cargas, gravámenes y vejaciones, fué un ataque constante á la dignidad humana y un obstáculo perenne para el progreso social. Así que, luchando de consuno contra esta viciosa organización la autoridad real, desconocida ó menospreciada, la Iglesia, desobedecida ó tiranizada, y los pueblos, reducidos á servidumbre por los señores, hubo de desaparecer para siempre, aun en aquellos pueblos que por su carácter fueron más propicios á tal modo de ser.

---

(1) La simple lectura de la ley I, título I, libro I del *Fuero viejo* basta, según lo dicho en el texto, para probar que en Castilla no se conoció el feudalismo en todo su desarrollo. «Estas quatro cosas, dice, son naturales al señorio del rey, que non las debe dar a ningund onme, nin las partir de si, ca pertenescen a el por razon del señorio natural: Justicia, Moneda, Fonsadera, e suos yantares.»

CAPÍTULO II

EL CLERO

Iniciada una nueva era para el estado visigótico con la conversión de Recaredo, la consideración social que el clero alcanza y su influencia política se hacen notar muy pronto, y los Concilios Toledanos, hasta entonces juntas de obispos para fines exclusivamente religiosos, revisten también el carácter de asambleas donde se inician ó establecen reglas de derecho concernientes á la organización y dirección del Estado, á la concreción del poder público y á la conducta que deben seguir los príncipes en provecho del reino. Bastará citar en prueba de esto, entre las muchas leyes que contiene el Fuero Juzgo debidas á los Concilios y por consiguiente al clero alto, algunas del título I: la II, relativa á la elección de los príncipes: la III, en que los obispos amonestan á los príncipes que sean mansos para con los súbditos y gobiernen el pueblo con piedad; la V y VI, que condenan á los que presuntuosamente pretenden apoderarse del reino, ó ganarle viviendo el rey; la VIII que señala las incapacidades para ser rey; y muchas otras del mismo título, en que se establecen penas contra los clérigos y legos que eligen rey en vida de otro, se recomienda á los príncipes piedad para con los delincuentes arrepentidos, y se encarga al pueblo el respeto, el amor y la defensa del rey y de sus hijos y familia.

Pero el prestigio alcanzado por el clero, siquiera fuese merecido por su saber y virtudes, no se tradujo solamente por una participación más ó menos directa y eficaz en los negocios públicos: efecto acaso de esta misma intervención desarrollóse á

veces en los obispos un espíritu mundano, que llevaba á algunos á querer acumular riquezas, como medio de hacerse más fuertes y poderosos, aun á costa de la misma Iglesia. Así lo prueban las leyes del Fuero Juzgo que tienden á asegurar los bienes de aquella contra la imprevisión ó la codicia de los obispos ó de cualquiera otro clérigo. En la ley II, tít. I, libro V, se manda que todos los obispos, al encargarse de su Iglesia, hagan delante de hombres buenos inventario de las cosas de ésta, para que el sucesor pueda reclamar del anterior ó de sus herederos los bienes pertenecientes á aquella; la III del mismo título declara nula la enagenación de cosas de la Iglesia, hecha por el obispo ó por otro clérigo sin consejo de los demás clérigos; y la V del mismo título y libro trata de poner coto á los obispos "que quieren toller á las eglesias lo que dizen que tovieron XXX annos„.

Y no obstante el gran poder que llegó á alcanzar el clero entre los godos, ni sus bienes gozaban de inmunidad, según la opinión de Masdeu, citado por Colmeiro, quien afirma que el clero godo estaba sujeto al pago de tributos y que había algunas leyes que imponían á los sacerdotes penas pecuniarias; ni aun la inmunidad personal era completa, puesto que los eclesiásticos se hallaban sujetos sin distinción de jerarquías á los mandatos judiciales y obligados á acudir á la hueste, como cualquiera séglar cuando fueran llamados.

Aun dada la intervención del clero en los asuntos del Estado y principalmente en la formación de las leyes relativas á la elección de los monarcas, nada autoriza para considerar como gobierno teocrático el que rigió el imperio visigodo despues de la conversión de Recaredo, pues ni la rudeza de los tiempos, ni las ambiciones de los grandes, sostenidas por el principio electivo de la monarquía, hacían posible el total cumplimiento de las leyes formadas con el concurso de los obispos, ni aun estos mismos pudieron ser independientes de los monarcas despues que su nombramiento fué debido, más que á la elección del pueblo, á la voluntad de los reyes. Pero, si bien no puede con razón llamarse teocrática la monarquía visigótica, es innegable que en ella se hizo sentir grandemente la influencia del clero, efecto debido, juntamente con la perfección de la doctrina y de la moral cristiana, á la virtud y al saber del episcopado que contaba en su seno prelados tan esclarecidos como San Leandro y San Isidoro de Sevilla, San Braulio de Zaragoza y los metropolitanos de Toledo, San Eugenio, San Ildefonso y San Julian.

Empeñados los españoles en la obra de la reconquista y haciendo la guerra á los enemigos de la religión y de la patria, se acentúa más y más desde los primeros tiempos en los reinos de León y de Castilla la influencia sacerdotal, pues á la vez que director de las conciencias, conservador de las costumbres y propagador de la doctrina, era el alto clero, con sus tierras y vasallos, con sus mesnadas y jurisdicción, con sus fortalezas y castillos, poderoso como la más alta nobleza, con la que corrían parejas los obispos y los abades.

Por otra parte, á medida que se ensanchaban los límites de los estados cristianos, las necesidades de la agricultura, de un lado, y las de la guerra por otro, hacían surgir nuevas poblaciones en las que los nuevos pobladores necesitaban los auxilios y consuelos de la religión; de donde al aumento de pueblos acompañó el de parroquias, y como el sacerdote era, entre todos, la persona más ilustrada y su misión de amor y de paz le había de colocar por cima de las rencillas y enemistades de sus convecinos, le era fácil interponerse como mediador entre unos y otros y servirles también de consejero en el ejercicio de sus derechos y deberes. Añádese á esto que, falto el Estado de administración y necesitando del concurso del clero para algunos servicios, éste, ó por propia iniciativa, ó ya por implícito encargo, llevaba el registro de todos aquellos actos en que juntábanse en armonía el elemento civil y el religioso y que pasaban de ordinario ante el sacerdote, quien, como compensación de estos servicios, recababa legítima autoridad, tanto de los particulares á quienes favorecía, como del Estado á quien servía.

El poder del alto clero tenía entonces también su explicación y no es arduo justificarle, pues si los demás señores no propendían á hacer llevadera su dominación sobre los siervos y labriegos á ella sujetos, en cambio la mansedumbre y la piedad no eran extrañas á muchos señores eclesiásticos, quienes hallaban un moderador de sus pasiones en su mayor ilustración y en las máximas cristianas que estaban obligados á enseñar y á practicar. Así que no es de admirar, si los hombres sometidos á servidumbre preferían la de las iglesias y monasterios, más suave y blanda que la de los señores legos, y que procurasen pasar de una á otra cuando la ocasión se les ofreciese; y á tal punto se acentuó esta tendencia y de tal modo acudían los solariegos á avecindarse en las tierras de los señores eclesiásticos, que en ocasiones se prohibió al clero poblar sus tierras y luga-

res con vasallos de otros señores ó con personas sujetas á servidumbre.

No siempre se mostraron los obispos dignos del poder, de la influencia y del respeto á que les hiciera acreedores el acatamiento á los preceptos morales y el cumplimiento de los deberes propios de su sagrado ministerio. Si es cierto que cooperaron á la reconquista, que trataron de dulcificar la condición desgraciada de las clases humildes, que intentaron moderar la soberbia de los grandes y encaminar á los reyes por la senda del deber, inculcándoles máximas de moderación y de amor á los pueblos, también se dejaron, á veces, llevar por las pasiones y no faltan por desgracia ejemplos de obispos soberbios, codiciosos é intrigantes que no llevaban en paz la merma de su poder, pretendían acrecentar inconsideramente sus riquezas y privilegios y sembraban la discordia en los pueblos fomentando las disensiones entre los grandes, haciéndose cabezas de facción y hasta conspirando contra los reyes. Pero justo es reconocer que no fué poca culpa de la época, pues, compelidos los eclesiásticos desde tiempo de los visigodos á acudir á la hueste, y haciéndose aun más necesario su concurso durante la reconquista, la costumbre de las armas, el fragor de las batallas y los horrores de la lucha habían de influir en su carácter, ahogando los sentimientos humanitarios y piadosos y generando en ellos las pasiones y los vicios propios de quien sólo ve en la fuerza la garantía de la vida y del propio bienestar. En todo caso, fuera por la influencia perniciosa de los tiempos ó por la levadura humana, es lo cierto que el clero leonés y castellano desconoció muchas veces sus deberes y que los servicios prestados á la causa de la religión y de la patria se empañaron por vicios de todo género y por desatentadas pretensiones, traducidas en una ingerencia excesiva en los negocios y en la adquisición de franquicias y privilegios desmedidos, siquiera esto último tuviera su excusa cuando la igualdad jurídica era desconocida por completo, y pudiera aparecer disculpable, en la alternativa de ser opresor ú oprimido, optar por lo primero.

La fervorosa fé de nuestros mayores y la esperanza de obtener el perdón de sus culpas por medio de actos de caridad hacia las iglesias, monasterios y demás institutos fundados para el servicio de Dios fué también causa principalísima del ascendiente del clero, pues, manifestándose aquellos sentimientos por donaciones á las iglesias é institutos piadosos, unió el clero al predominio inherente á su misión espiritual el poder de administrar

y utilizar las pingües rentas y productos de tales donaciones. Unióse á esto que en muchas de ellas se trasmitían á los cesionarios, juntamente con el dominio de los lugares y tierras, los derechos señoriales de los trasmisores y los siervos y vasallos; así que, en las hechas por los reyes, unas veces se confiere á los obispos ó abades de las iglesias y monasterios todo el dominio y jurisdicción real; otras se extienden estos á los familiares de la iglesia ó monasterio, eximiéndoles por completo de todo otro servicio y jurisdicción; y en algunos casos llegaban los donantes hasta á someterse á la autoridad de los obispos y abades, obligándose á no hacer, en lo relativo á sus iglesias y monasterios, cosa que les desagradase.

Afirmaban asimismo el poder del clero y le constituían en clase privilegiada la inmunidad real y personal que de muy antiguo disfrutara.

Por la primera fueron exentos los bienes de las iglesias y monasterios del pago de pechos y tributos; inmunidad que, siquiera como gracia especial otorgada á cierta iglesia, hacen subir algunos autores á los primeros tiempos de la reconquista, y que no se concretaba solamente á las iglesias y monasterios sino también á los clérigos y monjes á ellos adscritos, y aun á los habitantes de los lugares y tierras á donde alcanzaba la jurisdicción de los prelados. De esta inmunidad y de otros privilegios á favor de los bienes eclesiásticos nos dan testimonio, además de los historiadores y cronistas, las leyes de Partida y algunas insertas en la Novísima Recopilación. Entre las primeras son de notar la I, tit. XI, Part. I, que prohibe que las iglesias "sean apremiadas de ningun pecho, nin otro embargo,„ y la I, tit. XIV, Part. I, que sanciona la amortización eclesiástica, prohibiendo enagenar los bienes de las iglesias, á menos que su venta se destinara á pagar deudas de la misma iglesia, ó á redimir á sus parroquianos cautivos, ó á dar de comer á los pobres en tiempo de hambre, ó á edificar ó reparar la iglesia, ó á comprar lugar cerca de ella para cementerio, ó á adquirir para la misma iglesia otra cosa mejor ó más útil que la enagenada. De las leyes recopiladas citaremos solamente la VI, tít IX, libro I, Nov. Rec., según la cual, "Exentos deben ser los Sacerdotes y Ministros de la Santa Iglesia de todo tributo segun derecho: y por esto ordenamos y mandamos, que en cuanto á los pedidos que nos entendemos servir, y en otros pedidos de qualquiera otra calidad, los Clérigos sean libres de contribuir y pechar con los Concejos; pero que en los pechos que son para bien común

de todos, así como para reparo de muro ó de calzada, ó de carrera ó de puente, ó de fuente, ó de compra de término, ó en costa que se haga para velar y guardar la villa y su término en tiempo de menester, que en estas cosas tales, á fallescimiento de propios de Concejo, deben contribuir y ayudar los dichos Clérigos, por quanto es pro comunal de todos y obra de piedad.„

Pero ni las leyes que sancionaban la inmunidad de los bienes eclesiásticos, ni las que establecían la amortización ó les otorgaban otros privilegios, como términos extraordinarios para prescribir tales bienes y aun la prohibición de que pudieran prescribirse, ni las mismas excomuniones y penas eclesiásticas contra los que violaran tal propiedad, fueron bastantes en ocasiones para ponerla á cubierto de los ataques de los grandes prevalidos de su fuerza, ó de los concejos y populares cuya envidia y encono excitaban el acrecentamiento de los bienes de la Iglesia y sus inmunidades. Así que, desconfiando el clero de la eficacia de las leyes civiles y de los anatemas religiosos para salvar su propiedad, hubo de recurrir al expediente de ponerla bajo la salvaguardia de personas poderosas, encomendándoles su defensa mediante ciertos donativos ó prestaciones y bajo la promesa hecha por aquellas de acudir con gente de armas para ayudar á los obispos y abades en la defensa de sus derechos y de los bienes de las iglesias y monasterios. Estos convenios ó pactos, llamados *encomiendas,* trocáronse á veces contra los que debían ser protegidos, pues, aprovechando aquellos grandes señores, *encomenderos,* la debilidad de los eclesiásticos, trataron y consiguieron por la astucia ó por la fuerza usurpar en muchos casos los bienes confiados ó su protección y defensa.

Al lado de la inmunidad real y contribuyendo también al aumento de su poder é influencia, tuvo el clero cierta inmunidad personal que se traducía en algunos especiales privilegios. Sin entrar en investigaciones respecto á su origen, es lo cierto que por mucho tiempo gozó el clero de fuero especial, por virtud del cual sus pleitos y causas habían de librarse ante el superior eclesiástico, siquiera esto pudiera atribuirse en su origen al derecho propio del señor sobre sus vasallos, concepto señorial que tuvieron los obispos y abades. Este fuero que, en realidad no fué sancionado legalmente hasta las leyes de Partida (XLVIII, título VI, Part. I, al establecer "que los clérigos non deuen ser pleytosos nin juzgadores en el fuero seglar,„ y LVII del mismo título al fijar, "en quales pleytos temporales han franqueza los clérigos para judgarse ante los jueces de santa

eglesia, e en quales non„), fué reconocido como existente por la Nov. Recopilación, ley VI, tít. X, lib. I, al hablar de las "calidades que han de tener los clérigos de corona y otras menores ordenes para que gozar del privilegio del fuero,„ III, tít. I, lib. II, al prescribir que "los señores temporales, concejos y jueces no perturben la jurisdicción de la iglesia, ni hagan comparecer los clérigos ante sí,„ y otras varias.

Entre los privilegios particulares de algunos clérigos adscritos á determinadas iglesias, son dignos de mencionarse la exención del servicio militar, que por gracia especial les fué concedida, y que no llegó hasta tiempos muy recientes á ser inmunidad común á los de su clase, y, en favor del clero español, el derecho exclusivo á obtener beneficios eclesiásticos; privilegio reclamado por la razón y la equidad, pues justo era recompensar los grandes servicios por él prestados á la patria y era útil también, bajo el punto de vista económico y político que los sacrificios de los naturales y los productos del territorio nacional no se aplicasen á enriquecer á extranjeros favorecidos por las intrigas de los privados ó por los caprichos de los reyes, quienes no obstante, para eludir sus deberes, idearon el expediente de la concesión de cartas de naturaleza, acto que más de una vez suscitó reclamaciones y protestas de las cortes y de los pueblos.

En Navarra y Aragón, gozó también el clero de privilegios é inmunidades análogas á las reseñadas, y su prestigio fué muy grande, efecto de las relaciones más íntimas de estos reinos con la Sede Pontificia y de la influencia que ésta alcanzara. Así lo prueban, entre otros hechos, el cambio del rito muzárabe por el romano, que se realizó allí antes que en Castilla, la tendencia de algunos de sus reyes á prestar homenaje ó declararse feudatarios de los papas, y la intervención que se atribuyó la Sede romana en las cosas tocantes al gobierno de estos pueblos, llegando en ocasiones hasta relevar á los súbditos del juramento de fidelidad prestado á los monarcas y á disponer del reino. Con todo, la influencia política del clero aragonés, tanto en la constitución como en la dirección del Estado, fué menor que la del leonés y castellano; pero no tan exígua que no llegara á adquirir representación en Cortes, aunque el advenimiento á estas del brazo eclesiástico en Aragón fuese muy posterior al de Castilla.

En suma: la formación en los Concilios Toledanos de leyes de carácter político y civil; las haciendas y vasallos que hicieron

de los obispos verdaderos señores con castillos y fortalezas, tierras y jurisdicción; su participación en la guerra con los moros y en las luchas y contiendas civiles, formando á veces ligas entre sí ó con la nobleza y aun con los defensores de las libertades del pueblo; su intervención en las Cortes, constituyendo el brazo eclesiástico, y en los consejos de los reyes; y por último, la inmunidad personal del fuero y la exención de pechos y tributos, juntamente con la amortización de los bienes eclesiásticos, son hechos más que suficientes para demostrar que en nuestra patria ha sido el clero un elemento político y social muy importante.

La igualdad jurídica, proclamada en las constituciones modernas, y las leyes desamortizadoras privaron al clero, como tambien á la nobleza, de sus privilegios y poder político, ya muy exíguo este último durante las autoritarias dinastías de Austria y de Borbón; y la proclamación de la libertad de cultos en el período revolucionario de 1869, y aun la sola consignación en el código fundamental de la tolerancia religiosa han mermado grandemente la influencia social del clero, incompatible con el descreimiento, la tibieza religiosa ó el sensualismo que dominan por desgracia la mayor parte del pueblo español.

CAPÍTULO III

ORDENES MILITARES

El espíritu religioso y entusiasta de la Edad Media produjo las Cruzadas, empresa grandiosa cuyos benéficos resultados, aparte el rescate de los Santos Lugares, fueron: retardar por mucho tiempo la invasión de los turcos en Europa; extender considerablemente la navegación y el comercio; aproximar entre sí las naciones haciéndolas salir de su aislamiento; acortar la distancia entre nobles y plebeyos por la comunidad de peligros y por los mutuos servicios; acrecentar el poder real y fomentar la clase media á expensas del feudalismo; emancipar á muchos siervos al investirlos con la enseña del cruzado; y hasta modificar la intolerancia religiosa haciendo cesar algunas preocupaciones.

Resultado también de las Cruzadas é informada por el espíritu caballeresco y religioso de la época fué la institución de las *órdenes militares* que, poniendo las armas al servicio de la fé, dió al mundo aquellos esclarecidos varones, en quienes se encontraba, dice Balmes, bajo la coraza de hierro un corazón lleno de ardor por la fé de Jesucristo y que tan pronto se reunían en comunidad para levantar al cielo una oración fervorosa, tan pronto marchaban impávidos al combate blandiendo la formidable lanza, terror de las huestes agarenas.

La orden de los *Templarios* fundada en la Palestina para luchar contra los infieles, defender los Santos Lugares y protejer á los viajeros y peregrinos que iban á visitarlos, unió á estos fines, propios del caballero cristiano, los tres votos comunes á todo instituto monacal, castidad, pobreza y obediencia. El valor en los peligros, las abstinencias del claustro y la grande

abnegación de los Templarios les granjearon muy pronto la admiración de la cristiandad, que contaba entre sus glorias la defensa de Gaza, la batalla de Tiberiades, la conquista de Damieta y la cruzada de Egipto; y cuando, despues de la pérdida de San Juan de Acre, perdieron también sus tesoros y la mayoría de sus caballeros, no por eso desapareció la orden, cuyos restos se refugiaron en la isla de Chipre, rehaciéndose con rapidez, extendiéndose por el Occidente y llegando hasta nuestra España, bajo el conde de Cataluña Ramon Berenguer III, estableciéndose después en Aragón y pasando pronto á Castilla, donde progresaron, principalmente en el reinado de Alfonso VIII, que tenía particular afecto á la regla del Cister, seguida por los Templarios.

Cuando Clemente V, movido por las quejas que en todas partes excitaban los crímenes y corrupción que, con razón ó sin ella, se atribuyeron á los Templarios, se decidió á suprimirlos aplicando sus bienes á la orden de San Juan, el rey de Aragón, don Jaime II, impetró del Papa que aquellos bienes se destinaran á fundar una nueva orden, lo que no pudo conseguir hasta el pontificado de Juan XXII, quien por bula de 18 de Junio de 1317 aprobó y confirmó, según lo propuesto por el rey, la orden de *Montesa*, verificándose su fundación solemne dos años despues en la capilla del palacio real de Barcelona y tomando su nombre de la villa de Montesa, que el rey le donó y donde fijó su residencia y principal asiento. Los estatutos fueron redactados por diez caballeros de Calatrava, que se invistieron los primeros con el hábito de la nueva orden, cuyo distintivo fué una cruz roja sin flores (posteriormente de gules) y el manto capitular blanco. Su último gran maestre renunció en manos del papa para que se incorporase esta dignidad á la corona de España, lo cual tuvo lugar en el reinado de Felipe II.

Con fines parecidos á la de los Templarios nació en España la orden de *Santiago*, cuyo origen hacen subir algunos cronistas, sin razón para ello, á los tiempos de Alfonso II el *Casto*, mientras que otros, extraviados según Mariana, por un privilegio que dicen concedió Fernando el *Magno* al monasterio de Sancti-Spíritus de Salamanca, suponen proviene esta orden del tiempo de Ramiro I; pero el documento aludido es, en opinión del historiador citado, apócrifo, y la opinión más aceptable y general la hace coetánea de Alfonso VIII, y por lo mismo posterior á la de Calatrava. Sobre su fundación dice el mismo escritor que, deseando los canónigos de San Eloy facilitar las peregrina-

ciones al sepulcro del Apóstol Santiago y favorecer á los peregrinos contra las penalidades del viaje y correrías de los moros, que cautivaban á muchos de ellos, establecieron para darles albergue, sin que se pueda precisar el tiempo en que esto ocurrió, muchos hospitales en todo el camino que llega hasta Francia, siendo entre todos el principal el de San Marcos, edificado en el arrabal de León Estas fundaciones piadosas ganaron el ánimo de los pueblos y fueron protegidas por los principales, donándoles grandes riquezas, y, á su ejemplo, algunos nobles de Castilla ejercitados en la guerra, pusieron en común sus bienes particulares, uniendo sus fuerzas con las de los canónigos de San Eloy, que tenían su convento en las afueras de Santiago, ajustándose á la regla de San Agustín, seguida por los canónigos, é impetrando y obteniendo del papa una bula expedida en 1175 en que se aprobó la orden y se dieron leyes á estos soldados religiosos para arreglar su manera de vida. Ordenóse, entre otras cosas, que de todo el número de caballeros señalaran trece que nunca se apartasen del lado del maestre y celebrasen con él capítulo todos los años en un lugar determinado; nombróse primer maestre á Pero Fernandez de Puente Encalada, que fué el principal de los enviados á Roma para impetrar la bula pontificia; señalóse por convento de la orden el hospital de San Marcos de León; se invistió á los caballeros con el distintivo de un manto blanco con cruz roja en forma de espada, y se les permitió contraer matrimonio con permiso del maestre. El padre Risco, citado por Chao, sostiene que esta orden tuvo origen en Cáceres y que sus caballeros se llamaron *Fratres de Cáceres, Congregatio de Cáceres, Seniores de Cáceres;* opinión á que también asiente el señor Colmeiro. Algunos escritores entienden que esta orden tuvo principio en la unión de ciertos caballeros aventureros y aun de malhechores y foragidos arrepentidos que se juntaron para guerrear contra los infieles y proteger á los peregrinos que iban á visitar el sepulcro del Apostol; opinion que, como dice muy bien el Sr. Lafuente, no debe amenguar en nada el lustre de una institucion cuyos hechos son un timbre de gloria para España, y puesto que el arrepentimiento y las proezas de sus primeros caballeros fueran bastantes á lavar la mancha originaria, si la hubiera.

La orden de *Calatrava*, más antigua, según la opinión corriente, que la de Santiago, fué fundada por dos monges del Cister en tiempo de Sancho III el *Deseado*. La plaza de Calatrava, cuya importancia se consideraba bastante para oponerla

como baluarte contra las correrías de los moros, fué entregada, despues de su conquista, á los Templarios, para que la defendiesen; pero, desconfiando éstos, á la venida de los almohades, de poder conservarla, la devolvieron al rey, y por más que éste la ofreció á cualquier noble ó caballero que quisiera defenderla, nadie se aventuró á aceptar la responsabilidad de tal empresa, hasta que fray Raimundo, abad de Fitero, estimulado por su compañero el monge Diego Velazquez se ofreció á llevarla á cabo, ofrecimiento que, aceptado con júbilo por el rey y secundado por el arzobispo de Toledo, quien ayudó con sus dineros y excitó con sus predicaciones á nobles y pueblos para que auxiliaran á los esforzados monges, dió por resultado la heróica defensa de Calatrava contra las acometidas de los moros; la donación por D. Sancho, en 1158, de la villa y de su tierra al abad Raimundo y á su compañero, y la fundación de la orden militar en que se inscribieron desde luego muchos esforzados varones, siguiendo al abad y tomando el hábito que este les diera. Aprobada por bula de Alejandro III en 1164, creció mucho en importancia y poder, y engrandecida por la liberalidad de los reyes, que le dieron riquezas, autoridad y el señorío de muchos lugares, llegó á poseer á principios de este siglo, no obstante haber terminado su misión despues de expulsados los moros y cuando ya no estaban en vigor sus estatutos, extensos territorios con pingües rentas y varios conventos de hombres y mujeres. El traje de ceremonia de sus caballeros es un manto blanco con una cruz roja flordelisada en el lado izquierdo.

La de *Alcántara,* llamada en su principio de *San Julián del Pereiro,* fué fundada en 1156 por dos caballeros de Salamanca, los hermanos D. Suero y D. Gomez Fernandez. Deseando éstos servir á la causa cristiana combatiendo á los moros fronterizos y tomándoles alguna plaza, se procuraron el concurso de otros caballeros que les ayudaran en la empresa, y buscando lugar apropósito para establecerse encontraron un día á un ermitaño llamado Pedro Amando, que había estado en Tierra Santa, y les mostró un lugar adecuado para su objeto donde él tenía su ermita y en el que por las escabrosidades del terreno podían facilmente levantar una fortaleza. Así lo hicieron y, asentados allí, acudieron otros soldados, quienes eligieron por capitan á D. Suero, y estimulados por el ermitaño fundaron una milicia religiosa bajo la regla del Cister, que les dió el obispo de Salamanca. Fué aprobada esta orden por el papa Alejandro III en 1177 y enriquecida por los reyes desde Fernando II y su hijo

Alfonso que les hicieron muchas donaciones importantes, entre ellas la de la villa y castillo de Alcántara, trocando entonces su antiguo nombre por este y separándose por completo de la de Calatrava, con la cual parece estuvo confundida algun tiempo. Los maestres de Alcántara llegaron á adquirir importancia y autoridad análogas á los de Santiago y Calatrava; sus caballeros tenían por distintivo una cruz verde flordelisada, y sobre el escudo de la orden se ve un peral que hace recordar su origen, por ser el lugar de su fundación muy abundante en árboles de aquella especie.

Aunque de extranjero origen, como los Templarios, debemos hacer mención de los caballeros Hospitalarios, puesto que tambien llegaron hasta nuestra patria y tomaron en ella asiento. Los Hospitalarios fueron en un principio miembros de una congregacion religiosa consagrada en los hospitales y hospicios al socorro y servicio de los pobres, enfermos, peregrinos y viajeros, y su origen remonta al siglo IX. Muy pronto se extendieron por toda la cristiandad, dando nacimiento á un gran número de congregaciones particulares entre las que notaremos la de San Juan de Jerusalem, de la que surgió más tarde la de Malta, cuyos caballeros vinieron á España por consecuencia del testamento del rey de Aragón, D. Alfonso el *Batallador,* quien legó sus estados á los caballeros Templarios, Hospitalarios y del Santo Sepulcro; y aunque no se cumpliera la voluntad del monarca, estableciéronse en Aragón los Hospitalarios ó Sanjuanistas, logrando adquirir pingües rentas, y pasando despues á Castilla donde prestaron al rey buenos servicios y contribuyeron con su denodado esfuerzo á la gran victoria de las Navas.

La orden militar y religiosa de los caballeros *Hospitalarios, de Malta ó de San Juan*, pues por todos estos nombres se los designa, data de principios del siglo XI. En esta época dos comerciantes de Amalfi obtuvieron del califa de Egipto permiso para edificar en Jerusalem un hospital, que dedicaron á San Juan, para albergar á los peregrinos que iban á visitar los Santos Lugares. Bajo la protección de Godofredo de Buillón y de sus sucesores los comerciantes de Amalfi se constituyeron en una orden religiosa, cuyos miembros tomaron el nombre de Hospitalarios, aunque sus estatutos no fueron definitivamente arreglados hasta 1113 por bula de Pascual II. Como, además de los votos ordinarios de obediencia, pobreza y castidad hacían estos religiosos el de albergar, asistir y defender á los peregrinos, fuéles necesario muchas veces recurrir al empleo de las

armas para cumplir su misión, y con ellas prestaron también grandes servicios á la causa cristiana, siendo los últimos que abandonaron la Tierra Santa, defendiendo despues contra los sarracenos muchas poblaciones é islas importantes, como San Juan de Acre, Chipre y principalmente Rhodas, que sostuvieron durante dos siglos, hasta que, atacados por Soliman el *Magnífico*, viéronse precisados á ceder al número. Perdida la isla, salieron de ella en número de 4.000 bajo la dirección de su gran maestre y anduvieron errantes por Candía y por Sicilia hasta que en 1530 se fijaron en la isla de Malta, que les cedió Carlos V y vino á ser el asiento definitivo de la orden. Sus miembros eran de tres clases, los *caballeros,* que debían ser nobles, los *capellanes* y la *gente de armas,* nacidos de padres honrados y que no se hubieran dedicado á las artes ó profesiones mecánicas ó bajas, y llevaban en su origen una túnica y manto negro, y en la guerra una cota roja con una cruz blanca de ocho puntas en el lado izquierdo. Aunque esta orden, extendiéndose por toda la cristiandad, llegó hasta España y tuvo un *gran conservador* en Aragón y un *gran canciller* en Castilla, no alcanzó en estos reinos, como tampoco la de los Templarios, la grandeza que las de Santiago, Calatrava y Alcántara, porque ni su origen era nacional, ni sus grandes maestres residian en nuestra patria.

Para el gobierno de estas tres últimas había un *maestre,* un *comendador*, que seguía en dignidad á aquel, y varias otras dignidades y oficios, como *priores* y *claveros.* Los maestres eran nombrados por el capítulo de la orden y confirmados por el rey, aunque varias veces pretendieron los papas hacer tales nombramientos fundándose en el carácter religioso de la institución, contra lo cual reclamaron las Cortes por considerar la provisión de aquel cargo propia del patronato real.

Además de las muchas tierras y lugares con vasallos, castillos y fortalezas, que lograron adquirir las órdenes militares, acrecentaban el poder de sus maestres la parte activa que tomaban en los asuntos graves del Estado y las ligas y bandos que formaban entre sí ó con la nobleza; y constituía esta institución en verdaderamente privilegiada la exención de la jurisdicción real y la especial de sus maestres, cuya existencia es indudable, pues, aunque según la cédula de Cárlos I, fecha en Valladolid en 23 de Agosto de 1527 (ley I, tit. VIII, lib. II, Nov. Rec.), á la petición de los priores, comendadores y treces de la Orden de Santiago solicitando se les amparase en su especial

jurisdicción, puesto que "dichos comendadores y caballeros por ser como son personas de orden y religión, y por bulas que tienen, son libres y exentos de la jurisdicción real; y no pueden ni deben conocer de sus pleytos y causas civiles y criminales las justicias seglares, sino solamente los jueces de dicha orden, y que en esta posesión, uso y costumbre han estado,„ se opusiera por los procuradores fiscales de S. M. "que los dichos comendadores y caballeros no han estado ni están en la dicha costumbre, ni tienen las bulas que decian; y que si algunas había, habian sido y eran dadas en mucho perjuicio y agravio de los súbditos de S. M. y de la preeminencia y jurisdicción Real, ni habian venido á su noticia„; con todo, al establecerse por dicha cédula una concordia entre estas opuestas pretensiones y pareceres, se reconoce implícitamente la existencia de la jurisdicción especial, principalmente en el número 2, al mandar "que en los lugares donde la dicha orden de Santiago tiene la jurisdicción temporal, se guarde lo que siempre se ha hecho, reservando como reservamos, etc.„ Este mismo implícito reconocimiento resulta tambien de las leyes VI y siguientes del mismo título en que se trata de la jurisdicción y competencia del consejo de las órdenes militares en causas criminales y mixtas contra los caballeros de ellas.

La influencia y poderío que alcanzaron los maestres llamaron pronto la atención de los monarcas, quienes procuraron, por lo mismo, ora influir, ora imponerse para que el nombramiento de aquellos recayese en sus afectos, cosa que no llevaban de buen grado los caballeros, cuando se hacía sin su aquiescencia. Pero la política sabia y previsora de los Reyes Católicos no podía tolerar la existencia de un poder tan grande é independiente como el que ejercían los maestres, cada uno de los cuales podía considerarse como un pequeño soberano en los dominios de su orden y que juntos se hacían temibles tanto en la paz como en la guerra, y, puesto que fuera necesario sostenerlos por lo útil que aún podría ser á los reyes su concurso, reconocer los grandes servicios que estos institutos habían prestado y contar con la autoridad pontificia por lo que tenían de religioso, el rey D. Fernando obtuvo del papa Inocencio VIII el nombramiento de administrador de por vida de los maestrazgos de Santiago, Alcántara y Calatrava, en recompensa de su celo por la exaltación de la fé católica; y en otro breve del mismo se dispuso, por las mismas causas, que Dª Isabel obtuviese dichos maestrazgos de mancomun con su esposo. El papa Alejandro VI,

después de haber ratificado y confirmado los dos anteriores, declaró que, vacando la administración de los expresados maestrazgos por cese de uno de los reyes, continuase con ella por sí solo el sobreviviente. León X concedió á D. Carlos I la administración vitalicia de los maestrazgos, como la había tenido su abuelo, y Adriano VI en breve de 4 de Mayo de 1523 "agregó é incorporó perpetuamente á la corona, aunque la sucesión recayera en hembra, los maestrazgos de dichas tres órdenes con todas sus preeminencias, jurisdicción, facultades, réditos, obvenciones y pertenencias; debiendo nombrar para la jurisdicción espiritual personas religiosas de la misma orden, que la ejerciesen *ad nutum*; con prohibición de enajenar los bienes inmuebles de las órdenes y sus maestrazgos, ó los muebles preciosos, etcétera.„ Sixto V por breve de 15 de Marzo de 1587 incorporó también á la corona el maestrazgo de Montesa en los mismos términos que lo habían sido los de Santiago, Alcántara y Calatrava, puesto que militaban las mismas razones y la experiencia había demostrado las ventajas que aquella incorporación produjera "debiendo S. M. y sucesores, que por tiempo fuesen, elegir personas regulares de dicha orden, á su arbitrio amovibles, para el ejercicio de la jurisdicción espiritual,„ y con la prohibición también de enajenar bienes inmuebles y muebles preciosos.

Con tales acuerdos fué mermando paulatinamente la influencia de las órdenes militares, instituto por otra parte innecesario desde la creación de los ejércitos permanentes é incompatible también con el nuevo modo de ser político de España. Así que actualmente sólo representan una gloriosa tradición y están reducidas á meras distinciones honoríficas y al disfrute de la jurisdicción especial en lo eclesiástico, para cuyo ejercicio se creó un Consejo de las órdenes al que se apelaba de los Vicarios y Priores que tenían autoridad gubernativa y contenciosa, habiendo al frente de los pueblos párrocos exentos de la jurisdicción episcopal. El Consejo recibió nueva forma en 1836 y cambió el nombre por el de Tribunal. Suprimido éste en 1868 y disueltas las órdenes militares en 1873 por el gobierno republicano, el papa Pio IX suprimió también por la bula *Quo gravius* la jurisdicción exenta; pero á petición de la monarquía restaurada se restableció en 1875 por la bula *Ad Apostolicam*, organizando un Coto Redondo conforme al Concordato de 1851, erigiendo en territorio de las órdenes militares, con el nombre

de Priorato, el de la provincia de Ciudad-Real y declarando exentas de la jurisdicción ordinaria todas las parroquias, conventos, hospitales enclavados en dicho territorio y á las personas habitantes en el mismo.

CAPÍTULO IV

CONCEJOS

Continuación de los municipios romanos (1), según algunos escritores, principalmente de la escuela histórica, ó institución nacida al calor de la reconquista y por efecto de las circunstancias, los concejos españoles de la Edad Media representan en la marcha política del Estado y en la organización social un elemento importante que concurrió á la grande obra nacional poblando y defendiendo las plazas fronterizas y poniendo á disposición de los monarcas ejércitos disciplinados que, ora contribuían con su denuedo al éxito de la lucha con los moros, ora

---

(1) Las ciudades romanas se distinguían, según Gebhardt, en *colonias*, pobladas principalmente de ciudadanos y veteranos romanos, gobernadas por sus propias leyes, que gozaban de derechos y privilegios especiales y consagradas en nombre de la religión por un sacerdote que trazaba su recinto al fundarlas; *municipios romanos*, instituidos en España por J. César, gobernados también por sus propias leyes, pero cuyos habitantes no gozaban de los derechos de ciudadanía y sólo por vía de concesión ó de recompensa eran admitidos á los empleos honoríficos de la capital, aunque tenían el derecho de sufragio para la elección de los magistrados; *ciudades de derecho latino* que, pobladas por los habitantes del Lacio, formaban parte del gran pueblo sin tener empero todos los derechos de ciudadanos romanos, y cuyos habitantes no se hacían iguales á los de Roma hasta haber sido investidos con una magistratura; ciudades *libres* é *inmunes*, llamadas así porque no pagaban tributos á Roma y tenían gobierno propio é independiente; *confederadas* ó *aliadas*, las que, aunque gobernadas por sí mismas, estaban unidas á Roma, no como sometidas, sino como amigas; *tributarias* ó *estipendiarias*, las que contribuían en favor de Roma con ciertas prestaciones ó tributos, y *contributas*, las que estaban bajo la dependencia de otra mayor.

Los límites que separaban á las ciudades aliadas de las tributarias se confundieron insensiblemente á medida que España adoptó los usos y las costumbres de sus dominadores, y acabaron por desaparecer del todo. Othon concedió á muchos españoles los derechos de ciudadano; Vespasiano extendió el derecho latino á todas las provincias, y Antonino declaró á todos los súbditos del imperio ciudadanos romanos é igualmente admisibles á todos los cargos públicos.

servían de contrapeso á la soberbia de los grandes para robustecer el poder real.

Según su etimología, *concilium,* concejo tanto vale como reunión, asamblea, junta, y no es descaminado suponer cierta semejanza entre los *conventus vicinorum*, á que aluden varias leyes del Fuero Juzgo, y los primeros concejos de Castilla que remontan al siglo IX y eran reuniones de vecinos que se regían por sí mismos y proveían á las necesidades del gobierno y de la administración local.

Escasos en número al principio, fueron aumentando paulatinamente, pues las necesidades de la reconquista exigían estimular á los pobladores de las comarcas conquistadas interesándoles en su defensa por medio de inmunidades y privilegios, franquicias y libertades otorgadas al efecto por los príncipes, y en ocasiones por los nobles, en *fueros y cartas pueblas,* juntándose así en uno el interés de los moradores y el de la causa común, y encomendándoles además su propio gobierno y dirección, difícil para los monarcas, de cuya autoridad aislaban muchas veces á los pueblos las peripecias de la lucha y cuya atención reclamaban los asuntos generales y la guerra con los moros. Surge, pues, de este modo el régimen municipal en la Edad Media; pero la organización de los concejos primitivos se halla envuelta en tal oscuridad, que no es posible determinarla con certeza, no sólo por falta de documentos adecuados, sino también porque la misma independencia ó iniciativa de que gozaban, había de hacerla varia según el carácter y necesidades de los pueblos. Es verosímil, sin embargo, que en los pueblos pequeños tomasen todos los vecinos una participación más ó menos directa en la administración y en el gobierno de la comunidad todavía informe, y que á medida que los pueblos se ensanchaban, aumentando su vecindario, fuese sustituida esta intervención por el sistema de delegación ó nombramiento de magistrados á quienes se encomendara la representación y régimen de la colectividad. Ni era tampoco homogéneo el carácter de los concejos, aun dado que su núcleo fuese en general constituido por el estado llano ó por la clase media y baja; así que ciudades hubo, Soria por ejemplo, en que los cargos concejiles se elegían por las personas ó familias principales, imprimiendo á este modo de gobierno cierto tinte oligárquico, mientras que en otras, como Toledo, pudiera sin dificultad verse un modo de democracia por la participación que todos los vecinos indistintamente tomaban en la gestión pública.

Sin embargo, lo más general era la designación por todos los vecinos de representantes ó magistrados y funcionarios anuales para la justicia, regimiento y administración de la ciudad. Entre estos deben notarse, como los más principales y comunes, los *alcaldes*, á quienes estaba encomendada la jurisdicción civil y criminal y el mando de la milicia concejil, con un *alferez* ó portaestandarte á sus órdenes; el *alguacil mayor*, á quien correspondía la función ejecutiva, digámoslo así, del poder municipal, con cargo especial en asuntos de la milicia; los *regidores*, cuyas funciones, no bien determinadas, pueden, no obstante, mirarse como parecidas á las de los modernos, y su designación no fué tampoco uniforme, pues en unos pueblos el cargo de regidor vino á ser como hereditario en ciertas familias nobles, y en otros se confería por elección popular; los *jurados*, que semejaban una especie de tribunado para defender á los ciudadanos contra los atropellos de los magistrados y jueces, y de los que nacieron más adelante los síndicos ó procuradores del común, y los *sexmeros*, que tenían á su cargo la representación y defensa de la población rural. De los ministros ó funcionarios subalternos, son de notar el *almotacen* para la vigilancia de los mercados, el *almojarife* para la recaudación de impuestos, y los *fieles* para el cumplimiento de las ordenanzas municipales y providencias de los magistrados y muy especialmente para el cuidado de los pesos y medidas. La administración de justicia, aunque encomendada á los alcaldes que se llamaban *de fuero*, estaba sujeta á la suprema inspección del rey, quien á veces también designaba á los que habían de ejercerla, en cuyo caso recibían el nombre de alcaldes *de salario*, y en ocasiones llegaba hasta nombrar *corregidores*, delegados especiales que en su nombre ejerciesen la jurisdicción y el gobierno; institución generalizada tanto y por tan especiosos pretextos que produjo reclamaciones y súplicas de las Cortes hasta obtener en tiempo de Enrique, *el de las Mercedes*, que no se pondría sino á instancias de los pueblos y por solo un año.

La importancia y aun el poder de los concejos llegó á muy alto grado á fines del siglo XI, cuando la jurisdicción de sus magistrados se sobrepuso á la de los mismos *merinos* y oficiales de la corona y los reyes prometieron á las villas y ciudades no poner en ellas jueces sino de entre sus vecinos; y se eleva aún más á principios del siglo XII cuando adquieren grandes propiedades, lugares y fortalezas y se ven solicitados por los bandos y parcialidades de la nobleza y aun por los mismos reyes, ó se

atreven á revolverse contra los próceres y magnates, invadiendo sus territorios, destruyendo sus palacios y castillos y llevándolo todo á sangre y fuego. Robustece igualmente su poder é influencia social la creación de las milicias concejiles, transformación de las antiguas huestes que al llamamiento del rey se reclutaban entre los vecinos para *ir en fonsado* y verdaderos ejércitos disciplinados, dotados de infantería y caballería, que tanto contribuyeron á la formación del estado llano y al ennoblecimiento de las clases humildes en una sociedad donde tanto prestigio alcanzaba el ejercicio de las armas. "Pero nada contribuyó, dice el señor Colmeiro, á la prosperidad de los concejos como la entrada de sus procuradores en las Cortes, á lo cual debieron el haberse levantado hasta la cumbre de su grandeza. Desde entonces solicitan nuevas franquezas y libertades, piden la confirmación de las antiguas, intervienen en los graves negocios del reino, forman leyes, otorgan servicios, nombran los tutores del rey, cuando no ejercen ellos mismos la tutoría, se asientan en el Consejo; y en una palabra, siendo las Cortes la suma de todos los concejos de Castilla y León, cuantas prerrogativas alcanzan aquellas, otras tantas ceden en beneficio de estos centros del gobierno popular.„

Otro factor importante de la influencia política de los concejos fueron las ligas ó hermandades que formaban entre sí; la comunicación que sostenían unos con otros, que daba como resultado la unión en las reclamaciones contra los abusos del poder ó de los grandes y la fuerza consiguiente para hacer eficaces sus protestas ó pretensiones; las relaciones que también sostenían con los reyes, quienes no consideraban mermada su autoridad soberana por dirigirse á los concejos, ya notificándoles los asuntos de grave trascendencia para el Estado, ya invocando su concurso contra los enemigos exteriores ó contra los ambiciosos y trastornadores del orden interior; y á tal punto llegó el poder de los concejos desde el siglo XIII al XV que bien parecía Castilla una confederación de repúblicas, sobre las que, sin embargo, descollaba el monarca, lazo general, centro de unión, como dice Ghebardt, á cuyo alrrededor se agrupaban, no solamente los concejos, sino todos los distintos organismos que con el nombre de *señoríos, abadengos* y *behetrías* (1) eran trasunto

(1) Behetría viene, según unos, del griego *hæteria*, corrompido luego en *beteria* ó *veteria*, compañía de gente suelta y libre que no quiere señor: otros derivan esta voz del árabe y dicen significa confusión, anarquía, que era lo más frecuente en estos pueblos cuando elegían señor: otros la hacen venir de la latina *benefac-*

de la desigualdad social propia de la época y cuyo influjo se hacía sentir tanto en los indivíduos como en las colectividades y en su constitución y régimen.

La prepotencia del concejo, llegada á su extremo límite, principió á declinar y á ello contribuyeron; la pérdida del carácter democrático con que se inició su autonomía; la intervención de los nobles en los oficios concejiles y su tendencia á poseerlos perpétuamente por sí ó por sus allegados; las disensiones intestinas que la provisión de estos cargos en muchas ocasiones producía, demandando á veces la intervención del poder real para acallarlas; el nombramiento por el rey en muchos casos para el desempeño de aquellos cargos; la apatía é indiferencia á que habituaba á los ciudadanos el estar alejados de la gestión local, monopolizada por los grandes ó ejercida por delegados del rey, y por último el poder absorbente de la monarquía que, después de realizada la unidad nacional, no podía tolerar ya la existencia de entidades políticas independientes.

---

toria, corrompida despues en *benfatria, benefacia* y por último en behetría. La etimología griega parece convenir más á la naturaleza de estos pueblos, cuya nota característica era la de elegir señor á su arbitrio. Según la ley III, tít. XXV, Part. IV, «behetría tanto quiere decir como heredamiento que es suyo quito de aquel que bive en el, e puede recebir por señor a quien quisiere que mejor le faga;» de modo que conforme á esta ley para que un pueblo fuese behetría era condición indispensable que la propiedad y los heredamientos fueran de sus moradores y no de un señor extraño. Podía, sin embargo, suceder que en un mismo pueblo hubiera heredamientos y solares de behetría y otros de realengo, señorío ó abadengo, y entonces el pueblo participaba de las distintas condiciones de los terrenos y solares, y de aquí el desorden y la confusión que reinaba en algunas behetrías. El origen de éstas se hace subir á los primeros tiempos de la reconquista, y su causa ocasional fué la necesidad que los labradores habitantes y propietarios de algunos pueblos tuvieron de invocar el auxilio de los nobles para que los defendiesen contra las correrías de los moros, poniéndose bajo su dirección y señorío; pero reservándose no obstante el derecho de elegir otro señor si el primero, á cuya protección se habían confiado, no les trataba bien, ó conforme á lo pactado. Las diferencias en los pactos primitivos de reconocimiento de señorío produjeron las diferencias de behetrías; pero siempre quedó subsistente el principio de la variación voluntaria de señor si bien más lata ó restringida la esfera de la elección.

Ayala enumera tres clases de behetrías: *de mar á mar,* que quiere decir que los moradores ó vecinos en tales lugares pueden tomar señor á quien sirvan «e acojan en ellos, cual ellos quisieren e de cualquier linaje que sea, o por esto son llamadas behetrías de mar á mar, que quiere decir que toman señor siquier de Sevilla, siquier de Vizcaya ó de otra parte: *de entre parientes»* que son las que toman señor de cierto linaje ó de sus parientes entre sí; y la tercera clase, que puede llamarse *de entre naturales,* la forman «los pueblos que han naturaleza con linajes que sean naturales de ellos, e estos tales toman señor de estos linajes qual se pagan; e diz que todas estas behetrias pueden tomar e mudar señor siete veces al dia, e esto quiere decir cuantas veces les ploguiera e entendieran que los agravia el que los tiene.» Los pueblos de behetría entre naturales tenían el derecho de elegir señor de entre los nobles nacidos en la población ó cuyos ascendientes tuvie-

La ambición primero y la codicia después, excitadas por los bienes, heredades y rentas que llegaron á poseer los concejos, estimularon á los grandes y poderosos para poseer dichos cargos, y los disturbios y luchas que produjeron en el seno de las ciudades, fueron el primer motivo que hizo necesaria la autoridad real para apaciguar los ánimos y restablecer el orden en aquellas, y el primer pretexto que hallaron los monarcas para sustituir con su propia voluntad la iniciativa de los ciudadanos. Alfonso VI nombra por sí en Avila un alcalde mayor para acabar con las divisiones entre los Blazquez y los Alvarez y para gobernar la ciudad; Sancho IV, *el Bravo*, designó para el cargo de veinticuatros ó regidores de Sevilla cuatro personas en lugar de otras tantas que habían sido nombradas por la ciudad; Alfonso XI suspende á esta misma ciudad en el ejercicio del derecho de nombrar sus alcaldes y jurados y reserva su provisión á la corona á pretexto de que tales nombramientos producían muchos desórdenes y daños; se abroga también análogo

---

ron naturaleza en ella. Las behetrías de entre parientes podían subdividirse, según que solo pudieran nombrar señor de familia determinada, ó según que podían extender la elección á cualquiera de las familias de un mismo linaje ó tronco; y todas estas familias se llamaban *deviseras* del señor.

El derecho de *devisa* no se limitaba al que en esta última clase de behetrías tenían los del mismo linaje para ser señores en ellas, sino que se llamaba también deviseros á los que tenían derecho para cobrar parte de la *martiniega* que pagaban al señor allí donde se cobraba, y á todos los que podían tomar *conducho* en la behetría; y, á juzgar por el libro *Becerro de las behetrías*, también debe darse el título de deviseros á aquellos á quienes, por haber tenido un señor pariente, les asistía el derecho de cobrar seis maravedises anuales, si eran ricos hombres, ó dos, si eran de menor nobleza, en señal de respeto al señor pasado y en reconocimiento de la aptitud para serlo ellos mismos si quisiera elegirlos la behetría.

Las behetrías, como las demás poblaciones, pagaban sus tributos al rey y además al señor, pero quedaban libres de *fonsadera*, porque todos los hombres útiles tenían el deber de *ir en fonsado* á las órdenes de su señor. Nótanse en el Becerro algunas behetrías que no pagaban más tributos que servicios y monedas, y esto exige alguna explicación. El tributo de *moneda forera* lo pagaban todos los pueblos de la monarquía cada siete años en reconocimiento del señorío real, y era tan sagrado que los monarcas no podían enagenarlo, donarlo, ni empeñarlo. Los tributos extraordinarios, que los monarcas no podían exigir sin ser votados por las Cortes, se concedían bajo la forma de *servicios* y también como moneda forera. El servicio era una cantidad fija y, cuando la petición excedía de esta suma, en vez de un servicio se concedían dos ó más. Lo mismo sucedía con la moneda forera. Este servicio setenal era también fijo, y cuando las Cortes concedían por extraordinario una moneda forera, se entendía conceder por una sola vez tanto cuanto importaba el tributo setenal de moneda. De estas dos clases de contribuciones no estaban exentas en ningun caso las behetrías, y además algunas debían también pagar los de *vaso, vasillo, yantar, yantarejo y mula*. En suma, solo tenían los privilegios de elegir señor; de no pagar fonsadera, y los especiales concedidos por las leyes de *devisa* de las Cortes de Nájera y del Fuero Viejo de Castilla. —V. Marichalar y Manrique, *Historia de la legislacion española*.

derecho en otras muchas ciudades de León y de Castilla, y no contento con nombrar para los cargos concejiles, llega hasta cambiar su naturaleza trocándolos en vitalicios, de anuales que eran. Los reyes posteriores siguieron en este punto una política de circunstancias, ya transigiendo con algunos concejos en la provisión de sus primeros cargos, ya recabando para sí los nombramientos; hasta que en el reinado de los Reyes Católicos, robustecida grandemente su autoridad, pueden éstos ordenar que todos los cargos concejiles fueran en algunas ciudades de nombramiento real y vitalicios, tanto los de merinos, alcaldes y alguaciles, que hasta entonces se proveían por los monarcas, como los de regidores, jurados, mayordomos, escribanos y fieles, que ordinariamente se elegían por los pueblos.

Fueron también principalísima parte á producir la decadencia de los concejos: el aumento innecesario de cargos municipales, iniciado en tiempo de Enrique II; la venta de los oficios, recurso arbitrado por Juan II para allegar medios con que atender á los gastos de la guerra, y que produjo la consecuencia, por parte de la corona, de mirar la provision de tales oficios como un simple arbitrio fiscal, sin tener para nada en cuenta, ni la influencia de los nombramientos en el régimen de los pueblos, ni las cualidades de moralidad, inteligencia y celo de los designados, y por parte de éstos, la de considerar el cargo como medio adquirido por su dinero, que podían explotar sin trabas ni respetos para aumentar su poder, prestigio y riquezas; la acumulación de empleos en una sola persona, que hacía imposible el cumplimiento de los deberes anejos á aquellos y excitaba más y más la codicia y ambición, siempre menos satisfechas cuanto más alimentadas; el arrendamiento que llegó á hacerse de los mismos cargos convirtiéndolos en asunto de mera grangería, y otros muchos abusos que, acabando con el prestigio de los concejos, facilitaron por este lado la política centralizadora de la casa de Austria.

En Navarra el sistema municipal no llegó á desarrollarse hasta el advenimiento de la dinastía aragonesa, y aun entonces y después de ésta, efecto acaso de la exigua importancia del estado llano y por falta de unión y de amistad entre los concejos navarros, nunca llegaron á ejercer grande influencia en el modo de ser político de aquel estado. Don Alfonso *el Batallador*, que otorgó fueros y cartas pueblas á muchas poblaciones, dictó en algunas de ellas disposiciones y leyes que aseguraban á los

ciudadanos la libertad civil y el respeto al domicilio, hasta el punto de que algunos pueblos fronterizos pudiesen convertirse en asilo de malhechores y la casa del vecino fuese infranqueable, sin permiso del dueño, para la misma justicia ó sus representantes, excepto en casos muy señalados, como el de haberse refugiado en ella el reo de traición ó el ladrón manifiesto. En estos mismos cuadernos y fueros se contienen constituciones y ordenanzas para organizar ayuntamientos en las ciudades, villas y lugares, tendencia ya iniciada por los monarcas al permitir á los pueblos de realengo intervenir en sus propios é interiores asuntos con el nombramiento de alcaldes y jurados ó regidores, delegados para la administración de los intereses comunales, cuya gestión estaba en absoluto prohibida al concejo en masa.

Para el nombramiento ó elección de alcaldes y regidores no había un procedimiento uniforme y se tenía muy en cuenta la preponderancia de las varias clases de nobles, francos, villanos y labradores, que componían la población. Donde tales cargos se nombraban por elección, ésta se hacía por parroquias y el número de regidores era proporcional al de vecinos correspondientes á cada parroquia; pero los disturbios y disensiones que á veces produjo la elección, hicieron necesario, para evitarlos, reemplazar el procedimiento electoral con el de insaculación, expediente que se utilizó despues para evitar toda reunión del concejo, instituyendo las comisiones llamadas *veintenas*, *quincenas* ú *oncenas*, compuestas de los veinte, quince ú once vecinos cuyos nombres habían salido primero de las bolsas de insaculados y á los que correspondía la representación del concejo en los asuntos que á este competían. Como de la verdad de la insaculación dependía la verdad de la representación, se tenía mucho cuidado en las inclusiones y exclusiones para que no fuesen insaculados en las distintas bolsas para alcaldes, jurados ó regidores, sino aquellos y todos los que tuvieran aptitud para serlo.

Las atribuciones de los concejos en Navarra eran muy extensas en materia administrativa, autorizándoles con frecuencia los reyes para que formaran ordenanzas, llamadas *paramientos*; pero siempre en nombre del monarca, cuya suprema jurisdicción se había de reconocer en cualquier caso, aun en el de que se encomendara á los alcaldes y jurados designados por los concejos la administración de la justicia civil y la aplicación de la criminal, pues todas estas facultades se ejercían en nombre de la corona, que se reservó siempre la justicia ordinaria en los

territorios de realengo y la alta justicia en todos los demás del reino. En los territorios de señorío competía á los señores la administración de justicia baja y mediana, así como el nombramiento de alcaldes, derecho que han conservado generalmente hasta el advenimiento del régimen constitucional.

Tienen también grande importancia en Aragón las universidades ó concejos, y los reyes acuden á ellos con frecuencia para contrarrestar el poder de la nobleza y les conceden grandes privilegios, algunos tan excesivos que fácilmente pudieran degenerar en anarquía. Son de notar, al efecto, los concedidos á las universidades por Pedro IV y Juan I, facultándoles para que pudieran tomar por su mano venganza de las injurias recibidas de nobles y caballeros, sin esperar el fallo de los tribunales y considerando como justo cualquiera clase de daño que tanto á las personas como á los bienes de aquellos hiciera sufrir su encono; y como especial, el llamado de *Tortum por tortum*, otorgado á la ciudad de Zaragoza por don Alfonso *el Batallador*. Según este último privilegio, cualquiera zaragozano podía vengar por sí mismo, sin intervención de los tribunales, la injuria recibida, volviendo mal por mal; y se llamó también de los *veinte*, porque en uno de sus artículos decía el rey don Alfonso: "os mando que jureis todos estos fueros aquellos veinte mejores ciudadanos que eligiéreis de entre vosotros; y los mismos veinte juréis primero y hagais jurar á todos los demás, salva la fidelidad debida á mí y á mis derechos; y que todos os ayudeis y os mantengais unidos para la defensa de estos fueros que os doy; y en lo sucesivo no os dejeis forzar por nadie, y si alguno quisiera forzaros, todos á una destruidle sus casas y cuanto posea en Zaragoza y fuera de Zaragoza, y yo os prestaré ayuda.„ Exagerando las tendencias y extensión de este privilegio invistieron los zaragozanos á una comisión de vecinos, elegida cuando á su juicio las circunstancias lo exigían, de facultades tan amplias para prender, desterrar y hasta matar, que bien semejaba esta comisión verdadera dictadura independiente de toda autoridad y sin freno alguno legal, aunque por fortuna y efecto acaso de la misma exageración de sus atribuciones se constituyó muy pocas veces.

Ya antes es de notar en la organización municipal aragonesa la institución de los *jurados*, que existía en todas las poblaciones, no sólo para su régimen interior, sino también para servir de garantía y amparo á los ciudadanos en sus derechos y libertades. Figuraban entre sus principales atribuciones: la for-

mación de ordenanzas y estatutos para la guarda del término; la tasa de los artículos de primera necesidad; el castigo de los delitos ó faltas contra aquellas; el poderse incautar de los protocolos y minutas de los notarios, cuando había sospecha de falsedad ó se negaba la autenticidad de los documentos; el ser depositarios de los bienes que para pago de deudas fueran embargados á la universidad; el nombramiento de veedores para la inspección de los artículos que hubieran de venderse; el derecho de penetrar en las casas de los infanzones para buscar ó recobrar la casa robada; y por último, la representación por el jurado primero del Justicia Mayor en las poblaciones donde hubiera reos manifestados, siéndole obligatorio bajo la responsabilidad más estrecha defender la manifestación hasta que por letras del Justicia se hubiera declarado extinguida, y pudiendo invocar, para sostenerla, el auxilio de todo el pueblo. Los jurados de Zaragoza llegaron á gozar de cierta inmunidad concedida por Pedro II para todo lo que hicieran en utilidad ó servicio del rey ó en honor de ellos mismos ó del pueblo, sin quedar sujetos á responsabilidad para con nadie por los hechos que ejecutasen en tal sentido, aunque fueran homicidios. El modo de nombramiento de los jurados fué generalmente la elección por el concejo; pero esta forma sufrió varias alteraciones, entre las que debe notarse lo dispuesto por Jaime I respecto á Zaragoza, á tenor de lo cual los jurados de esta ciudad habrían de ser doce designados cada año por sus predecesores, pero sometiendo este nombramiento á la ratificación del rey ó, si este se hallaba ausente del reino, á la del bayle de la ciudad.

Como en el resto de España, merced á los fueros y cartas otorgadas á los pueblos por los condes de Barcelona á principios del siglo XII, se desarrolló en Cataluña la institución municipal, que fué uno de los principales fundamentos de las libertades catalanas y de la importancia de la clase media. En dichas cartas se concedió á los pueblos el derecho de designar ó proponer magistrados y funcionarios, con los nombres de *cónsules*, *consiliarios*, *jurados*, *probi-homines* ó *paciarios*, encargados del gobierno y administración local; pero entre la de todas las ciudades merece especialmente notarse la organización municipal de Barcelona. Para el gobierno de esta ciudad había una especie de senado, llamado *Consejo de Ciento* y un cuerpo de regidores, *concelleres*, que varió entre ocho, cuatro, cinco y últimamente seis.

El Consejo de los Ciento, que remonta á los tiempos de Jai-

me I, ejercia el poder legislativo en todo lo referente al gobierno municipal é interpretaba las leyes hechas en Cortes; hacía ordenanzas para la ciudad y su término, que comprendía hasta doce leguas mar adentro; tenía autoridad sobre los concelleres y empleados municipales á los que podía juzgar; y sus atribuciones se extendían á imponer penas de toda clase, inclusa la de muerte; á exigir prestaciones y emplear los fondos públicos en la construcción de obras útiles y en el fomento de empresas mercantiles; á costear la enseñanza en la universidad de Barcelona, que dirigía; á velar por la seguridad del comercio; á dar patentes de represalias contra cualquiera nación, y á celebrar tratados de comercio con los extranjeros. Las plazas de este cuerpo se distribuían por partes iguales entre los *ciudadanos honrados* (clase equiparada á los caballeros por Fernando II), entre los cuales se comprendían como capacidades para el desempeño de cargos municipales los doctores en derecho y medicina; los *negociantes*, comprendiendo los mercaderes y capitanes de galera; los *artistas*, entre los que se incluían los escribanos, y los *artesanos*, entre los que figuraban los menestrales de toda clase. Los nobles no fueron admitidos en el Consejo de los Ciento, como un orden separado, hasta fines del siglo xv, en que obtuvieron diez y seis plazas del mismo; pero sin ninguna preeminencia sobre los ciudadanos honrados, y privados de voto en Cortes por todo el tiempo que estaban investidos con los cargos municipales. El Consejo de los Ciento fué al principio nombrado por los concelleres, elegido despues por la ciudad y, por último, designado por sorteo, previa insaculación; y sólo se reunía para asuntos graves y por disposición de los concelleres ó del gobernador general. Dividíase en cuatro secciones, cada una de las cuales, llamada *Consejo Ordinario*, estaba en funciones durante un trimestre, y cuando éste lo estimaba necesario, se convocaba y reunía en pleno el Consejo de Ciento.

Los concelleres ó *conciliarii*, llamados así como consejeros del *veguer*, ejercían la potestad ejecutiva en el gobierno local. El primero, *conceller en cap*, tenía principalmente á su cargo la custodia de la ciudad y las levas, y era, en tiempo de guerra, jefe nato de la *coronela* ó fuerza armada de la ciudad; el segundo cuidaba especialmente de la provisión de granos; el tercero del abasto de carnes; el cuarto de los salarios y cuentas de los oficiales y recaudadores de tributos, y el quinto y el sexto de los asuntos referentes á los gremios de artesanos. Los concelleres, como los prohombres del Consejo de los Ciento, fueron nombra-

dos hasta 1498 por elección, en un principio de este consejo, y después de la ciudad. Cambiado en aquella fecha el sistema de elección por el de insaculación, se dispuso que de los cinco concelleres que entonces representaban la ciudad, los tres primeros fueran sacados de la bolsa correspondiente á los caballeros, el cuarto de la de mercaderes, y el quinto fuese un año artista y otro menestral. Las atribuciones, prerrogativas y privilegios de los concelleres eran muy grandes. Representaban la ciudad en todos los actos ó funciones públicas, y en su nombre se despachaban las embajadas, los nombramientos, los recursos, las represalias, la correspondencia con los demás estados de Europa y las representaciones y consultas á la corona. Velaban por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y podían imponer penas, inclusa la de muerte, por su infracción. Tenían el derecho de acuñar moneda y de imponer tributos y cobrarlos con exclusión de los oficiales reales y con facultades para resolver en definitiva sin ulterior recurso las cuestiones sobre esta clase de asuntos. Eran consejeros natos del monarca; se cubrían y sentaban delante del rey; usaban el título de magníficos y se les consideraba como marqueses y condes; podían ir investidos con sus insignias y precedidos de sus clarineros y maceros, con las mazas altas, por todas las poblaciones de Cataluña y Aragón y posteriormente de toda España; eran, en nombre de la ciudad, señores de baronías; gozaban de la consideración y preeminencias de embajadores extranjeros cuando se presentaban al soberano fuero de su ciudad; tenían atarazanas y armería propias, y cuando salían á recibir al monarca, podían hacerlo á caballo, cabalgando en la comitiva el conceller primero pareado con el rey á su lado izquierdo.

Por lo dicho se comprende que la vida municipal se desarrolló con vigor en los varios estados españoles á contar desde el siglo XII y que en todos ellos se hizo sentir más ó menos la influencia de los pueblos que, con los nombres de municipios, de concejos ó de universidades, llegaron á adquirir cierta autonomía, siquiera fuese para asuntos propios y locales, y pudieron prestar su cooperación voluntaria en los generales del Estado é intervenir en las contiendas de reyes y señores, secundando los propósitos de unos ú otros según al interés, á la justicia ó á la pasión de los mismos pueblos convenía.

Acrecentaban, según antes indicamos, el poder y la influencia de éstos las ligas, cofradías ó hermandades que, tanto en Castilla como en Navarra y Aragón, formaron entre sí, ora pa-

ra defender sus derechos y propiedades contra los atentados de los malhechores ó atropellos de los grandes, ora para reivindicar sus fueros y libertades contra la tiranía de los monarcas; ya para hacer más eficaz su concurso en las grandes empresas nacionales, y á veces también para satisfacer sus pasiones aviesas y demagógicas tendencias.

En Castilla aparece la primera hermandad en tiempo de doña Urraca, favoreciéndo los pueblos la causa de don Alfonso en contra de los nobles, que seguían el partido de aquella; pero esta liga de los pueblos contra los señores no tuvo forma de verdadera organización por falta de autoridad que la dirigiera y de freno que contuviera á los pueblos en sus desmanes. No así las que surgen en el siglo XIII, que se constituyen por verdaderos convenios, hechos constar en la escritura llamada carta de hermandad, y se organizan jurídicamente dictando ordenamientos, estableciendo reglas de policía para la seguridad de las personas y de las propiedades y persecución de los malhechores, instituyendo los *alcaldes de hermandad,* investidos con jurisdicción y atribuciones adecuadas para el régimen de la agrupación, y sosteniendo con los recursos de ésta y para los fines comunes una milicia especial. Estas hermandades, que surgieron por propia iniciativa y entre las que debe notarse la formada por Toledo, Talavera y Ciudad Real, fueron pronto miradas con recelo por los monarcas, así que don Fernando III y su hijo don Alfonso X, considerando que de tales cofradías puede venir mengua al señorío del rey y daños á la tierra, mandan deshacerlas y las prohiben en lo sucesivo, excepto para obras de caridad. En cambio don Sancho IV las fomenta y se pone á la cabeza de las formadas contra su padre por nobles, prelados y pueblos, mientras las juzgó útiles para sus sediciosos planes; aunque despues de afirmado en el trono sigue las huellas de sus predecesores, revocando muchos privilegios y mercedes de los anteriormente otorgados para hacer prosélitos.

Los disturbios que en el reino produjeron las pretensiones de los infantes de la Cerda durante la menor edad de Fernando IV *el Emplazado*, y el peligro en que puso el trono de éste la conjuración de nobles y prelados que seguían la parcialidad de aquellos y ambicionaban aumentar su poder y riquezas, precisó á la regente doña María de Molina á buscar un apoyo en los concejos, formándose en esta época, por mandato ó tolerancia de la regente, la hermandad de Valladolid en la que entraron los concejos de León y de Galicia, y que dió desde luego muestras de

sus tendencias democráticas excluyendo de su seno á nobles y prelados, y de su vitalidad y fuerza acordando no pagar al rey empréstito alguno ni cualquiera otra cosa desaforada, sin consentimiento de todos, ni tolerar vejámen de ningún señor, sopena de derribarle las casas, talarle los campos y destruirle las haciendas, si fuese arraigado en el país, ó de matarle en cualquiera parte, si no lo fuera. Cuidó también de conservar su existencia y de atender á su perpetuidad con el nombramiento de dos hombres buenos por cada concejo, que se reunieran todos los años en León para representar las hermandades y hacer cumplir sus acuerdos, invistiéndolos, para mayor prestigio, con cierta inmunidad personal y sancionando con la muerte cualquier daño que se les infiriera. En la misma época formóse en Burgos otra poderosa hermandad de los concejos de Castilla; y en los tiempos del rey don Pedro y de alguno de sus sucesores surgen otras hermandades, ya á excitación, ya por tolerancia, y aun á disgusto de los reyes, aunque casi siempre con el propósito, por parte de éstos, de facilitar la persecución ó el castigo de los criminales ó de debilitar el poder de la orgullosa nobleza; por más que en muchos casos, ensoberbecidos los pueblos con la fuerza que les procuraba su unión, cometían también injusticias y atropellos incalificables contra los nobles que en ellos moraban, precisándoles á rechazar con la fuerza tales injurias y fomentando de este modo el malestar social.

Con todo, la falta de seguridad para las personas y las cosas, la imposibilidad de castigar á los malhechores que por todas partes pululaban, la ausencia general de respeto á la autoridad, la impudencia que todo lo invadía, hicieron necesario, á la muerte de Enrique IV, pensar seriamente en el remedio de tantos males, y creyendo los pueblos hallarle en la formación de una hermandad general y bien organizada, reuniéronse en Dueñas, previa autorización de la reina Isabel, los procuradores de muchas ciudades y villas, estableciéndola por tres años para la conservación del orden y rápida administración de la justicia penal y procurando hacer eficaces sus disposiciones con el auxilio de fuerza armada creada para este fin y para velar por la seguridad de los caminos y perseguir á los criminales. La administración de justicia fué encargada á dos alcaldes, uno de la clase de caballeros y otro de la de ciudadanos, quienes tras breve y sumario proceso aplicaban la ley en los casos de fuerza, robo, hurto ó herida hecha en el campo; de allanamiento de morada, desacato á la autoridad judicial y otros varios.

La fuerza militar, organizada en cuadrillas de vecinos y sostenida en un principio por los pueblos de la hermandad, lo fué después, so pretexto de aliviarlos de esta carga, por el tesoro de los reyes, quienes lograron de este modo tener un principio de ejército permanente y propio, como asalariado por ellos, que les permitiera prescindir, una vez disciplinado, de las huestes de la nobleza y de las milicias concejiles.

Las hermandades de Navarra, con fines análogos á las de Castilla, solían ser de dos clases; ó entre pueblos del mismo reino para la seguridad interior y defensa de las personas y bienes de los congregados contra las correrías de los poderosos y caballeros; ó entre pueblos limítrofes de dos estados distintos contra bandidos y malhechores que, después de haber robado en suelo extraño, se volvían al propio buscando la impunidad.

En Aragón, además de la liga general de la *Unión*, de que ya hemos hablado, formada juntamente por nobles, caballeros y pueblos para la defensa de sus derechos y libertades, solían también reunirse las pequeñas poblaciones de realengo bajo la protección de otra más poderosa, cuyo nombre tomaba la comunidad, para defenderse de los ataques y violencias de los señores que, sin respetos ni miramiento alguno y sólo para satisfacer sus caprichos, vejaban á los pacíficos habitantes de aquellas.

Las ligas ó coaliciones de ciudades, villas y lugares, incompatibles con un gobierno central, robusto y fuerte, se formaron por última vez en Castilla con el nombre de *Comunidades*, para protestar contra la administración de los flamencos en tiempo de Cárlos I; pero la guerra de los comuneros concluyó con el desastre de Villalar y la ejecución de sus más esforzados capitanes. La misma suerte cupo al movimiento insurreccional de Valencia, conocido con el nombre de *Germanías*, hermandades de las clases trabajadoras contra la nobleza y de carácter marcadamente socialista, cuya índole no debe confundirse con la de aquellas, ni por sus tendencias, ni por sus hechos criminales y tiránicos en muchos casos, y que concluyeron también desastrosamente después de haber dominado bastante tiempo en la ciudad del Cid, pereciendo en el patíbulo el tejedor Guillén Sorolla, uno de sus jefes.

SECCIÓN QUINTA

FORMA DE GOBIERNO

CAPÍTULO PRIMERO

GOBIERNO DE ESPAÑA POR LOS ROMANOS

Ya hemos dicho que en los tiempos anteriores á la dominación romana no era España verdadera nación, porque ni los pueblos primitivos estaban ligados entre sí por lazo alguno permanente, ni los colonizadores fenicios y cartagineses cuidaron de otra cosa que de sacar de la península todo el provecho posible, en riquezas para saciar su codicia, ó en hombres para aumentar su poder con la fuerza de los ejércitos. No es tampoco fácil hallar medios adecuados para formar idea cabal de la organización y del gobierno de aquellos pueblos; aunque no sea, por otra parte, muy aventurado suponer que, divididos primero en tribus y formando después ciudades, cada pueblo tendría su régimen particular, encomendado, ora bajo la forma patriarcal al cabeza de la tribu, ora bajo la forma republicana á un consejo de ancianos ó á un senado de personas preeminentes, ó ya también á un jefe designado por elección ó impuesto por las circunstancias; sin perjuicio de que algunas ciudades se asociaran á veces formando federación, como parece sucedió con ciertas ciudades de Andalucía, y sometiéndose á la dirección de un con-

sejo organizado para el arreglo de los asuntos comunes ó de interés general para los pueblos asociados.

En el período de lucha con Roma, hasta la dominación completa de España por Augusto, los pueblos sometidos á la república no tuvieron en rigor otro gobierno que el régimen militar, cuyo mayor ó menor grado de dureza ó despotismo dependía exclusivamente del carácter de los jefes enviados por Roma, aunque todos ellos subordinaron siempre á su fin de dominación cuanto la humanidad ó el derecho prescribían, si era obstáculo á su propósito. Así, el mismo Porcio Catón, célebre por su virtud estóica, si no manchó sus manos con injustas depredaciones, ni se dejó arrastrar por la avaricia, se gloriaba de haber llevado hasta el exceso su crueldad, destruyendo muchas ciudades, para asegurar por el terror el imperio de los romanos; y el jóven Escipión que, bondadoso en sus primeras relaciones con los españoles, supo hábilmente captarse sus simpatías por medios suaves, después de tomada Cartagena les impuso grandes sacrificios en hombres y dinero, á pretexto de que eran necesarios recursos extraordinarios. Es cierto que el valor y la índole de los españoles excitaron las simpatías de algunos jefes romanos y que, efecto de esto, se formó en el senado de Roma un partido favorable á España, iniciado por Catón después de su mando en la península, en el que militaban también Escipión Emiliano y Sempronio Graco, y al que debe nuestra patria la sustitución de las *preturas* por el *proconsulado* y el establecimiento de algunas colonias romanas; pero el proconsulado duró solamente cuatro años y, restablecida la pretura, España volvió á ser presa de la rapacidad de sus gobernantes y teatro de sus crueldades y sanguinarios instintos, sin que por parte del senado se dieran oidos á las quejas de los españoles.

No todos los pueblos, sin embargo, fueron tratados por igual, pues la política romana hizo distinción entre los conquistados por la fuerza y los voluntariamente sometidos ó aliados. Los territorios sometidos por la fuerza eran declarados *provincias* y se regían por la llamada *ley provincial*, que en España parece se dictó por el senado en virtud de los informes de diez senadores enviados para estudiar el país y organizarle. La condición general de las provincias era muy dura: sus habitantes entraban en la clase de *dediticios*; eran privados de sus leyes é instituciones propias; no tenían la consideración de ciudadanos, y sus derechos estaban reducidos á los de un, no siempre bien entendido, *jus gentium*, declarado ó interpretado por el pre-

tor. El gobierno era ejercido por *propretores* y alguna vez por *procónsules*, que, en nombre del senado, asumían toda clase de atribuciones militares y civiles, y como casi siempre se encomendaba á patricios arruinados, de aquí las arbitrariedades, exacciones y crímenes que hacían odiosa la dominación romana y jamás fueron reprimidas por el senado, el cual á lo más se contentaba con dictar algunos decretos, sin exigir su cumplimiento. Las ciudades aliadas ó voluntariamente sometidas eran mejor consideradas y conservaron, en mayor ó en menor grado, cierta independencia y gobierno propio. Así, las llamadas *libres* y *confederadas* no pagaban tributos y sólo estaban sujetas al cumplimiento de lo pactado con Roma, principalmente en lo relativo á obtener la aquiesciencia de ésta para declarar la guerra, hacer la paz ó contraer alianzas con otros pueblos; las *estipendiarias*, aunque sujetas al pago de tributos, los recaudaban por sí mismas, y los *municipios* conservaban su autonomía, gobierno é instituciones. Las *colonias*, como formadas por romanos, ó por españoles considerados tales, *municipios fundos*, se gobernaban como la metrópoli y sus habitantes gozaban del *jus civitatis*.

Sertorio dió á España, durante el tiempo que logró mantenerla independiente, una organización semejante á la romana, creando un senado en Evora, capital de la Lusitania, y estableciendo en Huesca, *Osca*, un centro de enseñanza para la educación é instrucción de la juventud española. Estos ensayos aficionaron á los españoles á las costumbres de los romanos; les interesaron en sus contiendas interiores y en sus guerras civiles, y facilitaron con el tiempo la romanización de la península.

En tiempo de Augusto recibió ésta un grande impulso hacia la unidad, cesando la distinción política en multitud de pueblos y nacionalidades y formando un solo cuerpo bajo el poder de aquel. La división anterior de la península en *Citerior* y *Ulterior*, según su proximidad á Roma teniendo el Ebro por límite, fué sustituida por otra en *Tarraconense*, correspondiente á la Citerior, y *Lusitania* y *Bética*, en que se dividió la Ulterior sirviendo el Guadiana de límite á estas dos últimas. La Tarraconense y Lusitania fueron llamadas provincias *imperiales*, porque eran regidas por un *proquæstor* ó legado del emperador, *legatus augustalis*, y la Bética, *senatorial*, gobernada por un procónsul en nombre del senado. Esta diferencia se fundaba en la necesidad de que el gobierno fuese más enérgico y vigoroso en las comarcas más propensas á la rebelión ó de más duro ca-

rácter. Cuando, á pretexto de hallarse expuestas á invasiones ó de exigir un gobierno fuerte para la conservación del orden, se quitó al senado el derecho de regir ciertas provincias y se pusieron legados imperiales al frente de todas, los gobernadores de España fueron llamados *presidentes*, título que conservaron hasta Constantino. Algunos historiadores les dan también, desde el reinado de Marco Aurelio, el nombre de *condes*, *cómites*.

La administración, ejercida antes de esta época en provecho exclusivo de los dominadores, sin que las ciudades pudieran tener en ella una intervención directa ó eficaz, fué modificada por Augusto, reservando á los gobernadores y procónsules la recaudación de tributos y las levas para el ejército, y dejando á las ciudades que se administrasen por sí mismas en casi todo lo demás. Estas nombraban para su gobierno un consejo ó especie de senado, llamado *curia*, elegido primero por el pueblo y después por la clase de los curiales, de cuya organización y atribuciones hablaremos más adelante.

Para el régimen de las ciudades provinciales había *duumviros*, magistrados superiores que desempeñaban funciones análogas á las de los cónsules de Roma, administraban justicia é iban, como éstos, precedidos de lictores. Su cargo, electivo, duraba uno, dos ó cinco años, y en este último caso se llamaban *duumviri quinquennales*, si bien éstos tenían, en opinión de algunos, atribuciones análogas á las de los censores romanos. Algunas ciudades menos afectas á Roma eran regidas por *prefectos* nombrados anualmente en la metrópoli. Había también en las ciudades *ediles* para la conservación y policía de los edificios públicos, orden en las ceremonias y espectáculos y cuidado de las provisiones; *curatores*, encargados de los depósitos públicos de cereales y otros artículos de primera necesidad; *tres viri viarum curandarum* y *duo viri viæ muniandæ*, para la inspección y cuidado de caminos y puertos. Tenían asimismo algunas ciudades, hacia los últimos tiempos del imperio, un tribunal compuesto de diez jueces, llamados *decem viri litibus judicandis*, para el conocimiento y decisión de los pleitos civiles, y en algunas grandes poblaciones, Tarragona por ejemplo, había los llamados *triumviri capitales*, para el conocimiento de las causas criminales de gravedad. Como auxiliares de la administración de justicia pueden enumerarse los *stationarii*, esclavos dependientes de los tribunales; los *beneficiarii*, mensajeros ó ugieres; los *apparitores*, para llevar á cabo las prisiones; los *accensi*, alguaciles; los *cornicularii*, copistas ó

escribanos, y el *questionarius* ó interrogante, encargado de formular las preguntas para indagatorias y declaraciones.

Los servicios fiscales estaban encomendados á los *censitores*, para tasar la riqueza sobre que habían de pesar los tributos; los *exactores*, para la recaudación de éstos; los *tabularii*, para autorizar los pagos; los *procuratores augustales*, para la inspección en lo concerniente á rentas públicas, y los *quæstores*, especie de tesoreros para la custodia y administración de los fondos especiales de la milicia. La recaudación de la *vigésima*, tributo impuesto por Augusto para atender á los gastos del ejército, estuvo encomendada á los *vicesimarii*, representantes de las compañías mercantiles que tenían contratado este servicio, hasta que la recaudación se hizo directamente por el Estado encargándolo á un *intendente* con varios agentes bajo su inmediata dirección, llamados *procuradores de la vigésima*, quienes tenían también á sus ordenes otros agentes subalternos, con el nombre de *sub procuratores*, y los *tubularii*, *rationales* y *á comentariis*, ó sean, veedores, contadores y tenedores de libros ó registros.

Como complemento de la organización judicial y administrativa de la España romana debemos mencionar los *conventos jurídicos*, especie de tribunales colegiados, que se reunían periodicamente para conocer en apelación de los negocios más importantes bajo la presidencia de los gobernadores de las provincias que los tenían, pues no era institución común á todas; y los *concilios*, que no deben confundirse con las juntas de prelados para asuntos eclesiásticos, ni con la institución del mismo nombre en tiempo de los godos, pues los concilios romanos se reducían á reuniones ó asambleas, más ó menos frecuentes y periódicas, en que se constituían las provincias para tratar de lo referente á los intereses económicos y administrativos, y acudir, en virtud de lo resuelto, al emperador demandando su protección para el remedio de los males de aquel orden; pero sin que los acuerdos de tales asambleas tuvieran otra autoridad que la de meras exposiciones ó representaciones al jefe del Estado.

CAPÍTULO II

PODER PÚBLICO EN TIEMPO DE LOS GODOS

Cuando los godos se establecieron en España traían ya una forma de gobierno muy común en los pueblos de orígen germánico, la monarquía electiva y militar, por más que, respecto al primero de estos caracteres, pretendan algunos escritores que no debe considerarse tal en los primeros tiempos, sino hereditaria en ciertas familias, la *baltha* entre los visigodos y la *amala* entre los ostrogodos. No estimamos razón bastante, para llamar hereditaria la monarquía visigótica, el que la elevación al trono estuviera restringida de hecho á personas de ciertas familias, pues, sobre que lo que caracteriza jurídicamente una institución no es el hecho más ó ménos repetido, sino la ley ó la costumbre que le fundamenta, este hecho tiene su explicación bastante en el mayor prestigio é influencia de las familias cuyos miembros ocuparon una vez el trono y que por lo mismo habían de contar con amigos y servidores reconocidos, dispuestos á secundar sus propósitos de perpetuar dentro de su linaje la posesión del mando supremo. Por otra parte, las leyes escritas, verdaderos documentos auténticos por donde puede conocerse la índole de aquella monarquía, nos la presentan constantemente como electiva, al hablar de las personas que pueden ser elegidas, de las exclusiones, de la forma de la elección, etc.; sin que bastaran por eso dichas leyes ni los cánones de los concilios toledanos para conseguir que el hecho no estuviera muchas veces en pugna con el derecho, del mismo modo que sucede ahora y sucederá siempre que á los dictados de la razón y de la justicia se opongan hechos sugeridos por las pasiones, por la ambición ó la codicia. Esto no obstante, los he-

chos ilegítimos ó antijurídicos no bastarán jamás para trocar en derecho lo que á éste se oponga, y la razón y el legislador, ó el pueblo en su nombre, protestarán una y otra vez contra tales hechos. Así aparece considerando las disposiciones del Fuero Juzgo. Cuando en éstas se limita la elección, es porque el derecho verdadero de aquel pueblo así lo exigía; cuando se excomulga y se decretan penas contra los ambiciosos que tumultuariamente pretenden usurpar el reino, es que se quiere afirmar el derecho conculcado; cuando se establece el modo, forma y lugar de la elección, es que en la conciencia del legislador estaba que la elección era el único medio justo y legítimo para llegar al solio. Ni la designación dentro de ciertas familias, ni las revueltas, conspiraciones, asesinatos y fratricidios, que fueron tantas veces escalones para subir al trono, autorizan para poner en duda que, jurídicamente, la monarquía visigótica fué electiva desde Ataulfo hasta D. Rodrigo.

No es esto decir que, aun siendo electiva la monarquía, dejara de notarse cierta tendencia á sustituir este principio con el hereditario, ni que faltaran hechos que, á la larga y si la invasión sarracena no hubiera concluido con el imperio de los godos, hubieran producido un cambio radical en este sentido, viniendo al cabo á hacerse hereditaria por el hecho, por la costumbre y por la ley. Al contrario, la costumbre de elegir reyes dentro de ciertas familias ó linajes; la originaria de los germanos de recompensar en el hijo las virtudes ó servicios del padre; la influencia romana en los pueblos que tenían trato con el imperio y á cuya semejanza algunos monarcas visigodos asociaron al trono á sus hjios, como los emperadores romanos asociaban á sus parientes y devotos; todos estos hechos marcan ciertamente una tendencia á convertir en hereditaria la monarquía, viniendo también en auxilio de la innovación las mejores condiciones de este modo de concreción del poder para la vida y gobierno de los pueblos definitivamente constituidos.

Como la monarquía visigoda fué predominantemente militar, en un principio la elección era iniciada por los jefes militares, cuya voz seguía el resto del pueblo. Estas elecciones eran ordinariamente tumultuosas, y la forma consistía en elevar sobre un pavés al elegido, á quien entonces aclamaba la muchedumbre. Tal modo de elección cambió luego, efecto sin duda de que, diseminada la nación goda por los territorios conquistados, no era ya posible reunir al pueblo, y entonces sustituyó á la aclamación la designación hecha por los principales. Sin

embargo, las leyes del Fuero Juzgo no expresan con bastante claridad si la elección era exclusiva de los grandes y prelados, ó si correspondía á todo el pueblo. Así la ley II, tít. I, del código romanceado dice á este propósito: "et deve ser esleido con concello de los obispos, ó de los ricos omnes de la corte, ó del poblo;„ y la ley VIII del mismo título preliminar tampoco permite afirmación rotunda, pues según ella la elección había de hacerse "con el otorgamiento de los obispos, et de los godos mayores, et de todo el poblo,„ cuyo texto no difiere en nada esencial de este latino: "cum convenientia omnium Dei sacerdotum, et totius primatus Gothorum et omnium populorum.„

Para ser elegido se exigía por esta última ley ser "omne de linage de los godos, et fillo dalgo, et noble, et digno de costumpnes,„ no pudiendo serlo "nengun religioso nen otro omne, nen servo, nen otro omne estrano, se non ye de linage de los godos, etc.„

La elección debía de hacerse en la capital del reino, Toledo, pues el texto latino dice *in urbi regia*, ó en el lugar donde hubiera muerto el rey anterior. En cuanto al primer punto, no es posible seguir la traducción hecha en la citada ley II del código romanceado, al decir; "daquí adelantre los reyes deven seer esleidos *enna cibdat de Roma*,„ porque en la época en que se dictó tal disposición, ni los visigodos podían fácilmente y con independencia congregarse en la ciudad eterna, ni tenían por qué hacerlo, ni es mucho menos admisible suponer que entendieran estar subordinados al imperio, como pudo parecerlo á la venida de Ataulfo.

A la elección seguía generalmente la *aclamación*, que consistía, según antes indicamos, en elevar al elegido sobre un escudo para que el pueblo le victorease, costumbre conservada en el fuero de Sobrarbe y que dió orígen á la frase, *alzar ó levantar rey;* el *juramento* de fidelidad á las leyes, de donde vino también la frase, *jurar los fueros de la elevación,* y la *unción*, que data, según unos, de los tiempos de Wamba, ó introducida por Recaredo, según otros, y consistía en que el obispo de Toledo ó de la ciudad en que se hallara la corte ungiera con los Santos Oleos la cabeza del monarca, ceremonia que hacía, ante los ojos del pueblo, sagrada la persona real.

Como el derecho y el hecho relativos á la elección no estuvieran generalmente de acuerdo en esta época, cuya historia no presenta acaso ningún otro ejemplo de elección ordenada y regular más que la de Wamba, los concilios de Toledo intentaron

poner coto á las ambiciones y desmanes de los que pretendían usurpar el reino ó despojar sediciosamente al rey, lanzando contra ellos su excomunión. Conforme á esto, la ley VII, título I, del Fuero Juzgo prohibe "que nengun omne, vivendo el re, por nengun fecho, nen por nengun concello, si quier sea obispo, se quier sea clérigo, se quier lego, non se osme de facer rey contra la voluntat del vivo, nen por nengun placer, nen por nengun enganno por forcia de seer rey, non traga otros consigo, nen él non se alegue á otro sobre tal cosa.„ Sin embargo, estas disposiciones no lograron corregir el mal que minaba la monarquía goda, cuyos anales registran multitud de crímenes y usurpaciones, hasta el punto de que algunos historiadores hayan podido afirmar que los godos tenían el vicio de matar al rey que no les agradaba y reemplazarle con otro á su capricho.

Las atribuciones de los reyes visigodos se extendían á todas las funciones del poder. Les competía la formación de las leyes, unas veces por sí solos y otras con el concurso de los magnates y obispos; representaban al Estado en las relaciones exteriores; declaraban la guerra, concertaban la paz y estipulaban alianzas ó tratados; convocaban los concilios, les sometían las cuestiones referentes al Estado que habían de ser objeto de sus acuerdos y sancionaban estos dándoles fuerza legal; nombraban los dignatarios, magistrados y cargos supremos en lo eclesiástico, como los obispos, y en lo civil y militar, como duques, condes y gardingos; á su cargo estaba la justicia, que administraban por sí ó por jueces en quienes la delegaban; y en suma, el rey era el centro de donde partía y á donde volvía toda autoridad en el Estado. Mas no por esto ha de creerse que su poder fuera absoluto, pues la intervención de la nobleza y del pueblo en los primeros tiempos y la influencia que el clero alcanzó desde Recaredo le limitaban, siquiera fuese moralmente, y las mismas leyes le restringían, sometiendo al rey á su acatamiento, una vez promulgadas, imponiéndole la obligación de atenerse á ellas en la administración de justicia y no permitiéndole despojar á nadie de sus bienes, ni pronunciar por sí solo sentencia de muerte, ni fallar en los pleitos civiles sin forma de juicio, ni comparecer por sí mismo en los tribunales en causa propia, ni disponer libremente de las cosas que le pertenecían como rey, ni dejarlas á sus hijos, "mais que las haya aquel que venier depois enno regno.....„ "Ca non podrían ellos ganar, nen aver muchos poblos, nen gran aver, se non por que foron enxaltados por reys; nen podrían seer muy ricos, si el poblo non los enxaltase enante.„

A su venida á España los reyes godos vestían únicamente pieles, y no usaron cetro, manto, corona, ni otra insignia por la que se conociera su autoridad hasta los tiempos de Leovigildo, que fué el primero, según San Isidoro, que usó vestidos suntuosos y mandó levantar un trono en su palacio de Toledo. Respecto á títulos, parece que antes de Leovigildo sólo llevaban el de *dominus noster;* pero, á imitación de los romanos usaron también, desde aquel, los de *Pío*, *Glorioso*, *Vencedor* y *Serenísimo*, y desde Recaredo, el de *Flavio,* que algunos quieren traducir por espléndido ó resplandeciente. El lujo fué desarrollándose hasta el punto de que la púrpura, los metales y las piedras preciosas estuvieran ya admitidas en tiempo de Chindasvinto, y algunos pretenden que también llegaron á usar los reyes godos escudos de armas, opinión infundada, pues el blasón no pasa del siglo x y es originario de Alemania y coetáneo de las justas y de los torneos.

El gobierno de las provincias se hallaba encomendado por los reyes á los *duques* y el de las ciudades á los *condes*. La preeminencia de los duques sobre los condes se deduce de las leyes visigodas, que, además de llamar en diversas ocasiones duque al gobernador de provincia y conde al de ciudad, siempre que hablan de las dos dignidades nombran primero al duque y después al conde, disponiendo, por otra parte, que pueda apelarse á aquel de las resoluciones dictadas por éste. Unos y otros solían tener un auxiliar que, además de ayudarles en el desempeño del cargo, les sustituía en ausencias y enfermedades. El del duque se llamaba, según Masdeu, *gardingo*, y el del conde, *vicario;* pero, á seguir la traducción del Fuero Juzgo, gardingo equivale á rico hombre, y por otras opiniones, el gardingato era un oficio palatino, aunque no muy bien determinado. Un historiador moderno, según el cual, la palabra gardingo deriva de las dos germanas, *garde,* cuerpo de tropas para la conservación del orden, y *ding*, tribunal, se inclina á creer que los gardingos eran especie de jueces militares, ó tal vez cargo análogo al de nuestros auditores de guerra. En todo caso, según las leyes visigodas y los concilios toledanos, los gardingos concurrían á las juntas de los grandes y tenían asiento en ellas después de los duques y condes; sin embargo, parece que no firmaban sus actas.

Para el régimen de las villas y pueblos de menor importancia había una especie de alcaldes, llamados *prepósitos* ó *villicos*, pagados como los demás gobernadores por la corona, con

el objeto, según una ley de Fuero Juzgo, de evitar que, movidos por el interés ó la codicia, vejasen á los pueblos con injusticias ó exacciones ilegales. La recaudación de tributos estaba á cargo de los *numerarios*, oficio odioso y considerado vil entre los godos, cuya provisión se hacía por el conde del Patrimonio, siendo confirmado en la ciudad ó villa por el respectivo obispo para lo referente á la recaudación eclesiástica.

La administración de justicia competía á los duques y condes, quienes, para poder atender á los cuidados generales del gobierno, tenían sustitutos con el nombre de *jueces* en los que delegaban sus facultades judiciales. También cuentan algunos escritores entre los jueces á los llamados *pacis assertores*, delegados directamente por el rey, del que recibían poderes extraordinarios, para el conocimiento de algunas causas especiales; mientras que otros consideran al *pacis assertor* como una magistratura del orden militar para ajustar las paces é investida además con especial jurisdicción. Pueden también computarse entre los jueces los *thiufados*, que, juntamente con sus funciones de jefes ó capitanes, tenían, según Masdeu, el carácter de miembros de un tribunal militar con atribuciones militares, aun en tiempo de paz, en las ciudades y fortalezas donde residían como jefes de la milicia. Eran auxiliares de la administración de justicia los *missos* ó *mandaderos*, especie de escribanos para hacer citaciones y notificar providencias; los *litigatores* ó abogados, que recibían el nombre de *actores fiscales*, si tenían á su cargo la defensa de los intereses públicos, y el de *defensores*, si la de los pobres; los *assertores* ó procuradores, y los *sayones*, ejecutores de los mandamientos y providencias de los tribunales, como detención de acusados, aplicación del tormento y de los azotes, etc.

La organización militar tenía por base el sistema decimal y era acaso más parecida á la moderna que á la de las antíguas legiones. Bajo el mando supremo del rey ó del superior del duque y á veces del conde, como *præpositus hostis*, había los jefes llamados *millenarios*, que algunos entienden eran los thiufados, y mandaban mil hombres ó un regimiento. Este se dividía en dos partes iguales de quinientos hombres, ó batallones, á cuyo frente estaba un *quingentario;* el batallón se dividía en cinco partes de á cien hombres, ó compañías, mandadas por *centenarios*, y las compañías se subdividían en pelotones de á diez hombres dirigidos por *decuriones*. Completaban la organización militar los *annonarios*, especie de comisarios de guerra que cuidaban

de las provisiones, y los *compulsores exercitus* ó *servi dominici*, para hacer las levas y reclutamientos y apremiar á los reacios en unirse á la hueste.

Estaban sujetos al servicio militar en tiempo de guerra todos los hombres útiles, exceptuando únicamente los ancianos y los empleados á la sazón en servicios públicos ó del rey, debiendo además el que tuviera siervos llevar la décima parte de ellos provistos por cuenta propia de armas y pertrechos. Los prófugos y los desertores eran castigados con mayor ó menor dureza según su clase y el deber de dar ejemplo; pero siempre con rigor, cosa muy conforme con el carácter belicoso de los godos.

CAPITULO III

GOBIERNO DE LOS ESTADOS CRISTIANOS DE LA RECONQUISTA

Repuestos los refugiados en Asturias del estupor que les causara la rápida invasión sarracena y alentados con sus primeros triunfos sobre los musulmanes, aclaman rey á Pelayo y surge la organización del nuevo estado á semejanza del muerto á orillas del Guadalete, pues no había pasado tanto tiempo para que hubieran olvidado los godos sus instituciones políticas y régimen anterior.

Es por lo mismo la monarquía electiva la forma de gobierno del primer estado cristiano restaurado, y, como la antigua visigótica, reviste un carácter militar predominante, pues no solo sentaba bien que así fuera á la índole de los restos godos, sino que era como una necesidad del estado destinado á sostener lucha empeñada, primero, por su existencia, y después, para recobrar la perdida grandeza. Pero, así como en los últimos tiempos de los visigodos los trastornos anejos á la elección, las ambiciones á que daba origen aquella, la propensión de los reyes á perpetuar el poder en su familia, y aun la gratitud del pueblo para con sus príncipes queridos van preparando el cambio del sistema electivo por el hereditario, la designación de los primeros monarcas asturianos refleja esa misma tendencia, pues á Pelayo sucede su hijo Favila, y si ninguno de los dos hijos de éste reemplazó en el trono á su desgraciado padre, efecto fué sin duda de la necesidad que ante todo se imponía de buscar un jefe de pelea, cosa imposible para dos niños de tierna edad. Así y todo, el nombramiento de Alfonso I, yerno de Pelayo; el de Fruela á la muerte de su padre Alfonso, y aun el de

los reyes Aurelio, Silo, Mauragato y Bermudo I, que algunos historiadores llaman intrusos, en perjuicio del pequeño hijo de Fruela, muestran bien á las claras cuánto había arraigado en los espíritus el principio hereditario, pues ya que la necesidad ó el odio á la memoria del monarca excluyese del trono al hijo de éste, dábanle al menos sucesor de entre sus allegados y parientes. La abdicación de Bermudo *el Diácono* en el hijo de Fruela, Alfonso *el Casto;* la elección á la muerte de éste de Ramiro I, hijo de aquel; la trasmisión de la corona, con leves excepciones, de padres á hijos, cuando éstos eran adultos, y mucho más los nombramientos de Ramiro III, cuando solo contaba cinco años, bajo la tutela de su tia Dª Elvira, y de Alfonso V, también de poca edad, bajo la del conde de Galicia Melendo González, prueban que la monarquía asturiano-leonesa se hizo hereditaria de hecho aun antes de que D. Fernando *el Magno* fuera llamado á suceder en Castilla por su madre Dª Mayor, y en León por su mujer Dª Sancha, hermana y heredera de Bermudo III. Sin embargo, el hecho no es la ley y aunque su repetición consentida por quien tiene el poder de hacer las leyes engendre la costumbre jurídica, sería difícil sostener que la herencia fué modo legítimo de trasmitirse el poder público antes de la promulgación de las Partidas.

La ley II, tít XV, Part. II consigna ya de un modo explícito la sucesión hereditaria y establece el orden de suceder..... "los omes sabios e entendidos, dice, catando el pro comunal de todos... touieron por derecho que el señorío del reyno, non lo ouiesse si non el fijo mayor, después de la muerte de su padre. E esto vsaron en todas las tierras del mundo, do quier que el Señorio ouieron por linaje; e mayormente en España. E por escusar muchos males que acaescieron, e podrian aun ser fechos, pusieron que el Señorio del Reyno heredassen siempre aquellos que viniessen por liña derecha. E por ende establescieron, que si fijo varon y non ouiesse, la fija mayor heredasse el reyno. E aun mandaron, que si el fijo mayor muriesse, ante que heredasse, si dexasse fijo ó fija, que ouiesse de su muger legítima, que aquel, ó aquella lo ouiesse, e non otro ninguno. Pero si todos estos fallec'essen, deue heredar el reyno, el más propinco pariente, que ouiesse, seyendo ome para ello: non auiendo fecho cosa porque lo deuiesse perder. Onde todas estas cosas es el pueblo tenudo de lo guardar.....„

La elección y la herencia no fueron, sin embargo, los únicos modos de concreción de la soberanía, aunque sí los principa-

les, si hemos de aceptar la doctrina del mismo código. Véase en prueba de ello la ley IX, tít. I, Part. II: "Verdaderamente, dice, es llamado Rey aquel que con derecho gana el Señorío del reyno. E puedese ganar por derecho en estas cuatro maneras. La primera, es cuando por heredamiento heredan los reynos el fijo mayor, o alguno de los otros. que son mas propincos parientes a los reyes, al tiempo de su finamiento. La segunda es quando lo gana con auenencia de todos los del reyno, que lo escogieron por señor, non aviendo pariente, que deua heredar, el Señorio del Rey finado, por derecho. La tercera razón es por casamiento, e esto es, quando alguno casa con dueña que es heredera del reyno que maguer el non venga de linaje de Reyes, puedese llamar Rey despues que fuere casado con ella. La cuarta, es por otorgamiento del Papa, ó del Emperador, quando alguno dellos faze Reyes en aquellas tierras, en que han derecho de lo fazer.„

Puede afirmarse por lo dicho que tanto en Castilla como en Asturias y León, si fué la elección modo de subir al trono, marcóse desde los albores de estos reinos la tendencia, antes iniciada en los últimos tiempos de la monarquía visigoda, á sustituir aquella con la herencia, y que, cimentada ésta en la costumbre, fué ya verdadera ley desde la promulgación de las Partidas en el Ordenamiento de Alcalá, ley I, tít. XXVIII.

También pasó á las nuevas monarquías cristianas la ceremonia de la aclamación, si bien la elevación sobre el pavés fué reemplazada con las voces de *Real, Real, Real*, ó *Castilla por D. F.*, con que el pueblo aclamaba al elegido ó designado por la herencia, al izarse el pendón del nuevo monarca sobre la torre del homenaje. Esta ceremonia tenía ordinariamente lugar estando el nuevo rey en el territorio de su reino; sin embargo, también ocurría hallarse fuera de él, como en la de Carlos I, que estaba en Flandes; pero esto no afectaba, ni podía afectar á la posesión legítima del poder, pues el verdadero título para ésta lo era la herencia y antes la elección, y no la fórmula ó ceremonia de la proclamación. A ésta seguía el juramento, prestado por el nuevo monarca, de observar las leyes del reino; juramento que se consideró siempre requisito previo al pleito homenaje, que le prestaban los obispos, grandes, ciudades, villas y pueblos, y al pago de la *moneda forera*, tributo setenal en reconocimiento de la soberanía y uno de los derechos que con la *justicia*, la *fonsadera* y los *yantares* no podía el rey enagenar por pertenecerle en razón del señorío, según el Fuero Viejo.

La coronación y la consagración fueron también ceremonias usadas por algunos de nuestros antiguos reyes; la primera, principalmente para dar más brillo á su autoridad, y la segunda, para unir la sanción religiosa á la majestad del rey, haciéndole así inviolable ante el pueblo cristiano.

La autoridad del monarca en León y Castilla se extendía á las tres funciones del poder. La función legislativa se manifestaba en tres formas principales: los *fueros*, cuya concesión, de la exclusiva competencia del rey, no podía hacerse por la nobleza ni por el clero sin autorización de aquel; los *privilegios*, que eran como exenciones de la ley ó como leyes especiales otorgadas por el monarca en beneficio de clases ó personas determinadas; y los *ordenamientos* que, hechos por los reyes generalmente á petición de las cortes, eran la más solemne forma de la potestad legislativa.

En el ejercicio de la función ejecutiva correspondía al rey en primer término el mando superior de los ejércitos, y á su llamamiento estaban sujetos, cuando fueran requeridos, los ricos-hombres con sus vasallos y los concejos con sus milicias. Bajo la autoridad suprema del monarca estaban: el *condestable* (nombre derivado, según algunos, del *comes stabuli* de los godos) creado por Juán I para que ejerciese en su nombre el mando y jurisdicción en el ejército, con mero y mixto imperio en las cosas concernientes á la milicia y con potestad superior á la de los duques, condes y marqueses y á la de los adelantados y merinos mayores, como cargos administrativos; y el *almirante*, instituido por Fernando III, cuando para la conquista de Sevilla necesitó organizar la marina, confiándole el mando y gobierno de todas las naves reales, ya fuesen muchos los navíos "ayuntados en uno, á que llaman flota, como cuando son pocos á que dicen armada„ y dándole jurisdición y poder, desde que movía la flota para resolver en alzada los juicios que los cómitres hubieran dado y para hacer justicia de todos los que hicieran porqué, desmandándose, ó huyendo, ó hurtando alguna cosa, ó peleando entre sí de modo que resultasen heridas ó muerte, excepción hecha de los cómitres puestos por el rey, sobre los que no debía hacer justicia, á menos que el rey se lo mandara expresamente.

En el orden de la administración civil ejercían los reyes la función ejecutiva en primer término por medio del *canciller*, oficial palatino llamado tambien en un principio *notario mayor* del reino y semejante al conde de los notarios de los godos, co-

mo secretario del rey, y del *almojarife*. "El Chanceller, dice la ley IV, tit. IX, Part. II, es medianero entre el Rey e los omes, quanto en las cosas temporales. E esto es, porque todas las cosas que el ha de librar por cartas, de qual manera quier que sean, ha de ser con su sabiduría: e el las deue ver, ante que las sellen por guardar que non sean dadas contra derecho, por manera que el rey non resciba ende daño nin verguença. E si falasse que alguna y auia que non fuesse assi fecha, deuela romper o desatar con la peñola, a que dizen en latin *cancellare*, e desta palabra tomo nome chancellería." El almojarife, llamado después *tesorero mayor* por D. Alfonso XI, era, según la ley XXV, tít. IX, Part. II, el oficial que tenía á su cargo la recaudación de pechos y tributos, derechos de la tierra, portazgos, diezmos y censos de las tiendas, y debía pagar á los caballeros y á los otros hombres segun mandara el rey sin mermarles cosa alguna. Este cargo fué reemplazado en tiempo de D. Juán II por dos *contadores mayores*.

Además de estos altos funcionarios, cuyos oficios eran generales al Estado, tenían los reyes al frente del gobierno local, conforme á la tradición goda, duques y condes, reemplazados más tarde por los *adelantados* y *merinos*, cuyas funciones no han de confundirse con las simplemente judiciales encomendadas á los del mismo nombre. Los adelantados, á juzgar por el texto de la ley XXII, tít. IX, Part. II, eran gobernadores de las provincias ó de extensas comarcas, equivalentes á los *præsides provinciarum* y su oficio muy grande, "ca son puestos por mandado del rey sobre todos los merinos, tambien sobre los de las comarcas e de los alfozes como sobre los otros de las villas." Sus facultades en el territorio de su mando eran parecidas á las del rey á quien sustituían como sus inmediatos auxiliares y se extendían tanto á la justicia como al gobierno, mando del ejército y defensa de la tierra, misión esta última más especial é importante para los *adelantados de la frontera*, expuestas como estaban de continuo á las incursiones, robos y talas de los moros. Los merinos, no obstante sus funciones judiciales, entiende el Sr. Colmeiro que eran más bien un cargo de gobernación que de justicia pues su jurisdicción se concretaba á cosas señaladas que llaman *voz de rey*, como camino quebrantado, ladrón conocido y otros actos de violencia en cuya persecución resplandece sobre todo el deseo de mantener la paz en los pueblos, por referirse á la seguridad de las personas y de la propiedad. Los merinos se distinguían en *mayores*, encargados por

el rey del mando de un territorio extenso, y *menores*, nombrados por aquellos, ya para sustituirlos en sus ausencias, ya para el gobierno de los alfoces. Los había también del rey y de los señores, según fuesen puestos por aquel ó por éstos en los territorios de sus señoríos, y parece fuera de duda que unos y otros tenían mando militar, además de sus facultades gubernativas y judiciales.

La función ejecutivo-judicial correspondía asimismo al monarca en cuanto á la justicia suprema ó derecho de conocer en último término y alzada de todas las apelaciones, y él era también fuente de toda justicia civil y criminal, como lo prueban, además de los derechos consignados en el Fuero Viejo como exclusivos del monarca, la explícita disposición del concilio de León de 1020, en que se manda que tanto en León como en las demás ciudades y alfoces ó campos haya jueces elegidos por el rey, y la ley VI, tít. XXIX, Part. III, al decir que nadie puede ganar por tiempo ó prescripción el derecho de hacer justicia, á menos que el rey ó el señor debidamente autorizado para ello se lo otorgare expresamente; sin que obstara al reconocimiento del derecho inherente á la corona de hacer justicia y de ser principio y fuente de toda jurisdicción el que la administración de aquella, por efecto de la influencia feudal ó por concesiones de los reyes, estuviera más ó menos dividida entre el clero, la nobleza, las ordenes militares, los gremios y otras instituciones, no sólo exentas de la jurisdicción real ú ordinaria, sino investidas con la facultad de juzgar y aun de instituir jueces en los abadengos, señoríos y territorios propios, ó de sujetar á su especial jurisdicción á las personas y cosas que formaban las asociaciones ó constituían los ordenes privilegiados.

La jurisdicción real se ejercía por los jueces, *adelantados*, *merinos* y *alcaldes*, sin perjuicio de que el rey oyese y administrase por sí mismo justicia en ciertos días de la semana.

Según la ley I, tít. IV, Part. III, los juzgadores ó jueces son de muchas maneras. "Ca los primeros dellos, e los mas honrados, son los que judgan en la corte del Rey, que es cabeça de toda la tierra, e oyen todos los pleytos de aquellos omes, que se agrauian. Otros, y ha aun sin aquestos, que son puestos señaladamente para oir las alçadas de los juezes sobredichos. E tales como estos, llamaron los antiguos sobrejueces, por el poder que han sobre los otros, assí como es dicho. Otros y ha que son puestos sobre reynos, e sobre otras tierras señaladas: e llámanlos adelantados, por razon que el Rey los adelanta para juzgar

sobre los juezes de aquellos logares. Otros juezes y ha, que son puestos en logares señalados, assí como en las cibdades e en las villas, o allí do conuiene que se juzguen los pleytos. E aun otros y ha que son puestos por todos los menestrales de cada logar, o por la mayor partida dellos. E estos han poderio de juzgar los pleytos, que acaesciessen entre si por razon de sus menesteres. E todos estos juezes que auemos dicho, llámanlos en latin ordinarios. ...„

La ley XIX, tít. IX, Part. II, dice hablando de los adelantados: "Alçanse los omes muchas vegadas, agraviandose de los juizios que dan contra ellos los juzgadores de la corte: e acaesce algunas vezes, que los non puede el Rey oyir por si por priessas que ha: e conuiene que ponga otro en su lugar. E tal oficial como este, llamanle sobrejuez por que él ha de emendar los juyzios de los otros juzgadores: e aun le llaman adelantado de la corte, porque el Rey lo adelanta poniendolo el Rey en su lugar para oyr las alçadas.....„

Por la lectura de estas dos leyes se ve que los adelantados eran de dos clases: uno, llamado de la corte, que en nombre del rey y haciendo sus veces oía en alzada las apelaciones de los jueces de la corte; y otros, de las ciudades y villas, con atribuciones análogas á las de aquel sobre los jueces de su territorio.

Respecto á los merinos dice la ley XXIII, tít. IX, Part. II: "Merino es nome antíguo de España: que quiere tanto dezir, como ome que ha mayoría para fazer justicia sobre algun logar señalado, assi como villa ó tierra: e estos son en dos maneras. Ca unos y ha, que pone el rey de su mano en lugar de adelantado, a que llaman merino mayor: e este ha tan gran poder como el adelantado. E otros ay que son puestos por mano del adelantado: o de los merinos mayores. Pero estos atales non pueden fazer justicia, si non sobre cosas señaladas: a que llaman boz del rey; assi como por camino quebrantado: e por ladrón conocido. E otrosi por muger forçada: ó por muerte de ome seguro, etc.„

Y en cuanto á la institución de los alcaldes que, en opinión de Alcubilla, son los mismos jueces de alzada á que se refiere la citada ley I, tít. IV, Part. III, dice Gebhardt: "el rey sabio estableció un tribunal supremo de alzada, ante el cual pudiera recurrir todo vasallo en apelación de las injusticias ó prevaricaciones de los jueces locales. Tal fué la creación de los *alcaldes de corte* que tuvo lugar en las de Zamora de 1274, en las

cuales se dispuso que hubiese nueve alcaldes de Castilla, seis de Extremadura y ocho de León, que por mitad ó terceras partes asistiesen de contínuo á la corte del rey, debiendo ser todos seglares. Instituyó además el monarca tres jueces para oir las alzadas de Extremadura, Toledo y León, y mandó que el orden de las apelaciones fuera, de los alcaldes de villa á los adelantados de los alfoces, de éstos á los alcaldes del rey, de los alcaldes del rey, á los merinos ó adelantados mayores y de éstos al rey en persona.„

Hubo tambien desde muy antíguo tribunales colegiados para la administración de justicia. De esta clase fué la chancillería ó audiencia que, según opiniones respetables, entendía peculiarmente en asuntos contenciosos, y fué creada por D. Enrique II; pero sin señalarle lugar fijo de residencia, siguiendo ordinariamente á la corte del rey, lo cual originaba graves inconvenientes que quiso evitar D. Juán I, determinando en el ordenamiento de Bribiesca que desde Abril á Septiembre inclusives residiese tres meses en Medina y tres en Olmedo, y de los seis restantes, tres en Madrid y otros tres en Alcalá. A semejanza de este tribunal, único por mucho tiempo en Castilla, fueron instituyéndose posteriormente otros varios de cuya organización, atribuciones y modo de funcionar se ocupan, entre otras, las leyes del libro V. de la Nov. Recopilación.

La autoridad propia del monarca en materias de justicia no le eximía de estar á derecho con sus vasallos ó, lo que es lo mismo, de someterse á los tribunales en los pleitos que le promovieran ó suscitaran sus vasallos sobre lo que estimaran ser suyo, ni le autorizaba para tomarles sin forma de juicio aquello á que el mismo rey se creyera con derecho. Tampoco podía sentenciar causa alguna sin forma de juicio, por más que en ocasiones expidiese, extralimitándose, las cartas llamadas *desaforadas* ó contra fuero, que, segun la ley LII, tít. XVIII, Part. III, "deuen ser cumplidas sin pleyto, e sin juycio,„ y son "aquellas en que manda el rey á alguno fazer algun fecho señalado, assi como si le mandasse prender, o matar algun ome, o derribar torre, o otras fortalezas, o fazer cumplir algun juyzio, o otro fecho señalado quel mandasse facer ciertamente diziendo en la carta: faced tal cosa luego que esta carta vierdes.„ Contra este abuso reclamaron las cortes en varias ocasiones, obteniendo de los reyes ordenamientos para que no se expidieran cartas blancas ni albalaes contra nadie sin oirle previamente. No debían tampoco llamar á sí el conocimiento de los asuntos pendientes ante los

alcaldes de su casa y corte; ni decretar pesquisas cerradas contra ciudad ó villa, á menos que las pidiera el concejo; ni dejar de oir en justicia por si ó por sus ministros á los emplazados con derecho y segun fuero del lugar donde hubiera ocurrido el delito; ni hacer responsables á los lugares ni á los particulares sino por los actos ejecutados por ellos mismos.

Merecen especial mención, no solo por las facultades de administración, gobierno y justicia que les fueron conferidas, sino por lo que contribuyeron á robustecer el poder de los reyes á expensas de los concejos, los *corregidores*, puestos por el rey para regir las ciudades, villas y lugares, en un principio donde y por el tiempo que la necesidad lo exigía, y posteriormente con carácter de más generalidad y permanencia. Las excesivas franquicias alcanzadas por los concejos; la licencia que, como consecuencia, surgió en el seno de los mismos; los disturbios y disensiones interiores, sostenidos y fomentados por las banderías y rivalidades, movieron á los reyes á poner coto á tales desmanes enviando á los concejos, como delegados suyos, alcaldes de fuera de la localidad, llamados primero *alcaldes veedores* y después *corregidores*, con atribuciones amplias y superiores á las de los alcaldes nombrados por los concejos en virtud de las facultades que para elegirles se les habían concedido en los fueros y cartas-pueblas. Hubo, pues, desde entonces *alcaldes de fuero*, elegidos por los ciudadanos, y *alcaldes de salario*, nombrados por el rey; estos últimos recibidos de mal grado, ya porque su autoridad se hacía sentir más fuerte, como emanada del rey directamente, ya porque aumentaban los gastos del concejo, que tenía que pagar los sueldos y derechos de tales funcionarios y de sus oficinas. A pesar de esto la institución de los corregidores se generalizó desde Alfonso XI, no sin protestas de los procuradores de las ciudades, quienes al cabo consiguieron de los reyes que se nombraran vecinos de las villas y ciudades, en lugar de personas forasteras, y que sólo se enviaran cuando lo pidieran todos ó la mayoría de los vecinos y fuera cumplidero al real servicio y al bien y pro comun de las ciudades, villas y lugares que lo pidieren, como lo acordó D Juán II en Zamora y Valladolid, según la ley I, tít. XI, lib. VII de la Novísima Recopilación.

Los Reyes Católicos, celosos de su autoridad y de la conservación del orden y recta administración de justicia pusieron *asistentes*, gobernadores ó corregidores, pues de los tres modos los llaman, en todas las ciudades y villas principales,

primero por un año, después por dos ó más, y últimamente por tiempo indefinido, determinando sus obligaciones y la manera de conducirse en la pragmática dada en Sevilla é inserta en las leyes III y IV, tít. XI, lib. VII del código últimamente citado. Así ha llegado hasta nuestros días esta institución, si bien sufriendo en distintas épocas reformas y modificaciones importantes, hasta que, separadas las funciones ejecutivo-administrativa y judicial por las constituciones modernas, cesó de derecho esta magistratura, repartiéndose sus facultades entre ayuntamientos, alcaldes y jueces, por más que en ciertas ocasiones se haya tratado de resucitarla.

En suma; la monarquía, forma de gobierno en Asturias, León y Castilla, reunió en sí las tres funciones del poder, y la autoridad de los monarcas se hacía sentir más ó menos en todos los ordenes y lugares del Estado; pero esto no autoriza á considerarla como absoluta, pues, aparte la influencia que la nobleza, el clero, las cortes y otras instituciones ejercían en el gobierno y en la administración, algunos actos de los monarcas se hallaban sujetos á reglas, de tal suerte, que no podían ejecutarlos por su sola voluntad. Así, por ejemplo, el matrimonio y testamento, la renuncia de la corona, la jura del inmediato sucesor y las minorías, tutelas y regencias, exigían más ó menos concretamente la aprobación de las cortes; ya porque los pactos matrimoniales pudieran crear, limitar ó modificar los derechos de sucesión en pró ó en contra de determinadas personas; ya porque la última voluntad de los reyes entrañase á veces desmembraciones del territorio ó merma de los estados; ora porque la posesión y ejercicio del poder representara un pacto mútuo entre el monarca y los pueblos; ó bien porque se considerase no ser bastante la voluntad del rey, ni aun la costumbre establecida, para alzar al sólio á ninguna persona rechazada por los pueblos y ordenes sociales, ó porque las cuestiones relativas á la edad y á la designación para los cargos de tutor del rey menor y de regente del reino afectasen grandemente á la paz pública y al bienestar general.

En Navarra la forma de gobierno fué también en un principio la monarquía electiva y, según todas las probabilidades, la autoridad real surgió de un pacto entre los guerreros y el caudillo á quien eligieron rey. Andando el tiempo la elección se trueca en derecho hereditario, y en el Fuero General de Navarra se consigna el principio de que el hijo mayor herede el reino, sin perjuicio de que, cuando el rey ensanchase sus esta-

dos con la conquista de otros territorios, pudiera dejar éstos á cualquiera de sus hijos habidos de matrimonio legítimo. Desde Sancho *el Mayor* se regulariza la sucesión hereditaria sin exclusión de las hembras, y aun después de haber pasado la corona de Navarra á los reyes de Francia y hallándose establecida en ésta la *ley Sálica*, conservaron los navarros el derecho de suceder á favor de aquellas.

La autoridad de los reyes de Navarra, aun participando, como participaban, de las tres funciones, legislativa, administrativa y judicial, fué desde sus comienzos limitada, á juzgar por el fuero de Sobrarbe, tal como le reconstruyó y nos le ha trasmitido Jerónimo Blancas. "No es lícito al rey, dice, declarar el derecho sin consejo de los súbditos„—"Guárdese el rey de hacer la guerra, concertar la paz, estipular treguas, ni tratar cualquiera otro asunto de importancia sin el consentimiento de los señores.„—"Para que nuestras leyes ó libertades no sufran daño ni detrimento alguno haya un *juez medio*, al cual sea justo y lícito apelar del rey, si éste perjudicara á cualquiera, y para que pueda evitar las injurias, si por acaso alguna tratase de inferir á la república„ (1).

Para el ejercicio de la función ejecutiva en los pueblos nombraba el rey, á propuesta de los jurados y del concejo, *alcaldes de jurisdicción* con facultades administrativas y judiciales, aunque subordinadas éstas á las de los *alcaldes mayores*; y tanto para los asuntos de una como de otra clase, se dividió el territorio en *merindades* y éstas en *baylíos*. Al frente de las primeras estaban los *merinos*, quienes tuvieron á su cargo la ejecución de las sentencias de los alcaldes; en algún tiempo también, la recaudación de las rentas reales, y cuando la ne-

---

(1) Hé aquí el texto tomado de los *Comentarios* de Blancas, edición de Zaragoza de 1588:

In pace et justitia regnum regito, nobisque foros meliores irroganto.

E manu is vindicabunda dividuntor inter ricoshomines non modo, sed etiam inter milites ac infantiones. Peregrinus autem homo nihil inde capito.

Jura dicere regi nefas esto, nisi adhibito subditorum consilio.

Bellum aggredi, pacem inire, inducias agere, remve aliam magni momenti pertractare caveto rex, præterquam seniorum annuente consensu.

Ne quid autem damni detrimentive leges aut libertates nostræ patiantur, JUDEX QUIDAM MEDIUS *adesto, ad quem a rege provocare, si aliquem læserit, injuriasque arcere, si quas forsan reipublicæ intulerit, jus fasque esto.*

cesidad lo exigía, la defensa del territorio que les estaba encomendado. Funciones análogas á las de los merinos, pero con subordinación á éstos, tenían los *bayles* en sus baylíos.

El derecho de administrar justicia, que en Navarra, como en León y Castilla, correspondía al rey, lo ejercía respecto á los nobles por sí y acompañado de tres ricos-hombres ó infanzones, hasta que se creó el *tribunal de la corte* para juzgar á aquellos, y delegando en los llamados *alcaldes mayores*, por él nombrados, la jurisdicción de primera instancia sobre los labradores y ruanos. También cedían á veces los monarcas por privilegio especial, en favor de determinadas personas, la jurisdicción inferior é intermedia; pero reservándose siempre la justicia suprema, que sólo por excepción y en muy contados casos delegaron, haciéndolo en personas de la real familia.

En Aragón, desde el momento en que se constituyó con independencia de Navarra, aparece como forma de gobierno la monarquía hereditaria; pero, á diferencia de Navarra, tendió desde luego á la exclusión de las hembras, estableciéndose definitivamente por D. Jaime I la sucesión agnaticia absoluta que continuó sin interrupción hasta D. Fernando V, á pesar de los deseos contrarios de D. Pedro IV, que declaró heredera á su hija Dª Constanza, provocando la famosa guerra de la Unión suscitada por el infante D. Jaime, á quien apoyó el reino con energía por creer violada su constitución. El mismo D. Pedro IV, después de haber tenido descendencia masculina, sancionó en su testamento la sucesión agnaticia.

El carácter limitado del poder de los reyes aragoneses, aunque participando de las tres funciones, se deduce, además del fuero de Sobrarbe, común á Navarra y Aragón por el origen de éste: de la necesidad de que los reyes jurasen previamente, para ejercer su autoridad, la observancia de las leyes y el respeto á las libertades y á las instituciones patrias; del poderío de la nobleza y de las cortes, y de la institución del *Justicia mayor;* sin que sea necesario, para demostrar aquella limitación, recurrir á la célebre fórmula inventada, según D. Javier de Quinto, por el calvinista Francisco Hotman, modificada por Antonio Perez, propagada por el P. Luís Moreri y transcrita por William Robertson, si bien dudando de su autenticidad, en estos términos: *nos que cada uno valemos tanto como vos, y que juntos podemos más que vos, os ofrecemos obediencia, si mantenéis nuestros fueros y libertades, y sino, no.*

"El juramento, dice en sus *Discursos políticos* el escritor citado, que los antiguos Reyes de Aragón eran tenidos de prestar á los fueros del país en el acto de ceñir á sus sienes la Corona, se remonta hasta el origen de aquella Monarquía, hábilmente moderada por los jefes y caudillos que al resignar por bien de todos en una sola mano la dirección de la defensa común, procuraron conservar sus anteriores privilegios, y se precavieron prudentemente de toda arbitrariedad, así en el repartimiento del botín y de las tierras que se ganasen de los Arabes, como en el regimiento del Estado.„

"Este juramento, sin embargo, nacido de la forma electiva que prevaleció en el orígen de aquella, como de tantas otras Monarquías, y consecuencia natural de la legislación y tradiciones de los godos, cosas que más adelante demostraremos, era por aquellos tiempos tan común y tan sencillo, que ninguno de nuestros antiguos cronistas lo considera como extraordinario, ni hace jamás de él una mención particular que revele las desusadas dotes con que ha aparecido en algunos libros de autores sobradamente modernos para que su simple aserción merezca más fé que la de graves y contemporáneos escritores. Así es que á pesar de que historiadores y tratadistas antiguos hablan de aquel acto respetable innumerables veces, con mil motivos y ocasiones, nunca se trasluce de sus propias palabras indicación ni pensamiento alguno que ofrezca la más remota conexión ni analogía con la gravisima importancia democrática que la fórmula que combatimos le atribuye.„

Don José María Antequera, comparando el *Fuero de alzar Rey* con el pretendido juramento político de los reyes de Aragón, que la crítica ha rechazado, hace notar la contradicción entre las solemnidades de levantar al rey sobre el escudo sosteniéndole los ricos hombres; besarle la mano; ceñirse el rey su espada en señal de supremacía, y no poder ser armado aquel dia otro caballero en reverencia á su persona, y lo irrespetuoso de las palabras: *nos, que cada uno valemos tanto como vos, y juntos podemos más que vos;* contradicción que se opone también á la autenticidad de la pretendida fórmula. El *Fuero de alzar Rey*, segun lo transcribe el Sr. Antequera dice así: "Que se levante Rey en sedieylla de Roma, ó de Arzobispo, ó de Obispo, et que sea areido la noche de su vigilia et aya missa en la eglesia et offrezca pórpora et de su moneda, et dempues comulgue et al levantar suba sobre su escudo teniendo los ricos hombres, clamando todos tres veces: Real, Real, Real; entonz es-

panda su moneda ata C. solidos, et por dar a entender que ningún otro Rey terrenal no aya poder sobre ellos, cingasse eyll mismo con su espada que es asemblant de cruz, et no debe otro cabayllero ser fecho en aquel dia. Et los xij ricos hombres o savios deven jurar al Rey sobre la cruz et los Evangelios de curiarle el cuerpo, et la tierra, et el pueblo, et los fueros aiudurli a mantener fielmente, et deven besar su mano.„

Para el ejercicio del poder tenía el rey, como delegado y auxiliar en primer término, al *lugarteniente general* con un cargo especial de *gobernación* ó *procuración general*, que correspondía al príncipe heredero, cuando era mayor de 14 años. Al lugarteniente seguían: el *canciller*, para la custodia del sello y archivo real; el *condestable*, á quien pertenecía despues del rey el mando del ejército, y el *tesorero general*, á quien incumbía lo referente al tesoro público y cuidado de las rentas reales.

Entre estos altos funcionarios, que eran á la vez consejeros del rey, y los que administraban las ciudades no había en rigor otros intermedios; y también se hallaban á veces confundidas las facultades propias de la administración con las de la justicia en los funcionarios que ejercían autoridad á nombre de aquel.

La función judicial se ejercía en nombre del rey por sus *justicias* que se distinguían, según la opinión más aceptable, en *zalmedinas*, ó jueces ordinarios del rey en las capitales, y *alcaldes*, que lo eran de las villas; pero entre todas las instituciones judiciales descuella el Justicia llamado en un principio Juez Medio, despues Justicia Mayor, Justicia del Rey, Justicia de Zaragoza, el Justicia, y por último *Justicia de Aragón*, cuyo origen se hace subir por la mayoría de los escritores aragoneses al fuero de Sobrarbe, aunque sin determinar bien sus facultades. Como quiera, la institución del Justicia que consideraban como lazo de unión y de concordia en el Estado, como defensa contra toda opresión de los reyes ó de los ricos hombres, vengador de las injurias y de las violencias, y salvaguardia de las libertades, tuvo grandes preeminencias y atribuciones, principalmente en lo relativo á la justicia. El era, según Miguel del Molino, el juez peculiar en los actos del rey, pudiendo impedir que el primogénito ó el gobernador y su vicegerente y todos los demás jueces ordinarios ó delegados interviniesen en dichos actos, aunque con tal moderación en la forma que parecía obrar siempre en nombre del monarca y como si se apelara del rey ofuscado por la pasión al rey tranquilo y

sosegado, y sin que pudiera entenderse jamás que para cohibir ó acallar la ira del rey ó de sus oficiales se recurría á otra autoridad que á la real misma. Era tambien juez de las causas entre los ricos hombres, caballeros é infanzones, de las formadas á los que delinquían contra los fueros y en las cuestiones entre el fisco y los particulares; fallaba en concurrencia con las cortes en los juicios contra el rey y sus oficiales; era tribunal de alzada sobre todos los jueces ordinarios y reales, y pronunciaba las sentencias en las causas, pleitos y reclamaciones sometidos á las cortes ó cuyo conocimiento correspondía á éstas. Resolvía además las dudas que se suscitaban en la interpretación y aplicacion de los fueros y á él debían acudir para resolverlas los jueces inferiores; recibía juramento al rey, al primogénito y al lugarteniente general; era consejero nato de la corona, y declaraba si las cartas del rey ó del primogénito á sus oficiales eran *desaforadas* ó contrarias á las libertades del reino ó si debían obedecerse y procederse según ellas.

Los recursos que ante el Justicia de Aragón se concedían eran principalmente las firmas de derecho y la manifestación. *Firma de derecho* era la inhibición obtenida del Justicia contra toda persona, autoridad ó particular, que turbara en la posesión al firmante, previa la promesa solemne y caución dada por éste de *estar á derecho* ó á las resultas del juicio. Se decía *firmar de derecho* al acto de interponer el recurso pidiendo la inhibición; *firma inhibitoria*, á la providencia por la que se concedía, y *presidio de firmas* al conjunto de garantías con que se ponía á los demandados al abrigo de toda injusticia ó se amparaba en la posesión al despojado contra fuero. Estas firmas, conocidas con diversos nombres y obtenidas por distintas fórmulas, tendían á garantizar la propiedad contra toda agresión ó espoliación injusta. El recurso de la *manifestación* fué instituido para proteger á las personas contra la arbitrariedad ó tiranía; y era tal su eficacia que, según dice un escritor aragonés, puede salvar á un hombre, aun con la cuerda al cuello, pues en virtud de él podía un preso ó detenido sin forma de proceso ó por autoridad ó juez incompetente recurrir al Justicia, quien interponía su autoridad, arrancando al detenido contra fuero de manos del oficial ó juez arbitrario, aunque fuera el más alto, y haciéndole llevar á la *carcel* llamada *de los manifestados*, donde bajo la salvaguardia del Justicia pudiera esperar tranquilo el fallo que sobre su conducta recayese.

El Justicia era nombrado por el rey de entre los caballeros

para que, tomado de la nobleza media, pudiera estar en contacto y ser estimado por todas las clases sociales, y no podía ser destituido *ad nutum* ó por la sola voluntad del rey, aunque consintiera en ello el mismo Justicia, ni era válida la promesa de renunciar hecha por él antes ó despues de aceptado el nombramiento. Para su renuncia era preciso el consentimiento de las cortes, á las que con el rey correspondía exigirle, previo el correspondiente juicio, la responsabilidad por sus actos, siendo fuero, declarado por aquellas, "que la persona del Justicia de Aragón, aun por causa civil no puede seyer presa, ni presa detenida sino por mandamiento del Rey é de la Cort;„ privilegio que una ley más antigua hacía extensivo al lugarteniente, los seis notarios y los dos vergueros que el Justicia tenía como auxiliares principales.

Blancas, tomándolo del Obispo D. Vidal de Canellas, enumera los siguientes magistrados y funcionarios reales, como existentes en tiempo de D. Jaime I. El *mayordomo del rey*, que obtenía el principado en el juzgar y podía conocer indistintamente de todas las causas y querellas, tanto de los infanzones como de los demás, excepto de aquellas que estaban especialmente reservadas al rey; pero en el conocimiento de las causas debía acompañarse del justicia mayor del reino. Los *jueces delegados*, que el rey, cuando lo estimaba oportuno, nombraba especialmente para el conocimiento de una ó más causas. Los *jueces ordinarios*, instituidos por el rey en las ciudades y en las grandes villas reales para conocer, juzgar y resolver las causas de los habitantes en aquellas y en sus términos, así entre los infanzones, como entre los hombres de servicio ó de signo y los infanzones, ó al contrario. Los *zavalmedinas* ó *zalmedinas*, esto es, *vice-domini civitatum*, llamados así de *zaval*, señor, y *medina*, ciudad, en lengua arábiga, de la que se tomó aquel nombre: los *baiulos* ó *nutritores*, colectores de provisiones para la real familia y casa, y los *merinos*, que debían hacer los apremios ó exigir ejecutivamente el cumplimiento de los mandatos del rey y de las sentencias de los jueces. Los jueces ordinarios, una vez nombrados, solían serlo por toda su vida, á menos que el rey los removiera por alguna causa, y aunque en unos lugares se les llamó jueces y en otros alcaldes, la potestad y jurisdicción de unos y otros era la misma.

Había también *sobrejunteros*, sobre las *juntas* ó corporaciones populares, instituidos por el rey á manera de *paciarios*, cuyo cargo principal era convocar las juntas, gobernarlas y di-

rigir el pueblo armado, cuando se alzaba en *somatén*, procurando evitar daños y asegurar las vidas y haciendas de los ciudadanos.

"Estas magistraturas, dice Blancas, y algunas otras fueron en otro tiempo en vigor y, excepción hecha del mayordomo del rey, las demás se consideraban como menores. De su potestad y aun de su nombre, apenas queda vestigio actual; y los sobrejunteros ó paciarios fueron establecidos á semejanza de aquellos magistrados llamados por los godos *adsertores pacis*, destinados por la autoridad real para hacer la paz."

Cataluña erigida, según dijimos, en condado independiente por Wifredo *el Velloso*, reflejó en su constitución la fisonomía de los pueblos godo y franco de que procedía; pero en su monarquía prevalece el carácter patrimonial y de familia, debido al feudalismo francés, y es desde luego hereditaria la autoridad de sus condes. Las atribuciones principales de éstos, consignadas en los *Usajes*, fueron: dictar leyes; hacer justicia é indultar á los delincuentes; amparar á los vasallos contra los atropellos de los señores; reclutar ó hacer llamamientos para la guerra; mandar los ejércitos; acuñar moneda; imponer tributos y cobrarlos; conceder gracias, y velar por la seguridad é independencia del territorio, siendo en lo demás muy limitadas sus facultades administrativas por los derechos de los señores y pueblos.

Para el ejercicio de la jurisdicción real, pues la nobleza tenía la suya privilegiada, estaba dividido el territorio en distritos llamados *veguerías*, subdivididas en *bayliajes*. Los *vegueres*, ó vicarios, administraban justicia en aquellas, y tenían á sus ordenes á los bayles, que estaban al frente de los últimos. De los fallos dictados por los vegueres conocía en alzada un tribunal superior compuesto de nobles, prelados y jurisconsultos, que ejercía en última instancia la jurisdicción en nombre del monarca.

CAPITULO IV

PODER PÚBLICO BAJO LAS CASAS DE AUSTRIA Y DE BORBÓN

Reunidas las coronas de Aragón y de Castilla por el matrimonio de los Reyes Católicos y expulsados por completo los moros despues de la rendición de Granada, se realizó la unidad nacional y se constituyó definitivamente el Estado español, ensanchado muy luego con el descubrimiento del Nuevo Mundo, inaugurándose una era de grandeza para España, que había de colocarla á la cabeza de los pueblos de Europa en los reinados de Carlos I y de Felipe II.

El principio hereditario, consolidado ya antes en los diversos Estados unidos bajo el cetro de Doña Juana, sigue dominando sin interrupción en la concreción del poder público durante las dinastías de Austria y de Borbón, si bien la forma de sucesión, que desde las leyes de Partida admitía indistintamente á varones y á hembras, fué modificada al advenimiento de la última dinastía por Felipe V, su fundador, quien estableció la sucesión agnaticia importando de Francia, aunque reformada, la *ley sálica*, no sin oposición del Consejo de Castilla, por la pragmática de 10 de Mayo de 1713, ley V, tít. I, lib. III de la Novísima Recopilación. Carlos IV revocó esta ley restableciendo la de Partida, en virtud de petición de las Cortes en 1789; acuerdo que no llegó á públicarse por entonces, hasta que, hallándose en cinta y próxima ya al alumbramiento la reina María Cristina, esposa de Fernando VII, promulgó éste en 1830, y ante la eventualidad de no tener hijos varones, la resolución de su padre. La Constitución de 1812, promulgada por las Cortes

de Cádiz, estableció también la sucesión hereditaria sin distinción de varones y hembras, y todas las Constituciones posteriores han conservado la sucesión regular por el orden de primogenitura y representación.

El poder de los monarcas llegó á su más alto grado en esta época asumiendo por completo las tres funciones, hasta que se inició el periodo constitucional.

Los Reyes Católicos, que habían principiado á quebrantar la influencia de los nobles atrayéndolos hábilmente á su servicio y abrogándose la administración de las órdenes militares por la incorporación á la corona de sus maestrazgos con aquiescencia del Papa, uniformaron la administración y vigorizaron también la de justicia dando en ella participación á los letrados y estableciendo la Santa Hermandad que, armando á los pueblos contra los malhechores, sirvió además á los intereses de la corona constituyendo una especie de milicia permanente adicta al trono.

No prescindieron, sin embargo, los reyes Fernando é Isabel del concurso de las Cortes, entre las que son de mencionar las de Toledo, que prohibieron á los nobles levantar castillos y fortalezas, anularon sus excesivos privilegios y les obligaron á devolver á la corona los bienes usurpados.

Los monarcas posteriores tuvieron ya en muy poco el concurso de las Cortes, y ni aun las consultaron en muchos de aquellos asuntos que antes hubieran sido nulos, de haberse realizado sin su consentimiento. Así, unas veces disponen del trono sin oirlas siquiera; otras conciertan sus matrimonios; otras dividen el territorio nacional ó le hipotecan; otras declaran por sí y ante sí la edad en que sus hijos han de ser considerados mayores, ó nombran tutores y regentes del reino, y hasta renuncian la corona según les place, sin tener para nada en cuenta el deseo ni el interés de los pueblos. De este modo, la voluntad de los reyes fué, desde Carlos I y después de la derrota de los *Comuneros*, la única regla de sus actos en lo referente al régimen del Estado, hasta que el advenimiento del sistema constitucional ha hecho cambiar radicalmente la índole de la monarquía, con la separación de las funciones del poder, el reconocimiento de los organismos que integran el Estado y de su derecho á administrarse por sí, la proclamación de la independencia de los tribunales, la determinación de las atribuciones propias de los funcionarios y otras análogas, que han limitado grandemente el poder real.

La potestad legislativa, que durante esta época hasta la constitucional llegaron á tener en toda su plenitud los monarcas, la ejercían unas veces por sí directamente y otras por medio de las corporaciones de que se servían como auxiliares, en forma de *pragmáticas-sanciones*, decretos ó resoluciones reales á petición de las Cortes; *reales cédulas* que el rey ó el Consejo en su nombre expedía promulgando alguna ley, decreto ó providencia de carácter general ú otorgando alguna gracia, y *autos acordados* ó resoluciones tomadas generalmente por algun consejo ó tribunal supremo, principalmente el Real ó de Castilla, con asistencia de todas las secciones ó salas.

La función administrativa la ejercía el rey por medio del Consejo Real ó de Castilla, del que más adelante trataremos, del de la Real Cámara, del de Estado y otros, y muy especialmente por los *secretarios de Estado*, que lo eran los del Consejo, y los *del Despacho*, llamados así por que despachaban directamente con el rey, extendiendo y trasmitiendo sus órdenes y decretos.

El cúmulo de asuntos en que llegaron á entender estos secretarios, principalmente cuando se reunieron los dos cargos en una sola persona, hacía muy difícil su buen desempeño, y comprendiendo esto Felipe II, recomendó á su sucesor la creación de una junta que le auxiliara con su consejo; pero el favoritismo de los privados, apoderados por unos ú otros medios de la confianza de los reyes, no quiso desprenderse de ninguna parte de la autoridad que ejercían en nombre del monarca y les constituían en verdaderos ministros universales, árbitros de los destinos del Estado.

Sin embargo, el advenimiento de la casa de Borbón trajo á España la tendencia á organizar la administración pública á semejanza de la de Francia, y en su consecuencia Felipe V, por decreto de 11 de Julio de 1705 dividió en dos la secretaría del despacho universal, una para los asuntos de Guerra y de Hacienda y otra para todos los demás; y por otro decreto dado en Madrid en 30 de Noviembre de 1714, ley IV, tit. VI, lib. III, Novísima Rec., resolvió "dividir en diferentes Oficinas los negocios y materias que se tratan; separando en una los negocios de Estado, que incluyen las negociaciones y correspondencias con los otros Soberanos y con sus Ministros y los de los paises extranjeros, que han de correr y tratarse por una sola mano: por otra todo lo tocante á eclesiástico, y de Justicia y Jurisdicción de los Consejos y Tribunales: por otra, todos los negocios de Guerra;

y por otra los de Indias, y los pertenecientes á la Marina; y por otra los de Hacienda;„ creando para estos últimos "un Intendente universal de la Veeduría general de Hacienda,„ y añadiendo que "los cuatro sujetos, á quienes se repartan los expresados negocios, han de servir con el título y empleo de Secretario de Estado, cada uno del Departamento que se les señale.„

Esta organización, modificada con frecuencia por los monarcas posteriores, lo fué radicalmente en el presente siglo desde que la institución ministerial se ha considerado como un órgano esencial de las monarquías constitucionales ó representativas, necesario para hacer compatible la inviolabilidad del rey con la responsabilidad exigible por sus actos á los depositarios del poder.

Al frente de los antíguos reinos y de las provincias más importantes había *vireyes* ó *gobernadores,* que ejercían en nombre del rey la autoridad superior en el territorio. Los vireyes de Cataluña, Aragón y Valencia residían en las capitales respectivas de estos reinos.

Para el gobierno de las ciudades y pueblos de importancia se generalizó desde los Reyes Católicos la institución de los corregidores, con atribuciones administrativas y judiciales, aunque cambiado el nombre por el de *asistentes.* Felipe V estableció los *intendentes de provincia* encargándoles la gestión económica; y la Constitución de 1812 dispuso en su art. 324 que el gobierno político de las provincias residiera en un jefe superior nombrado por el rey en cada una de ellas; en cumplimiento de lo cual y en el año siguiente 1813 se establecieron los *jefes políticos,* cuyas atribuciones se encomendaron despues á los *subdelegados de Fomento, gobernadores civiles* ó *gobernadores de provincia,* pues, aunque los nombres han variado, las facultades correspondientes al cargo han sido casi las mismas, con más ó menos restricciones según el sistema político ó económico dominante en las regiones oficiales.

La justicia se administraba en nombre del rey por sus delegados, en provincias los *corregidores* y los *alcaldes de cuartel,* como tribunales inferiores, y las *chancillerías* y *audiencias,* cuyos ministros togados se llamaban *alcaldes del crimen* como superiores, y por el Consejo de Castilla ó Real, como supremo, sin perjuicio de la jurisdicción especial correspondiente á otros tribunales y consejos, como los de la Inquisición, del Almirantazgo, de las Ordenes, de Hacienda, de Estado, etc. En

Madrid seguía al Consejo de Castilla en la jerarquía judicial la *Sala de alcaldes de corte*, que conocía de las causas criminales y se componía de un ministro del Consejo, como gobernador, dos alcaldes, un fiscal y varios auxiliares. Sus ministros togados se llamaban *alcaldes de casa y corte*, y tenían, además de las atribuciones propias de los miembros del tribunal colegiado, otras especiales como *alcaldes de cuartel*. La jurisdicción civil estuvo en algún tiempo encomendada en Madrid á seis alcaldes llamados *del rastro*, de cuyas decisiones se apelaba al Consejo; y en algunas poblaciones había ciertos jueces ó tribunales especiales, como los *alcaldes de hijos-dalgo* en Madrid, Granada y Valladolid, y en esta última ciudad el *Juez mayor de Vizcaya*, tribunal de apelación para los vizcainos, constituido por un magistrado de la chancillería que formaba por sí solo tribunal.

Las reformas políticas iniciadas en España con la Constitución de 1812 han hecho cambiar profundamente la organización del poder, pues aunque, exceptuado un corto intérvalo, desde 1873 á 1875, ha subsistido legalmente y de hecho la forma monárquica, el principio de la separación de poderes consignado en todas las constituciones modernas ha mermado mucho la autoridad del rey, y las atribuciones que se han conservado como inherentes á la monarquía también han sufrido modificaciones más ó menos graves según el espíritu que ha informado los códigos fundamentales. Así, las Constituciones de 1812, 1837 y 1869, inspiradas en ideas más democráticas que las de 1845 y 1876, adoptaron disposiciones que tienden á cercenar las facultades del monarca distinguiéndose por aquellas tendencias la primera, que si bien no hizo una declaración de derechos tan terminante, ni consignó garantías tan claras y eficaces como la de 1869, proclamó ya de un modo explícito en su artículo 3° la soberanía de la nación y estableció además una sola cámara diciendo en el 27: "Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá„ (1).

---

(1) He aquí las disposiciones principales de las constituciones españolas respecto á organización del poder público y autoridad y facultades del monarca.

Constitución de 1812.—Art 14 El gobierno de la nación española es una Monarquía moderada hereditaria.

Art. 15 La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 16 La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.

Art. 17 La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley.

. . . . . .

Art. 142 El Rey tiene la sanción de las leyes.

Art. 143 Da el Rey la sanción por esta fórmula, firmada de su mano: «Publíquese como ley.»

Art. 144 Niega el Rey la sanción por esta fórmula, igualmente firmada de su mano: «Vuelva á las Cortes;» acompañando al mismo tiempo una exposición de las razones que ha tenido para negarla.

Art. 145 Tendrá el Rey treinta dias para usar de esta prerrogativa: si dentro de ellos no hubiere dado ó negado la sanción, por el mismo hecho se entenderá que la ha dado, y la dará en efecto.

Art. 146 Dada ó negada la sanción por el Rey, devolverá á las Cortes uno de los dos originales con la fórmula respectiva, para darse cuenta en ellas. Este original se conservará en el archivo de las Cortes, y el duplicado quedará en poder del Rey.

Art. 147 Si el Rey negare la sanción, no se volverá á tratar del mismo asunto en las Cortes de aquel año; pero podrá hacerse en las del siguiente.

Art. 148 Si en las Cortes del siguiente año fuere de nuevo propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto, presentado que sea al Rey, podrá dar la sanción, ó negarla segunda vez en los términos de los artículos 143 y 144; y en el último caso, no se tratará del mismo asunto en aquel año.

Art. 149 Si de nuevo fuere por tercera vez propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto en las Cortes del siguiente año, por el mismo hecho se entiende que el Rey da la sanción; y presentándose, la dará en efecto por medio de la fórmula expresada en el art. 143.

Art. 150 Si antes de que espire el término de treinta dias, en que el Rey ha de dar ó negar la sanción, llegare el día en que las Cortes han de terminar sus sesiones, el Rey la dará ó negará en los ocho primeros de las sesiones de las siguientes Cortes; y si este término pasare sin haberla dado, por esto mismo se entenderá dada, y la dará en efecto en la forma prescrita; pero si el Rey negare la sanción, podrán estas Cortes tratar del mismo proyecto.

. . . . . .

Art. 168 La persona del Rey es sagrada é inviolable, y no está sujeta á responsabilidad.

Art. 169 El Rey tendrá el tratamiento de Majestad Católica.

Art. 170 La potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto conduce á la conservación del orden público en lo interior, y á la seguridad del estado en lo exterior, conforme á la Constitución y á las leyes.

Art. 171 Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes:

1ª Expedir los decretos, reglamentos é instrucciones que crea conducentes para la ejecución de las leyes.

2ª Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.

3ª Declarar la guerra, y hacer ratificar la paz, dando después cuenta documentada á las Cortes.

4ª Nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales, á propuesta del Consejo de Estado.

5ª Proveer todos los empleos civiles y militares.

6ª Presentar para todos los obispados, y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de real patronato, á propuesta del Consejo de Estado.

7ª Conceder honores y distinciones de toda clase, con arreglo á las leyes.

8ª Mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales.

9ª Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga.

10 Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, y nombrar los embajadores, ministros y cónsules.

11 Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nombre.

12 Decretar la inversión de los fondos destinados á cada uno de los ramos de la administración pública.

13 Indultar á los delincuentes con arreglo á las leyes.

14 Hacer á las Cortes las propuestas de leyes ó de reformas que crea conducentes al bien de la nación, para que deliberen en la forma prescrita.

15 Conceder el pase, ó retener los decretos conciliares y bulas pontificias con el consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales; oyendo al consejo de Estado, si versan sobre negocios particulares ó gubernativos, y si contienen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al Supremo Tribunal de Justicia para que resuelva con arreglo á las leyes.

16 Nombrar y separar libremente los secretarios de Estado y del Despacho.

Art. 172 Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:

Primera No puede el Rey impedir bajo ningún pretexto la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen ó auxiliasen en cualquiera tentativa para estos actos son declarados traidores, y serán perseguidos como tales.

Segunda No puede el Rey ausentarse del reino sin consentimiento de las Cortes; y si lo hiciere, se entiende que ha abdicado la Corona.

Tercera No puede el Rey enajenar, ceder, renunciar ó en cualquiera manera traspasar á otro la autoridad real, ni alguna de sus prerrogativas.

Si por cualquiera causa quisiere abdicar el trono en el inmediato sucesor, no lo podrá hacer sin el consentimiento de las Cortes.

Cuarta No puede el Rey enajenar, ceder ó permutar provincia, ciudad, villa ó lugar, ni parte alguna, por pequeña que sea, del territorio español.

Quinta No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes.

Sexta No puede tampoco obligarse por ningún tratado á dar subsidios á ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes.

Séptima No puede el Rey ceder ni enajenar los bienes nacionales sin consentimiento de las Cortes.

Octava No puede el Rey imponer por sí directa ni indirectamente contribuciones, ni hacer pedido bajo cualquiera nombre ó para cualquier objeto que sea, sino que siempre los han de decretar las Cortes.

Novena No puede el Rey conceder privilegio exclusivo á personas ni corporación alguna.

Décima No puede el Rey tomar la propiedad de ningun particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella; y si en algun caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer, sin que al mismo tiempo sea indemnizado, y se le dé el buen cambio á bien vista de hombres buenos.

Undécima No puede el Rey privar á ningun indivíduo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna. El secretario del Despacho que firme la orden, y el juez que la ejecute, serán responsables á la nación y castigados como reos de atentado contra la libertad individual.

Solo en el caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey expedir orden al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar á disposición del tribunal ó juez competente.

Duodécima El Rey, antes de contraer matrimonio, dará parte á las Cortes, para obtener su consentimiento; y si no lo hiciere, entiéndase que abdica la Corona.

Art. 173 El Rey en su advenimiento al trono, y si fuere menor, cuando entre

á gobernar el reino, prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente:

«N. (aquí su nombre), por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas: juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y confesaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el reino: que guardaré y haré guardar la Constitución política y las leyes de la Monarquía española, no mirando en cuanto hiciere sino al bien y provecho de ella: que no enajenaré, cederé ni desmembraré parte alguna del reino: que no exigiré jamás cantidad alguna de frutos, dinero y otra cosa, sino las que hubieren decretado las Cortes: que no tomaré jamás á nadie su propiedad, y que respetaré sobre todo la libertad política de la nación, y la personal de cada individuo: y si en lo que he jurado, ó parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido, antes aquello en que contraviniere sea nulo y de ningún valor. Así Dios me ayude, y sea en mi defensa; y si no, me lo demande.»

Art. 174 El reino de las Españas es indivisible, y solo se sucederá en el trono perpétuamente desde la promulgación de la Constitución por el orden regular de primogenitura y representación entre los descendientes legítimos, varones y hembras, de las líneas que se expresarán.

Art. 175 No pueden ser Reyes de las Españas, sino los que sean hijos legítimos habidos en constante y legítimo matrimonio.

Art. 176 En el mismo grado y línea los varones prefieren á las hembras, y siempre el mayor al menor; pero las hembras de mejor línea ó de mejor grado en la misma linea, prefieren á los varones de línea ó grado superior.

Art. 177 El hijo ó hija del primogénito del Rey, en el caso de morir su padre sin haber entrado en la sucesión del reino, prefiere á los tios, y sucede inmediatamente al abuelo por derecho de representación.

. . . . . .

Art. 225 Todas las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el secretario del despacho del ramo á que el asunto corresponda.

Ningún tribunal ni persona pública dará cumplimiento á la orden que carezca de este requisito.

Art. 226 Los secretarios del despacho serán responsables á las Cortes de las órdenes que autoricen contra la Constitución ó las leyes, sin que les sirva de escusa haberlo mandado el Rey.

. . . . . .

Art. 242 La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente á los tribunales.

Art. 243 Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.

Art. 244 Las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes en todos los tribunales; y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas.

Art. 245 Los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

Art. 246 Tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes, ni hacer reglamento alguno para la administración de justicia.

. . . . . .

Art. 309 Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, compuestos del alcalde ó alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe político donde le hubiere, y en su defecto por el alcalde ó el primer nombrado entre estos, si hubiere dos.

. . . . . .

Art. 312 Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección en los pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpétuos de los Ayuntamientos, cualquiera que sea su título y denominación.

. . . . . .

Art. 324 El gobierno político de la provincia residirá en el jefe superior, nombrado por el Rey en cada una de ellas.

Art. 325 En cada provincia habrá una Diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior.

. . . . . .

Constitución de 1837.—Art. 12 La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

. . . . . .

Art. 44 La persona del Rey es sagrada é inviolable, y no está sujeta á responsabilidad. Son responsables los ministros.

Art. 45 La potestad da hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto conduce á la conservación del orden público en lo interior, y á la seguridad del Estado en lo exterior, conforme á la Constitución y las leyes.

Art. 46 El Rey sanciona y promulga las leyes.

Art. 47 Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde:

1ª Expedir los decretos, reglamentos é instrucciones que sean conducentes para la ejecución de las leyes,

2° Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.

3° Indultar á los delincuentes con arreglo á las leyes.

4° Declarar la guerra y hacer ratificar la paz, dando después cuenta documentada á las Cortes.

5° Disponer la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga.

6° Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias.

7° Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nombre.

8° Decretar la inversión de los fondos destinados á cada uno de los ramos de la administración pública.

9° Nombrar todos los empleados públicos y conceder honores y distinciones de todas clases, con arreglo á las leyes.

10 Nombrar y separar libremente los ministros.

Art. 48 El Rey necesita estar autorizado por una ley especial:

1° Para enajenar, ceder ó permutar cualquiera parte del territorio español.

2° Para admitir tropas extranjeras en el reino.

3° Para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especiales de comercio, y los que estipulen dar subsidios á alguna potencia extranjera.

4° Para ausentarse del reino.

5° Para contraer matrimonio, y para permitir que lo contraigan las personas que sean súbditos suyos y estén llamados por la Constitución á suceder en el trono.

6° Para abdicar la corona en su inmediato sucesor.

Art. 49 La dotación del Rey y de su familia se fijará por las Cortes al principio de cada reinado.

. . . . . .

Art. 51 La sucesión en el Trono de las Españas será según el orden regular de primogenitura y representación, prefiriendo siempre la linea anterior á las posteriores; en la misma línea el grado más próximo al más remoto: en el mismo grado el varón á la hembra, y en el mismo sexo la persona de más edad á la de menos.

. . . . . .

Art. 61 Todo lo que el Rey mandare ó dispusiere en el ejercicio de su autoridad, deberá ser firmado por el ministro á quien corresponda, y ningún funcionario público dará cumplimiento á lo que carezca de este requisito.

. . . . . .

Art. 63 A los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

. . . . . .

Art. 68 La justicia se administra en nombre del Rey.

Art. 69 En cada provincia habrá una Diputación provincial, compuesta del número de individuos que determine la ley, nombrados por los mismos electores que los diputados á Cortes.

Art. 70 Para el gobierno interior de los pueblos, habrá Ayuntamientos nombrados por los vecinos á quienes la ley conceda este derecho.

. . . . . .

Constitución de 1845.—Los artículos preinsertos de la Constitución de 1837 fueron transcritos á la de 1845, aunque con otra numeración, excepto el número 4° del art. 48 que se suprimió en la última, no exigiendo al Rey licencia para ausentarse del reino, y el número 5° del mismo artículo que se sustituyó por el artículo 47 de la de 1845, que dice así: «El Rey, antes de contraer matrimonio, lo pondrá en conocimiento de las Cortes, á cuya aprobación se someterán las estipulaciones y contratos matrimoniales que deban ser objeto de una ley.»

«Lo mismo se observará respecto del inmediato sucesor á la corona.»

«Ni el Rey, ni el inmediato sucesor pueden contraer matrimonio con persona que por la ley esté excluida de la sucesión á la corona.»

. . . . . .

Constitución de 1876.—Art. 18 La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

. . . . . .

Art. 48 La persona del Rey es sagrada é inviolable.

Art. 49 Son responsables los Ministros.

Ningún mandato del Rey puede llevarse á efecto si no está refrendado por un Ministro, que por solo este hecho se hace responsable.

Art. 50 La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto conduce á la conservación del orden público en lo interior y á la seguridad del Estado en lo exterior, conforme á la Constitución y á las leyes.

Art. 51 El Rey sanciona y promulga las leyes.

Art. 52 Tiene el mando supremo del Ejército y Armada, y dispone de las fuerzas de mar y tierra.

Art. 53 Concede los grados, ascensos y recompensas militares, con arreglo á las leyes.

Art. 54 Corresponde además al Rey:

Primero Expedir los decretos, reglamentos é instrucciones que sean conducentes para la ejecución de las leyes.

Segundo Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.

Tercero Indultar á los delincuentes con arreglo á las leyes.

Cuarto Declarar la guerra y hacer y ratificar la paz, dando después cuenta documentada á las Cortes.

Quinto Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias.

Sexto Cuidar de la acuñación de la moneda, en la que se pondrá su busto y nombre.

Séptimo Decretar la inversión de los fondos destinados á cada uno de los ramos de la Administración, dentro de la ley de Presupuestos.

Octavo Conferir los empleos civiles y conceder honores y distinciones de todas clases con arreglo á las leyes.

Noveno Nombrar y separar libremente á los Ministros.

Art. 55 El Rey necesita estar autorizado por una ley especial:

Primero Para enajenar, ceder ó permutar cualquiera parte del territorio Español.

Segundo Para incorporar cualquiera otro territorio al territorio Español.

Tercero Para admitir tropas extranjeras en el reino.

Cuarto Para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especiales de comercio, los que estipulen dar subsidios á alguna potencia extranjera y todos aquellos que puedan obligar individualmente á los españoles.

En ningún caso los artículos secretos de un tratado podrán derogar los públicos.

Quinto Para abdicar la corona en su inmediato sucesor.

Art. 56 El Rey, antes de contraer matrimonio, lo pondrá en conocimiento de las Cortes, á cuya aprobación se someterán los contratos y estipulaciones matrimoniales que deban ser objeto de una ley.

Lo mismo se observará respecto del inmediato sucesor á la corona.

Ni el Rey ni el inmediato sucesor pueden contraer matrimonio con persona que por la ley esté excluida de la sucesión á la corona.

. . . . . .

Art. 60 La sucesión al trono de España seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior á las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón á la hembra; y en el mismo sexo, la persona de más edad á la de menos.

. . . . . .

Art. 74 La justicia se administra en nombre del Rey.

. . . . . .

Art. 76 A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

. . . . . .

Art. 82 En cada provincia habrá una Diputación provincial, elegida en la forma que determine la ley y compuesta del número de individuos que ésta señale.

Art. 83 Habrá en los pueblos Alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados por los vecinos á quienes la ley confiera este derecho.

Art. 84 La organización y atribuciones de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos se regirán por sus respectivas leyes.

Estas se ajustarán á los principios siguientes:

Primero Gobierno y Dirección de los intereses peculiares de la provincia ó del pueblo por las respectivas corporaciones.

Segundo Publicación de los presupuestos, cuentas y acuerdos de las mismas.

Tercero Intervención del Rey, y en su caso de las Cortes, para impedir que las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos se extralimiten de sus atribuciones en perjuicio de los intereses generales y permanentes.

Y cuarto Determinación de sus facultades en materia de impuestos, á fin de que los provinciales y municipales no se hallen nunca en oposición con el sistema tributario del Estado.

. . . . . .

Constitución de 1869.—Esta Constitución, radicalmente democrática, después de declarar que «la soberanía reside esencialmente en la Nación de la cual emanan todos los poderes,» confería á las Cortes la potestad de hacer las leyes; depositaba en el monarca el poder ejecutivo; encomendaba el ejercicio del judicial á los Tribunales; y atribuía á los Ayuntamientos y Diputaciones la gestión de los intereses locales.

No declaraba sagrada la persona del Rey, pero sí inviolable, y además de las restricciones que la Constitución vigente impone al monarca, le exigía que estuviera autorizado por una ley para conceder amnistías ó indultos generales, para contraer matrimonio y para permitir que le contragesen las personas que, siendo súbditos suyos, tuvieran derecho á suceder en la corona.

Los demás preceptos de esta Constitución relativos á las facultades, ejercicio y trasmisión del poder real son iguales en la esencia á los de la vigente.

SECCIÓN VI

INSTITUCIONES POLÍTICAS

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS CONCILIOS DE TOLEDO

Entre las instituciones más notables de la historia patria figuran los Concilios toledanos, asambleas puramente religiosas en un principio, como continuación de los célebres Iliberitano, de Granada, el más antiguo entre todos los del mundo cuyas resoluciones han llegado hasta nosotros, y Cesaraugustano, de Zaragoza, celebrado en el año 380 contra la heregía de Prisciliano. Con este carácter puramente religioso se celebró en el año 400 el primero de los Concilios de Toledo, siendo de notar respecto al mismo, que antes de otra resolución se recibieron por él los cánones del de Nicea y que en él se declaró como dogma de fé que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, verdad no definida hasta entonces y aceptada siglos después en el Concilio lateranense cuarto por la Iglesia universal.

La conversión de Recaredo al catolicismo dió influencia social y política á estas asambleas; ya porque el fervor religioso del monarca quisiera darles intervención en los asuntos gra-

ves del Estado, ya porque necesitado aquel de apoyo y de consejo para gobernar con acierto, recurriera á los obispos, casi únicos depositarios del saber en aquellos tiempos, ó acaso también porque viera en esto un medio, como opinan algunos, de restaurar las antiguas asambleas germanas.

"Antes de Recaredo, dice el Sr. Montalván en su *Discurso de recepción en la Academia de la Historia*, los obispos católicos, reconocidos como legítimos pastores por la inmensa mayoría de los habitantes del país, no sólo eran tolerados, sino que á veces recibían también muestras de consideración de parte de los reyes arrianos. Alarico cuenta con ellos para la formación y aprobación de la *Ley romana*, por la que se han de regir los antiguos habitantes del territorio; Teudis les concede permiso para que anualmente puedan celebrar Concilio en Toledo;» y si algunos reyes ilustres, como Eurico y Leovigildo, les persiguen, culpa fué del intolerante fanatismo de estos sectarios, y acaso también debido á las inteligencias que algunos obispos, principalmente los de allende el Pirineo, sostenían con los reyes de la dinastía merovingia.

La monarquía visigótica, después de abjurado el arrianismo, no encuentra, pues, graves obstáculos para reconocer la superior ilustración de los príncipes de la Iglesia española, y el monarca puede suavemente y sin violencias hacer que cambie el aspecto de las asambleas religiosas llamadas Concilios, añadiéndoles un nuevo carácter por su intervención en la legislación y en el gobierno. No es por lo mismo necesario, ni aun racional, buscar el origen de los Concilios toledanos en las asambleas germánicas; al contrario, hay entre aquellos y éstas diferencias notables que arguyen origen y carácter distintos. Las asambleas de los pueblos germanos se reunían periódicamente, se ocupaban solamente de asuntos militares, ó á lo sumo de algunas causas muy graves é importantes, y á ellas asistían todos los hombres libres; mientras que los Concilios de Toledo no se celebraban en época fija, los asuntos que los ocupaban eran muy varios y á ellos concurrían únicamente los obispos y abades, y sólo en algunos casos y por designación del monarca los próceres ó magnates.

Menos puede admitirse, como han pretendido algunos escritores, entre ellos Martínez Marina, que los Concilios de Toledo hayan sido el remoto fundamento y origen del sistema representativo en España, aunque no sea tan aventurado afirmar que la transformacion paulatina de los Concilios primeros de la

reconquista hicieran surgir las Cortes de la Edad Media. Los asuntos que eran materia obligada de sus resoluciones ó acuerdos, el valor legal de éstos y la clase de personas que los constituían no permiten, sin embargo, confundirlos, ni aun afirmar su semejanza. Los Concilios se ocupaban con preferencia de lo relacionado con la religión y con la moral y casi nunca trataron de más asuntos públicos que los contenidos en el *tomo regio*, cuyo conocimiento les encomendaba el rey ó acerca de los que les pedía consejo; sus decisiones no tenían más eficacia legal ni más fuerza de obligar que la dependiente de la voluntad del monarca, y á ellos, como hemos dicho, asistían por derecho propio los prelados, y sólo por designación especial del rey, los magnates á quienes éste lo concedía, sin que conste en las actas de ningún Concilio, que el pueblo tuviera intervención en sus acuerdos, pues la fórmula *omni populo assentiente*, invocada por algunos para probar lo contrario, se entiende cuerdamente por la mayoría de los críticos que solo significaba el agrado con que la muchedumbre recibía, al hacerse públicas, aquellas resoluciones. Las Cortes de la Edad Media, con atribuciones propias especiales, se habían de reunir por necesidad para deliberar y acordar sobre algunos asuntos graves de que más adelante trataremos; era muy principalmente materia peculiar y de su exclusiva competencia la votación de impuestos; sus resoluciones en este asunto recababan autoridad y fuerza obligatoria conforme á las leyes del Estado y apesar en muchos casos de la voluntad regia, y si sólo estuvieron constituidas en un principio por la nobleza y el clero, su verdadera importancia comenzó con la entrada en ellas del *estado llano* por medio de los representantes ó procuradores de las ciudades. Dedúcese de aquí que el carácter de los Concilios fué predominante religioso por las personas que los constituían intrínsecamente, mientras que el de las Cortes fué siempre civil, y que, por los asuntos que unos y otras trataban, los Concilios pueden considerarse desde Recaredo como asambleas mixtas, y las Cortes como exclusivamente civiles y políticas; pero en todo caso, distintos esencialmente, aunque pudiera verse en éstas una evolución ó transformación de aquellos. De todos modos es innegable la influencia que ejercieron los Concilios en la marcha del Estado y en la legislación política, como lo prueba la simple lectura del Fuero Juzgo, muchas de cuyas leyes son fiel trasunto de los cánones conciliares. A esta clase pertenecen casi todas las del título primero ó preliminar que tratan de la elección de

los príncipes, de las cualidades que deben tener, del deber de gobernar al pueblo con piedad, de las personas que no deben ser reyes, de los que pretenden usurpar el reino viviendo el rey, del acatamiento y respeto que el pueblo le debe, de las penas en que incurren los clérigos y legos que eligen príncipe en vida de otro, etc.

La celebración de los Concilios se ajustaba á las solemnidades descritas en el IV toledano y en el *ordo celebrandi concilii* de la *Colección Canónica*. Mientras trataron asuntos puramente eclesiásticos, ó antes de la conversión de Recaredo, los convocaba el primado ó el metropolitano, y después el rey, conforme á la tradición de la Iglesia universal, cuyo primer Concilio convocó Constantino. Reunidos los obispos, hacían oración invocando las luces del Espíritu-Santo y, concluidas las preces, se leían los capítulos conciliares sobre la celebración de sínodos, terminando este acto preliminar con una exhortación del metropolitano para que los padres del Concilio discutiesen con libertad y deliberasen con rectitud. A continuación entraba el rey con su corte y, despues de orar, entregaba al Concilio el *tomo regio*, que contenía una protesta de su fé y la indicación de los asuntos que habían de ser objeto de deliberación; hecho lo cual y pedida su bendición al metropolitano, se retiraba, y entonces se abrian las puertas del templo para que los fieles pudieran oir la doctrina que se expusiera en el Concilio. Hechas despues rogaciones por tres dias, comenzaban las deliberaciones y terminadas éstas, firmaban los prelados por orden de antigüedad y, antes de separarse, aclamaban al príncipe, recibían la bendición del metropolitano y leían los cánones al pueblo. La deliberación sobre asuntos eclesiásticos competía exclusivamente al clero; en la de materias civiles tomaban también parte los que asistían al acto por designación del rey. La iniciativa correspondía al monarca que la ejercía por medio del tomo regio, y también á los obispos que podían someter al Concilio las cuestiones que estimaran convenientes. El rey unía la sanción civil á la religiosa confirmando las decisiones conciliares sobre asuntos eclesiásticos y daba ó no valor legal á las que versaban sobre materias civiles concediéndolas ó negándolas su aprobación.

Sobre la bondad de estas asambleas y su influencia en la suerte del Estado se discurre de diverso modo, y es bien estraño que escritores españoles y católicos censuren la intervención concedida á los obispos en el gobierno y legislación, ya como

Pacheco, considerando á Recaredo como innovador desdichado por haber introducido en la constitución de la monarquía el elemento teocrático que, según él, contribuyó á perderla más que ninguna otra causa, ya como Lafuente quien, deplorando aquella intervención, dice que, sobreponiéndose en ocasiones el cayado episcopal al cetro regio, pudo dudarse si eran los reyes ó los obispos los verdaderos soberanos; á lo que contesta Ghebart diciendo que "siempre que á la ilimitada autoridad de un hombre ó de muchos sobre el pueblo se le señalen reglas, se le deslinde la senda que ha de seguir y, sin mancillar la dignidad que ha de revestir el poder soberano, se procure aconsejarle, ilustrarle, elevarle, rodearle de nuevo esplendor é interponerse entre él y la débil muchedumbre; siempre que esto haga un cuerpo leal, poseido de tanto amor al rey como al pueblo, que así tenga valor para reprobar los desmanes del uno como las veleidades del otro, que á esto reuna una sabiduría que ha vencido los siglos, una prudencia suma, el historiador, el filósofo ha de aplaudir su obra, ya esté aquel compuesto del clero, de la nobleza ó del pueblo.„

Como autorizadas y contrarias á aquellas opiniones, conviene consignar también las de dos escritores extranjeros y protestantes. Gibbon atribuye á los obispos la tranquilidad, el orden y la estabilidad en el gobierno del Estado como consecuencia de la regularidad de la disciplina, y á los Concilios de Toledo, juntamente con la promulgación de algunas leyes ventajosas igualmente á reyes y súbditos, una influencia civilizadora sobre el carácter feroz é indomable de los bárbaros; y Guizot en su *Historia de la Civilización Europea* reconoce que en España la Iglesia es quien acomete la obra de restaurar la civilización y que los Concilios toledanos sustituyen aquí á las asambleas germánicas y á las reuniones de los guerreros, llevando en ellos la dirección é influyendo poderosamente en el gobierno los eclesiásticos, cuya mano se descubre en el conjunto erudito, sistemático y social de la legislación visigótica.

Muchos escritores españoles encomian tambien la benéfica influencia de estas asambleas. Según el marqués de Pidal, el clero católico reunido, en los Concilios toledanos é influyendo sobre el elemento germánico, logra dar fuerza á la monarquía, formar una nación de dos razas opuestas y enemigas, y dotarla de una legislación sabia y justa que adelantaba en dos ó más siglos al resto de Europa. El Sr. Colmeiro entiende que nadie pone en tela de juicio la bondad de aquella institución, y "en

efecto, dice, sería ceguedad notoria desconocer sus beneficios en cuanto á moderar las leyes y suavizar las costumbres de unos tiempos tan turbados y rigurosos. Nadie sino el clero tenía autoridad bastante para proteger al débil contra el fuerte, ni para dictar providencias humanas, ni para asentar el orden y la concordia entre gentes acostumbradas á vivir sin conocimiento de la autoridad y de la justicia.....Lo que hay verdaderamente de vicioso en los Concilios de Toledo es que, siendo la única barrera opuesta á la potestad del rey, no limitaban con eficacia bastante su autoridad, porque ni del espíritu, ni de las fuerzas del clero podían esperarse sino garantías morales, pues las positivas desaparecieron desde el cambio introducido en la composición de las asambleas visigodas.„ Por último, el Sr. Antequera, contestando á los que achacan á la influencia de los obispos el desastroso fin de la monarquía visigótica, escribe: "Que el lujo, la corrupción de las costumbres y el desbordamiento de los vicios traigan consigo la decadencia y ruina de los imperios, cosa es de todos sabida, y de que ofrece elocuentes testimonios la historia del mundo; pero que la intervención del elemento religioso en el poder civil produzca ese efecto, ni lo habíamos oido nunca ni se compadece con las enseñanzas de la historia..... ¿Con qué datos se justifica que la influencia de los obispos en el gobierno de la monarquía goda fué parte á enervar el espíritu belicoso del pueblo? ¿Se sabe que ellos tratasen de disuadir á los monarcas de sus proyectos de conquista y engrandecimiento, que pusiesen obstáculos á sus empresas militares, ó que se mezclasen en asuntos concernientes á la paz y la guerra, á la organización y disciplina de los ejércitos y á la defensa de las plazas? ¿O fué tal vez que sus escritos se encaminaron á amortiguar el entusiasmo del fuego patrio y á tornar en humilde y pacífico el ánimo varonil y esforzado del pueblo godo? Nada de esto sucedió. Si ha habido épocas en la historia de las naciones en que los prelados hayan tomado parte en empresas militares ó políticas, esto no se verificó en los tiempos de la monarquía goda. No puede, por lo tanto, acusarse á los obispos de que, dividido el país en bandos y parcialidades, desavenidos los ánimos, extragadas las costumbres, desguarnecidas las plazas y desorganizado el ejército, cayese la monarquía al empuje del huracán levantado en las arenas del Africa.„

CAPÍTULO II

DE LAS CORTES

Sin terciar en la contienda sobre el origen de las Cortes españolas, cuestión que, aun siendo de mucho interés bajo el aspecto histórico-crítico, no le reviste tan grande cuando, como al presente, se estudia dicha institución para conocer la influencia que ha ejercido en nuestro modo de ser político, y encomendando á los eruditos dilucidar si derivan ó no de los Concilios de la España goda ó arrancan de los celebrados en el siglo XI, entendemos que á muy poco de tener entrada en ellas el estado llano, esto es, á muy poco de constituirse en verdaderas Cortes, fué decisivo su concurso para acometer alguna empresa de entidad ó resolver cualquier negocio de importancia, y aceptamos, respecto á las de León y de Castilla, la opinión del señor Colmeiro, según el cual, si tales Cortes derivan de los Concilios del siglo XI, éstos á su vez pueden mirarse como el renacimiento de los Concilios toledanos; pero no hallamos razón bastante para asentir á la del señor Martínez Marina y otros escritores ilustres que han pretendido ver en nuestras antiguas Cortes el germen del sistema representativo moderno.

El carácter mixto de políticos y religiosos que desde Recaredo revistieron los Concilios toledanos, se ve asimismo en los primeros de la restauración, y claramente lo demuestra el de León de 1020 en sus palabras: *judicato ergo Eclesiæ judicii..... agatur causa regis, deinde populorum;* pero á medida que adelantaba la reconquista crecía en estas asambleas la autoridad

de los próceres, pues si el espíritu religioso y el natural deseo de engrandecimiento incitaba á los reyes á sostener la lucha contra los árabes, también es cierto que para ella necesitaban el auxilio de los nobles; y así se explica que la delegación ó comisión del monarca, título único de la nobleza para asistir á los concilios, se trocara después en derecho; que no había de excluirse de los asuntos que afectaban á los grandes intereses del Estado á quienes tan eficazmente contribuían á sostenerle y á acrecentar su poderío. Así también se comprende que en un principio asistieran únicamente á ellos los prelados y magnates y que sólo cuando las necesidades de la guerra y de la conservación de las fronteras; cuando, como dice D. Juán de Cueto en su *Discurso de recepción en la Academia de la Historia*, para asegurar la reconquista fué necesario repoblar el país con hombres capaces de manejar el arado y de esgrimir la espada en defensa de sus nuevos hogares; cuando para estimularlos se les otorgaron privilegios en los *fueros* y *cartas pueblas*, se les repartieron tierras, se les concedieron propiedades para los gastos del común, se les otorgó el derecho de nombrar sus jueces y concejales, y á la sombra de estos privilegios se desarrollaron la agricultura, la industria, las ciencias y las artes; entonces se formó el *estado llano* que, creciendo en importancia y en fuerza hasta poder servir á los reyes para contrarrestar la de los nobles y del clero, llegó también por la marcha natural de los sucesos á tener un puesto en las asambleas llamadas ya Cortes, donde se ventilaban los asuntos graves del Estado.

Tuvo lugar esta entrada durante el siglo XII: en Aragón, en las cortes de Borja de 1133; en Castilla, en las de Burgos de 1169 y en las de Carrión de 1188 convocadas por Alfonso VIII; en León, en las del mismo año reunidas por Alfonso IX; y en todos estos reinos, antes que en los Parlamentos de Inglaterra, de Alemania y de Francia, donde no entró el estado llano hasta el siglo siguiente en las dos primeras, y hasta el XIV en la última.

Concretándonos por el pronto á los reinos de León y de Castilla, formaron sus Cortes, desde el siglo XII, éstos *tres brazos*: el de los nobles, por la fuerza social que representaban, pero sin que pudieran asistir más que los llamados por el rey; el eclesiástico, por la tradición de los Concilios, por su virtud y saber y por ser también los prelados señores con especial jurisdicción, y el del estado llano, representado por los *procu-*

radores de las ciudades y villas, á que los reyes concedieron voto en Cortes.

Llevaba en éstas la voz de la nobleza la casa de Lara, en premio de la defensa que el conde D. Pedro hizo en las de Burgos de las exenciones nobiliarias contra el impuesto de cinco maravedises de oro que el rey D. Alfonso VIII pretendía de cada hidalgo: la vóz del clero correspondía al arzobispo de Toledo, quien hablaba en nombre de los demás arzobispos, obispos y abades que por su dignidad tenían asiento en ellas; y en cuanto al estado llano, se disputaron la prelación en la palabra los procuradores de Burgos y de Toledo hasta que el monarca resolvió, que para no mermar las prerrogativas de aquella, hablaría él mismo en nombre de ésta, y como tambien se discutiera entre las dos ciudades la preferencia en la colocación, mandó colocar para los de Toledo un banco frente al trono, conservando á los de Burgos el asiento á su derecha.

Para celebrar Cortes era necesaria la convocación y asistencia de los tres brazos; pero la voluntad del monarca fijaba el número de personas que habían de concurrir en representación de la nobleza y del clero, y otorgaba el privilegio del voto á las ciudades y villas que quería, sin perjuicio de convocar de entre éstas á las que estimaba conveniente y de conceder á las mismas Cortes más ó menos facultades según las circunstancias, siendo por tanto muy difícil hallar en sus actas hechos generales y permanentes para determinar su organización y atribuciones, y quedando ancho campo á los polemistas para tomar de ellas ejemplos en que fundar las opiniones más encontradas.

El nombramiento de los representantes ó procuradores de las ciudades y villas de voto en Cortes se hacía unas veces por *elección*, otras por *insaculación* y otras por *turno*. De cualquier modo, aunque la suerte era el más general, la designación recaía de ordinario en los alcaldes y regidores, y á veces en un regidor y un jurado, ó un caballero ó vecino principal, y cuando los nobles, por su influencia, ó los regidores, por haber llegado á ser perpétuo su oficio, vincularon los cargos de procuradores de las ciudades ó villas donde residían, se desnaturalizaron aquellos, convirtiéndose en representantes de los intereses de algunas familias, en su mayoría de la segunda nobleza, y no de los pueblos cuyos poderes tenían.

La elección, libre en un principio, fué también á veces bastardeada por la presión de los reyes, que llegaron hasta indicar las personas que habían de ser nombradas, á pretexto de impe-

dir luchas intestinas ó bandos en las poblaciones. A evitar discordias y á asegurar la libertad en la elección tendían, entre otros, los ordenamientos de D. Juán II transcritos en las leyes I, II y III, tít. VIII, lib. III de la Nov. Recopilación. "Los procuradores, dice la primera de citadas leyes, que Nos enviaremos á llamar para las nuestras Cortes, ordenamos, que sean enviados tales quales las ciudades y villas de nuestros Reynos entendieren que cumple á nuestro servicio, y al bien y pro comun de las dichas ciudades y villas; y que libremente los puedan elegir en sus Concejos, tanto que sean personas honradas, y no sean labradores ni sesmeros, y sean dos procuradores, y no más, de cada ciudad ó villa.„ En la segunda se manda, "que quando en la elección de los procuradores de Cortes que vinieren, hobiere discordia, que el conocimiento quede á nuestra merced, para lo ver y determinar qual ha de quedar;„ y en la tercera se prohibe, "que ninguno sea osado de ganar cartas de ruego ni mandamiento, nuestras ni del Príncipe nuestro caro y amado hijo, ni de otro Señor ni persona alguna, para que personas señaladas vengan por procuradores á las nuestras Cortes,„ sopena de perder, los que tal hicieran, "los oficios que tuvieren en las dichas villas y ciudades y que sean privados para siempre de ser procuradores, porque las dichas ciudades libremente elijan y envíen los dichos procuradores.„

Por la lectura de estas leyes se comprende que el cargo de procurador de Cortes fué codiciado y que, para obtenerle, se recurría á la influencia y á la intriga, como sucede en los modernos tiempos, y á juzgar por otras del mismo título y libro, también eran á veces objeto de tráfico tales oficios, habiendo sido necesario que las leyes IV y XII prohibieran expresamente comprar y vender las procuraciones de Cortes.

Los poderes de los procuradores fueron amplios ó restringidos á voluntad de los pueblos; pero sin que bajo pretexto ni excusa alguna pudieran traspasar los límites del poder, tanto que, si surgía alguna duda ó se suscitaba alguna cuestión no prevista en las instrucciones que con el acta ó poder se entregaba á los designados, tenían éstos que suspender su voto hasta consultar á las poblaciones sus comitentes, y ejemplos ofrece la historia, como el tan conocido de Rodrigo Tordesillas, ahorcado por los segovianos, para probar que solían pasarlo mal los procuradores que por capricho, interés ó miedo se apartaban de los poderes recibidos. La limitación de éstos constituía á los procuradores en mandatarios y no en verdaderos re-

presentantes de los pueblos; más no por esto solo ha de censurarse tal restricción, que al fin y al cabo evitaba muchos abusos por parte de los procuradores, y servía también á éstos para escudarse contra la influencia y presión que sobre ellos se intentara, invocando la obligación de atemperarse á sus instrucciones. Así lo comprendieron los reyes al mandar, como lo hizo Felipe IV, que los poderes que las ciudades y villas dieran á sus procuradores fueran amplios, generales y sin restricciones; exigiendo además que los procuradores jurasen no haber recibido instrucciones secretas, ni prometido cumplirlas.

Para atender á los gastos de la procuración é indemnizar á los procuradores de los perjuicios sufridos por el abandono de sus intereses propios les pagaban los concejos el llamado *salario de procuración*, hasta que, ó ya porque la situacion precaria de las poblaciones no les permitiera sin gran dificultad levantar esta carga, ó porque su espíritu mezquino apreciase en más el gasto actual, que una representación para la defensa de sus intereses permanentes, ó porque la influencia de los procuradores fuera menguando á medida que crecía la autoridad de los reyes, lo cierto es que algunas ciudades dejaron de mandar sus procuradores y que se redujo el número de ciudades de voto en Cortes, conservándolo únicamente las más poderosas y facultándose á las demás para que pudieran conferir á cualquiera de aquellas sus poderes. Esto bastardeaba naturalmente la institución aumentando el prestigio de las unas á espensas de las otras, así como tambien acrecentó mucho el poder real, con merma de la independencia de los procuradores, el que los reyes tomaran sobre sí el aposentarlos y mantenerlos durante su estancia en la Corte, pagarlos el salario de procuración y hacerles dádivas y mercedes, contra lo que clamaron los pueblos y trataron de evitar cuidando de que los nombramientos recayesen en personas de riqueza y de valía y no en las que por un modo ú otro dependieran de la corona en razón de sus oficios. Sin embargo, las peticiones que en tal sentido formularon varias veces las Cortes, tuvieron poco éxito contestándolas los reyes con la evasiva acostumbrada de que no *convenía hacer novedad*, cuando no estaban dispuestos á acceder á los deseos de los pueblos.

Para asegurar la independencia y el decoro de los procuradores, se dictaron varios ordenamientos principalmente por los reyes que con el apoyo de los populares pudieron robustecer su autoridad enfrente de las pretensiones de la nobleza. Ya

en la Partida II, ley IV, tit. XVI, se garantiza la seguridad individual de los procuradores, aunque no de un modo especial y concreto, al decir: "Vienen los omes á la corte del Rey..... algunos dellos vienen de su grado: e otros por premia. E los que vienen por premia son aquellos, que llama el rey por sus cartas o por sus mandaderos..... Onde dezimos que todos estos deuen venir seguros, ellos e sus cosas: e ninguno non se deue atreuer a matarlos, nin a ferirlos, nin a prenderlos, nin a deshonrarlos, nin a tomarles ninguna cosa de lo suyo por fuerza. E esta segurança deuen auer dende el dia en que salieren de su casa, fasta que lleguen a ella..... Onde quien les fiziere mal en la manera que de suso dicha es, faria aleue, porque quebrantaria segurança del rey, por cuyo mandado viniessen a el.„

Siguiendo la política de su madre Dª María de Molina, que fomentando el estado llano y concediendo franquicias y privilegios á las ciudades y villas, pudo triunfar de tantos obstáculos como encontró durante su regencia, Fernando IV otorgó á los procuradores de las Cortes celebradas en Medina del Campo que fueran seguros en sus personas y bienes, desde que salieran hasta que volvieran á sus casas y que los atentados contra las personas de las procuradores fueran castigados con muerte y confiscación de bienes; á lo que añadió D. Pedro I la prohibición contenida en la ley V, tit. VIII, lib. III de la Novísima Recopilación, que tiende á evitar toda clase de ataques, aun indirectos á la inviolabilidad de los procuradores. "Mandamos, dice, que las nuestras Justicias de la nuestra Corte, no conozcan de las querellas y demandas que ante ellos dieren de los dichos procuradores durante el tiempo de su procuración, fasta que sean tornados á sus tierras, ni sean apremiados á dar fiadores, y si algunos hobieren dado, sean sueltos: lo qual mandamos se guarde así, salvo por las nuestras rentas, pechos y derechos, ó por maleficios ó contratos que en nuestra Corte hicieren, despues que á ella vinieren, ó si contra alguno hobiera seido antes dada sentencia en causa criminal;„ y D. Juán I, atendiendo al decoro de los procuradores ordenó que "los nuestros procuradores de las ciudades y villas y lugares que á nuestras cortes vinieren por nuestro mandado, sean dadas convenibles posadas en nuestra Corte.„ (Ley VI, tit. y lib. citados); disposición confirmada por D. Carlos y Dª Juana en Toledo, según la ley VII siguiente: "Mandamos, que quando por nuestro mandado se hobiere de llamar á Cortes, que se dé término convenible en

que puedan venir los procuradores á ellas; y que los procuradores que así vinieren, sean bien tratados y aposentados.„

Los privilegios é inmunidades de los procuradores fueron, no obstante, de nombre en muchos casos, principalmente cuando los reyes se estimaron poderosos en grado bastante para prescindir del concurso de las Cortes y aun para despreciar sus acuerdos.

La convocación á Cortes se hacía por el rey ó, en su nombre y durante su menor edad, por los tutores y regentes del reino, mandando al efecto á los nobles, eclesiásticos y procuradores cartas convocatorias en que se fijaba el día y el lugar de la reunión á voluntad del rey, no siendo plaza fuerte ni estando fuera del reino. No había plazo fijo dentro del cual hubieran de convocarse las Cortes, ni los reyes quisieron nunca establecerlo, no obstante las reiteradas peticiones que se hicieron en tal sentido, siguiéndose en esto como única regla, y no siempre cumplida, la de consultarlas en los negocios árduos y graves, según la promesa hecha por Alfonso IX en las Cortes de León de 1188, al decir: "He prometido no hacer guerra, paz ni alianza sin el ayuntamiento de los prelados, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo guiarme;„ regla ampliada á todos los asuntos graves por D. Juán II en las Cortes de Madrid de 1419, según la ley II, tít. VII, lib. VI de la Nueva Recopilación, no inserta en la Novísima. "Por que en los hechos árduos, dice, de nuestros Reinos, es necesario consejo de nuestros súbditos, i naturales, especialmente de los Procuradores de las nuestras Ciudades, Villas, i lugares de los nuestros Reinos; por ende ordenamos, i mandamos que sobre los tales fechos grandes i arduos se hayan de ayuntar Cortes, i se faga con consejo de los tres Estados de nuestros Reinos, segun que lo ficieron los Reyes nuestros progenitores.„

No falta quien, fundándose en la petición de las Cortes de Valladolid de 1313 á los tutores de Alfonso XI, pretende que desde entonces debían convocarse cada dos años; pero, aparte la escasa fuerza del argumento en el terreno legal, de hecho siguió siendo potestativa en los reyes su convocación sin más limitaciones que las exigencias económicas desde que la intervención de las Cortes fué necesaria para imponer y cobrar pechos y servicios.

Las Cortes, para ser generales, habían de estar formadas por los tres brazos, si bien bastaba la convocatoria, puesto que muchos nobles y prelados dejaron de asistir varias veces, lo que

se explica por el menor interés que para ellos tenían estas asambleas que, ni servían para aumentar su fuerza y poder, sobre todo desde la entrada del estado llano, ni les importaban gran cosa las deliberaciones sobre los impuestos que no los comprendían por ser clases exentas. También en ocasiones dejaron de concurrir los procuradores de algunas ciudades, ya por desavenencias entre las varias comarcas, ya por imposibilidad material de los llamados, ó por conveniencia de los mismos reyes que, recelosos de obtener los servicios y pechos que demandaban de las Cortes generales, utilizaban cualquier pretexto para convocar las particulares, naturalmente menos fuertes y enérgicas que aquellas.

Reunidos los tres brazos que componían las Cortes generales en el lugar señalado al efecto, exhibían al presidente sus cédulas de convocatoria y actas de nombramiento respectivamente los prelados, nobles y procuradores y prestaban juramento de fidelidad al rey y de guardar secreto; se exponían después por el rey ó por el presidente en su nombre los motivos de la convocatoria y los asuntos que sometía á la deliberación de las Cortes, hecho lo cual, se separaban los tres brazos para tomar cada uno de ellos aisladamente sus acuerdos, aunque tambien se reunían á veces cuando así lo disponía el rey. Ocupaba de ordinario la presidencia el canciller mayor del rey con su asistente y un letrado, y más adelante el gobernador del Consejo asistido de cinco ministros del mismo y Cámara de Castilla, ante quien presentaban los poderes para que los examinase y aprobase y á quien entregaban el cuaderno de peticiones para que lo comunicara al rey y trasmitiera después sus respuestas.

La deliberación, una vez constituidas las Cortes, principiaba por los asuntos expuestos por el rey ó á su nombre por el presidente; resueltos los que, se trataba de todos los demás considerados importantes por iniciativa de las Cortes y que habían de ser objeto de sus peticiones al monarca. El cuaderno de peticiones, formado algunas veces por los tres brazos, lo fué más comunmente por el de procuradores, puesto que, segun dijimos, los impuestos ó servicios, á que por lo general se referían, importaban muy poco á las clases exentas del clero y de la nobleza.

Las sesiones eran secretas y estaba prohibido á los extranjeros, cualquiera que fuera su cargo, asistir á ellas. Su duración dependía del tiempo que se empleaba en discutir y otorgar los servicios y en examinar y votar las proposiciones que

habían de formar el cuaderno de peticiones; pero ordinariamente, ni pasaba de seis meses, ni bajaba de uno, mientras se tuvo en algo el prestigio de las Cortes, pues, andando el tiempo, ni los reyes se cuidaron mucho de convocarlas, ni aun convocadas, les hacían caso ni se acordaban de ellas, siendo á veces su interminable duración causa de gastos insoportables para los pueblos, de tedio y cansancio para los procuradores y de debilidad para las Cortes

Cuales fueran las atribuciones de éstas ha sido objeto de viva controversia, pues mientras unos escritores, deseosos de encontrar para el régimen representativo un ilustre abolengo en nuestras antiguas instituciones, las suponen dotadas de atribuciones análogas ó casi iguales á las de las Cortes modernas y una participación eficaz en la formación de las leyes, otros, por el contrario, entienden que, ni llegaron á ser jamás verdadera representación nacional, puesto que la voluntad del rey daba á los prelados, nobles y ciudadanos que quería el derecho de asistir, ni ejercían tampoco la potestad legislativa solas ni juntamente con el rey, excepto en materia de impuestos.

Acerca de la potestad legislativa, es indudable que nunca fué inherente á las Cortes, ni á la institución conciliar, origen remoto de éstas, pues si bien es cierto que en algunos Concilios, los de León de 1020 y de Coyanza de 1050 por ejemplo, se hallan frases como las de "ordenamos, mandamos, decretamos, constituimos, etc „ también lo es que en los mismos se dice que tales preceptos, decretos y constituciones fueron dados por mandato del rey. No negamos que por voluntad y promesa explícita del monarca Alfonso XI, ya citada, se considerase necesario el *consejo* de los obispos, próceres y hombres buenos para las decisiones reales en asuntos tan graves como la guerra, la paz ó las alianzas con otros pueblos; pero el consejo no es el acto imperativo de la voluntad, ni puede deducirse de aquí, como parece pretenderlo el Sr. Colmeiro, el origen de la potestad legislativa de las Cortes; sin que baste á reforzar su argumento el texto tomado de las de León de 1208, pues las palabras *consensu universorum* no significan que este consentimiento fuese precisamente la causa de la ley, ni tampoco que fuera necesario para su existencia, pudiendo, por el contrario, indicar solo un asentimiento ó expresión anticipada del agrado con que habría de ser recibida aquella. Corroboran más nuestra opinión las palabras *hanc legem edidi,* donde aparece claro que el monarca era quien dictaba la ley; y aunque el or-

denamiento de D. Juán I en las Cortes de Briviesca de 1387 otorgase que "los fueros valederos, e leyes, e ordenamientos que non fueren revisados por otros, non sean perjudicados, si non por ordenamientos fechos en Cortes„ esto no significa que el monarca se despojara de la plenitud de la potestad legislativa, ni que reconociese ó concediese ésta á las Cortes, pudiendo entenderse llanamente como una restricción que él mismo ponía á su ejercicio respecto á solos aquellos ordenamientos ó leyes, que por haber sido hechos con el concurso, petición ó consejo de las Cortes, eran bien quistos por los pueblos. Más parece demostrar el poder legislativo de éstas, la fórmula usada por los reyes desde mediado el siglo xv, cuando, al dictar una disposición de carácter general, decían: "quiero que haya fuerza e vigor de ley bien ansí como si fuera fecha e promulgada en Cortes;„ pero lejos de significar tal fórmula un reconocimiento ó confesión por los monarcas de que las Cortes hubieran ejercido la potestad legislativa, prueba que los reyes legislaban en tales casos y podían hacerlo sin el concurso de aquellas, y cuando más, significaba un deseo de que los pueblos acogiesen los reales preceptos con el mismo agrado que si hubieran sido dictados á petición de sus mandatarios.

El negar á las Cortes de León y de Castilla la potestad legislativa, no quiere decir que los reyes tuvieran siempre en poco su intervención en los asuntos del Estado, ni que los pueblos se resignasen á ver que se prescindía de su concurso. De la estima de los reyes es prueba el ordenamiento de D. Juán II, citado arriba é inserto en la Nueva Recopilación; y de la importancia que los pueblos daban á esta institución, lo son las reiteradas protestas de las Cortes para que se las convocase y su repetida intervención en las cuestiones de sucesión á la corona, jura del inmediato sucesor, designación de tutores, aprobación de capitulaciones matrimoniales, abdicaciones, renuncias, etc.

Pero donde se ve clara la necesidad de la intervención, y aun de la manifestación explícita de la voluntad, y el poder de las Cortes es en lo relativo á impuestos. Y la existencia de este derecho se comprueba, sin necesidad de recurrir á crónicas ni referencias menos auténticas, aunque sea mucho más antiguo, por los ordenamientos de Alfonso XI (1367), Enrique III (1393), Juán II (1420) y Carlos I (1523), á que se refiere la ley I, título VII, lib. VI, citados, de la Nueva Recopilación: "Los Re-

BIBLIOTECA CASTILLA Y LEÓN

yes nuestros progenitores, dice, establecieron por Leyes i Ordenanzas, fechas en Cortes, que no se echassen, ni repartiessen ningunos pechos, ni servicios, pedidos, ni monedas, ni otros tributos nuevos, especial, ni generalmente en todos nuestros Reinos, sin que primeramente sean llamados á Cortes los Procuradores de todas Ciudades, i Villas de nuestros Reinos, i sean otorgados por los dichos Procuradores, que á las Cortes vinieren.„

En Navarra no empiezan las Cortes hasta la muerte de Alfonso I, *el Batallador*, pues, no aceptando los navarros la elección de Ramiro II, hecha en las Cortes de Borja en 1134, reunieron otras en Pamplona y en ellas nombraron rey á García Ramírez, separándose Navarra de Aragón.

Los elementos ó brazos de que se componían las Cortes navarras, fueron análogos á los de las de León y Castilla: el de la *nobleza*, ricos-hombres, infanzones y caballeros á quienes el rey había concedido este derecho con carácter de hereditario; el *eclesiástico*, obispos, abades, priores y otras dignidades á las que iba anejo tal cargo; y el *popular*, procuradores de las ciudades, villas y lugares que por fuero ó privilegio tenían voto.

La designación de procuradores se hacía también en unos lugares por suerte y en otros por elección: los poderes, asimismo limitados, los constituían en mandatarios y no en representantes; pero gozaban por todo el tiempo que duraban las Cortes de inmunidad, acaso mayor que los de Castilla.

La convocatoria correspondía al monarca; pero no era arbitraria, pues debía reunir las Cortes, en un principio, cada año ó cuando la gravedad de los asuntos lo exigiera; después cada dos, y á medida que la autoridad real creció á expensas de la importancia de las Cortes, la reunión de éstas fué menos frecuente, llegando hasta pasar seis años sin verificarse.

La apertura se hacía por el rey en forma parecida también á la de las leonesas y castellanas, exponiendo las causas de la convocatoria y los asuntos que habían de ser objeto de deliberación, excitándolas á que votaran los mayores subsidios posibles y retirándose después, para que hubiera libertad en las deliberaciones. Los tres brazos deliberaban juntos bajo la presidencia del obispo de Pamplona; pero votaban separadamente, y aunque en un principio era bastante, para resolver, el voto conforme de dos brazos, como el tercero ó disidente resultara de ordinario perjudicado y aun oprimido por los otros dos, y esta opresión se sufriera alternativamente por unos y

otros, llegó á considerarse necesaria la unanimidad de los tres brazos para la validez de los acuerdos.

Las principales atribuciones de las Cortes navarras eran: recibir al rey, al subir al trono, el juramento de fidelidad á las leyes y fueros; conocer de los agravios inferidos á los fueros y privilegios, pudiendo pedir la nulidad de las providencias origen de aquellos y oponer una resistencia pasiva para conseguir la reparación debida, absteniéndose de tratar cualquier otro asunto hasta conseguirla, é intervenir en el ejercicio de la función legislativa, presentando al rey proposiciones ó pedimentos que por la sanción real adquirían fuerza obligatoria. Esto, sin embargo, no autoriza para afirmar, como algunos escritores, que la potestad legislativa residiera en las Cortes, tanto menos, cuanto que el rey podía, según los mismos confiesan, negar su sanción aun sin exponer razón alguna, y votar toda clase de impuestos, así ordinarios como extraordinarios, designándose unos y otros con el nombre de *donativos voluntarios*, sin duda para no dar ocasión ni pretexto á que en tiempo alguno pudieran exigirse como obligatorios sin consentimiento de las Cortes.

En el tiempo intermedio de unas á otras Cortes, nombraban estas una comisión de los tres brazos, llamada *Diputación permanente*, encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y observancia de los fueros, reposición de contrafueros, recta administración del patrimonio real y otros asuntos de carácter económico. Presidía esta comisión con voto de calidad en los empates el diputado eclesiástico, y á fines del siglo próximo pasado cambió el nombre por el de Diputación foral y se ampliaron sus funciones, tanto en el orden político como en el administrativo y judicial.

En Aragón las Cortes que, según los *Comentarios* de Blancas, fueron *particulares* ó peculiares del territorio aragonés, y *generales* ó comunes á los tres reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, se compusieron al principio de solos tres órdenes: el *patricio* ó de los nobles, formado por los ricos-hombres y barones; el *eqüestre*, de los caballeros ó mílites y de los infanzones; y el *cívico y municipal*, de las universidades de las ciudades, villas y villeros ó lugares. Los nobles podían asistir á las Cortes aunque no fueran convocados y, según concesión real y del reino, ser representados por sus procuradores, derecho extensivo á las hembras de linaje de rico-hombría que tuvieran propiedad en Aragón ó fueran señoras de vasallos. Los

menores de edad pertenecientes á la nobleza podían también ser representados en las Cortes por sus guardadores. Los caballeros ó nobles de segunda clase habían de asistir personalmente sin poder ser representados por procurador; pero, si se omitía convocarlos, podían reclamar el derecho de asistir. Las universidades de las ciudades, villas y lugares que tenían voto en Cortes, pues no todas gozaban de este derecho, eran representadas por procuradores elegidos por los vecinos, y sus poderes les habían de ser conferidos con posterioridad á la convocatoria, sin consignar en ellos, por lo general, instrucciones de carácter imperativo. A estos tres órdenes se añadió, hacia el año 1300, el *eclesiástico*, compuesto del arzobispo de Zaragoza, de los obispos, cabildos, abades y comendadores, siendo por tanto desde aquella fecha cuatro los órdenes que tenían voto en Cortes, á los que se llamó *brazos del reino*.

Estos cuatro brazos debían ser convocados particularmente por las *cartas de llamamiento*, en las que el rey indicaba sucintamente el objeto de la convocatoria y fijaba el día y lugar para la reunión, de donde, una vez principiadas las sesiones, no podían ser trasladadas las Cortes por la sola voluntad del rey sin el consentimiento de aquellas. Sin embargo, cuando no se habían constituido, podía el rey por sí mandar que continuasen en otro lugar. Esta continuación había de hacerse por el Justicia de Aragón ó por su lugarteniente, á quienes podía el rey mandar que las continuasen en el lugar que le pareciese bien.

Las Cortes aragonesas se celebraban cuando los reyes lo juzgaban oportuno. En un principio habían de reunirse cada año en la ciudad de Zaragoza; pero por una ley dada en 1307 con asentimiento de todos los brazos, se estableció que se celebraran cada dos años en el día de Todos los Santos y en cualquiera ciudad ó villa, según viera el rey ser conveniente. Después, para evitar que las Cortes se reunieran en lugares pequeños é incómodos, se dispuso que no pudieran convocarse en lugar menor de cuatrocientas casas ú hogares. Según Molino, ni la reina ni el lugarteniente del rey podían convocar Cortes generales, y si alguna vez lo dispensaron éstas, no fué sin la protesta de que no ocurriese en lo futuro. La apertura no podía prorrogarse más allá de cuarenta días después de la convocatoria.

Llegado el día de la apertura y constituidas las Cortes, solían los reyes explicar detallada y minuciosamente la causa de la convocatoria en un discurso llamado *Propositio Curiarum*, al

que se contestaba en el acto por las Cortes. Como ejemplo se transcribe en los *Aragonensium rerum comentarii* el pronunciado en el año 1398 por el rey D. Martín en las de Zaragoza celebradas en el templo de La Seo y la contestación del arzobispo D. García en nombre de los cuatro brazos, quien, "concludiendo sobre las coxas por el dito Señor Rey propuestas, dixo, que los del Regno se retenian deliberacion. E que hauida aquella, farian tal repuesta, que seria seruicio de nuestro Señor Dios, e del señor Rey, e bien de la cosa publica del dito Regno; e tal que el dito señor Rey se deuria contentar.„

Los cuatro brazos se constituían y deliberaban con independencia: cada uno elegía su secretario y nombraba los *habilitadores* para revisar los títulos y poderes y resolver sobre las admisiones, sin perjuicio del derecho concedido á los interesados para recurrir en alzada ante el Justicia, quien, oidos el rey y los cuatro brazos, fallaba en definitiva sobre la admisión ó exclusión; los *promovedores*, á quienes incumbía proponer los asuntos, no obstante el derecho que cada uno de los asistentes tenía de someter á la deliberación de las Cortes, entregándolas al efecto á los promovedores, las proposiciones que estimara oportunas; los *tratadores*, encargados de facilitar la inteligencia entre los distintos brazos y con los delegados del rey por medio de transacciones mutuas, y los *examinadores de greujes*, que decidían si el conocimiento de los agravios, de que se acudía en queja á las Cortes, competía á éstas, al Justicia ó á los tribunales ordinarios.

Para la validez de los acuerdos era necesaria la unanimidad, excepto en los asuntos de justicia, nombramientos y reclamaciones de agravios; y tanta importancia se atribuía al voto de todos y de cada uno de los diputados, que el disentimiento de uno solo, siempre que hubiera asistido á todas las sesiones, equivalía al *veto* de los antiguos romanos y bastaba para impedir la ejecución de aquellos. Este requisito parece á primera vista que habría de dificultar la marcha expedita de las Cortes y la posibilidad de las soluciones; pero fuese porque el patriotismo y la sensatez de los aragoneses se abstuviera de suscitar cuestiones caprichosas, ó porque se acudiera al expediente de nombrar comisiones facultadas para resolver, excluyendo de las mismas á los disidentes, lo cierto es que la multitud de leyes y resoluciones tomadas por las Cortes aragonesas prueban que no se abusó en ellas de fuero tan singular.

Entre las atribuciones de estas Cortes figura en primer

término la participación en el ejercicio de la función legislativa que compartían con el rey. A este propósito dice Blancas: "nuestros mayores no quisieron que se instituyeran reglas generales para todos sin la intervención de los órdenes descriptos y mediantes los sufragios de todos. De donde nació aquel derecho perpetuo en nosotros de que las leyes comunes y públicas no pudieran hacerse ni derogarse sin el voto de todo el pueblo reunido en Cortes y con el asentimiento del rey. Y por esto la costumbre de encabezar toda ley con estas ó parecidas palabras: *El Señor Rey de voluntad de las Cortes estatuye y ordena,* que indica la necesidad de que para el valor legal de los preceptos jurídicos de carácter general concurriesen juntamente la voluntad del reino y la sanción real.

Tambien conocían las Cortes de los *greujes* ó reclamaciones de agravios inferidos por el rey ó sus oficiales y por el Justicia ó sus lugartenientes á los particulares, corporaciones y brazos, ó por unos brazos á otros. La corporación ó el brazo á que pertenecía el querellante solía hacer suya la reclamación y, admitida la querella por los examinadores, se resolvía, ya por comisionados de los cuatro brazos y del interesado en el término fijado por el Justicia, ya por las Cortes con el rey, en cuyo caso pronunciaba la sentencia el Justicia, ó por éste, oyendo á las Cortes, con exclusión del rey por ser parte en el asunto cuando el agravio había sido inferido por él ó por sus oficiales. La preferencia atribuida á la sustanciación de greujes era tal, que se podía protestar de nulo todo lo hecho y no se disolvían legalmente las Cortes hasta la resolución de aquellos.

Era asimismo atribución de las Cortes el otorgamiento de impuestos y servicios extraordinarios, que antíguamente sólo consistían en tropas porque consideraban los pecuniarios propios de moros y judíos, y que no autorizaban hasta que el soberano había satisfecho á cuantas quejas y demandas le dirigieran: recibían al rey juramento de fidelidad á las leyes; y tenían, por último, intervención en los asuntos graves concernientes á la guerra y á la paz, remoción de ministros perjudiciales, administración de la real casa y otros de carácter internacional, aunque solo afectasen á particulares, como concesión de naturalizaciones.

Para que en el intervalo de unas Cortes á otras no sufrieran menoscabo los fueros y privilegios ni perjuicios los intereses generales, nombraban las Cortes de su seno, al principio por elección, despues por suerte, una especie de comisión per-

manente compuesta de ocho miembros, dos por cada brazo, que se llamaron *diputados del reino,* "por que este los había diputado ó designado, para representarle, con asistencia de los cuatro brazos.„ A esta Diputación estaba encomendado velar por la observancia de los fueros y por la buena gestión económica en lo que afectaba á los intereses generales del Estado; perseguir en derecho á los que atentaran contra las libertades públicas, fuesen particulares ó funcionarios, inclusos el regente del reino y el lugarteniente del Justicia; utilizar la fuerza pública cuando la necesitara para cumplir su cometido, y disponer de los fondos públicos en circunstancias apremiantes sin más restricciones que la de obtener el asentimiento del Justicia si la cantidad pasaba de tres mil libras, pues, no excediendo de esta suma, podía invertirla libremente sin sujeción á rendir cuentas.

Como natural consecuencia de sus grandes atribuciones estaba sujeta la Diputación del Reino á graves responsabilidades, pudiendo cualquiera denunciar á los diputados y sostener la acusación ante el Justicia, cuando por malicia ó negligencia hubieran faltado á los deberes que su alta representación les imponía.

Antes de terminar las Cortes sus tareas celebraban solemnemente, como la de apertura, la última sesión, llamada de la *celebración del solio.* En ella, sentado el rey sobre su trono con la mayor pompa y aparato y rodeado del Justicia y de todos los órdenes reunidos para confirmar y sancionar los acuerdos de las Cortes, promulgaba las leyes nuevas, cuyo respeto y cumplimiento juraban él, los representantes de los brazos y el Justicia, reduciéndolas á formal escritura para perpetua memoria los notarios de las Cortes, ó *magistri scripturæ comitialis,* con lo cual se daban por concluidas las sesiones y por disueltas las Cortes.

Las de Cataluña, en las que no aparece el estado llano hasta los tiempos de D. Jaime I, constaron ya definitivamente desde D. Pedro III de tres brazos ó estamentos, llamados después *condiciones:* el eclesiástico, el militar y el real. El *eclesiástico* se componía de los obispos y representantes de los cabildos, abades y priores con jurisdicción bajo la presidencia del arzobispo de Tarragona. El *militar,* formado por los duques, marqueses, condes, vizcondes, barones y demás nobles de linaje con señorío territorial, tenía por presidente al duque de Cardona. El *real,* que algunos llaman también *comunal,* estaba constituido por todas las ciudades y villas de realengo bajo la presi-

dencia de Barcelona. En el seno de la condición ó brazo militar surgieron pronto dos bandos formados respectivamente por la primera y segunda nobleza; pero, aunque los caballeros, generosos y hombres de paratje llegaron á obtener un privilegio por el cual se les autorizaba para formar brazo ó condición distinta, de hecho no llegó á constituirse con independencia tal que sus acuerdos se tomaran en cuenta con separación de los primeros y sus votos se computaran aparte en las resoluciones de las Cortes.

La convocación de éstas se hacía por medio de cartas dirigidas á los presidentes de cada brazo, quienes á su vez la notificaban á las personas y corporaciones con derecho á asistir, fijando el lugar para la celebración de las Cortes, que había de ser un pueblo del principado no menor de doscientas casas. Solo por necesidad urgente y previa autorización ó poder especial del monarca y consentimiento explícito de las Cortes podía convocarlas la reina, como lugarteniente, ó el príncipe heredero. Por disposición de Pedro III debían reunirse todos los años; pero después se amplió á tres años el tiempo dentro del cual habrían de ser convocadas y muchas veces pasaron mayores intérvalos sin que se reunieran. El monarca abría las Cortes y presidía personalmente á los miembros de los tres brazos, que estaban sentados y con la cabeza cubierta, y únicamente en casos especiales podía delegar en el príncipe heredero la presidencia de las convocadas por aquel.

Muy semejantes las Cortes catalanas á las aragonesas, nombraban al constituirse nueve *habilitadores*, tres por cada brazo, que en unión con otros nueve nombrados por el monarca, examinaban los poderes decidiendo, previo examen de las pruebas ofrecidas y sin ulterior recurso, sobre la admisión de los interesados. A continuación se elegían los *promovedores*, que iniciaban á nombre de los tres brazos las cuestiones que habían de ser objeto de deliberación, sin perjuicio de la iniciativa que también correspondía á los *tratadores* nombrados por el monarca para exponer su voluntad á las Cortes y para trasmitirle en nombre de los tres brazos las representaciones convenientes. La resolución de los greujes ó reclamaciones de agravios competía á una comisión que decidía sin apelación y estaba compuesta de diez y ocho indivíduos, nombrados mitad por el monarca y mitad por los tres brazos.

Como las de Aragón, tenían las Cortes de Cataluña participación en el ejercicio de la función legislativa á tal punto,

que el monarca no podía sin su intervención dictar leyes ó disposiciones de carácter general, ni expedir carta alguna, ordenanza ó estatuto contra privilegios, constituciones y capítulos de Corte. Se llamaban *constituciones* las leyes hechas á propuesta del monarca con aprobación de los tres brazos: *capítulos ó actos de Corte*, las súplicas ó propuestas de los tres brazos, ó de uno solo sin oposición de los demás, aprobadas por aquel; y *usajes* ó constituciones indistintamente, las leyes promulgadas antes de 1283, referentes á la celebración y solemnidades de las Cortes.

Eran asimismo atribuciones de las Cortes catalanas conceder servicios en hombres y dinero, velar por la observancia de los fueros y por la reparación de agravios, intervenir en el arreglo de la casa real y recibir el juramento de cada nuevo soberano.

Había también en Cataluña la institución llamada *Diputación ó General de Cataluña* que residía en Barcelona y estaba compuesta de tres individuos, uno por cada brazo, ordinariamente un abad mitrado ó dignidad capitular por el eclesiástico, un caballero por el militar y un ciudadano honrado de Barcelona por el real, á los que se agregaban tres oidores de cuentas, dos asesores y un abogado fiscal. Además de las atribuciones que como alto tribunal le correspondían, con poder para exigir á los diputados la responsabilidad consiguiente á su gestión, representaba á las Cortes en los intérvalos de unas á otras; cuidaba del cumplimiento y observancia de los usajes y leyes hechos en Cortes, y del reparto y recaudación de impuestos, llegando en esto á tal grado su independencia y jurisdicción, que ni los delegados del rey, ni el rey mismo, podían mezclarse en este asunto ni excusarse de pagar el tributo que les correspondiera; administraba las rentas públicas y era defensor nato de la tierra, poseyendo al efecto galeras propias, disponiendo de la gente armada y pudiendo en tiempo de guerra decretar levas ó reclutamientos y prestar auxilios de hombres y dinero, y, así como el Consejo de los Ciento, dice Gebhardt, tremolaba el pendón de Santa Eulalia, la Diputación hacía ondear desde las ventanas de su palacio la bandera de San Jorje.

Para prevenir y corregir los abusos que los miembros de la Diputación pudieran cometer en el ejercicio de tan ámplias facultades, estaban sujetos á censura y juicio de residencia. En éste juicio público, llamado de *visita*, podían todos los ciudadanos denunciar los abusos de los diputados, examinar sus cuen-

tas, impugnarlas, formular quejas de agravios y exigir la reparación correspondiente.

Tales fueron, en resumen, la organización y atribuciones principales de nuestras antiguas Cortes, y por lo dicho se puede comprender la parte que les cupo en el gobierno y marcha política de los Estados cristianos en la época de la reconquista. Su influencia, sin embargo, principió á decaer visiblemente desde el advenimiento de la casa de Austria, siendo de notar, entre los hechos que reflejan más claramente la pérdida de su importancia, la derrota de los Comuneros de Castilla y de las Germanías de Valencia; la ausencia de la nobleza, que no volvió á ser llamada á juntas generales del reino desde que el Emperador la despidió de las Cortes de 1538 por haberle negado el tributo de la *sisa*; la apatía con que los pueblos venían ya de antes mirando el nombramiento de procuradores, cuya utilidad era dudosa por la escasa eficacia de sus gestiones y por los gastos de procuración que pesaban sobre el erario municipal; el haber tomado sobre sí el tesoro público el pago de dichos gastos, lo que hizo mirar á los procuradores como dependientes de los reyes y no como representantes de los pueblos; y el desprecio que de las mismas hicieron los monarcas á medida que se robusteció el poder real, sin cuidarse de convocarlas sino para facilitar la cobranza de tributos, haciéndose innecesarias cuando bastó para esto la Comisión de Millones que, si bien en un principio representó á las Cortes, como elegida por ellas, se modificó después con la agregación de algunos ministros del Consejo y cambió por completo de índole y carácter al ser incorporada, con aquiescencia de las mismas Cortes, al Consejo de Castilla. Aún menos necesaria fué para los reyes la reunión de Cortes desde que los corregidores, nombrados por aquellos, pudieron conseguir directamente de los concejos la prórroga de servicios ó impuestos; así que sólo ya cuando algún acontecimiento notable ó el interés político ó dinástico lo exigía fueron convocadas las Cortes. Tal sucedió en tiempo de Felipe V con las reunidas en Zaragoza y Barcelona para atraer á los partidarios del archiduque; con las de Madrid, para la jura del príncipe don Luis, y con las celebradas en la misma villa en 1713 para renunciar ante ellas los derechos al trono de Francia y sancionar la pragmática, modificando las leyes de Partida sobre sucesión á la corona; pero sin que estas Cortes ni las que despues, muy pocas veces, se celebraron en el pasado siglo, recobraran sus atribuciones en materia legislativa y de impuestos, hasta que la

invasión francesa y la ausencia del rey Fernando VII determinó la reunión de las famosas del año 1812, que iniciaron la genuina representación nacional con facultades claras y precisas, compartiendo con los reyes el poder legislativo y ejerciendo una influencia directa en los negocios graves del Estado (1).

---

(1) Las disposiciones más notables de nuestros modernos códigos políticos, relativas á organización y facultades de las Cortes, son las siguientes:

Constitución de 1812.—Art. 27 Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.

Art. 28 La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios.

Art. 29 Esta base es la población compuesta de los naturales que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles, y de aquellos que hayan obtenido de las Cortes carta de ciudadano, como también de los comprendidos en el artículo 21.

. . . . . .

Art. 34 Para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia.

Art. 35 Las juntas electorales y de parroquia se compondrán de todos los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la parroquia respectiva, entre los que se comprenden los eclesiásticos seculares.

. . . . . .

Art. 38 En las juntas de parroquia se nombrará por cada doscientos vecinos un elector parroquial.

. . . . . .

Art. 41 La junta parroquial elegirá á pluralidad de votos once compromisarios, para que estos nombren el elector parroquial.

. . . . . .

Art. 59 Las juntas electorales de partido se compondrán de los electores parroquiales que se congregarán en la cabeza de cada partido, á fin de nombrar el elector ó electores que han de concurrir á la capital de la provincia para elegir los diputados de Cortes.

. . . . . .

Art. 78 Las juntas electorales de provincia se compondrán de los electores de todos los partidos de ella, que se congregarán en la capital, á fin de nombrar los diputados que le correspondan, para asistir á las Cortes como representantes de la nación.

. . . . . .

Art. 91 Para ser diputado de Cortes se requiere ser ciudadano que esté en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, y que haya nacido en la provincia ó esté avecindado en ella, con residencia á lo menos de siete años, bien sea del estado seglar ó del eclesiástico secular; pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la junta ó en los de fuera de ella.

Art. 92. Se requiere además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios.

. . . . . .

Art. 95 Los secretarios del despacho, los consejeros de Estado, y los que sirven empleos de la Casa real, no podrán ser elegidos diputados de Cortes.

Art. 96 Tampoco podrá ser elegido diputado de Cortes ningún extranjero, aunque haya obtenido de las Cortes carta de ciudadano.

Art. 97 Ningún empleado público nombrado por el gobierno podrá ser elegido diputado de Cortes por la provincia en que ejerce su cargo.

. . . . . .

Art. 104 Se juntarán las Cortes todos los años en la capital del reino, en edificio destinado á este solo objeto.

Art. 105 Cuando tuvieren por conveniente trasladarse á otro lugar, podrán hacerlo, con tal que sea á pueblo que no diste de la capital más que doce leguas, y que convengan en la traslación las dos terceras partes de los diputados presentes.

. . . . . .

Art. 131 Las facultades de las Cortes son:

Primera. Proponer y decretar las leyes, é interpretarlas y derogarlas en caso necesario.

Segunda. Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y á la Regencia, como se previene en sus lugares.

Tercera. Resolver cualquiera duda, de hecho ó de derecho, que ocurra en el orden á la sucesión á la corona.

Cuarta. Elegir Regencia ó Regente del reino cuando lo previene la Constitución, y señalar las limitaciones con que la Regencia ó el Regente han de ejercer la autoridad real.

Quinta. Hacer el reconocimiento público del Príncipe de Asturias.

Sexta. Nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitución.

Séptima. Aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios, y los especiales de comercio.

Octava. Conceder ó negar la admisión de tropas extranjeras en el reino.

Novena. Decretar la creación y supresión de plazas en los tribunales que establece la Constitución, é igualmente la creación y supresión de los oficios públicos.

Décima. Fijar todos los años á propuesta del Rey las fuerzas de tierra y de mar, determinando las que se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra.

Undécima. Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional en todos los ramos que los constituyen.

Duodécima. Fijar los gastos de la administración pública.

Décimatercia. Establecer anualmente las contribuciones é impuestos.

Décimacuarta. Tomar caudales á préstamo en caso de necesidad sobre el crédito de la nación.

Décimaquinta. Aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias.

Décimasexta. Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos.

Décimaséptima. Establecer las aduanas y aranceles de derechos.

Décimaoctava. Disponer lo conveniente para la administración, conservación y enajenación de los bienes nacionales.

Décimanona. Determinar el valor, peso, ley, tipo y denominación de las monedas.

Vigésima. Adoptar el sistema que se juzgue más cómodo y justo de pesos y medidas.

Vigésimaprima. Promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos que la entorpezcan.

Vigésimasegunda. Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía, y aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias.

Vigésimatercia. Aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del reino.

Vigésimacuarta. Protejer la libertad política de la imprenta.

Vigésimaquinta. Hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del despacho y demás empleados públicos.

Vigésimasexta. Por último, pertenece á las Cortes dar ó negar su consentimiento en todos aquellos casos y actos, para los que previene la Constitución ser necesario.

. . . . . .

Art. 157 Antes de separarse las Cortes, nombrarán una diputación, que se llamará diputación permanente de Cortes, compuesta de siete individuos de su se-

no, tres de las provincias de Europa, y tres de las de Ultramar, y el séptimo saldrá por suerte entre un diputado de Europa y otro de Ultramar

Art. 158 Al mismo tiempo nombrarán las Cortes dos suplentes para esta diputación, uno de Europa y otro de Ultramar.

Art. 159 La diputación permanente durará de unas Cortes ordinarias á otras.

Art. 160 Las facultades de esta diputación son:

Primero. Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta á las próximas Cortes de las infracciones que haya notado.

Segundo. Convocar á Cortes extraordinarias en los casos prescritos por la Constitución.

Tercero. Desempeñar las funciones que se señalan en los artículos 111 y 112.

Cuarto. Pasar aviso á los diputados suplentes para que concurran en lugar de los propietarios; y si ocurriese el fallecimiento ó imposibilidad absoluta de propietarios y suplentes de una provincia comunicar las correspondientes órdenes á la misma, para que proceda á nueva elección.

Art. 161 Las Cortes extraordinarias se compondrán de los mismos diputados que forman las ordinarias durante los dos años de su diputación.

Art. 162 La diputación permanente de Cortes las convocará con señalamiento de día en los tres casos siguientes:

Primero. Cuando vacare la Corona.

Segundo. Cuando el Rey se imposibilitare de cualquiera modo para el gobierno, ó quisiere abdicar la Corona en el sucesor; estando autorizada en el primer caso la diputación para tomar todas las medidas que estime conveniente, á fin de asegurarse de la inhabilidad del Rey.

Tercero. Cuando en circunstancias críticas y por negocios árduos tuviese el Rey por conveniente que se congreguen, y lo participare así á la diputación permanente de Cortes.

Art. 163 Las Cortes extraordinarias no entenderán sino en el objeto para que han sido convocadas.

. . . . . .

Las constituciones posteriores á la de 1812, coinciden en lo esencial respecto á organización y facultades de las Cortes, por lo que sólo transcribimos los artículos de la de 1876, vigente; pero sí notaremos las principales diferencias que hay entre ésta y las anteriores.

Constitución de 1837.—Art. 14 El número de los senadores será igual á las tres quintas partes de los diputados.

Art. 15 Los senadores son nombrados por el Rey, á propuesta, en lista triple, de los electores que en cada provincia nombran los diputados á Cortes.

. . . . . .

Art. 19 Cada vez que se haga elección general de diputados, por haber espirado el término de su encargo, ó por haber sido disuelto el Congreso, se renovará por orden de antigüedad la tercera parte de los senadores; los cuales podrán ser reelegidos.

Art. 20 Los hijos del Rey y del heredero inmediato de la Corona son senadores á la edad de 25 años.

Art. 21 Cada provincia nombrará un diputado á lo menos por cada 50.000 almas de su población.

Art. 22 Los diputados se elegirán por el método directo, y podrán ser reelegidos indefinidamente.

. . . . . .

Art. 25 Los diputados serán elegidos por tres años.

. . . . . .

Art. 27 Si el Rey dejare de reunir algún año las Cortes antes del 1º de Diciembre, se juntarán precisamente en este día; y en el caso de que aquel mismo año concluya el encargo de los diputados, se empezarán las elecciones el primer domingo de Octubre para hacer nuevos nombramientos.

. . . . . .

Art. 37 Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán pri-

mero al Congreso de los diputados; y si en el Senado sufrieren alguna alteración que aquel no admita despues, pasará á la sanción real lo que los diputados aprobaren definitivamente.

. . . . . .

Art. 40.....Segunda. Resolver cualquiera duda de hecho ó de derecho que ocurra en el orden á la sucesión á la Corona.

. . . . . .

Constitución de 1845.—Art. 14 El número de Senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey.

. . . . . .

Art. 17 El cargo de Senador es vitalicio.

. . . . . .

Art. 24 Los Diputados serán elegidos por cinco años.

. . . . . .

Constitución de 1869.—Art. 38 Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, á saber: Senado y Congreso Ambos Cuerpos son iguales en facultades, excepto en los casos previstos en la Constitución.

Art. 39 El Congreso se renovará totalmente cada tres años. El Senado se renovará por cuartas partes cada tres años.

Art. 40 Los Senadores y Diputados representarán á toda la Nación, y no exclusivamente á los electores que los nombraran.

Art. 41 Ningun Senador ni Diputado podrá admitir de sus electores mandato alguno imperativo.

. . . . . .

Art. 58.....Quinto. Nombrar y separar libremente los Ministros del Tribunal de Cuentas del Reino, sin que el nombramiento pueda recaer en ningún Senador ni Diputado.

. . . . . .

Constitución de 1876.—Art. 19 Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados.

Art. 20 El Senado se compone:

Primero. De Senadores por derecho propio.

Segundo. De Senadores vitalicios nombrados por la corona.

Tercero. De Senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en la forma que determine la ley.

El número de los Senadores por derecho propio y vitalicios no podrá exceder de 180.

Este número será el de los Senadores electivos.

. . . . . .

Art. 23 Las condiciones necesarias para ser nombrado ó elegido Senador podrán variarse por una ley.

Art. 24 Los Senadores electivos se renovarán por mitad cada cinco años, y en totalidad cuando el Rey disuelva esta parte del Senado.

Art. 25 Los Senadores no podrán admitir empleo, ascenso que no sea de escala cerrada, títulos ni condecoraciones, mientras estuviesen abiertas las Cortes.

El Gobierno podrá, sin embargo, conferirles dentro de sus respectivos empleos ó categorías, las comisiones que exija el servicio público.

Exceptúase de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo el cargo de Ministro de la Corona.

Art. 26 Para tomar asiento en el Senado se necesita ser español, tener 35 años cumplidos, no estar procesado criminalmente ni inhabilitado en el ejercicio de sus derechos políticos, y no tener sus bienes intervenidos.

Art. 27 El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las juntas electorales, en la forma que determine la ley. Se nombrará un Diputado á lo menos por cada 50.000 almas de población.

Art. 28 Los Diputados se elegirán y podrán ser reelegidos indefinidamente por el método que determine la ley.

Art. 29 Para ser elegido Diputado se requiere ser español, de estado seglar,

mayor de edad y gozar de todos los derechos civiles. La ley determinará con qué clase de funciones es incompatible el cargo de Diputado y los casos de reelección.

Art. 30 Los Diputados serán elegidos por cinco años.

Art. 31 Los Diputados á quienes el Gobierno ó la Real Casa confieran pensión, empleo ó ascenso que no sea de escala cerrada, comisión con sueldo, honores ó condecoraciones, cesarán en su cargo sin necesidad de declaración alguna, si dentro de los 15 días inmediatos á su nombramiento no participan al Congreso la renuncia de la gracia.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende á los Diputados que fueren nombrados Ministros de la Corona.

Art. 32 Las Cortes se reunen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender, cerrar sus sesiones y disolver simultánea ó separadamente la parte electiva del Senado y el Congreso de los Diputados, con la obligación, en este caso, de convocar y reunir el Cuerpo ó Cuerpos disueltos dentro de tres meses.

Art. 33 Las Cortes serán precisamente convocadas luego que vacare la corona, ó cuando el Rey se imposibilitare de cualquier modo para el gobierno.

Art. 34 Cada uno de los Cuerpos Colegisladores forma el respectivo reglamento para su gobierno interior, y examina, así las calidades de los indivíduos que le componen, como la legalidad de su elección.

Art. 35 El Congreso de los Diputados nombra su Presidente, Vicepresidentes y Secretarios.

Art. 36 El Rey nombra para cada legislatura, de entre los mismos Senadores, el Presidente y Vicepresidente del Senado, y éste elige sus Secretarios.

Art. 37 El Rey abre y cierra las Cortes, en persona, ó por medio de los Ministros.

Art. 38 No podrá estar reunido uno de los dos cuerpos Colegisladores sin que también lo esté el otro: exceptúase el caso en que el Senado ejerza funciones judiciales.

Art. 39 Los Cuerpos Colegisladores no pueden deliberar juntos, ni en presencia del Rey.

Art. 40 Las sesiones del Senado y del Congreso serán públicas, y solo en los casos que exijan reserva podrá celebrarse sesión secreta.

Art. 41 El Rey y cada uno de los Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes.

Art. 42 Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero al Congreso de los Diputados.

Art. 43 Las resoluciones en cada uno de los Cuerpos Colegisladores se toman á pluralidad de votos; pero para votar las leyes se requiere la presencia de la mitad más uno del número total de los individuos que lo componen.

Art. 44 Si uno de los Cuerpos Colegisladores desechara algún proyecto de ley, ó le negare el Rey la sanción, no podrá volverse á proponer otro proyecto de ley sobre el mismo objeto en aquella legislatura.

Art. 45 Además de la potestad legislativa que ejercen las Cortes con el Rey, les pertenecen las facultades siguientes:

Primera. Recibir al Rey, al sucesor inmediato de la Corona y á la Regencia ó Regente del Reino, el juramento de guardar la Constitución y las leyes.

Segunda. Elegir Regente ó Regencia del Reino y nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitución.

Tercera. Hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros, los cuales serán acusados por el Congreso y juzgados por el Senado.

Art. 46 Los Senadores y Diputados son inviolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su cargo.

Art. 47 Los Senadores no podrán ser procesados ni arrestados sin prévia resolución del Senado, sino cuando sean hallados *infraganti*, ó cuando no esté reunido el Senado; pero en todo caso se dará cuenta á este cuerpo lo más pronto posible para que determine lo que corresponda. Tampoco podrán los Diputados ser procesados ni arrestados durante las sesiones sin permiso del Congreso, á no

ser hallados *infraganti;* pero en este caso y en el de ser procesados ó arrestados cuando estuvieren cerradas las Cortes, se dará cuenta lo más pronto posible al Congreso para su conocimiento y resolución. El Tribunal Supremo conocerá de las causas criminales contra los Senadores y Diputados en los casos y en la forma que determine la ley.

SECCIÓN SÉPTIMA

INSTITUCIONES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO PRIMERO

LA CURIA

Tres épocas suelen distinguirse en la historia del régimen municipal de las ciudades sujetas á Roma.

En la primera, los romanos, recelosos de que los habitantes de los pueblos sometidos intentaran sacudir el yugo de la metrópoli, si se les dejaba en sus ciudades, los llevaron á Roma, reemplazándolos por soldados ó por ciudadanos de la plebe que, trasladando su residencia á la población conquistada, formaban en ella una especie de colonia identificada con la metrópoli en índole y organización. Este sistema, que hacía desaparecer casi por completo el carácter de la población primitiva, se desarrolló y prevaleció en Italia hasta que á toda ella y á gran parte de los pueblos conquistados se otorgaron, prévio su asentimiento, los derechos de ciudadanía.

Aceptada ésta, se distinguía entre los derechos políticos, propios de los ciudadanos romanos, y los derechos, cargos é intereses puramente locales, que se dejaban á los habitantes de

la ciudad para que los ejercitaran, desempeñasen y administraran con independencia de la metrópoli. Como el ejercicio de los derechos políticos no podía tener lugar fuera de Roma, los habitantes de las ciudades á quienes se otorgaron y que quisieron hacer uso de ellos, hubieron de acudir allí, á donde por otra parte los atraía la perspectiva de los goces y honores con que aquella les brindaba, resultando que gran parte de los ciudadanos principales de las provincias trasladaran á Roma su residencia, privando á sus ciudades de la importancia que les daban tales elementos. Sin embargo, cuando al advenimiento de Augusto empezaron á perder influencia los comicios y prestigio las magistraturas, dejando de ser factor importante en el gobierno, y se concedió además á muchas ciudades el privilegio de que sus habitantes emitieran desde ellas sus votos, enviándolos sellados á Roma, ni se apreció ya en tanto el goce de estos derechos, ni las personas influyentes de las ciudades tuvieron estímulo para abandonarlas, volviendo á adquirir mayor importancia los municipios, á cuyos asuntos prestaron atención preferente los mismos que antes se preocupaban por los de Roma.

Contribuyeron también las disposiciones imperiales á dar independencia á los municipios y ciudades, asegurando sus rentas, permitiéndoles aceptar fideicomisos y herencias, ordenando que fueran tratados como reos de peculado los malversadores de los bienes del común, etc.; y como, por otra parte, las rentas ordinarias fueran bastantes para las atenciones del Estado, ni éste gravaba á las ciudades con cargas inútiles, ni era necesario agoviar á los ciudadanos con nuevos tributos para compensar la falta de ingresos proveniente de privilegios, que ya no se prodigaban, siendo por lo mismo más soportable la carga como más igual y equitativa y ayudando hasta el mismo pueblo á levantarla con su trabajo en las obras de interés local.

Todo esto influyó en la grande importancia que en esta segunda época del régimen municipal, principalmente desde Nerva hasta Diocleciano, llegó á tener la *Curia*, especie de Senado que estaba al frente de la gestión comunal, y cuya composición hemos indicado al hablar de los curiales.

Aunque las atribuciones de este cuerpo no han sido determinadas con precisión por los historiadores, parece fuera de duda que, además de hacer ó proponer los nombramientos de magistrados y funcionarios municipales, concedía recompen-

sas, fijaba la época y lugar para la celebración de las ferias, cuidaba del culto y fiestas públicas, de la administración y fomento de los bienes de la ciudad, de los servicios referentes á policía y seguridad pública dentro de ciertos límites, del repartimiento y cobranza de impuestos ó tributos, y, en general, entendía en el examen y resolución de todos aquellos asuntos que, afectando á los intereses del común, no estaban regulados por leyes ó disposiciones anteriores, ó que, de estarlo, exigían algo más que la mera ejecución de aquellas para que resultaran beneficiosas.

Había, no obstante, muchos negocios para cuya decisión no era bastante el acuerdo de la Curia, como nombramiento de legados ó diputados al emperador, enagenación de bienes raices y otros que exigían la intervención de los vecinos.

A la terminación de esta época fueron también cercenadas por los emperadores las facultades de la Curia, prohibiéndole, sin autorización previa, la construcción de edificios, reparación de muros, venta de esclavos y otras enagenaciones que pudieran mermar el patrimonio del municipio; y con el tiempo, aun aquellos mismos asuntos que le habían estado encomendados, se reservaron á la autoridad imperial ó á sus delegados, quienes tuvieron asimismo una intervención decisiva en los nombramientos hechos por la Curia, pudiendo en ciertos casos anularlos.

Todo esto produjo la decadencia de esta institución en la tercera época del régimen municipal, reducida poco á poco á mero agente de los mandatos imperiales y á recaudadora de tributos, cada vez mayores, para atender á las necesidades y voracidad creciente del imperio, llegando al colmo su desprestigio y haciéndose hasta odioso el cargo de los curiales, según ya digimos, cuando se les hizo responsables con su propio peculio de la percepción de impuestos, se les mermaron sus derechos y se atentó contra la libre disposición de sus bienes y aun de sus personas.

Sin embargo, la Curia no desapareció por completo. "La época de los godos, dice el marqués de Pidal, es respecto del régimen municipal una época de transición. Si separándonos de ella volvemos la vista hacia los tiempos anteriores, nos hallamos con la Curia; si á los tiempos posteriores, con el *concilium*; á un lado la municipalidad romana, al otro, el concejo de la Edad Media: aquí el régimen privilegiado y la esclavitud de las curias; allí el régimen de la comunidad y la libertad semi-

republicana y semi-federal de los concejos. Cómo se enlazan en la historia estas dos tan diversas instituciones; cómo se verifica en la región de los hechos esta transformación singular, es más fácil imaginarlo que demostrarlo. La Curia acaba y se desvanece poco á poco y por gradaciones tan insensibles, que es imposible fijar el tiempo preciso en que cesa del todo. El concejo comienza tan de la misma manera en sentido inverso, que no podemos fijar el momento de su primera existencia. Lo que sabemos es que esta misteriosa transformación se verifica en el periodo de la monarquía goda, que al abrirse este periodo existe la Curia, y que al acabarse, á poco tiempo después, tiene ya vida el concejo: que la institución vieja y decrépita falleció, y que de sus cenizas surgió llena de vida y de vigor la institución nueva.„

En cuanto á los cargos y oficios de la Curia, pueden distinguirse en dos clases: los más elevados, llamados *magistratus*, que nombrados directamente por la corporación municipal, gozaban de cierto honor y dignidad y ejercían alguna jurisdicción; y los inferiores ó *munera*, también nombrados por aquella, pero á propuesta de los magistrados y sin otra consideración que la de meros oficiales ó empleados.

Entre los *magistratus* figuraban: 1° Los *duumviri*, llamados tambien en algunos lugares *quatuorviri*, eran los primeros magistrados del municipio, se nombraban por un año, presidían la corporación, dirigían la administración municipal, administraban justicia, tenían ciertas facultades correccionales, y para distinguirlos de otros cargos inferiores designados con igual nombre, solían añadirse á la palabra duumviro las letras J. D., iniciales de *jure dicundo*, que indicaban sus atribuciones jurisdiccionales. En algunas ciudades había en vez de estos magistrados los llamados *prefectos*, también anuales y con facultades análogas á las de aquellos; pero nombrados en Roma y no por elección de los curiales, lo cual, sin embargo, no significa que las ciudades en que los había estuvieran organizadas de distinto modo ni fueran de peor condición que las presididas por los duumviros: 2° El *quinquennalis* ó *censor*, elegido cada cinco años, á quien competía la vigilancia sobre las costumbres, corrección de faltas contra la moralidad, formación del censo, designación de los que debían formar parte de la Curia y otras facultades análogas: 3° El *œdilis*, que tenía á su cargo la inspección de las construcciones y edificios públicos, de las calles, graneros, mercados, pesas y medidas y otros servicios

de policía, y que, como los duumviros, debía costear de su peculio juegos y fiestas públicas: 4° El *curator reipublicæ*, que administraba la hacienda del municipio, daba en arriendo sus bienes, contrataba empréstitos, cobraba las rentas y en general era de su incumbencia todo lo referente al orden económico.

Entre los *munera* son de notar: el *susceptor*, encargado de la percepción de tributos bajo la responsabilidad de los curiales á quienes competía su nombramiento; los *irenarchæ*, especie de inspectores de policía para el descubrimiento de los delitos é instrucción de las primeras diligencias sumariales; los *curatores*, á quienes estaba encomendado un servicio especial del que tomaban el nombre, llamándose, según aquél, *curatores frumenti*, *calendarii*, etc., y los *scribæ*, *tabeliones* ó *cancellarii*, empleados cuyos oficios pudieran compararse con los de los modernos escribanos, amanuenses y secretarios.

Además de las magistraturas indicadas arriba, cuando, mermadas las atribuciones de la Curia y odiado por lo oneroso el cargo de los curiales, se penetraron los emperadores de la conveniencia de conservar los municipios, se creó el llamado *defensor plebis*, *loci ó civitatis*, cargo que, temporal en un principio y para un negocio determinado, se trocó en público y permanente desde Valentiniano I y fué elegido por todas las clases del pueblo, no solo por los curiales como los otros magistrados.

Su misión era defender los intereses comunes y amparar al pueblo y principalmente á los pobres contra las arbitrariedades y vejaciones de la administración imperial; y tanta importancia llegó á adquirir este cargo, que se erigió con el tiempo en verdadera magistradura y aun se sobrepuso á las demás; se le concedió jurisdicción de primera instancia en lo civil, hasta la suma de 300 sueldos y atribuciones en materia criminal para la corrección de faltas leves, y se le facultó para elevar directamente sus quejas á las autoridades supremas ó delegados directos del imperio contra los abusos de los funcionarios y subalternos.

Como en el nombramiento del *defensor* tomaba parte todo el pueblo sin exclusión del clero y éste era ya la única clase dotada de prestigio y energía, la elección recayó ordinariamente en los obispos, quienes fueron desde entonces la verdadera representación de los intereses municipales y de las clases desvalidas.

CAPITULO II

EL OFICIO PALATINO

Las costumbres del imperio romano influyeron naturalmente en las de los godos que en él vivieron, sobre todo en cuanto no pugnaba con los hábitos de los antiguos germanos.

No es, pues, de extrañar que á poco de establecerse definitivamente en España y principalmente desde el fastuoso reinado de Leovigildo surgieran aquí instituciones análogas á las del imperio, entre las que debe mencionarse el *Oficio palatino*, que en sus funciones y en su nombre fué como una copia del *Collegium palatinum* ó *Aula regia* de los emperadores romanos.

Y del mismo modo que éstos, además de utilizar los consejos de las personas de su mayor confianza, les encomendaron algunos cargos dentro y fuera de palacio en lo referente al servicio de éste ó al gobierno del Estado, también los monarcas visigodos eligieron de entre sus *fieles* ó cortesanos personas que les sirvieran de consejeros, dándoles á la vez ciertos empleos en la casa real ó en la administración pública.

A estos funcionarios se les designaba ordinariamente con el nombre de *comites* ó condes. Así, el mayordomo de palacio se llamó *comes patrimonii;* el secretario de Estado, *comes notariorum*; el de la Guerra, *comes exercitus*; el tesorero, *comes thesaurorum*; el camarero ó chambelan, *comes cubiculi*; el copero mayor, *comes scantiarum,* y el capitan de guardias, *comes spathariorum*. Todos ellos formaban por lo común parte del Oficio palatino ó Consejo privado de los reyes.

Las atribuciones principales de este cuerpo eran, además de las propias del consejo y de las particulares que á cada uno

de sus miembros por su cargo especial correspondían, auxiliar al rey en la funcion legislativa tomando parte en las deliberaciones de los Concilios sobre asuntos civiles ó de interés directo para el Estado, y ejercer con el monarca, cuando éste lo disponía, la jurisdicción suprema en los negocios que á juicio de aquel lo demandaran para el mejor acierto en la administración de justicia.

El recuerdo de tales facultades y la influencia natural, aunque indirecta, del Oficio palatino en el gobierno han hecho que algunos historiadores vieran en él una limitación del poder real; pero, dependiendo por completo de la voluntad del monarca el alcance de aquellas facultades y la designación de los miembros del Oficio palatino, es obvio que legalmente ó en derecho no puede ser estimado como una institución política moderadora del poder de los reyes visigodos.

No quiere esto decir que, de hecho, no pesara sobre sus resoluciones la actitud del Consejo aúlico, ni que dejara de coartar en algún modo su libertad de acción. Sucedía, por el contrario, que la oposición entre el rey y su Consejo modificaba en ocasiones la voluntad real ó su modo de manifestarse; y muchas veces también la ambición de los oficiales palatinos originó conspiraciones que llegaron hasta privar del trono y aun de la vida á algunos reyes. Estos, por su parte, viendo su autoridad discutida y su trono amenazado, reemplazaron facilmente el poder de la ley con el de la fuerza persiguiendo en toda forma á los magnates de cuya lealtad desconfiaban.

Dió también margen esta pugna y el recelo consiguiente de los monarcas á que éstos en muchos casos prescindieran de los nobles al nombrar los oficiales de su Consejo y á que, anteponiendo á toda otra consideración la adhesión á su persona, elevaran á tales puestos á los libertos y aun á los mismos siervos, cosa que, de un lado, rebajaba el prestigio de la institución y que, por otro, no podían llevar en paz los nobles postergados ni los mismos que continuando en el Consejo sufrían la humillación de ver á su lado como compañeros á personas de condición tan vil.

Tanto la arbitrariedad en los nombramientos como las persecuciones muchas veces injustificadas que sufrieron los miembros del Oficio palatino, víctimas del ódio ó del encono de los reyes, provocaron la intervención de los Concilios toledanos para reprimir tales abusos. Entre ellos merece especial mención el XIII, que intentó refrenar el capricho y la violencia de los

reyes prohibiendo elevar al orden palatino á ningún siervo ni liberto, excepto los del fisco, é imponiendo la pena de excomunión á los que sin forma de proceso, para probar la culpa ó negligencia en el servicio del rey ó del Estado, hicieran dar muerte á algún noble, atormentarle, confiscar sus bienes, prenderle y aun destituirle infundadamente de su cargo; pero la eficacia de estas disposiciones y de otras análogas para proteger á los reyes contra las ambiciones y deslealtad de los súbditos dependió más que de otra cosa del carácter de los monarcas y de la fuerza material que pudieran oponerles los magnates, pues la historia de aquellos tiempos ofrece muchos ejemplos de actos tiránicos del poder y de la ruda fiereza de los grandes, mal avenidos uno y otros con la moderación y el respeto debidos á los dictados de la razón y á los preceptos de las leyes.

CAPITULO III

EL CONSEJO REAL

Desde los primeros tiempos de la Reconquista, á juzgar por lo que dicen nuestras antiguas crónicas, se procuran los reyes para el despacho de los negocios graves el consejo de los primados y optimates; pero ni consta que éstos constituyeran para sus informes verdadero cuerpo consultivo, ni mucho menos que, de existir éste, tuviera la autoridad correspondiente á un organismo político, ó que ejerciera en el gobierno y administración del Estado otra influencia que la recabada por el ascendiente personal de los consejeros sobre el ánimo del monarca.

A medida que se formó el estado llano y con su apoyo aumentó en fuerza y prestigio la autoridad de los príncipes, fué natural que éstos escucharan las quejas y reclamaciones en que el pueblo demandara la recta aplicación de las leyes, el respeto á los usos y costumbres jurídicas y la protección del poder real contra las arbitrariedades y privilegios de los nobles y del clero que, atentos á su exclusiva utilidad, solían posponer á ésta el bien común. Esto movió sin duda al rey don Fernando III, de ser cierta la narración de algunos cronistas, á fundar un Consejo compuesto de doce hombres versados especialmente en el Derecho para que le auxiliaran en el gobierno del Estado, y aun que algunos historiadores opinan que no existió tal Consejo y, en todo caso, que no puede mirársele como origen del famoso de Castilla, por que don Alfonso X no hizo de él mención especial en sus códigos, no parece irracional afirmar la existencia

de un Consejo, si bien de carácter privado, aun en tiempo del rey *Sabio*, pues la ley V, título IX, Partida II, habla de las cualidades que deben tener los consejeros, y la ley VI del mismo título y Partida dice: "Otrosi conuiene que los ricos omes lo sean de seso e de entendimiento, pues que ellos han de aconsejar al rey en los grandes fechos.„ De todos modos, no consta de un modo fehaciente que el Consejo real tuviera en dichos reinados una organización determinada, ni atribuciones y carácter propios de una institución pública; y aunque en los reinados de Alfonso XI y de Enrique II se hicieran por las Cortes peticiones respecto á cualidades de las personas que debieran formar el Consejo y admisión en él de hombres buenos, y los reyes se mostraran propicios á tales peticiones, sin embargo, hasta el reinado de D. Juán I no aparece claramente definido y organizado el Consejo real.

Este rey, deseando vengar el desastre de Aljubarrota, reunió Cortes en Valladolid en 1385 para que le otorgaran los subsidios necesarios á este fin, y en las mismas Cortes constituyó definitivamente y organizó este cuerpo con doce consejeros, cuatro en representación de cada uno de los brazos, nobleza, clero y estado llano, que componían las Cortes, fundando su determinación en la imposibilidad de resolver por sí solo los múltiples negocios del Estado si había de atender á las necesidades imperiosas de las contínuas guerras; en el deseo de que no se le tildara, como parece sucedió después de aquel desastre, de imprudente ó poco reflexivo, y en el de cortar las murmuraciones á que pudiera dar lugar el despacho de asuntos graves sin oir antes la opinión de personas de experiencia, probidad y saber, sólo por la influencia de los cortesanos ó palaciegos. Para desembarazarse, pues, de los negocios más importantes y enojosos y quitar ocasión á la maledicencia encomendó á los prelados, caballeros y ciudadanos, que componían el Consejo nuevamente establecido, el despacho de todo lo referente al gobierno y administración del Estado, excepción hecha de la concesión de gracias y recompensas, que se reservó el monarca.

Don Enrique III elevó hasta diez y seis el número de consejeros, algunos de ellos doctores; y tal confianza le inspiraba la prudencia del Consejo, que prohibió en su testamento despachar cosa alguna referente á la tutela y regencia del reino durante la menor edad de su hijo don Juán II sin la intervención de dos consejeros, por lo menos, probada por sus firmas en los documentos expedidos por la regencia.

Don Juán II aumentó sin necesidad y desatentadamente el número de consejeros, haciéndole llegar hasta sesenta y cinco, movido acaso por el favorito don Alvaro de Luna, quien, para hacer prosélitos, prodigó las dignidades y cargos públicos con grave perjuicio del tesoro y sin utilidad alguna para el reino. Por esto acaso y porque en el Consejo no tenían intervención ó era muy exigua la de los representantes del estado llano, recurrieron al rey las Cortes de Madrid de 1419 pidiéndole diera entrada en el Consejo á los representantes de las ciudades y villas que, conocedores de las necesidades de éstas, pudieran influir en que se atendieran. Modificáronse también en este reinado las atribuciones del Consejo prohibiéndole, en las ordenanzas de Segovia de 1428, el conocimiento de pleitos civiles, que se reservaron á las chancillerías, excepto los sostenidos entre los oficiales de la real casa, prohibición que se ratificó en las ordenanzas de Guadalajara de 1436; lo cual demuestra que, lejos de adquirir el Consejo en este reinado atribuciones judiciales, se le mermaron con tales prohibiciones las que antes pudiera tener.

En tiempo de Enrique IV se redujo el número de consejeros á diez y seis, cuatro prelados, cuatro caballeros y ocho letrados; pero la autoridad y jurisdicción del Consejo fueron casi de nombre, entregado, como estaba, el rey á los favoritos que unos á otros se sucedían y que resolvían á su capricho los asuntos del reino.

Todo esto produjo la rápida decadencia y desprestigio de este cuerpo, iniciados en el reinado anterior, y la necesidad de reformarle, como lo hicieron los Reyes Católicos en 1480 á peticion de las Cortes reduciendo las plazas del Consejo á un prelado, tres caballeros y ocho ó nueve letrados, dejando á los prelados, títulos de Castilla y maestres de las órdenes, que antes eran consejeros natos, el título y honores de tales, y ordenando el modo de funcionar el Consejo, la tramitación que en el despacho había de seguirse y cuanto al desempeño de su misión juzgaron conveniente. Estas modificaciones y la preponderancia natural de los letrados, por su número y por el peso de su opinión, determinaron las facultades que en la administración de justicia adquirió el Consejo.

Felipe II aumentó hasta diez y seis el número de consejeros, todos letrados, á juzgar por la ley I, tit. III, lib. IV de la Nov. Recopilación. "Y como quier, dice esta ley, que antiguamente el Rey D. Enrique II, en las Cortes que hizo en Burgos

era de 1406, mandó y ordenó que fuesen de su Consejo doce hombres buenos, dos del Reyno de Leon, y otros dos del Reyno de Galicia, y dos del Reyno de Toledo, y dos de las Extremaduras, y otros dos del Andalucía, y les mandó tasar y dar para su salario ciertos maravedís á cada uno; y despues los Reyes Católicos D. Fernando y Dª Isabel ordenaron, que residiesen en Consejo un Prelado y tres Caballeros y hasta ocho ó nueve Letrados: pero porque esto reside en la voluntad de los Reyes de elegir y dar orden en lo suso dicho, qual mas convenga, y tomando tales personas, segun dicho es de suso, no por favor ni afición, salvo habiendo respeto á su servicio, y al bien público del Reyno, y á las cosas suso dichas: ordenamos y mandamos, que en el nuestro Consejo para la administración de la justicia y gobernación de nuestros Reynos esten y residan de aquí adelante un Presidente y diez y seis Letrados, para que contínuamente se ayunten los dias que hubieren de hacer Consejo, y libren y despachen todos los negocios que en el dicho nuestro Consejo se hubieren de librar y despachar.„

Felipe V por decreto de 1701, según la ley III del título y libro antes citados, resolvió "que de aquí adelante sea el número fijo del Consejo el Presidente ó Gobernador, veinte oidores y el Fiscal, sin que á este se le consulte voto ahora ni en tiempo alguno.....„ Posteriormente por Real decreto de 10 de Noviembre de 1713 dió nueva planta al Consejo dividiéndole en cinco salas, las dos primeras de Gobierno, la tercera de Justicia, la cuarta de Provincia y la quinta de Criminal, pero en 9 de Junio de 1715 revocó el anterior decreto y las declaraciones siguientes de 1714; "anulando lo que en ellas y en los referidos decretos se menciona, y en particular la institución de los cinco Presidentes, la del Fiscal general y la de los Abogados generales.....„ restituyendo "á su primer instituto el empleo de Presidente ó Gobernador del Consejo con todas las preeminencias, prerogativas y honores que tenía, y no fueren contrarias á las leyes de estos mis Reynos,„ y disponiendo que el Cuerpo del Consejo se compusiera de veintidos Consejeros repartidos "en las Salas en esta forma, ocho demás del Presidente ó Gobernador, en la Sala de Gobierno, quatro en la Sala de Justicia, otros quatro en la de Provincia, cinco en la de Mil y Quinientas, y uno en la Presidencia de la Sala de Alcaldes; y si en estas últimas Salas de Justicia, Provincia y Mil y Quinientas faltare alguno de los Ministros se suplirá de la de Gobierno; como asimismo, si ocurrieren algunas veces muchos negocios de la Sala de Go-

bierno, se dividirá esta en dos para la más breve expedición de ellos, como se ha executado en otras ocasiones, que son los motivos que he tenido presentes para componer esta Sala de ocho ministros.„ (Ley IV del mismo título y libro.)

Carlos IV instituyó un Consejo de Estado y una Junta Suprema, que pueden mirarse como origen inmediato, aquel, del que después recibió igual nombre, y ésta del Consejo de ministros.

De todos modos, el Consejo Real ó de Castilla subsistió hasta la época constitucional, iniciada en 1882, en que, separadas conforme á los principios dominantes en los modernos códigos políticos las funciones ejecutiva y judicial, fueron abolidos los antiguos Consejos, y creados en su lugar un Consejo de Estado y un Tribunal Supremo de Justicia, cuya organización y atribuciones fija la Constitución de dicho año 1812, y según la cual, el Consejo había de componerse de cuarenta individuos ciudadanos españoles; cuatro de ellos eclesiásticos, de los cuales dos obispos; cuatro grandes de España, y los restantes "elegidos de entre los sujetos que más se hayan distinguido por su ilustración y conocimientos, ó por sus señalados servicios en alguno de los principales ramos de la administración y gobierno del Estado.„

Las constituciones posteriores, exceptuando la no promulgada de 1856, no incluyen el Consejo de Estado como institución fundamental; pero las disposiciones de carácter administrativo reconocen su necesidad, y algunas leyes le organizan y determinan sus facultades, si bien reflejando en sus preceptos el espíritu más ó menos autoritario ó liberal que los informara.

Así en 1824, después de la reacción absolutista, se creó una Junta Real consultiva, sustituida en Diciembre del mismo año por un Consejo de Estado que funcionaba á la vez que los de Castilla, Supremos de Hacienda, de Indias y otros.

En Marzo de 1834 quedó en suspenso el Consejo de Estado, reemplazándole en sus facultades el Consejo de Gobierno ó de Regencia, creado conforme al testamento de Fernando VII; y después de varios proyectos que no llegaron á ser leyes, el poder ejecutivo, usando de la autorización que las Cortes le concedieron para reformar y organizar la administración pública, restableció el Consejo Real que, modificado varias veces y aun suprimido y cambiado después el nombre por el de Consejo de Estado, fué solemnemente reorganizado por la ley de 17 de Agosto de 1860 la cual, además de las propias de cuerpo con-

sultivo, le confirió facultades como tribunal contencioso administrativo; atribuciones suprimidas en Octubre de 1868, vueltas á conceder después de la restauración monárquica y nuevamente suprimidas por la reciente organización de los tribunales de lo contencioso.

El carácter que actualmente reviste de cuerpo consultivo del Gobierno, aunque éste haya por ley de oirle en algunos casos, hacen de esta institución uno de los organismos necesarios ó convenientes para el ejercicio de la función ejecutiva; pero por lo mismo, el estudio de su organización y atribuciones es más propio del Derecho administrativo que del político.

FIN